Instituto Juan March
Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales (CEACS)
Juan March Institute
Center for Advanced Study in the Social Sciences (CEACS)

Recursos del socialismo : las cambiantes relaciones entre el PSOE y la UGT, 1982-1993

Author(s): Astudillo Ruiz, Javier
Year: 1998
Type: Thesis (doctoral)
University: Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones, Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales, Universidad Autónoma de Madrid, 1998.
City: Madrid
Number of pages: xiv, 669 p.

Abstract: Esta obra se presentó como tesis doctoral en el Departamento de Sociología y Antropología Social de la Universidad Autónoma de Madrid el día 20 de abril de 1998. El tribunal, compuesto por los doctores D. José Ramón Montero (Presidente), D. Joan Botella Corral, D. Jacint Jordana, D. Rodolfo Gutierrez y D. Ludolfo Paramio, le otorgó por unanimidad la calificación de Apto "cum laude". En esta tesis se analiza la transformación de las relaciones entre el Partido socialista y la Unión General de Trabajadores ocurrida durante la segunda mitad de los años ochenta. Tras cuatro años de apoyo leal por parte de la UGT a las nuevas políticas de oferta del Gobierno socialista, y cuando la economía crecía y el desempleo se reducía, ambas organizaciones abandonaron su modelo de relaciones de solidaridad, considerado hasta entonces como uno de los recursos claves para el éxito político y social de los partidos y sindicatos socialdemócratas, y comenzaron a practicar unas relaciones más puntuales. Este cambio en su forma de relacionarse suscita muchas preguntas sobre el papel del PSOE, la UGT y el futuro de la socialdemocracia. Por un lado, el abandono del modelo solidario de relaciones cuestiona la posibilidad de mantener el apoyo de los sindicatos cuando las políticas de los partidos socialdemócratas han de tener en cuenta los nuevos constreñimientos económicos y sociales de los años ochenta y noventa. Ahora parece más problemático mantener la reducción del desempleo como la primera prioridad en las políticas económicas al tiempo que hay que recortar el Estado del Bienestar. Pero, por otro lado, la ruptura de la familia socialista podría ser simplemente otro ejemplo de cómo los partidos socialistas y los sindicatos del sur de Europa carecen de las condiciones necesarias para mantener la colaboración estrecha que habían practicado sus correligionarios del norte de Europa. Con el fin de que sus relaciones diesen los beneficios esperados, los sindicatos tenían que representar a una proporción importante de los intereses sociales, ser organizaciones amplias y estar centralizadas. Estas condiciones se consideran que están ausentes en la mayoría de los países mediterráneos. Así, la ruptura de la familia socialista española es uno de los casos más claros donde se puede discutir si las opciones estratégicas de los partidos políticos y de los sindicatos están mediatizadas por los cambios en las estructuras económicas y sociales o por los arreglos institucionales de sus países. En la tesis se defiende que la transformación de sus relaciones se explica principalmente por la combinación de dos conjuntos de condiciones: un contexto de división del movimiento

sindical entre confederaciones que competían por la representación de la misma clase de trabajadores, y la necesidad de apoyar a las políticas económicas del Gobierno socialista en una coyuntura de crecimiento rápido tras diez años de estancamiento. La primera condición entrañaba un dilema estratégico para los líderes sindicales españoles: o mantenían sus relaciones solidarias con el partido político con el que se sentían más próximos ideológicamente, o superaban la división del movimiento sindical cooperando entre ellos. Cada una de estas opciones implicaba para los sindicatos costes y beneficios que variarían en función de las acciones que realizasen el partido hermano y los sindicatos rivales. Y al contrario de lo que se podría esperar, la primera de las opciones dejaría de resultar atrayente para los sindicatos cuando su partido llegase al gobierno y la economía mejorase, pues es entonces cuando los sindicatos rivales podrían captar más fácilmente a los simpatizantes del sindicato que apoyase al gobierno. La consecuencia de este cálculo por parte de la dirección de la Unión General de Trabajadores fue el abandono de su modelo tradicional de relaciones con el Partido socialista, y el comienzo de su cooperación con CCOO. Asimismo, la constatación de que este cambio de alianzas por parte de la UGT no implicaba sin embargo graves pérdidas electorales favoreció que el PSOE aceptase la ruptura con su antiguo sindicato hermano. En última instancia, el caso español ilustra cómo se ha exagerado la importancia de cambios estructurales de orden económico y social, la influencia de la globalización de la economía y la sustitución de políticas económicas keynesianas por políticas de oferta para explicar la generalización de las tensiones entre los partidos socialdemócratas europeos y sus sindicatos. Pone de relieve, por el contrario, cómo los arreglos institucionales pueden hacer que algunos acontecimientos coyunturales, que se podrían pensar que beneficiarían a los sindicatos (tales como una victoria del partido aliado y el crecimiento de la economía), convierten a las relaciones en algo muy costoso para su participantes. Así, los sindicatos no tienen que oponerse necesariamente a las nuevas políticas de los partidos socialdemócratas, incluso si éstas entrañan costes a corto plazo para los trabajadores y los sindicatos mantienen sus objetivos solidarios. Pero para que los sindicatos socialdemócratas puedan apoyar tales políticas tienen que confiar en que los trabajadores se beneficiarán a largo plazo, y no deben correr peligro la supervivencia y otros objetivos organizativos. Mientras que la clase de relaciones entre los partidos gobernantes y los sindicatos pueden explicar esa confianza mutua, los diferentes contextos institucionales explican cuando y por qué el apoyo a algunas políticas económicas y sociales se vuelve muy arriesgado para la supervivencia organizativa

Your use of the CEACS Repository indicates your acceptance of individual author and/or other copyright owners. Users may download and/or print one copy of any document(s) only for academic research and teaching purposes.

Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones

JAVIER ASTUDILLO RUIZ

LOS RECURSOS DEL SOCIALISMO: LAS CAMBIANTES RELACIONES ENTRE EL PSOE Y LA UGT (1982-1993)

MADRID
1 9 9 8

Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales



Castelló, 77. 28006 Madrid

Esta obra se presentó como tesis doctoral en el Departamento de Sociología y Antropología Social de la Universidad Autónoma de Madrid el 20 de abril de 1998. El tribunal, compuesto por los doctores D. José Ramón Montero (Presidente), D. Joan Botella Corral, D. Jacint Jordana, D. Rodolfo Gutierrez y D Ludolfo Paramio, le otorgó por unanimidad la calificación de Apto "cum laude".

Javier Astudillo Ruiz es Licenciado en Geografía e Historia por la Universidad Autónoma de Madrid y Doctor en Ciencias Políticas por la misma Universidad. Formó parte de la sexta promoción de estudiantes del Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales del Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones, donde obtuvo el título de *Master* en 1994. En el propio Centro elaboró su tesis doctoral, bajo la dirección del Profesor José María Maravall.

INDICE

Indice de Tablas viii
Abreviaturas x
Agradecimientos xiv

INTRODUCCION 1

1. Presentación del objeto de estudio 1
2. Delimitación del objeto de estudio 2
   2.1. Las relaciones partido-sindicato como "redes" y como "recurso" 3
   2.2. Concepto y nivel organizativo escogidos en las relaciones partido-sindicato: su justificación 10
   2.3. El interés del caso español 12
3. Modelos de relaciones partido-sindicato 16
   3.1. La clasificación tradicional 17
   3.2. Una clasificación alternativa 20
   3.3. Implicaciones de los dos modelos de relaciones 23
4. Partes de la tesis 29
5. Realización de la investigación: métodos, teorías y fuentes utilizadas 32

PARTE I

CAPITULO I. LAS RELACIONES PARTIDO-SINDICATO COMO UN RECURSO DE PODER DE LA SOCIAL-DEMOCRACIA 39

1. La modalidad socialdemócrata de relaciones partido-sindicato: el reparto de tareas y la coordinación de actividades 39
   1.1. El diseño estratégico de las relaciones de solidaridad entre los partidos y sindicatos socialdemócratas 40
   1.2. La colaboración solidaria entre partidos y sindicatos socialdemócratas: las retricciones estratégicas y sus beneficios 42

1.2.1. La colaboración solidaria (I): el intercambio político-electoral 43
1.2.2. La colaboración solidaria (II): la coordinación económica 44
1.2.3. Las relaciones partido-sindicato de solidaridad, la coordinación de actividades y el neocorporativismo 53
1.3. Las condiciones para el éxito de la colaboración solidaria 55
2. Desafíos a las relaciones, quiebra de modelos y búsqueda de alternativas 60
2.1. Transformación y crisis de la colaboración solidaria: sus efectos 60
1.1. La crítica neoclásica al keynesianismo concertado y su quiebra 63
1.2. Desafíos al sindicalismo socialdemócrata 66
2.2. Críticas a las teorías estructuralistas 70
2.2.1. ¿Una coordinación económica de nuevo tipo?: El corporatismo de oferta 73
2.2.2. Fin del consenso socialdemócrata 87
2.3. La especificidad del Sur de Europa: ausencia de la colaboración solidaria entre partidos y sindicatos, ¿fin de los partidos socialdemócratas y de los sindicatos? 92
3. Conclusión: los debates suscitados 95

CAPITULO II. EL CAMBIO DE MODELO OFICIAL DE RELACIONES PARTIDO-SINDICATO EN LA SOCIAL-DEMOCRACIA ESPAÑOLA 103

1. De la solidaridad a los intereses concretos 103
1.1. La persistencia del modelo tradicional: la solidaridad necesaria 103
1.2. El modelo de intereses concretos: las relaciones como un recurso disponible 118
2. ¿De la subordinación a la autonomía? La cuestión del poder entre organizaciones 128

CAPITULO III. LAS REPERCUSIONES DE LOS MODELOS DE RELACIONES PARTIDO-SINDICATO (I): LAS RELACIONES DE SOLIDARIDAD, 1982-1986 149

1. La colaboración entre el Gobierno socialista y los sindicatos 150
   1.1. Objetivos e instrumentos de las políticas 150
   1.1.1. Los planteamientos del Gobierno socialista en materia económica 150
   1.1.2. Las demandas económicas y sociales de la UGT.....153
   1.2. El apoyo mutuo UGT-PSOE y la oposición de CCOO 158
   1.2.1. Las políticas emprendidas por el Gobierno socialista .158
   1.2.2. El acceso al Gobierno por parte de la UGT.....165
2. El ensayo del corporatismo de oferta en España 178
   2.1. La concertación "de oferta" que ofrecía el Gobierno socialista 182
   2.2. Las preferencias sobre concertación social en la UGT187
   2.3. La ausencia de un AI en 1984 y la firma del AES 196
3. Valoración del desarrollo de sus relaciones: ¿se renuevan las relaciones de solidaridad?.....200

CAPITULO IV. LAS REPERCUSIONES DE LOS MODELOS DE RELACIONES PARTIDO-SINDICATO (II): LAS RELACIONES POR INTERESES CONCRETOS, 1989-1993 213

1. El rechazo global de la UGT al Gobierno 213
   1.1. Los objetivos de política económica de Solchaga.....214
   1.2. De la expansión selectiva en inversión pública al incremento general del gasto público 217
   1.2.1. Expansión de la inversión pública y cambio en la política fiscal del gobierno.....217
   1.2.2. Contención, incrementos y recortes sociales 222
   1.3. El rechazo a las políticas del Gobierno: las alternativas sindicales 226
   1.3.1. Valoración de las políticas del Gobierno socialista.....230
   1.3.2. Las políticas alternativas que proponía la UGT en unidad de acción con CCOO.....233
   1.4. El acceso al Gobierno por parte de la UGT.....238

2. La nueva concertación social: los acuerdos concretos y

limitados 242
2.1. Acuerdos alcanzados entre el Gobierno socialista y los sindicatos 242
2.2. Las preferencias de los actores 244
2.3. La ausencia de coordinación económica 252
3. Conclusión: de la solidaridad a la conveniencia 256

CAPITULO V. PARADOJAS DEL ENFRENTAMIENTO ENTRE EL PSOE Y LA UGT 261

1. El Peso de la tradición y su importancia para los militantes de base 262
1.1. La relaciones tradicionales entre el PSOE y la UGT 262
1.2. La posición de las bases de las organizaciones frente a la ruptura del modelo histórico 265
2. Los cálculos de los dirigentes 267
2.1. Sindicatos, partidos y votos: el papel de los sindicatos sindicatos españoles en las elecciones legislativas. 269
2.2. La legislatura de la discordia 1986-1989: dos versiones de los enfrentamientos entre la UGT y el Gobierno socialista 276
2.2.1. Las políticas económicas del Gobierno socialista y la crítica ugetista: el fin del corporatismo de oferta en España 277
2.2.1.1. Del renovado entendimiento al inicio de la ruptura definitiva 283
a) Las demandas económicas y sociales de la UGT y la política económica del PSOE al comenzar la segunda legislatura 284
b) La aceptación de la UGT de la política económica y social del Gobierno socialista: la negociación de los Presupuestos Generales del Estado para 1987 291
c) De la crítica puntual a la descalificación global (1987-1989) 296
2.2.1.2. ¿Qué concertación? ¿Qué concertar? ¿Cómo concertar? 307

a) El último intento de coordinación económica en

España 308
b) El disenso sobre el modelo de concertación social y sus contenidos 315
2.2.2. Las demandas sociales de la UGT 326
2.2.2.1. Sindicalismo de electores y sindicalismo de afiliados 329
2.2.2.2. Los enfrentamientos en política social 346
2.2.2.3. Hacia la primera huelga general de la UGT al Gobierno del PSOE 348
2.2.2.4. ¿En interés exclusivo de los "insiders"? 353
3. Conclusión: las tres preguntas claves 362

PARTE II

CAPITULO VI. LOS EFECTOS DE UN SINDICALISMO PLURALISTA Y COMPETITIVO 367

1. El pluralismo sindical competitivo 368
2. Efectos del pluralismo sindical competitivo 370
2.1. El dilema sindical 379
2.2. La lucha intersindical, los gobiernos y los partidos políticos 393
2.3. Conclusiones 405
2.4. Los límites del modelo teórico 413

CAPITULO VII. EL FIN DEL CORPORATISMO DE OFERTA POLITICAS DE GOBIERNO Y ENTORNOS INSTITUCIONALES 415

1. La UGT y el fin de la coordinación económica 415
1.1. La UGT y la descentralización de la negociación colectiva 416
1.2. El Gobierno socialista como "compensador" 420
2. Las elecciones sindicales y sus efectos sobre la negociación colectiva 434
2.1. La competencia intersindical y los contextos económicos 435
2.1.1 Los objetivos de las organizaciones. 435
2.1.2 Las preferencias de los trabajadores 443
2.1.3 El desarrollo de la lucha intersindical 452
2.2. Los resultados electorales y el cambio de estrategia

para la negociación colectiva en la UGT 468
3. Conclusiones: los contextos sindicales, la coyuntura económica y la colaboración solidaria 483

CAPITULO VIII. LOS ENFRENTAMIENTOS POR LAS POLITICAS ECONOMICAS Y SOCIALES ENTRE EL PSOE Y LA UGT 493

1. Los enfrentamientos por el gasto social: el ritmo de ejecución de las demandas sociales 493
2. Los enfrentamientos por las políticas económicas: el valor de la confianza 501
   - 2.1 Los desacuerdos dentro del consenso tácito sobre políticas económicas 504
   - 2.2. El fin del consenso 514
   - 2.2.1. El disenso sobre los problemas más graves 519
   - 2.2.2. El disenso sobre el origen de los problemas: el fin de la confianza mutua 522
   - 2.2.3. El disenso sobre las soluciones: las dos propuestas de estrategia económica 534
3. Conclusiones: el valor de los costes organizativos y de la confianza 545

CAPITULO IX. POSIBILIDADES Y RESTRICCIONES ESTRATEGICAS DE LAS RELACIONES DE SOLIDARIDAD ENTRE LOS PARTIDOS Y LOS SINDICATOS SOCIALDEMOCRATAS 555

1. Las restricciones y los beneficios de las relaciones solidarias en contextos de pluralismo sindical y antagonismo interpartidario 556
   - 1.1. La coordinación económica: de recurso a lastre 557
   - 1.2. La vía partidista solidaria y la unidad de acción sindical 562
2. De la rivalidad intersindical a la unidad de acción 573
   - 2.1. Unidad de acción en la negociación colectiva y unidad de acción política 576
   - 2.2. Las condiciones para la unidad de acción 582
3. Los dilemas electorales de las relaciones solidarias

con liderazgos políticos fuertes.....590

CAPITULO X. CONCLUSIONES: LA UTILIDAD
DE LAS RELACIONES ENTRE LOS PARTIDOS
SOCIALDEMOCRATAS Y LOS SINDICATOS.....615

1. El "modelo nórdico" en el Sur de Europa: de la solidaridad a la conveniencia 615
2. Los apoyos electorales, las nuevas políticas de los socialdemócratas y la acción sindical 622
3. El diseño estratégico de las relaciones solidarias y sus cálculos: restricciones y oportunidades 632
4. La colaboración entre los partidos y sindicatos como lastre y como recurso de poder 643

BIBLIOGRAFIA 647

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Resultados electorales de los partidos socialistas meridionales desde 1945 93

Tabla 2. Ingresos, gasto y deuda del Estado y déficit público (% sobre el PIB a precios de mercado)160

Tabla 3. Gastos corrientes de protección social en España (% sobre el PIB) según la clasificación del sistema SEEPROS 165

Tabla 4. Incrementos salariales pedidos por UGT y CCOO, e inflación prevista (1983-1986).....166

Tabla 5. PIB, ingresos, gasto, deuda e inversión del Estado, y déficit público (% sobre el PIB a precios de mercado) 218

Tabla 6. Gastos corrientes de protección social (% sobre el PIB) según la clasificación del sistema SEEPROS.....223

Tabla 7. Incrementos salariales por UGT y CCOO, e inflación prevista (1987-1991) 239

Tabla 8. Resultados de las elecciones sindicales en España 337

Tabla 9. Demandas de incrementos para las pensiones por parte de la UGT 354

Tabla 10. Escenario del pluralismo sindical desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta finales de los años cincuenta 380

Tabla 11. Escenario del pluralismo sindical en los años 70 381

Tabla 12. Escenario del pluralismo sindical a principios de los años 90 381

Tabla 13. Incrementos salariales pedidos, pactados en la negociación colectiva, inflación prevista e inflación media anual (1983-1991) 454

Tabla 14. Aumento salarial pactado según sector de actividad en el total de convenios 465

Tabla 15. Resultados de las elecciones sindicales por ramas productivas, tanto por ciento sobre el total de delegados 467

Tabla 16. Evolución del empleo (cambio porcentual anual de la población ocupada) 516

Tabla 17. Evolución del desempleo (EPA) 516

Tabla 18. Indice de temporalidad en España 517

Tabla 19. Evolución de la balanza por cuenta corriente y del PIB en España 517

ABREVIATURAS

AES	Acuerdo Económico y Social
AFL	American Federation of Labor (EEUU)
AFL/CIO	American Federation of Labor-Congress of Industrial Organizations (EEUU)
AI	Acuerdo Interconfederal
AMI	Acuerdo Marco Interconfederal
ANE	Acuerdo Nacional de Empleo
AP	Alianza Popular
APD	Asociación para el Progreso de la Dirección
CCOO	Confederación Sindical de Comisiones Obreras
CC	Comité Confederal (UGT)
CEC	Comisión Ejecutiva Confederal (UGT)
CEE	Comunidad Económica Europea
CEF	Comisión Ejecutiva Federal *(PSOE)*
CEOE	Confederation Española de Organizaciones Empresariales
CEPYME	Confederación Española de Pequeñas y Medianas Empresas
CERES	Centre d'Etudes, de Recherches et d'Education Socialistes
CES	Confederación Europea de Sindicatos
CF	Comité Federal (PSOE)
CFDT	Confederation Française Démocratique du Travail
CFTC	Confederation Française des Travailleurs Chretiens
CGC	Confederation Genérale des Cadres
CGIL	Confederazione Genérale Italiana del Lavoro
CGT	Confederation Genérale du Travail
CGT-P	Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses
CIG	Confederación Intersindical Galega
CISL	Confederazione Italiana dei Sindacati dei Lavoratori
CNSH	Confederación Nacional de Sindicatos Húngaros
CNT	Confederación Nacional del Trabajo
CONC	Comissió Obrera Nacional de Catalunya

CSIF	Confederación Sindical Independiente de Funcionarios
DNA	Det Norske Arbeiderparti (Partido Laborista Noruego)
DGB	Deutscher Gewerkschaftsbund (Federación de sindicatos alemanes)
EE.UU.	Estados Unidos de América
ELA/STV	Euzko Langilleen Alkartasuna/Solidaridad de Trabajadores Vascos
ERG	Esquerra Republicana de Catalunya
FEJP	Federación Estatal de Juvilados y Pensionistas (UGT)
FEN	Federation de l' Education Nationalle
FGTB	Federation Genérale du Travail de Belgique/Algemeen Belgisch Vakverbund
FIA	Federación de Industria Afines (UGT)
FLC	Fundación Largo Caballero
FMI	Fondo Monetario Internacional
FO	Confederation Genérale du Travail-Force Ouvrière
FSM	Federación Socialista Madrileña
GSEE	Geniki Synomospondia ergaton ellados (Confederación de Trabajadores Griegos)
INEM	Instituto Nacional de Empleo
INH	Instituto Nacional de Hidrocarburos
INI	Instituto Nacional de Industria
INSALUD	Instituto Nacional de Salud
IPC	índice de Precios al Consumo
IVA	Impuesto sobre el Valor Añadido
IU	Izquierda Unida
LO	Landsorganisationen (Confederación sindical sueca)
LO	Landsorganisasjonen (Confederación sindical noruega)
LOLS	Ley Orgánica de Libertad Sindical
OCDE	Organización para la cooperación y desarrollo económico

ÕGB	Õsterreichischer Gewerkschaftsbund (Federación sindical austriaca)
OIT	Organización Internacional Sindical
OPZZ	Ogólnopolskie Prozumienie Zdwiazków Zawodowych (Alianza de Sindicatos Polacos)
OTAN	Organización del Tratado Atlántico Norte
PASOK	Paneliniko Sosialistiko Kinima (Movimiento Socialista Panhelénico)
PCB	Partido Comunista de España
PCF	Parti Communiste Français
PCI	Partito Communista Italiano
PGE	Presupuestos Generales del Estado
PIB	Producto Interior Bruto
PP	Partido Popular
PS	Parti Socialiste
PSD	Partido socialdemócrata (Portugal)
PSOE	Partido Socialista Obrero Español
PSP	Propuesta Sindical Prioritaria
PYMES	Pequeñas y Medianas Empresas
RFA	República Federal Alemana
RPR	Rassemblement pour Ia Republique
SAK	Suomen AmmattÜiittojen Keskusjarjestü (Organización Central de los Sindicatos Fineses)
SAP	Sveriges Socialdemokratiska Arbetarparti (Partido Socialdemócrata Sueco)
SEEPROS	Sistema Europeo de Estadísticas Integradas de Protección Social
SME	Sistema Monetario Europeo
SMI	Salario Mínimo Interprofesional
SFIO	Section Française de l' Internationale Ouvrière
SPD	Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Partido Socialdemócrata Alemán)
SPÕ	Partido Socialista Austriaco
TUC	Trade Union Congress (Gran Bretaña)
TVK	Confederación de Empleados Asalariados (Finlandia)
UCD	Unión de Centro Democrático

AGRADECIMIENTOS

La realización de esta tesis ha sido posible gracias a mi estancia desde 1992 en el Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales del Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones, donde fin becario durante cuatro años. Los cursos y seminarios a los que he asistido así como las discusiones organizadas o informales que he tenido con profesores y estudiantes del Centro me han ayudado enormemente. El CEACS, además, cuenta con una magnífica biblioteca atendida por un equipo extraordinario y con un personal administrativo muy eficiente, que me han ofrecido una gran asistencia.

La tesis ha sido dirigida por el profesor José María Maravall, a quien debo más que la ayuda que recibí de él. Sus comentarios fueron siempre un estímulo para profundizar en la investigación. Varios compañeros del centro así como estudiantes invitados en él también me han ayudado en la realización de este trabajo como Sonia Alonso, Luis Ortiz, Emma Cervino, Justin Byrne, Andrew Richards, Marc van der Meer, Ignacio Sánchez-Cuenca, Belén Barreiro y Paloma Aguilar, todos los cuales leyeron panes del trabajo y me hicieron interesantes observaciones.

Fuera del CEACS también debo mucho a otras personas, en especial al personal de la biblioteca de la Fundación Largo Caballero Nuria Franco, Ester Ramos y Jesús Rodríguez, así como José Antonio Prada, responsable de la biblioteca de la Escuela Julián Besteiro, cuya diligencia y entusiasmo de todos ellos es digno de admiración. No puedo tampoco olvidarme del profesor Ludolfo Paramio, sin cuya ayuda la mayoría de las entrevistas que llevé a cabo no hubieran sido posibles, ni a todos los entrevistados a los cuales agradezco su tiempo, ayuda y cooperación.

Finalmente quisiera agradecer al British Council la bolsa de viaje que me concedió para realizar un curso durante el verano de 1997 en la Universidad de Essex, Inglaterra, el cual me resultó de gran utilidad para la culminación de este trabajo.

INTRODUCCION

1. Presentación del objeto de estudio

Uno de los acontecimientos sociopolíticos más importantes que se produjeron en España en la segunda mitad de los años ochenta fue, sin duda alguna, el enfrentamiento abierto entre el Partido Socialista Obrero Español y la Unión General de Trabajadores. Aquello no sólo significó que se quebraba su modelo centenario de relaciones, sino además el fracaso de uno de los intentos más elaborados, que hayan realizado nunca unas organizaciones socialistas en el sur de Europa, por consolidarse y hacerse hegemónicas cómo lo habían hecho sus homólogas septentrionales, es decir, mediante una colaboración *solidaria* entre el sindicato y el partido socialista. A partir de entonces su colaboración dejaría de ser vista como una condición necesaria para el éxito de sus actuaciones, y quedaría relegada al rango de lo útil, pero no imprescindible. Por qué dejaron de colaborar como lo hacían antes es la pregunta central de esta investigación.

Este enfrentamiento entre dos organizaciones que hasta entonces se habían considerado hermanas no sólo se ha producido en España, sino también en países donde las relaciones partido-sindicato estaban muy consolidadas. En estos países parece que profundas transformaciones socioeconómicas se han llevado por delante la posibilidad de que los partidos socialdemócratas y los sindicatos sigan colaborando. De esta manera, los sindicatos habrían dejado de contribuir a las victorias electorales de estos partidos, así como cooperar en sus políticas gubernamentales; y los primeros tendrían que llevar a cabo políticas de oferta y limitar el gasto social. Para algunos investigadores esto implicaría, incluso, que a unos y a otros les fuera ya imposible alcanzar sus fines, por lo que estaríamos asistiendo a la decadencia irreversible del movimiento obrero socialdemócrata. Los enfrentamientos entre el PSOE y la UGT no

serían así, sino el resultado lógico de haber intentado una colaboración estrecha cuando los nuevos contextos sociales y económicos en que se encontraba España lo impedían. En este trabajo se va a defender, sin embargo, que los acontecimientos en este país ponen en cuestión que los sindicatos tengan que enfrentarse necesariamente con los partidos socialdemócratas por las políticas que han desarrollado éstos en los años ochenta y noventa, así como que estos partidos ya no estén interesados en contar con el apoyo electoral de los sindicatos. Veremos como, de hecho, la ruptura se produjo cuando parecería que sus relaciones podrían dar el máximo provecho para ambas organizaciones, es decir, cuando el partido estaba en el gobierno y la economía crecía a buen ritmo.

2. Delimitación del objeto de estudio

Desde un principio tiene que quedar claro que éste trabajo no pretende agotar todas las cuestiones referidas a la transformación de las relaciones entre el Partido Socialista Obrero Español y la Unión General de Trabajadores. Esta tarea es prácticamente inabarcable porque, como se desprende de los estudios de casos concretos, bajo el término de relaciones partido-sindicato se oculta una gran variedad de fenómenos y procesos sociopolíticos muy dispares, los cuales pueden ser estudiados por disciplinas tan diversas como la sociología de la socialización y de la legitimación, de las organizaciones y de la movilización, del cambio social y de la institucionalización, de la economía política, o del análisis de las políticas públicas. Así, un estudio de la transformación de estas relaciones podría incluir desde aquellos que se centren en cómo cambia la composición social de las organizaciones y a quiénes representan éstas, pasando por transformaciones en su funcionamiento interno y en sus liderazgos, hasta aquellos otros más preocupados por variaciones en sus diversos objetivos y en las formas que tienen para alcanzarlos ante cambios en la estructura social, económica o política de las sociedades contemporáneas. Las relaciones partido-sindicato son uno de esos casos en que la identificación de lo que se va a estudiar es casi tan

difícil como formular explicaciones convincentes de ello. Por de pronto, no existe una única definición de relaciones partido-sindicato, lo cual es causa muchas veces de que diferentes autores lleguen a conclusiones contradictorias sobre un mismo caso[1]. Lo único que queda claro es que en estas relaciones vamos a estudiar a *organizaciones formales* que se relacionan. Se impone así presentar las posibles formas de entender las relaciones partido-sindicato y concretar cuál es la que nos interesa para este trabajo.

2.1. Las relaciones partido-sindicato como "redes" y como "recurso"

Dos son las maneras principales de conceptualizar las relaciones partido-sindicato empleados en los estudios de sus casos particulares: como "redes" o como un "recurso". Emplearemos uno u otro concepto según entendamos a sus partes constituyentes (es decir, a los partidos políticos y sindicatos[2]) en el sentido de si son actores colectivos, que colaboran, o son más bien ámbitos o arenas, que están conectados de alguna forma. Ambas formas de entender a las

---

[1] Por poner un ejemplo, Graham afirma que "although the PS has developed some ties with the CFDT, these have been *neither as systematic nor as strong* as those which have existed between, say, the [...] trade unions and the Social Democratic Party in Germany" (Graham 1993:178-179). Pues bien, por un lado, en el estudio de Markovits podemos leer respecto al caso alemán que los sindicatos "[instead of being crucial powers brokers within one particular party - like the TUC in the British Labour Party or the LO inside the Swedish Social Democratic Party (SAP) - the West German unions have, in their quest for political independence, become just another interest group" (Markovits 1986:28). Por otro, Sawicki, afirma con respecto al caso francés que "[l]e diagnostic demanderait à être relativisé en fonction des contextes locaux et historiques, car l'absence de relations durables, notamment sur le plan idéologique et "organique", ne veut pas dire, on le verra, absence de proximité des hommes et des thèmes défendus" (Sawicki 1997:21). ¿Conclusiones contradictorias? ¿No será que por "relaciones partido-sindicato" hacen referencia a conjuntos de fenómenos distintos?

[2] Este trabajo, mientras no se especifique lo contrario, emplea el término sindicato en el sentido de confederación sindical, uso normal en los países latinos.

organizaciones las podemos encontrar en diversos estudios de sociología y ciencia política. Así, si bien en la literatura sobre economía política es frecuente que éstas aparezcan como actores colectivos[3], en los trabajos sobre la constitución de las organizaciones son, por el contrario, meras *arenas o ámbitos* donde los auténticos actores, sus miembros, se desenvuelven. Aun así, es frecuente que, cuando se tratan las relaciones de una organización concreta con su entorno, ésta reaparezca como un actor unitario, comprendiendo un conjunto estable y definido de participantes que realizan *una* acción colectiva en busca de sus objetivos[4]. Sólo una corriente de estudios organizativos, llamada del "sistema abierto", se abstiene de dar éste último paso. En su concepción, las organizaciones son siempre entidades abiertas constituidas por flujos de personal y recursos del exterior (Scott 1987:23), por lo que las relaciones interorganizativas no son relaciones entre actores colectivos, sino entre individuos que actúan en distintas organizaciones (Sawicki 1997).

¿Es alguno de estos dos enfoques más correcto? ¿Son las organizaciones un actor colectivo que persigue unos fines o, por el contrario, son ámbitos o arenas donde los individuos persiguen los suyos propios? Considero que no se trata de dilucidar si las organizaciones son actores colectivos o arenas, pues pueden ser de hecho ambas cosas a la vez. Para entender esta doble faceta que pueden presentar las organizaciones formales hay que tratar, aunque sea brevemente, la cuestión de sus fines u objetivos. Existen autores que, ante los problemas que se suscitan por "antropomorfizarlas", llegan al extremo de negar que *las organizaciones* tengan fines, pues sólo los individuos los tienen (Cook y Whitmeyer 1992:117). Para ellos, se está llevando la metáfora del actor colectivo hasta el punto de

---

[3] Véase al respecto el trabajo de Carles Boix, *Partidos Políticos, Crecimiento e Igualdad: Estrategias económicas conservadoras y socialdemócratas en la economía mundial*, Madrid: Alianza Editorial, *1996.*

[4] Esta posición la podemos ver en las dos principales corrientes de estudios organizativos, la llamada del "sistema racional" y la del "sistema natural". En ambos casos las organizaciones acaban siendo en definitiva unos actores que, o bien buscan la transformación del ambiente que les rodea, o bien pretenden simplemente su autoconservación (Scott 1987).

atribuirles características o comportamientos claramente exclusivos de los individuos. Otros autores, por el contrario, han rechazado esta conclusión por extrema, y señalan que no hay que confundir los objetivos que pueda tener un individuo en un grupo con *los objetivos del grupo*[5]. Estos últimos son la pretensión *compartida* por un conjunto de individuos de alcanzar un resultado determinado, cualquiera que sea éste (Mohr 1973:473).

Ahora bien, aceptado que las organizaciones tienen objetivos, su consecución entraña dos cuestiones distintas desde un punto de vista analítico. En primer lugar, los estudios sobre organizaciones formales han puesto de relieve que los objetivos presentes en los estatutos o cartas fundacionales de éstas (los objetivos "oficiales") suelen ser vagos, generales, múltiples e incluso en conflicto entre sí (Perrow 1961:855; Mohr 1973), de tal forma que lo primero que tienen que hacer los miembros de las organizaciones es ponerse de acuerdo en su interpretación y concreción, estableciendo además los programas o estrategias para alcanzarlos[6]. Cuando se está produciendo este proceso de concreción de objetivos y fijación de estrategias, podemos considerar que las organizaciones son un ámbito o arena[7]. En

---

[5] Véase, por ejemplo, el trabajo de Lawrence Mohr "The Concept of Organizational Goal" en *The American Political Science Review*, vol. LXVII, núm. 2, junio 1973.

[6] Todo objetivo "final", aquel que motivó la creación de la organización, para ser alcanzado tiene que ser desmembrado en cometidos parciales o actividades particulares cuya exacta naturaleza varía en función del ámbito en que actúen los miembros de la organización. La ejecución de estas actividades se convierten así en un objetivo que, en principio, son un "medio" para alcanzar los finales. Estos otros objetivos han sido denominados "mediatos" o "instrumentales" y que, por su propia naturaleza, se persiguen a corto plazo (Mohr 1973:67; Mayntz 1987:100). Los estudios sobre los objetivos de las organizaciones formales ha señalado que un objetivo "instrumental" siempre presente en toda organización es la propia preservación de la organización (Scott 1987:52) y algunas veces pasa de ser "instrumental" a final (Mayntz 1987:101).

[7] Es ampliamente discutido cómo los miembros de las organizaciones concretan los objetivos y fijan las estrategias en función de sus objetivos particulares, los cuales pueden depender de sus orígenes o relaciones sociales, de su visión del mundo, etc., cómo la propia socialización producida en la organización conforma y modifica esos

segundo lugar, una vez realizado esto, sus miembros emprenderán unas actividades para alcanzarlos, las cuales constituyen la acción *colectiva* de la organización (Mohr 1973:472-474). En este sentido se puede hablar de que la organización es un actor *colectivo*. Bien es cierto que no siempre todas las organizaciones formales puedan ser consideradas como un único actor. Puede ocurrir que los militantes, por la razón que sea, emprendan actividades que sean contradictorias entre sí. En este sentido será más adecuado considerar que existen varios actores colectivos.

No se trata, así pues, de dilucidar si las organizaciones son actores colectivos o arenas, pues pueden ser ambas cosas a la vez[8]. Emplear uno u otro concepto parece que depende, por tanto, de lo que nos interese de ellas (los procesos mediante los cuales concretan de una forma determinada sus objetivos o los procesos mediante los cuales los alcanzan) así como de cuándo se las puede considerar actores. Así, si estamos interesados en el funcionamiento interno de los partidos políticos y sindicatos que desenvoca en una concreción específica de sus objetivos, trataremos a las organizaciones como ámbitos. Por el contrario, si estamos interesados en las actividades que emprenden sus miembros para alcanzar los objetivos que se hayan podido fijar, podemos considerarlas entonces actores colectivos. Pero igualmente se puede argumentar que tratarlas de una forma o de otra depende de las características internas de la organización, en concreto, de su grado de centralización y de la capacidad de la dirección de disciplinar a sus miembros[9]. Así, ésta será tanto más actor unitario cuanto más centralizada y disciplinada se

---

objetivos preexistentes, o cómo algunos miembros tiene mayor capacidad que otros para influir en la interpretación de los objetivos de la organización y estrategias (Panebianco 1990; Sawicki 1997).

[8] Jean Blondel en su "Governments and Supporting Parties: Definitions and Classifications" (en *EUI Working Paper SPS*, núm. 91/12 pp 7,8, 1991), refiriéndose específicamente a los partidos políticos, incide en esta misma doble naturaleza de las organizaciones.

[9] Véase el trabajo de Jean Blondel "Governments and Supporting Parties: Definitions and Classifications", pp. 7,8, op. cit.

encuentre[10], pues (a) habrá mayor probabilidad de que se adopten objetivos para toda la organización[11], al igual que (b) menor posibilidad de que se formulen otros objetivos por órganos inferiores, capacitados para ello, que puedan ser contradictorios con los establecidos para toda la organización así como que (c) parte de sus miembros lleven a cabo actividades que no busquen alcanzar los objetivos fijados[12].

Podemos, por tanto, aclarar la pregunta inicial sobre los diferentes significados del concepto de relaciones partido-sindicato. Si nos centramos en las organizaciones como ámbitos o arenas, el estudio de las relaciones partido-sindicato consistirá en el análisis de cómo ciertos individuos interactúan en ámbitos organizativos distintos y cuáles son sus consecuencias. En este caso estamos entendiendo las relaciones partido-sindicato como "redes"[13]. Si, por el contrario,

---

[10] La importancia de estas características internas para que una organización pueda llevar a cabo *una* acción colectiva ha sido muy estudiada para el caso de los sindicatos en los trabajos sobre el neocorporativismo (Lehmbruch 1979, 1982, 1984). Para el caso de los partidos políticos Blondel afirma (1991a):

"[T]he more a party is decentralised and indeed factionalised on the basis of ideological, personal, or geographical cleavages, the more it is difficult to determine which decisions can be regarded as party decisions in the full sense of the word. In a divided party, for instance because they are organised factions, a large number of views are aired: if factionalism is very high, it is indeed impossible to say which of these views are truly authoritative, as each view is likely to be supported by influential members of the party".

[11] "On the other hand, very decentralised parties are also unlikely to adopt formally many precise and detailed policies; they may not adopt any policies at all, as the example of American parties indicates" (Blondel 1991:9).

[12] Mohr (1973:477) señala así que en las organizaciones "federadas" se persiguen con menos intensidad los objetivos organizativos porque (a) las lealtades de los miembros se dirigen principalmente a los partes federadas y no a toda la federación y (b) los miembros sólo se preocupan de alcanzar los objetivos que a ellos les concierne más directamente.

[13] El trabajo de Frédéric Sawicki, *Les Réseaux du Parti Socialiste: Sociologie d'un milieu partisan*, Paris: Belin, 1997, es uno de los ejemplos más claros y explícitos del estudio de las relaciones de un partido político con organizaciones sociales, y entre ellas los sindicatos, desde este punto de vista.

entendemos a las organizaciones como actores colectivos, las relaciones partido-sindicato se refieren a la posibilidad que ofrece la coordinación de sus actuaciones para que ambos alcancen determinados objetivos suyos. En este último caso estamos entendiendo las relaciones partido-sindicato como un "recurso" puesto a disposición de las organizaciones.

La existencia de estos dos significados explica en gran parte las frecuentes conclusiones aparentemente contradictorias sobre la "intensidad" o "relevancia" de las relaciones partido-sindicato referidas a un mismo caso[14]. E igualmente esto puede explicar que las clasificaciones de relaciones partido-sindicato siempre adviertan que cada caso concreto presenta rasgos "específicos"[15].

---

[14] Dichas conclusiones aparentemente contradictorias se pueden observar en el caso de las relaciones entre el SPD y la DGB en los setenta. Por un lado, Markovits (1986) nos recuerda que los empresarios alemanes emprendieron hacía 1974 una campaña contra la "supuesta alianza inquebrantable de los sindicatos con el Partido Socialdemócrata", cuyas relaciones eran conocidas por término peyorativo de la "maraña" (*Verfilzung*). Por otro, este mismo autor considera irónico tal campaña, pues coincidió "with serious rifts between the unions and the Social Democratic Party. For, as will be recalled, this was exactly the period when the unions were confronted with the first draft of the Brandt government's compromise bill on co-determination, which was hardly to the DGB's liking" (Markovits 1986:125). ¿Son dos conclusiones incompatibles? Parece más bien que mientras que los empresarios alemanes se fijaban en las relaciones como "redes" informales entre los sindicatos y el SPD (evidenciadas por la existencia de militantes dobles, los contactos frecuentes entre miembros de una y otra organización, la coincidencia en algunas de sus propuestas etc), Markovits incidía en que las relaciones, como "recurso", no estaban dando sus frutos esperados. Igualmente, Sawicki cuestiona la ausencia de relaciones entre el Partido socialista francés (SFIO/PS) y los sindicatos franceses, al no ser éstas "oficiales", porque las está entendiendo como "redes", y constata que entre estas organizaciones sí que ha existido una "proximidad de hombres y de temas defendidos" (Sawicki 1997:21).

[15] A modo de ejemplo, Kitschelt (1993:225) engloba en una misma clase de relaciones partido-sindicato los casos de Bélgica, Suecia y Alemania Federal para a continuación puntualizar que, pese a todo, "los vínculos partido-sindicato exhiben rasgos únicos" en cada país.

Tiene que quedar claro sin embargo que, al igual que ocurría con las organizaciones, ninguna de las dos maneras de entender las relaciones partido-sindicato es más adecuada o correcta que la otra. Como se deduce de lo anteriormente dicho, la elección del concepto dependerá, por un lado, de las características internas de las organizaciones relacionadas, y, por otro, de nuestros intereses y las preguntas que nos hagamos sobre las organizaciones. Si nos interesa cómo el funcionamiento interno de los partidos políticos y los sindicatos está determinado por los juegos que realizan sus miembros en otras organizaciones (Sawicki 1997:26,27), emplearemos el concepto de "redes". Si estamos interesados más bien en cómo se pueden alcanzar los "objetivos de las organizaciones" mediante la coordinación de sus actividades con las de otros actores colectivos, y cuál es la relevancia para sus éxitos, lo correcto es entender las relaciones partido-sindicato como un "recurso".

Igualmente, las relaciones, en ambos sentidos, se pueden dar en distintos niveles de la estructura organizativa. Las interacciones entre los miembros de las organizaciones pueden ocurrir en el ámbito local, "inferior", al mismo tiempo que en ámbitos "superiores", estatales; lo mismo que esa coordinación interorganizativa de sus actividades. Como ocurría en el caso de la elección del significado de las relaciones partido-sindicato, escogeremos el ámbito organizativo de estudio dependiendo de nuestros intereses. Parece razonable pensar que, si lo que nos interesa son, por ejemplo, cuestiones referidas a las diversas formas de movilización y reclutamiento de los partidos y de los sindicatos, nos centremos en el ámbito local. Por el contrario, si lo que nos llama la atención son fenómenos más "generales", que afectan al conjunto de las sociedades, debamos centrarnos en el ámbito "nacional", es decir, en las cúpulas de las organizaciones donde se toman las decisiones que afecten a todos (o a la mayor parte) de los individuos pertenecientes a una sociedad concreta.

Creo, pues, aclarada la afirmación de que las relaciones entre un partido político y una organización sindical pueden ser objeto de investigaciones muy diversas por comprender aquellas una gran variedad de fenómenos y procesos sociopolíticos en niveles

organizativos diferentes que serán estudiados en función de las preguntas que nos hagamos y de los enfoques teóricos escogidos.

2.2. Concepto y nivel organizativo escogidos en las relaciones partido-sindicato: su justificación

En este trabajo se entienden las relaciones partido-sindicato como un "recurso" mediante el cual las organizaciones, consideradas como actores colectivos, pueden alcanzar sus objetivos. La elección de este concepto de relaciones se justifica tanto porque las características de las organizaciones estudiadas así lo permiten como por las preguntas que guían la investigación. Así, desde un punto de vista de las características internas, el hecho reconocido de que tanto el PSOE como la UGT sean organizaciones muy centralizadas y con un grado muy alto de disciplinamiento interno[16] y de que no fuera hasta finales del período de estudio cuando aparecieron una cierta descentralización al igual que disensiones internas, avalan el uso de este concepto de relaciones partido-sindicato en el caso español. Igualmente este es el concepto más adecuado para responder a las preguntas que dan lugar a este trabajo: ¿Por qué, si estas relaciones eran concebidas como un recurso crucial para que los partidos y sindicatos socialdemócratas alcanzasen sus objetivos, dejan éstos de colaborar como lo hacían antes? ¿Hasta qué punto sigue siendo conveniente su colaboración? ¿Qué relaciones podemos esperar que establezcan? Este trabajo pretende ser así, en última instancia, una contribución al análisis de cómo pueden los partidos y sindicatos

[16] Son muy escasos los estudios organizativos sobre los sindicatos españoles en general y la UGT en particular. Así el único estudio al respecto que conozco es el de Ilse Marie Führer, *Los Sindicatos en España: De la lucha de clases a estrategias de cooperación*, Madrid: Consejo Económico y Social, 1996. En el caso del PSOE tenemos los trabajos de José María Maravall, "From opposition to government: the politics and policies of the PSOE" en J.M. Maravall (et alt.), *Socialist Parties in Europe*, Barcelona: Institut de Ciències Politiques i Socials, 1991, y Pilar Gangas, *El Desarrollo Organizativo de los Partidos Políticos Españoles de Implantación Nacional*, Madrid: Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones, 1995.

socialdemócratas llevar a la práctica sus objetivos sociopolíticos, es decir al conocimiento de cómo se materializan unos fines ideológicos determinados.

Estas preguntas las vamos a intentar responder estudiando las razones que condujeron a que los congresos del Partido socialista y de la Unión General de Trabajadores cambiasen sus modelos oficiales de relaciones mutuas, lo cual ocurrió a principios de los años noventa. Estos modelos oficiales no son, claro está, las relaciones en sí, sino guías de acción para los miembros de cada organización. En ellos queda planificado la forma mediante la cual cada organización pretende colaborar con otra u otras, constituyendo así un diseño estratégico (Paramio 1992). Pueden aparecer en los estatutos o resoluciones de los congresos de las organizaciones de una forma explícita y muy detallada o, por el contrario, formar parte de las "reglas no escritas", de las rutinas y tradiciones que existen en toda organización formal. Puede incluso que existan grandes diferencias entre el modelo "oficial" y el que efectivamente se sigue[17], pero igualmente puede ocurrir que no haya *un* único modelo oficial u oficioso en aquellas organizaciones muy descentralizadas[18]. Cambios, por tanto, en estos modelos de relaciones partido-sindicato nos indicarán que las organizaciones han cambiado su forma de colaborar. En esta tesis se va a estudiar, por tanto, cuál haya podido ser este cambio de modelo de relaciones partido-sindicato tanto en el PSOE como en la UGT, hasta qué punto sus ejecutivas actuaron siguiendo los modelos de relaciones fijados en sus congresos, y por qué se cambiaron. Estudiaremos así las resoluciones de sus congresos estatales y, sobre todo, las actividades que emprendieron los órganos máximos de las organizaciones o instituciones ocupadas por sus afiliados.

---

[17] Perrow (1961:854) tendía así a pensar que los objetivos más relevantes para entender el comportamiento de las organizaciones no eran los objetivos oficiales sino aquellos que se desprendían de las principales políticas operativas y las decisiones cotidianas de la plantilla. Panebianco por el contrario no comparte esta opinión sobre la irrelevancia de los objetivos oficiales (Panebianco 1990:39).

[18] Es perfectamente posible en este caso que los órganos inferiores, disponiendo de su autonomía, tengan cada uno su propio modelo de relaciones partido-sindicato.

2.3. El interés del caso español

El estudio de la "familia socialista" española parece de bastante interés para contestar a las preguntas que dan lugar a este trabajo. Veremos que en el PSOE así como en la UGT se sostenía que su colaboración mutua era uno de los recursos necesarios para alcanzar sus objetivos principales, como habían hecho otras familias socialistas en el norte de Europa. Esta colaboración parecía que era más fácil de conseguir en España que en otros países meridionales, como Francia o Italia, pues aquí se contaba con una memoria histórica de unas relaciones estrechas entre el Partido y el Sindicato, que los años de exilio y clandestinidad bajo la dictadura de Franco habían reforzado más si cabe. En España no había que vencer viejos recelos dentro de estas organizaciones para entablar dicha colaboración, como en el caso francés, ni los socialistas estaban dispersos en varias organizaciones sindicales, como en ese mismo país o en Italia. Tampoco contaban dentro de su sindicato con importantes minorías ideológicas reacias a una colaboración intensa con el partido socialista, como en Portugal o Grecia. La socialdemocracia española había mantenido un modelo "nórdico" de relaciones partido-sindicato dentro de un contexto "meridional", caracterizado éste último por la división política de la izquierda así como del movimiento sindical. Además en 1982 el PSOE llegaba al gobierno con mayoría absoluta en Las Cortes, y la UGT se convertía a su vez en la primera fuerza sindical por número de delegados en los comités de empresa. Todo parecía, pues, preparado para seguir la senda que había recorrido la Socialdemocracia en el norte de Europa para hacerse hegemónica. Diez años después su modelo centenario de relaciones había desaparecido. No se trataba solamente de que las direcciones de ambas organizaciones estuviesen enfrentadas y se descalificasen mutuamente, sino que pretendían reconstruir sus relaciones a partir de bases nuevas en las que el sindicato no reconocía al ámbito político como exclusivo de los partidos, y la clase trabajadora había perdido su centralidad en el proyecto de transformación social del

PSOE. Pero el interés de la ruptura del tradicional modelo de relaciones entre el PSOE y la UGT va más allá del conocimiento de este caso específico pues, como veremos, nos obliga a replantearnos la generalización de las causas que se han dado para explicar los enfrentamientos y transformaciones ocurridos en el norte de Europa[19] a otros contextos sociopolíticos; así como los supuestos efectos, positivos o negativos, de sus relaciones para la fortuna de ambas organizaciones.

Finalmente, el marco temporal del estudio va desde 1982, fecha de la llegada al poder del Partido socialista, hasta 1993, es decir, un período en el que el PSOE estuvo gobernando con mayoría absoluta. Se ha elegido este período de sus relaciones, en primer lugar, por la escasez de estudios empíricos sobre las relaciones partido-sindicato que se centren en estos años, pues la mayoría de ellos no suelen ir más allá de los últimos gobiernos de la UCD, o se centran exclusivamente en la *concertación social*. En segundo lugar, la llegada al poder del PSOE posibilitaba que sus relaciones con la UGT mostrarían realmente toda su utilidad para la obtención de sus objetivos comunes y propios más importantes. El Sindicato tendría a un gobierno amigo que le facilitaría su influencia en las políticas gubernamentales. El Partido contaría con un poderoso aliado para llevar adelante con éxito esas políticas. El Sindicato podría así presentarse como el valedor de *todos* los trabajadores, y no sólo de los que tenían mayor fuerza en el mercado de trabajo. El Partido del gobierno sería premiado con la permanencia en el poder. Pero sí estas expectativas no se cumplían, las relaciones, como recurso, serían seriamente cuestionadas por sus participantes.

Ahora bien, cuando el partido llega al gobierno del Estado como en el caso español, estas relaciones se vuelven más complejas si cabe por cuanto, en primer lugar, no está claro que sea realmente una relación entre dos actores, sino entre tres. Es evidente que un Gobierno no es lo mismo que el partido del Gobierno, y los sindicalistas así lo apreciaban. Pero, en el caso español, ¿se deben

---

[19] Véase, por ejemplo, el número monográfico del *International Journal of Political Economy*, vol. 22, núm. 4, invierno 1992-93.

considerar al Gobierno socialista y al PSOE como si de dos actores distintos se tratasen?

Dado que la acción colectiva de una organización no es sino el conjunto de acciones llevadas a cabo por sus miembros para la obtención de los fines de la organización, acciones colectivas distintas, y por tanto actores colectivos distintos, entrañan que se persigan fines distintos. Si, por el contrario, los fines perseguidos son los mismos, las acciones emprendidas para alcanzarlos forman parte de una misma acción colectiva, y los individuos que las llevan a cabo pertenecen a un mismo actor colectivo. De ahí se deduce que, para que pudiésemos tratar al Partido socialista y al Gobierno apoyado por él como de dos actores colectivos distinguibles, sus miembros tendrían que realizar una serie de acciones encaminadas a perseguir fines distintos. En caso contrario, si los socialistas que trabajasen en los departamentos del Gobierno y quienes lo hicieran en el aparato del Partido[20] realizasen acciones que persiguieran, en última instancia, los mismos fines, ambos grupos estarían produciendo la misma acción colectiva y, por tanto, serían parte del mismo actor colectivo: el PSOE. Pero incluso, aunque efectivamente nos encontrásemos con medidas realizadas en el ámbito del Gobierno y en el aparato del Partido contradictorias entre sí, todavía tendríamos que preguntarnos si obedecen a objetivos apoyados por todos los miembros del Gobierno y rechazados por todos los miembros del Partido sin responsabilidades gubernamentales (y viceversa) o, por el contrario, son apoyados y rechazados en ambos ámbitos. En este último caso, se podría considerar que existen efectivamente dos actores colectivos que no coinciden, sin embargo, con las demarcaciones del Gobierno y del aparato del Partido, sino que actúan en una y otra arena[21]. Con

---

[20] Es decir, aquellos dirigentes socialistas que trabajaban en las secretarías de área del PSOE.

[21] Según declaraciones de Miguel Boyer en la entrevista de Burns Marañón (1996: 307-309), parecería que efectivamente se podría considerar al gobierno y partido socialistas como de dos actores distintos cuando afirma que:

"la separación entre el Gobierno y el partido es algo inaudito. La tesis de González de dejar que el partido vaya por un lado mientras que el gobierno va por

todo, en la época que aquí se estudia las acciones del aparato del PSOE fueron congruentes con las acciones del Gobierno socialista (en sus resoluciones de sus congresos, en sus programas electorales, en sus movilizaciones, en sus críticas a la dirección ugetista etc). Así pues, en el caso español, el Gobierno no era sino el instrumento mediante el cual los socialistas pretendían alcanzar, al menos, sus objetivos "externos"[22] y, por tanto, las ayudas que la UGT prestase al Gobierno socialista eran ayudas al PSOE, al mismo tiempo que las

---

otro me parece absurda. El partido estaba con un vocabulario arcaico y el gobierno con un vocabulario modernizador..."

Ahora bien, él mismo reconoce que el Gobierno socialista no era un todo unitario cuando afirma que existían:

"fuertes discusiones en el Consejo de Ministros entre ministros que seguían una línea *guerrista* como Julián Campo y como Enrique Barón y ministros que no eran *guerristas*" (suya la cursiva)

Parece, sin embargo, que Boyer tiende a identificar toda acción gubernamental con las suyas concretas, por lo que los ministros del Gobierno que no las apoyaban no actuaban como "Gobierno" sino como "Partido". Así, para él, "cuando Guerra hablaba, era la voz del partido", los ministros *guerristas* no eran sino "gente del aparato", y los ministros se dividían entre los que "jugaban a ser hombres del aparato del PSOE y otros jugaban [entre los que se incluye él] a nuestro trabajo de ministros".

Esta división entre el Gobierno socialista y su Partido como si de dos actores distintos se tratasen no es compartida, sin embargo, por Narcís Serra, entrevistado igualmente por Burns Marañón (1996:185):

"Yo creo que sería un error hablar de desconexión entre la Moncloa y Ferraz porque Felipe González es tan Ferraz como Moncloa, para entendernos".

De hecho, para Serra:

"[Y]o creo que de lo que estamos hablando no es tanto de un enfrentamiento entre la Moncloa y Ferraz como de la aparición de dos sensibilidades o de dos corrientes muy claras dentro del Partido Socialista".

[22] En la terminología de los estudios sobre los objetivos de las organizaciones, los objetivos "externos" ("output goals") son aquellos cuyos resultados afectarán al contexto en el que se desarrolla la organización. Se distinguen así de los objetivos "internos" (conocidos en la literatura anglosajona como "internally oriented goals", "institutional goals", "maintenance goals", "system goals" o "support goals") cuyos resultados aseguran la preservación de la organización (Mohr 1973:475,476).

acciones del Gobierno eran las principales ayudas que el Partido socialista prestaba al sindicato.

3. Modelos de relaciones partido-sindicato

Ahora bien, para entender por qué los miembros de las organizaciones han cambiado el modelo oficial de relaciones es necesario clarificar en qué consisten éstos y cuáles son sus implicaciones. Con este fin a continuación vamos a repasar la clasificación tradicional de relaciones partido-sindicato y a ofrecer otra alternativa tomada principalmente de los estudios sobre interacciones sociales con aportaciones de la teorías sobre los objetivos de las organizaciones formales. En el capítulo segundo veremos cuál de las dos clasificaciones se ajusta mejor a la transformación del modelo oficial de relaciones tanto en el PSOE como en la UGT.

3.1. La clasificación tradicional

La clasificación tradicional está elaborada a partir de la combinación de dos criterios: (a) la existencia o no del dominio entre organizaciones y (b) la dirección de su ejercicio. La clasificación gira, por tanto, alrededor de una de las preocupaciones centrales de la sociología y de la ciencia política: la cuestión del *poder*[23], del control de las organizaciones, de su dependencia y autonomía. Así según Hayward (1980:5) habría cuatro tipos de relaciones[24]: (1) El modelo leninista, denominado por Panebianco (1990:104) y Ebbinghaus (1995:72) antiguo modelo socialdemócrata, donde el partido domina a los sindicatos. (2) El antiguo modelo laborista británico, donde se da la situación inversa: los sindicatos dominan al partido. (3) El modelo

[23] Del *poder* en el sentido *distributivo*, esto es el poder de A sobre B, no en su sentido *colectivo*, mediante el cual varios actores en cooperación pueden aumentar su poder conjunto sobre terceros o sobre la naturaleza (Mann 1991:21).

[24] Esta clasificación se mantiene en trabajos recientes como el de Martin (1989:113), Kitschelt (1993:225), Ebbinghaus (1995:72-74).

socialdemócrata "de los dos brazos", donde lo que existe es una interdependencia entre ambas organizaciones: ni el partido ni el sindicato gozan de una posición dominante duradera. (4) Los partidos y los sindicatos no se relacionan.

Sin embargo, esta clasificación resulta a efectos prácticos menos útil de lo que parece para entender los cambios de modelos oficiales de relaciones partido-sindicato. En primer lugar, peca de obsoleta, pues los estudios realizados sobre casos concretos en las democracias europeas señalan que, en realidad, todos están desde hace mucho tiempo en la tercera o cuarta clase de relaciones[25]. Esta clasificación sería así de poca utilidad para estudiar sus transformaciones más recientes[26]. Con todo, podría quizás servir para explicar el cambio de modelo ocurrido entre el PSOE y la UGT, por lo que la trataremos en el capítulo segundo.

En segundo lugar, muchos de los indicadores utilizados para medir el ejercicio de poder y su dirección son cuanto menos ambiguos. Así, es frecuente citar como prueba de que una organización está controlada por otra el hecho de que dirigentes de la primera estén afiliados o tengan cargos en la segunda (Martin 1989:116). Pero la presencia de estos militantes pertenecientes a dos organizaciones, e incluso el solapamiento de cargos, no indica en sí mismo para qué organización trabajan (suponiendo que efectivamente así lo hiciesen)[27] [28]. Podemos encontrarnos así el caso

---

[25] Así, por ejemplo, la confederación sindical alemana ligada al SPD, que a finales del siglo pasado era "una de tantas organizaciones colaterales carentes de autonomía respecto al partido" (Panebianco 1990:151), según fue aumentando su afiliación y recursos propios consiguió realizar un reequilibrio de fuerzas con el SPD y alcanzó a comienzos de los años veinte de este siglo una relación paritaria (Panebianco 1990:152; Ebbinghaus 1995:72-73).

[26] Así, esta clasificación es abandonada en el estudio más completo sobre la transformación de las relaciones entre los partidos y los sindicatos socialdemócratas realizado por Chris Howell y Anthony Daley, "The Transformation of Political Exchange" en la *International Journal of Political Economy*, vol. 22, núm. 4, 1992-93.

[27] En este sentido Markovits (1986:28) señala que "[t]he public has often mistakenly interpreted the presence of leading ex-unionists among the SPD's cabinet members as prima-facie evidence for the DGB's power at the state level. Yet it was

de una ejecutiva de un partido político con mayoría de miembros dirigentes a su vez de un sindicato (¿El partido está "controlado" por el sindicato?), el cual a su vez tiene en su ejecutiva mayoría de miembros afiliados a ese partido (¿El sindicato está "controlado" por el partido? ¿Quién domina a quién?[29] Quizás no se trate de que una organización domine a la otra, sino de que ambas están controladas por militantes de doble afiliación[30].

---

none other than Hans Matthöfer (IG Metall) and Herbert Ehrenberg (IG Bau) who carried out budget cuts bitterly opposed by the unions" (Markovits 1986:28).

[28] Esto sería más fácil de discernir si cada organización tuviese unos fines específicos, "esenciales", en función de qué clase de organización se tratase: un partido político, un sindicato, etc. Se trataría entonces de evaluar sencillamente si las actividades de ese sujeto están encaminadas a satisfacer directamente esos fines o, por el contrario, parecen alejar a la organización en cuestión de alcanzarlos. Se suele proceder así para valorar si un militante de un sindicato que está afiliado a un partido político trabaja en beneficio de su partido político o, por el contrario, nos encontramos con el caso inverso. El problema con este sencillo proceso de valoración radica en la falsedad de la que se parte, como Panebianco (1990:30-34) ha puesto de manifiesto. Las organizaciones no se caracterizan por unos supuestos fines "propios", más esenciales incluso que los fijados por los propios militantes en el momento de la constitución de la organización. Los fines de las organizaciones son sólo aquellos que fijen sus miembros, los cuales no pueden ser prejuzgados ni presumidos en función de la clase de organización de qué se trate, sino puestos de relieve tras un estudio empírico. Así mientras la acción de un doble militante vaya encaminada a perseguir un objetivo de la organización, no se puede decir que esté actuando en contra de la organización.

[29] Así mientras que para Michel Noblecourt (1990:111) está claro que "l'appareil de la CGT est trés largement dominé par le PCF" (dándonos como pruebas que de los 129 miembros de la comisión ejecutiva salida del congreso de 1989, 108 estaban afiliados a este partido) a Kitschelt (1994) le parece más bien que la política del PCF está muy determinada por los sindicalistas.

[30] De aquí se podría sacar la interesante conclusión a la hora de analizar las tensiones en las relaciones partido-sindicato, como han hecho Paul Heywood y Julio Aróstegui (1993:133) de que no se trate de una organización contra otra, sino de unos dobles militantes contra otros, desarrollando sus "juegos" en ambos ámbitos organizativos. Aróstegui (1993:133) plantea en concreto que la distinción entre las dos ramas políticas y sindicales del movimiento socialista español en los años treinta es

Finalmente este indicador está la mayoría de las veces instrumentalizado políticamente como arma para deslegitimar las posiciones de contrincantes. En este sentido, a menudo los socialistas o los democristianos han acusado a los sindicatos con dirigentes comunistas de estar controlados por los partidos comunistas como forma de atraerse a las bases de estos sindicatos[31], y los enfrentamientos entre los partidos y sus sindicatos han sido explicados igualmente por tentaciones de subordinar unos a otros, de tal forma que aquellos militantes que defienden una intensa colaboración quedan deslegitimados[32].

3.2. Una clasificación alternativa

Los estudios sobre "interacciones sociales" han aportado otros criterios para clasificar relaciones entre "actores", ya sean estos individuos, organizaciones formales o estados (Bonoma 1976:499)[33]. Uno de esos criterios se centra precisamente en aquello para lo cual se pensaba en las organizaciones que su colaboración sería provechosa: sus objetivos. Bonoma (1976:509), Scharpf (1988:259) y

---

una distinción "que resulta más tópica y clásica *que verdaderamente explicativa*" (la cursiva es mía).

[31] El 4 de septiembre de 1980, en Nantes, el máximo líder de la CFDT acusó al liderazgo de la CGT de "alignement complet sur la politique d'isolement sectaire et de durcissement idéologique du PCF". Aquella acusación justificaba el final de la unidad de acción sindical entre ambos sindicatos. La última manifestación unitaria entre la CGT-CFDT-FEN, con la excepción de una manifestación en 1983, fue el 1º de mayo de 1979 (Noblecourt 1990:133). La misma justificación fue utilizada para explicar la escisión de sindicalistas democristianos y socialistas del sindicato unitario italiano CGIL en 1948 y 1949 y formar la Libera Confederazione Generale Italiana del Lavoro (Feltrin 1991:309).

[32] Martin (1989:194) recoge como las relaciones partido-sindicato en países anglosajones unas veces se interpreta como el dominio del sindicato al partido y otras a la inversa.

[33] Sin embargo, no han logrado consensuar ni las denominaciones para las diferentes clases de relaciones ni cuáles son los criterios relevantes para realizarlas (Bonoma 1976:499; Galaskiewicz 1985:298; Scharpf 1988:258).

Panebianco (1990:55) coinciden así en señalar que existe una modalidad de relaciones entre actores caracterizada por el hecho de que los participantes persiguen objetivos comunes a todos ellos[34]. Esta modalidad se distingue de otra, u otras, donde los actores que se relacionan persiguen objetivos propios[35].

Esta clasificación de modalidades de relaciones entre actores presenta, sin embargo, algunos problemas de operacionalización cuando se intenta aplicar al caso concreto de las relaciones entre organizaciones. En general, estos estudios de la interacción social, como han criticado Cook y Whitmeyer (1992:117), no se han detenido suficientemente en las especificidades que supone el hecho de que los *actores* que se relacionan no son individuos sino *grupos* (actores colectivos). Así, no parece tan sencillo distinguir cuándo dos o más organizaciones colaboran para conseguir un objetivo común y cuándo para alcanzar objetivos propios de cada una de ellas. Al fin y al cabo, como recuerda Galaskiewicz, "cooperative and coordinative behavior assume common goals and some level of joint decision-making" (Galaskiewicz 1985:283). Afortunadamente podemos recurrir a la teoría de los objetivos formales para aclarar esta discusión. De lo que se trata no es si las organizaciones comparten o no sus objetivos, sino de la clase de objetivos que comparten: los finales o solamente los objetivos instrumentales[36]. Así, utilizando como criterio la clase de objetivos que tienen en común los

---

[34] Bonoma (1976:509) denomina a esta modalidad "bilateral power system"; Scharpf, "problem solving", y Panebianco "sistema de solidaridad" (1990:55), o "comunidad de iguales en la que los fines de los participantes coinciden".

[35] Scharpf (1988:260) incidía en que "it seems useful to distinguish *the pursuit of common interests* that of a class of *individual interests* whose realization does depend upon co-operation" (mías las cursivas). A esta última modalidad la denomina "bargaining". Coincide así con el"sistema de intereses" de Panebianco (1990:55) o "sociedad en la que los fines de los participantes son divergentes".

[36] Un sindicato comunista podría colaborar con un partido conservador en el Gobierno para destruir a un rival común: la familia socialista en su vertiente sindical y partidista. Es evidente que ambos tienen un objetivo común, la eliminación de los socialistas, que es un medio, un objetivo instrumental, para alcanzar objetivos finales muy distintos.

participantes, podemos distinguir dos modalidades de relaciones entre organizaciones:

1) Las relaciones de solidaridad o fraternales.

En esta modalidad de relaciones los actores que las llevan a cabo se consideran a sí mismos como miembros, en principio, de una comunidad de iguales que comparten los mismos *objetivos finales* o máximos, lo que en el lenguaje de las organizaciones políticas se conoce bajo el nombre de la "causa"[37]. Esto no quiere decir, sin embargo, que sólo sean los objetivos finales los que se alcanzan al cooperar las organizaciones, sino también objetivos en principio instrumentales. Como veremos en el siguiente capítulo, esta ha sido la modalidad clásica de las relaciones entre las organizaciones socialdemócratas.

2) Las relaciones por intereses concretos: la doctrina "Gompers".

En estas relaciones los participantes asumen que tienen objetivos finales distintos por lo que las relaciones se establecen exclusivamente para la consecución de objetivos instrumentales de cada organización (Scharpf 1988:260; Panebianco 1990:55,329)[38]. Mientras que en el primer caso las organizaciones cooperaban para la consecución de objetivos finales comunes, aquí lo hacen porque consideran que la consecución de sus objetivos propios, como por ejemplo puede ser la supervivencia de la organización, requiere la colaboración de otras

---

[37] He preferido emplear el término que utilizaba Pizzorno y Panebianco (1990:55), porque considero que el que utiliza Scharpf ("problem solving") es confuso al ser utilizado con otro sentido por autores como Irving Tallman y Louis N. Gray en su artículo "Choices, Decisions, and Problem-solving", en *Annual Review of Sociology*, vol. 16, 1990, donde "resolución de problemas" no es una clase de toma de decisiones, sino el motivo para tomarlas -como de hecho parece sugerir el término. Estos autores además señalan que los conceptos de "toma de decisiones" y "resolución de problemas" han sido usados indistintamente, cuando para Scharpf el segundo era una clase de lo primero.

[38] Puesto que en las relaciones de solidaridad también se satisfacían objetivos instrumentales, he considerado importante añadir el calificativo de "concretos" para remarcar la diferencia de que los objetivos comunes que se satisfacen no son los finales.

organizaciones (Scharpf 1988:260[39]), y obtener así "servicios, materiales, productos, o rentas" (Galaskiewicz 1985:282) que no pueden obtener por sí mismas.

Históricamente en el mundo sindical estas relaciones han sido conocidas bajo el nombre de "doctrina Gompers"[40]; si bien parece que los sindicatos americanos han apoyado al Partido Demócrata estadounidense de una forma más leal de lo que se podría deducir de esta doctrina (Taylor 1989:55)[41].

3.3. Implicaciones de los dos modelos de relaciones

Estos son dos tipos ideales de relaciones que los miembros de las organizaciones pueden o no convertir en su modelo oficial u oficioso de relaciones del que hablábamos antes[42]. Pero, sin entrar en la cuestión de cómo un modelo determinado de relaciones se convierte en el oficial u oficioso ¿qué implicaciones prácticas tendría que los miembros de las organizaciones entiendan las relaciones partidos-sindicato según uno u otro tipo ideal[43]? En primer lugar,

---

[39] Y así Scharpf considera que los acuerdos pueden ser solamente logrados si se anticipa que su utilidad es cuanto menos tan alta para cada participante como la utilidad de la no cooperación (Scharpf 1988:260).

[40] Samuel Gompers fue un dirigente sindical estadounidense de la AFL a finales del siglo pasado y principios de éste. Según él, no había que vincularse con partido político alguno, sino premiar a los amigos y castigar a los enemigos ("reward your friends, punish your enemies").

[41] En España un caso histórico que se acerca a esta modalidad de relaciones se encuentra entre la CNT y ERC. Cada organización tenía objetivos finales muy distintos, pero tenían en común su rivalidad con los socialistas de la UGT y del PSOE.

[42] Ahora bien, que esto ocurra así depende de las características internas de cada organización. Como vimos en organizaciones descentralizadas cada parte (en el ámbito local o sectorial) puede seguir un modelo distinto. En este caso no existe un modelo de relaciones para toda la organización.

[43] Es decir, vamos a suponer que las organizaciones están centralizadas y disciplinadas, y que, por tanto, una vez fijado el modelo de relaciones, sus miembros lo llevan a cabo.

como ha puntualizado Scharpf, no se trata de que en un caso los miembros de las organizaciones entren en juegos suma-cero mientras que en el otro sean juegos suma-positiva por la sencilla razón de que las utilidades respectivas de ambas organizaciones aumentarán mediante la cooperación tanto en uno como en otro modelo de relación, aunque puntualizaba que "zero-sum conflicts over the distribution of limited resources are perhaps better resolved in the 'problem-solving' style by recourse to common norms and values and, perhaps, to adjudication, rather than by pure 'bargaining', where the have-nots are without recourse against the distribution of original 'endowments'" (Scharpf 1988:260). En segundo lugar este mismo autor ha señalado que tampoco la "estabilidad" de las relaciones es un buen indicador para inferir qué tipo de relaciones es predominante entre los miembros, pues es probable que "purely self-interested exchange relationships may develop into stable networks of mutual dependence in which participants will anticipate, and respect, the self-interest of their partners" (Scharpf 1988:260).

Puede parecer, entonces, que está distinción entre relaciones de "solidaridad" e "intereses concretos" es más teórica que real, ya sea porque tanto en una como en otra forma de entender las relaciones se satisfarán objetivos instrumentales de cada organización, por lo que no habrá diferencias a efectos prácticos, ya porque la existencia o no de objetivos finales compartidos por ambas organizaciones es un criterio tan vago que difícilmente puede ser utilizado para comprobar si el modelo de relaciones que puedan fijar en sus estatutos es el que efectivamente llevan a cabo. En este sentido, Perrow (1961:855) consideraba que, dada esa vaguedad de los objetivos finales no se podía deducir las actividades, así como las características internas de las organizaciones, a partir de ellos[44]. Panebianco (1990:39), por el contrario, no compartía esta opinión sobre la irrelevancia de los objetivos finales, pues "muchos conflictos intra-organizativos se

[44] Esta cuestión se complica más aún si recordamos que la literatura sobre los objetivos de las organizaciones además señala que esos medios para alcanzar los objetivos finales, frecuentemente se convierten en fines en sí mismos, es decir son los únicos perseguidos a despecho de los originarios (Mayntz 1987:101).

desarrollan en torno a valoraciones contrapuestas del *rendimiento* de la organización, [es decir] de su capacidad para perseguir eficazmente los objetivos oficiales". Todo lo contrario, este autor sostenía que los "fines oficiales" ejercían una influencia efectiva sobre los procesos internos de las organizaciones, o en sus relaciones con el entorno.

Así, con respecto a la segunda de las críticas, lo importante no es que dichos objetivos últimos se puedan detallar con exactitud, sino que los miembros de cada organización efectivamente *crean* que comparten unos objetivos finales para cuyo cumplimiento ambas organizaciones fueron creadas[45]. Evidentemente, cómo materializar esos objetivos finales y cuáles se han de lograr primero (cómo concretar la "causa" común), qué medios y vías son los más adecuados para conseguirlos y cómo combinarlos (es decir, qué estrategia es la más adecuada), o qué bienes y servicios intercambiarse para satisfacer objetivos más concretos y exclusivos de cada organización, ha sido a menudo una fuente de conflictos y tensiones[46], los cuales se han intentado solucionar de formas diversas. No se ha de pensar, por tanto, como ha señalado Scharpf (1988:260), que los acuerdos sean necesariamente más fáciles de alcanzar cuando se actúa siguiendo el modelo de relaciones de solidaridad que bajo el de los intereses concretos.

---

[45] El Secretario General de la UGT, Nicolás Redondo, afirmaba con motivo de las elecciones generales de 1986:

"No cabe duda que el proyecto de transformación que defendemos es una tarea que *consideramos* compartida entre la Unión General de Trabajadores y el Partido Socialista Obrero Español" (*El País* 19-6-86, mía la cursiva).

Por su parte Mayntz (1987:83), con respecto a la importancia de las creencias, señalaba para entender cómo funcionan las organizaciones hay que centrarse menos en los objetivos organizativos que se fijaron en su día y más en la opinión que sus miembros tengan hoy de ellos.

[46] En palabras de Taylor (1989:49):

"The party-union relationship is often falsely and crudely reduced to asking, 'who needs whom most?' This ignores the fact that the relationship is *mutual*, and exchange between two organizations with separate but overlapping interests which generates the tensions in their relationship" (suya la cursiva).

Se pasa así a contestar la objeción de que, a efectos prácticos, es irrelevante el modelo de relaciones partido-sindicato que prefieran los miembros de las organizaciones. En primer lugar, se pueden señalar una serie de implicaciones sobre la vida interna de las organizaciones. Los miembros de éstas que entiendan las relaciones según el primer modelo se afiliarán a las dos -si bien puede ocurrir que se afilien sólo a una de ellas porque se da por descontado que es suficiente para militar en ambas[47]- lo que explica ese rasgo de solapamiento de militancia en las relaciones que los investigadores caracterizan de "fraternales" (Howell y Daley 1992-93:3). E igualmente estos militantes verán como plenamente aceptable que un mismo individuo ocupe cargos -o tenga influencia directa- en dos organizaciones, dando lugar a auténticos directorios entrecruzados[48]. En algunos países, además, se llegó a formalizar estatutariamente los vínculos, siendo en Escandinavia o en Gran Bretaña donde más formalidad se dio a las relaciones. Por el contrario, cuando en los sindicatos se quería probar que se había cambiado el modelo de relaciones con los partidos políticos, se prohibía combinar cargos sindicales con otros políticos[49]. Igualmente, el hecho de compartir objetivos finales comunes, y, por tanto, de que las acciones de cada organización sean fundamentales para la consecución de los fines de ambas, hace que los líderes de ambas organizaciones se consideren legitimados para tener algo que

---

[47] "[A]quí conocemos una larga tradición, que yo en mi adolescencia y juventud he vivido, en la que UGT era una organización hermana del partido socialista y en la que pertenecer a UGT significaba ya ser socialista; las Casas del Pueblo de este país, que dirigía el partido socialista, tenían una mínima adscripción de militantes a las agrupaciones socialistas y la mayor parte de sus afiliados eran afiliados de los sindicatos que por el sólo hecho de tener carnet de la UGT, se consideraban ya como socialistas" (Intervención de Santiago Carrillo en el seminario *Las relaciones entre partidos políticos y sindicatos en la sociedad contemporánea*, organizado por la Universidad Complutense de verano y publicado en Carlos Otero Hidalgo (ed.) *Partidos políticos y Sindicatos en la Sociedad Contemporánea*, Madrid: Estudios Institucionales, 1996, pág. 54).

[48] En los años 30 casi el 75% de los miembros del Comité Ejecutivo de la UGT y del PSOE eran las mismas personas (Contreras 1980:20).

[49] Como, por ejemplo, hizo el sindicato italiano CISL en 1969 (Pasture 1994:71).

decir sobre la actividades y objetivos "más propios" de la otra organización. Todo ello, no sólo para que la organización hermana siga cumpliendo su misión en el alcance de los objetivos finales comunes sino, incluso, para su propio bien más inmediato. En cambio, en las relaciones de intereses concretos en principio se abstendrán de dicha influencia o no se expondrá tan abiertamente, pues serían acusados de interferir en la autonomía e independencia organizativa.

No son, sin embargo, las repercusiones de las relaciones partido-sindicato sobre la vida interna de las organizaciones las que nos interesan. Estos dos modelos de relaciones también tienen importantes repercusiones sobre las estrategias fijadas en cada organización para alcanzar sus objetivos. En ambos modelos las relaciones partido-sindicato se consideran que son un recurso para alcanzar objetivos de las organizaciones, pero su *relevancia* como recurso varía en función de la modalidad de que se trate: mientras que en las relaciones solidarias la colaboración mutua es considerada como el recurso necesario para lograr los objetivos de cada organización, comenzando por los finales; en las segundas, por el contrario, las relaciones son consideradas como un recurso más a tener en cuenta, útil dependiendo de la situación, pero no imprescindible.

La creencia de que la colaboración entre el partido y el sindicato es la mejor estrategia para que ambos alcancen sus objetivos se desprende en última instancia del hecho de que ambas organizaciones comparten sus fines últimos, por lo que el éxito de una organización coadyuva al éxito de la otra (Howell y Daley 1992-93:3)[50]. De ahí también que la colaboración se dé por descontada y la reciprocidad esté asegurada (Scharpf, 1988:260,262)[51]. En términos

[50] Según Bonoma, cuando se comparten los intereses, los actores se comportarán guiados por la creencia de que "what is good for us is good for me" (Bonoma 1976:509).

[51] Se entiende así que en el primer modelo de relaciones sea frecuente la aparición de promesas de dedicación exclusiva, de entrega mutua, de que, entre todas las posibles organizaciones del ámbito con el que interesaba relacionarse, una y solo una

de teorías de juegos, los actores no corren el peligro de caer en la trampa del "dilema del prisionero", donde la colaboración resulta a corto plazo la peor opción que un actor puede tomar, pues están practicando el juego de la "seguridad" (Goldstone 1994:143,144)[52].

Pero, igualmente, si por la razón que sea, las relaciones se rompen, dicha ruptura suele producirse, y vivirse, de forma traumática por gran parte de la militancia porque, en principio, parecería que una de las dos organizaciones, o las dos, está traicionando los objetivos últimos de las organizaciones, el fundamento último de la existencia organizativa, o se ha abusado de la buena fe (Scharpf 1988:262)[53].

---

organización es la elegida, dándole ese aspecto de relación "privilegiada" que las relaciones de solidaridad suelen tener.

[52] El "dilema del prisionero" es un juego en el que dos jugadores tienen cada uno dos elecciones, cooperar o no hacerlo. Cada uno debe realizar la elección sin saber que hará el otro. Para cada jugador no cooperar ofrece el mejor resultado si el otro por el contrario elige cooperar. Si ambos no cooperan sin embargo se encontrarán con un resultado peor que si lo dos lo hubieran hecho (Tallman y Gray 1990:409). Evidentemente en este se presupone que cada jugador está totalmente despreocupado por la suerte del contrario porque no le afecta a sus intereses, que son por tanto totalmente exclusivos, pero este no era el caso en las relaciones de solidaridad donde se presupone que para que una organización alcanzase sus objetivos tenía que contar con la colaboración de la organización hermana (Howell y Daley 1992-93:3), aunque clara está lo peor que le podría ocurrir a cada una era que colaborase y la otra no lo hiciese. Este estructura de pagos es la calificada por Goldstone (1994:144) como "juego de la seguridad".

[53] "El corolario es que el aprendizaje de la autonomía, del distinto papel del sindicato y de los partidos, de la acción sindical y de la acción de gobierno es complejo y requiere tiempo y criterios claros. Aquí lo hemos aprendido de forma un tanto traumática. Es posible que ello, además de traumático, no haya sido inútil y sirva para desterrar esquemas del pasado y permita establecer en el futuro una dialéctica más *laica*. Sobre todo entre los mismos espacios. Porque eso es lo difícil: la experiencia nos demuestra que UGT tiene una visión más laica en relación con IU, y CCOO respecto al PSOE, que la que tienen cuando quien les pisa el callo son los "suyos" (Intervención de José Mª Zufiaur en el seminario *Las relaciones entre partidos políticos y sindicatos en la sociedad contemporánea*, organizado por la Universidad Complutense de verano y publicado en Carlos Otero Hidalgo (ed.)

En conclusión, la diferencia entre el modelo de relaciones de solidaridad y el modelo de relaciones por intereses concretos no estriba en que en el segundo modelo las relaciones se conciban como un instrumento para alcanzar objetivos mientras que en el primero sean un fin en sí mismas, producto de una historia común[54], sino en determinadas consecuencias para la vida interna de las organizaciones y para sus estrategias. Como ya he expuesto, de todas estas implicaciones nos vamos a centrar en las repercusiones estratégicas, pues lo que nos interesa son las relaciones entre los partidos y los sindicatos entendidas como un recurso a disposición de las organizaciones para que puedan alcanzar objetivos suyos, cuáles son sus principales formas de colaborar a nivel nacional, y las razones de su cambio.

4. Partes de la tesis

La tesis está construida en dos partes. La primera comienza con un capítulo teórico donde se exponen las teorías que se han dado para explicar tanto la importancia que han tenido estas relaciones para los éxitos de los partidos socialdemócratas y las organizaciones sindicales como las razones de que esto ya no sea así y los debates que han aparecido. En él se detallará el modelo tradicional de relaciones entre partidos y sindicatos socialdemócratas y sus implicaciones estratégicas, qué objetivos se pensaban alcanzar gracias a su colaboración recíproca con especial atención a las políticas económicas, y qué condiciones se tenían que dar para que su colaboración fuese factible.

En el capítulo segundo se expone cuál ha sido la transformación del modelo oficial de relaciones entre el PSOE y la UGT, exponiendo así los rasgos principales que permiten identificar su modelo histórico de relaciones dentro de la clase solidaria así como

---

Partidos políticos y Sindicatos en la Sociedad Contemporánea, Madrid: Estudios Institucionales, 1996, pág. 191).

[54] La defensa de la utilidad de la relaciones aparece desde el principio de las relaciones clásicas de la socialdemocracia (Taylor 1989:45).

caracterizar al nuevo modelo de relaciones como una colaboración por intereses concretos. En este capítulo se rechaza una interpretación alternativa del cambio de sus relaciones centrada en el fin del papel de la UGT como "correa de transmisión" del PSOE.

En los capítulos tercero y cuarto se estudia hasta qué punto las direcciones de ambas organizaciones han cambiado en la práctica su forma de relacionarse, y si han seguido los modelos de relaciones expuestos en sus congresos. Para ello se compara la primera legislatura del Gobierno socialista (1982-1986) con la tercera (1989-1993), pues cada uno de estos períodos se caracterizada por una modalidad distinta de colaboración. Quedará así claro la relevancia de los modelos de relaciones partido-sindicato y como estas relaciones influyen en las relaciones entre un gobierno y los sindicatos.

En el capítulo quinto se repasan las principales interpretaciones dadas para explicar la ruptura entre el PSOE y la UGT. Para ello se estudia la segunda legislatura del Gobierno socialista (1986-1989). Se expondrá así como estas interpretaciones suscitan más preguntas de las que pretenden resolver. Se concluye el capítulo con tres preguntas analíticamente distintas: (i) ¿por qué se acabó la concertación social que se había venido practicando hasta entonces?, (ii) ¿por qué la UGT y el Gobierno socialista no se pusieron de acuerdo a partir de un determinado momento sobre las políticas sociales y económicas?, y (iii) ¿por qué interpretaron que lo mejor era cambiar el modelo tradicional de relaciones partido-sindicato?

Con este capítulo acaba la primera parte de la tesis. La segunda comprende su parte explicativa donde se pretende contestar a cada una de las preguntas anteriores. Comienza con el capítulo sexto donde se ofrece un modelo teórico de cómo influye un contexto pluralista y competitivo en las estrategias de los sindicatos, tanto en sus relaciones con los gobiernos como con los partidos políticos.

En el capítulo séptimo se comprueba si efectivamente los datos validan la hipótesis ofrecida para explicar el fin de la concertación social practicada hasta entonces y se rechazan otras hipótesis alternativas centradas más bien en las preferencias de la UGT por una negociación colectiva descentralizada o la ineficacia del Gobierno

socialista como "compensador". Quedará así claro el poco peso que tienen las políticas sociales y económicas para explicar el abandono de los acuerdos globales de contrapartidas.

En el capítulo octavo se explica por qué además la dirección de la UGT reclamó una aceleración en el ritmo de gasto social así como los factores que explican que el consenso tácito que habían mantenido el Gobierno socialista y la dirección de la UGT se viniese abajo hacia finales de la segunda legislatura.

En el capítulo noveno se explica por qué las direcciones de ambas organizaciones interpretaron a partir de un determinado momento que los beneficios que obtenían de la colaboración solidaria con su socio no compensaban los costes que se derivaban de esa misma colaboración. Se hará hincapié en como este saldo negativo no se produjo porque la organización hermana dejase de proporcionar los bienes y servicios esperados sino porque los costes de llevar a cabo esta clase de relaciones solidarias aumentaron.

Se termina la tesis con una recapitulación de las principales conclusiones de la tesis, haciendo así hincapié en que unos determinados contextos institucionales llevan a que precisamente cuando parecería que sus relaciones solidarias podrían dar el mejor provecho para un partido y un sindicato socialdemócrata es cuando más costoso se vuelve mantenerlas, y no tanto por supuestos cambios de estructura económica y social.

5. Realización de la investigación: métodos teorías y fuentes utilizadas

En principio este trabajo se podría clasificar como un estudio de caso singular (la transformación de las relaciones partido-sindicato en el socialismo español), lo cual, como es bien conocido no deja de presentar inconvenientes para contestar determinadas preguntas. Es así un lugar común señalar que desde una perspectiva metodológica el estudio de un caso individual no puede establecer y verificar relaciones causales entre fenómenos, ni por tanto se puede establecer ninguna generalización o teoría causal. Por el contrario, un estudio

comparado con todos los países europeos resolvería estos problemas. Pero presenta insuperables dificultades materiales y temporales por lo que se sacrificaría la "intensidad" del estudio a su extensión. Durante un tiempo se pensó en realizar entonces un estudio comparado con algún otro país siguiendo el método comparativo. Sin embargo, considero que una comparación con otro caso *tampoco* permite generalizar ni establecer relaciones causales entre fenómenos, pues sigue presentando graves problemas de control, con lo cual se complica de la investigación, pero no se gana mucho en capacidad de generalización. Como es bien sabido, la lógica del método comparado establece dos diseños principales ya sea para explicar la variabilidad de resultados en la variable dependiente, para lo cual todas las posibles variables intervinientes son similares menos la "explicativa" (el método de los casos más similares); ya sea para explicar las similitudes en la variable dependiente, para lo cual todas las posibles variables intervinientes son distintas menos la "explicativa" (el métodos de los casos más "disimilares")[55]. Pero, en primer lugar, ha sido igualmente comentado que en la práctica lo más frecuente es que el investigador que compara dos casos se encuentre con la existencia de toda una serie de variables independientes que son similares en los dos casos y otras que son diferentes[56], por lo que para discriminar entre esas variables independientes que podrían ser explicativas se tendría que añadir más casos en función de su número[57]. En segundo lugar, el estudio de dos o tres casos es igualmente débil para controlar explicaciones de fenómenos basados en los *efectos combinados* de diversas variables independientes. Como ha sido ya señalado, para verificar estas explicaciones de una forma rigurosa, es necesario

---

[55] Para un excelente estudio del método comparativo y sus problemas, véase el trabajo de Charles C. Ragin, *The Comparative Method*, Berkeley: University of California Press, 1987.

[56] Son los problemas de las similitudes y diferencias ilusorias según Ragin (1987:48).

[57] Es decir, los estudios comparados de dos casos representan el ejemplo más agudo de la "n" pequeña (caracterizado por haber más posibles explicaciones de un determinado fenómeno que casos de ese fenómeno). Como ha sido señalado en estas situaciones es imposible discriminar entre las posibles explicaciones.

encontrar ejemplos de todas las posibles combinaciones de las condiciones de las variables[58]. Así, de hecho, muchos supuestos trabajos comparados terminan siendo estudios *de dos o más casos yuxtapuestos*, o con resultados de dudosa generalización.

Por estas razones en vez de comparar el caso español con algún otro caso o casos, se eligió centrarse en el español y utilizar una metodología mixta para la verificación de las hipótesis que se generasen. Al estudiar un caso concreto podría seguir una estrategia de investigación más intensiva por lo cual podría tomar en consideración una gran cantidad de propiedades del caso. Esto nos permite, como ha sido frecuentemente comentado por investigadores que escogen los métodos de investigación en función de sus preguntas, y no las preguntas en función del método, formular toda una serie de hipótesis sobre relaciones complejas entre las propiedades del caso, y analizar resultados en términos de combinaciones de condiciones.

Se revisaría al mismo tiempo teorías existentes en la literatura sobre acontecimientos ocurridos en España, poniendo en cuestión así algunas de sus generalizaciones, señalando sus puntos débiles y formulando nuevas hipótesis. La investigación del caso concreto español pertenece así a un tipo concreto de estudio de caso: el estudio del caso desviante frente a una tendencia general descrita o prevista por una teoría o generalización determinada. Bien es cierto que esta investigación se encontró con el problema de que difícilmente se podría decir que existe *una teoría* de las relaciones entre los partidos y los sindicatos socialdemócratas, y muchísimo menos alguna sobre su transformación, sino toda una serie de lugares comunes sobre el comportamiento de los sindicatos y partidos socialdemócratas en general, y el PSOE y la UGT en particular.

Pero en la investigación no sólo se pretendía elaborar nuevas hipótesis sobre el desarrollo de las relaciones entre partidos y sindicatos socialdemócratas, sino proceder también a alguna forma de

---

[58] Por ejemplo, si se considera que "c" es explicado por la combinación de la características "a" con "b", habría que encontrar así cuatro ejemplos de combinaciones de estas características (a+b, no a+b, a+no b, no a+no b).

verificación. Para ello se procedió a especificar cuáles son las posibles variables que contribuyen a explicar la pregunta central o colaterales para pasar así a intentar verificarla utilizando uno de los siguientes métodos (o varios a la vez): (1) se contrastó el efecto de una variable que se consideraba explicativa con otros casos europeos (estableciendo un diseño donde se evitase escoger una muestra de países a partir de la variable dependiente del estudio), (2) se realizaron comparaciones de tipo diacrónico o longitudinal y (3) se contrastaron las hipótesis formuladas con otras alternativas.

En esta investigación he utilizado una metodología mixta para la cual se recurrió a diferentes fuentes de información:

1. Fuentes primarias.

Como fuentes primarias de esta investigación he utilizado las cartas-circulares, principalmente, del Secretario de Acción Sindical de la UGT a las Federaciones Estatales de Industria y a las Uniones Provinciales, Regionales y de Nacionalidad de este sindicato. También se han utilizado algunas cartas escritas por el Secretario General de la UGT, por el Presidente de la CEOE y por diferentes ministros del Gobierno. Aquí indudablemente hay que incluir los propios trabajos publicados por protagonistas ya fuesen en periódicos, revistas o libros sobre acontecimientos en "caliente" y reflexiones sobre otros pasados. Pero, desafortunadamente no abundan en España los libros de memorias y ninguno de los Secretarios Generales de las dos organizaciones socialistas lo ha hecho hasta la fecha. Esto es de lamentar porque determinadas acciones no dejaron constancia documental por ser acuerdos "de palabra", sobre cuya existencia se puede certificar por diversas fuentes. Otro material muy utilizado han sido las Memorias de Gestión de las ejecutivas socialistas, ugetistas y de CCOO, así como ponencias y resoluciones de sus congresos confederales, programas electorales, estatutos, los Diarios de Sesiones del Congreso de los Diputados donde se recogen discursos de miembros del Gobierno y debates parlamentarios, y diversos documentos oficiales o "internos"

elaborados por las direcciones del PSOE, la Unión General de Trabajadores o ministerios del Gobierno español y sus publicaciones periódicas (*Información Sindical*, *Claridad*).

Finalmente, y con objeto de completar y contrastar la información obtenida de estas fuentes primarias así como de las secundarias realicé una serie de entrevistas en profundidad a dirigentes de la Unión General de Trabajadores, del Partido socialista y de Comisiones Obreras. Hice las entrevistas siguiendo flexiblemente un cuestionario semi-estructurado. Las preguntas incluidas en él se orientaban sobre todo al desarrollo de las relaciones entre el PSOE (aparato del partido y gobierno) y los sindicatos UGT y CCOO antes y después de los enfrentamientos, si bien se preguntó igualmente sobre la cuestión de la evolución del sindicalismo en España desde el final de la transición, la construcción de la Unidad de Acción Sindical u objetivos estratégicos. Desafortunadamente no pude realizar algunas entrevistas a determinados actores como hubiera deseado por tener ellos su agenda muy recargada. El número en sí mismo de las que he podido realizar es ciertamente escaso (ocho), pero he preferido sacrificar la "cantidad" (es decir, entrevistar a actores de "segunda fila" cuya información sobre cuestiones concretas es de segunda mano) a la "calidad" (es decir, actores de los que tenía constancia que me podrían dar una información directa sobre determinados hechos). Pero para paliar esta escasez también se ha recurrido a entrevistas ya realizadas por otros investigadores, en concreto destacan las que realizaron Mariano Guindal y Rodolfo Serrano (1986), Salvador Aguilar y Carlos Zeller (1991), José Antonio Sánchez y Roberto Santos (1990) y Tom Burns Marañón (1996). La publicación de las entrevistas por este último periodista fue posterior a la realización de la mayoría de mis entrevistas por lo cual he podido constatar la similitud de respuestas en aquellos actores entrevistados por ambos. La ventaja de la mayoría de las entrevistas realizadas entre 1986 y 1990 era la cercanía de los actores a los hechos sobre los que se quería investigar. En general, tanto las entrevistas realizadas por el autor como por otros me ha resultado de gran valor para entender, ratificar o desmentir información obtenida en otras fuentes.

2. Fuentes secundarias.

Además del análisis de estas fuentes primarias, y dado la dificultad lógica en acceder a determinadas fuentes primarias o ante la constatación de que no queda constancia material de determinados hechos, además de la realización ya comentada de entrevistas, se procedió a recurrir al estudio de algunas fuentes secundarias como estudios realizados sobre la cuestión. Pude constatar así como una de las organizaciones (el PSOE) o determinadas cuestiones (como la concertación social o las políticas del Gobierno socialista) estaban mucho más estudiadas que otras. Llama especialmente la atención los escasos estudios específicos sobre la Unión General de Trabajadores que no sean sobre su historia anterior a la Dictadura de Franco, pues no existe sobre esta organización sindical un estudio equivalente, por ejemplo, al de David Ruiz (dir.) *Historia de Comisiones Obreras (1958-1988)*. Igualmente, están mucho más estudiadas las acciones que emprendían estas organizaciones que los procesos internos que les llevaron a tomar una determinada opción. De nuevo, esto es menos cierto para el caso del Partido socialista. Además, incluso en cuestiones en principio bastante tratadas no dejé de encontrarme sorpresas como fue la existencia de acuerdos, que aun siendo en su día públicos, han caído en el olvido. En último lugar, se recurrió al diario *El País* por la facilidad de acceso.

3. Archivos y bibliotecas consultados.

Los archivos consultados han sido la Fundación Largo Caballero, la Fundación Pablo Iglesias, la Fundación Primero de Mayo, la Biblioteca del Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales (Instituto Juan March), la Biblioteca del Congreso de los Diputados, y la del Ministerio de Trabajo.

CAPITULO PRIMERO

LAS RELACIONES PARTIDO-SINDICATO COMO UN RECURSO DE PODER DE LA SOCIALDEMOCRACIA

1. La modalidad socialdemócrata de relaciones partido-sindicato: el reparto de tareas y la coordinación de actividades

Hasta ahora hemos estado revisando las relaciones entre los partidos y los sindicatos como un "recurso" sin referirnos a ninguna familia ideológica concreta. En este capítulo nos vamos a centrar en la interpretación concreta que hicieron los socialdemócratas[1] de las relaciones partido-sindicato, y en cómo se materializó su colaboración *solidaria*. Veremos así por qué se llegó a pensar que "[t]he capacity to achieve the goals of one has depended on the involvement of the other" (Howell y Daley 1992/93), es decir, en palabras de líder socialista Julián Besteiro:

> "Los intelectuales, se ha dicho, no caben en el Partido Socialista Español porque es un partido que atiende exclusivamente a las necesidades de la clase obrera, no un partido como el de otras naciones, tales como Francia, que permite a los intelectuales una gran esfera de acción. Pues bien, sabedlo: con ser la aportación de Francia al socialismo muy grande, por no existir en ella una relación tan estrecha como existe aquí entre la labor del Partido y

[1] Como hacen bastantes autores, empleo el término "socialdemócrata" para referirme tanto a los partidos socialdemócratas del noroeste de Europa como a los socialistas del sur. Ahora bien, mantendré el término socialista para la socialdemocracia meridional, como se les conoce más generalmente en sus respectivos países.

> la labor de la organización obrera, el movimiento socialista francés adolece de un defecto que no aqueja, por fortuna, al socialismo español..."[2].

1.1. El diseño estratégico de las relaciones de solidaridad entre los partidos y sindicatos socialdemócratas

Según la interpretación más extendida sobre los orígenes de la modalidad de relaciones entre los partidos y sindicatos de la familia socialdemócrata, éstos surgieron como los dos "brazos", como las dos formas organizativas para ser más precisos, del mismo movimiento social producto de los enfrentamientos políticos y sociales por los derechos del trabajo asalariado, o "cleavage" trabajo-capital (Ebbinghaus 1995:55 y 69, Taylor 1989). Ebbinghaus explica la necesidad de que dicho movimiento social tuviese dos formas organizativas distintas, a pesar de su origen común, por la necesidad de defender los intereses de los trabajadores a través de dos ámbitos distintos, uno "político" y otro "sociolaboral"; y no tanto porque en una u otra organización se persiguiesen fines distintos en cuanto a su naturaleza política o socioeconómica. Todo lo contrario, la mayoría de los dirigentes en una y otra organización consideraban que sus objetivos últimos eran los mismos.

Pero el hecho de que las organizaciones sindicales y partidarias tuviesen los mismos fines no explica por sí solo el origen de la modalidad clásica de relaciones partido-sindicato de la socialdemocracia, aunque sí determinaría características fundamentales suyas. En sí mismo, compartir los objetivos generaba una serie de interrogantes tales como: (1) cuáles eran los ámbitos en los que había que actuar para alcanzarlos, (2) cuántas eran las organizaciones necesarias y (3) cómo habrían de relacionarse entre ellas. De hecho, tanto el solapamiento de objetivos como el representar, movilizar y encontrar sus afiliados en una base social similar, lejos de explicar la cooperación entre el partido y el sindicato

---

[2] Fragmento de una conferencia ofrecida por Julián Besteiro en Oviedo en diciembre de 1926, citado por Saborit (1967:138).

podía implicar problemas de compatibilidad, competición e incentivos para la colaboración entre ellas, como ha sido varias veces señalado (Przeworski y Sprague 1986:8; Scharpf 1988; Ebbinghaus 1995:56).

Así, tras años de discusiones sobre si la actividad parlamentaria (una vez abandonada de hecho la vía insurreccional) o las relaciones con los patronos eran el mejor medio para alcanzar los fines comunes, o si alguna organización (el partido o el sindicato) debería tener alguna clase de primacía sobre la otra, se alcanzó una fórmula de compromiso con el fin de zanjar estas cuestiones (Pérez Ledesma 1987). Los partidos socialdemócratas y los sindicatos compartirían los mismos objetivos finales, pero, para que no se produjesen ni solapamientos de actividades ni tentaciones de subordinar una organización a la otra, se repartieron los ámbitos de actuación: el político para el partido y el laboral para el sindicato. Los dirigentes políticos y sindicales hicieron igualmente hincapié en que los dos ámbitos tendrían la misma importancia para alcanzar las metas del socialismo, así como que partidos y sindicatos deberían ayudarse mutuamente en sus respectivas actividades (Taylor 1989:49; Padgett y Paterson 1991:177; Merkel 1995:91)[3].

Este modelo de relaciones, por compartir los mismos objetivos finales o máximos, se le puede incluir dentro de la modalidad de relaciones interorganizativas "de solidaridad". Pero es necesario recordar que esta formula de compromiso alcanzada constituyó siempre un diseño estratégico basado no sólo en compartir los mismos idearios socialistas, sino también en unos consensos sobre los ámbitos de actuación necesarios (el político y el laboral), su reparto entre los partidos políticos y los sindicatos, y la necesidad de ayudarse mutuamente. La aceptación de tal diseño implicaba así toda una serie restricciones sobre las actuaciones que podían desarrollar las organizaciones, las cuales vamos a ver a continuación.

---

[3] Esta modalidad de relaciones partido-sindicato ha sido conocida históricamente por el nombre de "los dos brazos", "las dos piernas" o más sencillamente "modelo dual" (Pérez Ledesma 1987:227; Paramio 1992).

1.2. La colaboración solidaria entre partidos y sindicatos socialdemócratas: las restricciones estratégicas y sus beneficios

Estas restricciones del modelo solidario de las relaciones entre los partidos y sindicatos socialdemócratas eran de dos clases: en primer lugar, como se acaba de exponer, cada una de las organizaciones se abstendría de actuar en determinados ámbitos o por lo menos consideraría a uno determinado como su campo preferente de actuación; en segundo lugar, unos y otros tendrían que practicar además en su ámbito más propio unas estrategias concretas para coordinar entre sí sus actuaciones. Los dirigentes partidistas y sindicales esperaban obtener a cambio de estas restricciones sobre sus actuaciones y estrategias unos determinados bienes o servicios que le permitirían alcanzar sus objetivos instrumentales, así como ir acercándose a ese objetivo final, compartido, de emancipación social. De ahí que se haya destacado que, en la práctica, las relaciones de solidaridad consistían en una serie de intercambios entre las organizaciones implicadas[4]. Howell y Daley (1992-93:5) han señalado así que su colaboración se concretó en dos clases de intercambios en función de los ámbitos donde se producían: (a) un intercambio político-electoral y (b) un intercambio o coordinación económica[5].

1.2.1. La colaboración solidaria (I): el intercambio político-electoral

En primer lugar, las relaciones solidarias entre los partidos y sindicatos socialdemócratas implicaban por el hecho de repartirse los ámbitos donde realizaban sus actividades que las organizaciones se abstendrían de actuar directamente en determinados ámbitos y

---

[4] Véanse los trabajos de Cameron (1984:167), Przeworski y Sprague (1986:75), Taylor (1989:47), Padgett y Paterson (1991:178) o Merkel (1995:92).

[5] Estos autores les llamaron "political bargain" y "economic bargain". Dada la confusión que produciría traducir al primero por intercambio político, termino que en la literatura especializada tiende a englobar más bien a ambos intercambios, he preferido traducirlo por intercambio político-electoral. El segundo intercambio hace realmente mención a una coordinación de actividades realizadas por cada organización, de ahí que haya preferido denominarlo coordinación económica.

accederían a ellos por mediación de la organización hermana. Es decir, en el caso del sindicato, éste participaría en el ámbito político principalmente por mediación de su partido hermano[6], para lo cual le ayudaría a ganar las elecciones. En el caso del partido político, éste llevaría a cabo las tareas de movilización de sectores específicos de la población y de agregación de sus intereses por mediación del sindicato hermano[7], para lo cual realizaría una actividad política que satisficiese los objetivos sociopolíticos del sindicato. En pocas palabras, el reparto de papeles del modelo solidario implicaba un intercambio de bienes y servicios muy citado en la literatura donde los sindicatos movilizaban políticamente a los trabajadores en favor de sus partidos a cambio de que éstos, una vez en el poder, legislasen en favor de los primeros para crearles un marco legal propicio y proporcionarles determinadas políticas públicas (Howell y Daley 1992-93:6; Taylor 1989:47). Los sindicatos constituyeron, además, un campo de reclutamiento ideal para los partidos de izquierda, pues a menudo el trabajo en el sindicato llevaba a sus afiliados a la militancia en el partido. Igualmente supusieron una fuente de financiación importante de los partidos socialdemócratas ya fuese financiando campañas electorales (partidos laboristas), proporcionando un valioso apoyo humano y de infraestructuras (países escandinavos, Italia) y, pese a desvinculaciones formales, dando recomendaciones de voto más o menos claras (RFA, Austria) (Merkel 1995:92). Quedaba así engarzado la actuación política del sindicato con la actuación social del partido.

Ahora bien, los líderes sindicales tenían que evaluar si lo que recibían de los partidos políticos compensaba el abstenerse de participar directamente en política o hacerlo a través de diferentes partidos. Igualmente, los líderes de los partidos habrían de sopesar si

---

[6] Los sindicatos socialdemócratas se distinguían así tanto de aquellos otros que reducían su actuación sindical al ámbito de la negociación colectiva como de los que pretendían realizar una "acción directa" en el ámbito político.

[7] Estas tareas serían especialmente buscados por los "partidos de integración" que pretendían influir sobre la vida de sus militantes y encuadrar a grupos sociales específicos, realizando tareas de "educación política" de su electorado efectivo y potencial.

la contribución que hacía el sindicato a sus éxitos electorales compensaba las políticas con las que había que retribuirle. La respuesta que dio la literatura especializada sobre esta cuestión fue que dichos intercambios permitieron, en el caso de los partidos políticos, no sólo su consolidación a principios de siglo (Epstain 1993:150), sino que incrementaron sus posibilidades de acceder y mantenerse en los gobiernos, pues los vínculos estrechos entre sindicatos y partidos contribuyó a la formación de vínculos entre los trabajadores y los partidos socialdemócratas, sobre todo si los sindicatos poseían unas determinadas características organizativas, las cuales veremos más tarde (Przeworski y Sprague, 1986:75; Padgett y Paterson, 1991:178; Lange y Ross 1990:304; Merkel, 1995:92).

1.2.2. La colaboración solidaria (II): la coordinación económica

Además, según las posibilidades de los partidos socialdemócratas de acceder al gobierno se consolidaron y los sindicatos consiguieron alcanzar acuerdos con los patronos sobre las condiciones y remuneraciones del trabajo, una nueva área de colaboración entre ellos apareció en escena, sobre todo a partir de 1945. Consistía en la coordinación de las actuaciones de los sindicatos en el ámbito de las relaciones laborales con las políticas económicas de los gobiernos a fin de que éstas últimas diesen unos resultados en términos de empleo, inflación y crecimiento que más satisficieran a ambos (Cameron 1984:155; Howell y Daley 1992-93:5). La "coordinación económica" constituía así un estilo particular de elaboración de políticas públicas donde los problemas socioeconómicos se identificaban, y resolvían, de un modo omnicomprensivo y agregado (Lehmbruch 1979 y 1984; Regini 1990). Dicha elaboración podía plasmarse en diferentes clases de pactos, pero los cuales entrañaban siempre un acuerdo global, de

ámbito estatal, donde los participantes se intercambiaban contrapartidas sobre temas muy diversos[8].

Este estilo coordinado de elaboración de políticas públicas se le ha conocido también en la literatura especializada por "acción concertada" o "concertación social", y representaba una variedad dentro de ese conjunto más amplio de estructuras y arreglos mediante los cuales las organizaciones de intereses se incorporaban al proceso político conocido por el término de "neocorporativismo" (Panitch 1980:173; Padgett y Paterson 1991:190; Pontusson 1992:23; Maravall 1997:168, Armingeon 1997:580). Aunque no existe realmente un consenso entre los investigadores sobre el significado último de este término[9], Lehmbruch (1984:62,63) hizo así hincapié en distinguir dentro del neocorporativismo la simple consulta y colaboración de los grupos de interés con los gobiernos en políticas concretas[10] de una cooperación al unísono e intersectorial entre los grupos de interés y

[8] Podían consistir en acuerdos entre los agentes sociales, sin la presencia explícita del gobierno, podían ser exclusivamente entre gobiernos y sindicatos; o podían dar lugar a un pacto tripartito entre el gobiernos, sindicatos y patronal.

[9] Para algunos autores constituía un nuevo sistema político y económico por derecho propio -ya fuese una forma de Estado diferente, un modo de producción o un sistema de intermediación de intereses- mientras que para otros era más bien un conjunto más o menos nuevo de estructuras y/o acuerdos dentro del sistema económico y político vigente (Panitch 1980:161). Tampoco hay acuerdo sobre la finalidad de dicha incorporación al proceso político por parte de los grupos de interés. Algunos autores como Katzenstein (1985:32) han puesto el acento en la idea de colaboración de forma voluntaria y a nivel nacional, aunque fuese de un modo informal, entre los interlocutores sociales y éstos a su vez con el Estado con el fin preciso de resolver conflictos políticos. De ahí que el "neocorporativismo" tuviese tan buena prensa en países de reciente democratización como era el caso de España a fines de los 70 y comienzos de los 80. Para otros, como Panich, el fin no era tanto una resolución pacífica de los conflictos como "contener la fuerza económica y política de la clase trabajadora", esto es, el neocorporativismo "es una estructura política diseñada para integrar la clase trabajadora organizada en el estado capitalista" (Panitch 1980:174,175).

[10] Lo que Lehmbruch (1984:62) denominó neocorporativismo sectorial.

los gobiernos sobre el conjunto de las políticas, como es en el caso de la coordinación económica[11].

Ahora bien, en esta coordinación de actividades entre los partidos y los sindicatos socialdemócratas los primeros llevaban a cabo una estrategia económica determina, la representada por las políticas económicas keynesianas, y los segundos una estrategia en las relaciones laborales precisa: la negociación colectiva centralizada. En cuanto a los partidos socialdemócratas, ya durante el período de entreguerras, les había atraído la idea de una economía administrada por tecnócratas en coordinación con los grupos de interés (Lehmbruch 1984:63). Su pensamiento económico tenía como premisa fundamental que, para evitar pérdidas de bienestar derivados de los derechos de la propiedad privada, bastaba con que el Estado interviniese activamente en la regulación de los mercados y en la redistribución de la renta sin llegar a poner en cuestión la eficiencia de los cálculos de beneficios de los agentes económicos privados (Bernstein 1990 [1922]:162[12]; Scharpf 1992:42; Przeworski 1995:230). La teoría económica de Keynes vino a dar cuerpo teórico a sus planteamientos ideológicos y permitir su aceptación o permisividad por los partidos conservadores y los empresarios (Scharpf 1992:44). Los planteamientos keynesianos encajaban bien con la idea de dirección económica de los socialdemócratas al plantear que la economía de mercado gobernada exclusivamente por el sistema de precios relativos tendía a entrar en crisis y, peor aún, a no salir de ella por sí sola. Así, por ejemplo, señalaban que, a causa del papel determinante del mercado de capitales sobre el mercado de bienes y dado que en el primer mercado la inversión productiva creadora de puestos de trabajo tenía que competir con las múltiples ofertas de otras inversiones rentables (en los mercados de divisas, empréstitos públicos, seguros, etc) o con la posibilidad de que el dueño del capital lo mantuviese en forma de medios líquidos, era

---

[11] La diferencia entre una cooperación "multilateral" entre sindicatos, empresarios y gobiernos y otra "bilateral", y centrada en una política concreta, también ha sido señalada por otros autores como Panitch (1980:173) y Pontusson (1992:23).

[12] "En una buena ley industrial puede haber más socialismo que en la nacionalización de centenares de empresas y fábricas" (Bernstein 1990 [1922]:162).

posible que se produjese una situación de vacío de inversiones productivas. Quedarían así restringidos la producción y el empleo, y con este último los ingresos, las posibilidades de consumo de las economías domésticas y la recaudación del Estado. En resumidas cuentas, se producirían equilibrios en situación de subempleo donde ni con una bajada de los salarios reales se podría esperar una disminución segura del desempleo masivo (Scharpf 1992:42). Por el contrario, si resultaba que la demanda agregada determinaba el nivel de actividad económica y el empleo, el gobierno podría potenciarlos mediante políticas monetarias y fiscales que actuasen sobre la demanda (Boix 1996:30). El empleo sólo se recuperaría así gracias a la intervención del Estado, conclusión del agrado de los socialdemócratas[13]. En definitiva, los socialdemócratas creían haber conseguido un capitalismo a la vez eficiente y libre de crisis, controlado con suave mano por un sistema político democrático al influir sobre las condiciones marco de la economía global. Además, su eficacia económica permitiría la realización de políticas sociales y una distribución más justa del bienestar generado. Se conseguiría así la extensión del sistema de seguridad social, la igual participación de todos en las prestaciones de un sistema educativo y un sistema de sanidad de calidad suficiente y la mejora de la infraestructura pública, y el pleno empleo (Scharpf 1992).

Sin embargo, los economistas keynesianos creían que se conseguiría mejores resultados si se administraba la economía en coordinación con los grupos de interés económicos, es decir si se emprendía una coordinación económica (Cameron 1984). La razón de ello estribaba en que el instrumental (fiscal y monetario) propugnado por los keynesianos tenía un efecto indirecto y global sobre la actividad económica al ejercer su influencia sobre las decisiones microeconómicas de los agentes económicos por vía de estímulos positivos y negativos y, sobre todo, por vía de un cambio de

[13] El "matrimonio" entre keynesianismo y socialdemocracia ocurrió en la mayoría de los países occidentales tras la Segunda Guerra Mundial. En el período de entreguerras los partidos socialdemócratas que tuvieron experiencias de gobierno actuaron más bien según el planteamiento de la economía clásica para solucionar los problemas económicos (Boix 1996:30).

las condiciones marco globales (Scharpf 1992:50). Este control del proceso económico daría mejores resultados si, en vez de emplear estímulos negativos, los agentes colaborasen de buen grado (Lehmbruch 1984:64).

En el caso de los sindicatos se trataba, sobre todo, de coordinar sus políticas salariales con las políticas fiscales y monetarias para que éstas redujesen el desempleo sin crear inflación (Panitch 1980:174, Lehmbruch 1984:63, Lange 1984:98, Howell y Daley 1992-93:5). Con objeto de salir de las crisis económicas, la teoría keynesiana confiaba en fomentar la demanda agregada mediante políticas expansivas. Así aumentaría la producción y, consecuentemente, se reduciría el desempleo. Pero los trabajadores mejorarían entonces su fuerza de mercado y presionarían por mayores incrementos salariales que los empresarios trasladarían a los precios[14]. Los gobiernos tendrían, entonces, que aplicar políticas restrictivas para controlar la inflación, lo que perjudicaría el crecimiento económico (Scharpf 1992)[15]. Se producía así un círculo vicioso de desempleo-expansión-pleno empleo-inflación-crisis-desempleo conocido por el nombre del "stop-go" (Howell y Daley 1992-93:5). Algunos autores concluyeron que se podría, por tanto, elegir entre tener más o menos paro, y más o menos inflación cuya elección dependería del color político del gobierno en cuestión. Pero otros autores encontraron a partir de estudios posteriores que, al menos hasta los años 80, había países donde se conseguía tener a la vez un reducido nivel de desempleo y una baja inflación -mientras que otros tenían mucho desempleo y alta inflación (Cameron 1984:150). La explicación ofrecida por Cameron era que en algunos países los sindicatos, a pesar de tener mayor fuerza de mercado debido al bajo desempleo, no presionaban por altos incrementos del salario nominal, evidenciado en un bajo nivel

[14] El conocido estudio de Phillips realizado en Inglaterra observaba que había un relación de intercambio entre tasa de desempleo y la tasa de variación de los salarios nominales (Cameron 1984:148; Gujarati 1992:16).

[15] También podía ocurrir que la presión salarial condujera directamente a la recesión si eliminaba los beneficios empresariales.

de huelgas[16], pues estaban renunciando a un mayor incremento del salario nominal a cambio de un mayor empleo. Por el contrario, otros sindicatos, a pesar de un elevado nivel de desempleo, presionaban para conseguir incrementos salariales a pesar del paro existente y provocando inflación (Cameron 1984:155 y ss).

La generalización del desempleo y la inflación con la crisis de mediados de los años 70 (la estanflación) vino a reforzar la necesidad de coordinar las políticas económicas y las acciones sindicales. Si resultaba que el desempleo venía producido por una falta de demanda y la inflación por un incremento de los costes de producción, se podría luchar contra lo primero mediante políticas monetaria y fiscal expansivas, mientras que la inflación se combatiría con la moderación salarial. Esta combinación de políticas económicas y actuaciones sindicales tendría mejores resultados en términos de empleo e inflación que centrarse exclusivamente en combatir el desempleo con políticas expansivas, que provocarían más inflación, o hacerlo contra la inflación con políticas restrictivas, las cuales provocarían más paro. La coordinación de políticas y acción sindical era igualmente beneficiosa para los sindicatos porque, aunque no consiguieran un aumento del salario real, por lo menos conseguirían asegurar los puestos de trabajo y reducir el paro[17]. En conclusión, dado que en caso de oscilaciones coyunturales de la demanda global la mitad del instrumental necesario para regular la coyuntura económica dependía de la política salarial de los sindicatos:

"desde la perspectiva de la política económica todo habla[ba] a favor de la necesidad de una estrecha coordinación entre el Estado y los

[16] De hecho Camerón veía una correlación positiva entre bajo nivel de huelgas y bajo desempleo.

[17] La bondad de esta combinación de políticas, continuaría incluso si el desempleo estaba provocado, no por falta de demanda, sino por falta de puestos de trabajo, y la inflación por exceso de demanda. La moderación salarial concertada podría hacer disminuir la presión de los costes y elevar las ganancias empresariales, lo que se esperaba que redujese el desempleo, mientras que las políticas fiscales y monetarias reducirían la demanda de una forma menos drástica que según la receta monetarista (Scharpf 1992:59,60).

> sindicatos, en la que ambas partes [pusiesen] en relación entre sí en términos de complementariedad las decisiones que est[uvisen] a su alcance para conseguir en común un mejor resultado global que el que cada una de las partes podría conseguir por sí sola" (Scharpf 1992:60).

Ahora bien, esta coordinación al más alto nivel entre las acciones sindicales en favor de la moderación salarial y las políticas keynesianas entrañaba para los sindicatos que desarrollasen una estrategia concreta en las relaciones laborales: una negociación colectiva centralizada donde los sindicatos acordasen con los empresarios y gobiernos unos incrementos salariales para los trabajadores compatibles con la obtención de beneficios en las empresas y la creación de puestos de trabajo. Igualmente se les podría compensar con un mayor gasto social ("salario social") obtenible gracias al esperado crecimiento económico.

La "coordinación económica" constituyó así un paso más en la colaboración entre los partidos socialdemócratas y los sindicatos. Ya no se trataba solamente de que las organizaciones sindicales accediesen al ámbito político mediante la cooperación con los partidos socialdemócratas, ni de que éstos encuadrasen a los trabajadores por mediación de los sindicatos, es decir proceder a ese reparto de tareas según ámbitos más propios para alcanzar los fines compartidos. Ahora, además, partidos y sindicatos coordinarían las actividades realizadas en sus ámbitos "más propios" (la política en el caso de los partidos, las relaciones laborales en el caso de los sindicatos) para así ayudarse en el éxito de unas políticas que más convendrían a unos y otros (en vez de practicar un estilo decretista de gobernar, en el caso del partido, o, en el caso del sindicato, presionar en los centros de trabajo). Los partidos socialdemócratas se comprometían así a emplear cuando llegasen al poder las políticas económicas que favoreciesen la creación de empleo, las cuales hasta los años ochenta se pensaban que eran las keynesianas. Los sindicatos, por su parte, se comprometían a la moderación salarial para evitar recalentamientos inflacionistas de la economía, para lo cual aceptarían una negociación colectiva centralizada. Unos y otros ponían de este modo en relación una clase de política económica, la

keynesiana, con una determinada estrategia de acción sindical en las relaciones laborales, la negociación colectiva centralizada. Pero, en cualquier caso, el éxito de esas políticas que se emprenderían gracias a la coordinación económica tenía que compensar las restricciones estratégicas que suponían para la actuación de las organizaciones en sus ámbitos más propios de actuación.

En conclusión, dentro de los partidos y sindicatos socialdemócratas se llegó a pensar que su colaboración *solidaria* representaba un recurso crucial, incluso imprescindible, para alcanzar sus objetivos principales, desde los más instrumentales (como eran ganar las elecciones en el caso de los partidos o poder negociar convenios colectivos en el de los sindicatos) hasta los más finales. Ahora bien, se diferenciaba de la modalidad de relaciones por intereses concretos, no sólo en la creencia de compartir los mismos idearios socialistas, sino por conllevar un complejo diseño estratégico basado en el reparto de ámbitos preferentes de actuación para cada una de las organizaciones, en la colaboración mutua y en la coordinación de las actividades que realizasen en sus ámbitos más específicos. Mediante este diseño el sindicato actuaría en política principalmente por mediación de su partido de referencia, pero igualmente, y sobre todo cuando su partido hermano accediese a las tareas de gobierno, coordinaría también sus actuaciones en la negociación colectiva con las políticas económicas del Gobierno. Por su parte, el partido actuaría en el ámbito social a través del sindicato y coordinaría sus políticas gubernamentales, cuando accediese al poder, con las actuaciones sindicales en la negociación colectiva. Se engarzaba así la actuación política del sindicato con la actuación social del partido así como la acción sindical en la negociación colectiva con las políticas públicas. Pero en última instancia la bondad de dicho diseño estratégico dependería de que los beneficios que se esperasen obtener de su ejecución compensasen las restricciones estratégicas que entrañaban. ¿Le compensaba así al sindicato los beneficios que obtenía del partido hermano a cambio de la estrategia sindical que tenía que practicar en las relaciones laborales y de abstenerse de participar directamente en política? ¿Le compensaba al partido socialdemócrata la contribución que hacía el sindicato a sus éxitos

electorales a cambio de la actividad política que tenía que realizar en su favor, y en el caso de que estuviese en el gobierno, pactar con él sus políticas gubernamentales? La respuesta que diese cada organización sobre la cuestión de mantener o no las relaciones de solidaridad dependería en ultimo término de la contestación que diese a estas preguntas.

1.2.3. Las relaciones partido-sindicato de solidaridad, la coordinación de actividades y el neocorporativismo

No debemos, sin embargo, deducir necesariamente que los partidos políticos y los sindicatos mantuviesen relaciones de solidaridad porque se pueda constatar que entre ellos se intercambiaban servicios o coordinaban sus actividades. Como han señalado Lange y Ross (1990:304), el principio de que hay que "premiar a los amigos y castigar a los enemigos" es enteramente compatible con los esfuerzos del sindicato por alcanzar sus objetivos gracias a sus relaciones con los partidos políticos. El éxito, sin embargo, de estas dos clases de colaboración reforzaría a las relaciones solidarias, pues confirmaría la creencia de que la colaboración entre sindicatos y partidos políticos constituía la estrategia necesaria, o la más eficaz, para alcanzar sus objetivos tanto finales como instrumentales. Pero, a su vez, las relaciones solidarias entre partidos socialdemócratas y sindicatos también habrían de reforzar este estilo de formación de políticas públicas (Lehmbruch 1979:168 y 1984:74). El Gobierno mantenía unas relaciones privilegiadas con un actor necesario para el éxito de sus políticas, y el sindicato contaba con un Gobierno dispuesto a llevar a cabo las políticas que fomentasen el empleo, el gasto social y los intereses sindicales.

Ahora bien, el neocorporativismo -entendido tanto en un sentido amplio como organización de intereses y su incorporación al proceso político como en su versión más concreta de constituir un

estilo peculiar de elaboración de políticas públicas- ampliaba a los sindicatos las vías para intervenir en el ámbito político. En primer lugar, las prácticas neocorporativas, en el primer sentido, podrían suponer un interesante aliciente para que los sindicatos perdiesen interés en los partidos políticos, pues podrían acceder y tomar parte directamente en las actividades de los gobiernos, compartiendo con estos últimos el diseño y ejecución de las políticas, sobre todo si contaban con la fuerza suficiente para conseguir este acceso por sus propios medios[18]. Esta nueva estrategia de "acción directa" en el ámbito político se reforzaría si, además, resultase que los partidos políticos contasen poco en la elaboración de las políticas públicas. Pero, sin llegar al extremo de pensar que la colaboración con los partidos políticos es siempre fútil, estas relaciones se reducirían a ser un recurso más a tener en cuenta, útiles según los casos; pero no imprescindibles. En pocas palabras, la apertura de la vía neocorporativa para acceder a la toma de decisiones políticas podría suponer un aliciente para que los sindicatos mantuviesen exclusivamente relaciones por intereses concretos con los partidos políticos.

Pero, en segundo lugar, si ese estilo coordinado de elaboración de políticas públicas proporcionaba además tan buenos resultados, ¿por qué no iban a intentar practicarlo los gobiernos conservadores una vez que se hubieran percatado de ello? La respuesta que se suele dar desde los estudios de la socialdemocracia consiste en atribuir una preferencia de los conservadores por el libre mercado, aunque aumentase el desempleo (Scharpf 1991:230). Pero, si los gobiernos conservadores también ofrecían a los sindicatos la posibilidad de entrar en estos intercambios, ¿qué razones tendrían los sindicatos para seguir dando su apoyo explícito a los partidos socialdemócratas? Ganase quien ganase, quien saliese de las urnas buscaría su apoyo para tener baja inflación y bajo desempleo por lo cual lo lógico sería que los sindicatos se ahorrasen el coste de apoyar a un partido en unas elecciones.

---

[18] En este sentido se ha planteado que el neocorporativismo podría estar de hecho poniendo en cuestión y marginando los mecanismos democráticos de representación electoral, compitiendo así las organizaciones de interés con los partidos políticos.

En consecuencia, si los partidos socialdemócratas querían seguir contando con el apoyo exclusivo de sus sindicatos para ganar las elecciones tenían que ofrecerles unos bienes al menos igual de interesantes que los que los sindicatos pudieran conseguir de otros partidos políticos o directamente a través de los canales neocorporativos (por ejemplo, mayor gasto social, favorecer más la actividad sindical, etc) o la relación tenía otros motivos como podía ser que, dado que muchos sindicalistas eran miembros de los partidos socialdemócratas, el romper la exclusividad hubiera causado problemas internos en ambas organizaciones[19]. Pero parece claro que, en cualquier caso, los beneficios que proporcionaba la coordinación económica representaban desde el lado sindical razones para apoyar a un gobierno concertador, y no tanto a un gobierno socialdemócrata; que esto coincidiese dependía de la actitud de los otros partidos con respecto a esta coordinación[20].

1.3. Las condiciones para el éxito de la colaboración solidaria

Acabamos de ver en qué ha consistido la colaboración socialdemócrata entre partidos y sindicatos y las razones de creer que era la estrategia necesaria, o la mejor, para alcanzar sus objetivos. Pero esta colaboración solidaria no dio los resultados esperados en todos los países de Europa, ni llegó incluso a establecerse entre las organizaciones socialistas en los países meridionales donde se celebraron elecciones libres.

---

[19] De ahí que un estudio "completo" de las relaciones partido-sindicato debería incorporar el enfoque de estas relaciones como "redes", algo que está fuera del alcance de este trabajo.

[20] Así el propio Scharpf nos recuerda que "tras la victoria electoral de los socialdemócratas [suecos] en el otoño de 1982, los partidos de la oposición burguesa se inclinaron cada vez más a posiciones conservadoras-monetaristas en política económica, y con ello reforzaron hasta tal punto la posición negociadora de los socialdemócratas, políticamente débiles frente a los sindicatos, que pese a todas las dificultades intrasindicales pudo imponerse la moderación salarial en el año electoral de 1985" (Scharpf 1991:231).

En primer lugar, no todos los sindicatos europeos realizaron ese papel de encuadrar y movilizar a los trabajadores en favor de los partidos socialdemócratas como el intercambio político-electoral presuponía. Esto fue conseguido principalmente en los países escandinavos (Esping-Andersen 1985:119-120) y en Austria, si bien en este país Merkel puntualiza que este servicio quedó algo atenuada por las líneas de conflicto confesionales. En Gran Bretaña, Alemania Occidental, Holanda y Bélgica, la movilización electoral de los sindicatos en favor de la socialdemocracia fue menos intensa (Padgett y Paterson 1991:178). Finalmente, en los países del sur de Europa, los sindicatos se movilizaron electoralmente en favor de los comunistas y, con menor intensidad, de los democristianos (Merkel 1995:92,93). Los partidos socialistas mediterráneos estuvieron así fuera del Gobierno por la mayor parte del tiempo, o eran socios menores de coaliciones dirigidas por los conservadores. Las organizaciones sindicales, por su parte, sufrieron mayores dificultades que sus correligionarias del norte de Europa para actuar en el ámbito laboral.

En segundo lugar, tampoco en todos los países donde se practicó la coordinación económica ésta dio los resultados esperados. Un estudio realizado por Cameron (1984) exponía que hasta principios de los 80 los estados con frecuentes gobiernos de izquierdas venían asociados a bajo nivel de desempleo, bajo nivel de actividad huelguística y modestos incrementos de salarios monetarios y precios, mientras que los estados gobernados por partidos conservadores venían asociados con una mayor actividad huelguística, mayores incrementos de salarios monetarios y precios, y mayor desempleo. Sin embargo existían casos claros de desviación de esta asociación como eran Gran Bretaña y Dinamarca, con mayores tasas de desempleo de lo que hubiera sido de esperar dada la frecuencia del control de los gobiernos por la izquierda, y Japón y Suiza, con mucho menor paro de lo que hubiera sido de esperar dada la poca fuerza que allí tenía la izquierda. La conclusión de Cameron era que no existía una relación lo suficiente fuerte como para inferir que un control del gobierno por la izquierda suponía una condición necesaria y suficiente para tener pleno empleo y baja inflación

(Cameron 1984:163). Tenían que existir otros factores que ayudasen a explicar el diferente comportamiento de las economías.

Estos diferentes resultados dentro de la familia socialdemócrata, tanto en los políticos como en los económicos, han sido explicados por (a) las características organizativas del movimiento sindical (Lehmbruch 1979, 1982 y 1984; Olson 1982; Cameron 1984; Przeworski y Sprague 1986; Scharpf 1992) y/o (b) las estructuras económicas de los países (Pontusson 1992). Pero, en cualquier caso, las condiciones que conducían a que los sindicatos pudiesen ayudar a los partidos socialdemócratas a ganar las elecciones y mantenerse en el poder eran las mismas que posibilitaban la coordinación económica (Cameron 1984; Howell y Daley, 1992-93).

Con respecto a las características de los movimientos sindicales, se ha señalado, en primer lugar, que aquellos que estuviesen estructurados en organizaciones fuertes, con una amplia afiliación, podían ofrecer a los partidos socialdemócratas una mayor base de apoyos para ganar elecciones (Merkel 1995:92). Igualmente estos sindicatos estarían más dispuestos a cooperar en el éxito de las políticas económicas, pues estarían seguros de que los efectos de sus acciones, positivos o negativos, repercutirían en sus propios afiliados (Olson 1982:41-53; Scharpf 1992:232). Otros autores han destacado más bien cómo estaban organizados los movimientos sindicales (Pontusson 1992). Así, los sindicatos que se encontrasen concentrados y centralizados podían homogeneizar los diversos intereses de los trabajadores y disciplinar a aquellos que estuviesen tentados por las ventajas de perseguir intereses particulares (Lehmbruch 1982; Przeworski y Sprague 1986:75)[21]. Estas características favorecían además la negociación colectiva centralizada que la coordinación económica exigía, especialmente en época de expansión económica, pues impedían que los trabajadores

[21] Cameron (1984:166-67) encontró así que había una correlación entre la estancia de los partidos socialdemócratas en los gobiernos y sindicatos con alta afiliación, unidad del movimiento sindical y centralización del mismo. Por el contrario, allí donde los sindicatos estaban divididos y enfrentados, practicando cada uno su propia estrategia sindical, toda apelación a unos intereses comunes de los trabajadores quedaba desmentida a ojos de los trabajadores por la práctica real.

presionasen por incrementos salariales en los centros de trabajo, convirtiendo en papel mojado los compromisos acordados por los líderes sindicales de las cúpulas nacionales (Regini 1984, 1990; Lange 1984; Scharpf 1992)[22]. Los reveses electorales de los socialistas en el sur de Europa en los años cincuenta y sesenta, así como los intentos fracasados de establecer alguna clase de coordinación económica en aquellos países, reafirmaron estas conclusiones sobre la relevancia de la organización del movimiento sindical. Allí los socialistas tenían que competir con los comunistas y los democristianos por el apoyo de los trabajadores, y al mismo tiempo, los sindicatos, en general, no estaban ni organizativamente equipados, ni ideológicamente predispuestos para llegar a acuerdos con los empresarios o participar en relaciones tripartitas con ellos y los gobiernos (Padgett y Paterson 1991:177).

Otros estudios han señalado, sin embargo, que las características de los movimientos sindicales no fueron producto de una opción consciente de sus miembros y dirigentes, sino de las estructuras socioeconómicas del capitalismo avanzado en que se encontraban sus sociedades (Pontusson 1992; Howell y Daley 1992-93). La clase trabajadora industrial de finales del siglo XIX se había caracterizado por una profunda división entre los trabajadores cualificados y los no cualificados. Por el contrario, el desarrollo del sistema de producción fordista[23] incrementó el peso numérico y el sentido de solidaridad de

---

[22] Se ha señalado además que si algunos trabajadores no seguían las instrucciones de sus dirigentes, surgirían agravios comparativos entre quienes aceptaron la contención salarial y quienes incrementaban sus salarios. La estabilidad de la organización sindical se vería así afectada, bien porque los líderes sindicales en los centros de trabajo, llevados por el descontento de sus bases, reaccionarían en contra de los acuerdos aceptados por los dirigentes nacionales, bien porque los trabajadores "votarían con los pies" abandonando la organización. Estos peligros, sin embargo, se reducirían en momentos de crisis económicas pues los trabajadores, sobre todo los que trabajasen en *pequeñas y medianas empresas* y en el sector privado, no estarían tan interesados en incrementar su salario real como en mantener su puesto de trabajo.

[23] El sistema fordista se habría caracterizado por (1º) el principio de que la dirección empresarial debía minimizar el poder discrecional de los trabajadores en la

los trabajadores más fácilmente encuadrables por los sindicatos (los obreros, preferentemente varones y semicualificados). Igualmente, gracias a ser un sistema que se caracterizaba por la concentración geográfica y organizativa de la producción industrial el fordismo incentivó la concentración y centralización de las organizaciones sindicales, y facilitó, además, la agregación de los intereses de los empleados al restringir la negociación colectiva a asuntos cuantificables tales como salarios, otras rentas no salariales, y condiciones de trabajo.

Asimismo, no parece accidental que la expansión de este sistema de producción estuviese ligada a los esfuerzos activos de los gobiernos para limitar las fluctuaciones de demanda agregada, practicando políticas contracíclicas, pues el éxito del sistema dependía de una demanda estable y estandarizada de productos (Piore y Sabel 1984). Se formaba así un "círculo virtuoso" de crecimiento económico: los incrementos de productividad permitían un crecimiento del salario real, lo que alimentaba una creciente demanda, la cual a su vez favorecía mayores beneficios e inversión, que resultaban de nuevo en crecimiento de la productividad; y el ciclo volvía a empezar (Howell y Daley 1992-93:5). Además, según Pontusson (1992:27), una de las formas que tenían los gobiernos para estimular y estabilizar la demanda agregada era mediante la expansión de políticas sociales, pues éstas la incrementaban así como fomentaban la producción de bienes de consumo de masas, y su aplicación tenía efectos contracíclicos. Pontusson cerraba el argumento de Scharpf: si para este último el éxito de las políticas de gestión de demanda permitió la expansión del Estado del bienestar; para Pontusson, la expansión del Estado de bienestar favoreció a su vez el éxito de las políticas de gestión de la demanda. En pocas palabras, el fordismo y el Estado de Bienestar estaban así íntimamente ligados y se reforzaban mutuamente.

---

producción (2º) el incremento de la productividad gracias a la división del trabajo; y (3º) la mecanización de la producción (Pontusson 1992:25).

2. Desafíos a las relaciones, quiebra de modelos y búsqueda de alternativas

2.1. Transformación y crisis de la colaboración solidaria: sus efectos

En los años ochenta y noventa la mayoría de estos intercambios de bienes y coordinación de actividades entre los partidos socialdemócratas y los sindicatos se han mostrado más difícil de mantener, e incluso en algunos casos se han abandonado, tanto en los países donde se establecieron por vez primera (en el sur de Europa) como en aquellos donde se habían venido practicando con éxito (en el Norte). Su fracaso y abandono en los primeros países *parece* ser fácilmente explicable: sencillamente carecerían de las condiciones necesarias para mantenerlos. Mayores interrogantes presentan aquellos países donde hasta entonces sí habían tenido éxito, principalmente en Escandinavia. Su inesperado revés sugiere que esas condiciones vistas tampoco se dan ya en el norte de Europa.

Así, con respecto al intercambio "político-electoral", los estudios realizados[24] hacen hincapié en que el apoyo expreso de los sindicatos a los partidos socialdemócratas ya no constituye ese "activo" para ganar elecciones[25]. Los partidos socialdemócratas o laboristas en Gran Bretaña (en 1987), Noruega (en 1989), Dinamarca (en 1990) y Suecia (en 1991) perdieron sus respectivas elecciones a pesar del apoyo explícito de sus confederaciones sindicales. Se ha señalado así como causas, por un lado, el desarrollo de unas nuevas clases medias, la correlativa pérdida de peso tanto en términos relativos como

[24] Como Merkel (1995) ha señalado, estos estudios tienen un marcado sesgo noreuropeo, pues han surgido a partir de las sucesivas derrotas electorales del SPD, del Partido Laborista británico, y de la pérdida de la hegemonía por parte de los partidos socialdemócratas escandinavos. Para algunos autores, los partidos socialistas sureuropeos sencillamente no son socialdemócratas: así, aunque éstos ganasen elecciones en los años 80 y 90, la socialdemocracia *de verdad* seguiría electoralmente en crisis.

[25] Un ejemplo palpable lo mostraron las elecciones noruegas de 1989. La confederación sindical noruega LO apoyó activamente al DNA, pero este partido tuvo su peor resultado electoral desde 1945.

absolutos de los trabajadores industriales, sobre todo de aquellos sectores que constituían las bases tradicionales de los sindicatos, y el surgimiento o reforzamiento de intereses opuestos entre distintas categorías de trabajadores que dificultarían organizarlos como clase, homegeneizar sus intereses y obtener sus votos. Los sindicatos movilizarían así un sector cada vez menor del electorado y, además, con crecientes dificultades. Se vendría a añadir a esto, por otro, procesos de desalineamientos electorales y deshielo de *cleavages* tradicionales y la aparición de otros nuevos que forzarían a competir a los partidos socialdemócratas de formas nuevas. En este caso, los vínculos de los partidos con los sindicatos podrían convertirse incluso en un "estorbo electoral" si dificultasen atraerse el apoyo de crecientes colectivos sociales interesados en cuestiones de autonomía individual y de grupo, de participación política, de protección del medio ambiente que en los clásicos beneficios del *bread-and-butter* buscados por los sindicatos (Merkel 1995)[26]. De hecho, en los partidos socialdemócratas se fue percibiendo a los sindicatos como un obstáculo que les impedía adaptarse a las nuevas demandas sociales[27].

Ahora bien, si los sindicatos ya no proporcionan esa base firme de votos o anclaje -al cual sumar los votos de colectivos sociales no identificados con la clase trabajadora tradicional- al mismo tiempo que la estrecha relación entre sindicatos y partidos socialdemócratas (ya sea en el sentido de colaboración, ya simplemente en el de

---

[26] En algunos países los sindicalistas vieron a los verdes como un peligro para la seguridad de los puestos de trabajo y la prosperidad de los trabajadores. Parece, sin embargo, que estos enfrentamientos fueron más agudos en algunos países (especialmente en la República Federal Alemana) que en otros (como, por ejemplo, Dinamarca).

[27] En Gran Bretaña las derrotas consecutivas de los laboristas empezaron a sugerir a finales de los años ochenta que los vínculos con los sindicatos, en vez de ser una fuente de estabilidad y fortaleza, se habían convertido en un "estorbo electoral". En la República Federal de Alemania, dado que una parte de los sindicalistas tenían una visión muy negativa de los Verdes ("reaccionarios en contra del crecimiento") no sería fácil que se diese un acercamiento entre éstos y el SPD sin un correspondiente distanciamiento entre el Partido socialdemócrata y los sindicatos (Padgett y Paterson 1991:218,219; Taylor 1993:135).

"redes") es resentida por esos nuevos colectivos sociales, ¿se deduce de esto que sean completamente innecesarios para que los partidos socialdemócratas puedan ganar y mantenerse en el poder? Al respecto Esping-Andersen (1985) ha sugerido que los resultados electorales de los partidos políticos no están determinados por los cambios estructurales o de valores de los electorados porque el éxito de sus políticas gubernamentales pueden crear bases sociales de apoyos. En este caso, dado el importante papel de los sindicatos para los éxitos de las políticas económicas, éstos seguirían constituyendo ese recurso de poder de la socialdemocracia desde el punto de vista electoral, incluso sin dar un apoyo expreso a los partidos en las elecciones. De ser así, el intercambio político-electoral se subsume en la coordinación económica. Pero ¿sigue siendo ésta viable?

Distintos autores han defendido que las condiciones que favorecían el éxito de la coordinación entre las políticas sindicales en las relaciones laborales y las políticas gubernamentales de los socialdemócratas, así como su eficacia, se habrían dejado igualmente de dar. En otras palabras que, ni las políticas keynesianas de los partidos socialdemócratas, aunque se coordinasen con las actuaciones sindicales en la negociación colectiva, servirían ya para promover el crecimiento económico y con él garantizar el pleno empleo y el Estado de Bienestar, ni los sindicatos estarían en condiciones de seguir negociando centralizadamente y de aceptar esa moderación salarial que se le pedía a cambio de más empleo y gasto social (Howell y Daley 1992-93:7). Ambos lados de la coordinación económica serían así progresivamente puestos en cuestión. Empecemos por el lado de las políticas económicas.

2.1.1. La crítica neoclásica al keynesianismo concertado y su quiebra

La economía neoclásica parte del principio de que la economía ideal de mercado tiende a un equilibrio en el que se hace uso de todas las posibilidades de producción, todos los que buscan trabajo encuentran empleo y todos los deseos realizables de consumo se cumplen. Para que esto sea así en la realidad, basta con que exista

competencia real y flexibilidad de precios relativos. Desequilibrios a más largo plazo es algo que queda "lógicamente" excluido. De ahí deducen que, si aun así se producen, es porque se han distorsionado las premisas de partida, es decir que, o bien se han impuesto en términos monopolistas precios y salarios no flexibles y demasiados altos, o bien la flexibilidad de la economía de mercado ha quedado neutralizada por intervenciones del Estado (Scharpf 1992:41). A partir de estas deducciones, los economistas neoclásicos han elaborado unas "recomendaciones" que ponen en cuestión no sólo las políticas keynesianas, y la intervención del Estado que llevan aparejadas, sino también el papel de los sindicatos en la actividad económica (Mjoset 1996:4). Por un lado, los economistas neoclásicos comienzan por exigir políticas de desregulación y fomento de la competencia por parte del Estado -por lo demás, éste debería intervenir lo menos posible en economía. Le añaden políticas de privatización y reducción de impuestos y gasto social, con una gran hostilidad hacia el crecimiento del sector público por sus supuestos efectos de "crowding out" e incentivos con efectos perversos. Por otro lado, muestran una gran hostilidad hacia los sindicatos y los arreglos neocorporativos de la clase que sean. Dentro de su lógica, los sindicatos no harían sino imponer, mediante el ejercicio de un poder monopolista, salarios por encima del equilibrio del mercado, lo que genera desempleo, inflación, pérdida de competitividad, caída de beneficios, etc. Por el contrario, sus recomendaciones para combatir el desempleo irían desde las llamadas a la responsabilidad en lo tocante a mantener las condiciones de funcionamiento de la economía global hasta propuestas para que de una vez quede quebrantado el poder "monopolista" sindical, en vez de buscar el acuerdo con ellos (Scharpf 1992:41).

Ahora bien, el éxito de las posiciones neoclásicas parece estar ligado al hecho de que a finales de la década de los 70 y principios de la siguiente el control keynesiano de la economía dejó cada vez más de funcionar en la práctica (Scharpf 1992:43; Rand Smith 1995:3). Si hasta entonces los gobiernos socialdemócratas, aliados con sindicatos centralizados, habían conseguido promover mayor crecimiento, más empleo, menores conflictos laborales e incluso menos inflación, ya no

era éste el caso en los ochenta. Los parcos resultados en términos de crecimiento económico y empleo de estas políticas llevaron a la mayoría de ellos a considerar que había que ocuparse más de mejorar la estructura productiva nacional y, dado que ya tenían en la mayoría de los casos amplios déficits, practicar políticas fiscales restrictivas, mientras que la política monetaria sería más o menos restrictiva en función de si consideraban necesario una política de moneda fuerte, o por el contrario confiaban todavía en las devaluaciones para ganar competitividad en los mercados internacionales.

Existen distintas interpretaciones sobre por qué los agentes económicos han dejado de responder como antes a las medidas fiscales y monetarias de los gobiernos. Se ha señalado que la creciente internacionalización de los mercados financieros provocó que las inversiones no productivas comenzaran a ofrecer rendimientos más seguros, rápidos y elevados que las productivas -perjudicando así a la producción y al empleo- porque la subida de los tipos de interés en países centrales obligaba a hacer lo mismo en el resto de países industrializados, a menos que se arriesgasen a sufrir fugas de capitales (Scharpf 1992:323). Se vino a añadir además otros cambios en la economía mundial como fue la expansión del comercio, la emergencia de los "países de nueva industrialización" como competidores en la exportación, o la consolidación de bloques regionales monetarios y comerciales (Rand Smith 1995:1). Otros autores ven más bien causas estructurales asociadas a un agotamiento del sistema de producción fordista y su progresiva sustitución por una nueva organización de la producción "posfordista" (Regini 1990)[28]. Los gobiernos tendrían así menor margen de maniobra en sus políticas macroeconómicas. Ahora no convendría tomar medidas económicas agregadas -sean fiscales, monetarias o salariales- para

[28] Ahora adquiere mayor peso la "especialización flexible" u organización de la producción y del trabajo consistente en su descentralización, la diversificación de los productos, el acortamiento de los tiempos de sustitución entre productos viejos y nuevos, la introducción de maquinaria flexible más adecuada a la mayor volatilidad y segmentación de los mercados, la descentralización de las grandes empresas y la organización de las pequeñas en departamentos industriales, el cambio de las relaciones con los proveedores, etc. (Piore y Sabel 1984).

solucionar los problemas económicos, pues no ayudan a que las empresas hagan frente a los cambios de demanda e, incluso -sobre todo los estímulos fiscales y monetarios expansivos- pueden conducir al deterioro de la balanza comercial -al fomentar la demanda, pero de productos extranjeros- o a graves problemas fiscales si no traen mayor crecimiento (Regini 1990:17; Merkel 1995:21). Por el contrario, las llamadas "políticas de oferta"[29] resolverán los problemas estructurales de las economías y traerán mayor crecimiento económico, mayor empleo y menor inflación.

2.1.2. Desafíos al sindicalismo socialdemócrata

La literatura sobre los cambios en las estructuras económicas de las sociedades industriales avanzadas señala igualmente que las causas que, en última instancia, hicieron ineficaces las políticas de gestión de la demanda también han afectado de algún modo a la estructura del movimiento sindical, de tal forma que los sindicatos ya no pueden seguir coordinando sus acciones en las relaciones laborales con las políticas de los socialdemócratas. En primer lugar, el incremento del paro parece que reduce la afiliación sindical por lo que cada vez habrá más trabajadores sobre los que cargar los costes de una posible acción sindical "inmoderada". En segundo lugar, se ha sugerido que precisamente esa profunda reestructuración económica hacia el "posfordismo", el incremento de bienes producidos en lugares de trabajo más pequeños y descentralizados, y el peso creciente del comercio a escala internacional habrían provocado profundos cambios en la composición del empleo en todas las economías occidentales reduciendo el peso de las bases tradicionales de los sindicatos dentro de las clases trabajadoras así como fragmentándolas en grupos con intereses divergentes y no fácilmente homogeneizables (Regini 1990; Pontusson 1992:35; Esteve Mora y Fernández Méndez de Andes 1993:35; Hyman 1994:14). Los trabajadores empleados en

[29] Políticas económicas que actúan sobre el lado de la oferta de la economía, es decir, sobre los factores de la producción con objeto de aumentar su cantidad y mejorar su eficiencia.

la manufactura habrían perdido peso en términos relativos y absolutos mientras se incrementaba el de los empleados en el sector servicios, particularmente en el sector público (Howell/Daley 1992-93:8). Se habrían polarizado las cualificaciones con el declive de los "semi-cualificados". Los intereses de los trabajadores del sector público chocarían con los de los empleados del sector privado, o los trabajadores en sectores en declive con los trabajadores en sectores en auge (Pontusson 1992:35). Al mismo tiempo, los estilos de vida y las exigencias personales de los trabajadores se habrían ido diferenciando (Howell/Daley 1992-93:8). Así, por ejemplo, sectores relevantes de los trabajadores tendrían un mayor interés por flexibilizar el tiempo y la prestación de trabajo. Los trabajadores con una cualificación más elevada buscarían una mayor polivalencia, movilidad, e iniciativa en la reglamentación de sus tareas fijadas por los empresarios y sindicatos. Ciertos grupos de trabajadores (jóvenes y mujeres) podrían estar más dispuestos a formas de horario elástico (Regini 1990:18). Estos cambios no implican necesariamente, sin embargo, que las bases de los sindicatos se reduzcan[30] sino que, al representar a trabajadores con intereses potencialmente divergentes, a las organizaciones sindicales les será más difícil una acción colectiva de ámbito nacional (Howell/Daley 1992-93:9; Regini 1990:18).

Finalmente se habrían dado ciertos cambios culturales entre los trabajadores (Pérez Díaz 1993:347-353). La "cultura" tradicional, "heterónoma", implicaba que los trabajadores se convencían de que su bienestar dependía de la entrega de su confianza y lealtad a la organización. Ahora, por el contrario, éstos presentarían una creciente "autonomía moral", es decir someterían a su propio juicio los de la organización y la abandonarán si el sindicato no

[30] Merkel considera que el aumento de afiliación producido en países como Bélgica, Finlandia, Italia, Noruega, Suecia, pone en cuestión la tesis de que las organizaciones sindicales se resienten de los cambios en la estructura del empleo, por el paso del sector secundario al sector terciario y la mayor presencia de las mujeres y los contratos a tiempo parcial en el mercado de trabajo. La afiliación sindical aumentó en los tres países europeos de la OCDE que cuentan con un mayor índice de mujeres ocupadas y de trabajadores a tiempo parcial. Austria es la única excepción del grupo (Merkel 1995:95).

proporcionase los valores, utilidades o beneficios, esperados. En resumen, los sindicatos, además de tener crecientes problemas en agregar intereses dada la heterogeneidad creciente de la clase obrera, eran ya menos capaces que en el pasado de garantizar el consentimiento de los trabajadores. En este sentido, tenemos que recordar, como ha señalado Pontusson (1992), que la descentralización de la negociación colectiva no fue deseada sólo por los empresarios sino, de hecho, el primer impulso partió de los propios trabajadores, ya a finales de los años 60, para ganar autonomía en los centros de trabajo, si bien al comenzar la crisis de los 70 sus líderes sindicales nacionales intentaron recentralizarla.

Resumiendo, para muchos investigadores, toda una serie de intensos cambios socioeconómicos tales como la diversificación de la estructura social y de los estilos de vida, la descomposición de las clases trabajadoras, el cambio de valores y el desarrollo de reivindicaciones postmaterialistas, el agotamiento del sistema de producción fordista, la internacionalización de las economías y de los mercados de capitales, impide que los partidos y sindicatos socialdemócratas puedan seguir intercambiándose servicios (por ejemplo movilizar a los trabajadores en favor de un partido concreto) y coordinando sus actividades (en concreto la acción sindical en las relaciones laborales con las políticas económicas), o conlleva que los mismos no faciliten los pasados éxitos de orden electoral y socioeconómico. En el intercambio político-electoral, tales transformaciones conducen a que ni el sindicato obtenga el pleno empleo y mayor gasto social ni al partido el apoyo explícito de los sindicatos le supone aquel activo electoral, pues los posicionamientos ideológicos de los sindicatos no determinan el comportamiento electoral de los trabajadores, o tal apoyo es incluso perjudicial al ahuyentar a nuevos colectivos sociales. En la coordinación económica, ni los sindicatos ofrecen ya la contención salarial en una negociación colectiva centralizada ni los partidos socialdemócratas políticas keynesianas expansivas. En el caso de estos últimos tendrían que preocuparse de favorecer al mercado, emprender reformas impositivas y políticas de austeridad fiscal y monetaria para controlar los déficits públicos y la inflación. Así, las nuevas condiciones

económicas, con sus constricciones presupuestarias, pondrían más difícil que los partidos socialdemócratas siguiesen proporcionando a los sindicatos uno de los bienes que se esperaba de estos partidos: un incremento del gasto social que compensase a los sindicatos su apoyo electoral y la contención salarial. Además, desde principios de los años ochenta, la mayoría de las economías capitalistas han experimentado crecimientos importantes, pero, a diferencia de los ocurrido con el crecimiento de posguerra, el aumento de la producción no ha venido acompañado de una reducción considerable de los niveles de desempleo que se alcanzaron con las crisis de los años setenta[31]. Y los países que han tenido más éxito en la reducción del empleo ha sido gracias a la expansión de empleos mal pagados, en el sector servicios y de naturaleza precaria. A los sindicatos, por su parte, les resulta cada vez más difícil mantener una negociación colectiva centralizada, condición necesaria de la coordinación económica, a menos que se arriesguen a sufrir graves "crisis de representación" con sus bases o a padecer enfrentamientos entre sindicatos de distintas ramas y/o cualificaciones. En otras palabras, cada organización evaluaría que su antiguo socio habría dejado de proporcionar anteriores bienes y servicios, o que éstos continuasen siendo necesarios para alcanzar sus objetivos. Esta constatación conduciría a que en una y otra organización se cuestionase severamente la creencia tradicional de que para alcanzar sus variados objetivos fuese necesario contar con la colaboración de su antiguo socio, o al menos que fuera la mejor estrategia, es decir se estaría cuestionando la modalidad solidaria de relaciones partido-sindicato. De ahí que Howell y Daley (1992/93:4) lleguen a plantear que esta modalidad de relaciones no fue sino el producto de "un período histórico concreto y de una forma determinada de crecimiento económico". Ahora bien, ¿qué efecto podría tener esto en la suerte de los partidos y sindicatos socialdemócratas?

---

[31] El hecho de que se hayan obtenido los mejores resultados en la lucha contra la inflación que contra el desempleo ha llevado a bastantes autores a pensar que una baja inflación sustituyó al pleno empleo como la prioridad de la política macroeconómica de los socialdemócratas a partir de los años ochenta (Taylor 1993:135).

Dada la importancia que tenía la colaboración solidaria -en su vertiente político-electoral y económica- para que los sindicatos y los partidos socialdemócratas alcanzasen sus objetivos políticos, sociales, y económicos, podría deducirse que la imposibilidad de seguir practicándola -o de que diera sus anteriores beneficios- significaba que unos y otros han comenzado el camino hacia su declive sociopolítico. No nos ha de extrañar así que ciertos autores, como nos recuerdan Merkel (1995) y Mjoset (1996:2), hayan sostenido que las modificaciones estructurales provocan que los partidos socialdemócratas, o no puedan ganar las elecciones, o -si llegan a hacerlo- tengan que renunciar a sus objetivos, políticas e instrumentos tradicionales[32]. Parecida suerte se les ha pronosticado al movimiento sindical. En este caso no se trataría del fin del sindicalismo como tal -pues probablemente los sindicatos de los sectores en auge podrían seguir presionando por incrementos salariales y/o mantener derechos adquiridos- sino de las confederaciones sindicales nacionales que pretendían defender los intereses del conjunto de la clase trabajadora en un sentido amplio (Pontusson 1992:3; Hyman 1994:112).

2.2. Críticas a las teorías estructuralistas

Sin embargo, no todos los investigadores están de acuerdo sobre el alcance y la intensidad de los cambios estructurales comentados, ni

[32] Esta predicción es naturalmente vista con agrado por conservadores y críticos de izquierda. Con respecto a estos últimos su postura, como señala Mjoset (1996:2) tiene cierta ambigüedad. Por un lado, se felicitan de los problemas crecientes que sufren sus, hasta ahora, arrogantes hermanos mayores si eso supusiese que aumentasen los apoyos para políticas más *genuinamente* socialistas. Pero al mismo tiempo, *ahora*, echan de menos una supuesta Edad Dorada de la Socialdemocracia donde todo era mejor. Esta crítica de la izquierda de la socialdemocracia se caracteriza desde un punto de vista económico por minusvalorar los problemas a los que se enfrenta la gestión keynesiana y considerar que (a) todas las "políticas de oferta" son iguales (igual de "perversas") y (b) su elección ha sido más o menos voluntaria (una "traición" más de los partidos socialdemócratas a añadir a su larga lista de "traiciones").

con que éstos sean en todos los casos las verdaderas causas del distanciamiento entre los partidos y los sindicatos, ni con las consecuencias sobre para sus éxitos, o sobre las posibilidades para seguir colaborando *solidariamente*[33]. Comenzando por la intensidad de los cambios macroestructurales, se discute hasta qué punto es cierto que el "fordismo" ha sido sustituido por el "posfordismo", que los intereses de los nuevos grupos sociales tengan que chocar necesariamente con los grupos que tradicionalmente se afiliaron a los sindicatos y votaron por los socialdemócratas, que una "nueva política democrática" haya substituido a la vieja, que haya que abandonar definitivamente las políticas económicas que gestionan la demanda agregada o que los sindicatos ya no estén capacitados para coordinar sus actuaciones con las políticas económicas de los gobiernos, o al menos que estos procesos estén ocurriendo de manera uniforme en todos los países europeos (Kitschelt 1994; Gunther y Montero 1994; Merkel 1995; Armingeon 1997). Pontusson (1992) considera así que puede que esté un poco exagerada la opinión de que la demanda de bienes producidos en masa esté saciada. Merkel, por su parte, sostiene que "[l]a evolución de la afiliación y del grado de centralización de los sindicatos de Europa occidental entre 1970 y 1985 no aporta ningún dato que pruebe una pérdida de capacidad de compromiso o de concertación" (Merkel 1995:98)[34].

---

[33] Merkel (1995) es así de uno de los autores más escépticos con respecto a que unos supuestos cambios estructurales y morales impidan que los partidos socialdemócratas ganen las elecciones o, si lo hacen, puedan llevar a cabo políticas distintas a las de los conservadores. El trabajo de Kitschelt (1994) critica la primera afirmación y el de Boix (1996) la segunda.

[34] Merkel (1995:99) tiene que reconocer con todo que sí se observa una ligera erosión de la capacidad ejecutiva de las cúpulas de la LO en Suecia y Noruega en los años ochenta, y, sobre todo, que el índice que utiliza para medir el grado de centralización sindical "probablemente no refleja bien la aparición del dualismo entre sindicatos de industria y sindicatos profesionales, o entre los sindicatos de un sector público protegido y los de un sector privado de orientación exportadora", es decir aspectos claves como para que la moderación salarial fracase ante comportamientos de tipo "free-riding".

En segundo lugar, aunque se acepte que efectivamente se han producido cambios estructurales en las economías y en los electorados europeos, no está tan claro que estos cambios fuercen necesariamente a que los dirigentes de los partidos y sindicatos socialdemócratas evalúen que no les interesa seguir colaborando porque no obtienen nada a cambio. Por ejemplo, en el intercambio político-electoral, diversos autores han cuestionado que todas las transformaciones sociales en los electorados europeos hagan perder el interés de estos partidos en contar con los apoyos de los sindicatos. Así, no parece que la disminución del peso de la clase trabajadora tenga que poner en cuestión la colaboración electoral entre los partidos y los sindicatos como algunas veces se sugiere. El estudio ya clásico de Przeworski y Sprague (1986) ponía de relieve, por el contrario, la importancia de las organizaciones sindicales para las victorias electorales de los partidos socialdemócratas, especialmente cuando éstos eran partidos *catch-all*, es decir no se proponían recoger exclusivamente los votos de los trabajadores. Su tesis central partía del supuesto de que el comportamiento electoral de los individuos era un efecto de las actividades de los partidos políticos, y en el caso de los de izquierda, de la importancia que diesen a la "clase" en sus estrategias electorales, es decir de la capacidad que tuviesen de encuadrar a los trabajadores haciéndoles ver que sus intereses comunes estaban por encima de los particulares y además eran distintos de los de otros individuos de otras clase sociales. Sin embargo, cuando los partidos "de clase" se dieron cuenta que los asalariados nunca llegarían a constituir la mayoría más uno del electorado, como así lo habían creído, recurrieron a sectores no incluibles en el concepto de clase trabajadora para ganar las elecciones, diluyendo para ello la importancia ideológica de la clase. El concepto de clase se debilitó entre los trabajadores, y, por tanto, éstos estuvieron más abiertos a las proclamas de los partidos liberales y conservadores. Así, los partidos socialdemócratas ganaban votos en la clase media, pero los perdían entre los trabajadores. Ahora bien, estos partidos podrían intentar llegar a votantes de clase media sin miedo a que los trabajadores "se desclasasen" si fueran los sindicatos quienes realizasen esta labor de hacer ver a los trabajadores sus

intereses en términos de clase (Przeworski y Sprague 1986:78)[35]. En pocas palabras, la disminución del peso electoral de los trabajadores podría de hecho reforzar el intercambio político-electoral desde el punto de vista de los partidos socialdemócratas porque éstos podrían atraerse votos de los nuevos grupos sociales mientras que los sindicatos les aseguraban el apoyo de las clases trabajadoras. Igualmente se ha defendido que los sindicatos seguirían estando interesados en apoyar a los partidos socialdemócratas aunque sólo fuera porque la opción que representan los partidos conservadores entraña políticas más restrictiva (Taylor 1993:150). Bien es cierto que las teorías anteriormente comentadas cuestionaban también que los sindicatos pudiesen seguir realizando esa tarea de encuadramiento y movilización de los trabajadores hacia un partido determinado.

2.2.1. ¿Una coordinación económica de nuevo tipo?: El corporatismo de oferta

Los debates suscitados por esta transformación de las relaciones partido-sindicato no acaban aquí. Los propios Howell y Daley (1992/93:14) planteaban que quizás podrían aparecer una nueva serie de intercambios y coordinación de actividades sobre "bases nuevas" de interés mutuo. Puede que existan todavía razones que confirmen que la colaboración entre partidos y sindicatos socialdemócratas es la mejor estrategia en los ámbitos político, económico y laboral. Esto ha sido especialmente discutido en el caso de la coordinación económica con motivo de las dificultades crecientes para seguir practicando políticas keynesianas. Ahora los socialdemócratas puede que tengan que olvidarse de una economía dirigida y administrada por tecnócratas concertada con los grupos de interés sindicales y patronales; y tendrían que promover más el mercado, llevar a cabo

[35] "[S]ocialist and other left-wing parties can afford to pursue supraclass strategies without losing much support among workers, since even if social democrats de-emphasize the salience of class in their electoral strategies, this salience is being continually reestablished by the role of the unions within the system of corporatist representation" (Przeworski y Sprague 1986:78).

reformas económicas para mejorar el nivel y calidad de los factores productivos, liberalizar mercados suprimiendo monopolios y, finalmente, aumentar los beneficios empresariales para que pudiesen competir con las inversiones no productivas. ¿Son ya iguales las políticas socialdemócratas y las conservadoras? ¿Afecta el abandono de políticas keynesianas a la coordinación económica entre partidos y sindicatos socialdemócratas? ¿Siguen siendo los sindicatos indispensables para llevar a cabo sus políticas, esto es, siguen siendo necesarias las políticas de rentas centralizadas? ¿Ya no tienen los sindicatos razones para cooperar con los partidos socialdemócratas cuando abandonan éstos las políticas expansivas?

Para algunos autores, los cambios de todo tipo que están ocurriendo en la economía de los países (a escala mundial) han supuesto un importante desafío a la socialdemocracia, tanto en sus objetivos como en la posibilidad de tener estrategias económicas diferenciadas. A diferencia de lo que ocurrió en los tres primeros decenios de posguerra, en la actualidad ya no existe una estrategia económica con la que puedan realizarse los objetivos socialdemócratas de pleno empleo, aumentos salariales, crecientes transferencias sociales, y una mejor provisión de equipamientos y servicios públicos sin violar condiciones fundamentales de la economía capitalista (Scharpf 1992:354). Esto provoca que las estrategias económicas de los gobiernos socialdemócratas dejen de ser distintas de las conservadoras (Howell y Daley 1992-93:7). Si resultase que esto fuera así, las relaciones partido-sindicato perderían parte de su atractivo. El interés de los sindicatos en el intercambio político-electoral disminuiría pues, de nuevo, ganase quien ganase no podría sino aplicar la misma política lo cual reduciría drásticamente las razones para apoyar explícitamente a un partido determinado en las elecciones. Ahora bien, como hemos visto, esto no tendría que suponer ningún quebranto a los partidos socialdemócratas; sino, quizás, todo lo contrario. Pero, aun así, unos y otros podrían todavía tener razones para mantener la coordinación económica.

Otros autores (Scharpf 1992; Boix 1996), por el contrario, defienden que todavía existen opciones de políticas, que aún aceptando que los instrumentos monetarios y fiscales del

keynesianismo tal como se conocieron son insuficientes o ineficaces para luchar contra el paro y la inflación, existen distintas prioridades de objetivos y diferentes estrategias económicas en función de esas distintas prioridades[36]. Scharpf defiende así que, puesto que todos los objetivos tradicionales de la socialdemocracia ya no se pueden conseguir a la vez, hay que "establecer prioridades estratégicas" (Scharpf 1992:354). Para este autor no habría más remedio que elegir entre establecer una indudablemente dolorosa priorización de objetivos -sacrificando la redistribución en favor del pleno empleo- o, por el contrario, encaminarse a "una escisión cada vez más profunda de los trabajadores en una mayoría de poseedores relativamente privilegiados de un puesto de trabajo en el sector privado y en el sector público y una creciente minoría de parados a largo plazo, pensionistas prematuros, trabajadores ocasionales y jóvenes que ya no conocen una vida profesional regular" (Scharpf 1992:354). Igualmente Carles Boix considera que, aun teniendo en cuenta que hay factores que moderan el efecto partidista sobre las políticas económicas[37], se pueden distinguir políticas de oferta de derechas y otras de izquierdas en función del papel que se otorgue al mercado y al Estado para mejorar el nivel y la naturaleza de los factores productivos: capital fijo y humano (Boix 1996:38,39). Estableciendo una escala entre el papel económico del mercado y del Estado, en un extremo nos encontramos con que el gobierno confiará a los agentes privados la formación de capital fijo y humano, la tasa de inversión pública será por tanto prácticamente cero, y se reducirá la imposición fiscal para no distorsionar el ahorro privado y, por tanto, la inversión. Scharpf considera además que esta estrategia buscará además la eliminación de la influencia sindical sobre los salarios, la supresión de prestaciones sociales y una activa política de desregulación (Scharpf

[36] Pues "aunque constreñidos por las instituciones domésticas y por la economía internacional en el ámbito de las políticas estrictamente macroeconómicas, gobiernos y partidos cuentan con la autonomía suficiente para afectar los factores productivos a condiciones estructurales de la economía de acuerdo con sus preferencias ideológicas" (Boix 1996:43).

[37] Entre esos factores cita la organización sindical, la evolución de la economía internacional, etc.

1992:324). En el otro extremo de la escala, el Estado intervendrá con objeto de asegurar unos niveles determinados de inversión, corregir los fracasos del mercado y las desigualdades económicas. Buscará así mejorar y aumentar el capital físico y humano, aumentando la presión fiscal, y lo canalizará mediante los impuestos y unos esquemas reguladores que influyan en el comportamiento de inversión y consumo de los agentes privados. Entre estos dos extremos ideales, los gobiernos podrán elegir hasta qué punto el sector público debe financiar la formación de capital fijo, la cantidad que se gastará en capital humano, y si se establece un sistema tributario fuerte y progresivo para dirigir recursos privados a políticas de inversión. ¿Cuáles serían, entonces, las consecuencias de una y otra estrategia de oferta sobre la coordinación económica?

Ya hemos visto las consecuencias de la versión neoclásica sobre esta coordinación y, en general, sobre el papel de los sindicatos en la política económica o en las relaciones laborales. Si queremos una economía en equilibrio en la que se hagan uso de todas las posibilidades de producción, habrá que fomentar al máximo la competencia y la flexibilidad, eliminando monopolios y rigideces, entre los cuales está el comportamiento económico de los sindicatos. Para luchar contra el paro y la inflación, los acuerdos con ellos son ineficaces; y si tienen poder para poner la economía en aprietos, lo que habría que hacer es eliminar su poder monopolista. Ahora bien, no todas las posturas llegan a ser tan extremas, ni todos los conservadores tienen una fe ciega en una economía neoclásica y de oferta *pura*, ni están dispuestos a buscar enfrentamientos con los sindicatos más allá de los necesarios.

Pero ¿y en el caso de la versión de izquierdas? Aún aceptando el argumento de que existiese algo así como una política de oferta de "derechas" y una política de oferta de "izquierdas", todavía nos podríamos plantear si para esa nueva política de oferta socialdemócrata la colaboración sindical es una condición necesaria para su éxito (en términos de inflación y empleo) como lo había sido para las políticas de demanda. Boix (1996:65,66) no lo cree así. Para él la cooperación de los sindicatos era necesaria para el éxito de políticas expansivas no inflacionarias. Pero para llevar a cabo una

política de inversión pública, los sindicatos son prescindibles. Los partidos de izquierdas pueden elevar los impuestos, mejorar el sector público empresarial y contribuir a la formación de capital sin tener que contar con acuerdos neocorporativistas. Para mantener esta estrategia necesitarían de una sólida mayoría electoral y poner en práctica políticas monetarias y fiscales ortodoxas para conseguir la estabilidad económica. En el sur de Europa, donde según Boix los sindicatos son débiles y fragmentados, y, por tanto, incapaces de sostener pactos neocorporativistas "los gobiernos emprendieron ambiciosas estrategias de inversión pública, demostrando el papel clave que el signo ideológico desempeña independientemente de la presencia de estructuras neocorporatistas" (Boix 1996:66). En este caso, las relaciones como "recurso" perderían gran parte de su sentido. Desde el lado de los partidos políticos los sindicatos no serían necesarios ni para ganar elecciones ni para el éxito de las políticas de oferta.

Diferentes autores, por el contrario, han defendido que acuerdos al más alto nivel con los sindicatos seguirían siendo interesantes con políticas de oferta, ya sea porque, independientemente del color político del Gobierno, interesan pactar las reformas económicas, ya porque las políticas de oferta de izquierdas también se han de coordinar con las acciones sindicales en las relaciones laborales. Como hemos visto, la crítica neoclásica y las experiencias de los gobiernos que intentaron practicar políticas keynesianas como principal remedio para salir de la crisis a finales de los 70 y principios de los 80 pondrían de manifiesto la necesidad de realizar reformas económicas -si bien su intensidad y naturaleza variaría según los países- para poder hacer frente a los problemas surgidos como el paro o la inflación. Estas reformas económicas probablemente serían aprobadas por unanimidad si todo el mundo esperase mejorar su situación o tuviese un fuerte compromiso normativo a su favor (Przeworski 1995:276 y ss). Pero sería igualmente esperable la oposición de aquellos grupos que esperasen un deterioro de su situación en términos absolutos tras haberse producido las reformas económicas así como de aquellos que más sufriesen los efectos distributivos durante el proceso mismo.

Probablemente los más expuestos a verse afectados por la aparición del desempleo fuesen los obreros no cualificados, junto a los empleados del sector público, al perderse con toda probabilidad puestos de trabajo como consecuencia de las reducciones en el gasto público y de la modernización de la burocracia estatal. En pocas palabras, dado que podrían formarse lo que Przeworski (1995:278) denomina "coaliciones antirreforma", quizás se podría intentar reutilizar esas redes de relaciones cooperativas entre empresarios, sindicatos, administración y partidos políticos basadas en una "cultura del compromiso" (Katzenstein 1985:32).

Se ha defendido así que la concertación de las reformas económicas resultaría especialmente necesaria en aquellos países que, con democracias frágiles, quisiesen emprender dichas reformas económicas sin renunciar a la democracia (Przeworski 1995:236). En estos países una política de "bajo voltaje"[38] sería especialmente deseable. Pero la reutilización de los mecanismos neocorporativos ha sido igualmente defendida en países con democracias estables. En este caso, los motivos serían más bien de índole "ideológico", es decir para preservar objetivos de la izquierda socialdemócrata, pues existiría la posibilidad de redistribuir los costes de las reformas de formas diversas. El mismo Przeworski señala que quién tenga que soportar el mayor peso de las reformas económicas y de las nuevas estrategias económicas no sólo depende de la naturaleza de las reformas necesarias, sino también de las relaciones entre fuerzas políticas. Por ejemplo, la reducción de los déficits públicos podría lograrse por dos vías: mediante una reducción de los gastos o incrementando los ingresos por vía fiscal. Las reformas así no tendrían forzosamente efectos regresivos si el Estado estuviese en condiciones de subir los impuestos y ofreciese servicios asistenciales eficientes y protegiese las rentas (Przeworski 1995:279). En este mismo sentido va el argumento de Rand Smith cuando plantea que no todos los programas de austeridad son iguales (Rand Smith 1995:14). Este autor habla de una "austeridad redistributiva" que preservaría objetivos tradicionales de la izquierda tales como igualdad, protección social, y mejoramiento de

[38] El término es de Peter J. Katzenstein (1985:32).

los que estuviesen en peor situación. Ahora bien, el apoyo de los sindicatos ¿sólo sería necesario para llevar a cabo los procesos de ajuste estructural? ¿Sería necesario seguir coordinando la negociación colectiva con las políticas de oferta una vez salido de lo peor de la crisis económica?

Autores como Regini (1990:22) consideran que la concertación social bajo el nuevo ambiente económico se deberían reducir a estos macroacuerdos y abandonar, por un lado, la pretensión de hacer ella el nivel de las relaciones al cual se subordina la negociación colectiva y, en particular, la contratación empresarial; y, por otro, asignar a la concertación tradicional contenidos de tipo omnicomprensivo y agregado como serían la contención del coste del trabajo o políticas de trabajo que no dejasen espacio a las exigencias de flexibilidad y de ajuste local. Es decir, no sólo hay que abandonar las políticas monetarias y fiscales expansivas sino también las políticas de rentas que conlleven una centralización de la negociación colectiva. Por el contrario, otros autores consideran que se podría continuar identificando los problemas de un modo omnicomprensivo y agregado, al igual que *parte* de las soluciones. Si bien se dejaría de confiar en principio la solución del bajo crecimiento económico o el desempleo a políticas monetarias y fiscales expansivas, todavía sería provechoso seguir utilizando políticas de rentas, y, por tanto, practicando unas negociaciones salariales centralizadas a cambio de compensaciones en forma de políticas sociales redistributivas.

En esta línea Scharpf considera que la coordinación económica, con la negociación salarial centralizada que conlleva, no sólo no ha dejado de ser útil sino que ahora lo es *doblemente*. En el modelo anterior de políticas expansivas *cum* moderación salarial, ésta era necesaria para que las primeras produjesen una expansión económica, reduciendo el paro, y controlar la inflación. Es decir, la moderación salarial era necesaria principalmente para luchar contra la inflación, pero el esfuerzo para crear más empleo recaía sobre las políticas de demanda expansivas. Ahora con el modelo de "oferta cum moderación", la moderación salarial es también imprescindible para, además de contener la inflación, aumentar los beneficios empresariales y promover así la creación de empleo. Si la tasa de

ganancia del capital productivo no fuese al menos tan rentable como la inversión no productiva, se producirían fugas de capitales y/o la depreciación de la moneda ante tipos de interés altos fijados en EEUU (o Alemania) (Scharpf 1992:319-324). Parecería así interesante seguir concertando la política salarial de los sindicatos. La lógica de un posible acuerdo de rentas con políticas de oferta ha sido descrita por Maravall (1997:170). La concertación podría dar lugar a mejores transacciones entre los salarios, la inversión, el empleo y las políticas sociales. Sindicatos y empresas podrían mejorar su bienestar si pactasen un salario inferior al nivel que los sindicatos unilateralmente eligiesen y un empleo superior al que los empresarios decidiesen ante tal nivel salarial. A su vez, la participación de los gobiernos en ese pacto permitiría asegurar su cumplimiento y evitar que los empresarios pudiesen rechazar su parte del compromiso. Puesto que subidas salariales altas reducirían la inversión, los sindicatos podrían aceptar una transacción entre su consumo presente y una inversión que representase empleo y consumo futuro, sobre todo si fuera posible redistribuir el consumo o aumentar el "salario social". Los incentivos para que los sindicatos pactaran derivarían de que los resultados a medio plazo se considerasen superiores y los acuerdos generasen bienes públicos para los trabajadores, frente a los costes transitorios y al riesgo estimado de que el pacto no se cumpliese.

Se podría plantear que quedan otras opciones además de buscar la colaboración de los sindicatos: (a) destruir su poder de presión salarial o (b) echar mano de políticas fiscales y monetarias restrictivas. Respecto a lo primero, Scharpf (1992: 329-331) discute que la solución neoliberal a base de sindicatos pequeños y descentralizados sea económicamente efectiva. Considera, en primer lugar, que una preponderancia monopsónica de los empresarios tanto en el mercado de trabajo como en la organización de las empresas resultaría económicamente ineficiente. Pero, además, como es muy cuestionable que se pueda suprimir del todo a los sindicatos, éstos, aún siendo pequeños y fragmentados, y una vez que sus propios puestos de trabajo no se hallasen directamente amenazados, no tendrían ningún motivo para renunciar a los aumentos salariales que

su posición de mercado les permitiese conseguir. Aparecería así un nuevo ciclo de "stop-go", ahora con políticas de oferta. En un primer momento de recesión económica, el gobierno podría practicar políticas de oferta, hacer las reformas que considere conveniente y además contar con la moderación salarial, pues a los trabajadores lo que más les preocuparía sería mantener sus empleos. Es decir, al comenzar las nuevas políticas económicas de oferta y desregulación no es esperable una gran resistencia de los sindicatos -al menos por motivos salariales y en el sector privado[39]. Como dice Scharpf, en situaciones de crisis económica, "la moderación salarial deseable desde el punto de vista del Estado viene a coincidir con el comportamiento básico de los afiliados al sindicato" (Scharpf 1992:233). Pero cuando las políticas de oferta empezasen a tener éxito, es decir la inflación bajase, los beneficios empresariales se recuperasen, aumentase la inversión, la producción, y el empleo, los trabajadores volverían a estar capacitados para presionar salarialmente y provocar un repunte de la inflación y una caída de los beneficios[40]. Es decir, es de esperar que problemas generados por las políticas keynesianas vuelvan a aparecer con las de oferta. Por otro lado, la segunda opción, aplicar políticas monetarias y fiscales restrictivas perjudicaría el crecimiento económico al subir los tipos de interés. La conclusión para Scharpf (1992:331) era, así pues, clara:

> "Las estructuras institucionales que en los años setenta resultaron favorables a una 'coordinación socialdemócrata-keynesiana' han facilitado, pues, también la política salarial 'orientada a la oferta' exigida en los años ochenta".

---

[39] Otra cosa son el cierre de empresas públicas, reducción de beneficios sociales, etc.

[40] Sería en función de si quedan sindicatos o no que esto ocurriese más pronto o más tarde. Si quedan sindicatos pequeños, estos podrían presionar salarialmente una vez que las empresas donde actuasen saliesen de la crisis. Si las políticas de desregulación llegasen a eliminar a todos, una vez que se llegase a situaciones de pleno empleo, el propio mercado de trabajo favorecería la presión salarial de los trabajadores.

El gobierno tendría que llevar a cabo políticas de oferta (desregulaciones, privatizaciones, lucha contra monopolios etc) para fomentar la producción, promover los beneficios y crear más empleo. Al mismo tiempo el pacto de rentas serviría para luchar contra la inflación y permitir un incremento de la tasa de beneficios.

En este caso la colaboración de los sindicatos seguiría siendo un recurso para el éxito de las políticas de los socialdemócratas, y si los resultados electorales dependiesen de los éxitos en las políticas públicas, también lo sería para el triunfo electoral (aunque ya no se diese un apoyo explícito). Pero podríamos volver a preguntarnos por qué iban los gobiernos conservadores a rechazar el apoyo sindical si es que da tales réditos. Y si lo hiciesen, nos volveríamos a encontrar con que quienes ahora perderían el interés serían los sindicalistas en apoyar expresamente a los partidos socialdemócratas en las elecciones. Pero esto no tendría que suponer mayor problema para estos últimos si es verdad que ahora pueden ganarlas sin contar con los sindicatos. Ahora bien, si por el contrario los conservadores apostasen por esas otras vías para conseguir la moderación salarial sin contar con los sindicatos, las relaciones entre los sindicatos y los socialdemócratas se reforzarían[41]. Los primeros tendrían el interés de apoyar a sus partidos de siempre porque los conservadores practican políticas antisindicales (apoyo que aunque no imprescindible sería bien recibido por los partidos salvo que fuese verdad que la identificación con los sindicatos ahuyentase votos). No está nada claro, por tanto, que las relaciones hayan dejado de ser interesantes.

Ahora bien, hasta ahora hemos estado viendo si es necesaria la moderación salarial para las políticas de oferta de un gobierno socialdemócrata, pero ¿lo aceptarían los líderes sindicales? ¿No tendrían necesariamente que rechazar la moderación salarial para solucionar los problemas de estancamiento económico, paro e inflación porque los gobiernos ya no cooperan como antes, es decir

---

[41] En este sentido, Boix considera que "en el marasmo derivado hoy en día de la creciente internacionalización de la economía política y de un cambio tecnológico imparable, los partidos políticos, sus dirigentes y sus estrategias económicas están cobrando un papel más decisivo incluso que el que desempeñaron previamente" (Boix 1996:24).

ya no se confía la recuperación económica y del pleno empleo a políticas contracíclicas expansivas? Al fin y al cabo Scharpf, en su estudio de los acuerdos entre gobiernos y sindicatos sobre políticas de rentas, entiende explícitamente por gobierno "cooperador" aquél que practica una política expansiva (Scharpf 1992:228), luego serían ellos los que habrían roto la cooperación[42]. Hay que recordar, sin embargo, que las políticas expansivas no eran buenas en sí mismas sino porque proporcionaban pleno empleo. Abandonarlas no significa necesariamente que a los socialdemócratas ya no les interese el pleno empleo -como frecuentemente se les acusa[43]- sino que se piensa que éstas ya no son eficaces y que hay otras vías para alcanzar ese objetivo. En pocas palabras, los gobiernos socialdemócratas estarían *prometiendo* con sus nuevos instrumentos el objetivo de siempre. Ahora bien, el mismo Scharpf reconocía que alcanzar ese objetivo entrañaba un dilema doloroso: una política salarial agresiva haría, ciertamente, crecer los ingresos reales de los trabajadores ocupados, pero causando pérdidas de empleo aún mayores, mientras que las renuncias salariales podían al menos desacelerar y quizá detener la destrucción de puestos de trabajo (Scharpf 1992:329). Scharpf considera que, desde un punto de vista de principios, el hecho de que una política socialdemócrata y sindical que hubiera de poner su orgullo masoquista en ser capaz de organizar de forma más efectiva la redistribución económicamente necesaria en favor del capital de lo que serían capaces de hacerlo los propios capitalistas solamente sería una paradoja si "se considera como objetivo supremo del movimiento obrero la conquista de posiciones en la lucha con el capital en torno a la distribución" y no el "objetivo del pleno empleo y

---

[42] Algunos autores dan la vuelta al razonamiento de Scharpf. Si éste pensaba que los gobiernos están atados a los sindicatos porque no tienen más opción que practicar políticas expansivas mientras que los sindicatos pueden moderar o no sus demandas salariales, otros investigadores consideran que, mientras que los gobiernos pueden o no practicar esas políticas expansivas, los sindicatos no tienen más remedio que apoyarlos porque siempre será mejor un gobierno socialdemócrata que uno conservador.

[43] Evidentemente pueden fracasar, pero un fracaso no es lo mismo que cambiar prioridades.

se parte además de que, en las circunstancias económicas dadas, tal objetivo sólo podía alcanzarse mediante una drástica elevación de los beneficios" (Scharpf 1992:328).

Indudablemente se puede estar en contra de aceptar la moderación salarial en favor de que se cree más empleo[44], pero no se puede *además* justificar este rechazo arguyendo que los gobiernos socialdemócratas confían más en las políticas de oferta que en las de demanda para solucionar los problemas económicos. Con las de oferta es cierto que los trabajadores estarían sacrificando un incremento del salario real a costa de aumentar (o simplemente asegurar) el empleo. Pero esto también lo harían con políticas de demanda expansivas. Es cierto que con esta política de oferta también estarían aumentándose los beneficios de los empresarios, mientras los trabajadores se aprietan el cinturón. Pero esto también ocurriría con las "tradicionales". Es cierto que los gobiernos siguen pidiendo moderación salarial una vez pasado lo peor de la crisis. Pero esto también se hubiese pedido con políticas de demanda expansivas (si no, se caería en el ciclo "stop-go" keynesiano). Y es cierto que los trabajadores con empleo no deberían beneficiarse vía salario de la iniciada recuperación económica. Pero tampoco lo deberían hacer con las políticas expansivas. En pocas palabras, gran parte de las denuncias de aspectos "neoliberales" que han recibido las políticas de los socialdemócratas en los ochenta se realizan por unas consecuencias redistributivas que igualmente hubiesen ocurrido con las políticas socialdemócratas "clásicas"[45]. Se podría pensar que los sindicatos prefieren políticas expansivas porque pueden aumentar los salarios, pero esto sólo ocurría en situaciones en que, cuando había

---

[44] Que es distinto de rechazar que efectivamente la moderación salarial sirva para crear más empleo. Esta segunda razón para rechazar las políticas de rentas con políticas de oferta lo veremos más adelante.

[45] En este sentido conviene recordar la experiencia austriaca durante los años ochenta. Austria continuó practicando el "austro-keynesianismo", es decir, sería un caso de un gobierno socialdemócrata que no "ha traicionado" las políticas socialdemócratas clásicas. Ahora bien, igualmente los trabajadores tuvieron que aceptar la moderación salarial, la recuperación de beneficios y la redistribución entre capital y trabajo en favor del primero (Scharpf 1992:328).

paro, no había inflación -la crisis estudiada por Keynes. Cuando apareció la estanflación, la política expansiva iba acompañada de moderación salarial[46].

En resumidas cuentas, si los sindicatos rechazan la moderación salarial para que los empresarios aumenten sus beneficios, y quizás entonces inviertan y creen más empleo, tal rechazo ocurrirá con políticas de oferta o con políticas keynesianas expansivas, pues éstas *también* entrañan moderación salarial desde el momento que aparece el problema de la estanflación. Del mismo modo, si los sindicatos cooperaban y aceptaban la moderación salarial con políticas expansivas -lo cual no siempre se ha dado- no hay razones, en principio, para que no lo hagan ahora bajo el argumento de que no se practican políticas expansivas. En conclusión lo que produciría el rechazo sindical a la moderación salarial no son las políticas expansivas o de oferta, sino aceptar o rechazar que el incremento del empleo implica que los empresarios aumenten sus beneficios. Con esto no estoy diciendo que no haya razones para rechazar la moderación salarial tal y como se les pide a los sindicatos, pero no por haber abandonado las políticas expansivas. Los gobiernos socialdemócratas seguirían cooperando porque seguirían buscando más empleo[47].

Luego, en principio, no parece que se haya de abandonar la coordinación económica entre sindicatos y gobiernos socialdemócratas consistente en intercambiar moderación salarial a cambio de empleo y beneficios sociales porque los gobiernos confíen en las políticas de oferta, en vez de demanda expansivas, si los

---

[46] Quizás, con todo, se podría argumentar que con las políticas de oferta se les pone en cuestión derechos adquiridos en el mercado de trabajo bajo el lema de la "flexibilidad", algo que no ocurría con políticas keynesianas. Pero ahora sólo estamos discutiendo si deben o no aceptar la moderación salarial.

[47] Como más adelante veremos, se puede defender que en la práctica esto no ha sido así, que el paro ha aumentado bajo todos los gobiernos socialdemócratas. Además de señalar que esto realmente supone que sus políticas de empleo han fracasado -pero no necesariamente que hubiesen buscado el desempleo para frenar la inflación- hay que recordar que las políticas keynesianas también fracasaron pues no consiguieron reducir el empleo sin llevar a los gobiernos a graves déficits públicos.

sindicatos ya habían aceptado la moderación salarial con las anteriores expansivas. Dado que la mayoría de los partidos conservadores han sido rápidos en aceptar la versión "monetarista", los sindicatos no podrían mostrarse indiferentes ante quién ganase las elecciones (si bien que los partidos les pidiesen su apoyo explícito vendría dado por sus efectos sobre los votantes). Pero de nuevo en función de hasta qué punto predomine la escuela neoliberal en los partidos conservadores, los partidos socialdemócratas serán interesantes para los sindicatos.

2.2.2 Fin del consenso socialdemócrata

Ahora bien, todo lo dicho no entraña que entonces la coordinación económica se venga abajo necesariamente porque los sindicatos carezcan de las condiciones que les permitían aceptarla. La representación de una parte substantiva de la sociedad, el estar provisto de las características de concentración y centralización e incluso tener poseer una perspectiva nacional en asuntos políticos por parte de un sindicato, no les obligan a coincidir necesariamente con la interpretación del Gobierno sobre cómo alcanzar unos objetivos que, supongamos, nadie discute. Del razonamiento de Olson solamente se desprende que tanto el Gobierno como el sindicato "omnicomprensivo" tendrían como objetivo común buscar el mayor beneficio posible para la sociedad en general, pero no explica cómo llegan ambos a un consenso sobre cuáles son las políticas concretas que maximizan ese beneficio posible. Este es un problema que la economía política no se suele plantear, como ha señalado Bresser. Este autor incide en que "[c]uando los politólogos analizan las limitaciones de las políticas económicas, suelen aceptar como algo dado que los economistas (o el Banco Mundial, o el FMI) *saben* qué políticas se deben adoptar. A partir de esta hipótesis, preguntan si los gobiernos obtendrán el apoyo político o movilizarán los *inputs* políticos necesarios para llevar a cabo las reformas" (Bresser 1995:84, suyas las cursivas). De ahí, deducen que si los interlocutores sociales rechazan tales medidas no es porque puedan *creer* que las reformas

estén mal planteadas, sino porque no les interesan y/o carecen de los requisitos para poder aceptarlas, olvidándose de que para que los agentes den su consentimiento es necesario que ellos crean o confíen en que esas reformas constituyan las medidas correctas. Su sola bondad y eficacia sobre el papel no genera la confianza necesaria para que todos las acepten. Confianza que se hace más necesaria si, como recuerda Nelson (1984:104) "sólo un número reducidísimo de funcionarios económicos posee la formación adecuada para comprender las complejas relaciones económicas y las implicaciones de diferentes políticas macroeconómicas alternativas. Por otro lado, determinados aspectos de los programas convencionales de estabilización y ajuste contradicen las intuiciones del sentido común"[48]. Przeworki (1995:285-293) destaca así el papel de la "confianza" como una pieza capital e imprescindible de todo intento de reforma concertada con los interlocutores sociales. La gente aceptaría pasar por un período de reformas y abandonar anteriores políticas si confían en que su situación futura después de las reformas será superior al *statu quo* para compensar el deterioro transitorio sufrido. Es decir, si los agentes sociales que articulan los intereses de la población confiasen en el gobierno, aunque las reformas económicas conllevasen costes sociales, se podrían concertar y no necesariamente se tendrían que imponer a la población por los gobiernos (Przeworski 1995:285).

La formación, por tanto, de un consenso entre sindicatos, con las características "apropiadas" y gobiernos socialdemócratas es algo que debe ser explicado y no dado por supuesto. El hecho es que en algunos países durante bastantes años sí que existió tal consenso. Pero, el cambio que ha supuesto aplicar políticas de ofertas tanto por lo que implica aplicar otras medidas como por el mismo hecho de entender donde se encontraban los orígenes de los problemas, implicaría tener que rehacer dicho consenso. La cuestión sobre cómo

[48] El mismo Przeworski afirma que "[l]as transformaciones estructurales de la economía suponen una zambullida en aguas turbias: no se divisa el fondo y nadie sabe cuánto tiempo podrá aguantar sin respirar. La única información de que disponen las personas es lo que se les ha dicho que ocurrirá y lo que en efecto está ocurriendo" (Przeworski 1995:291).

se construyen consensos es algo que queda por explicar, pero no parece ser un error pensar que el mismo implique una confianza tanto de unos como de otros en que el camino escogido sea el correcto, confianza que se mina si, por el contrario, los resultados no son los esperados[49]. Así la mayoría de los líderes sindicales europeos actuales diría que las reflexiones sobre la bondad del corporatismo de oferta está demás porque ni durante los años 80 ni en los 90 se consiguió el prometido pleno empleo mediante las políticas de oferta. La experiencia europea desde la segunda mitad de los 80, por el contrario, ha sido la de un éxito "a medias", es decir, se ha conseguido un crecimiento económico considerable no acompañado por una creación de empleo suficiente como para terminar con niveles altos de paro, pero sí por una importante reducción de la inflación. Podríamos pensar entonces que los socialdemócratas han incumplido su parte de lo pactado, no por aplicar políticas de oferta sino porque éstas no han traído el objetivo perseguido, el pleno empleo. El éxito a medias (crecimientos económicos importantes no son una garantía de que se alcance el pleno empleo) tendría así el efecto de minar las bases para que se diese entre sindicatos y gobiernos la confianza necesaria y se formase un consenso. Veamos con un poco más de detalle como la confianza puede desaparecer.

En el modelo keynesiano el crecimiento económico promovido por políticas monetarias y fiscales más moderación salarial prometía acercarse al pleno empleo. De ahí que pareciese que se estaba intercambiando por contención salarial. Ahora el crecimiento económico promovido por desregulaciones y altos tipos (o en el caso escandinavo devaluaciones competitivas) paraliza la destrucción de

---

[49] Según Przeworski la confianza es en gran medida endógena ya que la gente generalmente no sabe (ni tampoco los políticos ni los técnicos) cuál será el coste efectivo de la transición ni cuánto durará en realidad (siempre pueden ocurrir imprevistos que lo alarguen, por no hablar de equivocaciones). Es además una masa variable: puede acumularse pero puede mermar, principalmente debido a dos vías: (a) por unas previsiones erróneas y (b) por efecto de las vacilaciones. En cualquier caso, y por el motivo que sea, cuando la confianza se erosiona no puede continuarse con unas reformas concertadas. Los gobiernos deben reconstruir primero la confianza (Przeworski, 1995:293).

empleo pero no lo crea, o no en cuantía suficiente, aunque sí reduce la inflación. Estos resultados coinciden con los buscados por un gobierno conservador según Scharpf (cuando las políticas económicas que se aplicaban eran principalmente las de gestión de demanda o keynesianas), pues para él un gobierno conservador no dudaría en sacrificar el empleo con tal de ver reducida la inflación. En pocas palabras, si esta nueva concertación (oferta cum moderación) tuviese parcos resultados en términos de empleo, los líderes sindicales, interpretando los resultados desde un punto de vista keynesiano, considerarían que los gobiernos socialdemócratas habrían elegido un alto nivel de paro a cambio de baja inflación (aunque en realidad se hubiese intentado reducir los dos). Valorando pues la coordinación económica en función de los resultados obtenidos, los líderes sindicales tendrían razones para pensar que los gobiernos socialdemócratas sencillamente les habían "engañado". Esta sensación de "engaño" se reforzaría además porque *parte* de las políticas aplicadas por los socialdemócratas en los años 80 se parecen a las que Scharpf exponía que utilizaban los conservadores para hacer que los sindicalistas se comportasen como unos buenos chicos: aplicar políticas restrictivas[50]. En conclusión, a ojos de los sindicalistas los resultados y el "rigueur" de las políticas de los gobiernos socialdemócratas en los años ochenta eran los que los propios socialdemócratas habían atribuido a los conservadores[51]. La confianza habría desaparecido.

Pero lo que nos interesa de los efectos del éxito "a medias" no son las acusaciones de traición que puedan cruzarse los líderes en los partidos y sindicatos sino sus efectos para la constitución de un nuevo consenso socialdemócrata que haga posible la continuidad de la

---

[50] Si bien en los años 60, 70 se aplicaban las políticas restrictivas cuando se quería moderar la inflación mientras que ahora, además, se aplican para hacer frente a déficits fiscales, mantener una moneda fuerte, etc.

[51] En este sentido Boix afirma que "especialmente en la última década, la izquierda ha decidido, a la luz de los costes políticos de las políticas macroeconómicas fallidas de los setenta, abandonar en la mayoría de los países toda política keynesiana contracíclica y abrazar los objetivos de estabilización y disciplina económica otrora propios de la derecha" (Boix 1996:138).

coordinación económica. Tanto unos como otros, ante el fracaso, podrían decantarse por opciones teóricas distintas:

1) Una opción de "profundización" en la desregulación. No se ha conseguido el pleno empleo porque no se ha desregulado lo suficiente.

2) Una opción "revival keynesiano-expansionista". No se ha conseguido el pleno empleo porque el "mercado" no lo consigue. Es necesario fomentar la demanda de nuevo.

Probablemente los líderes sindicales preferirán esta segunda opción. Por otro lado, los gobiernos socialdemócratas, insatisfechos con los resultados en términos de empleo, probablemente oirán las voces de los economistas neoclásicos que les dicen que además de abandonar políticas anticíclicas, deben llevar a cabo políticas de oferta más activas (más desregulación y flexibilización). Los sindicatos tendrían que aceptar, además de la moderación salarial, renuncias de derechos laborales y/o sociales adquiridos. Y esto sí que es un cambio con respecto a practicar políticas expansivas. Los efectos sobre la coordinación económica serían devastadores. Los líderes sindicales lo rechazarían porque pensarían que los gobiernos no habrían encaminado los resultados de su moderación salarial hacia la creación de empleo. No habría así diferencias con respecto a un gobierno conservador, por lo que el destino de los gobiernos socialdemócratas les resultaría indiferente (y por tanto tampoco les apoyarán electoralmente). Sólo una decidida ofensiva antisindical por parte de los partidos conservadores podría hacer cambiar de actitud a los sindicatos, pero aún así sólo con respecto a la preferencia de quién esté en el gobierno, no siendo esto motivo suficiente para apoyarlos en sus políticas. Los gobiernos socialdemócratas, por su parte, probablemente empezarían a evaluar que conseguir el acuerdo con los sindicatos para la moderación salarial tendría el coste de renunciar a otras medidas para reducir el desempleo.

En resumidas cuentas, los partidos y sindicatos socialdemócratas podrían estar de acuerdo en coordinar las políticas sindicales con las políticas de oferta, pero si los resultados no fuesen los esperados la continuación de tal coordinación se haría muy difícil.

2.3. La especificidad del sur de Europa: ausencia de la colaboración solidaria entre partidos y sindicatos, ¿fin de los partidos socialdemócratas y de los sindicatos?

Finalmente, los fracasos o ausencia de estos intercambios de bienes y coordinación de actividades entre los partidos socialistas y los sindicatos en el sur de Europa durante los años ochenta presentan más interrogantes sobre sus verdaderas causas de lo que parecería a primera vista. En primer lugar, se podría discutir si la quiebra de los intentos de colaboración al estilo de sus correligionarios nórdicos, tanto en la forma de un intercambio político-electoral como en el de la coordinación económica, viene producida por esos supuestos cambios macroestructurales, que habrían afectado igualmente a las políticas económicas y sociales de los gobiernos socialistas sureuropeos, o, por el contrario, no es sino un ejemplo más de cómo afectan las estructuras organizativas de los movimientos sindicales a sus opciones estratégicas para actuar en el ámbito laboral y político. Pues, si es cierto que los gobiernos socialistas francés y español emprendieron políticas de estabilización y ajuste estructural para salir de la crisis económica, también lo es que sus movimientos sindicales no presentaban las características que la literatura especializada suele citar como necesarias para que el apoyo de éstos fuese un activo para ganar las elecciones o pudiesen apoyar las políticas económicas de sus gobiernos.

Pero para complicar más la cuestión, el panorama político y sindical ha cambiado igualmente en el sur de Europa con respecto a cómo era la situación en los años de posguerra, y en sentido opuesto a lo ocurrido en el norte. Si en este último caso la transformación de las relaciones entre los partidos y los sindicatos ha venido acompañada de un proceso de descentralización del movimiento sindical y de derrotas electorales por parte de los partidos socialdemócratas, en el sur esa transformación de las relaciones entre los partidos y los sindicatos[52] lo es de una creciente unidad de acción

[52] Véase el estudio de Lange y Vannicelli (1990) para la transformación de las relaciones entre los partidos y sindicatos en Italia.

entre sindicatos anteriormente rivales, sobre todo en Italia y España (Regini 1984; Lange y Vannicelli 1990), así como por unos éxitos electorales de los partidos socialistas meridionales, de los cuales no habían disfrutado durante la supuesta edad dorada de la socialdemocracia nórdica (véase tabla 1).

TABLA 1.Resultados electorales de los partidos socialistas meridionales desde 1945

	1945-59	1960-73	1973-90	1980-90
Francia	18,0	16,8	32,3	34,7
Italia	15,9	11,7	11,3	12,9
Grecia	-	-	35,9	42,5
Portugal	-	-	30,6	27,2
España	-	-	38,3	43,6

Datos recogidos por Armingeon (1994:69).

Además esta transformación de relaciones también ha afectado a la familia comunista cuyos partidos no tenían responsabilidades de gobierno por lo que cuesta explicarlo por la imposibilidad de los gobiernos de reducir el desempleo e incrementar el gasto público, o exigir a los sindicatos una negociación colectiva centralizada.

En segundo lugar, la experiencia del sur de Europa cuestiona además la relevancia que se creía que tenían las relaciones partido-sindicato para el éxito de estas organizaciones. De forma resumida hemos visto que en aquellos países donde era factible la colaboración solidaria, partidos y sindicatos socialdemócratas tendrían un considerable éxito político y económico, pero que en aquellos otros donde no se daban esas condiciones las organizaciones socialdemócratas iban de fracaso en fracaso. Ahora, los profundos cambios de orden socioeconómico provocarían que *en todas partes* las organizaciones socialdemócratas estuviesen destinadas a su fracaso. Sin embargo, la experiencia del sur de Europa pone en cuestión los supuestos efectos negativos que tendría la no

colaboración entre sindicatos y partidos socialdemócratas, al menos en el intercambio político-electoral. Howell y Daley (1992/93:11,12) incluso han relacionado el éxito de los partidos socialdemócratas precisamente a la falta de lazos entre los partidos socialdemócratas y los sindicatos.

Los éxitos electorales de la socialdemocracia sureuropea parecen sugerir que el apoyo sindical no es una condición necesaria para las victorias electorales, pues los partidos socialdemócratas pueden ganar las elecciones sin su apoyo formal, o incluso con su indiferencia o rechazo público[53]. Si ha esto añadimos que para algunos autores la coordinación económica entre las políticas de los socialdemócratas y la acción sindical tampoco era necesaria para el éxito de éstas, todo parecería indicar que las relaciones entre los partidos socialdemócratas y los sindicatos no tendría especiales efectos positivos, pero su falta tampoco los tendría negativos, estando por ver si mantenerlas tendría efectos "inocuos" o por el contrario sí que dificultaban que unos y a otros se adaptasen a los cambiantes contextos en que se desenvuelven como afirman Padgett y Paterson (1991:218-220). Desde el punto de vista de los sindicatos, el fin de la coordinación económica no tiene por qué implicar tampoco una pérdida de influencia de los trabajadores sobre sus condiciones de trabajo y de remuneración, sino solamente un cambio del ámbito de negociación entre el Capital y el Trabajo. En los años 80 se empezó a observar la emergencia de nuevas formas concertación a nivel empresarial y a veces, sectorial o regional entre sindicatos y empresarios dirigidas a permitir el reajuste industrial. Las empresas buscarían una mayor flexibilidad externa (entrada y salida del mercado de trabajo) o interna, para distribuir eficazmente el trabajo

[53] Este éxito, aunque parece cuestionar la afirmación de que los partidos socialdemócratas ya no pueden ganar elecciones debido a cambios en las estructuras sociales y valores morales, sí confirmaría la creencia de que una estrecha identificación por parte del electorado entre los partidos socialdemócratas y los sindicatos es un inconveniente para el éxito electoral de los primeros. Otros autores, como Esping-Andersen (1985), cuestionan la determinación de factores socioestructurales en los resultados electorales al señalar la influencia decisiva de las resultados de las políticas públicas en el destino de los partidos socialdemócratas.

dentro de procesos de producción, contando con la voz de los trabajadores y hallar soluciones recíprocamente ventajosas (Regini 1990:16-19).

En todo caso, la experiencia sureuropea revela que parecen existir fenómenos comunes a casi toda Europa occidental (como algún tipo de transformación de las relaciones partido-sindicato o la quiebra de la coordinación económica entre gobiernos y sindicatos). Sin embargo, no todos estos fenómenos identificados en la literatura especializada aparecen en todos los países europeos (como, por ejemplo, derrotas electorales inevitables) e importantes acontecimientos en el sur de Europa han sido poco estudiados o valorados con la intensidad que se merecen (como la formación de la unidad de acción entre antiguos sindicatos rivales). Todo sugiere que el estudio de la transformación de las relaciones partido-sindicato en el sur de Europa tiene que tener presente factores que no han sido tenidos en cuenta para explicar la transformaciones en el norte de Europa.

3. Conclusión: los debates suscitados

El modelo solidario de relaciones entre los partidos y sindicatos socialdemócratas llegó a ser uno de sus rasgos distintivos, especialmente en el norte de Europa, así como uno de sus principales recursos de poder. Estas organizaciones alcanzarían sus principales objetivos sociopolíticos, empezando por los más instrumentales, si colaboraban *solidariamente*. Unos y otros se hacían así promesas de dedicación exclusiva, de entrega mutua, de mantener una relación "privilegiada", para mayor recelo de conservadores y empresarios. Pero, aunque esta creencia en la bondad y necesidad de mantener unas relaciones solidarias se desprendía en última instancia de la consideración de que partidos y sindicatos socialdemócratas compartían los mismos idearios, estas relaciones no dejaron de ser nunca un diseño estratégico basado en el reparto de ámbitos más propios de actuación, en la colaboración mutua (prestándose recíprocamente una serie de bienes y servicios) y en la coordinación

de sus actividades. Este diseño estratégico tenía así una serie de implicaciones restrictivas sobre las actuaciones que podían desarrollar los sindicatos y los partidos. En primer lugar, el reparto de ámbitos entrañaba que ambas organizaciones se comprometían a actuar preferentemente en unos determinados y acceder a otros por mediación de la organización hermana. En segundo lugar, la coordinación de actividades suponía además unas estrategias concretas en sus ámbitos de actuación respectivos. En otras palabras, el sindicato actuaría en política principalmente por mediación de su partido de referencia, pero igualmente, y sobre todo cuando su partido hermano accedía a las tareas de gobierno, coordinaría también sus actuaciones en la negociación colectiva con las políticas económicas del Gobierno. Por su parte, el partido actuaría en el ámbito social a través del sindicato y coordinaría sus políticas gubernamentales, cuando accediese al poder, con las actuaciones sindicales en la negociación colectiva. Se engarzaba así la actuación política del sindicato con la actuación social del partido así como la acción sindical en la negociación colectiva con las políticas públicas. En el primer engarce o intercambio, que denominábamos político-electoral, el sindicato esperaba que el partido le proporcionase una acción política que satisficiese sus objetivos de empleo, gasto social, redistribución y democracia industrial, mientras que el partido obtendría un anclaje de votos que le permitiese ganar las elecciones. En el segundo engarce, que denominábamos coordinación económica, se conseguiría que las políticas económicas y sociales que convenían tanto a los partidos socialdemócratas como a los sindicatos tuvieran éxito, pues mediante ella se esperaba solucionar los dos principales problemas que preocupaban a los partidos y sindicatos socialdemócratas: la crisis económica y el crecimiento del desempleo. En última instancia, toda esta serie de intercambios se podía resumir en uno más general donde el sindicato alcanzaría sus variados objetivos no sólo apoyando al partido a ganar las elecciones, sino ayudando desde la negociación colectiva en las tareas de gobierno; y el partido ganaría las elecciones al tener éxito las políticas que satisfarían a los sindicatos.

Pero, aunque la utilidad no es lo único que define a las relaciones solidarias, sí era una condición necesaria para que se mantuviesen. Las organizaciones partidistas y sindicales esperaban obtener a cambio de estas restricciones en su abanico de opciones estratégicas disponibles esos bienes y servicios señalados gracias a la colaboración de su socio. Las direcciones de las organizaciones estarían interesadas en seguir este complejo diseño mientras evaluasen que los beneficios obtenidos compensaban las restricciones estratégicas que acabamos de ver, pues éstas podrían suponerle a la organización un mayor o menor coste. A determinados sindicatos les era más difícil que a otros coordinar su actuaciones en la negociación colectiva con las políticas económicas de los gobiernos (o les era más difícil en unas coyunturas que en otras), y a unos partidos les era más fácil proporcionar esas políticas progresistas que a otros (o, igualmente, más en unos contextos que en otros). ¿Le compensaba así al sindicato los beneficios que obtenía del partido hermano a cambio de la estrategia sindical que tenía que practicar en las relaciones laborales y de abstenerse de participar directamente en política? ¿Le compensaba al partido socialdemócrata la contribución que hacía el sindicato a sus éxitos electorales a cambio de la actividad política que tenía que realizar en su favor, y en el caso de que estuviese en el gobierno, pactar con él sus políticas gubernamentales? La respuesta que diese cada organización sobre la cuestión de mantener o no las relaciones de solidaridad dependería en ultimo término de la contestación que diese a estas preguntas.

Surge así, como hemos visto, una serie de debates sobre lo que está ocurriendo con las relaciones de solidaridad y sus efectos sobre los partidos y sindicatos socialdemócratas. Una interpretación señala que recientes cambios estructurales, en última instancia de origen económico, impiden o dificultan que las organizaciones obtengan los bienes esperados y, por tanto, provocan el abandono de este diseño estratégico. En el intercambio político-electoral, tales transformaciones llevan a que ni el sindicato obtenga pleno empleo, más gasto social, redistribución, ni su apoyo le represente al partido un activo electoral (o le resulta incluso perjudicial). En la coordinación económica, la negociación colectiva centralizada pasa a

ser percibida como inapropiada para defender los intereses de las bases sindicales, y además innecesaria o incluso perjudicial para el éxito de las políticas económicas. En pocas palabras, cada organización constata que su antiguo socio ha dejado de proporcionar los anteriores bienes y servicios, o éstos ya no resultan un beneficio. Planteados en estos términos, se entiende que las tradicionales relaciones partido-sindicato de la socialdemocracia se disuelvan, pues ni el partido ni el sindicato alcanzarán sus objetivos (consolidación de la organización, votos, políticas sociales, contención salarial, etc) mediante su colaboración mutua, y por tanto, dejarán de evaluar que les merece la pena mantenerlas[54]. Se entiende así que se llegue a considerar que el modelo solidario de relaciones partido-sindicato no fue, por tanto, sino "el producto de un período histórico particular y una forma determinada de crecimiento económico" (Howell y Daley 1992-93:4). Pero esto tendría, además, importantes repercusiones sobre el destino de los partidos y sindicatos socialdemócratas. Dado que estas relaciones de solidaridad eran uno de los recursos fundamentales para los éxitos de los partidos y sindicatos socialdemócratas, su quiebra implicaría el declive para ambos.

Sin embargo no todos los investigadores están de acuerdo con la intensidad de esos cambios estructurales y con sus efectos perversos sobre la posibilidad de que la colaboración anterior les haya dejado de interesar, o que esto haya ocurrido en todos los países por igual. Por ejemplo, en el intercambio político-electoral, no está tan claro que todas las transformaciones sociales en los electorados europeos hagan perder el interés de los partidos socialdemócratas en contar con los apoyos de los sindicatos, incluso aunque el peso electoral de los sectores movilizados políticamente por éstos haya disminuido. Tampoco resulta tan evidente que los resultados sociales de las

[54] De hecho, planteado en estos términos, el fin de las relaciones solidarias entre los partidos y sindicatos socialdemócratas no debería ir acompañado de ninguna clase de enfrentamientos, pues unos y otros se habrían hecho conscientes de la inutilidad o futulidad de mantenerlas.

políticas socialdemócratas tengan que dejar de atraer a los sindicatos, sobre todo, si las políticas conservadoras son incluso más restrictivas[55].

En segundo lugar, incluso aceptando que se han producido cambios macroestructurales en las condiciones económicas y electorados europeos, podrían existir aún razones de peso para mantener las relaciones de solidaridad. Hemos visto que los sindicatos, mediante su contribución al éxito de las políticas de los gobiernos socialdemócratas, podrían seguir prestando un poderoso servicio en los resultados electorales de los partidos aunque se hubiera disminuido su capacidad de movilizar políticamente a los trabajadores en favor de un determinado partido. Igualmente, en contra de lo que se suele afirmar, la coordinación económica podría ser incluso más necesaria con políticas de oferta, pues la contención salarial permitiría luchar contra la inflación y el desempleo sin tener que endurecer tanto la política monetaria. Además, si los partidos conservadores abrazasen una interpretación que, en sus últimas consecuencias, cuestiona toda acción sindical en las empresas y en el ámbito político, el interés de los sindicatos en que los gobiernos fuesen socialdemócratas se reforzaría.

En tercer lugar, quizás podrían existir otros factores que *complicasen* las relaciones partido-sindicato de solidaridad sin ser necesario que se produjesen intensos cambios estructurales de orden económico o social. Este parece ser especialmente el caso del sur de Europa donde se ha defendido que carecía de las condiciones necesarias para que el diseño estratégico que entrañaban las relaciones solidarias tuviera éxito. Se plantea así la duda de si los posibles fracasos en todos algunos de estos intercambios de bienes y coordinación de actividades entre los partidos socialistas mediterráneos y sus sindicatos se han producido por los efectos de cambios más o menos de orden macroestructural, o por el contrario, obedece a que no se daban las condiciones institucionales necesarias para su éxito.

Pero, además, la experiencia sureuropea en los años ochenta y noventa abre otro debate, pues cuestiona los supuestos efectos

---

[55] El máximo líder de CCOO ha manifestado así que incluso entre los conservadores siempre resultará mejor ser gobernados por Kohl que por Thatcher.

perversos del fin de las relaciones de solidaridad para los éxitos de los partidos socialdemócratas y de los sindicatos. Los éxitos electorales de los partidos socialistas en el sur de Europa en los años ochenta y noventa señalan así que efectivamente las relaciones de solidaridad con los sindicatos sean una condición necesaria. También se ha puesto en duda que la colaboración de los sindicatos sea necesaria para llevar a cabo políticas económicas socialdemócratas, o que los partidos sean imprescindibles para que los sindicatos puedan influir con éxito en la política. En este caso, los problemas aparecen no porque las relaciones hayan dejado de dar sus frutos, sino al mantenerlas una vez que los han dejado de dar. Liberadas las dos organizaciones de sus antiguas ataduras, podrán readaptarse a los nuevos contextos y tener éxito en sus actividades.

Por último, aún aceptando que las relaciones de solidaridad ya no son útiles o convenientes esto no significa que necesariamente los partidos socialdemócratas y los sindicatos ya no vayan a colaborar, y probablemente sean pocos los que rechacen que la colaboración con la otra organización sea siempre inútil o perjudicial. Probablemente la mayoría de los miembros de ambas organizaciones acepten que en determinados momentos su colaboración pueda ser muy útil, pero dicha colaboración será puntual.

En pocas palabras, la transformación de las relaciones entre el Partido Socialista Obrero Español y la Unión General de Trabajadores, ocurrida a finales de los años ochenta cuando el primero gobernaba, se inserta en una serie de debates no cerrados donde se discute hasta qué punto siguen siendo útiles y convenientes las relaciones entre los partidos y sindicatos socialdemócratas para los éxitos de cada organización y de qué forma, cuáles han sido las posibles causas de los cambios en la valoración de su colaboración, y cuáles serán sus efectos en cada organización.

CAPITULO SEGUNDO

EL CAMBIO DE MODELO OFICIAL DE RELACIONES PARTIDO-SINDICATO EN LA SOCIALDEMOCRACIA ESPAÑOLA

En el primer capítulo hemos visto por qué se consideraba en los partidos socialistas y en las organizaciones sindicales occidentales que su colaboración mutua constituía la mejor estrategia para obtener sus objetivos a corto y largo plazo, así como los debates que se generan por disensiones ocurridas entre ambas organizaciones y en distintos países europeos. En este capítulo vamos a estudiar cuál ha sido el cambio exacto en su modelo oficial de relaciones partido-sindicato tanto en una como en otra organización ocurrido entre 1982 y 1993. ¿Hasta qué punto el modelo oficial que tuvieron en el PSOE y la UGT hasta finales de los años ochenta se ajusta al modelo solidario? ¿Se consideraba en el PSOE y en la UGT que su colaboración era un recurso necesario? ¿Qué características tiene su nuevo modelo de relaciones partido-sindicato? ¿Se trata de esa relación por intereses concretos? ¿No se trata más bien de romper con el modelo de "correa de transmisión", como ha sido sugerido?

1. De la solidaridad a los intereses concretos

1.1. La persistencia del modelo tradicional: la solidaridad necesaria

Cuando el Partido socialista llegó al poder en 1982, el modelo oficial de relaciones con la Unión General de Trabajadores seguía siendo el solidario. Las resoluciones de los congresos del PSOE mantuvieron durante toda la década de los ochenta la afirmación

tradicional de que compartían con este sindicato los mismos objetivos finales[1], como venía ocurriendo desde el pasado[2], para lo cual trabajaba cada uno, "fraternalmente", en su esfera de actuación más propia[3]. Bien es cierto que esta división de tareas no era totalmente

---

[1] En las resoluciones del 29º Congreso del PSOE, pág. 185, celebrado en 1981, afirmaban que:

"La existencia de un sindicato fuerte, [...] y *con una coincidencia estratégica en los objetivos socialistas* hará viable nuestro proyecto transformador de la sociedad" (mía la cursiva).

En el siguiente congreso de 1984 seguían afirmando (R.30C.PSOE.1984:12):

"La situación especial del PSOE en las instituciones públicas plantea a nuestro Partido una gran responsabilidad frente a las restantes fuerzas políticas y sindicales de izquierda y *frente a los movimientos sociales implicados en nuestra misma tarea de emancipación* de todos los sectores oprimidos y marginados de nuestra sociedad. La credibilidad social del PSOE y la coherencia práctica con su ideario básico dependerán en gran medida de su capacidad para mantener en contacto con tales fuerzas y movimientos, y para responder a sus legítimas demandas. Muy especialmente, la colaboración cada vez más estrecha con UGT, la obligación irrenunciable de los socialistas de militar en las filas del sindicato, representa, en la situación actual, un objetivo estratégico de primer orden" (mía la cursiva).

En el último congreso socialista de esa década, celebrado en 1988, hacían votos por mantener (R.31C.PSOE.1988:81):

"unas estrechas relaciones de colaboración entre ambas organizaciones que tienen intereses convergentes e idearios compartidos".

[2] "Desde su fundación los militantes del PSOE lo han sido de la UGT, sindicato de inspiración socialista. (...) Han sido los socialistas los que a lo largo de la historia de la UGT la han marcado con la impronta socialista y de sindicato revolucionario" (R.29C.PSOE.1981:193).

[3] En las resoluciones del 29ª Congreso del PSOE, pág. 193, celebrado en 1981, afirmaban:

"La proyección sindical del PSOE se ha expresado históricamente y se expresa en la actualidad a través de la militancia de sus afiliados en la UGT.

En el congreso de 1988 volvía a repetir que (R.31C.PSOE.1988:48):

"los socialistas nos proponemos defender, en el seno de la Unión General de Trabajadores, políticas que, en función de estrategias globales, prioricen un trabajo sindical directo y dé solución a los problemas concretos de los trabajadores en el seno de sus empresas. De este modo se atenderán los intereses inmediatos de los

rígida, puese se aceptaba que los sindicatos, en general, se implicaran directamente en el ámbito político[4].

Para los socialistas, la explicación última de que los sindicatos, y más precisamente la UGT, constituyesen su principal aliado estratégico, se encontraba en la centralidad de la clase obrera para su proyecto político, defendida en los congresos del PSOE durante toda la década de los ochenta[5]. Los socialistas tenían en cuenta que la sociedad capitalista actual era muy compleja, habían aparecido "grupos sociales intermedios" y se había producido "una modificación de las características de la clase obrera tradicional y el aumento que provoca la crisis económica de las contradicciones en su seno", por lo que (R.29C.PSOE.1981:7):

---

trabajadores, tarea primordial del sindicato, sin por ello renunciar a la solidaridad global que nuestra ideología propugna".

[4] "Los sindicatos desde hace tiempo ya no se limitan a la simple canalización de la reclamación salarial, ni al mejoramiento de las condiciones de trabajo. Se ha producido un desplazamiento de la acción sindical en el que la lucha por el reparto del producto, en el seno de las empresas, mediante el conflicto y el convenio, se ha trasladado a la arena pública, donde trabajo y capital compiten y negocian, por lo que se manifiestan con posicionamientos sociales y políticos" (R.31C.PSOE.1988:48).

[5] En la resolución política de su 29ª Congreso, pág. 5, celebrado en 1981, afirmaban:

"Hoy [por 1981], como en 1879 [año de fundación del partido], el PSOE es el instrumento más adecuado de que disponen los sectores populares españoles para conquistar democráticamente el poder político y conseguir, desde las libertades y gracias al apoyo de la mayoría social, la emancipación integral de la clase trabajadora".

En el último congreso socialista de la década de los ochenta sostenían que:

"la apertura del Partido a la realidad emergente de las nuevas demandas y movimientos sociales, no debe confundirnos y hacernos olvidar que el movimiento obrero, organizado en los sindicatos de clase, debe ser el principal aliado estratégico para el proyecto socialista. De ahí la necesidad de potenciar desde el Partido la consolidación de la UGT como primera fuerza sindical del país, y el mantenimiento de unas estrechas relaciones de colaboración entre ambas organizaciones que tienen intereses convergentes e idearios compartidos" (R.31C.PSOE.1988:81).

"La tarea de los socialistas a este respecto ha de consistir en dirigir la construcción de un amplio bloque socialista que vertebre al conjunto de capas y clase explotadas y oprimidas, que objetivamente están interesadas en la defensa de un mismo proyecto de transformación socialista de la sociedad".

Pero sin olvidar que, en ese bloque de clases, destacaba:

"por su peso y organización, la clase obrera, cuyos intereses específicos debe satisfacer, pero cuyas demandas deben integrarse [en] un conjunto coherente, es decir en un proyecto político que las agregue, estructure, organice y priorice".

Por su parte, en los congresos de la UGT se realizaban afirmaciones semejantes a las del Partido socialista. En las resoluciones de 1983 y 1986 los ugetistas declaraban no sólo ser un sindicato socialista, sino compartir los mismos objetivos finales con el Partido Socialista Obrero Español[6], como era la tradición[7], actuando cada organización en su esfera más propia[8]. Para los ugetistas, la

---

[6] En las resoluciones de su 33º Congreso, celebrado en 1983, afirmaban que en su:

"objetivo global de cambio y de transformación social, venimos convergiendo y aunando fuerzas con el Partido Socialista Obrero Español" (R.33C.UGT.1983:36).

En las resoluciones de su siguiente congreso, celebrado en 1986, volverán a afirmar que:

"Los intereses convergentes del Partido Socialista Obrero Español y la Unión General de Trabajadores, los idearios que ambas organizaciones comparten, deben proporcionar una mayor y más estrecha colaboración entre sindicato y partido" (R.34C.UGT.1986:85).

[7] "La necesidad de combinar la acción sindical y la acción política, desarrollando y profundizando esta dimensión en nuestro modo de hacer sindicalismo, *ha sido una constante histórica de la Unión General de Trabajadores desde los inicios mismos del socialismo en nuestro país*, donde el objetivo final de cambiar y transformar la sociedad española ha sido compartido por la UGT y por el Partido Socialista Obrero Español" (R.34C.UGT.1986:84, mía la cursiva).

[8] En su congreso de 1986 afirmaban así:

razón última de las relaciones con el PSOE se encontraba en el hecho de que sus objetivos les hacían intervenir no sólo en el ámbito sociolaboral sino también en el político, en el cual intervendrían por mediación del partido político con el que compartían ideario e historia[9]. Bien es cierto que no cerraban la posibilidad de hacerlo también más directamente, pues pretendían participar "en las instituciones del Estado" justamente por las mismas razones que les llevaban a colaborar con un partido político[10] (R.33C.UGT.1983:41,42). Pero para conseguir esta intervención en las instituciones del Estado contaban precisamente con la colaboración del partido hermano.

Ambas organizaciones eran así formalmente independientes, y a lo único que se comprometían era a mantener la cooperación. Esta se reforzaría porque, con objeto de ir en armonía hacia el fin común, la

---

"Los intereses convergentes del Partido Socialista Obrero Español y la Unión General de Trabajadores, los idearios que ambas organizaciones comparten, deben proporcionar una mayor y más estrecha colaboración entre sindicato y partido, sin que ello suponga menoscabo alguno del absoluto respeto que debe merecer la autonomía e independencia de cada organización en los ámbitos de actuación que les son propios" (R.34C.UGT.1986:85).

[9] En su 33º congreso, afirmaban los ugetistas:

"Conscientes de que la acción sindical, por sí sola, no es susceptible de crear las condiciones para una transformación global de la sociedad, y de las limitaciones que tiene la negociación colectiva para afrontar todos los problemas derivados de la crisis económica: parados, clases pasivas, políticas de inversiones, marco democrático de Relaciones Laborales, política fiscal, etc., nos reafirmamos en la necesidad de combinar la acción política y sindical, desarrollando al máximo la dimensión política de nuestro sindicalismo de cambio y de transformación social. Y en ese objetivo global de cambio y de transformación social, venimos convergiendo y aunando fuerzas con el Partido Socialista Obrero Español" (R.33C.UGT.1983:36).

En parecidos términos lo vuelven a sostener en su 34º Congreso Confederal de 1986, pág. 84. Igualmente, el Secretario General de la UGT empleó este razonamiento para justificar así por qué pedía el voto de los ugetistas para el PSOE en las elecciones generales de 1986 (*El País* 19-6-1986).

[10] Es decir, por "los límites de la negociación colectiva para una defensa integral de los intereses y problemática de los trabajadores" y la "cada vez más creciente intervención del Estado en la vida económica y social" (R.33C.UGT.1983:41,42).

división de tareas no excluía la influencia, en principio mutua, de socialistas y ugetistas en el gobierno de sus organizaciones[11]. Sin embargo, para evitar la tentación de subordinar la acción de una organización a la otra (y, en concreto, del sindicato al partido) en la UGT se recalcaba que ambas tareas tenían la misma importancia para la consecución de sus objetivos comunes[12].

Con todo, tanto en el PSOE como en la UGT nos encontramos con insinuaciones de una cierta "primacía" sobre su socio. En el primero se afirmaba que habían "sido los socialistas los que a lo largo de la historia de la UGT la ha[bían] marcado con la impronta

---

[11] Así, la Memoria de Gestión al 29º Congreso recogía la celebración de reuniones conjuntas de las ejecutivas de la UGT y del PSOE "de cara a la discusión de problemas comunes, buscándose en todo momento la complementaridad de las estrategias de una y otra organización, sin que al respecto hayan existido dificultades dignas de mención" (G.29C.PSOE.1981:256). El programa de actividades de la Secretaría de Política Sindical del PSOE (aprobado por el Comité Federal del Partido los días 13 y 14 de marzo de 1982 y recogido en los informes aprobados por el Comité Federal durante la gestión 1981-1984) recogía como acciones a desarrollar de conexión y apoyo a la UGT:

"facilitar las acciones pertinentes entre los órganos de dirección de las dos organizaciones y, sobre todo, dotar de la máxima fluidez a los necesarios contactos entre las distintas Federaciones de Industria de UGT y el PSOE en temas tan importantes como: Acciones reivindicativas en cada sector; proyección parlamentaria de los planteamientos de las Federaciones de UGT; redacción del programa electoral del PSOE; relaciones institucionales, etc".

[12] "Por la concepción socialista de nuestro sindicato, la distinción de funciones entre Partido y Sindicato, supone el reconocimiento de una igualdad fundamental entre las principales formas de organización de que se ha dotado la clase trabajadora. Autonomía y convergencia son dos formas de cooperación, de comportamiento y de salvar el protagonismo y participación del conjunto de la clase trabajadora en la lucha por el socialismo" (R.33C.UGT.1983:36).

En el siguiente congreso vuelven a afirmar:

"Aunque los ámbitos de actuación de la UGT y del PSOE son distintos, y la diferenciación de funciones clara, ambas organizaciones se reconocen en pie de igualdad como expresión de formas organizativas diferentes con las que la clase trabajadora se dota para consecución de un objetivo común a través de sus respectivos medios de actuación" (R.34C.UGT.1986:84).

socialista y de sindicato revolucionario" (Estrategia Sindical del PSOE, documento aprobado por el Comité Federal, Madrid, 15 de octubre de 1978)[13]. Es decir, teniendo en cuenta que la UGT se consideraba un sindicato de esencia "socialista" y "revolucionario", dichas esencias las adquiría en última instancia gracias a su relación con el Partido. En el Sindicato, por su parte, se consideraban en último término "el bastión más seguro y el último reducto del movimiento socialista", así como "la forma más importante de considerar el movimiento socialista" dado que "[l]a historia nos demuestra repetidamente que si el voto político es móvil, las estructuras sindicales permanecen" (R.33C.UGT.1983:45). En pocas palabras, si en el Partido se consideraban el inspirador de ideología, en el Sindicato el instrumento más seguro para defenderla.

Ahora bien, hemos visto como un rasgo fundamental de las relaciones de solidaridad era la defensa de su *utilidad* para que cada organización alcanzase sus objetivos, comenzando por los más inmediatos e instrumentales, hasta el extremo de considerarse que constituían la mejor estrategia para el éxito. En el PSOE se aseguraba que el apoyo de los trabajadores y de los sindicatos era "una de las condiciones básicas para el desarrollo y consolidación de la democracia" (G.28C.PSOE.1979:100; R.29C.PSOE.1981:185)[14], "vital para obtener un orden social más justo" (R.31C.PSOE.1988:48), "subordinar los intereses de una minoría a las necesidades de la mayoría" (R.29C.PSOE.1981:188)[15], o defender a los trabajadores

---

[13] Se volvió a repetir esta afirmación en las Resoluciones del 29º congreso del PSOE, pág. 193, celebrado en 1981.

[14] Esta afirmación se volverá a repetir en su 30º Congreso:

"Los socialistas pensamos que no hay democracia fuerte sin sindicatos fuertes" (R.30C.PSOE.1984:32)

Así como en el siguiente:

"Los socialistas nos sentimos identificados con el movimiento obrero con su lucha por el progreso, la justicia y la solidaridad, y creemos que sin sindicatos fuertes no hay democracias estables" (R.31C.PSOE.1988:13).

[15] En su 30º Congreso afirmaban que la libertad sindical y el derecho de huelgan constituyen "los genuinos instrumentos de autotutela de los trabajadores en un Estado democrático", conseguido gracias a la Ley Orgánica de Libertad Sindical

(R.29C.PSOE.1981:187) y a la sociedad en general (G.28C.PSOE 1979:80)[16]. Pero las acciones de la UGT también podían servir para objetivos instrumentales del Partido. Así, se consideraba que su identificación con el sindicato socialista les podría ser útil electoralmente, incluso si éste no englobaba a la mayoría del movimiento sindical. Por un lado, les servía de "referente", es decir de garantía de que, pese a las transformaciones ocurridas en el partido, seguían manteniendo sus "esencias" socialistas, y se diferenciaban aún de los partidos de centro[17]. No se concebía por aquel entonces un partido socialista que no tuviese una interlocución y arraigo entre los trabajadores y sus representantes sociales[18]. Por otro lado, convencidos de la capacidad de los sindicatos para movilizar a los trabajadores en beneficio de un partido político determinado, la consolidación de la UGT podría evitar que el Partido Comunista extendiese su espacio político en la izquierda si "su" sindicato, CCOO, se hacía hegemónico dentro del movimiento sindical, y lograba que un gran número de votantes socialistas, que se habían inclinado

---

(R.30C.PSOE.1984:31). En su siguiente congreso, celebrado en 1988, vuelven a incidir que la libertad sindical suponía avanzar en la democratización de la economía y de la sociedad.

[16] En su congreso de 1984 afirmaban que unos sindicatos fuertes eran una de las piezas claves para "asentar una sociedad de bienestar y justicia" (R.30C.PSOE.1984:30). En su congreso de 1988 afirmaban:

"La progresiva presencia de los trabajadores en los órganos de dirección y de vigilancia en las empresas, su participación en los beneficios o en el capital productivo, bien a través de los fondos de pensiones, bien como contrapartida a una moderación salarial en la forma de participación en las acciones de las empresas o en la creación de fondos de inversión, son pasos importantes para extender la concepción democrática y participativa de la sociedad que propugnamos los socialistas" (R.31C.PSOE.1988:48).

[17] Joaquín Almunia, durante una entrevista con el autor celebrada el 29-7-96, me confirmó que esta era una opinión dominante dentro del PSOE.

[18] Esta búsqueda en los años setenta del "marchamo" obrero como forma de probar el arraigo popular del partido también existía en otros partidos socialistas como el francés. Sawicki (1997:9) comenta al respecto que era la época en la que se podía escuchar a "François Mitterrand stigmatiser à la tribune du Congrès de Nantes en 1977, les 'vrais petits-bourgeois' du CERES".

sindicalmente por ellos, se pasasen al PCE[19]. De ahí que, con motivo de las elecciones sindicales de 1980, afirmasen sin ambages que "[e]l protagonismo del Partido en el seno de la izquierda requiere, para su consolidación y fortalecimiento, la victoria de UGT en estas elecciones"[20]. Pero la utilidad de contar con la colaboración ugetista iba más allá de lo estrictamente electoral. Los socialistas pensaban que las acciones sindicales podían servir también de complemento a sus actuaciones parlamentarias de oposición[21], y, una vez en el poder, ser muy útiles para salir de la crisis económica, y reducir el desempleo de una forma solidaria (R.29C.PSOE.1981:142; R.30C.PSOE.1984:12,21,32; R.31C.PSOE.1988:47-48)[22]. Se esperaba así en el PSOE que la consolidación de una gran central

---

[19] Véase el Informe de Gestión de la Comisión Ejecutiva del PSOE al Comité Federal a primeros de noviembre de 1977, recogido en la Memoria de Gestión de la C.E.F. al 28º Congreso, mayo 1979, pág. 81; y "La Estrategia Sindical del PSOE", documento aprobado por el Comité Federal en Madrid a 15 de octubre de 1978.

[20] Resolución del Comité Federal del PSOE celebrado los días 18 y 19 de octubre de 1980, recogida en la Memoria de Gestión del Comité Federal del PSOE al 30º Congreso del Partido socialista, pág. 55.

[21] Con motivo de la Ley Básica de Empleo de UCD, el PSOE realizó acciones en el Parlamento y en la calle pero "[s]olamente a raíz de la firma del ANE en junio de 1981, han podido paliarse algunos de los apartados más regresivos de la Ley, en lo referente al grado de cobertura de los trabajadores desempleados" (G.29C.PSOE.1981:255).

[22] "El fortalecimiento del poder sindical y los consiguientes avances en la democratización económica y social son la base sobre la que se asienta toda actitud responsable y consciente de los trabajadores para afrontar los sacrificios que impone la crisis económica y el proceso de superación. (...) [U]n sindicalismo fuerte, con presencia real dentro y fuera de los centros de trabajo, es un factor imprescindible para promover mayores niveles de progreso y bienestar" (R.29C.PSOE.1981:142).

Y también:

"La necesidad de seguir combatiendo la crisis, de cohesionar la sociedad y de resolver positivamente los problemas de la adhesión a la CEE, hace que consideremos conveniente alcanzar una amplia concertación social, que permita, en un clima de paz social, ir construyendo una sociedad justa y solidaria con una economía sana y eficaz. Hacia ella queremos ir de acuerdo con la Unión General de Trabajadores" (R.31C.PSOE.1988:47).

sindical socialista pondría las bases para "una alternativa de poder del pueblo con un modelo de progreso político y económico inédito en el sur de Europa" (G.28C.PSOE:85), por lo que el apoyo de la UGT "har[ía] viable [su] proyecto transformador de la sociedad" (R.29C.PSOE.1981:185) hacia el Socialismo (G.28C.PSOE.1979:19)[23].

Los servicios que prestaría el PSOE a la UGT por su parte consistirían en acciones parlamentarias para apoyar "las medidas de Gobierno que aument[asen] y ref[orzasen] la capacidad y la eficacia de la lucha sindical" (R.30C.PSOE 1984:32)[24], o las ayudas del Estado a los sindicatos de clase más representativos (R.30C.PSOE.1984:32)[25], así como apoyar a la UGT en las elecciones sindicales para "cambiar en beneficio de la UGT la relación de fuerzas en el campo sindical" (G.28C.PSOE.1979:100).

Igualmente, en la UGT se defendía que la colaboración con el PSOE no sólo era necesaria para "crear las condiciones para una transformación global de la sociedad" (R.33C.UGT.1983:36), esto es para los fines últimos del sindicato, sino también para conseguir esos objetivos instrumentales y más a corto plazo. Así, ayudar al PSOE a ganar las elecciones serviría para que éste hiciese más fácil la actuación sindical en el terreno de las relaciones laborales[26], o

---

[23] Así, en las resoluciones de una reunión ordinaria del Comité Federal del PSOE, celebrado los días 5 y 6 de febrero de 1983, se recoge que el Vicesecretario General del PSOE, Alfonso Guerra, sostenía que la consolidación del Partido socialista se haría en tres direcciones: "elecciones municipales y autonómicas, crecimiento, desarrollo y endurecimiento de la organización, y consolidación de la UGT como primera fuerza sindical" (Resoluciones recogidas en el Informe de Gestión del Comité Federal del PSOE al 30º Congreso, pág. 26).

[24] Véase también "Potenciación del sindicalismo desde el Partido" en las Resoluciones del 29º Congreso, pp 191 y 192, celebrado en 1981. También "Políticas de reforzamiento sindical" en las Resoluciones de su 30º Congreso, pp. 32-33, celebrado en 1984. Finalmente, "Los interlocutores de nuestra política" en las Resoluciones de su 31º Congreso, pág 48, celebrado en 1988.

[25] Y, más en concreto, "[l]a UGT (...) deberá recuperar en el más breve plazo el patrimonio histórico que se arrebató en 1939" (R.30C.PSOE.1984:32).

[26] "El 28 de octubre supuso un paso importante en la consolidación del sistema democrático y el inicio de una esperanza de cambio. (...) La UGT ha apoyado

conseguir "la defensa y mejora de las condiciones de los trabajadores" en aquellas cuestiones donde la acción sindical en la negociación colectiva no pudiese llegar (R.33C.UGT.1983:35-45). A cambio, la UGT se comprometía a "una apoyo firme de posturas progubernamentales" (R.33C.UGT.1983:45), y pediría el voto por el PSOE en las diversas confrontaciones electorales (R.33C.UGT.1983; R.34C.UGT.1986). En pocas palabras, en ambas organizaciones se tenía la convicción de que mediante su colaboración conseguirían el grado de hegemonía política y sindical que sus correligionarias habían conseguido en el Norte de Europa[27].

Finalmente las relaciones entre el PSOE y la UGT, según se declaraba en ambas organizaciones, presentaban ese rasgo de exclusivismo que se comentó en la introducción que tenían las relaciones de solidaridad[28]. Es decir, que, de entre todos los posibles partidos -cuya actividad era necesaria para complementar las acciones

---

abiertamente el programa del Gobierno del PSOE e incluso ha aportado no sólo su esfuerzo militante sino también parte de los cuadros del Sindicato. Se ha hecho en la convicción que el mismo recoge parte de nuestro proyecto como Organización para dar respuesta a los problemas de la clase trabajadora. El cambio político ha de significar, por lo pronto, la definitiva consolidación del sindicalismo en España (...) (R.33C.UGT.1983:40).

[27] En la Memoria de Gestión de la Secretaría de Política Sindical al 30º Congreso del PSOE, celebrado en 1984, se estimaba que el triunfo de la UGT en las elecciones sindicales de 1982 permitía "avanzar sustancialmente en la consolidación de un proyecto global socialista en la sociedad española" y "pensar seriamente en la viabilidad de la hipótesis de un modelo sindical y político centroeuropeo que permita a la familia socialista ocupar el espacio político y sindical de la izquierda" (G.30C.PSOE.1984:62). Igualmente en las Resoluciones del 33º Congreso de la UGT se afirmaba que, en función de cómo se desenvolviesen sus relaciones con el Gobierno del PSOE, la UGT pasaría "a ser la fuerza hegemónica del sindicalismo español o no" (R.33C.UGT.1983:44). En la Memoria de Gestión del 34º Congreso la Secretaría de Organización afirmaba que el objetivo en las próximas elecciones sindicales era ir "conformando paulatinamente así un mapa sindical en España cercano a los existentes en el centro y norte de Europa" (G.34C.UGT.1986:82).

[28] "Nunca deberán los sindicalistas socialistas desligarse de la vida orgánica del Partido y nunca los órganos del Partido deberán considerar que la actividad sindical es algo ajeno a lo político" (R.29C.PSOE.1981:193).

de la UGT- y, de entre todos los posibles sindicatos -que representaban a los trabajadores-, una organización, y sólo una, era la elegida[29]. En el caso del PSOE nos encontramos, por de pronto, que era obligatorio la afiliación a la UGT (hasta 1990), aunque no a la inversa[30]. En segundo lugar, los servicios anteriormente comentados

---

[29] Quedó así bien claro en los tres congresos celebrados por el PSOE en la década de los ochenta. En el congreso del año 1981 se afirmaba:

"Los socialistas acudiremos al Comité de Empresa defendiendo una opción determinada. La marcada por la Sección Sindical correspondiente de la UGT" (R.29C.PSOE.1981:190).

En el congreso del año 1984 a su vez:

"Dentro del objetivo de la defensa de los intereses globales y políticos de los trabajadores han de encauzar dos políticas fundamentales: potenciar, reforzar y apoyar la acción de la Unión General de Trabajadores, el sindicato socialista, y desarrollar hermanadamente con la UGT las políticas concretas de lucha contra el paro y la crisis" (R.30C.PSOE.1984:32).

En el de 1988 se recordaba:

"La necesidad de seguir combatiendo la crisis, de cohesionar la sociedad y de resolver positivamente los problemas de la adhesión a la CEE, hace que consideremos conveniente alcanzar una amplia concertación social, que permita, en un clima de paz social, ir construyendo una sociedad justa y solidaria con una economía sana y eficaz. *Hacia ella queremos ir de acuerdo con la Unión General de Trabajadores*" (R.31C.PSOE.1988:47, mía la cursiva).

Los ugetistas, por su parte, afirmaban lo mismo:

"El Partido Socialista Obrero Español es la única opción política capaz de ofrecer soluciones aceptables a los problemas que nuestra sociedad tiene planteados (...). Tan sólo el proyecto político que el PSOE encarna coincide esencialmente con los objetivos de transformación y autoemancipación que la UGT propugna" (R.34C.UGT.1986:85).

[30] "Los miembros del partido, asalariados y trabajadores autónomos, están obligados a actuar sindicalmente, solicitando el ingreso en la Unión General de Trabajadores. En su acción sindical deberán aplicar y defender la estrategia del Partido, decidida por los órganos competentes del mismo en cada caso. El militante del exterior que no trabaja para la Administración española se le reconocerá su afiliación al sindicato de su rama que sea afín a la UGT, y, por lo tanto, no se le exigirá su afiliación a la UGT, quedando automáticamente obligado a ello a su retorno a España o al comenzar a trabajar para la Administración o para cualquier ente sobre el que tenga jurisdicción España" (Art. 9, Título I, Estatutos Federales).

se prestarían, en la medida de lo posible, con carácter de exclusividad a la organización hermana. Así el PSOE pedía abiertamente votar por la UGT en las elecciones sindicales (R.29C.PSOE 1981:186; R.31C.PSOE 1988:81)[31], congratulándose por sus resultados en dichas elecciones[32], o apoyaban la creación de secciones sindicales ugetistas en las empresas (R.30C.PSOE 1984:31)[33]. La UGT hacía lo mismo con respecto al PSOE. Esta organización sindical pedía el voto de los trabajadores en favor del PSOE[34]. Las elecciones

[31] Resolución Política del Comité Federal del PSOE del 31 de octubre de 1986 en la que ante el proceso de elecciones sindicales el Partido socialista expresaba "su apoyo y solidaridad con la Unión General de Trabajadores, y manifiesta su satisfacción por los primeros resultados que indican la consolidación de la U.G.T. como sindicato mayoritario". Dicha muestra de satisfacción fue recogida en otra resolución de finales de ese año, recogidas ambas en la Memoria de Gestión del Comité Federal del PSOE a su 31º Congreso, pp. 155 y 156, celebrado en 1988. Aquella sería la última resolución oficial del PSOE mostrando su satisfacción por los resultados de unas elecciones sindicales.

[32] En el PSOE llegaban a hacer como suyos los resultados de la UGT:

"Debe también señalarse que el éxito electoral [de la UGT en las elecciones sindicales de 1980] hubiera sido mucho mayor si el Partido, sus organizaciones y militantes, siguiendo las resoluciones emanadas por nuestros órganos de dirección, se hubiera ocupado con una mayor intensidad del apoyo a UGT en las Elecciones Sindicales. La apatía de los militantes con excepciones notabilísimas, ha sido general y no debe volver a repetirse" (R.29C.PSOE.1981:187).

[33] "Los socialistas debemos apoyar a la UGT en la creación de secciones sindicales, procurando su operatividad en cuantas empresas desempeñemos nuestro trabajo, una vez que la citada ley [la LOLS] ha establecido el derecho a su constitución por los afiliados a un sindicato" (R.30C.PSOE.1984:31).

[34] "[E]l órgano máximo de decisión entre congresos, el Comité Confederal, debatió la actitud que la UGT debía tomar ante la oferta programática que el Partido Socialista Obrero Español presenta a la sociedad española, decidiendo su apoyo a ese partido y a ese programa (...). No hemos realizado esta opción con dogmatismo. Conocemos también las ofertas de la derecha española, tenemos presente lo que ha hecho y lo que ha dicho en los últimos tiempos (...). La UGT ha elegido apoyar al PSOE con plena conciencia: los trabajadores conocemos bien a la derecha española (¿quién en este país no la ha sufrido?) y tenemos perfectamente claro que la izquierda -y, hoy por hoy, no existe ninguna opción con garantía de seriedad, al margen del Partido Socialista Obrero Español- es la única alternativa que hará viable

municipales y autonómicas en 1987 fueron las últimas en que los dirigentes de UGT dieron su apoyo, con reservas, a los candidatos del PSOE.

Se entiende de esta manera la relación del PSOE con CCOO y otros sindicatos situados fuera del marco orgánico de la UGT. Para el liderazgo del PSOE durante esta etapa (hasta su congreso de 1990) hablar de CCOO era hablar del PCE (G.28C.PSOE.1979:99-101). No les cabía duda que en este sindicato querían reforzar electoralmente al Partido comunista (G.28C.PSOE.1979:99-101, 205) o, una vez que los socialistas estaban ya en el gobierno, la radicalización de CCOO tenía el objetivo de desgastar las posiciones socialistas en beneficio de los comunistas[35]. Las relaciones del Gobierno socialista con la dirección de Comisiones se redujeron, por tanto, a mantener las reuniones que fuesen necesarias para guardar las apariencias, mientras que con la Ejecutiva ugetista se celebraban muchas más[36]. Y es que relacionarse en este período con otro sindicato que no perteneciese a la UGT hubiera causado problemas con el sindicato hermano[37]. Por su parte, la UGT hacía caso omiso del PCE/IU[38], o aparecía como un partido que no dudaba en pactar

---

una efectiva acción de Gobierno que asegure a nuestro país mayores cotas de justicia social y bienestar, auténticas dimensiones del progreso democrático" (Artículo de Nicolás Redondo, Secretario General de UGT, aparecido en el diario *El País* el día 19 de junio de 1986).

[35] Véase el Informe de Gestión de la Secretaría de Política Sindical aprobado por el Comité Federal del PSOE, celebrado los días 14 y 15 de enero de 1984, en "Informes aprobados por el Comité Federal durante la Gestión 1981-1984", pág. 27, op.cit.

[36] Esta opinión dentro del PSOE me fue confirmada por Joaquín Almunia durante una entrevista celebrada el 29-7-96.

[37] El Informe de Gestión de la Secretaría de Política Sindical del PSOE sostiene que dicha Secretaría se había reunido con otros sindicatos no ugetistas, pero de acuerdo con la Comisión Ejecutiva de la UGT (recogido en "Informes aprobados por el Comité Federal durante la gestión 1981-1984, pág. 16, op. cit.).

[38] Al término de la primera legislatura socialista (1982-1986) para el Secretario General de la UGT no había en la izquierda más alternativa "con garantía de seriedad" que la que ofrecía el PSOE (Afirmación aparecida en un artículo de Nicolás Redondo aparecido en el diario *El País* 19-6-86).

con la derecha para "atenazar" al Partido Socialista (R.33C.UGT.1983:39).

Queda así confirmado que, en los congresos del PSOE y la UGT celebrados en la década de los ochenta así como en documentos de su dirección, su modelo oficial de relaciones partido-sindicato era el solidario. Es decir, se confiaba en que ambas organizaciones, el partido político y la confederación sindical, con idearios compartidos y actuando cada una en su esfera de acción propia pero igualmente necesaria, conseguirían gracias a su colaboración, influencia mutua y dedicación exclusiva alcanzar la hegemonía política y sindical, y acercarse así a sus objetivos finales de emancipación social. Existía, pues, entre ambas organizaciones un alto grado de consenso sobre solapamiento de fines, ámbitos en los que había que actuar, reparto de papeles y coordinación de sus actividades. Bien es cierto que existía cierta ambigüedad en el Partido sobre que los dos ámbitos fuesen igual de relevantes y, en el sindicato, el reparto de éstos.

1.2. El modelo de intereses concretos: las relaciones como un recurso disponible

A lo más tardar, cuando comenzó la década de los años noventa, las afirmaciones de compartir los objetivos finales, de entrega mutua, de constituir su colaboración una condición necesaria para su éxito, desaparecieron de sus respectivos congresos (tanto en el 35 Congreso de la UGT como en el 32 Congreso del PSOE, ambos en 1990)[39]. De hecho, el cambio de modelo se aprecia más por lo

[39] Ya no habrá más afirmaciones del tipo de "la apertura del Partido a la realidad emergente de las nuevas demandas y movimientos sociales, no debe confundirnos y hacernos olvidar que el movimiento obrero, organizado en los sindicatos de clase, debe ser el principal aliado estratégico para el proyecto socialista. De ahí la necesidad de potenciar desde el Partido la consolidación de la UGT como primera fuerza sindical del país, y el mantenimiento de unas estrechas relaciones de colaboración entre ambas organizaciones que tienen intereses convergentes e idearios compartidos" (R.31C.PSOE.1988:81); o la defensa de que el PSOE era "la única opción política capaz de ofrecer soluciones aceptables a los problemas que nuestra sociedad tiene

que desaparece de sus resoluciones que por una descripción precisa de cómo pretendían que fuesen sus relaciones mutuas a partir de entonces, confirmando principios anteriormente enunciados *pero que ahora tienen consecuencias totalmente distintas para sus relaciones.*

Según el 32 Congreso del PSOE, este partido pretendía "mantener y ampliar los apoyos sociales y políticos para aplicar en la práctica su proyecto", y fomentar que "diversos colectivos sociales sectoriales" se expresasen dentro del Partido para enriquecer sus políticas (R.32C.PSOE 1990:20,21). Dichas aspiraciones nacían de la utilidad de los agentes sociales para que el PSOE pudiese llevar a cabo sus objetivos. En concreto, los sindicatos, junto a los nuevos movimientos sociales (de consumidores, ecologistas, vecinos, usuarios etc), seguían siendo importantes para que la sociedad controlase su propio cambio, avanzar en la democracia económica, desarrollar poderes compensatorios sociales frente "al poder de la propiedad privada dentro del propio mercado" (R.32C.PSOE 1990:50), o para que los trabajadores participasen "en las decisiones sobre la organización de la producción, la incorporación de innovaciones tecnológicas o los planes de desarrollo de la empresa", y así "asegurar la estabilidad del empleo, un reparto justo de las rentas producidas, el reparto del trabajo y unas mejores condiciones en la actividad laboral" (R.32C.PSOE 1990:51). Y todavía se proponían "coincidir con los movimientos sociales y, muy principalmente, con los sindicatos, ya que éstos desde su propia perspectiva y con plena autonomía, son también agentes activos del cambio social" (R.32C.PSOE 1990:52)[40].

Pero, según las resoluciones de aquel congreso, ni la utilidad de las organizaciones sindicales estaba asegurada[41] ni, sobre todo, se

---

planteados (...). Tan sólo el proyecto político que el PSOE encarna coincide esencialmente con los objetivos de transformación y autoemancipación que la UGT propugna" (R.34C.UGT.1986:85).

[40] La Memoria de Gestión de la Ejecutiva del PSOE a su 33º Congreso, pág. 39, (marzo de 1994) recoge así la celebración de reuniones de miembros de la ejecutiva o del Gobierno del PSOE con los sindicatos.

[41] "Los sindicatos, como forma de organización de los trabajadores, pueden orientarse en el futuro en dos direcciones, según cual sea la concepción que tengan

desprendía de ella una relación exclusiva con la Unión General de Trabajadores. Esta confederación sindical ya no aparecía como ese vehículo privilegiado para llegar a las clases trabajadoras, y socio preferente en un proyecto común, actuando cada uno en su ámbito más propio pero influyéndose mutuamente[42]. Es más, el movimiento sindical, en general, dejó de ser "el principal aliado estratégico"[43], pues las clases trabajadoras perdieron para el PSOE su antigua "centralidad"[44]. Esto no quiere decir que la situación de los trabajadores ya no fuese motivo de interés a los socialistas, ni tampoco que los trabajadores no siguiesen sufriendo las injusticias que "el desarrollo general de nuestra civilización y, en particular, la

---

de su función social: hacia su fraccionamiento en la defensa de intereses corporativos, rehuyendo y enfrentándose políticamente a los proyectos globales de cambio social, o hacia su constitución en organizaciones socialmente responsables que actúan no sólo como canales reivindicativos sino de participación de los trabajadores en la decisión de las políticas económicas y sociales" (R.32C.PSOE.1990:28).

[42] Ahora:

"El Partido Socialista Obrero Español (...) define sus programas sin ataduras predeterminadas con otros movimientos políticos y sociales" (R.32C.PSOE.1990:7).

[43] Así, por ejemplo, en las metas de los objetivos organizativos del Partido socialista no hay mención expresa ni a la UGT en particular, ni a los sindicatos en general (R.32C.PSOE.1990:137). Más tarde, cuando enunciaban que querían abrirse a la sociedad, los sindicatos no ocupaban ninguna posición especial entre las organizaciones de consumidores, defensa del medio ambiente, deportativas, etc (R.32.PSOE.1990:143).

[44] "El PSOE es un partido que lidera y se apoya en un amplio colectivo social de trabajadores, profesionales, mujeres, grupos que soportan algún tipo de dominación, fuerzas progresistas, movimientos sociales tradicionales y nuevos, en resumen, un colectivo social plural" (R.32C.PSOE.1990:21).

Y el Socialismo es ahora:

"un proyecto de emancipación que aspira a que *las personas* sean libres e iguales y puedan alcanzar el máximo grado de autonomía personal para realizar sus propios proyectos de vida, dentro de una sociedad solidaria" (R.32C.PSOE.1990:37, mía la cursiva).

Para el PSOE, a la clase trabajadora solo le queda el mérito de haber dado nacimiento al Socialismo (R.32C.PSOE.1990:35).

evolución del sistema capitalista han ido produciendo" (R.32C.PSOE.1990:38). Pero ya no eran los únicos que estaban sometidos a situaciones de dominación[45], ya que, "más allá de la dominación económica ejercida directamente en la producción, existen otros problemas, entre los que se deben destacar: la dominación que se puede sufrir como consumidor, las dominaciones étnicas y culturales" (R.32C.PSOE.1990:39). Y, por tanto, los trabajadores no constituían sino un grupo social más al que defender y con el que contar, junto a otros[46]. De ahí que el PSOE lo que pretendiese ahora fuera "incorporar a su proyecto la savia que aport[asen] los nuevos movimiento sociales".

Esta actitud hacia el movimiento sindical contrasta, sin embargo, con su forma de enfocar las relaciones con esos nuevos movimientos sociales. Con éstos mantenía su vieja creencia de que un partido que pretendiese ocupar un amplio espacio político y social, y representar a una mayoría de ciudadanos progresistas, no sólo tendría que estar abierto a "aquellas fuerzas y sectores implicados en procesos políticos convergentes" sino también integrarles "en su ámbito organizativo" al mismo tiempo que propiciar la participación de los militantes del PSOE "en la vida de las organizaciones sociales" (G.33C.PSOE.1994:38,40). No se trataba, como con los sindicatos,

---

[45] Por dominación entienden como aquella situación en la cual "unos deciden, sin legitimidad democrática para hacerlo y de acuerdo a su propio beneficio, sobre la vida de los demás, sobre lo que se produce y sobre lo que se reparte" (R.32C.PSOE.1990:39).

[46] "Los elementos de desigualdad económica y el reparto desigual del poder económico que existen en las sociedades de nuestros días, hacen que el conflicto de clases continúe siendo uno de los problemas básicos hacia cuya superación se dirige el proyecto socialista. [Pero] a medida que se van superando los aspectos más hirientes de la desigualdad económica y se van logrando cubrir dignamente para la mayoría de la población las necesidades básicas de manutención, vivienda, salud o educación, otras manifestaciones de desigualdad, a las que el socialismo ha prestado menos atención históricamente, van cobrando una importancia central. Junto a la lucha contra la explotación económica (...), el socialismo es un proyecto político de emancipación que aspira a impulsar una efectiva igualdad social y de oportunidades entre las personas que soportan cualquier tipo de dominación" (R.32C.PSOE.1990:43).

de que las relaciones se mantuviesen cuando las organizaciones sociales convergiesen por iniciativa propia con los planteamientos del PSOE, sino que se pretendía ejercer esa influencia, en principio, mutua. El Partido estaría abierto a las experiencias de los nuevos sectores sociales, habría de promocionar las experiencias sectoriales dentro de la organización al mismo tiempo que la labor de los militantes socialistas conseguiría consolidar, dotar de madurez y de "progresismo" al tejido asociativo (G.33C.PSOE.1994:40)[47].

Igualmente, dentro de un descenso general de la relevancia de las organizaciones sindicales, la actitud del PSOE hacia CCOO mejoró (a pesar de que se considera el período entre 1987 y 1994 como de enfrentamiento con los sindicatos), ya antes incluso de que la dirección de este sindicato mostrase públicamente desavenencias con la de IU desde 1995. Así, aunque consideraban que Comisiones se caracterizaba por tener, como UGT, un comportamiento equívoco entre "una política de acuerdos" o realizar "plataformas reivindicativas que conduc[ían] a elevaciones del conflicto social" (G.33C.PSOE.1994:29), este sindicato dejó de aparecer en sus documentos como la correa de transmisión del PCE. Del mismo modo, la Memoria de Gestión del Partido recogía por primera vez la asistencia de miembros de la Secretaría de Asuntos Económicos, Sociales y Sindicales del PSOE a un Congreso Confederal de CCOO (G.33C.PSOE:1994:102) y la celebración de reuniones con sus dirigentes. La propia entrada en el Comité Federal del Partido socialista de un dirigente de este sindicato, Julián Ariza, en 1992, muestra el cambio de actitud del PSOE hacia CCOO y UGT[48]. Claro

---

[47] Parece con todo que, ante unos resultados no del todo satisfactorios en esos procesos deseados de adhesión colectiva de asociaciones, el Partido empezó a "reflexionar sobre la oportunidad de revisar dichas fórmulas [de adhesión colectiva] y modificar el concepto de afiliación por el de colaboración mutua, que permitirá a muchas organizaciones implicarse de una manera más confortable en nuestro proyecto" (G.33C.PSOE.1994:41).

[48] José María Zufiaur, antiguo Secretario Confederal de la UGT, comentaba durante una entrevista con el autor mantenida el 11-10-96 que en el transcurso de los últimos años se ha ido produciendo una incompatibilidad de hecho, que no de derecho, entre ocupar altos cargos de la UGT y ocupar puestos de responsabilidad

está, el PSOE dejó igualmente de hacer campaña por la UGT en las elecciones sindicales de 1990 y 1994-95[49].

En cuanto a cuestiones formales, el cambio más llamativo ha sido el fin de la obligación que tenían los miembros del PSOE de afiliarse a la Unión General de Trabajadores, lo cual ha permitido la pertenencia de un dirigente de CCOO al CF del PSOE. Si antes era, en principio, obligatorio para los miembros del partido que fuesen trabajadores activos afiliarse a la UGT, desde el 32 Congreso lo *obligatorio* es unirse a algún tipo de movimiento social, y solamente, cuando se elija a un sindicato, se *recomienda* entonces la Unión General de Trabajadores (Art. 10, R.32C.PSOE.1990:159)[50]. Igualmente, si antes los miembros del PSOE tenían que constituir grupos sindicales dentro de la UGT, desde el 32 Congreso se les autoriza a hacerlo (Art. 46, R.32C.PSOE.1990:172)[51].

---

del PSOE, o tener un cargo público por las listas de Partido socialista. Según el antiguo dirigente ugetista, el paso a esta situación frente a la anterior en que miembros de la ejecutiva nacional eran diputados por el PSOE, y miembros de las ejecutivas regionales eran senadores, fue la dimisión de su acta de diputado del Secretario General de la UGT, Nicolás Redondo, y del de Organización, Antón Saracibar, en otoño de 1987.

[49] Por parte del PSOE, el último ejemplo de preferencia de este partido hacia la UGT aparece en la memoria de la reunión extraordinaria de su Comité Federal, celebrado el 7 de abril de 1989. Allí parte de sus miembros insistieron, tras haberse producido la primera huelga general de la UGT al Gobierno socialista, en la necesidad de "restablecer algún tipo de diálogo con UGT". Con ese fin proponían crear una comisión del Partido y del Sindicato que evitase que se rompiesen definitivamente los cauces de encuentro, de CCOO no hacían mención (Memoria de Gestión del Comité Federal al 32º Congreso del PSOE, 1990, pág. 102).

[50] "Los miembros del Partido deberán actuar en algún movimiento social. En caso de actuar sindicalmente deberán hacerlo preferentemente en la Unión General de Trabajadores" (Art. 10 de los Estatutos Federales).

[51] Véase el art. 46 de los Estatutos Federales:

"Los militantes del Partido pertenecientes a UGT podrán formar grupos sindicales socialistas"

En la memoria de gestión de la Secretaría de Política sindical al 30º Congreso del PSOE (1984) ya no hacía mención de estos grupos sindicales. Si en el 29 Congreso se hablaron de ellos en "la coordinación de los sindicalistas del Partido",

En pocas palabras, aunque el PSOE todavía deseaba cooperar con los sindicatos porque eran "agentes activos para el cambio social", el hecho de que ya no hubiese ningún sindicato concreto con el que el PSOE fuese a mantener unas relaciones exclusivas, dividiéndose las tareas e influyéndose mutuamente por el hecho de compartir sus objetivos finales, así como que los trabajadores hubieran perdido su centralidad en el proyecto socialista, eliminó los rasgos básicos del modo solidario de colaboración entre partidos y sindicatos socialdemócratas.

En el caso de la UGT, este sindicato siguió calificándose de socialista y defendiendo la necesidad de dar una dimensión política a su práctica sindical[52] por las limitaciones de ésta última para conseguir todos sus objetivos[53]. E incluso siguieron afirmando que colaborarían

---

en el 30º Congreso al hablar de "coordinar la actuación de los socialistas en sus distintas instancias de trabajo (...) ante la instrumentación de alternativas y políticas concretas que afectan especialmente al sindicato" no se les hace mención (aunque todavía se afirmaba que pretendían "asegurar el cumplimiento generalizado del apartado 5.3. de la resolución sindical sobre la obligatoriedad de afiliación a la UGT de los militantes del Partido" (G.30C.PSOE.1984:64).

[52] "La UGT se reafirma en la orientación socialista de su práctica sindical y en la necesaria convergencia de la acción política y de la acción sindical, ya que consideramos insuficiente la acción sindical por sí sola para avanzar y desarrollar un proyecto de transformación de la sociedad" (R.35C.UGT.1990:137,138).

[53] Como en anteriores congresos, la UGT explicaba:

"La crisis económica y la complejidad de la sociedad moderna, junto al papel fundamental de las Administraciones Públicas en la vida económica y social (...) han puesto de manifiesto las limitaciones de la negociación colectiva, centro e instrumento clave de la acción sindical, para abordar y dar respuesta al conjunto de los trabajadores (...). De esta forma, la acción de los sindicatos no puede quedar reducida al nivel convencional y contractual de negociar todo entre empresarios y trabajadores y al ámbito de las empresas. Una acción sindical reduccionista al ámbito de la empresa y la negociación colectiva no es adecuada para la defensa de los afiliados y los trabajadores (...). La protección social, la sanidad, la educación, las políticas de vivienda y transporte, las políticas de empleo, de inversiones públicas e industriales, las acciones legislativas, son contenidos que influyen de modo decisivo en las condiciones de vida de los trabajadores que el sindicato representa y defiende y

con los partidos políticos con los que compartiesen objetivos[54]. Pero ahora de todo esto no se deducía la necesidad de proceder a un reparto de tareas con un partido concreto para que se encargase éste, y sólo éste, de llevar a la práctica los objetivos políticos del sindicato. Por el contrario, esa necesidad de dar una dimensión política a la acción sindical conducía ahora a rechazar que los partidos políticos "monopolizasen" la esfera política y que, por tanto, fuesen el canal necesario y principal para intervenir en la toma de decisiones políticas[55]. Así, la nueva estrategia política de la UGT, en primer

---

que escapan a las relaciones bilaterales entre empresarios y sindicatos" (R.35C.UGT.1990:135)

[54] "La cooperación con las fuerzas políticas o sociales que persiguen los mismos objetivos es, por lo tanto, fundamental para la consecución de sus fines de reformas y de transformación de la sociedad, ya sean a corto, medio o largo plazo (...). La UGT seguirá defendiendo una práctica de relaciones normalizada y estable, sobre bases nuevas y adecuada a la nueva realidad social y política, y homologable a la práctica de relaciones sindicales y políticas de nuestro entorno europeo. El respeto a la autonomía del sindicato es consustancial con el proyecto socialista" (R.35C.UGT.1990:138).

[55] "La UGT viene reivindicando que los sindicatos cuenten con un mayor poder institucional para así cumplir con su misión de defender mejor a los trabajadores. Una práctica sindical que no desarrolle su dimensión política sería anormal e inadecuada, claramente insuficiente para la defensa de los trabajadores (...). La UGT, desde su autonomía, viene definiendo propuestas en contenidos sindicales y en formas de negociación con el poder político para desarrollar su dimensión política y social. Para la UGT todo lo que incide en las condiciones de vida de los trabajadores en la empresa y fuera de ella no puede escapar a la acción sindical. *La negociación de la dimensión social y política del sindicato, la apropiación de la acción política en exclusiva por los partidos políticos y el exclusivo protagonismo de la institución parlamentaria no es propio de una sociedad moderna, compleja y plural.* El sindicato tiene el derecho y el deber de defender un proyecto global de transformación social, unas políticas de progreso, y de efectuar posibles negociaciones y convergencias en su práctica sindical, de negociar en pie de igualdad sus propuestas sindicales con instancias políticas" (R.35C.UGT:135-136, mía la cursiva).

Un líder de CCOO, Julián Ariza, hizo exactamente esta interpretación de lo ocurrido en España en el seminario, *Las relaciones entre partidos políticos y sindicatos en la sociedad contemporánea*, organizado por la Universidad Complutense de verano y publicado en Carlos Otero Hidalgo (1996:172):

lugar, daba por terminada la tradicional colaboración exclusiva con el PSOE, abriéndose a otros partidos políticos. La UGT, como organización, no ha vuelto a hacer campaña expresa por partido alguno en las elecciones generales desde las de 1986. En segundo lugar, se propusieron dar más énfasis a su acceso directo a los Poderes Públicos[56] mediante la institucionalización de canales neocorporatistas[57]. La "concertación social" se añadía así a la

---

"Lo que sí existía [entre los sindicatos y los partidos políticos] era una especie de división funcional, donde la dirección de la política, en términos muy genéricos, se atribuía al partido, y el protagonismo del frente económico y social se le daba al sindicato. Por tanto, había una mediación por parte del partido en las instituciones políticas. Esto es lo que se ha roto. Yo diría que no totalmente y con distinta intensidad en unos u otros países. Lo subrayo porque, de alguna manera, esta ruptura, muy gráfica en España, supone la remoción de la mediación política del partido ante las instituciones y en relación, por supuesto, al correspondiente sindicato afín. (...) lo que se ha producido en definitiva es un poder autónomo del sindicato para intervenir *de forma directa* frente a decisiones de las instituciones políticas que afectan al mundo del trabajo. *La intervención sindical en eso que llamamos espacios políticos, en la política, es un imperativo de su propia función, es decir, no es una intromisión en campo ajeno*" (mías las cursivas).

[56] "El objetivo de la democracia económica no puede reducirse a declaraciones de voluntades políticas, sino que debe concretarse en acciones programáticas concretas que se traduzcan en legislaciones, en formas y en contenidos de hacer política, de dar participación al conjunto de la sociedad, de establecer relaciones estables y fluidas entre el Estado y el poder político con la sociedad y las organizaciones de los trabajadores (...). La cultura de la Europa democrática ha demostrado que una articulación participativa del poder político con las fuerzas sociales es vertebradora socialmente y productiva económicamente (...). Para la UGT, las bases y avances de definición de un proceso hacia una mayor democracia económica, suponen una nueva organización del poder en la sociedad española que obliga (...) a que los agentes económicos que operan en el mercado tengan un mayor y más eficaz control social (R.35C.UGT.1990:136).

[57] "La UGT viene defendiendo la necesidad de cauces estables y permanentes de participación, negociación y diálogo social, delimitando siempre el papel y responsabilidad del poder político, situando la acción sindical en su autonomía e independencia, negociando en pie de igualdad con las Administraciones Públicas y los gobiernos (...). *La política de concertación de la UGT es la plasmación práctica y la articulación concreta de la dimensión política y social del sindicato* y la necesaria

colaboración con los partidos políticos, en general, como medio de complementar la acción sindical en las empresas, accediendo directamente a los centros de toma de decisiones políticas.

Así, aunque el sindicato socialista estaba todavía abierto a la cooperación con el partido socialista (así como con otros partidos políticos), su rechazo a otorgar a un partido concreto la característica de compartir con ellos sus objetivos finales, a conceder, por tanto, lealtades exclusivas, o a la división de tareas entre sindicatos y partidos políticos porque el ámbito político fuese más propio de éstos últimos, todo ello revelaba que las características básicas de las relaciones solidarias entre partidos y sindicatos se daban por finalizadas. A partir de ahora, se mantendrían las relaciones con los partidos políticos cuando fuese estrictamente necesario. Se entraba en un período de relaciones por intereses concretos[58].

---

interlocución con las diferentes administraciones e instituciones públicas, para hacer efectiva nuestra estrategia de solidaridad y defensa real del conjunto de los trabajadores, superando la mera denuncia sindical" (R.35C.UGT.1990:137, mía la cursiva).

[58] Este modelo de relaciones que tiene la UGT se ha mantenido después de la salida del equipo de Nicolás Redondo de la ejecutiva ugetista y de la derrota electoral del PSOE en las legislativas de 1996. El nuevo Secretario General de la UGT, Cándido Méndez, afirmaba al poco de llegar al cargo, que "la unidad de acción entre UGT y CCOO" estaba por delante de otro tipo de relaciones e inscribía el encuentro con el vicesecretario general del PSOE en el mismo nivel que el mantenido con otros partidos políticos, haciendo la precisión de que "el tiempo pasado no volverá" (*El País* 21-9-94). Casi tres años después, ante la primera reunión entre las direcciones máximas del PSOE y la UGT desde 1987 el Secretario General de la UGT volvía incidir que los viejos tiempos no volvían, que PSOE y UGT son "dos organizaciones independientes y cada una tiene su manera de abordar los problemas" por lo que el proceso de acercamiento con el PSOE no afectaría al diálogo de los sindicatos con el Gabinete del Partido Popular (*El País* 11-2-97). Igualmente el Secretario de Comunicación de la UGT, Antonio Ordóñez, entendía que entre el PSOE y la UGT había numerosos puntos de coincidencia, pero aseguraba que no habría *paso a dos* con el partido, sino unidad de acción con CCOO, al tiempo que rechazaba formar plataformas conjuntas con el PSOE para defender la sanidad o la educación públicas (*Cambio16* 24-2-97).

En conclusión, aquel alto grado de consenso sobre el solapamiento de fines, los ámbitos en los que había que actuar, el reparto de papeles y las estrategias se había desvanecido. Para ambos, sus antiguos aliados han dejado de ser ese canal privilegiado para intervenir en ámbitos en los que no lo hacían directamente. Y en ambos casos cada organización buscaría la cooperación sindicatos o partidos cuando fuese necesario[59]. Pero el PSOE ha equilibrado sus relaciones dentro del "movimiento obrero organizado" (pues, si se alejaba de la UGT, se acercaba a CCOO), y la UGT con respecto a los partidos políticos (si bien dicho equilibrio depende en última instancia de la utilidad de las otras organizaciones partidas[60]).

El fin de estos consensos y la aparición de un nuevo modelo de relaciones partido-sindicato se justifica, sin embargo, por razones distintas en las antiguas organizaciones hermanas. En el caso del Partido socialista en última instancia este nuevo modelo de relaciones venía ligado a la pérdida de la centralidad de los trabajadores en su proyecto y, por tanto, la importancia del ámbito laboral. En el caso del Sindicato socialista, por el contrario, se trataba más bien de rechazar la división de tareas y la existencia de ámbitos exclusivos y propios de una organización determinada. No se trataba, pues, de que el PSOE intentase ahora una actuación directa en los centros de trabajo, ni de que la UGT hubiera perdido interés en la política.

---

[59] No nos ha de extrañar así que la Memoria de Gestión de la dirección del PSOE al 33º Congreso (marzo de 1994) recoja que el aparato del partido siguió manteniendo negociaciones y el diálogo con las organizaciones sindicales, realizando su tarea de intermediación entre el Gobierno y las Comisiones Ejecutivas de UGT y de CCOO para solucionar contenciosos.

[60] Así, recientemente, el Secretario General de la UGT señalaba que la posición del grupo de Izquierda Unida ante el proyecto de ley sobre la reforma de pensiones, pactado entre los sindicatos y el Gobierno popular, era respetable, legítima, y con escasísimo eco en el Parlamento. El responsable de Acción Institucional de la UGT afirmaba igualmente que IU tiene "perfecto derecho a discrepar", pero lo importante era que "el proyecto salga del Parlamento en los términos pactados" (*El País* 20-2-97).

2. ¿De la subordinación a la autonomía?: La cuestión del poder entre organizaciones

Existe, sin embargo, una interpretación alternativa sobre el cambio producido en el modelo de relaciones entre el PSOE y la UGT. Según ésta, se trata más bien de haber pasado del "modelo de correa de transmisión", donde el sindicato se subordinaba al partido, a unas relaciones donde ambas organizaciones mantienen su autonomía en la toma de decisiones. Es cierto que, como modelo oficial, en el sindicato socialista siempre se rechazó la subordinación al PSOE[61], al mismo tiempo que se defendía que mantener unas "relaciones de solidaridad" con el Partido socialista no les impedía ser autónomos[62]. No es sino a partir de su 35º Congreso, celebrado en 1990, cuando exponen que ambos hechos resultan incompatibles[63].

---

[61] "La autonomía sindical es una condición esencial de nuestro sindicalismo y patrimonio del sindicalismo de orientación socialista. No creemos ni en la independencia ni en la sumisión o correa de transmisión, sino en la capacidad del sindicato para elaborar una estrategia autónoma y desarrollar todo su protagonismo en la transformación y democratización de la vida económica y social. La autonomía sindical supone la elaboración autónoma de nuestra organización, estrategia y acciones" (R.33C.UGT.1983:23).

En el último congreso de la UGT donde se defendió su relación solidaria con el PSOE (el 34 Congreso), celebrado en 1986, se declaraba que la construcción del socialismo conllevaba:

"una condición esencial [que] es la autonomía, lo que supone que es la voluntad única exclusiva de los afiliados la que sustenta la capacidad de la Unión General de Trabajadores para elaborar aquellas estrategias y actuaciones tendentes a la actuación y democratización de la vida económica y social" (R.34C.UGT.1986:84).

[62] "Los intereses convergentes del Partido Socialista Obrero Español y la Unión General de Trabajadores, los idearios que ambas organizaciones comparten, deben proporcionar una mayor y más estrecha colaboración entre sindicato y partido, *sin que ello suponga menoscabo alguno del absoluto respeto que debe merecer la autonomía e independencia de cada organización en los ámbitos de actuación que les son propios*" (R.34C.UGT.1986:85, mía la cursiva).

[63] "[N]uestro carácter de sindicato autónomo y de vocación masiva nos ha llevado a propugnar la necesidad de desechar las injerencias externas, los debates partidarios o las polémicas falsas sobre los llamados "modelos" sindicales, cuando en realidad, en el

Pero, ya desde principios de siglo, los anarquistas españoles habían puesto en duda esa "autonomía" de la UGT respecto del Partido socialista, por mucho que la proclamasen en sus congresos. ¿No dominaba el PSOE a la UGT durante la transición y la primera mitad de los años ochenta? Para resolver esta cuestión nos vamos a plantear primero qué significa que una organización esté controlada por otra y, por tanto, qué es el "poder", para a continuación comprobar si los datos disponibles confirman esta interpretación en el caso de las relaciones entre la UGT y el PSOE.

Galaskiewicz (1985:283) constata que los estudios sobre las relaciones entre organizaciones formales emplean un concepto weberiano del *poder* en términos de relación. El poder de un actor B sobre otro actor A no significa sino que B está capacitado para hacer cambiar el comportamiento de A de una manera favorable a los objetivos de B gracias a que éste controla bienes o servicios que A necesita. Así poder y dependencia son las dos caras de la misma moneda. Galaskiewicz (1985) expone igualmente las formas por las que un actor A puede disminuir su dependencia con respecto a un actor B, es decir su diferencial de poder. En primer lugar A aumenta su poder (disminuye su dependencia) con respecto a B si lo que tiene éste le deja de interesar. En segundo lugar se produce el mismo efecto si se produce un incremento del número de alternativas abiertas a A para obtener lo que B controla. En tercer lugar si A pasa a controlar algo que B necesita. Por último, igualmente aumenta el poder de A sobre B si se produce una reducción de las alternativas que tenía este último.

Si trasladamos esta concepción del poder a las relaciones entre organizaciones, en principio, un partido dominará a un sindicato, es

---

contexto de las democracias industriales europeas (y esto se puede constatar en el seno de la CES), sólo existe un verdadero "modelo" de sindicato: aquél que se basa en defender con la mayor eficacia posible los intereses de trabajadores, empleados públicos, parados, jubilados y, en general, sectores más desprotegidos de la sociedad. Lo del sindicato como correa de transmisión, no es ni siquiera un modelo. Es lo viejo, es una antigualla que parece contar cada vez con menos seguidores. Resulta singular que en nuestro país se defienda eso por parte de quienes no cesan de predicar, simultáneamente, la modernidad" (G.35C.UGT.1990:21).

decir, estará capacitado para hacer cambiar el comportamiento de éste en beneficio del primero, cuando controle recursos que el sindicato considere que le son vitales para la obtención de sus fines (entre ellos la supervivencia organizativa), y no puede hacerlo por otras vías[64]. Pero ¿qué puede querer decir que una organización emprende una acción colectiva en beneficio de otra, y no en el suyo propio? El ejercicio del poder entre organizaciones supone que determinadas acciones colectivas de la organización dominada no son llevadas a cabo en función de cómo los miembros de esa organización interpreten sus fines organizativos, sino de cómo lo hagan los miembros de la organización dominante. Los miembros de la organización dominada se encontrarían así ante la opción de, o emprender unas acciones que en otro caso no habrían realizado, o poner en peligro la supervivencia de la organización por riesgo de perder recursos necesarios, controlados por la organización dominante. De no existir, por tanto, las presiones de los miembros de la organización dominante, la organización dominada no realizaría unas determinadas acciones, o lo haría de otra manera.

En el caso que nos interesa encontramos que, efectivamente, los socialistas eran bastante explícitos en su deseo de influir en la UGT, es decir, de que actuase según entendían ellos los objetivos de un sindicato socialista. Aspiraban a desarrollar en aquel sindicato "la conciencia política de los trabajadores y defender el carácter del sindicato de inspiración socialista..."[65]. E, incluso, se proponían abiertamente "facilitar la presencia de los socialistas y su capacidad de decisión a la hora de elaborar su estrategia la UGT" (R.28C.PSOE.1979:5). Concretaban así no sólo cuáles deberían ser

---

[64] Ahora bien, siguiendo a Galaskiewicz (1985), en el caso de que el sindicato tuviera algo que, a su vez, el partido necesitase, sin poder obtenerlo éste por otros canales, el poder del partido disminuiría sobre el sindicato, mientras que el de éste último aumentaría. Se llegaría así a ese tercer tipo de relaciones donde lo que se produce es una interdependencia entre ambas organizaciones sin haber una posición dominante duradera.

[65] Véase la Estrategia Sindical del PSOE, documento aprobado por el Comité Federal, Madrid, 15 de octubre de 1978.

los objetivos de acción sindical más inmediatos[66], sino tambien la estrategia sindical adecuada. En los congresos del PSOE trataban asuntos referidos a la representación sindical (dónde debía aumentar la UGT su afiliación[67], o cómo representar a los trabajadores[68]), a las relaciones que debía establecer el sindicato con otros sectores sociales para facilitar la acción del partido[69], o con las Administraciones públicas y los empresarios[70]. Durante el período de crisis económica los socialistas incidieron especialmente en su interpretación de la

[66] Los socialistas consideraban que el sindicato debería concentrarse en la distribución de los costes de la crisis económica del modo más justo para los trabajadores (R.28C.PSOE.1979:3-4; R.29C.PSOE.1981:187).

[67] El Partido socialista recomendaba la sindicalización de los trabajadores de cuello blanco (técnicos, empleados y cuadros) porque de lo contrario se restaría fuerza a los sindicatos de clase y se favorecerían los intereses de la patronal (R.29C.PSOE.1981:190).

[68] La UGT debería así superar las diversas divisiones existentes dentro de los trabajadores (activos y parados; trabajadores, profesionales y pequeños propietarios; mujeres, jóvenes y emigrantes) (R.29C.PSOE.1981:185). Igualmente los socialistas temían que la crisis económica condujese a tomas de posturas corporativistas en algunos segmentos de la clase trabajadora, por lo que "los socialistas nos proponemos defender, en el seno de la Unión General de Trabajadores, políticas que, en función de estrategias globales, prioricen un trabajo sindical directo y dé solución a los problemas concretos de los trabajadores en el seno de sus empresas" (R.31C.PSOE.1988:48).

[69] "El Partido debe [...] facilitar el contacto entre estos movimientos sociales y el sindicato socialista, propiciando así plataformas más amplias de apoyo social a determinados reformas asumidas por el Partido" (R.30C.PSOE.1984:91).

[70] El Partido socialista consideraba y aconsejaba que, si un sindicato pretendía transformar la sociedad, era fundamental el control de las instituciones "ya que en el actual sistema desde las Instituciones Públicas se toman decisiones que condicionan la situación laboral y las condiciones y calidad de vida de los trabajadores". Pero igualmente "para que el Sindicato sea auténticamente poderoso, tiene que comenzar, siéndolo, lógicamente, en las empresas, y en una segunda instancia, ha de serlo en los ámbitos locales, para lo cual es preciso promover que desde el Gobierno Municipal se cuente con las Centrales Sindicales" (R.29C.PSOE.1981:191). Afirmaciones semejantes se volvieron a realizar en el 30º Congreso del PSOE en 1984.

acción sindical correcta para crear empleo[71]. No es de extrañar, por tanto, que cuando los socialistas consideraron que la UGT actuaba equivocadamente (es decir, los miembros de la UGT no daban la intepretación correcta a sus fines sindicales)[72], se propusieran corregirlo[73].

Parece que, además, los socialistas no se limitaron a exponer sus ideas sobre la acción sindical de la UGT, sino que incluso llegaron a crear unos llamados "grupos sindicales socialistas"[74], que reunían a los ugetistas militantes a su vez del PSOE[75]. Estos grupos debían

---

[71] Para los socialistas la política salarial y de empleo del sindicato tenía que ser planteada en un acuerdo global en el que participasen Administración, Patronal y Sindicatos representativos. Sus líneas generales pasaban en época de crisis por una moderación salarial que tuviese como contrapartida principal el mantenimiento del actual nivel de población asalariada y su progresivo incremento mediante la creación de puestos de trabajo (R.29C.PSOE.1981:188). En sus congresos de 1984 y 1988 volvían a incidir en las cuestiones de concertación social (R.30C.PSOE.1984:30; R.31C.PSOE.1988:48).

[72] "El respeto que nos merece el movimiento sindical no impide que contemplemos, con preocupación, la evolución reciente de la actividad sindical en España, que ha disminuido su carácter reivindicador frente al empresario y ha adquirido un contenido predominante de exigencias frente al Estado" (R.31C.PSOE.1988:13).

[73] "[L]os socialistas nos proponemos defender, *en el seno de la Unión General de Trabajadores*, políticas que, en función de estrategias globales, prioricen un trabajo sindical directo y de solución a los problemas concretos de los trabajadores en el seno de sus empresas" (R.31C.PSOE.1988:48, mía la cursiva).

[74] "Los militantes del Partido pertenecientes a la UGT formarán grupos sindicales socialistas constituidos en los centros de trabajo y articulados en los distintos sindicatos conforme a la estructura orgánica de la UGT. Los grupos sindicales no tendrán carácter orgánico y estarán coordinados por los Secretarios (responsables o delegados) sindicales del Partido en cada nivel, teniendo como misión fundamental el desarrollar y aplicar la política sindical del Partido decidida por los órganos competentes" (Art. 46, Título IV, Estatutos Federales).

[75] Los grupos sindicales socialistas ya habían existido durante la Segunda República y se volvieron a crear durante la Transición. Se dejó de hablar de ellos en la memoria de gestión de la Secretaría de Política Sindical al 30º Congreso. Todavía en el resumen del plan de actividades de la secretaría de organización para 1982 presentado en el Comité Federal del partido se pretendía desarrollar "los grupos

desarrollar la conciencia política de los trabajadores para evitar que el sindicato se convirtiese en "un mero instrumento de reivindicaciones económicas"[76] y perdiese su carácter de inspiración socialista[77]. Igualmente, debían llevar la política socialista, y su propaganda, a las fábricas, talleres y tajos, y desarrollar a través de la UGT la política sindical del PSOE[78]. Joaquín Almunia sostiene que también se pretendía evitar que sindicalistas no relacionados con la línea oficial pudiesen desestabilizar o reorientar el sindicato[79] [80].

---

sindicales socialistas en la UGT", junto a conseguir que los socialistas cumpliesen con la obligacón de afiliarse a la UGT y el apoyo en general al sindicato socialista (recogido en la Memoria de Gestión del Comité Federal del PSOE al 30º Congreso, pág. 9). Se volvió a afirmar que se potenciarían dichos grupos en una resolución del Comité Federal sobre organización del partido tras reunirse en julio de 1983 (recogida en la Memoria de Gestión del Comité Federal al 30º Congreso del Partido, pág. 30). Parece que hubo algún intento de revitalizarlos durante el enfrentamiento entre las direcciones de la UGT y del PSOE.

[76] Los dirigentes socialistas temían que, a la vuelta de las libertades democráticas, muchos trabajadores se afiliasen a la UGT "con una conciencia sindical, en el mejor de los casos, pero no política" (Estrategia Sindical del PSOE, documento aprobado por el Comité Federal del PSOE en Madrid, 15 de octubre de 1978), y que lo hiciesen "para resolver sus problemas personales", (Memoria de Gestión de la Secretaría Sindical al 28º Congreso del PSOE, pág.203).

[77] Temían los dirigentes socialistas que adquiriesen poder dentro de la UGT "afiliados que pertenecen a partidos políticos que nada tienen que ver con el socialismo que propugnamos y que pueden perturbar la marcha y características de esta Confederación Sindical [la UGT]" (Memoria de Gestión de la Secretaría Sindical al 28º Congreso del PSOE, pág.203). Joaquín Almunia, José Luis Corcuera y Jose María Zufiaur coincidieron en señalar, durante las entrevistas celebradas con el autor los días 29-7-96, 10 y 12-10-96, que este peligro se hizo patente con la integración en la UGT de una escisión de USO.

[78] Véase la Estrategia Sindical del PSOE, documento aprobado por el Comité Federal del PSOE en Madrid, 15 de octubre de 1978; y las Resoluciones del 29º Congreso del PSOE, pág.193, y las del 30º Congreso, pág. 90.

[79] Según afirmó durante una entrevista con el autor celebrada el 29-7-96.

[80] Se fijaron como áreas prioritarias para crear y que entrasen en funcionamiento dichos grupos sindicales en aquellos sectores y lugares donde CCOO era predominante, así como en aquellos sectores donde las federaciones de la UGT iban a celebrar próximos congresos. La constitución y coordinación de estos grupos

¿Hacen falta más datos para confirmar la opinión generalizada de que, frente a una independencia formal entre ambas organizaciones, existía una dominación real de la UGT por parte del PSOE?[81] ¿No debemos pensar que los líderes del Partido socialista controlaban las acciones de sus correligionarios del Sindicato? Es decir, según la concepción de poder expuesta anteriormente, ¿no dirigían los líderes de la UGT a su organización en función de lo que les exigían los líderes del PSOE, y no según su interpretación de los objetivos fijados en los congresos de la UGT?

Esta conclusión, sin embargo, es rechazada tajantemente por un antiguo dirigente de la UGT, José Luis Corcuera:

> "Yo debo decir que no he conocido supeditación del Sindicato al Partido. Probablemente por la propia identidad de quienes representaban a unos y a otros. Yo no le he visto supeditado a Nicolás Redondo respecto de las posiciones de Felipe González, más bien al contrario, tendría que decir. Ha habido algunos momentos en los que el Partido ha estado, no voy a decir supeditado, pero sí receptivo a los planteamientos del Sindicato. Yo no he conocido esa supeditación del Sindicato al Partido. Yo he estado en muchas reuniones de las direcciones del Partido y del Sindicato, y tengo que llegar a la conclusión de que más bien es al contrario"[82].

José María Zufiaur sostiene igualmente que, cuando el grueso de la dirección de la UGT se enfrentó con la ejecutiva del Partido y el Gobierno con motivo de la huelga general del 14 de diciembre de 1988, desde el partido no se pudo hacer nada contra la dirección

---

socialistas estaría a cargo de las Secretarias Sindicales del Partido que se estaban creando al respecto (Estrategia Sindical del PSOE, documento aprobado por el Comité Federal del PSOE en Madrid, 15 de octubre de 1978).

[81] Recientemente Antonio Ordoñez, actual Secretario de Comunicación, afirmaba que la UGT ya no será más la "correa de transmisión como históricamente fuimos" (*Cambio 16*, 24-2-97).

[82] Declaraciones realizadas por José Luis Corcuera durante una entrevista con el autor mantenida el 10-10-96.

ugetista[83]. Por el contrario, en su opinión, dichos intentos "son factores que lo que hacen es reforzar el patriotismo organizativo"[84]. De hecho, parece que esa influencia de los socialistas en la UGT, e incluso la creación de esos "grupos sindicales", contaba con el beneplácito de la dirección ugetista[85]. Almunia, Corcuera y Solchaga

---

[83] Afirmación realizada durante la entrevista con el autor del día 11-10-96. José María Zufiaur fue secretario general de USO hasta 1977 cuando, tras una división de dicho sindicato, se integró en la UGT. Posteriormente ocuparía cargos de responsabilidad en la ejecutiva de ugetista hasta 1994. Siempre fue considerado, en el PSOE como un instigador del proceso de desvinculación entre ambas organizaciones.

[84] El hecho de que la dirección del Partido socialista no era capaz de reorientar las acciones de la UGT, si la dirección del Sindicato no estaba por la labor, ya se había hecho patente con motivo del referéndum de la OTAN en 1986. Zufiaur recordaba durante la entrevista con el autor que hubo entonces un intento, sin éxito, de coordinar a dirigentes de la UGT para que el Sindicato hiciese campaña a favor de la permanencia.

[85] Joaquín Almunia y José Luis Corcuera recordaban durante las entrevistas con el autor celebradas los días 29-7-96 y 10-10-96 que fue el Secretario General de la UGT, Nicolás Redondo, quien pidió al Partido que organizase los grupos sindicales socialistas:

"Los grupos sindicales en el Partido fue algo que se hizo en la República y luego algo que se introdujeron en un Congreso, creo que en el año 78 u 80. Y aquello no se hizo porque el Partido defendiera que se hiciera, fue una defensa del Sindicato. Lo quiso Nicolás Redondo. Bien es cierto que después se dijo muchas cosas sobre la ingerencia de los grupos sindicales del Partido en el Sindicato pero lo cierto es que la defensa de los grupos sindicales del Partido en el Sindicato fue una actitud que se llevó al Congreso del Partido por parte de UGT (...). Los grupos sindicales del Partido en el Sindicato fue una imposición del Sindicato al Partido... Yo puedo decir que defendí los grupos sindicales del Partido en el Sindicato porque, entre otras cosas, mi Secretario General [Nicolás Redondo] me convenció de ello" (Corcuera, entrevista con el autor).

En una entrevista realizada a Nicolás Redondo en 1979 (aparecida en el núm. 2 de *Leviatán*) se le preguntó sobre la posibilidad de que los socialistas constituyesen una tendencia dentro de la UGT. La respuesta del máximo dirigente sindical de la UGT era que tenía que haber una acción coordinada entre las luchas del Partido y las del Sindicato; y que el Partido tenía que ser "más audaz que la Unión General de Trabajadores" para "así poder dirigir a los trabajadores hacia los objetivos

(entrevistas personales) coinciden en sostener que, hasta que se produjo la ruptura del modelo histórico de relaciones, el Secretario General de la UGT había defendido una relación prioritaria y privilegiada con el Partido socialista, sin ser un servidor de lo que decidiese el Gobierno socialista ni la autonomía absoluta de ambos[86].

---

que no se ven cada día, esos objetivos que están a medio plazo y que los trabajadores, normalmente, no van a captar por sí mismos porque están agobiados". El sindicato, por el contrario:

"por estar más pegado a las condiciones diarias en las que viven los trabajadores, va a ser más difícil que sea capaz de dirigir esa acción a medio plazo y a largo plazo del conjunto del movimiento obrero. *El partido tiene que ser capaz de influir en el sindicato para que, cuando llegue la hora de tomar una decisión*, la decisión del sindicato no esté solo condicionada por estas condiciones diarias, por las condiciones inmediatas en las que se mueven los trabajadores, sino que esté dirigida a conseguir objetivos a medio y a largo plazo que hagan que de verdad mejore sustancialmente la situación vital del gran conjunto que es el movimiento obrero" (mía la cursiva).

[86] Así, preguntado en 1979 el máximo líder de la UGT sobre las incompatibilidades entre cargos en el partido y cargos en el sindicato como principal medio de defensa de la autonomía del segundo con respecto del primero declaraba (*Leviatán*, núm. 2):

"Esto es ya un problema superado. Tú mismo lo has dicho. Se pretendió en un momento dado, y por influencias externas a la UGT y al Partido Socialista, por el ambiente que se respiraba fuera de nosotros, que se incluyera en los estatutos de la Unión General de Trabajadores la incompatibilidad. Hoy ya no tiene sentido y todo el mundo acepta la posibilidad de que se esté al mismo tiempo ocupando un cargo político y un cargo sindical".

Igualmente sostenía:

"[L]a UGT tiene que desarrollar una acción en el Parlamento a través del partido con el que le unen más conexiones, esto es, a través del Partido Socialista Obrero Español".

Más tarde aclaraba la relación entre la acción sindical y la política de esta manera:

"[E]stos dos tipos de acción tienen que estar estrechamente coordinados (...) porque a través de esos dos tipos de acción de los trabajadores, la acción sindical y la acción política, se persigue un único fin que es la transformación de la sociedad en la que están".

Según Almunia y Corcuera[87], Nicolás Redondo esperaba, en un momento en que los antiguos miembros de USO unidos a la UGT daban problemas en Vizcaya, que el Partido fuese para él una garantía de control de su sindicato[88].

Se podría objetar, con todo, que no es de extrañar que la dirección de la UGT sintonizase con la dirección del Partido socialista[89], pues los máximos líderes ugetistas estaban todos afiliados al PSOE[90], e incluso algunos ocupaban cargos en su dirección[91]. Por

---

[87] Manifestaciones realizadas durante las entrevistas de estos dirigentes socialistas con el autor los días 29-7-96 y el 10-10-96.

[88] José María Zufiaur confirmó durante la entrevista del 12-10-96 que los grupos sindicales socialistas se crearon en la UGT como reflejo proteccionista y defensivo de los antiguos militantes de UGT ante los nuevos miembros provenientes de USO, y que dicho proceso comenzó por el País Vasco.

[89] En la Memoria de Gestión del 28º Congreso, pág. 105, se proponían la intensificación de los contactos entre las direcciones de la UGT y del PSOE "de tal manera que las estrategias de ambas organizaciones, aun manteniéndose netamente independientes, consig[an] un grado de convergencia notable. Esto no siempre ocurre a niveles sectoriales o en marcos territoriales concretos. Pero la dirección de ambas organizaciones comparte recíprocamente el conocimiento de sus mutuas estrategias".

[90] Según declaró José María Zufiaur durante la entrevista con el autor del día 12-10-96 el 100% de la ejecutiva de la UGT estaba afiliada al PSOE. Respecto a los delegados de los congresos de la UGT, Tezanos y Paz (1986:39-57) señalaban que el porcentaje de delegados ugetistas que afirmaron pertenecer al PSOE fue del 81% en el 33º Congreso y del 80,6% en el 34º Congreso.

[91] Al principio de la transición política ambas organizaciones compartían tantos militantes que Corcuera considera que "hay un período de tiempo donde las cosas están confundidas, están tan ligadas [PSOE y UGT], que es casi lo mismo el sindicato y el partido, aunque no totalmente" (según manifestó durante la entrevista con el autor del día 10-10-96). Posteriormente, pero antes de la ruptura del modelo histórico de relaciones, este solapamiento fue disminuyendo y reduciéndose el número de cargos dirigentes en el PSOE y la UGT ocupados por las mismas personas. Así, estudiando sólo las ejecutivas estatales de ambas organizaciones (Comisión Ejecutiva Federal del PSOE y Comisión Ejecutiva Confederal de la UGT) nos encontramos que en la comisión ejecutiva del PSOE nombrada en el Congreso de 1974 celebrado en Suresnes, de los 11 miembros, 6 eran, a su vez, miembros de la ejecutiva de la UGT. En la Comisión ejecutiva del PSOE nombrada en el siguiente

el contrario, en el caso de la militancia de base, sobre todo en el sindicato, la doble afiliación no estaba tan extendida[92].

Pero, para que esto significase que el PSOE controlaba a la UGT, colocando a "hombres suyos" en la dirección del sindicato, habría que probar que efectivamente los líderes de la UGT interpretaron los objetivos del sindicato, no en función de lo acordado en sus congresos, sino según lo fijado en el PSOE. De lo contrario, dado que los líderes de la UGT eran militantes del Partido socialista, se podría argumentar que los miembros de la UGT conseguían que las actuaciones del PSOE se realizasen en beneficio de los objetivos del Sindicato[93]. De hecho, si bien es cierto que en los

---

congreso, en 1976, de los 19 miembros, 2 eran a su vez miembros de la ejecutiva de la UGT. En la ejecutiva del PSOE salida del congreso extraordinario de 1979 no había ningún miembro de la ejecutiva de la UGT, pero sí lo habría en sus ejecutivas nombradas en los congresos celebrados en 1981 y 1984. Además el Secretario General de la UGT asistía en calidad de invitado a las reuniones de la Ejecutiva Federal del PSOE, haciéndolo hasta 1984 (según afirmación de Joaquín Almunia en la entrevista con el autor del día 29-7-96 y *El País*, 17-3-87). En la Comisión Ejecutiva de la UGT nombrada en el congreso de 1976, de los 15 miembros, dos eran miembros de la del PSOE. En la nombrada en el congreso de 1978 no compartían ningún miembro con la ejecutiva del PSOE, pero sí en las nombradas en 1980, 1983 y 1986.

[92] Con respecto al PSOE nos encontramos que, a pesar de la obligación estatutaria de afiliarse a la UGT, en 1983 solamente un 52% de sus miembros lo habían hecho, bajando a un 31% para aquellos que se afiliaron al PSOE en aquel año (Puhle, 1986:331). De hecho, en los documentos de esta etapa (1975-1988) se insistió en la obligatoriedad de los militantes socialistas de afiliarse a la UGT, so pena de expulsión del Partido (Véase por ejemplo, programa de actividades de la Secretaría Sindical aprobado por el Comité Federal reunido los días 13 y 14 de marzo de 1982). En el caso de la UGT, no existiendo obligación alguna de afiliarse al PSOE, solamente un 16% de los delegados ugetistas en los comités de empresa estaban afiliados al Partido socialista en 1987, y la proporción bajaba a un 12% entre los afiliados de base de la UGT (Bouza 1989).

[93] Carlos Solchaga y Joaquín Almunia consideraban durante las entrevistas con el autor celebradas respectivamente el 19-7-96 y el 29-7-96 que el Secretario General de la UGT trataba de influir en el Gobierno socialista desde fuera; "sindicalizar al Gobierno" en opinión de Joaquín Almunia.

congresos de UGT no se trataban las estrategias y objetivos del PSOE en cuanto partido, sí tenían muy claro sus deseos de influir en las políticas del Gobierno socialista. Hacían así recomendaciones sobre las políticas que el Gobierno socialista debía desarrollar[94], y las ventajas que el sindicato debería obtener de ellas, empezando por las más inmediatas[95]. La dirección de la UGT no dejaría de mostrar su disgusto cuando consideró que no influía en las políticas del Gobierno socialista tal y como pretendía[96]. Esto se verá en los siguientes capítulos.

---

[94] En su 33º Congreso, pág. 45, hacían especial hincapié en políticas de empleo, protección y bienestar social, y democracia industrial.

[95] "El cambio político [refiriéndose a la victoria del PSOE en 1982] ha de significar, por lo pronto, la definitiva consolidación del sindicalismo en España (...). Desde luego en el curso de los últimos años los sindicatos han ido logrando (y no sin esfuerzo) contar con espacios para el ejercicio de la acción sindical, pero se les sigue negando su activa presencia en otros, de modo que a la postre, esa acción sindical está incompleta" (R.33C.UGT.1983:40).

[96] Así, por ejemplo, el Secretario General de la UGT, tras el primer año de Gobierno socialista, declaraba que querían "ayudar al Gobierno, aún aceptando medidas impopulares, pero con plena participación" (*El País* 12-12-83). Al año siguiente, dirigentes del sindicato socialista declaraban encontrarse en un "estado de marginación" y se quejaban de que les faltaba información por parte del Ejecutivo, de que el Gobierno hacía "oídos sordos" a sus propuestas y de que disponían de escasos medios de trabajo (*El País* 8-7-84). En octubre de aquel año el secretario general de la UGT envió una carta al Presidente del Gobierno informándole de que no asistiría más a las reuniones de la ejecutiva del PSOE porque "no veía lógico seguir asistiendo a unas reuniones en las que la única voz discrepante era la mía, ni que se interpretara que con [su] asistencia UGT apoyaba unas decisiones que no compartía el sindicato" (*El País* 19-3-87). Tras renovar la UGT el apoyo al PSOE en las elecciones legislativas de 1986, en julio de 1987 el Secretario de Acción Sindical de la UGT afirmaba que eran dos piezas irrenunciables que el Gobierno cumpliese el programa electoral -el cual se había negociado con UGT- y se apoyase "en el bloque social de progreso" -del cual la UGT era parte principal. En ese caso "el gobierno, en la plena aplicación del programa electoral de progreso, cuya responsabilidad enteramente le compete, siempre tendrá el apoyo de UGT" (Carta-circular del Secretario de Acción Sindical, Apolinar Rodríguez, a las Uniones Provinciales, Regionales y de Nacionalidad y Federaciones Estatales de Industria, fechada en Madrid a 31 de julio de 1987. Caja: FEJP/515. Fundación Largo Caballero).

Más aún, además de las dificultades prácticas para atribuir el poder a una organización concreta, ¿qué sentido tiene hacerlo cuando dos organizaciones comparten su militancia[97]? En este caso, no podemos emplear el concepto anterior de dominio *entre organizaciones* porque no existen esos miembros, ajenos a la organización dominada, que impongan su interpretación de los objetivos de ésta. Es cierto que se podría concebir que los militantes afiliados a dos organizaciones fuesen mayoría en una de ellas, pero minoría en la otra; y que de algún modo se han hecho con la dirección de esta última e interpretan sus objetivos en contra del sentir mayoritario de sus miembros[98]. Bastantes estudios empíricos, sin embargo, ponen de manifiesto que rara vez los militantes de doble afiliación forman un frente común en oposición a aquellos otros afiliados que no lo son[99].

---

[97] Corcuera consideraba durante la entrevista con el autor del día 10-10-96 que ante el alto grado de solapamiento que existió entre el PSOE y la UGT no podía haber una supeditación de una organización a la otra porque "difícilmente puede haber una supeditación cuando las cosas se confunden". El antiguo miembro del Comité Ejecutivo de la UGT, Manuel Simón, realizó la misma afirmación durante la entrevista que le realizó Burns Marañón (1996:90).

[98] Al respecto el por entonces Secretario General de la UGT afirmaba en 1979 (*Leviatán*, núm. 2, pp. 23 y 24):

"Hay que tener en cuenta que la única y definitiva garantía de la autonomía del sindicato con respecto al partido y del partido con respecto al sindicato, que también hay que decirlo, es la democracia interna de una y otra organización. En la medida en que las estructuras internas del sindicato sean democráticas, en la medida en que esas estructuras internas permitan revocar los mandatos o, digamos, quitar de los puestos de responsabilidad a las personas que no cumplan o que la mayoría de los trabajadores afiliados al sindicato les parece que no están cumpliendo debidamente sus obligaciones, en la medida en que eso sea posible, digo, la autonomía estará siempre defendida".

[99] Kitschelt considera que los miembros de un partido que son a su vez dirigentes o funcionarios de un sindicato se caracterizan por tener el mismo "interés común" en que el partido sea un instrumento para proporcionar bienes a una clientela concreta, los trabajadores (Kitschelt 1993:210 y 220). Pero los estudios empíricos sobre la actitud de un supuesto *lobby* sindicalista unitario muestran que éste raramente existe pues los sindicalistas no suelen ofrecer una postura común sobre las políticas que

Durante la Transición hubo varias muestras de esto. Un informe de gestión de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, a primeros de noviembre de 1977, recogía que no toda la UGT había aceptado de buen grado la firma de los pactos de la Moncloa. Las discrepancias, sin embargo, no surgieron entre militantes afiliados únicamente a la UGT y militantes dobles sino entre estos últimos:

> "[S]e ha pasado de una posición autónoma, pero razonable en la valoración del contenido del compromiso económico, a una serie de estallidos parciales de rechazo total de la política del Partido (por ejemplo, Madrid), por parte de algunos sectores de la Unión General, que, paradójicamente, están representados fundamentalmente por militantes del PSOE"[100].

No estamos, por tanto, ante un caso de ugetistas que se rebelaban contra el dominio de los socialistas[101]. Esto no quiere decir

---

llevar a cabo y, ni mucho menos, están todos de acuerdo sobre la clase de relaciones que mantener con los partidos políticos. Martin (1989:194) señala para el caso inglés que dada la dispersión ideológica de los sindicatos afiliados al Partido Laborista, éstos son "incapable of acting *en bloc* in relation to issues that seriously divide the party". McGuire (1992) ha realizado igualmente un excelente estudio sobre las relaciones entre el sindicalismo argentino y el partido peronista en los años ochenta donde se observa que los sindicalistas estaban divididos tanto con respecto a la necesidad de mantener la colaboración con ese partido como por cuestiones ideológicas de tal forma que no forman un frente unitario.

[100] Informe de la Comisión Ejecutiva Federal al Comité Federal a primeros de noviembre de 1977, recogido en la Memoria de Gestión de la Comisión Ejecutiva Federal al 28 Congreso del PSOE, mayo 1979, pág. 84.

[101] Esta denuncia de la dirección del PSOE se volvió a repetir posteriormente. Así, en el verano de 1978 se lamentaban de:

> "la división entre los compañeros socialistas en el seno de la UGT a la hora de tomar decisiones importantes sobre la estrategia de la central, sobre acciones concretas o sobre la designación de cargos (...). Algunos compañeros vienen utilizando sistemáticamente a la UGT como plataforma para combatir al PSOE, o bien contra sus representantes, o bien contra sus actitudes políticas. Por citar sólo un ejemplo, algunos compañeros del Partido defienden en la UGT posturas contra la Constitución, en contra de la posición del Partido, llegando incluso a plantear la

que efectivamente no existiesen militantes a disgusto con las relaciones UGT-PSOE. Las memorias de gestión del PSOE reflejan que sus líderes estaban preocupados igualmente por las posibilidades que daban los enfrentamientos entre los dobles militantes de la UGT y del PSOE a aquellos ugetistas no militantes del PSOE:

"De eso [de los enfrentamientos entre ugetistas militantes del PSOE] se han deducido ventajas intolerables para grupúsculos políticos que actúan en el seno de la UGT con una estrategia definida y que aprovechan la división entre los socialistas para imponer sus puntos de vista, con frecuencia contrarios a los intereses globales del propio Partido Socialista"[102].

Y para la dirección del PSOE estaba claro que desde luego la UGT no podía caer en las manos de dichos "grupúsculos":

"Al mismo tiempo esta situación podría permitir, si logramos encontrar el cauce preciso, sanear *ambas organizaciones*, eliminando

---

discusión sobre si la UGT debe recomendar el no o la abstención en el Referéndum. Esto es sólo un ejemplo, aunque muy grave, que podríamos multiplicar hasta el infinito. Naturalmente, lo mismo ocurre al revés. Algunos compañeros del Partido utilizan plataformas de éste para atacar a miembros o actitudes de la Unión" (Resolución del Comité Federal del PSOE de julio de 1978 en Memoria de Gestión de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE al 28º Congreso del PSOE, mayo 1979, pág:103).

En octubre de ese mismo año, 1978, se volvía a recoger la existencia de conflictos entre compañeros del PSOE en el seno de la UGT con la presentación de candidaturas antagónicas por parte de militantes del Partido, instrumentalización de las siglas PSOE para avalar posturas personales en el seno de la UGT, etc (Estrategia sindical del PSOE, documento aprobado por el Comité Federal el 15 de octubre de 1978).

[102] Documento de desarrollo de la Resolución del Comité Federal del PSOE de julio de 1978 aprobado en una reunión del Comité Federal del PSOE del 15 de octubre de 1978 recogido en la Memoria de Gestión de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE al 28 Congreso del PSOE, mayo 1979, pág. 103.

> influencias de otros grupos que trabajan políticamente para conseguir nuestra división" (mía la cursiva)[103].

En conclusión, al enfrentamiento entre militantes de una organización por la clase de relaciones partido-sindicato, se le puede superponer el enfrentamiento por tendencias ideológicas. Puede incluso darse el caso de que enfrentamientos entre las direcciones del partido y del sindicato, lejos de suponer una lucha por la autonomía organizativa, no constituyen sino enfrentamientos entre militantes dobles que discrepan sobre la estrategia correcta para alcanzar los fines comunes a ambas organizaciones[104].

Todo parece sugerir pues que tanto el PSOE como la UGT estaban dirigidos, al menos hasta la segunda mitad de los años ochenta, por unos militantes que estaban de acuerdo tanto en

---

[103] Véase el Informe de la Comisión Ejecutiva Federal al Comité Federal a primeros de noviembre de 1977, recogido en la Memoria de Gestión de la Comisión Ejecutiva Federal al 28º Congreso del PSOE, mayo 1979, pág. 84.

Ya se había informado de la existencia de "determinados grupos políticos, ubicados normalmente en la extrema izquierda extraparlamentaria" que llevaban "su política de forma eficaz y activa al seno de la Unión General de Trabajadores y hacen caer en la trampa a los militantes del PSOE de la independencia total de la Unión respecto a posiciones de hostilidad contra las propias resoluciones del PSOE" en el Informe de Gestión de la Comisión Ejecutiva al Comité Federal a primeros de noviembre de 1977 (recogido en el Informe de Gestión de la Comisión Ejecutiva Federal al 28º Congreso, mayo 1979, pág. 81).

[104] Santiago Carrillo lo recuerda así durante la II República (Intervención suya en el seminario *Las relaciones entre partidos políticos y sindicatos en la sociedad contemporánea*, organizado por la Universidad Complutense de verano y publicado en Carlos Otero Hidalgo (ed.) *Partidos políticos y Sindicatos en la Sociedad Contemporánea*, Madrid: Estudios Institucionales, 1996, pp. 54, 55):

"[A]quí conocemos una larga tradición, que yo en mi adolescencia y juventud he vivido, en la que UGT era una organización hermana del partido socialista, y en la que pertenecer a UGT significaba ya ser socialista (...). Esa larga tradición en la que, además, los dirigentes del partido eran también los dirigentes de la UGT, se interrumpió momentáneamente en los años 30 (...) más que por una división entre UGT y el PSOE, por las divisiones internas del PSOE mismo, que se manifestaron también en la UGT...".

mantener la modalidad histórica de relaciones partido-sindicato[105] como en cuestiones de estrategia político-laboral[106]. Es decir, entre ambas organizaciones había un "directorio entrecruzado" que gobernaba en ambas, no una supeditación de una a la otra.

Estos dirigentes, con objeto de defender el modelo de relaciones PSOE-UGT y evitar así que la dirección de la UGT pudiese caer en manos de militantes no socialistas, decidieron crear esos grupos sindicales socialistas[107], con el beneplácito del máximo líder ugetista, como hemos visto. Al mismo tiempo en el Partido se recordaba la obligatoriedad de afiliarse a la UGT. Pero igualmente, se buscó

---

[105] Les preocupaba así la "[f]alta de conexión entre la práctica política del Partido y la práctica sindical de la UGT, produciéndose 'división' en la militancia de los compañeros: los temas 'reivindicativos' sólo se discuten en UGT mientras que los temas 'políticos' se discuten solamente en las agrupaciones del Partido" (Estrategia Sindical del PSOE, documento aprobado por el Comité Federal, Madrid, 15 de octubre de 1978).

[106] Esto se evidenciaba, por ejemplo, cono motivo de los pactos sociales. Si en un principio hubo algunos desacuerdos sobre los pactos sociales, en concreto sobre los Pactos de la Moncloa, posteriormente, la dirección del Partido asumió la estrategia de la dirección de la UGT de que se llegasen a pactos sociales sin la participación de los partidos políticos. (Memoria de Gestión de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE al 28º Congreso del PSOE, mayo de 1979; y el Informe de la Comisión Gestora al Congreso Extraordinario, 28-29 de septiembre de 1979, pág. 13). La resolución del Comité Federal del PSOE, reunido los días 19 y 20 de enero de 1980, consideraba que el Acuerdo-Marco suscrito por la UGT coincidía con la línea estratégica sindical del PSOE y permitía que a través de la negociación colectiva se cubriesen sus objetivos. De hecho afirmaban que "[l]a estrategia seguida por la UGT es la base que inspira los objetivos de la política sindical socialista".

[107] "A lo largo de la historia de la UGT se han producido sistemáticamente intentos de penetración de la misma por organizaciones no socialistas para controlarla, que no tuvieron éxito gracias a la coherencia que revistió la actuación de los socialistas en el seno de la UGT. Es seguro que estas operaciones de infiltración se volverán a producir -de hecho se están produciendo- debiendo estar preparados para que el carácter socialista, revolucionario y democrático de la UGT no se desvirtúe" (Estrategia sindical del PSOE, documento aprobado por el Comité Federal en Madrid a 15 de octubre de 1978 y recogido por la Memoria de Gestión de la Secretaría Sindical al 28º Congreso del PSOE, mayo de 1979, pág. 214).

reforzar la disciplina a los militantes socialistas para "[e]vitar enfrentamientos entre militantes del partido", y conseguir, por tanto, que el PSOE fuese "en su actuación pública y más aún de cara a la clase trabajadora organizada, un todo políticamente homogéneo y coherente, con pleno respeto de la democracia en la UGT a todos los niveles" (R.28C.PSOE.1979:5). Los militantes del PSOE en su acción sindical dentro de la UGT deberían seguir la disciplina del partido en tanto que militantes del partido de tal forma que:

> "no es posible que los militantes socialistas acudan a la UGT con posturas distintas en relación con las cuestiones en materia sindical que hayan sido determinadas o que específicamente se hayan aprobado por los órganos correspondientes del Partido Socialista"[108].

Así, cuando el Partido se dividió por la cuestión del mantenimiento de la denominación de partido marxista, se procuró evitar que dicho debate se extendiera a la UGT (Informe de la Comisión Gestora al Congreso Extraordinario, 28-29 de septiembre de 1979, pág. 13)[109]. Y en la memoria de Gestión de la Secretaría de Política Sindical al 29º Congreso del PSOE (1981) no se volvió a

---

[108] Tampoco podrían sostener públicamente opiniones contrarias a las resoluciones aprobadas, ni formar parte de ninguna candidatura sindical al margen de las decididas (Resolución del Comité Federal del 12 y 13 de noviembre de 1977; Estrategia Sindical del PSOE, documento aprobado por el Comité Federal, Madrid, 15 de octubre de 1978. Todas ellas recogidas en la Memoria de Gestión de la Comisión Federal del PSOE al 28º Congreso, mayo 1979, pág. 85, y confirmadas en las Resoluciones de su 28º Congreso, pág. 5).

[109] En cualquier caso, el Secretario General de la UGT, Nicolás Redondo, no apoyó a los que pretendían mantener dicho calificativo pues consideraba que los trabajadores y el sindicato no obtendrían bienes palpables de ello. Esta afirmación fue realizada por Nicolás Redondo durante unas jornadas sobre relaciones partido-sindicato celebradas en el Escorial en el verano de 1995, y fue confirmada igualmente por el miembro de Izquierda Socialista, Antonio García Santesmases, durante esas mismas jornadas.

comentar nada sobre enfrentamientos entre dobles militantes en el seno de la UGT[110].

Parece, así pues, que hay que rechazar que la transformación de relaciones entre el PSOE y la UGT haya consistido en un proceso de autonomización del Sindicato respecto del Partido. Aunque existen ciertos datos que sugieren que efectivamente el Partido socialista pretendió controlar a la Unión General de Trabajadores, un estudio más detallado muestra que éstos realmente no acaban de probar que una organización dominase a la otra. Es frecuente así leer que la estrategia negociadora de la UGT durante la Transición estuvo condicionada a los intereses electorales del PSOE. Pero, entre otras cosas, nos encontramos con la paradoja de que uno de los defensores principales de tal estrategia en momentos de crisis económica era precisamente José María Zufiaur, el antiguo dirigente de USO[111].

¿Qué ocurría, entonces, durante la Transición? ¿A qué se refiere el antiguo dirigente de UGT, José María Zufiaur, cuando sostiene que no es sino a partir de 1986 que las organizaciones sindicales "establecieron una estrategia propia y autónoma de la de sus partidos políticos de referencia" (Otero Hidalgo 1996:184)? Quizá la respuesta la daba la propia dirección de la UGT en 1983 tras la victoria del partido hermano en las legislativas de octubre de 1982:

> "En este momento, es necesario descubrir todo el vigor y fuerza de transformación que genera la acción sindical. Hay que superar la tentación política de esperar que la solución de los problemas y el

---

[110] Sin embargo, con respecto a la constitución de los grupos socialistas en las empresas y ramas de la producción de la UGT, se decía que los resultados obtenidos habían sido desiguales "en función de las posibilidades materiales y humanas de las distintas Secretarías así como de la diferente situación sindical que se vive en cada provincia, región o nacionalidad" (G.29C.PSOE.1981:260).

[111] Lo mismo se puede decir en el caso de CCOO y el PCE. Se ha dicho que este sindicato no firmó el ABI condicionado por el Partido Comunista. Santiago Carrillo, sin embargo, recordaba durante un seminario de los Cursos de Verano de la Universidad Complutense celebrado en julio de 1995 que él justamente intentó convencer a Marcelino Camacho de que lo hiciese.

> cambio de la correlación de fuerzas venga desde arriba" (R.33C.UGT.1983:40).

Es decir, desde el liderazgo de la UGT se temía que sus sindicalistas considerasen que, gracias a su relación solidaria con el partido gobernante, la acción política pasaba de representar el complemento a la acción sindical en las relaciones laborales para convertirse en la única necesaria para alcanzar sus objetivos. Pero esto no prueba que se debiese a una imposición del Partido, ni tan siquiera que en éste se desease.

Se puede discutir largamente si un sindicato ha de preocuparse exclusivamente de mejorar las condiciones de trabajo y remuneraciones de los asalariados o, por el contrario, también pertenece a su esfera de actividad las condiciones de vida de sus representados fuera del tajo. Si puede llegar a proteger a todos los trabajadores o sólo a algunos. Si sus objetivos podrán ser alcanzados exclusivamente mediante los convenios colectivos, o debe influir también en las políticas de los gobiernos. Si, para hacer esto último, lo mejor es apostarlo todo a la acción de los partidos políticos y, por tanto, no dudar en sacrificar ganancias a corto plazo (pero que perjudiquen a su "instrumento partidario") en favor de una victoria electoral de su partido en un futuro no demasiado lejano. O, por el contrario, es más conveniente contar con las fuerzas suficientes para mediatizar la acción de los gobiernos independientemente del color político de éstos. Estas son preguntas sobre las cuales los líderes de los trabajadores han discutido desde los inicios de la organización de la acción colectiva obrera: a quién debemos proteger, con qué objeto, cómo hacerlo. Pero ninguna de las respuestas es intrínsecamente más "sindical" que otra. Los objetivos de los sindicatos serán aquellos que sus miembros quieran darse. Se puede, por tanto, discutir que mantener relaciones exclusivas y solidarias con un partido político sea necesario, o conveniente, para un sindicato, pero su adopción no prueba en absoluto que dicha organización estuviese controlada por un partido político.

CAPITULO TERCERO

LAS REPERCUSIONES DE LOS MODELOS DE RELACIONES PARTIDO-SINDICATO (I): LAS RELACIONES DE SOLIDARIDAD, 1982-1986

En el capítulo anterior hemos visto cuál ha sido la transformación del modelo oficial de relaciones partido-sindicato en el socialismo español según lo expuesto en las resoluciones de los congresos del Partido socialista y de la Unión General de Trabajadores, pero ¿hasta qué punto sus direcciones cambiaron en la práctica sus relaciones? Y suponiendo que efectivamente las relaciones entra ambas organizaciones se hayan desarrollado según modalidades distintas, ¿hasta qué punto se ajustan a las características de los modelos oficiales? Para contestar a estas preguntas vamos a estudiar el comportamiento de la UGT y del PSOE en dos períodos, los cuales, en principio, corresponden a modelos diferentes de relaciones partido-sindicato. Estudiaremos así la primera legislatura del Gobierno socialista (1982-1986) en la que ambas organizaciones defendían todavía unas relaciones solidarias, para pasar más tarde a ver la tercera legislatura (1989-1993) cuando el modelo establecido era el que hemos llamado por intereses concretos.

Durante ambos períodos escogidos el PSOE estuvo en el gobierno de España. Como dijimos, al acceder el partido político a las tareas de gobierno era cuando las relaciones podían dar su máximo provecho. Para el Sindicato era entonces cuando su estrategia partidista de acceso al centro de toma de decisiones gubernamentales habría tenido éxito y podría contar con el Gobierno para alcanzar los objetivos que requerían la intervención de éste. De la misma forma, para el Partido era ahora cuando los sindicatos, además de proporcionarle votos, podrían ayudarle al éxito de sus

políticas gubernamentales. Pero la llegada al poder del partido suponía igualmente poner a prueba sus relaciones. En primer lugar, ambos recibirían acusaciones de estar atados a intereses "perversos" por parte de sus oponentes políticos y sociales: el sindicato al *Poder*, el Gobierno a *intereses privados*. Al mismo tiempo, se vería si realmente era cierto que el partido era el instrumento del sindicato para influir en la política; y el sindicato, el apoyo del partido para llevar a cabo sus políticas de gobierno.

1. La colaboración entre el gobierno del PSOE y los sindicatos

En octubre de 1982, el PSOE ganó por primera vez en su historia unas elecciones generales en solitario con el 47,3% del voto válido. Este partido había conseguido crear una amplia coalición de clases medias y bajas, fortaleciendo su hegemonía en la clase obrera industrial, y añadir el voto de los empleados de "cuello blanco". Aunque más tarde se verá la contribución de su sindicato hermano a ésta y otras victorias electorales, el hecho fue que "[l]a UGT [apoyó] abiertamente el programa de gobierno del PSOE e incluso [aportó] no sólo su esfuerzo militante sino también parte de los cuadros del Sindicato", pues tenía la "convicción [de] que el mismo recoge parte de [su] proyecto como Organización para dar respuesta a los problemas de la clase trabajadora" (R.33C.UGT.1983:40).

1.1. Objetivos e instrumentos de las políticas

1.1.1 Los planteamientos del Gobierno socialista en materia económica

Una vez en el poder, el Gobierno socialista no emprendió políticas fiscales y monetarias expansivas para fomentar el crecimiento económico, reducir el desempleo y expandir el Estado del Bienestar. Nada más llegar, devaluó la peseta para cortar la ola especulativa desatada en torno a la divisa española, y subió el precio de los

combustibles para hacer frente al crecimiento del precio del petróleo y de la fuerte apreciación del dólar. Tras estas medidas, preparó un plan de ajuste para los dos años siguientes basado en la reducción del creciente déficit público y de la inflación, y en el restablecimiento de la tasa de beneficios empresariales para alentar la inversión privada. El área económica del Gobierno consideraba que la única forma de conseguir salir de la crisis económica, y crecer sostenidamente, consistía en mejorar las condiciones de oferta de la economía española, incrementando sus niveles totales de ahorro, comenzando por el ahorro público, y su stock de capital, al mismo tiempo que fomentando la competitividad de la economía española. Igualmente se consideraba que la recuperación económica no tenía que empezar por la recuperación del consumo interno sino por las ventas al exterior, lo cual implicaba la reducción de los costes salariales y del diferencial de inflación[1].

Desde finales de los años 70 se había ido extendiendo el convencimiento entre los economistas de que el fomento de la demanda agregada no incentivaba el crecimiento económico, pues la crisis económica tenía causas estructurales. Los gobiernos de UCD habían emprendido una estrategia contracíclica de tintes keynesianos vinculada a políticas de compensación social, la cual había contado con la aprobación del Banco de España y de la OCDE. Sin embargo, los resultados económicos fueron desalentadores, no se creo empleo neto (de 1976 a 1982 se estuvo destruyendo a una tasa anual del 1,7%), y como los ingresos fiscales no pudieron hacer frente al incremento del gasto creció el déficit público desde un 0,3% en 1976[2], a un 2,6% en 1980 y un 5,6% en 1982. El Banco de España fue así cada vez más claro en sus recomendaciones de que los

[1] Véase la presentación del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1983 realizada por el Ministro de Economía y Hacienda, Miguel Boyer, en el Congreso de los Diputados el día 17 de mayo de 1983.

[2] Hasta 1975 España había carecido de un sistema fiscal moderno por lo que los ingresos del Estado procedentes de los impuestos directos e indirectos eran bajos. Sin embargo, debido a la escasa provisión de servicios públicos, los presupuestos del Estado habían estado equilibrados y el endeudamiento público era inexistente (Jimeno, Andrés, y Taguas 1994:104,105).

objetivos prioritarios en política económica tenían que ser la reducción de la inflación y del déficit público, y la moderación de los costes salariales. Además la experiencia de los gobiernos laboristas y socialdemócratas alemanes corroboró este diagnóstico para cuando Felipe González fue nombrado presidente de gobierno[3]. El Gobierno socialista consideraba así que España tenía una estructura productiva débil, que había crecido apresuradamente y con abundantes distorsiones al amparo de la expansión de la economía europea durante casi dos décadas. El resultado era un sistema productivo atrasado, poco competitivo, con actividades y empresas endebles, y con niveles tecnológicos modestos[4]. Finalmente, la progresiva internacionalización de la economía española, que se consideraba deseable para fomentar la competitividad de la industria española, limitaba el uso de políticas expansivas.

Así, tomando nota de experiencias anteriores[5] e internacionales, y teniendo además en cuenta que los abultados déficits público y comercial no daban mucho margen para una política expansiva, los socialistas españoles emprendieron a su llegada medidas de "estabilización" y "ajuste estructural"[6] al contrario de lo que habían hecho Mitterrand o Papandreu cuando habían llegado al gobierno (Merkel 1995:310).

---

[3] La influencia en Felipe González de las experiencias de los gobiernos socialdemócratas en los años 70, y no tanto la del gobierno de Mitterrand, fue confirmada durante mis entrevistas a dirigentes socialistas.

[4] Intervención de Miguel Boyer en el Congreso de los Diputados el día 17 de mayo de 1983.

[5] Miguel Boyer exponía así en su intervención en el Congreso de los Diputados el día 17 de mayo de 1983:

"En 1982, la política monetaria detuvo, e incluso invirtió ligeramente, el proceso de reducción paulatina del ritmo de crecimiento de la cantidad de dinero, en un intento de ofrecer un estímulo a la expansión real de la economía. Creo que los resultados obtenidos son la mejor prueba de que éste es un camino equivocado y que el Gobierno socialista ha extraído las conclusiones relevantes".

[6] Esto es, contención de la inflación, rebaja del déficit de la balanza de pagos, reducción del déficit presupuestario, liberalización del comercio, desregulación de precios y reforma fiscal (Przeworski 1995:251).

1.1.2. Las demandas económicas y sociales de la UGT

Por contra, la dirección de la UGT mantenía el planteamiento económico "clásico" de los socialdemócratas de: nacionalizaciones, no; dirigismo económico, sí[7]. Sin embargo, admitían que, dada la situación de la estructura y coyuntura económica española[8], el exclusivo uso de políticas que fomentasen la demanda agregada no solucionaría la crisis económica. No rechazaban, por tanto, la puesta en práctica de reformas "estructurales"[9] como la reconversión industrial (R.33C.UGT.1983:89) o reducir la inflación, moderando los salarios[10].

---

[7] Tal y como Scharpf (1992) y Przeworski (1995) entienden que eran los planteamientos económicos de la Socialdemocracia, como vimos en el primer capítulo.

[8] Para la UGT la economía española tenía problemas graves tales como falta de competitividad, una estructura industrial débil y un crecimiento "desordenado" debido, entre otras cosas, a la existencia de un mercado interior protegido de la competencia internacional, un Estado paternalista, la dependencia económica y tecnológica, una mano de obra barata y unos costos altos (R.33C.UGT.1983:37,88,89).

[9] Para la UGT el responsable último de la crisis económica en España habían sido los gobiernos anteriores de UCD por su pasividad e indecisión "en afrontar las medidas económicas y las reformas estructurales frente a la crisis económica" (R.33C.UGT.1983:37).

[10] "La recuperación económica española (...) requiere la aceleración de los ritmos de corrección de nuestros desequilibrios a fin de situarnos favorablemente en el concierto económico. Ello exige la competitividad de nuestra economía, lo que no será posible mientras no se reduzca y equilibre el actual diferencial de la inflación" (R.33C.UGT.1983:47).

Puntualizaba, con todo, que:

"habida cuenta que los salarios no son el único ni el más importante factor de influencia en la inflación, considera[n] que una política concertada contra ella deberá tener en cuenta el control de las rentas del capital, los tipos de interés, los precios y los costos laborales" (R.33C.UGT.1983:47).

Pero, en general, la dirección de la UGT consideraba que el sector público empresarial tenía un papel fundamental en la gestión y mejora de la economía, aun sin pedir una amplia política nacionalizadora (R.33C.UGT.1983:49-51)[11]. La empresa pública debía ayudar a superar las limitaciones y deficiencias del mercado, a incrementar la inversión y la productividad, y a reducir la dependencia de la economía española de la tecnología exterior (R.33C.UGT.1983:88). Este papel debía quedar inscrito en una política económica que planificase "los grandes derroteros por los que deb[ía] discurrir el peso de la actividad empresarial privada y pública". Se debería elaborar así, con la participación de los sindicatos y de la patronal, un plan industrial que constara de planes específicos sectoriales y/o regionales, y que tuviese en cuenta la complementaridad del sistema industrial español con el de la CEE, previendo la evolución de la división internacional del trabajo o las posibilidades que ofreciese la inversión extranjera traída por las multinacionales. El Estado, en su opinión, debería fijar igualmente el tamaño más deseable de las empresas[12], o fomentar a las PYMES mediante una política empresarial adecuada[13].

La UGT confiaba obtener así un mayor crecimiento económico pero, mientras este se producía, había que luchar de inmediato contra el desempleo existente[14]. Reclamaban así la creación de un Fondo

---

[11] Afirmaban que lo importante no era la "extensión, o el recurso a nuevas nacionalizaciones, cuanto la profunda reforma de su sentido y de sus modalidades" (R.33C.UGT:50).

[12] "Las grandes empresas son necesarias por razones técnicas en determinados sectores, pero también lo son las pequeñas y medianas. El proceso de concentración empresarial hay que tolerarlo e incluso estimularlo cuando contribuye a la eficacia general del sistema. Sin embargo, cuando el grado de monopolio del sistema reduce esta eficacia, la concentración empresarial debe ser limitada y penalizada" (R.33C.UGT.1983:89).

[13] "Los poderes públicos deben crear el marco económico-social para que todas las PYMES puedan florecer" (R.33C.UGT.1983:90).

[14] Según la UGT, la tasa de desempleo a principios de los años ochenta en España provenía en un 50% de la caída de la demanda y crecimiento económico, en un 35% de los incrementos de productividad e introducción de nuevas tecnologías, y en un

Especial de Inversión, desgravaciones fiscales en el impuesto sobre las sociedades cuando se crease empleo, la reforma del sistema financiero de la Seguridad Social, controlar los precios y reducir los tipos de interés. Pero, sobre todo, el Gobierno socialista debería preceder al reparto del trabajo existente, bajando la edad de jubilización, reduciendo la jornada de trabajo (comenzando por la implantación inmediata de la jornada de 40 horas semanales), luchando contra las horas extraordinarias, y creando un régimen estricto de incompatibilidades en la Administración Pública. A estas medidas se añadirían otras tales como la lucha contra el fraude fiscal y la evasión de capitales, la puesta en marcha de la Ley de Delito Social para frenar el cierre de empresas y la economía sumergida[15].

En conclusión, para la dirección de la UGT no se solucionaría la crisis económica nacionalizando los principales medios de producción (industria pesada, banca, etc) o fomentando la demanda agregada, ni tampoco se negaba a realizar reformas estructurales (como la reconversión industrial) o corregir desequilibrios básicos de la economía como la inflación. Igualmente coincidía con el Gobierno socialista en que la política económica habría de ayudar a modernizar la economía española y hacerla más competitiva. ¿No había, pues, diferencias con el área económica del Gobierno?

Estas empezaban a surgir al plantearse la capacidad del Estado para regular y promover la actividad económica. Boyer y Solchaga no construían sus objetivos de política económica a partir de un examen de las posibilidades de dirigir la economía nacional, sino a partir de un análisis de la interdependencia económica mundial. Pretendían que las condiciones de localización, inversión y producción en España fueran competitivas en el contexto internacional. El mercado disfrutaba así de una preferencia indiscutida frente al Estado como

---

15% debido a las deficiencias de la estructura industrial española (R.33C.UGT.1983:91).

[15] Y, en general, la UGT se pronunciaba "a favor de cuantas medidas legales se adopt[asen] tendentes a la creación de empleo, incluidas las de bonificaciones de las cuotas de la Seguridad Social, para aquellos contratos de duración superior a seis meses y que signifi[casen] creación real de puestos de trabajo" (R.33C.UGT.1983:45,46).

sistema racional de asignación de recursos, lo que implicaba una retirada parcial del mismo (privatizaciones, desregulación limitada de los mercados de trabajo y capital). Sólo se recurriría al Estado para acelerar la transformación de las estructuras, o crear las condiciones para la continuidad y competitividad de las empresas más rápidamente de lo que lo habría hecho el mercado actuando en solitario. Por el contrario, para los líderes ugetistas el Estado debía implicarse directamente en la producción y ser uno de los motores principales, sino el principal, de la modernización. Así pues, sí que existían diferencias entre las políticas económicas que deseaban los líderes ugetistas y las que pretendía llevar a cabo el Gobierno socialista. Sin embargo, la dirección de la UGT "congeló" sus demandas de política económica, y, en su primer congreso confederal tras la victoria socialista de 1982, celebrado en junio de 1983, centró su énfasis en sus objetivos sociales y no en los instrumentos de política económica para conseguirlos (R.33C.UGT.1983:45-47)[16].

Los líderes ugetistas le planteaban al Gobierno socialista un ambicioso programa de mejoras sociales que combatiese los problemas del mercado de trabajo, construyese un auténtico Estado de Bienestar en España y redujese las profundas desigualdades sociales (R.33C.UGT.1983:37). En cuestiones de mercado de trabajo, la UGT esperaba del Gobierno socialista no sólo reducir el desempleo sino también facilitar el acceso al mundo laboral a jóvenes y mujeres, o controlar las "contrataciones diferentes al contrato indefinido y a tiempo completo". En cuestiones de transferencias sociales, se esperaba una ampliación de la cobertura de los parados[17], el incremento y mejora de las pensiones, estableciendo pensiones no contributivas, y medidas para paliar la situación de minusválidos y

---

[16] De hecho, al plantearse las futuras relaciones con el gobierno socialista, afirmaban que su postura iría del "apoyo firme" al "enfrentamiento enérgico" dependiendo del cumplimiento por parte del gobierno socialista de los objetivos prioritarios de empleo, protección social y democracia industrial (R.33C.UGT.1983:45).

[17] Pedían así la ampliación del derecho a la prestación por desempleo a 6 meses de mínimo y 24 de máximo y el establecimiento de un subsidio indefinido para todos los desempleados con cargas familiares (R.33C.UGT.1983:46).

marginados sociales (R.33C.UGT.1983:58-62). En prestaciones de servicios, el Gobierno socialista debía proceder a mejorar y universalizar el servicio nacional de salud, la educación o facilitar el acceso a una vivienda digna, considerado uno de los componentes más fundamentales del "salario social" (R.33C.UGT.1983:63-74).

Otro campo donde se debía notar especialmente la llegada de un gobierno de izquierdas era el de las relaciones laborales. Había que "[c]ompletar el marco democrático de relaciones laborales", es decir, modificar el Estatuto de los Trabajadores, sustituir las ordenanzas laborales, y proceder al reconocimiento pleno de la capacidad del sindicato para negociar convenios colectivos a todos los niveles, y en todos los ámbitos, incluida la Administración Pública. El Gobierno socialista debía facilitar igualmente la participación de los sindicatos en la gestión y control de los Institutos Públicos, crear un Consejo Económico y Social, y favorecer la coparticipación de los trabajadores en la gestión de la empresa. Finalmente debía proceder a la devolución del Patrimonio Sindical, histórico y acumulado.

Parece, pues, que, al hacer depender su apoyo al Gobierno socialista de la materialización de sus objetivos sociolaborales, la dirección ugetista le estaba otorgando un voto de confianza a la nueva política económica. El PSOE prometía una estrategia en dos fases: en primer lugar, modernizar la economía y hacerla más competitiva, después, pleno empleo, redistribución de riqueza y ampliación del Estado social, sobre los firmes cimientos de una economía reforzada (Merkel 1995:320). La dirección de la UGT aceptó continuar con la moderación salarial, que ya venía practicando con el gobierno de UCD desde 1979, y apoyaría, en general, las políticas emprendidas por el Gobierno socialista, todo ello a pesar de que éste no emprendía las políticas preferidas por la UGT para salir de la crisis y combatir el desempleo.

1.2. El apoyo mutuo UGT-PSOE y la oposición de CCOO

1.2.1. Las políticas emprendidas por el Gobierno socialista

Durante los dos primeros años (1983-1984) el Gobierno socialista combinó unas políticas de estabilización moderadas con políticas de ajuste estructural tanto en el sector privado como en el sector industrial estatal (Boix 1996:151-173). Emprendió así una política monetaria moderadamente restrictiva para combatir la inflación, acompañada de acuerdos nacionales sobre rentas firmados por las organizaciones patronales y sindicales, como veremos más adelante. Los objetivos del Banco de España sobre la masa monetaria circulante se hicieron cada año más restrictivos -salvo un cambio de tendencia en 1985-, y hasta 1986 se alcanzaron sistemáticamente. En política fiscal se buscó la reducción de la deuda y déficit públicos, junto a una restructuración de los Presupuestos Generales del Estado para que se dejase de financiar la deuda del Estado por el Banco de España. Esta política también fue moderadamente restrictiva, pues el gasto público siguió creciendo, y el déficit público permaneció al nivel heredado por el Partido Socialista en 1982 (véase tabla 2)[18].

En cuanto a los ingresos, la política impositiva del Gobierno del PSOE consistió en perseguir el fraude fiscal, aumentar los ingresos fiscales, y corregir la rémora fiscal de forma desigual para cada tipo impositivo con el fin de intensificar la progresividad general del régimen tributario (Boix 1996:164).

Además el Gobierno del PSOE procedió a llevar a cabo una reconversión industrial y la racionalización del sector público empresarial. Cuando se formó el primer gobierno socialista en 1982 el sector público empresarial se caracterizaba por un tamaño

[18] Según Jimeno, Andrés y Taguas (1994:111) la política fiscal en España fue claramente expansiva en los dos últimos años del Gobierno de la UCD, y volvería a serlo a partir de 1990, salvo en 1992.

considerable[19], pero con una grave crisis financiera y dirección[20]. Su respuesta fue tratar de adaptar la empresa pública al mercado y racionalizarla, realizando algunas privatizaciones, con el fin de

[19] A principios de la década de los ochenta las empresas públicas españolas contabilizaban cerca del 10% del valor añadido nacional y casi el 15% de toda la formación bruta de capital fijo. El nivel de inversión aportado por todas las empresas públicas sólo era significativamente más alto en Austria, Grecia, Noruega y Portugal, y similar al de Italia y el Reino Unido. Además, el sector público empresarial español desempeñaba un papel clave en ciertas áreas productivas como las industrias pesadas, el petróleo, las telecomunicaciones, los ferrocarriles, y el transporte marítimo y aéreo (Boix 1996:168).

[20] Los beneficios obtenidos en el sector público del petróleo cayeron con las crisis económicas. Sectores enteros dentro del mayor grupo empresarial público, el INI, como el transporte aéreo, la minería o el acero, registraron déficits masivos. Las incertidumbres políticas de la Transición, que se tradujo en la carencia de estrategias directivas bien definidas, aceleraron todavía más el deterioro de las finanzas del INI. Para amortiguar el impacto de la crisis económica durante el período de transición democrática, el gobierno de UCD socializó una larga serie de empresas deficitarias, sobre todo en los sectores del automóvil, del acero y de la construcción naval (Boix 1996:170).

mejorar su competitividad y reducir la carga presupuestaria dedicada a compensar sus pérdidas (Boix 1996:151-

TABLA 2.Ingresos, gasto y deuda del Estado y déficit público (% sobre el PIB a precios de mercado)

	1982	1983	1984	1985	1986
Ingresos totales	31,6%	33,6%	33,3%	35,2%	35,9%
Directos	6,8%	7,8%	8,2%	8,5%	8,2%
Indirectos	7,7%	8,4%	8,9%	9,5%	10,0%
C.S.	13,2%	13,6%	12,9%	13,0%	12,8%
Otros	3,9%	3,8%	3,4%	4,3%	4,1%
Gasto total	32,2%	33,5%	34,0%	36,6%	36,4%
Endeudamiento	26,6%	32,0%	38,2%	43,7%	45,1%
Déficit público	5,6%	4,7%	5,4%	6,9%	6,0%

C.S. cotizaciones sociales.

Fuente: European Economy. European Commission. Directorate-General for Economic and Financial Affairs.

173; Merkel 1995:314). Si en 1984 las subvenciones públicas a las empresasestatales deficitarias habían crecido hasta situarse en el 3,7% del PIB, en 1987 ya sólo consumían un 0,7% de la riqueza nacional (Merkel 1995:249)[21].

Merkel (1995) sostiene que de los tres partidos socialistas en el gobierno en el Sur de Europa, el PSOE era a comienzos de los años ochenta el menos convencido de la importancia de ampliar el tamaño de la empresa pública para alcanzar los objetivos de reforma social. Para este autor, el Gobierno del PSOE no daba valor especial a ninguno de los objetivos tradicionales de las nacionalizaciones socialdemócratas (redistribución de la renta, regulación macroeconómica, garantía de los puestos de trabajo y cogestión). Y, de hecho, se rompió la tendencia a aumentar el tamaño del sector empresarial público de los gobiernos precedentes. Pero las privatizaciones de los socialistas se diferenciaron de las conservadores por las cláusulas de empleo que descartaban los despidos y, además, formaban parte de una política industrial que pretendía limitar las actividades empresariales del Estado a unos pocos sectores básicos, a fin de aprovechar las ventajas de la especialización y de las economías de escala de cara a la creación del mercado único en Europa (Merkel 1995:249)[22].

En la lucha contra el desempleo, el Gobierno socialista atribuyó su origen no tanto por una escasez de demanda como por una espiral de los costes laborales producida durante los años setenta[23]. Así, para estimular la oferta en el mercado del empleo, los socialistas españoles

---

[21] El INI redujo sus pérdidas a 41.000 millones de pesetas para 1987 y, si se excluye las compañías socializadas en los años setenta, obtuvo beneficios por valor de 28.000 millones de pesetas. En 1988 el conjunto del grupo tuvo 31.000 millones de pesetas en beneficios. De forma similar, el INH multiplicó por diez sus beneficios desde 1983 a 1988 en términos nominales (Boix 1996:173).

[22] El Estado vendió las empresas que estaban muy internacionalizadas, las que no podían asegurar su competitividad a medio plazo o las que no tenían interés estratégico para el sector público, como las industrias textiles (Boix 1996:172).

[23] Véase la presentación del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1983 realizada por el Ministro de Economía y Hacienda, Miguel Boyer, en el Congreso de los Diputados el día 17 de mayo de 1983.

flexibilizaron tímidamente el mercado de trabajo al facilitar nuevas formas de contratación[24], pero pusieron en práctica pocas medidas activas para favorecer la movilidad vertical (formación, reciclaje profesional)[25] y horizontal (ayudas para traslado de viviendas o para el pago de alquileres) de los trabajadores (Merkel 1995:317,318). El resultado fue que entre 1983 y 1986 se destruyó empleo a una tasa anual del 0,7% y el paro pasó de un 16,3% en 1982 a un 21,2% en 1986, lo cual no correspondió a las expectativas albergadas por los socialistas al elaborar estas medidas. Como al mismo tiempo las relaciones laborales existentes apenas se vieron afectadas por las medidas desreguladoras, se agravó aún más la segmentación del mercado de trabajo, pero sus efectos se notarían principalmente a partir de la segunda legislatura socialista.

Durante la primera legislatura socialista (1982-1986) la política social del Gobierno socialista se caracterizó por la introducción de reformas legales que introdujeron criterios universalistas en las políticas sociales, lo cual favoreció la extensión de la protección social, al mismo tiempo que se contuvo la intensidad protectora (Rodríguez Cabrero 1994:1454). Por un lado, el PSOE accedió al Gobierno con la convicción de que disponían de una oportunidad histórica para introducir reformas en la protección social. Pero, por otro, se encontraba con que las dificultades económicas imponían serios límites a su extensión e intensidad (Maravall 1997:178).

El Gobierno socialista reformó así el diseño de las políticas sociales para reforzar los criterios universalistas y compensatorios (Maravall 1997:184). La Ley 26/1985 reorganizó el sistema de

---

[24] Aún así, a finales de los años ochenta, la indemnización legal que tenía que pagar en España el empresario en caso de despido injustificado era la más gravosa de toda la CEE (Merkel, 1995:318).

[25] José Borrell calculaba en un informe sobre "Tendencias de gastos social en España", fechado en Madrid a 4 de mayo de 1987, que mientras que entre 1982 y 1986 el incremento en pesetas constantes en medidas de fomento del empleo había aumentado en un 25,5%, el incremento del paro había sido en el mismo período del 38,5% por lo que resultaba que "el gasto real por parado para el fomento del desempleo se ha reducido de una forma muy importante" (Caja: FEJP/514. Fundación Largo Caballero).

pensiones introduciendo condiciones más estrictas para las pensiones contributivas[26], pero accedieron a ellas nuevos colectivos sociales. La Ley General de Sanidad (Ley 14/1986) creo el Sistema Nacional de Salud de tipo universalista, pasando a estar financiado mayoritariamente a cargo del presupuesto público[27]. En educación, nuevas leyes incrementaron la escolarización en la enseñanza obligatoria, aumentaron las becas, reorganizaron las relaciones entre los centros públicos y privados, y dotaron a las universidades de una autonomía hasta entonces inexistente. En agosto de 1984 se modificó la Ley Básica de Empleo (de 1980) ampliándose la cobertura a determinados grupos[28]. La tasa de cobertura bruta (perceptores de prestaciones económicas excluido el desempleo parcial y subsidio especial de eventuales agrarios) había disminuido en 1983 con respecto al año anterior de un 33,6% a un 26,3%, en 1984 se encontraba en un 26,4% y en 1986 había subido hasta un 31,5% de los parados registrados[29]. En 1984 quedó configurado un nuevo sistema de protección frente al desempleo consistente en un subsistema contributivo, con percepciones cuya cuantía dependía de los salarios percibidos y cuya duración dependía del período de tiempo que se hubiera cotizado previamente, y un subsistema asistencial, en que se concedía en determinados casos de especial

---

[26] Se amplió el período de cotización de 10 a 15 años y se introdujo un nuevo sistema de cálculo de la pensión (Rodríguez Cabrero 1994:1455).

[27] En 1978 la tasa de cobertura del sistema de protección a la salud estaba situado alrededor del 80%, en 1982 el 85,68%, en 1986 el 95,66% (Rodríguez Cabrero 1994:1476 y 1480).

[28] Se amplió a los parados sin rentas superiores al salario mínimo y con responsabilidades familiares a su cargo siempre que hubieran agotado previamente las prestaciones del nivel contributivo o que, habiendo cotizado al menos tres meses, no tuviesen derecho a la prestación por no reunir el período mínimo de cotización (Cruz Roche 1994:1508). Asimismo, a partir de principios de 1984 se instauró un nuevo sistema de protección para los trabajadores eventuales agrarios de Andalucía y Extremadura, que sustituía al antiguo sistema de "empleo comunitario".

[29] Sin embargo, se encontraba lejos del 48% comprometido con la Unión General de Trabajadores para finales de ese año.

necesidad un subsidio igual al 75% del SMI por un período de hasta 18 meses[30].

Pero este incremento en la extensión de los beneficiarios de servicios y transferencias no vino acompañado del incremento presupuestario necesario para mejorar ostensiblemente la intensidad protectora[31]. Así, durante la primera legislatura socialista la participación en el PIB del gasto social estuvo prácticamente estancada (véase tabla 3), y el gasto de protección social por habitante (en ecus a precios de 1985) aumentó un 9,9% (Anuario Eurostat 1995). La intensidad protectora en la salud alcanzó un punto máximo en 1983, para caer luego hasta 1988[32]. En cuanto a las pensiones, la intensidad de la protección medida como porcentaje respecto al PIB por habitante se incrementó de 1980 a 1984 (del 51,5% al 54,6%) para descender hasta 1989 (48,3%). Finalmente la ley que modificaba la Ley Básica de Empleo redujo el tope máximo en la cuantía de la prestación por desempleo (Rodríguez Cabrero 1994:1480; Cruz Roche 1994:1498-1510).

TABLA 3.Gastos corrientes de protección social en España (% sobre el PIB) según la clasificación del sistema SEEPROS[33]

1983	1984	1985	1986

[30] Véase el informe sobre "Tendencias de gastos social en España", fechado en Madrid a 4 de mayo de 1987, (op. cit.).

[31] José Borrell afirmaba en un informe sobre "Tendencias de gastos social en España", fechado en Madrid a 4 de mayo de 1987, que "a pesar del esfuerzo realizado puede afirmarse que el sistema español de gasto social ha sido 'incapaz de adaptarse a la crisis', porque la expansión del gasto no se ha ajustado a las demandas sociales más prioritarias" (op. cit.).

[32] Así lo reconocía José Borrell en el informe sobre "Tendencias de gastos social en España", fechado en Madrid a 4 de mayo de 1987, op. cit.

[33] Sistema Europeo de Estadísticas Integradas de Protección Social, instrumento diseñado por la Oficina Estadística de la Comunidad Europea (EUROSTAT). El sistema SEEPROS no incluye el gasto en educación.

19,5%	19,6%	20,2%	19,9%

Fuente: Anuario Eurostat 1995

1.2.2. El acceso al Gobierno por parte de la UGT

Estas políticas se llevaron a cabo con el apoyo global de la UGT (Albarracín 1991:413; Führer 1996:365), e incluso estuvo dispuesta a firmar en solitario pactos con el Gobierno[34], y se contuvo en su crítica *pública* hacia el Gobierno Socialista, aunque -según se supo después- no en la privada[35]. Ante una política económica que no había sido la que ellos esperaban, su actitud fue la de su aceptación a corto plazo, pero intentando que los costes sociales, para los trabajadores, y los organizativos, para la UGT, fueran los menores[36], y confiar en que sus resultados fueran los prometidos.

TABLA 4.Incrementos salariales pedidos por UGT y CCOO, e inflación prevista (1983-1986)

	1983	1984	1985	1986
UGT	9,5-12,5%	6-8%	5,5-7,5%	8%
CCOO	9,5-12,5%	10%	9%	10%
Inflación	12%	8%	8%	8%

[34] "La UGT estaría dispuesta a suscribir el acuerdo social si su contenido fuera satisfactorio aun en el caso de que CCOO no lo hiciera", declaraciones de Zufiaur a *El País*, 24-8-1984.

[35] Según declaró Joaquín Almunia durante la entrevista con el autor celebrada el día 29-7-96, se esperaba que gracias a que el PSOE y la UGT mantenían unas relaciones solidarias se podrían poner de acuerdo sobre cómo discrepar ante la opinión pública cuando no se pusieran de acuerdo en alguna cuestión.

[36] Según declaraba José Luis Corcuera durante la entrevista con el autor celebrada el día 10-10-96, la Comisión Ejecutiva de la UGT tomó la decisión de que ninguno de sus miembros formase parte del nuevo gobierno socialista porque calculó que tendría así más margen de maniobra quedando fuera del Gobierno socialista.

Fuente: *El País*, varios años.

El otro sindicato más representativo a nivel estatal, CCOO, mantuvo una actitud bien distinta[37] tras un corto período de apoyo al Gobierno socialista, en el que incluso llegó a firmar junto a la UGT, CEOE y CEPYME el 15 de febrero de 1983 el primer acuerdo interconfederal bajo un gobierno socialista, según bastantes estudiosos para no verse marginada (Soto Carmona 1993:474; Führer 1996:366)[38]. Pero el idilio CCOO-Gobierno socialista duró poco tiempo. La convicción en CCOO de que el Gobierno había favorecido a su rival, UGT, en la interpretación de los resultados de

[37] CCOO recibió la victoria del PSOE en 1982 afirmando tres días después de las elecciones que su victoria "además de constituir un acontecimiento histórico en nuestro país del que todos los trabajadores nos felicitamos, permite la formación de un gobierno progresista, primer instrumento para iniciar los cambios necesarios en el orden económico-social y (hacer) progresar a la democracia" ("Comunicado" de la Comisión Ejecutiva de la CS de CCOO, Madrid, 31 de octubre de 1982. Citado por Soto Carmona, 1993:460). Bien es cierto que el líder de CCOO, Marcelino Camacho, alertaba al mismo tiempo de la posibilidad de "una segunda gran desilusión" (la primera se supone que es cómo se desarrolló la transición política).

[38] Hay que recordar que CCOO, aunque no había firmado ni el ABI ni el AMI, sí lo había hecho en el caso del último pacto social bajo un gobierno de UCD, el ANE.

las elecciones sindicales de 1982[39], y las primeras medidas de política económica, les llevaron a romper con los socialistas[40].

---

[39] Marcelino Camacho declaraba (*Gaceta Sindical*, núm 25, mayo de 1983, pág. 5):

"CCOO no hará un caso de ruptura de la negativa de UGT y del Gobierno a reconocer como válido el dictamen del Consejo de Estado que dice que los resultados [de las elecciones sindicales] a computar deben comprender desde el 1 de enero de 1981 al 31 de diciembre de 1982, conforme a lo que se desprende de la Ley. Está claro que con esta decisión [del Gobierno] y otras, aunque Comisiones Obreras avanza y pasa del 30,89 por 100 de delegados de 1980 al 33 por 100 en 1982, según datos oficiales, reduce la representación de CC.OO., aumenta la de UGT, y elimina la representación en los órganos institucionales de millares de delegados y comités de empresa que hicieron sus elecciones en esos 15 meses. Esta actitud antidemocrática y contraria a la ley, ha hecho que CC.OO. haya recurrido ante el Tribunal Constitucional".

[40] La CS de CCOO había advertido en abril de 1983:

"Para los cambios estructurales que resultan imprescindibles el Gobierno debe apoyarse en los trabajadores, creándose así un marco de contraposición social y político capaz de vencer las resistencias de las poderosas minorías (...). Si en lugar de esto el Gobierno opta por neutralizar las presiones de la derecha económica y política, haciéndoles concesiones, se frustrarán las esperanzas abiertas y el cambio no pasará de una serie de aspectos más o menos superficiales" (*Gaceta Sindical*, núm. 25, mayo de 1983).

Pero como esto no se produjo:

"ya en el mes de junio [de 1983], y obrando con responsabilidad, nosotros [los de CCOO] habiendo dado un cierto margen necesario, empezábamos a preparar una respuesta a esta política antisocial y antisindical (...). Partiendo de esto, (...) en el mes de agosto, justo durante las vacaciones, elaboré lo que iba a ser el Informe al Secretariado, primero, después a la Comisión Ejecutiva y luego al Consejo Confederal. Este es el texto, el 6 de septiembre de 1983 hicimos una reunión del Secretariado y las propuestas que hice allí fueron las siguientes: 'Emplazamiento conjunto de UGT y Comisiones Obreras al Gobierno; asambleas de delegados en los grandes centros urbano-industriales, que se centren sobre las 40 horas, despidos y problemas del momento, mantener capacidad adquisitiva, jubilación a los 64, que culminen en tres o cuatro grandes manifestaciones en Madrid, Barcelona, Valencia, etc., hacia finales de septiembre-primeros de octubre; apoyar resueltamente la marcha del Campo de Andalucia'. Habíamos entrado en la era de las movilizaciones importantes" (Intervención de Marcelino Camacho en el III Congreso de CCOO, *Gaceta Sindical*, núm. 31, agosto de 1984, pág. 31).

CCOO presentaba una mayor disposición a la confrontación en la negociación colectiva al igual que rechazaron la contención salarial (véase cuadro 3) y, en general, las medidas y leyes del Gobierno socialista (Führer 1996:373)[41], salvo la entrada de España en la CEE[42]. Así, acusaron al Gobierno socialista con motivo de la reconversión industrial de emprender una política de desmantelamiento, no de reconversión (Soto Carmona 1993:473); o, con la Ley Orgánica de Libertad Sindical, de intentar encorsetar la acción sindical, apostando abiertamente por un modelo sindical burocrático y de gestión que limitaba la participación de los trabajadores (Führer 1996:211). El único pacto global donde el Gobierno participó directamente (el AES) fue igualmente rechazado, a pesar de que estaban más a favor de acuerdos con la participación del Gobierno que de simples acuerdos entre las fuerzas sociales (III Congreso Confederal), porque iba contra los intereses de los asalariados, facilitaba el despido, reducía las pensiones y los salarios, suponía un ataque a la Seguridad Social y la legitimación de la política del Gobierno socialista (Führer 1996:370,371)[43]. Finalmente, apoyaron también las movilizaciones contra la permanencia de España en la OTAN (Soto Carmona 1993:462).

El apoyo de la UGT al Gobierno socialista no se dio solamente a cambio de beneficios a medio o largo plazo, sino también a corto, en términos de influencia sobre sus políticas[44]. La propia dirección

---

[41] Führer considera que en CCOO predominó la estrategia conflictiva con el Gobierno socialista como consecuencia de las desavenencias entre las diferentes corrientes comunistas dentro del sindicato, y por la rivalidad del PCE con el partido socialista. Así, los sindicalistas más destacados de las distintas corrientes comunistas dentro de dicho sindicato compitieron en sus proclamas radicales (Führer 1996:378).

[42] Mostraron, con todo, su preocupación por la forma y el contenido de la negociación que se estaba llevando a cabo (Soto Carmona, 1993:461), y denunciaron cierta discriminación del Gobierno con respecto a ellos ("Discriminación de CCOO en las Comisiones de la CEE", en *Gaceta Sindical*, núm. 54, septiembre de 1987, pág. 27, citado por Soto Carmona, 1993:462).

[43] No obstante, acto seguido reivindicaron su participación en la comisión paritaria del AES, apelando ante el Tribunal Supremo, el cual falló en contra de ellos.

[44] Esta influencia lo enmarcaron dentro de su política general de concertación:

del sindicato declaraba que había influido en las políticas del Gobierno socialista referidas a leyes de carácter laboral[45], asuntos sociales[46], y en materia económica[47]. Un campo que la UGT dejaba

---

"La política de concertación (...) ha supuesto una actuación en torno a cuantas medidas y proyectos gubernamentales se han ido produciendo, así como la intervención en aquellos otros aspectos esenciales para los trabajadores que se planteaban con ocasión de elaborarse los Presupuestos de cada año" (G.34C.UGT.1986:136).

[45] Afirmaron haber participado en leyes tales como la que estableció la jornada semanal de cuarenta horas, el R.D. sobre Jornadas Especiales y Descansos, la Ley Orgánica de Libertad Sindical, Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública, en la Ley de Protección por desempleo -que modificaba la Ley Básica de Empleo de 1980- y su desarrollo (R.D. de 2 de abril de 1985), Ley de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, Reales Decretos sobre relaciones laborales de carácter especial, R.D. sobre condiciones laborales de los minusválidos, acuerdos para la participación en la Empresa Pública (G.34C.UGT.1986:136-139). También parece que influyeron para que el Gobierno ampliase el mandado de los miembros de los Comités de Empresa de dos a cuatro años (Führer 1996:211).

[46] Reforma de la Seguridad Social y en la Ley General de Sanidad, la Normativa sobre el Consejo General del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo y sus Comisiones Provinciales, Ley de Medidas Urgentes para la Racionalización de la Estructura y de la Acción Protectora de la Seguridad Social. En cuestiones referidas al Consejo Social de Universidades, Colegios Profesionales, la Ley Orgánica del Poder Judicial (G.34C.UGT.1986:136-139).

[47] Por ejemplo en la reconversión industrial:

"La otra gran tarea que ocupó a esta Secretaría [de Acción Sindical] en el último trienio [1983-1986] fue el negociar el marco de la Reconversión y Reindustrialización industrial (...). Como es sabido, la negociación fue muy dura y estuvo a menudo en trance de romperse, llegando a deteriorar muy seriamente el clima entre la UGT y la Administración. Finalmente, el acuerdo se plasmó en un Decreto-Ley, posteriormente elevado a Ley, y una serie de normas de rango inferior que lo desarrollaron y que recogían lo esencial de nuestras reivindicaciones. Si bien algunas de nuestras exigencias no fueron plenamente atendidas, (...) *las más fundamentales, tras el profundo debate que se desarrolló por fin en las Cortes, fueron satisfechas* (...). Fuera de toda demagogia o de todo dogmatismo prepotente se trataba de poder hacer una buena reindustrialización para toda la clase trabajadora y

completamente a disposición del PSOE era la política exterior, a diferencia de CCOO, como hemos visto[48].

La dirección de la UGT conseguía este acceso a la toma de decisiones gubernamentales gracias a sus relaciones "privilegiadas" con el Partido socialista, las cuales no existían con otros interlocutores sociales[49]. Esto era así por cuanto los líderes ugetistas y los miembros del Gobierno socialista eran militantes del mismo partido, lo que permitía, en primer lugar, que se encontrasen en las reuniones de la Ejecutiva y Comités Federales del PSOE[50], y discutir allí cuestiones de gobierno[51]. La militancia común facilitaba, en segundo lugar, la

---

en eso nos empeñamos; creemos que los hechos hasta ahora nos dan la razón." (G.34C.UGT.1986:127,128, mía la cursiva).

También afirman que influyeron en la ley de Presupuestos Generales del Estado para 1985, diversas medidas de política económica (Decreto Ley de 30 de abril de 1985), decretos y órdenes para la puesta en marcha del Fondo de Solidaridad (G.34C.UGT.1986:136-139).

[48] Así, según una información del diario El País (6-12-84) Nicolás Redondo afirmaba que era partidario de que el próximo congreso del PSOE, en vez de centrarse tanto en la cuestión del referéndum sobre la OTAN, lo hiciese sobre la Seguridad Social, el paro y la crisis económica. Para el máximo líder ugetista la reforma de la Seguridad Social era más importante que el asunto de la OTAN.

[49] En el primer año de Gobierno socialista, el Ministro de Economía, Miguel Boyer, hacía declaraciones de este genero:

"El Gobierno está abierto a las razones de las fuerzas sociales, *y en especial* cuando una de ellas comparte los mismos planteamientos ideológicos y políticos que el partido en el poder" (*El País*, 13-9-83, mía la cursiva).

Según Guindal y Serrano (1986:186) parte de la radicalización de CCOO se puede explicar porque el Gobierno, como fue en el caso de la negociación de la LOLS, mantenía intensos y frecuentes contactos con los representantes del sindicato socialista y muy pocos con CCOO.

[50] Según declararon Joaquín Almunia y José María Zufiaur durante las entrevistas con el autor del 29-7-96 y del 12-10-96, el máximo líder del sindicato, Nicolás Redondo, asistía en calidad de invitado a la Ejecutiva del PSOE.

[51] Joaquín Almunia recordaba durante la entrevista con el autor del día 19-7-96 que negociaba cuestiones de su ministerio con el Secretario General de la UGT en las reuniones de la ejecutiva del PSOE. A su vez, la Memoria de Gestión del Comité Federal del PSOE al 31º Congreso, pp. 144-145, recoge la que sería probablemente

celebración de reuniones con carácter privado entre miembros de la UGT, del aparato del Partido socialista y/o del Gobierno socialista[52]. Así, sobre todo al principio de la primera legislatura socialista, se concertaron entre miembros del Gobierno y de la dirección de la UGT muchas reuniones en el Palacio de la Moncloa, la mayoría de las cuales no se hicieron públicas[53], más luego conservaciones bilaterales entre el Presidente del Gobierno y Secretario General del PSOE, Felipe González, y el Secretario General de la UGT, Nicolás Redondo[54]. En ellas se trataban de asuntos como el seguimiento y arbitraje de conflictos laborales, la reconversión industrial, el desempleo, la situación del cooperativismo y las transferencias a las Comunidades Autónomas en materia de trabajo, las subvenciones a las centrales sindicales, o la formación de consejos de relaciones laborales[55]. Y, en general, sobre "temas en los que existían diferencias entre la UGT y el Gobierno Socialista" entre las Comisiones Ejecutivas del PSOE y de la UGT, bien con carácter plenario, bien con carácter restringido[56].

---

la última intervención de un dirigente ugetista, Antón Saracíbar, como miembro del Comité Federal del Partido durante una reunión en la cual el Presidente del Gobierno y Secretario General del PSOE, Felipe González, discutió con éste sobre la política del Gobierno y la acciones de la UGT.

[52] Joaquín Almunia afirmaba durante la entrevista con el autor del día 29-7-96 que, por cada reunión formal con las dos centrales sindicales, o con las dos y la CEOE, había unas tres reuniones *privadas* con UGT y, quizás, una con la CEOE.

[53] Información obtenida de las entrevistas celebradas con Joaquín Almunia el 29-7-96 y José Luis Corcuera el 10-10-96. Estas opiniones son corroboradas por las Memorias de Gestión de las secretarias del PSOE donde se recogen la celebración de reuniones entre responsables del partido, de la UGT y de altos cargos del Gobierno (pero no se hace mención de que asistiesen miembros de CCOO).

[54] Pertenece a este período la conocida frase del Secretario General de la UGT de que había estado con el Presidente del Gobierno en los últimos quince días, más veces que con su mujer en los últimos meses (Sánchez y Santos 1990:349).

[55] Informes aprobados por el Comité Federal del PSOE 23-24 de julio 1983, 14-15 de enero de 1984, 2-3 de junio de 1984 en "Informes aprobados por el Comité Federal durante la gestión 1981-1984", pp 34-35,42,55,67 y 69, op. cit.

[56] Véase la Memoria de Gestión de la Secretaría de Política Sindical de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE al 30º Congreso, pág. 59.

Igualmente, los miembros del aparato del Partido realizaron funciones de intermediación entre sus compañeros de la dirección ugetista y los del Gobierno[57]. Incluso se llegó a formar un comité de enlace PSOE-UGT[58] para ponerse de acuerdo una vez que se empezaron a acumular las disensiones sobre cómo llevar a la práctica sus objetivos comunes[59]. No parece, sin embargo, que este comité

---

[57] Al respecto la dirección de la UGT, al repasar los enfrentamientos con el Gobierno con motivo de la reforma de la Seguridad Social producida en 1985, afirmaba explícitamente:

"No creemos preciso recordar las decisiones del Comité Confederal Extraordinario [de la UGT], reunido al efecto, *ni las gestiones realizadas a través del PSOE* para tratar de enmendar el texto del proyecto en sus aspectos más negativos" (G.34C.UGT.1986:138).

Igualmente, tras las elecciones de junio de 1986, la Administración expuso que ante el crecimiento de los beneficiarios del subsidio agrario, su desviación presupuestaria en 1986, y la existencia de bolsas de fraude, había que endurecer las condiciones de derecho para obtenerlo, pero finalmente, y tras realizar movilizaciones:

"conseguimos, con la ayuda en este caso de la Ejecutiva Federal del Partido, una negociación con el Ministro de Trabajo el pasado 30 de enero [de 1987] que dio prácticamente plena satisfacción a nuestras reivindicaciones" [véase la Memoria de Gestión de la Secretaría de Acción Sindical de UGT, con registro de entrada por la FEJP el 30-3-87. Caja: FEJP/515. Fundación Largo Caballero (F.L.C.)].

Las Memorias de Gestión del PSOE también recogen que "el partido" intentó "desempeñar un papel de puente, fundamentalmente en los temas puntuales," entre el Gobierno y la UGT (Véase la Memoria de Gestión al 30º Congreso del PSOE, 1984, pág. 59; y la Memoria de Gestión al 31º Congreso del PSOE, 1988, pág. 44).

[58] Joaquín Almunia recordaba durante la entrevista mantenida con el autor el día 29-7-96 que dicho comité de enlace debía de estar formado por dos o tres miembros por parte de cada ejecutiva.

[59] Según el Secretario de Organización del PSOE, José María Benegas, entre ambas organizaciones había relaciones fraternales pero también discrepancias, según él, a causa de los distintos papeles que cada uno debía desempeñar en la sociedad. Por ello se había definido un método de funcionamiento que cristalizaría en comisiones de trabajo entre miembros de las ejecutivas de ambas organizaciones para que las discrepancias que surgieran tuvieran un cauce de discusión (*El País* 29-12-84).

consiguiese realmente cumplir su función intermediadora con mucha eficacia[60].

El Gobierno socialista, además de mantener estos canales privilegiados con la dirección de la UGT, procuraba tener en cuenta los intereses organizativos de este sindicato a la hora de llevar a cabo sus políticas, como ocurrió, por ejemplo, en el caso de la Reconversión Industrial. Durante su preparación y desarrollo se produjeron fuertes discrepancias entre el Ministerio de Industria y la dirección ugetista sobre las medidas socio-laborales, en concreto en la cuestión de los despidos. El Ministerio de Industria era favorable a la extinción de los contratos de los trabajadores afectados (*El País* 8-1-84; Guindal y Serrano 1986:146)[61]. Por el contrario, la UGT, que no

---

Por otro lado, el Informe de Gestión de la Secretaría de Política Sindical (aprobado por el Comité Federal del PSOE reunido los días 23-24 de julio 1983) recoge ya la constitución de una comisión mixta PSOE-UGT formada por tres miembros de cada Comisión Ejecutiva más el secretario sindical del PSOE para encarar a sus relaciones (recogido en "Informes aprobados por el Comité Federal durante la gestión 1981-1984, pág. 55, op. cit.).

[60] Joaquín Almunia declaró durante la entrevista con el autor del día 29-7-96:

"Pero eso [refiriéndose al comité de enlace] son decisiones de esas que no llevan a ningún sitio porque cuando el Gobierno está gobernando, pues la dirección del Partido no es un interlocutor fiable para el Sindicato... El [miembro] de la UGT, que estaba metido a su vez en los temas que estaban en la mesa del Gobierno, le decía al del comité de enlace: 'Oye, mañana tenemos que resolver el expediente de regulación de empleo de la siderurgia, y pasado mañana la partida presupuestaria'. Y, claro, el miembro de la ejecutiva del Partido le decía que a él qué le contaba"

José María Zufiaur comparte esta opinión sobre la inutilidad de este órgano de enlace, según declaró durante la entrevista con el autor del día 12-10-96. El hecho es que la dirección de la UGT lo dio por terminado a principios de 1987, con el argumento de que había sido inoperante (*El País* 17 y 19-3-87).

[61] Según el Informe de Gestión de la Secretaría de Política Sindical (aprobado por el Comité Federal del PSOE reunido los días 14-15 de enero de 1984, en "Informes aprobados por el Comité Federal durante la gestión 1981-1984, pág. 36, op. cit.) a principios de diciembre de 1983 se celebró una reunión sobre la construcción naval. A ella asistieron el Ministro de Trabajo y el de Industria, el Director General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales y el Presidente de Astano y Aesa, los miembros de las comunidades autónomas afectadas por la reconversión naval, los

se oponía a la reconversión en sí, ponía como condición para aceptar el acuerdo que los contratos quedasen, por el contrario, suspendidos[62]. Tras un largo proceso de discusión[63], el compromiso definitivo fue a favor de la postura de la UGT[64].

---

alcaldes de las localidades y gobernadores civiles, los secretarios sindicales del PSOE y representantes de UGT (no se menciona la asistencia de sindicalistas de CCOO). La posición del Ministro, Carlos Solchaga, así como la de los directores y presidentes de las empresas públicas, era que la fuerte crisis que padecía el sector obligaba a la aplicación de drásticas medidas de ajuste que conllevasen una reducción de plantilla. Ahora bien, el problema básico de la reconversión del sector naval -según el informe del PSOE- era

"el tratamiento que había que dar en relación al elevado número de mano de obra excedente, en cuanto a si la salida de las empresas debería ser mediante extinción o suspensión de contrato".

Para la UGT el tema parece que estaba ligado entre otras cosas a su supervivencia organizativa:

"Si la medida utilizada era la extinción de la relación laboral de los trabajadores con las empresas en crisis, se consideraba, por parte fundamentalmente de los representantes de UGT, que se produciría un desgaste importante para la Central Socialista, mientras que si era mediante la suspensión de la relación laboral, se permitía a UGT un margen de maniobra suficiente para su actuación sindical".

[62] "La reconversión industrial era un hecho irreversible. Había que tomar decisiones para salvar no ya a una empresa, sino a un sector. Situaciones semejantes se habían dado en otros países, y en todos se habían aplicado medidas muy semejantes. En eso todos estábamos de acuerdo. Nuestra diferencia con el Gobierno era, entre otras cosas, la rescisión o no de los contratos" (Declaraciones del Secretario General de la UGT, Nicolás Redondo a Guindal y Serrano (1996:146)].

Igualmente la Memoria de Gestión de la Secretaría de Acción Sindical de UGT manifestaba:

"[D]efendimos que los inevitables ajustes de plantilla, además de reducirse al mínimo, debían darse por la vía no traumática de la suspensión de contratos y no de la rescisión. Siendo la razón primordial el hecho de que puestos a exigir un sacrificio importante a núcleos importantes de trabajadores, concentrados en áreas geográficas reducidas y muy empobrecidas por la reconversión, convenía no abocar a dichos trabajadores al innecesario trauma del despido (...). Por supuesto, defendimos además el compaginar dichos ajustes con jubilaciones anticipadas y otras medidas no traumáticas" (G.34C.UGT.1986:127).

Aún así, las relaciones entre la UGT y el PSOE pasaron momentos de gran tensión[65]. Destacan así, además de la cuestión de los despidos en la reconversión industrial, las tensiones surgidas con motivo de la interpretación de la ley sobre jornada laboral[66], o intentos de flexibilizar el mercado laboral[67]. Pero el enfrentamiento

---

[63] De hecho, el Real Decreto-Ley 8/1.983 de 30 noviembre de Reconversión y Reindustrialización no zanjó la discusión pues remitía la cuestión del tratamiento de los excedentes de mano de obra a un nuevo decreto que contemplase la figura de los Fondos de Promoción de Empleo.

[64] Al respecto, Nicolás Redondo recordaba en una entrevista con Guindal y Serrano (1986:146-148):

"Como sindicato no podíamos admitir un proceso que significara el despido de miles de trabajadores. Y, además, estábamos convencidos de que teníamos que establecer en cada zona afectada por la reconversión las condiciones necesarias para no dejar detrás tierra quemada (...). Conseguimos que los trabajadores afectados por la reconversión quedaran en buena situación (...) [L]a reconversión [industrial] fue producto de un juego dialéctico, de presiones, de negociaciones. *Que no se hizo la reconversión que hubiera querido Carlos Solchaga, es evidente*. Y no se hizo porque no se podía hacer. Porque si se hace como él la quería, aquí hubiera habido tensiones sociales como no se han conocido desde hace muchos años" (mía la cursiva).

[65] Redondo afirmaba, en el verano de 1985, que habían tenido discrepancias con el Gobierno desde 1983 (*El País* 21-7-85).

[66] Según *El País* (8-1-84) la reducción de jornada había jugado un importante papel como contrapartida que ofrecían los empresarios por los incrementos salariales pactados en el Acuerdo Interconfederal de 1983. Los empresarios confiaban en que la ley no saldría hasta después del verano por lo que su puesta en vigor no se llevaría a cabo realmente hasta casi finales de año. Los sindicalistas, por el contrario, esperaban que la ley saliese en el BOE mucho antes. Al final la ley salió antes del verano. Algún empresario llegó a insinuar que el Gobierno rompía, con esta decisión, un compromiso asumido durante las negociaciones del AI. La batalla por los criterios de aplicación de la ley fueron resueltos por una norma del Ministerio de Trabajo que venía a dar la razón a las tesis empresariales con el consiguiente enfrentamiento con la UGT, que recurrió a los tribunales.

[67] Ya en el verano de 1983, altos cargos del Ministerio de Economía y Hacienda habían declarado que era necesario hacer menos rígido el mercado de trabajo, facilitando el despido colectivo (*El País* 8-1-84). Al año siguiente, los lideres ugetistas denunciaban que las medidas de contratación temporal aprobadas por el Gobierno

que tuvo mayor trascendencia pública se produjo a mediados de 1985 con motivo de la reforma de las pensiones. Esta reforma, como acabamos de ver, ampliaba el período de cotización de 10 a 15 años e introducía un nuevo sistema de cálculo de la pensión (Rodríguez Cabrero 1994:1455). Para la dirección de la UGT aquello le parecía un recorte de las pensiones, además de otros perjuicios para ciertas clases de pensionistas[68]. El Secretario General del sindicato, Nicolás Redondo, advirtió que su central no consentiría ningún recorte de pensiones, acusó al Gobierno de incumplir las resoluciones del 30º Congreso del PSOE (*El País* 17-4-85). Cuando la reforma fue votada en el Congreso, el Secretario General de la UGT -que era diputado por las listas del PSOE- votó en contra, rompiendo la disciplina de partido[69]. Pero, aunque UGT y CCOO participaron juntos en manifestaciones en contra de esta ley[70], la dirección de la UGT no quiso ir hasta el final, y no apoyó el llamamiento a la huelga general

---

socialista suponían una vulneración del espíritu del AES y alteraban los borradores primitivos aceptados por UGT en diciembre de 1983. Según ellos, se habían "eliminado todas las cautelas que existían en el borrador primitivo" (*El País* 20-12-84). Tras las elecciones legislativas de junio de 1986, la UGT consideró que el Ministro de Economía había apoyado una ofensiva de la CEOE sobre la flexibilidad laboral que al final no se llevó a cabo por la oposición del Ministro de Trabajo, el Vicepresidente del Gobierno y, al final, Felipe González en persona (Memoria de Gestión de la Secretaría de Acción Sindical con registro de entrada por la FEJP el 30-3-87, op. cit.).

[68] Para la dirección de la UGT, esta reforma era rechazable porque trataba de contener el crecimiento de entrada de nuevas pensiones y reducía la cuantía inicial. Temían además que se produjese un efecto de expulsión dentro del nivel contributivo (R.34C.UGT.1986:98):

"[N]uestra Central no podía aceptar los textos que el Gobierno había decidido convertir en Proyectos de Ley, por cuanto ni las "Medidas" de recorte de pensiones, ni la nueva redacción de la Ley de Sanidad respondían a los mínimos que la UGT había mantenido desde siempre en tales materias" (G.34C.UGT.1986:138).

[69] Igualmente Antonio Rosa, senador por Badajoz y secretario general de la UGT, tomó la decisión de dejar su escaño en protesta por la reforma de las pensiones (Guindal y Serrano 1996:165).

[70] El 4 de junio de 1985 el sindicato convocó su primera manifestación multitudinaria contra el Gobierno socialista, a la cual se unió CCOO.

del 20 de julio de 1985 convocado por CCOO[71]. Igualmente, si bien mantuvieron su postura en contra de la permanencia de España en la OTAN, tampoco participaron en las movilizaciones en contra de esta organización militar (Köhler 1995:175)[72]. Finalmente en el otoño de 1985, se produjeron desacuerdos sobre los presupuestos generales del Estado para 1986 con motivo del incremento de pensiones y sueldos de funcionarios[73].

Sin embargo, las relaciones con el Gobierno se irían recomponiendo a principios de 1986 gracias a la entrada en vigor de la LOLS desde mediados del año anterior, la nueva etapa que se iniciaba en el proceso de devolución del patrimonio sindical, la

---

[71] "Llegamos a discutir lo de la huelga general y en aquel momento confieso que hubo sectores que la querían. Pero pensamos que si se empieza por una huelga general se puede acabar en cualquier cosa. Si con la huelga general tampoco conseguimos nada, tendremos que ir a la huelga revolucionaria. CCOO tampoco hizo nada después de su huelga. Y es que no se podía hacer más. Al final llegas a la amarga conclusión de que son temas agotados y que la gente no va a dar más pasos hacia adelante porque no hay más pasos que dar" (Declaraciones de Redondo a una entrevista realizada por Guindal y Serrano (1996:165,167)].

[72] La postura última adoptada por la dirección ugetista con respecto a la permanencia en la OTAN se fijó en la reunión del Comité Confederal ordinario, celebrado los días 30 y 31 de enero de 1986, una vez conocida la fecha de la convocatoria del referéndum y cuál sería la pregunta. Se reafirmaba en la resolución de su 33º congreso en relación con la OTAN y expresaba "su posición a la opinión pública y dar[ía] traslado de [sus] criterios a todos los afiliados y responsables de [su] organización a través de actos internos y demás medios a su alcance, *orientando el voto hacia la salida de la OTAN*" [citado por Guindal y Serrano (1986:177), mía la cursiva]. El 17 de febrero Nicolás Redondo envió una carta circular a todas las uniones y federaciones del sindicato recordándoles que la postura oficial de la Unión General de Trabajadores era contraria a la permanencia de España en la OTAN. Ahora bien, en la misma circular se recomendaba que no se llegase a "acuerdos con otras fuerzas u otros colectivos sindicales o políticos en cuanto a esta campaña, simplificadamente conocida como anti-OTAN" (citado por Guindal y Serrano 1986:181).

[73] El Secretario de Imagen de la UGT, Miguel Angel Ordóñez, afirmaba que si el Gobierno reconsideraba sus posturas respecto a esos puntos no existirían discrepancias sensibles entre el ejecutivo y el sindicado (*El País* 10-10-85).

participación sindical en la empresa pública, y la mejora de la situación económica (Guindal y Serrano 1986:186).

2. El ensayo del corporatismo de oferta en España

Como se dijo en el primer capítulo, la coordinación económica no constituía el procedimiento por el cual los sindicatos pretendían influir en la toma de decisiones gubernamentales, ni los partidos socialdemócratas movilizar a las clases trabajadoras en su provecho. Este era el papel de las relaciones de solidaridad entre los partidos y los sindicatos. Por el contrario, era un estilo de elaboración de políticas públicas donde los problemas se resolverían de una forma agregada y consensuada gracias al intercambio de compromisos entre los gobiernos y los grupos de interés, entre ellos los sindicatos. Estos últimos renunciarían a incrementos salariales a cambio de que los segundos llevasen a cabo políticas que fomentasen el empleo[74]. Se solucionarían así los dos problemas principales de la segunda mitad de los años setenta: el crecimiento del desempleo y de la inflación. Estos compromisos podían acordarse de formas diversas: quedar reflejados en pactos formales tripartitos, o entre los agentes sociales sin la presencia explícita del Gobierno, etc[75]. En pocas palabras, la coordinación económica no era la vía para intervenir en política, sino la mejor forma de que las políticas (principalmente económicas) tuvieran éxito.

El éxito de estos acuerdos, con todo, reforzaría las relaciones de solidaridad entre los sindicatos y los partidos socialdemócratas pues evidenciaba que efectivamente su colaboración era la mejor estrategia para alcanzar sus principales objetivos (en vez de practicar un estilo

[74] En los años sesenta y setenta mediante políticas económicas de gestión de la demanda agregada.

[75] Los acuerdos globales de contrapartidas simplemente quieren decir que los actores que participen en ellos están de acuerdo en conseguir un acuerdo unitario donde se intercambian servicios y bienes pertenecientes a áreas temáticas muy diversas tales como política de rentas, inversión pública, instituciones reguladoras de las relaciones laborales o financiación de los sindicatos.

decisionista de gobernar, en el caso del partido, o, en el caso del sindicato, presionar en los centros de trabajo). A su vez, las relaciones solidarias reforzaban este estilo de formación de políticas. El Gobierno tenía unas relaciones privilegiadas con un actor necesario para el éxito de sus políticas y el sindicato contaba con un gobierno cuyas políticas satisfarían los intereses de todos los trabajadores, o, al menos, eso se esperaba. Pero, en sí mismo, estos acuerdos globales no prueban que existiesen relaciones de solidaridad entre el partido del Gobierno con los sindicatos que participaban en ellos.

En España esta creencia de que el éxito de las políticas gubernamentales requería el consenso de las fuerzas políticas (Pactos de la Moncloa) y sociales (a partir del ABI) se introdujo durante la transición, probablemente por la convergencia de la experiencia extranjera en política económica con las necesidades de un tránsito que se pretendía pacífico e irreversible de una dictadura a una democracia. Bien es cierto que en este país el término neocorporativismo ha sido menos popular que el de "concertación social"[76].

Durante la primera legislatura del gobierno socialista la "concertación social" consistió *formalmente* en un acuerdo interconfederal firmado por los dos sindicatos más representativos, UGT y CCOO, y las patronales CEOE y CEPYME, en febrero de 1983 - AI-[77] de vigencia para aquel año; y en un acuerdo global de

---

[76] Se podría plantear que "la concertación social" ha sido una clase de neocorporativismo, como parece sugerir Lehmbruch cuando habla de "corporatismo de concertación", pero este término fue empleado en España con los mismos diferentes sentidos que nos encontramos en el caso del neocorporativismo. Mientras que algunas veces se usó para referirse a un modelo de formación de políticas públicas consistente en identificar los problemas económicos y sociales de un modo omnicomprensivo y agregado y resolverlos del mismo modo gracias a la cooperación al unísono de grupos de interés y gobiernos, la dirección de la UGT también lo utilizó para referirse simplemente a que las organizaciones de intereses, y en concreto los sindicatos, se incorporaban al proceso político al participar por derecho propio en las instituciones y organismos públicos.

[77] El AI de 1983 consistía en un convenio estatutario que vinculaba a todos los empresarios y trabajadores, estuvieran o no afiliados a las centrales firmantes (Soto

contrapartidas firmado por la UGT (pero no CCOO), la CEOE, CEPYME y el Gobierno del PSOE en octubre de 1984, -Acuerdo Económico y Social, AES- de vigencia para 1985 y 1986[78]. Así, el único año en que no hubo pacto formal durante la primera legislatura del Gobierno socialista fue el de 1984. Ambos acuerdos los podemos considerar más específicamente como ejemplos de esa coordinación económica por consistir o formar parte de acuerdos globales entre sindicatos, patronal y gobierno donde se intercambiaban contrapartidas sobre cuestiones muy diversas para resolver de forma agregada las principales cuestiones económicas y sociales[79]. Tanto en el AI como en el AES, la UGT aceptó la moderación salarial a cambio de la promesa del Gobierno de más empleo y mejoras

---

Carmona, 1993:473). Contenía estipulaciones sobre crecimientos salariales para aquel año, cláusulas de revisión salarial, jornada de trabajo, estructura de la negociación colectiva, contenido y duración de los convenios, medidas relacionadas con el fomento de empleo, productividad y absentismo, seguridad e higiene en el trabajo, derechos sindicales y mediación, arbitraje y seguimiento del propio acuerdo (Palomeque 1992:49,50).

[78] El AES comenzaba por una declaración del Gobierno de los objetivos macroeconómicos para el bienio, y tenía una estructura dual. Por un lado, contenía unos acuerdos tripartitos con compromisos de carácter fiscal, económico, empleo, contratación laboral y formación profesional, seguridad social y seguridad e higiene, legislación laboral, participación, empresa pública, patrimonio sindical acumulado y retribuciones de los empleados públicos. Por otro, un acuerdo interconfederal para la negociación colectiva durante el bienio 1985-1986 (Palomeque 1992:50). En el AES la UGT aceptó las directrices salariales del gobierno, asumió las medidas de flexibilización del mercado laboral y aprobó la cofinanciación de un fondo de solidaridad para la creación de empleo a través de las cotizaciones de los trabajadores; los empresarios se declararon dispuestos a reducir las horas extraordinarias y a aumentar las inversiones dentro del país; y finalmente el Gobierno prometió ampliar la cobertura del seguro de desempleo, incrementar las pensiones, intensificar las inversiones públicas y reconsiderar los diversos aspectos de su política de empleo.

[79] El Gobierno no participó formalmente en el Acuerdo Interconfederal firmado en febrero de 1983, pero parece que mostró un gran interés en que se firmase dicho acuerdo para garantizar la paz social en las empresas y la moderación salarial (Führer 1996:365).

sociales. Este, por su parte, esperaba que dicha moderación salarial y pacificación de las relaciones laborales le ayudase a llevar a cabo su política económica sin tener que recurrir a medidas más duras.

Sin embargo, como hemos visto, las políticas emprendidas por el Gobierno socialista no fomentaron la demanda agregada, como había ocurrido en Europa en los años setenta (Scharpf 1992), sino que fueron moderadamente restrictivas. Por otro lado, como acabamos de ver, el número de actores firmantes varió en uno y otro pacto. El AI fue formalmente bipartito, pues el gobierno no participó directamente, entre la patronal CEOE y los dos sindicatos más representativos, UGT y CCOO. El AES, por el contrario, fue tripartito al firmarlo la CEOE, el Gobierno y uno de los sindicatos más representativos, la UGT (que según los resultados oficiales de las elecciones sindicales de 1982 era la primera fuerza sindical por número de delegados a comités de empresa). Si el Gobierno fue quien eligió la política económica que iría en el acuerdo global, vamos a ver que fue la dirección ugetista quien eligió, sobre todo en un primer momento, la variedad de acuerdo global de contrapartidas (a dos o tres bandas).

2.1. La concertación "de oferta" que ofrecía el Gobierno socialista

A principios de los años ochenta el PSOE defendía esa coordinación económica puesta de moda en otros países europeos a finales de los años sesenta y durante los setenta[80]. El gobierno, para resolver la falta de crecimiento económico y el desempleo, fomentaría la demanda agregada[81]. Al mismo tiempo la moderación salarial practicada por los sindicatos le permitía combatir la inflación,

---

[80] Véanse las Resoluciones del 29º Congreso del PSOE, 1981, pp. 121 y 124.

[81] "Los socialistas consideramos llegado el momento de llevar a cabo una política de demanda más expansiva en el marco de un equilibrio en la evolución dinámica de precios y salarios (...). Por ello nos proponemos utilizar el Sector Público a través de los gastos de inversión en reactivar la economía que habrá de crecer durante el cuatrienio previsto en el programa a una tasa entre el 4,5 y el 5 por 100 anual acumulativo" (R.29C.PSOE.1981:121).

y crear más empleo[82], sin tener que recurrir a una política monetaria austera[83]. Los sindicatos se verían recompensados, además, con una inmediata mejora del gasto social[84]. En pocas palabras, para el PSOE, la coordinación de sus políticas con la actuaciones de los sindicatos constituía un poderoso instrumento para que sus políticas, keynesianas, tuvieran los resultados que deseaban tanto ellos como los sindicatos.

Sin embargo, como acabamos de ver, tras acceder el PSOE al gobierno, para su área económica estaba claro que una política contracíclica no atacaría los orígenes de la crisis económica[85].

---

[82] Exponían que para combatir la inflación era necesario "una desaceleración del crecimiento monetario de los costes de los factores productivos". Y para conseguir esa desaceleración proponían, en primer lugar, "[l]a firma de pactos salariales con las centrales sindicales que favorezcan la creación de empleos". Así esperaban que "una moderación de precios y salarios" trajese "[u]na disminución considerable del desempleo a lo largo del cuatrienio" (R.29C.PSOE.1981:121).

[83] "No es (...) propósito de los socialistas utilizar de manera fundamental -aunque sí secundaria- la política monetaria para conseguir dicho objetivo [reducir el diferencial de inflación con nuestros competidores internacionales] (...). [Por el contrario, el] esquema fundamental debe ser el de los acuerdos Gobierno-Centrales Sindicales que, en este sentido, deberían siempre hacerse en la perspectiva de un mantenimiento o una disminución de la tasa de crecimiento de los precios -y, por tanto, de los salarios-, según las perspectivas de la evolución de la primera de estas variables en los mercados internacionales y en los principales países competidores del grupo de la OCDE" (R.29C.PSOE.1981:124).

[84] Tales contrapartidas a corto eran el aumento de la cobertura de desempleo, la ampliación del régimen general de la Seguridad Social, la ampliación del salario social mediante la combinación adecuada de inversiones en educación, sanidad, equipamientos urbanos, financiación de vivienda, etc (R.29C.PSOE.1981:121).

[85] Esta valoración fue ratificada por el partido en su 30º Congreso celebrado en diciembre de 1984. Allí exponían:

"Las ortodoxias económicas se han modificado sensiblemente en los últimos años. Después de la Segunda Guerra Mundial, la principal responsabilidad de los gobiernos consistía en lograr un nivel global de demanda suficientemente elevado como para asegurar el pleno empleo, siendo la Balanza de Pagos y la inflación las principales restricciones. En los últimos años, el enfoque se ha desplazado hacia la oferta, buscándose a toda costa la elevación de la rentabilidad

¿Implicaba el abandono de las políticas clásicas de los socialdemócratas dejar de contar con los sindicatos? ¿El tiempo de la coordinación económica había terminado? En otras palabras, ¿seguían siendo útiles los sindicatos para el éxito de las políticas económicas? Como vimos, estas preguntas han recibido diferentes respuesta por parte de los investigadores de la economía política. Para algunos, la colaboración de los sindicatos no es conveniente (por las contraprestaciones que exigen a cambio) o, al menos, no tan necesaria para el éxito de las políticas de oferta. Para otros, por el contrario, no sólo es deseable pactar las reformas económicas con los sindicatos, sino además seguir contando con esas negociaciones salariales centralizadas para reducir la inflación, restaurar los beneficios empresariales y crear más empleo.

La posición dominante en el PSOE fue que la ejecución de políticas de estabilización y ajuste estructural formaría parte de acuerdos globales con la UGT y la patronal, independientemente de que se materializada en un pacto formal[86]. En ellos los sindicatos

---

empresarial, para lo cual los principales instrumentos son la moderación salarial y la reducción en los altos tipos de interés vigentes" (R.30C.PSOE.1984:17).

Consideraban igualmente que "[l]a adopción de una política de impulso de la demanda interior con la pretensión de conseguir una tasa de crecimiento superior a la experimentada en los últimos años" implicaría una serie de peligros "ya que suponía forzar el crecimiento económico en un contexto internacional próximo al estancamiento, con lo que aparecían graves dificultades en nuestra Balanza de Pagos" (R.30C.PSOE.1984:19).

[86] Según recordaban Carlos Solchaga y Joaquín Almunia durante las entrevistas mantenidas con el autor los días 19-7-96 y 29-7-96. En su 30º congreso de 1984 los socialistas afirmaban claramente que "la política de creación directa de empleos y la destinada a conseguir un crecimiento estable de la economía española deberán apoyarse en la concertación social". Entendían así que "la lucha contra el paro no puede entenderse como una tarea exclusiva del Gobierno, sino que se trata de una labor a desarrollar por toda la sociedad". De ahí que les pareciese preciso "proseguir la política de concertación social que centrales sindicales y patronales han venido desarrollando desde 1979" Creían que esto se había logrado con la firma del AES. Este permitiría la mejora del clima de confianza y la disminución de incertidumbres (R.30C.PSOE.1984:20,21). Quedaba así claro la necesidad de moderación salarial:

intercambiarían moderación de salarios, gracias a una negociación colectiva centralizada, a cambio de mayor empleo y mejoras sociales[87]. Según Joaquín Almunia, las reflexiones sobre las necesidades de descentralizar la negociación colectiva son posteriores[88]. Parece, por el contrario, que los ministros de Economía y Hacienda tenían sus dudas con respecto a estos acuerdos globales. Se mostraban escépticos sobre la necesidad de políticas de rentas concertadas para reducir la inflación en épocas de crisis o que los sindicatos las aceptasen en épocas de expansión económica[89]. El primer ministro de economía del Gobierno socialista, Miguel Boyer, convencido de que la lucha contra la inflación se podría conseguir sin acuerdos (Guindal y Serrano 1986:150), no participó en la negociación del AI de 1983 (Sánchez y Santos 1990:415). En el verano de 1983 manifestaba incluso su oposición a la política de pactos sociales porque implicaban un obstáculo en el saneamiento de la economía española:

"Los pactos sociales son caros y no sirven para resolver los problemas estructurales de este país"[90].

"Para el PSOE, la determinación de los incrementos salariales en función de la inflación prevista constituye un mecanismo fundamental -pero no exclusivo- de la política de rentas antiinflacionista que necesita nuestra economía" (R.30C.PSOE.1984:32).

[87] "[L]a política de moderación salarial deberá ser compensada no sólo con la creación de puestos de trabajo que permitan el mantenimiento del poder adquisitivo global y los niveles de demanda interna, sino también con la mejora en la dotación de los servicios y prestaciones sociales derivados de la progresividad de los instrumentos fiscales y recaudatorios" (R.30C.PSOE.1984:32).

[88] Afirmación realizada durante la entrevista con el autor del día 29-7-96.

[89] Según reconocía el propio Carlos Solchaga durante la entrevista con el autor del día 19-7-96.

[90] Declaración recogida por Sánchez y Santos (1990:416). *El País* (8-1-84) recoge que hubo declaraciones en las que se afirmaba que el Gobierno socialista no negociaría ni con los sindicatos ni con la patronal su programa económico. Según El País, el Ministro de Economía iba avanzando en su programa económico sin que, aparentemente, le importara demasiado lo que pudiera pensar la central socialista. La dirección de la UGT terminó así abiertamente enfrentada con Miguel Boyer hasta el

Pero la posición de Miguel Boyer no era dominante ni en el Gabinete ni en resto del Partido. Así, con respecto al AES, todos los socialistas se felicitaron de que se hubiese podido conseguir un nuevo acuerdo de concertación global[91].

Finalmente, en cuanto a la forma de materializar esos acuerdos globales, al principio al Gobierno socialista le era indiferente con tal de que hubiera moderación salarial y se apoyasen sus políticas. Así, el Gobierno no presionó mucho por conseguir un acuerdo tripartito a principios de 1983[92]. Posteriormente, cuando su experiencia de gobierno aumentó, su interés por el tripartismo aumentó. Joaquín Almunia sostiene que el Gobierno estaba preocupado por que los interlocutores sociales se diesen cuenta de que:

"las cosas tienen que encajar en una visión global, porque si al Gobierno se le pide una serie de contrapartidas, el Gobierno quiere de sus interlocutores que se pongan mínimamente en situación de que todo cuadre, de que todo sume y de que no se produzcan medidas totalmente contradictorias. En el año 84 se estaba produciendo un ajuste muy fuerte que no se había

---

extremo de felicitarse al ser sustituido por el que había sido hasta entonces Ministro de Industria, Carlos Solchaga (según confirmó este último durante una entrevista con el autor mantenida el 19-7-96).

[91] Según recordaba Joaquín Almunia durante la entrevista con el autor del día 29-7-96. En el mismo sentido, Manuel Chaves, Secretario Confederal de la UGT y Secretario de Asuntos Económicos, Sociales y Sindicales del PSOE, declaraba en el verano de 1985 que la política de concertación era un eje estratégico fundamental de la UGT, y el PSOE la consideraba en su programa electoral como instrumento clave de su política económica. Consideraba igualmente que sin concertación el Gobierno socialista tendría dificultades para aplicar su política económica y la Unión General de Trabajadores sufriría un vacío estratégico de graves consecuencias. Finalmente se temía que las tensiones entre el Gobierno y la UGT producían desconciertos en la opinión pública y planteaban dudas sobre la coherencia del proyecto socialista (*El País* 21-7-85).

[92] Según declaró Carlos Solchaga durante la entrevista con el autor del día 19-7-96, el Gobierno socialista pensaba en un acuerdo del tipo del AES desde un primer momento.

> producido al inicio de nuestra gestión de gobierno. El ajuste duro lo producimos en el segundo ejercicio, que es el primer presupuesto que hacemos de verdad a conciencia. Se hace ese presupuesto y ese diseño de política en los últimos meses de 1983 a la vez que se inicia la reconversión industrial, y entonces, desde el Gobierno pensamos que es mejor que estén asociados y que no nos estén exigiendo cosas desde fuera de la responsabilidad, que es mejor que compartan una cierta responsabilidad"[93].

2.2. Las preferencias sobre concertación social en la UGT

En el lenguaje de la dirección de la UGT la "concertación social" era entendida de las dos maneras señaladas. Podía significar una implicación directa en el proceso político, pero también como forma de que las políticas de los gobiernos tuvieran éxito. En la primera legislatura socialista la entendieron preferentemente de esta última forma.

Ya antes de la llegada del PSOE al gobierno, la UGT había firmado pactos que formaban parte de esos acuerdo globales entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos. Pero a partir de 1983 lo haría, además, con unas políticas económicas que no eran las típicas de esta clase de acuerdos. ¿Por qué aceptaba acuerdos globales de contrapartidas, aceptando así la contención del salario real?

Para la dirección ugetista se trataba de encontrar la mejor estrategia de acción sindical (negociar centralizadamente o presionar en el mercado de trabajo[94]) para alcanzar sus objetivos, dados un contextos determinados. Estos objetivos -que ya hemos visto en los apartados anteriores- eran resumidos por ellos mismos en cuatro (R.33C.UGT.1983:40):

---

[93] Afirmaciones realizadas durante la entrevista con el autor del día 29-7-96.

[94] En el transcurso de los años ochenta se fue fraguando en Europa la idea de que una negociación colectiva descentralizada no tiene que ser necesariamente sinónimo de una estrategia de presión y confrontación en los centros de trabajo, pero ésta no era todavía una opinión extendida a principios de esa década.

"1. Dar una salida solidaria a la crisis y crear empleo.
2. Desarrollar una mayor protección a los desempleados y sectores más desprotegidos.
3. Fortalecer a los sindicatos y democratizar el área económico social.
4. Hacer de la UGT el sindicato mayoritario y hegemónico de España".

Pero la UGT tenía que desarrollar su acción sindical en un contexto caracterizado por la instauración reciente de la democracia, un marco de relaciones laborales en proceso de constitución[95] y, sobre todo, crisis económica[96]. Así los líderes de la UGT estaban convencidos de que, en esos contextos, se obtendrían mejores resultados en términos de empleo y salarios para todos los trabajadores, más otros beneficios para las organizaciones, si se negociaba centralizadamente con los empresarios, que si se presionaba en el mercado de trabajo[97]. En esa negociación colectiva

---

[93] Respecto al marco de relaciones laborales, la dirección de la UGT consideraba que la situación sindical seguía siendo "extremadamente deficiente y embrionaria", carente de un "marco legal y democrático de relaciones laborales necesario para la consolidación del sindicalismo como institución básica de un sistema democrático", porque los anteriores gobiernos habían pospuesto las "medidas normativas, institucionales, asistenciales, participativas, indispensables e inherentes al papel del sindicalismo en una sociedad industrial y democrática"(R.33C.UGT.1983:38). La negociación colectiva, en concreto, tenía una estructura confusa y respondía a los criterios impuestos por la organización vertical del régimen franquista (R.33C.UGT.1983:43,44).

[96] En su 33º congreso, la UGT afirmaba que había realizado su acción sindical en un contexto caracterizado por la "agudización de la crisis económica y del paro, con una mayoría de derechas en el Gobierno, con una inestabilidad de las instituciones y el sistema democrático y con una gran debilidad sindical" (R.33C.UGT.1983:38). Tres años más tarde afirmaban que la concertación social, ya bajo el Gobierno socialista, era el "instrumento más idóneo para defender los intereses de los trabajadores, contribuir al afianzamiento de la democracia y aportar esfuerzo solidario e ineludible en favor del saneamiento de la economía" (G.34C.UGT.1986:19).

[97] En su 33º Congreso, la UGT afirmaba que "[e]n momentos de crisis económica (...) la excesiva descentralización en la estructura de la negociación colectiva no

centralizada ellos aceptarían la contención del salario real a cambio de un incremento del gasto social[98], y creación de empleo.

El fracaso de la estrategia de presión emprendida por CCOO en 1979 y 1980 en contra de un acuerdo interconfederal firmado por la UGT y la CEOE, no consiguiendo incrementos salariales superiores a los aceptados por la UGT, y la propia experiencia de la negociación colectiva en 1984, año en que no hubo acuerdo de referencia[99], confirmaba al liderazgo de la UGT la eficacia de la negociación colectiva centralizada, y los efectos negativos que la falta de acuerdo

---

favorece los intereses de los trabajadores" y "conlleva, además, la falta de uniformidad de las condiciones de trabajo en el sector e impide al tiempo la elaboración de una estrategia negociadora común al mismo" (R.33C.UGT.1983:43). En su 34º congreso volvían a incidir en esto al afirmar que, en una situación de crisis económica, con un alto nivel de desempleo, era mejor negociar un acuerdo marco de referencia por solidaridad y para mantener el poder adquisitivo global de las rentas del trabajo (G.34C.UGT.1986:121). Al año siguiente, la UGT consideraba que la concertación social había sido la estrategia, en un contexto de una profunda crisis económica y política, más realista y factible así como la que con mayor eficacia había defendido a los trabajadores [véase el documento sobre la trayectoria de la negociación colectiva y la política sindical que UGT había mantenido hasta la fecha, adjunto a la carta-circular del Secretario de Acción Sindical, Apolinar Rodríguez, a las Federaciones Estatales de Industria y Uniones Regionales, Provinciales y de Nacionalidad (F.F. y U.U.), fechada en Madrid a 3 de noviembre de 1987. Caja: FEJP/515. F.L.C.].

[98] En concreto, pedían a cambio:

"[M]ayores prestaciones del subsidio de desempleo, tanto en el tiempo, como en la cuantía, como en el número de trabajadores subsidiados. La mayor y mejor cuantía de asistencia sanitaria y de educación. Una cuantía digna de las pensiones de forma que las jubilaciones como política de distribución de empleo sean efectivas. Una política de viviendas. etc. En definitiva, el desarrollo de programas sociales" (R.33C.UGT.1983:47).

[99] Según Guindal y Serrano su ausencia provocó una mayor conflictividad y unos incrementos salariales mucho más bajos de los que se hubieran conseguido en otras circunstancias. La subida media de los salarios se situaba en torno al 7,76% con una inflación al final del año del 9%. La cláusula de revisión salarial se había perdido en la mayoría de los convenios (Guindal y Serrano 1986:152).

producía en los incrementos salariales[100]. De hecho en su 33º Congreso afirmaban que la patronal creía que era factible conseguir la moderación salarial sin tener que ofrecer nada a cambio -como pretendía la UGT[101]. Además, esta estrategia reportaba importantes beneficios organizativos, no sólo por lo que se pudiese obtener del Gobierno, sino ser premiados por los trabajadores en las elecciones sindicales -y acercarse así a ese cuarto objetivo[102].

---

[100] Según la Memoria de Gestión del 34º Congreso "[q]uizá una de las experiencias más importantes durante este período de gestión para el conjunto de los trabajadores lo ha constituido la falta de acuerdo de referencia para 1984. Los resultados de la negociación colectiva sin dicho marco no han sido positivos..." (G.34C.UGT.1986:117). Señalan que en ese año de 1984 al no haber un acuerdo de referencia la negociación no fue fluida, no se garantizó unos mínimos a los trabajadores con poca capacidad de presión, ni se generalizaron las conquistas sociales (G.34C.UGT.1986:122). Por el contrario, "durante 1984 la negociación se caracteri[zó] fundamentalmente por los aspectos contrarios, eso es: un incremento de conflictividad; se realizan 7.896.000 jornadas de huelga (2.341.000 en 1983) que afecta al 21 por 100 de los trabajadores. Otro aspecto que sobresale es la concentración de las reivindicaciones en el aspecto salarial, por otra parte, insuficiente, ya que si es cierto que el incremento salarial estuvo muy cerca del IPC previsto (7,76 y 8 por 100 respectivamente) la cláusula de revisión salarial no fue mantenida en muchos convenios y el resultado fue una pérdida de poder adquisitivo cuando menos de un punto y medio para los trabajadores sin cláusula de revisión" (G.34C.UGT.1986:123).

[101] "Nuestra política sindical frente a la patronal debe partir del análisis ya realizado de nuestra estrategia sindical, primero del AMI y posteriormente del ANE y del permanente acoso y derribo de la patronal frente al mismo, ya que consideraba muy negativo para sus intereses económicos, sociales y sobre todo políticos, el pacto entre Sindicatos y Gobierno en materia de política económica [...] *a cambio de una disciplina o recortes salariales pactados, que ellos consideran poder conseguir perfectamente en el ámbito de las relaciones contractuales obrero-patronal* (R.33C.UGT.1983:42, mía la cursiva).

[102] "Nuestra estrategia de sindicato eficaz, responsable, que negocia y tiene en cuenta al conjunto de la clase trabajadora, que ha sabido adecuar la negociación y la presión, ha recibido el respaldo mayoritario de los trabajadores en las últimas elecciones sindicales, convirtiéndonos en el Sindicato mayoritario de España" (R.33C.UGT.1983:39).

En conclusión, la UGT apoyó el corporatismo de oferta (aceptando la moderación salarial en la negociación colectiva centralizada) porque pensaba que era, dado un contexto de crisis económica, debilidad sindical e incluso democrática, el mejor modo de proteger a todos los trabajadores (objetivo clásico de los sindicatos socialdemócratas), así como de fortalecer a los sindicatos (objetivo propio de sindicatos salidos recientemente de un largo período de clandestinidad), sin suponerle costes organizativos (como podría haber sido la pérdida de audiencia sindical), sino todo lo contrario. Aun así, la aceptación de la coordinación económica por parte de la UGT tuvo que implicar un cierto grado de confianza de este sindicato en que las políticas económicas del Gobierno socialista, más centradas en el lado de la oferta de la economía, produjesen los resultados esperados, pues lo tradicional había sido utilizar esta clase de acuerdos con políticas decididamente expansivas (Scharpf 1992).

Pero al mismo tiempo que la dirección de la UGT aceptaba continuar con la moderación salarial prefería separar la negociación con los empresarios de los acuerdos con el Gobierno socialista, al contrario de lo que había hecho en el ANE, el cual había sido un pacto tripartito. La UGT prefería que el Gobierno no participase directamente en sus negociaciones con los empresarios para alcanzar acuerdos interconfederales para 1983 y 1984[103]. Este rechazo al tripartismo formal no se dio únicamente en 1983 y 1984. Tras la experiencia del AES (luego se verá por qué lo aceptaron), la UGT volvió a defender en 1986 que se negociase por un lado con el Gobierno sus políticas y, por otro, con los empresarios un acuerdo

[103] En aquel acuerdo fue la UGT quién se opuso a dicha participación, según admitía su propio Secretario General, Nicolás Redondo:

"La UGT no quiere un acuerdo a tres bandas porque el tercer interlocutor estaba en el programa electoral" (Redondo, en Guindal y Serrano 1986:133).

José María Zufiaur sostenía lo mismo:

"[R]ecordemos las posiciones de la UGT negándose al pacto triangular en 1983 y 1984 para evitar tener que pactar la política del Gobierno con los empresarios" (Zufiaur 1985:212).

interconfederal[104]. Pero ¿por qué prefería concertar por un lado con el gobierno y, por otro, con los empresarios?

---

[104] Así, al comienzo formal de las reuniones para la concertación social para 1987, Nicolás Redondo afirmaba que las posibilidades de un pacto tripartito -semejante al AES o al ANE- eran "muy remotas" (*El País*, 4-9-86). El dirigente sindical prefería negociar dos tipos de acuerdo. Por un lado, los sindicatos mantendrían con el Gobierno conversaciones para llegar a acuerdos en materia de empleo, Seguridad Social, cobertura social y Presupuestos del Estado. Con la patronal, los sindicatos acordarían las condiciones de la negociación colectiva. Este sistema conllevaba, reconocía Nicolás Redondo, abandonar la idea de implicar directamente al Gobierno en el acuerdo formal con los empresarios (*El País*, 4-9-86). A comienzos del otoño de 1986 se mostraban satisfechos, entre otras cosas, por haber influido en los presupuestos para 1987 "sin perjuicio de abordar la negociación colectiva en negociaciones posteriores con los empresarios" (véase el documento titulado "Encuentro Confederal de Acción Sindical: Presupuestos en 1987" adjunto a la carta-circular del Secretario de Acción Sindical, Apolinar Rodríguez, a los Secretarios de Acción Sindical de las F.F. y U.U., fechado en Madrid a 26 de septiembre de 1986. Caja: FEJP/514. F.L.C.). Igualmente, a finales de ese año afirmaban que su "sentido de la responsabilidad [les] inclina[ba] a compartir la remisión de la concertación a los agentes sociales, sin la presencia del Gobierno" (véase el documento aprobado por la Comisión Ejecutiva el 16 de diciembre de 1986, y titulado: "UGT, ante la concertación social para 1987". Caja: FEJP/514. F.L.C.). A principios de 1987 sostenían:

"Queremos un acuerdo interconfederal entre empresarios y sindicatos, respetando la autonomía de las partes, sin la presencia del Gobierno. CEOE y CCOO, por distintos motivos, piden la participación del Ejecutivo" (demanda de Nicolás Redondo a Felipe González resumida por Apolinar Rodríguez en una carta-circular a las F.F. y U.U. fechada en Madrid a 7 de enero de 1987. Caja: FEJP/514. F.L.C).

Finalmente, al retomarse la negociación con el Gobierno a principios del verano de 1987, los dirigentes ugetistas rechazaron los intentos de un pacto global tripartito entre el Gobierno, los sindicatos y los empresarios (véase la carta-circular del Secretario de Acción Sindical, Apolinar Rodríguez, a las F.F. y U.U., fechada en Madrid a 31 de julio de 1987. Caja: FEJP/515. F.L.C) y volvieron a incidir en ello meses después en un documento proporcionado junto a una carta-circular del Secretario de Acción Sindical, Apolinar Rodríguez, del 3 de noviembre de 1987, op. cit.

Para entender por qué la UGT rechazaba el tripartismo hay que tener en cuenta sus expectativas con respecto a empresarios y color político de los gobiernos. En relación a los primeros, estimaban que serían muy reacios a apoyar políticas solidarias y reforzar el poder institucional de los sindicatos en las empresas y organismos públicos[105]. En relación a los segundos, era de esperar que un gobierno socialista, con el que compartían ideología, habían estado trabajando juntos y les habían apoyado explícitamente en las elecciones legislativas, sería más favorable a practicar las políticas económicas y sociales que deseaban ellos que un gobierno de derechas. Por tanto, si en sus negociaciones con los empresarios participaba el Gobierno socialista, aquello podría suponer que éste accediese a renegociar con los empresarios promesas hechas a los sindicatos[106], o que hiciese cesiones no queridas por los sindicatos en las políticas gubernamentales[107]. En pocas palabras, acuerdos globales

---

[105] Para la UGT la CEOE no quería sino "la pervivencia de un modelo político que siga amparando privilegios corporativos, tutelas administrativas y beneficios especulativos" y la "aplicación de una política económica y social autoritaria y hegemónica, antagónica con cualquier salida negociada y solidaria de la crisis, que busca imponer sacrificios sin contrapartidas y realizar los ajustes necesarios en base a la instalación masiva del desempleo, a la congelación y reducción de los niveles de protección social y a la debilitación del movimiento sindical" (R.33C.UGT.1983:42).

[106] En una entrevista a Nicolás Redondo, el Secretario General afirmaba:

"Yo se lo había explicado a la CEOE: hay cosas que ya tenemos concedidas en el programa electoral, como las cuarenta horas, y eso no es ninguna concesión, no tengo que negociarlo. A mí me parecía que el Gobierno no tenía que estar en aquella mesa [en la que se negoció el AI para 1983], porque todo lo que fuera negociar [el Gobierno con los empresarios] era perder cosas que teníamos de antemano ganadas" (Guindal y Serrano 1986:133).

Por otro lado al retomarse la concertación social tras las elecciones legislativas de 1986 Redondo volvía a incidir en que un acuerdo tripartito no era conveniente con un gobierno socialista porque el programa electoral del PSOE era ya un compromiso y cualquier negociación con la patronal podría rebajar las promesas del citado programa (*El País* 4-9-86).

[107] "La CEOE parece mostrar poco entusiasmo en favor de un Acuerdo Interconfederal tras el fracaso del modelo tripartito propuesto por el Gobierno que ésta defendía y apoyaba porque, sin duda en aquel marco, sus reiteradas pretensiones

tripartitos con un gobierno amigo suponía que los empresarios negociarían con el Gobierno la influencia ugetista sobre este último[108]. Por el contrario, si el Gobierno era de derechas, los cálculos cambiaban. Si el Gobierno participaba en la negociación entre empresarios y sindicatos, no se perdería ninguna influencia sobre el Gobierno, sino que la UGT podría negociar la influencia de los empresarios sobre el Gobierno conservador[109].

Queda así patente la importancia de las relaciones de solidaridad entre los partidos socialistas y los sindicatos para la UGT. Cuando existía un partido "amigo" en el gobierno, este sindicato no esperaba influir globalmente en sus políticas a través de la vía "neocorporativista", sino a través del partido político, pues para eso tenían ese modelo de relaciones. La dirección ugetista no pretendía, por tanto, un cogobierno de la UGT, CCOO y CEOE (aplicado por el gobierno). Querían influir en las políticas públicas a través del partido en el gobierno, rechazando que participasen los otros agentes sociales que representaban otras opciones que habían perdido las elecciones[110]. Para ello no hacían falta pactos formales, pues ya se

---

sobre flexibilidad y reducción de costes laborales (reducción de cotizaciones a la Seguridad Social) podían ser planteadas con cierta garantía de "intercambio" (carta-circular del Secretario de Acción Sindical, Apolinar Rodríguez, a las F.F. y U.U, pág. 6, fechada en Madrid a 6 de noviembre de 1987. Caja: FEJP/515. F.L.C.).

[108] En este sentido, los ugetistas se felicitaban de haber influido en los presupuestos para 1987 "sin perjuicio de abordar la negociación colectiva en negociaciones posteriores con los empresarios" (véase el documento titulado "Encuentro Confederal de Acción Sindical: Presupuestos en 1987", pág. 3, op. cit.).

[109] "[C]onsideramos que la estrategia del ANE ha sido acertada y sus resultados han sido positivos en la defensa de los trabajadores de nuestro país, *ya que supuso un factor de freno en la adopción de medidas reaccionarias* frente a las crisis exigidas por la Patronal, en el terreno de la Seguridad Social y en el de mayor flexibilidad de plantillas, de la política presupuestaria del Gobierno, etc." (énfasis mío, R.33C.UGT.1983:39).

[110] En "UGT, ante la concertación social para 1987" (op. cit.) afirmaban que tendrían "toda la legitimidad moral y política para solicitar la actuación del Gobierno" ya que era un Gobierno "sustentado por un partido socialista que ha ganado las elecciones con un programa electoral progresista, que entre otras cosas fue fruto de un compromiso con la Unión General de Trabajadores". Véase igualmente la carta-

habían negociado los programas electorales o se realizaría mediante reuniones privadas ad hoc. Para la UGT, esto no suponía que el gobierno fuese el gobierno privado de un determinado grupo de presión sino el gobierno de un "bloque social de progreso" (representado por el sindicato ugetista y legitimado en las urnas). La concertación no podía, por tanto, suponer una renegociación del programa del PSOE con los "perdedores" de las elecciones, sino sólo de aquello que no podría llevarse a cabo sin su colaboración[111].

En conclusión, cuando el PSOE llegó al poder en 1982, dados los objetivos de la UGT y su interpretación del contexto laboral, social y económico y del previsible comportamiento del resto de los agentes sociales, la estrategia preferida por este sindicato en las relaciones laborales era continuar con acuerdos globales de contrapartidas de ámbito estatal donde ellos ofrecerían la contención salarial en una negociación centralizada, pero separando ahora los acuerdos con los empresarios de los acuerdos con el Gobierno socialista (es decir, rechazaban un tripartismo formal). Hay que remarcar, sin embargo, que eran principalmente los contextos económicos y de debilidad sindical los que decidían si negociar centralizadamente o no, mientras que el color político del Gobierno decidiría si se materializaba en un único pacto global tripartito o a dos bandas.

2.3. La ausencia de un AI en 1984 y la firma del AES

Como se ha visto, UGT, CCOO y la CEOE firmaron un acuerdo interconfederal para 1983 pero no fue acompañado de otro para 1984, ¿por qué no hubo entonces un AI para 1984? Hemos visto cómo el sindicato socialista consideraba que para conseguir objetivos que se fijaban en una situación de crisis económica y transición en la fijación del marco de relaciones laborales era más

---

circular del Secretario de Acción Sindical, Apolinar Rodríguez, a las F.F. y U.U., fechada en Madrid a 31 de julio de 1987. op. cit.

[111] Véase igualmente la carta-circular del Secretario de Acción Sindical, Apolinar Rodríguez, a las F.F. y U.U., fechada en Madrid a 31 de julio de 1987. op. cit.

conveniente la negociación centralizada, aceptando la contención salarial, que presionar en el mercado de trabajo. Según el diario *El País* (18-4-85), se frustró un nuevo acuerdo interconfederal en el otoño de 1983 porque el Gobierno pedía una moderación salarial que era excesiva para la dirección de UGT[112]. De hecho el ministro de Economía, Miguel Boyer, quedaría completamente invalidado para restablecer el diálogo social con los sindicatos, y particularmente con la UGT, que vetó su presencia en la negociación del AES (Sánchez y Santos 1990:417).

Por otro lado, si eran éstas las preferencias de la UGT y del Gobierno González, ¿por qué firmó la dirección de la UGT el AES si, en principio, no deseaba pactos tripartitos? Según el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Joaquín Almunia, la iniciativa del alcanzar un acuerdo global tripartito la tuvo el Presidente del Gobierno porque, una vez controlados los desequilibrios más importantes (déficit comercial, inflación, déficit público), estimaba que había "margen para iniciar e impulsar, a través de un acuerdo de esta naturaleza, un proceso de recuperación de la inversión y de creación

---

[112] Nicolás Redondo en la entrevista de Guindal y Serrano (1986:151) acusaba a parte del gobierno de haber impedido el AI de 1984:

"El año 1984 se llevó a cabo una política de ajuste duro, una política que se puede calificar de monetarista. Y, como política monetarista, era autoritaria, con poco espacio para la negociación. Se trataba de conseguir crecimientos salariales muy bajos. Y el Gobierno no se recató en dar orientaciones a la CEOE. A los empresarios se les hizo llegar una referencia sobre el crecimiento de la inflación mensual. Suficiente para que se agarraran a aquello y dijeran: Si las cosas son así, mi ofrecimiento no pasará de este punto (...). Fue una política muy medida, y yo creo que en aquel momento el Gobierno, una parte del Gobierno, quiso cogernos en una pinza entre ellos y la CEOE".

Según otra información aparecida en *El País* (28-1-87), Redondo afirmó que el Ministro de Economía, Miguel Boyer, había impedido ese acuerdo mediante la filtración mensual de las tasas de inflación a la CEOE, y aconsejándoles que no aceptaran la banda salarial que proponía UGT. El propio Carlos Ferrer llegó a insinuar que fue el propio ministro de Economía quien les había recomendado que no firmasen un acuerdo con el contenido propuesto por UGT (Guindal y Serrano 1986:151).

de las mejores condiciones posibles para la generación de empleo"[113]. Es posible que además existiese, además, cierta preocupación en el PSOE por los efectos que tendría un desacuerdo explícito con la UGT sobre los votantes socialistas[114]. Pero, según lo expuesto anteriormente, la UGT tendría que haber rechazado un acuerdo como el AES donde este sindicato, el Gobierno y la patronal negociaron juntos.

Parece que una serie de hechos hizo variar, temporalmente, los cálculos que hacía la dirección de la UGT sobre la participación directa del gobierno socialista en sus negociaciones con la CEOE. En primer lugar, el desarrollo de la negociación colectiva durante la primera mitad de 1984 mostraba que la patronal podía conseguir la contención salarial sin necesidad de llegar a acuerdos interconfederales con los sindicatos. Para conseguir, por tanto, que los firmase era necesario ofrecerle a cambio alguna clase de "bien" que no obtuviera en la negociación libre con los sindicatos, sino que implicase la actuación legislativa (como, por ejemplo, modificaciones en los tipos de contratación laboral). En este sentido, como ya hemos comentado, la negociación colectiva de 1984 se desarrolló sin un acuerdo de referencia, y los trabajadores obtuvieron las mayores pérdidas adquisitivas de la década[115] a pesar de haberse incrementado las movilizaciones (Führer 1996:368; Guindal y Serrano 1986:152-153)[116]. La UGT comprendió que la falta de acuerdo repercutía negativamente en los incrementos salariales (Guindal y Serrano 1986: 152) y, en general, no eran "buenos para ningún interlocutor social"

---

[113] Intervención del Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Joaquín Almunia, el 23 de octubre de 1984 en el Congreso de los Diputados.

[114] Según Führer el Gobierno quería evitar que la opinión pública creyera que deseaba la controversia constante con los sindicatos (Führer 1996:367).

[115] Según los datos de la negociación colectiva, de la encuesta de salarios y de la remuneración por asalariado (véase *Economía y Sociología del Trabajo*, núm. 25/26, pp. 218,229), entre 1977 y 1994 el año en que hubo mayor pérdida de poder adquisitivo fue precisamente 1984 (-3,5 según los datos de la negociación colectiva y -1,2 según la encuesta de salarios y remuneración por asalariado).

[116] En el período comprendido entre la primavera de 1984 y la de 1985 se produjo la mayor destrucción de puestos de trabajo de 1977 (Albarracín 1991:414).

(G.34C.UGT.1986:117). La dirección de la UGT estaría así interesada en un nuevo AI para 1985, por lo que estaría dispuesta a que el Gobierno socialista concediese ciertas contraprestaciones a la CEOE[117].

A esto hay que añadir que la dirección de la UGT sabía ya en 1984, después de más de un año de gobierno del PSOE, hasta donde llegaba su influencia sobre el Ejecutivo. La entrada de la CEOE en las negociaciones ya no le supondría el coste de oportunidad comentado anteriormente[118]. De hecho, las tensiones que surgieron dentro del liderazgo de la UGT no fueron por el número de interlocutores, sino por los contenidos[119]. En el AES la UGT aceptó las directrices

---

[117] Conviene recordar que la CEOE había ratificado no muy convencida tanto el ANE, como el AI de 1983 (Führer 1996:361,366). Respecto al primero, veía una excesiva deferencia del Gobierno de UCD a los sindicatos. En cuanto al segundo, estaban renuentes porque desconocían el rumbo económico que los socialistas iban a emprender. Parece que en este caso hubieran preferido un acuerdo tripartito. En el caso del AES, la CEOE lo ratificó porque se aseguraba la contención salarial, se reducía la aportación empresarial a la Seguridad Social, y contaba con el desmantelamiento de las medidas de protección al despido (Führer 1996:369).

[118] Según una información de *El País* (8-7-84) dirigentes de UGT se quejaban de que estaban en un "estado de marginación" por parte del Gobierno. Decían que les faltaba información, el Gobierno hacía"oídos sordos" a sus propuestas, y disponían de escasos medios de trabajo. En esa misma información se afirma que la UGT aceptaría la concertación social si participaba directamente el Gobierno, y se ligaba la política de rentas a ciertas compensaciones -mayor participación sindical en las empresas, dinero para los sindicalistas- así como casar las soluciones en un marco coherente. Según otra información de *El País* (1-12-84), la UGT había firmado el AES como forma de corregir la política del Gobierno socialista.

[119] Según me expusieron Joaquín Almunia, José Luis Corcuera y José María Zufiaur en las entrevistas realizadas los días 29-7-96, 10-10-96 y 12-10-96 respectivamente. Según *El País* (1-12-84) dentro de la dirección de la UGT se produjeron fuertes tensiones con motivo de las negociaciones del AES. Mientras que el Secretario de Acción Sindical, José Luis Corcuera, era partidario de aceptar una propuesta de la CEOE para que el Gobierno adecuase la legislación laboral española a la comunitaria, el Secretario de Acción Institucional, José María Zufiaur, insistía en que había que seguir negociando porque no se podía aceptar en aquellos términos. Joaquín Almunia recordaba durante la entrevista con el autor del día 29-7-96 que:

salariales del gobierno, asumieron las medidas de flexibilización del mercado de trabajo y aprobaron la cofinanciación de un fondo de solidaridad para la creación de empleo a través de las cotizaciones de los trabajadores. Los empresarios se declararon dispuestos a reducir las horas extraordinarias y a aumentar las inversiones dentro del país. El gobierno prometió aumentar la cobertura del seguro de desempleo, incrementar las pensiones, intensificar las inversiones públicas y reconsiderar los diversos aspectos de su política de empleo. Parece, por tanto, que la cuestión de si una o doble negociación centralizada ya no era el tema principal.

3. Valoración del desarrollo de sus relaciones: ¿se renuevan las relaciones de solidaridad?

¿Hasta qué punto quedaron convencidos de que esos acuerdos globales de contrapartidas constituían la mejor forma de llevar a cabo las políticas gubernamentales? Y más aún, ¿hasta qué punto quedaron convencidos de que sus relaciones eran la mejor estrategia para obtener sus objetivos sociopolíticos? Esta última pregunta dependía de cómo valorasen lo que se había obtenido de la otra organización.

Para los líderes del partido, la concertación social, y en concreto el AES, había servido para crear empleo (R.30C.PSOE.1984:20,21), la lucha contra la inflación[120] y la salida de la crisis en general[121]. Tras

---

"La UGT lo vive con una división muy fuerte [la negociación del AES]. Nicolás Redondo nunca vio muy claro aquello. El fue arrastras en aquella negociación. Zufiaur no lo vio claro y fue arrastras, y quien empuja a la UGT por la vía de la negociación es Corcuera. Y Corcuera, con una capacidad fuerte de convicción a sus propios afiliados, a sus cuadros y a su propia dirección, es el que gana el pulso".

[120] A comienzos de 1988, la secretaría del PSOE de Asuntos Económicos, Sociales y Sindicales consideraba que la política antiinflacionista había sido posible gracias, en gran parte, a la moderación salarial, negociando los incrementos salariales en función de la inflación prevista, que se había desarrollado "durante el período 1985-1986, bajo

revalidarse la mayoría absoluta en las elecciones generales del 22 de junio de 1986, los líderes socialistas sostenían que la concertación social con las distintas fuerzas sociales y entre éstas no sólo había sido necesaria para salir de la fase más aguda de la crisis económica, sino que también lo sería para lograr en los años siguientes crecer sostenidamente, modernizar el aparato productivo, crear empleo, aumentar el bienestar social, reducir las desigualdades sociales, y, en general, "multiplicar la efectividad de muchas políticas (...) si en su formulación y ejecución intervienen, junto al Gobierno, los agentes económico-sociales" (G.31C.PSOE.1988:31). En pocas palabras, era necesaria para conseguir que un proyecto democrático de progreso tuviese posibilidades de consolidarse en España[122]. Por el contrario, la ausencia de concertación era percibida como uno de los obstáculos al proyecto socialista (G.31C.PSOE.1988:31)[123].

---

las orientaciones establecidas en el Acuerdo Económico y Social (A.E.S), firmado en octubre de 1984" (G.31C.PSOE.1988:42,43).

[121] Felipe González expuso delante de los delegados de UGT a su 34º Congreso, celebrado al final de la 1ª legislatura socialista, que los socialistas habían encontrado una grave crisis, de la cual se salió gracias a la colaboración de la UGT, pues la concertación social practicada había conseguido acelerar el proceso de saneamiento (*El País* 3-4-86). El Presidente del Gobierno volvió a incidir tras las elecciones legislativas de 1986 sobre las ventajas de un acuerdo entre empresarios y sindicatos como forma de mantener el poder adquisitivo de los trabajadores (*El País* 22-10-86). El Vicepresidente del Gobierno y Vicesecretario del Partido, Alfonso Guerra, afirmaba igualmente que la concertación era imprescindible para el éxito del PSOE, pues era la mejor forma de salir de la crisis en el menor tiempo posible, siendo la moderación salarial una de las causas que habían contribuido al crecimiento económico (*El País* 20-9-87).

[122] Resolución Política del Comité Federal del PSOE (11 de julio de 1986) recogida en la Memoria de Gestión del Comité Federal al 31 Congreso del PSOE, 22-24 de enero de 1988.

[123] "La concertación es, sin duda, un marco muy valioso para instrumentar y desarrollar esta perspectiva de futuro [se refieren a los desafíos de la revolución tecnológica, los cambios económicos y sociales]. La ruptura de esta tradición, que ha dado muy buenos resultados a la hora de gestionar la crisis, ha de tener efectos muy negativos a la hora de salir de la crisis y construir una economía que, al tiempo que sea competitiva, se vaya orientando hacia un nuevo compromiso social en el que la

La UGT, por su parte, también realizaba una valoración positiva de la concertación social practicada "a pesar de sus límites y de la repercusión negativa del incumplimiento de algunos compromisos"[124]:

En primer lugar, afirmaban haber obtenido unos beneficios para toda la sociedad española. Había sido un instrumento esencial de estabilidad política, y ayudado a reducir la inflación, manteniendo el poder adquisitivo de los trabajadores[125], destinar los incrementos de productividad a la creación de empleo y sanear[126], en general, la economía española[127]. Consideraban que la concertación social había

---

solidaridad, la desaparición del desempleo y el aumento de la democracia económica puedan pasar a ser rasgos fundamentales" (G.31C.PSOE.1988:31).

[124] Véanse la Memoria de Gestión, pp. 19-20, y las Resoluciones del 34º Congreso de la UGT, pág. 92, y la carta-circular del Secretario de Acción Sindical, Apolinar Rodríguez, a las F.F. y U.U. del 3 de noviembre de 1987, op. cit.

[125] En octubre de 1986, el Comité Confederal de UGT, máximo órgano entre congresos, valoraba que los dos años del AES habían sido positivos y habían servido para lograr aumentos salariales por encima del IPC, lo que se había traducido en una mejora del poder adquisitivo del conjunto de la clase trabajadora (*El País*, 5-10-86). En la Memoria de Gestión de la Secretaría de Acción Sindical de UGT, con registro de entrada por la FEJP el 30-3-87. (op. cit.) afirmaban que "[l]as rentas salariales globales medidas en términos reales (deflactadas desde los costes) globales frente a su caída en 1984 se contienen en 1985 y crecen en 1986, aunque su tasa de crecimiento sea menos que la del PIB y todavía no se detenga la caída (ya prácticamente detenida) en la participación en la Renta Nacional" (pág. 5).

[126] En la Memoria de Gestión de la Secretaría de Acción Sindical de UGT, con registro de entrada por la FEJP el 30-3-87. (op. cit.) afirmaban que, "el aspecto más importante y espectacular ha sido el cambio de tendencia del empleo, cuya recuperación se inicia en el segundo semestre de 1985, tendencia que se mantiene y refuerza durante todo 1986 y que, por sí misma, podría calificar la nueva situación como una nueva etapa de creación de empleo" (pág. 3).

[127] En la Memoria de Gestión de la Secretaría de Acción Sindical de UGT, con registro de entrada por la FEJP el 30-3-87. (op. cit.) afirmaban que con el AES se redobló la confianza en la economía española, lo cual favoreció el clima para la recuperación:

"Sin duda, los logros de la política económica, que han hecho posible la corrección de desequilibrios o la recuperación (...), tuvieron su apoyo fundamental en la política de concertación cuya acabada expresión ha sido el Acuerdo Económico y Social" (pág. 6).

impedido también que aumentasen las desigualdades sociales, se había reducido la conflictividad laboral, y había hecho más fluida la negociación colectiva.

En segundo lugar, había proporcionado beneficios para todos los trabajadores, formando parte de sus políticas solidarias e igualizadoras, pues se habían conseguido incrementos salariales para los sectores con menor capacidad de presión, como eran parados y jubilados, y generalizar las mejoras de jornada, derechos sindicales, etc[128]. Igualmente, había incrementado el número de trabajadores cubiertos por convenios[129], y, finalmente, evitado la aplicación de decisiones unilaterales, negociándose la Ley de Protección por Desempleo, la normativa de contratación laboral o la reforma del Estatuto de los Trabajadores.

En tercer lugar, las organizaciones sindicales más representativas se habían beneficiado, pues se había conseguido consolidar a los sindicatos e incrementado su legitimidad social, negociándose normas importantes para los sindicatos como la Ley Orgánica de Libertad Sindical o el Proyecto de Ley sobre Patrimonio Sindical.

Así, en su 34º Congreso, los ugetistas seguían apostando por esa concertación social consistente en llegar a acuerdos globales de contrapartidas para que las políticas del Gobierno satisficiesen los

---

[128] Dicha práctica solidaria, en principio, se conseguía a través del establecimiento de bandas salariales porque así se moderaban los incrementos salariales de los sectores con mayor capacidad reivindicativa y, por otro, aseguraban condiciones mínimas a aquellos con menor capacidad de presión (G.34C.UGT.1986:17).

[129] "[L]a negociación colectiva gracias al AES se ha extendido y homogeneizado, sin conflictividad perceptible, universalizando la presencia de UGT en los convenios; pactando leves mejoras de poder adquisitivo bajo la consagración de la referencia a la inflación prevista con una fórmula de garantía precisa; la jornada de trabajo apenas reducida tras las fuertes contracciones de años anteriores y algunos otros temas incorporados de modo disperso constituyen los rasgos de los convenios; permaneciendo invariables (en el bienio) la articulación y estructura negocial. En conjunto, el balance resulta positivo" (Memoria de Gestión de la Secretaría de Acción Sindical de UGT, con registro de entrada por la FEJP el 30-3-87, pág. 13, op. cit.).

objetivos del sindicato[130]. La continuación de esta concertación social quedaba ligada, eso sí, a una política económica más expansiva[131], a una participación activa del sindicato en la formulación de las políticas públicas[132], a una mejora social[133], y un fortalecimiento de los

[130] "La Unión General de Trabajadores retiene como elemento central de su estrategia proseguir y profundizar en la política de concertación. Para la UGT la concertación se inserta en el objetivo de alcanzar el pleno empleo, un mayor desarrollo económico y una política distributiva más justa (...) Nosotros creemos que sólo una política de solidaridad, cuyos ejes son la política de rentas globalmente considerada y la concertación, puede combinar la expansión económica con el control de la inflación y hacer partícipe a la sociedad en el proceso de cambios y transformaciones que impone la crisis" (R.34C.UGT.1986:62).

[131] "La lucha contra el paro y una política orientada a la creación de empleo constituye la máxima prioridad en la acción de la UGT (...). Un mayor crecimiento de la economía es condición imprescindible para la creación de empleo. La UGT propugna una política económica más expansiva compatible con un control de la inflación. Para lograr este objetivo, la UGT considera imprescindible la negociación de una política de rentas global, una mayor progresividad fiscal, el incremento de la inversión pública, la reforma del aparato de la Administración, una planificación industrial y el desarrollo de una política de fomento y creación de empleo" (R.34C.UGT.1986:60).

[132] "Lograr que nuestro país se sitúe adecuadamente en el concierto de los países desarrollados es un objetivo de nuestra acción sindical que exige una plena participación sindical en la definición de la política industrial y una amplia política de concertación con las organizaciones sindicales" (R.34C.UGT.1986:60).

[133] "[P]ara la UGT, concertación es algo más que la política de rentas o los acuerdos centralizados de la negociación colectiva: debe propiciar unas condiciones sociales que hagan posible conseguir niveles de bienestar para los trabajadores, homologables a los del conjunto de países más desarrollados, a través de un nuevo contrato social que haga conscientes y protagonistas a las estructuras sociales, a sus representantes, en el cambio de sociedad que implica la crisis" (R.34C.UGT.1986:62).

sindicatos[134], pero donde se seguía aceptando la negociación colectiva centralizada[135] y la moderación salarial[136].

Entrando más concretamente sobre la valoración de los resultados de las políticas económicas y sociales del Gobierno socialista, la dirección de la UGT reconocía que su gestión había sido positiva especialmente en cuestiones de legislación laboral tales como la Ley de Jornada Laboral, la Ley de Protección por Desempleo, la modificación del Estatuto de los Trabajadores, la Ley Orgánica de Libertad Sindical, o la Ley sobre Patrimonio Sindical (G.34C.UGT.1986:11). En política social destacaban la actuación socialista en educación[137].

Pero el resultado global de las políticas sociales y económicas del Gobierno socialista había sido el de un "éxito a medias", aunque el balance era globalmente positivo (G.34C.UGT.1986:21-25). Para los ugetistas, el Gobierno había conseguido logros importantes en el saneamiento de la balanza de pagos, la reducción de la inflación, el control del déficit público o la consolidación del sistema financiero. Por el contrario, los resultados eran insatisfactorios en cuanto al

---

[134] "Significa [la concertación social], asimismo, mejorar la relación de fuerzas para que la concertación que defendemos sea posible y se cumplan plenamente los compromisos" (R.34C.UGT.1986:62).

[135] "[L]a UGT (...) manifiesta la voluntad de continuar su estrategia de negociación global, homogenizadora, racionalizadora y reunificadora de las condiciones salariales, de jornada, de condiciones de trabajo, etc., del conjunto de los trabajadores" (R.34C.UGT.1986:80).

[136] "La UGT promoverá la política de concertación social como el instrumento más adecuado para la lucha antiinflacionista, al posibilitar el sostenimiento de la demanda frente al freno de la actividad económica y evitar el aumento de la conflictividad que se deriva de una política monetarista autoritaria. La UGT, colaborando en la lucha contra la inflación de manera decidida, seguirá negociando la subida salarial sobre la previsión de inflación, oficialmente pública..." (R.34C.UGT.1986:64)

[137] Para la UGT la LODE, la LRU, la Ley del Consejo Social de las Universidades y la Ley de Creación del Consejo General de Formación Profesional habían puesto las bases legales necesarias para la transformación de nuestro sistema educativo, y para permitir la participación y el control social sobre el sistema escolar español y "ello supone importantes avances hacia este modelo de Escuela Pública que la UGT propugna" (R.34C.UGT.1986:105).

crecimiento económico, el empleo y la acción social (R.34C.UGT.1986:63)[138]. En la cuestión del empleo, la política económica había fracasado en la creación de puestos de trabajo (R.34C.UGT.1986:63), y comenzaban a inquietarse por la evolución de la temporalidad en el mercado de trabajo[139].

A esto añadían una valoración más bien negativa de la situación social en España, así como de los resultados de las políticas que había hecho el Gobierno para remediarla. España seguía siendo uno de los países industrializados con mayores desigualdades sociales, creciente fragmentación social[140], un nivel de protección social muy alejado de la mayoría de los países del entorno europeo y con situaciones discriminatorias y mala gestión (R.34C.UGT.1986:58). Criticaban así los recelos habidos en el incremento de la cobertura por desempleo[141], el grado de ampliación de la Seguridad Social, el incumplimiento de la universalización de la sanidad

---

[138] En la intervención inaugural de su 34º Congreso, el secretario general de la UGT señalaba que el sindicato no podía aceptar los planteamientos de sanear la economía aun a costa de un desempleo insoportable, ni siquiera "cuando se nos presenta mediante la falsa utilización del término socialdemocracia (...) No vamos a encontrar socialdemocracia alguna donde se hayan producido dos millones de despidos en cinco años, o en la que haya pensiones de las cuantías que aquí conocemos" (*El País* 3-4-86).

[139] Ya en 1985 el Secretario General de la Federación Estatal de Comercio de la UGT, Manuel Ventura, denunciaba que los programas de promoción de empleo hubiesen pasado de constituir una media del 27% a un 40% en los seis primeros meses de 1985 con respecto al total de las contrataciones formalizadas, y "[e]n todo caso el incremento del número de contratos formalizados en el primer semestre de 1985 respecto a 1984, corresponde casi exactamente al incremento de los contratos más baratos y de duración determinada, 230.000 aprox." ("Los cambios estructurales en el mercado de trabajo desde el punto de vista sindical" en *Información Sindical*, núm. 32, 2ª quincena de noviembre de 1985, pp. 5 y 6).

[140] Véase "Sindicalismo y Acción Social" (por Blanca Manglano, responsable del Departamento Confederal de Servicios Sociales de UGT) *en Información Sindical*, núm. 34, enero 1986.

[141] "Han sido necesarios ingentes esfuerzos para que se adoptaran decisiones de protección a los parados" (declaraciones de Redondo al 34º Congreso recogidas por *El País* 3-4-86).

(G.34C.UGT.1986:12), o la escasa realización de viviendas sociales (R.34C.UGT.1986:115). Dos leyes en materia social eran especialmente criticadas, la ya vista Ley 26/85 de Medidas Urgentes para la Racionalización de la Estructura y de la Acción Protectora de la Seguridad Social, y la Ley General de Sanidad[142].

Estos éxitos a medias provocaban en la UGT un cierto escepticismo sobre cuáles eran realmente las prioridades del Gobierno[143]. En su opinión, el Gobierno se había centrado especialmente en la reducción del déficit exterior y la inflación, saneamientos sectoriales (reconversión industrial) y del sector financiero, freno al aumento del déficit público, lo cual hacía que la pérdida de puestos de trabajo no se hubiera debido sólo a la crisis económica y a factores externos sino también por las políticas económicas llevadas a cabo (R.34C.UGT.1986:63). La UGT mostraba así dudas sobre la bondad de las políticas de oferta para recrear empleo, y reclamaría políticas más expansivas (R.34C.UGT.1986:63).

¿Suponía esto que la UGT valoraba ya que las relaciones de solidaridad con el PSOE no eran la mejor forma de influir en la esfera política? Al terminar la primera legislatura socialista, la dirección de la UGT reconocía que habían tenido enfrentamientos

---

[142] Respecto a esta última ley criticaban que se siguiese contemplando un sistema de financiación mixto (cotizaciones sociales y Presupuestos Generales del Estado), el establecimiento de tasas por la prestación de determinados servicios, la no universalización del derecho a la asistencia sanitaria pública, el mantenimiento de sistemas privados para la provisión de servicios (mutuas patronales de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y de las mutualidades de funcionarios); y haber recogido intereses corporativistas de la Organización Médica Colegial (R.34C.UGT.1986:99-101).

[143] "[E]n un programa que combinaba el saneamiento económico con medidas de progreso social se [ha] puesto más énfasis en el primero que en las segundas" (G.34C.UGT.1986:25).

El diario *El País* (3-4-86) recogió igualmente que en la intervención inaugural del 34º congreso de la UGT Nicolás Redondo afirmó que la política de ajuste había prevalecido sobre cualquier intención de combinarla con el crecimiento o corregir el bajo porcentaje de población activa.

con el Gobierno del PSOE, pero aclarando que dentro de lo que eran unas relaciones "normales" entre un Gobierno de izquierdas y un sindicato. Explicaban los enfrentamientos porque el Partido socialista había subido al poder en un contexto de enormes dificultades, "lo que ha supuesto que adoptara políticas concretas y puntuales que difícilmente podrían ser asumidas por la UGT" (R.34C.UGT.1986:84), la existencia de rivales sindicales para la UGT[144], diferencias relativas a cómo se materializaban los objetivos comunes[145], o el mantenimiento de su autonomía[146]. Se esbozaba también una justificación para explicar por qué los partidos socialistas llevaban a cabo políticas que eran rechazadas por los sindicatos en función de lógicas de actuación distintas[147]. A pesar de todo

---

[144] Así, la Secretaría General de la UGT explicaba que sus relaciones con el Gobierno socialista habían suscitado mayor atención y polémica "porque la singular circunstancia de coincidir un gobierno socialista con un sindicato mayoritario que comparte sus ideales políticos plantea situaciones nuevas en nuestro país e, incluso, no frecuentes en Europa Occidental, donde esta coincidencia se ha producido generalmente en países con sindicalismo unificado" (G.34C.UGT.1986:24).

[145] "No existe contradicción alguna en apoyar medidas progresistas del Gobierno (que sin duda las ha habido e importantes) y criticar otras por considerarlas de signo contrario o en señalar que en un programa que combinaba el saneamiento económico con medidas de progreso social se haya puesto más énfasis en el primero que en las segundas" (R.34C.UGT.1986:25).

[146] "En esos casos, nuestra autonomía y la fidelidad a los intereses de los afiliados y trabajadores nos ha llevado a posturas de enfrentamiento y contestación a determinadas políticas gubernamentales" (R.34C.UGT.1986:84).

Igualmente:

"Desarrollar cualquier otro tipo de política sindical hubiera sido contraproducente; la confrontación sistemática con el Gobierno hubiese derivado en un callejón sin salida, como ha sucedido con opciones que han adoptado esa política, mientras que la condescendencia con el poder político en todas y cada una de las medidas que ha puesto en práctica hubiese desembocado en una esterilidad sindical, alejándonos de nuestras bases y de los intereses de aquellos a quienes representamos, para los que el sindicato es su medio de defensa" (R.34C.UGT.1986:84).

[147] "La experiencia vivida estos años y la consideración de situaciones análogas que se han dado en otras latitudes demuestra que la lógica política puede no coincidir con

ello, en su 34º Congreso (abril de 1986) evaluaban que, globalmente, la actuación del gobierno socialista había sido positiva (G.34C.UGT.1986:24) por lo que consideran, todavía, que era "la opción más favorable para la amplia mayoría de ciudadanos de este país" (G.34C.UGT.1986:25)[148] y, en las resoluciones de ese congreso, se reafirmaban en su modelo de relaciones de solidaridad con el PSOE[149]. Pero, en cualquier caso, desde la Secretaria de Organización, se consideraba conveniente que en el futuro se rebajasen las tensiones[150].

En el PSOE igualmente se reconocía que sus relaciones con la UGT no habían sido siempre fáciles, en un contexto de crisis económica, pero matizaban acto seguido que no se había llegado a romper "el clima de diálogo, de colaboración y, en definitiva, de compromiso mutuo en un proyecto común socialista" (Memoria de gestión al 30º Congreso del PSOE, 1984, pág. 59). Como vimos en el capítulo anterior, en sus congresos de 1984 y 1988 se reafirmaban en su modelo de relaciones de solidaridad con la UGT.

---

las expectativas ni con las acciones que el movimiento sindical propugna. Esta realidad ha llevado a la UGT a defender la realización de una política sindical independiente y no supeditada al Gobierno" (R.34C.UGT.1986:84).

[148] "La tarea del Gobierno demuestra, en cualquier caso, que la opción socialista es la única viable para conducir a España por una senda de justicia y de progreso, y para comprobarlo no hay más que ver lo que sucede en las organización políticas tanto en el campo de la izquierda como en el de la derecha (G.34C.UGT.1986:25).

[149] Se seguía así manteniendo la clásica fórmula de los dos brazos del movimiento obrero: separación de funciones según ámbitos, igualmente importantes, para la consecución de objetivos comunes; por lo que, pese a tensiones pasadas, consideraban que se podía seguir apoyando, críticamente, y colaborando con el PSOE, sin romper el modelo de relaciones aunque surgiesen tensiones (R.34C.UGT.1986:84,85).

[150] "Por otra parte, hay que aprobar en el próximo Congreso la política sindical a desarrollar en los próximos años y particularmente las relaciones con el PSOE y el Gobierno Socialista, que han sido motivo de preocupación dentro del Sindicato, sobre todo a niveles inferiores. En muchas ocasiones se han desorbitado y agudizado las diferencias, no habiendo otra alternativa que seguir insistiendo en que la responsabilidad y el equilibrio deben de presidir todas nuestras actuaciones como siempre ha ocurrido a través de los años" (G.34C.UGT.1986:83).

Por su parte, CCOO no hacía matizaciones. La descalificación de las políticas del Gobierno del PSOE era total y sin ambages pues para este sindicato los más perjudicados de la política socialista fueron:

> "[...], los trabajadores y la mayoría de los sectores sociales menos favorecidos económicamente, y quienes se han beneficiado, la gran banca y la patronal, es claro que los ejes fundamentales de la política del Gobierno PSOE en lo económico, social, en lo laboral y sindical, así como en lo internacional, no responden en absoluto a postulados progresistas y de izquierdas"[151].

CCOO rechazaba cómo se había llevado a cabo la reconversión industrial, consideraba que se había practicado una política de reducción drástica de las prestaciones sociales, se habían cedido áreas del sector público a la iniciativa privada, se había intentado practicar una política de topes salariales y sindical discriminatoria[152]. La reforma del Estatuto de los Trabajadores por la ley 32/84 y el R.D. 1989/84, de 17 de octubre, había supuesto una "flexibilización casi salvaje del mercado de trabajo"[153]. CCOO recomendó así no votar al PSOE para las elecciones legislativas de 1986 ni para las del 10 de junio de 1987 (municipales, autonómicas y al Parlamento Europeo)[154].

---

[151] "Resolución de la CE de CCOO ante los próximos procesos electorales", Madrid, 15 de octubre de 1985, en Gaceta Sindical, núm. 38, septiembre-octubre, pp. 5 y 38 (citado por Soto Carmona, 1993:460).

[152] "La acción sindical en la reconversión", en *Gaceta Sindical*, núm. 30, julio de 1984, pp. 14-15 y "sobre la LOLS", en *Gaceta Sindical*, núm. extraordinario, III Congreso Confederal de CCOO, octubre de 1984, pág. 19.

[153] "Resolución General sobre el III Congreso de CS de CCOO", pág. 12.

[154] Véase "Resolución de la CE de CCOO ante los próximos procesos electorales", Madrid a 15 de octubre de 1985 (en *Gaceta Sindical*, núm. 38, septiembre-octubre, pp. 5 y 38) y "CCOO, ante las elecciones generales del 22 de junio" (en *Gaceta Sindical*, núm. 42, junio de 1986, pág. 3). Respecto a los resultados de las elecciones legislativas de 1986, CCOO hizo hincapié en la pérdida de votos de los socialistas y en el avance del Centro Democrático y Social y de lo que llamaban "izquierda real" (Soto Carmona, 1993:461).

Parece así que durante la 1ª legislatura socialista el Gobierno del PSOE y la UGT desarrollaron sus relaciones según el modelo solidario que habían fijado en las resoluciones de sus respectivos congresos. El sindicato socialista, tras haber apoyado al PSOE en las elecciones de 1982, lo siguió haciendo estando éste en el gobierno, aceptando así la reconversión industrial y la contención salarial, y confiando en que una estrategia económica que no era la que ellos hubieran preferido diera los resultados prometidos para salir de la crisis. A cambio, este sindicato tenía un mayor acceso al Gobierno socialista que los otros agentes sociales, e influyó en políticas claves como la propia reconversión o en cuestiones referidas a las relaciones laborales. El otro sindicato, CCOO, por el contrario se opuso en la medida de sus posibilidades a las políticas del Gobierno y rechazó llegar a acuerdos con él, salvo el acuerdo interconfederal firmado a los pocos meses de acceder el PSOE al poder.

El cambio de estrategia económica que realizó el Gobierno socialista con respecto a lo que había sido la receta de los socialdemócratas en las décadas anteriores no impidió, por tanto, que las dos organizaciones socialistas practicasen la coordinación económica, incluso si el sindicalismo español se encontraba profundamente dividido entre la UGT y CCOO. Los socialistas españoles llevaron a cabo uno de los ejemplos claros de su mantenimiento con una nueva estrategia económica que pretendía solucionar los graves problemas económicos logrando la estabilidad macroeconómica y mejorando los factores productivos en vez de fomentando la demanda agregada. Bien es cierto que la influencia de la UGT no llegó a ser del grado que hubiera sido dirección, ni los canales de comunicación fueron siempre tan eficaces, pero con todo el balance fue los suficientemente positivo como para que en ambas organizaciones se confirmasen las relaciones solidarias al término de la 1ª legislatura socialista.

CAPITULO CUARTO

LAS REPERCUSIONES DE LOS MODELOS DE RELACIONES PARTIDO-SINDICATO (II): LAS RELACIONES POR INTERESES CONCRETOS, 1989-1991

1. El rechazo global de la UGT al Gobierno socialista

En octubre de 1989 el PSOE ganó por tercera vez consecutiva unas elecciones generales en España con el 40,2 de los votos. Pero en esta ocasión, la dirección de la UGT se abstuvo de apoyarles y, de hecho, se felicitaba del "comportamiento de la organización con ocasión de las elecciones al Parlamento Europeo y de las generales de 1989, cuando decidimos no pedir el voto para opción alguna" (G.35C.UGT.1990:16)[1].

[1] El rechazo de la UGT a volver a dar su apoyo explícito a las candidaturas del PSOE ya había ocurrido unos meses antes con motivo de las elecciones al Parlamento europeo (*El País* 25 y 26-4-89). En ambos casos, la UGT no pedía ni la abstención, ni el voto a partido político concreto; y se justificaba no hacerlo para el PSOE por las discrepancias en política económica y social (*El País* 26-4-89 y 16-9-89) y en general por ningún partido porque no era intención de la UGT "cambiar radicalmente el voto en un sentido o en otro" (*El País* 28-10-89). En el caso de las legislativas, además, el Secretario General de la UGT aseguraba que así actuaban los sindicatos europeos (*El País* 16-8-89). El máximo dirigente de la UGT esperaba que, ganase quien ganase, "el Gobierno que salga de las urnas tenga una mayor madurez, mayor sensibilidad social y se siente a negociar de manera seria las propuestas moderadas que está haciendo el conjunto del movimiento sindical" (*El País* 28-10-89). Esta indiferencia con respecto a los partidos políticos hay que matizarles porque dirigentes ugetistas como Antón Saracíbar señalaban que la política que había realizado el Gobierno socialista era lesiva para los trabajadores y que podía ir a más

1.1. Los objetivos de la política económica de Solchaga

El Ministro de Economía de este período, Carlos Solchaga, nombrado en 1985, creía al igual que su predecesor que una política de demanda expansiva era inapropiada para superar los problemas estructurales de la economía española y su apertura a nuevos mercados mundiales y europeos[2]. Así, el PSOE se comprometía a un mayor crecimiento económico[3] mediante un marco macroeconómico basado en la contención de salarios y precios, en un déficit público reducido y en una cuenta corriente equilibrada, que permitiese un crecimiento no inflacionista y redujese el desempleo[4]. Ahora bien, si en su primera legislatura el Gobierno socialista se había propuesto luchar contra la crisis económica, desde principios de 1986 el mayor desafío lo constituía la progresiva apertura de la economía española al entrar en la CEE y, posteriormente, en el Mercado Interior Comunitario y en la Unión Económica y Monetaria, en la cual se quería participar como miembro de pleno derecho desde su inicio[5]. El Gobierno socialista esperaba así que la apertura a la circulación de bienes y capitales europeos incentivase a la economía española, y ayudase a reducir el desempleo y converger con los niveles de bienestar económico y social de la Europa comunitaria[6]. Pero eran conscientes al mismo tiempo de que la misma apertura reduciría la

---

"si el PSOE renueva la mayoría absoluta" (*El País* 7-9-89), mientras que otros criticaban a IU como en el caso de Justo Fernández, antiguo Secretario General de Banca (*El País* 29-9-89).

[2] Según manifestó durante la entrevista con el autor del día 19-7-96.

[3] Según el cuadro de objetivos de política económica a medio plazo que se presentó para el debate de los Presupuestos Generales del Estado para 1986, se esperaba un crecimiento de la actividad económica del 2,5% para 1986 y del 3% en los siguientes, que debería basarse casi íntegramente en la demanda interna (*El País* 9-10-85).

[4] Véase el Programa Electoral del PSOE para las Elecciones Legislativas de 1986, especialmente entre las pp. 20 y 24.

[5] Véase el documento del "Pacto Social de Progreso", Madrid, junio de 1991.

[6] Vid. supra.

capacidad para fomentar políticas expansivas en situaciones de empeoramiento de la coyuntura económica, o excluiría devaluar la divisa española para mantener la competitividad de los productos españoles[7].

El Gobierno socialista consideró que se podía hacer frente a estos retos, manteniendo o mejorando el nivel de competitividad de la economía española, si se reducía el diferencial existente entre la inflación española y la del resto de la CEE[8]. De lo contrario, si los precios españoles crecían más rápido que los europeos, sus productos invadirían el mercado español, con los consiguientes efectos negativos sobre la balanza comercial y el empleo[9]. Para conseguir este objetivo de reducir la inflación, el Ministro de Economía contaba con la moderación salarial[10], la cual además ayudaría a incrementar la inversión sin fomentar un proceso de

---

[7] Las devaluaciones dañarían el proyecto europeo, minarían la credibilidad del propósito del Gobierno de buscar un crecimiento equilibrado y alejarían los capitales extranjeros necesarios para financiar las tasas de crecimiento en España (en "Pacto Social de Progreso", op. cit.).

[8] Véase el Programa Electoral del PSOE para las Elecciones Legislativas de 1986. Según manifestó Carlos Solchaga durante la entrevista del día 19-7-96, él preveía que la sustitución de la vieja imposición indirecta por el IVA tendría un efecto inflacionista en 1986 de entre el dos y el tres por ciento pero que luego la inflaciación bajaría un punto cada año. En el documento del "Pacto Social de Progreso" (op. cit.) realizado por el Gobierno socialista, se proponía hacer converger la inflación española con la que registraban "los países que lideran Europa".

[9] Según expuso Carlos Solchaga durante la entrevista con el autor del día 19-7-96. En el documento del "Pacto Social de Progreso" (op. cit.) se afirmaba igualmente que dicho énfasis por reducir la inflación no venía dado por una concepción rígida sobre el funcionamiento de las economías, sino por la constatación empírica de que, en las últimas décadas, ninguna economía integrada en los mercados mundiales había sido capaz de prosperar sin haber controlado sus presiones alcistas de precios y costes.

[10] El Gobierno ya planeaba en otoño de 1985 que el salario real habría de tener un crecimiento nulo en los siguientes cuatro años, 1986, 1987, 1988, 1989 (*El País* 9-10-85). Posteriormente el Ministro de Economía aceptaba subidas muy ligeras del salario real (según declaro en la entrevista con el autor del día 19-7-96). Pero, en principio, se fiaba el avance del consumo privado al aumento de la población activa y prestaciones sociales, y no al aumento de los salarios reales.

sustitución de trabajo por capital[11]. Posteriormente, y tras la reaparición de desequilibrios tales como un repunte de la inflación y del déficit comercial, el Gobierno socialista volvió a incidir en reformas estructurales que favoreciesen el crecimiento potencial de la economía de tal forma que se eliminasen las tendencias inflacionistas[12]. Este marco macroeconómico estable se completaría con una reducción del déficit público y una cuenta corriente equilibrada, compatible con el desarrollo de un capital colectivo en infraestructuras de transportes y comunicaciones; y una política monetaria cuidadosa, que no bajase mucho los tipos de interés reales para que no se disparase la demanda y repuntaran los precios[13].

Pero el Gobierno socialista consideraba, además, que era necesario mejorar el volumen y calidad de los factores productivos españoles, mediante un crecimiento intensivo de la inversión, para aprovecharse de las posibilidades que ofrecía la integración económica, crecer más, reducir el desempleo y alcanzar los niveles de bienestar europeos (Boix 1996:158-161). Dudaba, sin embargo, que un simple aumento del ahorro privado se tradujese en mayores tasas de inversión por lo que era necesario un papel activo del sector público. El Estado mejoraría así el stock de capital físico y humano, eliminaría los obstáculos estructurales que paralizaban la economía española, aumentaría la productividad general del sector privado y estimularía la inversión nacional y extranjera en busca de mayores tasas de ganancia. Al mismo tiempo se esperaba que esta política inversora pública garantizase un crecimiento equitativo de todas las regiones y sectores sociales, y redistribuyese la riqueza económica. Este esquema económico se llevaría a cabo, primeramente, incrementando la recaudación impositiva y reforzando su progresividad para reducir el déficit público y aumentar el ahorro público. Después, se canalizarían los recursos obtenidos hacia la

---

[11] Según expuso Carlos Solchaga durante la entrevista con el autor del día 19-7-96. Véase también el documento del "Pacto Social de Progreso" (op. cit.).

[12] Véase el documento del "Pacto Social de Progreso" (op. cit.).

[13] Según expuso Carlos Solchaga durante la entrevista con el autor del día 19-7-96. Véase también el documento del "Pacto Social de Progreso" (op. cit.).

inversión en capital fijo y humano[14]. Carles Boix (1996:158-161) considera que es en este papel inversor del Estado donde se puede encontrar la diferencia entre una política económica socialdemócrata y las de los conservadores.

1.2. De la expansión selectiva en inversión pública al incremento general del gasto público

1.2.1. Expansión de la inversión pública y cambio en la política fiscal del Gobierno socialista

Según Carles Boix (1996), fue a partir de la recuperación económica en 1985 y la segunda victoria electoral del PSOE en junio de 1986 cuando Felipe González pudo llevar a cabo su estrategia económica por el lado de la oferta. Así, una vez que el déficit público fue contenido en torno a 1987-1988, el Gobierno socialista canalizó los recursos obtenidos hacia la inversión en capital fijo, sobre todo en infraestructuras básicas, y en capital humano. La inversión pública

[14] Boix sugiere que la formulación de una estrategia económica socialdemócrata por el lado de la oferta se realizó desde el comienzo pero que no se pudo completar (reducción del déficit público y expansión de la inversión pública) en la primera legislatura por el ciclo económico adverso hasta 1985, e incluso fue bloqueado por las medidas macroeconómicas introducidas en ese año (Boix 1996:167).

creció así de forma sostenida hasta situarse en el 5% del PIB en 1990 (véase tabla 5)[15]. Para reducir

[15] Según Jimeno, Andrés y Taguas (1994:111) el examen del déficit discrecional (es decir, el déficit resultante de las expansiones y de las recesiones económicas) da como resultado que la política fiscal había sido claramente expansiva a comienzos de los años ochenta (1981-82) y volvía a serlo a principios de los noventa (1990-93, con la excepción de 1992).

TABLA 5.PIB, ingresos, gasto, deuda e inversión del Estado, y déficit público (% sobre el PIB a precios de mercado)

	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993
PIB	3,2	5,6	5,2	4,7	3,7	2,3	0,7	-1,2
Ingresos totales	35,9	37,7	37,7	39,5	39,5	40,2	42,2	42,2
Directos	8,2	10,3	10,4	12,1	12,0	12,0	12,4	12,2
Indirectos	10,8	10,8	10,9	10,9	10,7	10,7	11,3	10,5
C.S.	12,8	12,8	12,5	12,8	13,0	13,2	14,0	14,2
Otros	4,1	3,8	3,8	3,7	3,8	4,2	4,4	5,3
Gasto total	36,4	36,0	36,0	36,6	37,8	39,4	41,5	44,3
Endeudamiento	45,1	45,5	41,7	43,2	45,1	45,8	48,4	60,5
Déficit público	6	3,1	3,3	2,8	4,1	4,9	4,1	7,5
Inversión pública	3,6	3,4	3,8	4,4	5,0	4,9	4,1	4,3

C.S. cotizaciones sociales

Fuente: *European Economy. European Commission. Directorate-General for Economic and Financial Affairs.*

el déficit y financiar las inversiones públicas el Gobierno socialista subió los impuestos y, gracias al uso continuado de la rémora fiscal y de la introducción de medidas específicas para favorecer las rentas bajas, la progresividad general se agudizó en menos de una década[16]. Se incrementó así el ahorro nacional, ganando peso el dentro el ahorro del Estado. Finalmente, a partir de 1989, al incremento en inversión pública se añadió un aumento considerable del gasto social (que expondremos en el siguiente apartado).

En cuanto al papel del sector empresarial público, el Gobierno socialista pretendió darle un papel más activo, aunque selectivo, en la economía española. Por una parte, la formación de capital se incrementó en varios sectores controlados por empresas públicas con objeto de complementar la estrategia fiscal vigente destinada a garantizar altos niveles de formación de capital fijo en España. Por otra, el Gobierno decidió transformar algunas empresas públicas en organizaciones capaces de competir en el extranjero, abrir nuevos mercados para otras empresas españolas e incorporar nuevas tecnologías en España (Boix 1996:192). La política fiscal española, por tanto, en la tercera legislatura de gobierno socialista (1989-1993) abandonó los rigores de la primera. Y cuando comenzó a disminuir el crecimiento económico, el Gobierno socialista ni recortó el gasto público ni subió los impuestos[17], por lo que se produjo un importante aumento del déficit. La política monetaria, por el contrario, se mantuvo restrictiva, según el antiguo Ministro de Economía más de lo que el Gobierno socialista hubiera deseado con el fin de evitar que se

---

[16] Estudiando la evolución del tipo impositivo efectivo -el porcentaje de la base imponible que se paga al Estado una vez descontadas todas las deducciones y desgravaciones- se observa que, si en 1981 el tipo impositivo efectivo sobre una renta de 500.000 ptas era del 5,4%, del 21% para una renta de cinco millones, y del 30% para una renta de más de 9 millones, en 1991 los tipos impositivos habían subido para todas las rentas por encima de las 700.000 ptas -en pesetas de 1981-, y para esa renta de más de 9 millones el tipo impositivo efectivo se situaba en torno al 42% (Boix 1996:184).

[17] Lo que hizo fue no llevar a cabo su plan previsto de reducir el tipo impositivo máximo en tres puntos en 1992 y en otros dos en 1993 y una ligera reducción en el mínimo exento (Boix 1996:182-183).

trasladase a los precios la subida de los costes del factor trabajo[18]. Hacia finales de los años ochenta, el desarrollo del sistema financiero[19], las grandes entradas de capital extranjero tras la incorporación de España en la CE y las presiones de la demanda interna dificultaron el control de los agregados monetarios. A partir de 1986, sus incrementos comenzaron a desviarse de los objetivos, y se detuvo la desinflación a partir de mediados de 1988. La respuesta de las autoridades españolas a estos problemas fue entrar en el SME en junio de 1989 en un intento de "importar credibilidad" en el proceso de desinflación. Además, el Banco de España acompañó esta decisión elevando los coeficientes de caja, subiendo su tipo de intervención un punto y restableciendo controles crediticios[20]. Según Jimeno, Andrés y Taguas (1994:118) el período 1989-91 fue una etapa de transición en la que el Banco de España combinó estos controles con la "persuasión moral" para limitar el crecimiento de los agregados monetarios. En enero de 1991 se abandonaron los controles del crédito y del capital al desacelerarse las entradas de capital y la demanda interna, y hasta julio de 1992 hubo una notable estabilidad. Finalmente, en agosto de 1992 el SME sufrió una grave crisis, y la peseta se devaluó tres veces entre septiembre de 1992 y mayo de 1993.

---

[18] Así lo afirmó durante la entrevista con el autor celebrada el 19 de julio de 1996.

[19] Según Jimeno, Andrés y Taguas (1994:115-116) a mediados de los años 70, España tenía una economía relativamente cerrada con un sector financiero muy regulado. Esto permitió, en la segunda mitad de los años setenta, que el intento de las autoridades monetarias de controlar el incremento de la base monetaria mediante las prácticas habituales de los bancos centrales de la época (controles de las reservas de los bancos privados) tuviera éxito. Posteriormente empezó un proceso de liberalización, suprimiéndose casi totalmente los requisitos de reservas y de inversión impuestos a los bancos privados en 1989 y 1990.

[20] Desde 1988, los tipos de interés reales fueron superiores al 5 por ciento, tras haber sido negativos en algunos momentos a finales de los años setenta, y del orden del 3 por ciento en la primera mitad de los ochenta. Los tipos de interés nominales bajarían desde 1993, pero los reales seguirían siendo más altos que a comienzos de la expansión anterior (Jimeno, Andrés y Taguas 1994:121).

El resultado, como vemos, fue que la política económica del Gobierno socialista durante este período se caracterizó por combinar una política fiscal laxa (cuando no expansiva), para financiar las inversiones públicas e incrementar el gasto social, con una política monetaria restrictiva para controlar la inflación y mantener el tipo de cambio. Autores como Boix (1996:204-225) consideran que esta combinación de políticas fue el resultado de la presión de los sindicatos, a la que el Gobierno cedería finalmente. Por un lado, sus demandas para incrementar el gasto social dificultaron la intención del Gobierno socialista de tener unos presupuestos equilibrados y alteró en parte el esfuerzo para promover la inversión pública al aumentar el gasto social[21]. Por otro lado, la resistencia de los sindicatos a moderar sus demandas salariales privó al Gobierno del instrumento de la política de rentas para reducir la inflación, por lo que el Gobierno no tuvo más remedio que emplear medidas duras de estabilización. Dichas medidas supusieron un incremento de los tipos de interés que encarecieron el coste de capital y, además, dado la movilidad de capitales dentro de la CEE, implicaron una revalorización de la peseta, lo cual perjudicó la competitividad de la economía española. Jimeno, J. Andrés y Taguas (1994:107-112) también señalan el papel que tuvo la presión sindical en la política fiscal, pero además señalan gastos excepcionales como los causados por los Juegos Olímpicos de Barcelona y la organización de la Exposición Universal de 1992 en Sevilla[22].

1.2.2. Contención, incrementos y recortes sociales

[21] Boix (1996:222) también ve intereses electorales del PSOE en la política fiscal expansiva para así recuperar parte del electorado perdido; tesis no confirmada por destacados miembros del partido socialista que afirman que la elecciones legislativas de 1989 se vieron como una gran victoria, teniendo en cuenta el éxito de la huelga general del año anterior, por lo que no concluyeron que había que ir a la reconquista de los votantes perdidos.

[22] El papel que tuvieron estos gastos excepcionales fue reconocido por el propio Carlos Solchaga durante la entrevista con el autor del 19-7-96.

En la segunda mitad de los años ochenta una proporción considerable de todos los nuevos ingresos que se obtenían gracias al crecimiento económico de la segunda mitad de los ochenta se aplicaron directamente a reducir el déficit[23]. Como vimos en el capítulo anterior, esta política y la incorporación de criterios universalistas en la protección social llevaron a un sistema de protección en España más extensivo que intensivo. Pero en 1989 y 1990 el Gobierno socialista aumentó sustancialmente el gasto social para conseguir así que la intensidad en la protección social por individuo aumentase, ahora que ya lo había hecho la extensión de beneficiarios (véase tabla 6). Si el gasto de protección social por habitante (en ecus a precios de 1985) había aumentado un 9,9% entre 1983 y 1986, y entre 1986 y 1989 un 18%, entre 1989 y 1992 aumentó un 22% (Anuario Eurostat 1995).

En salud pública, el proceso hacía la universalización se completó y pasó a ser financiada a cargo de los presupuestos. Pasó así de una tasa de cobertura del 83,2 en 1980, a 95,66 en 1986 y 99,89 por ciento en 1992. Al mismo tiempo, el gasto sanitario y la tasa de intensidad, que venían cayendo desde un punto máximo en 1983, comenzó a remontar a partir de 1989[24]. En educación vimos que no se había dado esa contención con respecto del PIB de otras áreas sociales. Entre 1980 y 1983 el gasto en educación disminuyó su participación en el PIB, pero recuperó en 1984 el porcentaje de 1980. De hecho, en el conjunto del período estudiado, es de 1987 a

[23] Boix recoge que de acuerdo con las previsiones presentadas por el Secretario de Estado de Economía y Hacienda, entre 1985 y 1990, el 83% de todos los aumentos netos por fiscalidad -aumentos fiscales menos nuevas transferencias públicas-, que crecieron 4,7% del PIB, se aplicaron a reducir el déficit público (Boix 1996:186).

[24] Datos proporcionado por Rodríguez Cabrero (1994:1480).

1989 cuando el crecimiento del gasto público educativo fue más intenso, de forma que las tasas

TABLA 6.Gastos corrientes de protección social (% sobre el PIB) según la clasificación del sistema SEEPROS

	1983	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
España	19,5	19,9	19,8	19,8	20,0	20,6	21,7	22,5
Eur 12	26,3	25,9	26,0	25,5	25,1	25,3	26,1	27,1

Fuente: Anuario Eurostat 1995

interanuales de crecimiento de este gasto duplicaron a las del gasto público en su conjunto y a las del gasto social. Igualmente, el gasto se tradujo en una universalización del sistema educativo con la cobertura completa de la educación preescolar, la extensión de la cobertura de las enseñanzas medias y en una ampliación de la enseñanza universitaria[25]. Por otro lado, la importancia creciente del sistema educativo público se pone de relieve al observar que el gasto educativo en colegios privados descendió de un 30% del gasto educativo total en 1980 a un 21% en 1991, si bien aumentó en términos reales en un 20%.

En cuanto a las pensiones, en 1989 el Gobierno socialista decretó una compensación de la pérdida de su poder adquisitivo ocurrido en 1988. Igualmente se comprometió a revalorizarlas según el coste de la vida para el período de legislatura y a equiparar la pensión mínima, en caso de que existiesen cargas familiares, con el salario mínimo (Cruz Roche 1994:1495)[26]. También decidió cambiar su proceso de revalorización. Si antes se establecía un porcentaje de revalorización mayor en las pensiones de menor cuantía, a partir de 1991 se establece un porcentaje uniforme de revalorización para todas las pensiones. Finalmente, el Gobierno estableció pensiones no contributivas (Ley de Pensiones no Contributivas de 20 de diciembre de 1990)[27] de alrededor de la mitad del salario mínimo en 1991[28].

---

[25] La Ley 1/1990 de Ordenación del Sistema Educativo (LOGSE) fijó la educación obligatoria hasta dieciséis años.

[26] Las pensiones mínimas se incrementaron hasta el nivel del salario mínimo en 1990, cuando en 1983 eran de sólo el 77,87 por ciento del salario mínimo y lo mismo se prometió para las pensiones de viudedad en 1992 (Boix 1996:210).

[27] Estas pensiones sustituían a las antiguas por minusvalías de la Ley de Integración Social de los Minusválidos -que cubría a las personas con deficiencias físicas o psíquicas que no estuviesen cubiertas por la Seguridad Social- y a las pensiones de invalidez y vejez de la asistencia social. A diferencia de las antiguas, la Ley 26/1990 reconoce un derecho subjetivo a la pensión otorgada. Igualmente, la cuantía de las pensiones no contributivas es superior al de las sustituidas.

[28] Este mayor esfuerzo en los mecanismos de protección de carácter asistencial se ve reforzado si se tiene en cuenta en este gasto el de otros sistemas asistenciales. Así, las pensiones contributivas que no alcanzasen el mínimo fijado reciben un

Por último, en cuanto a la cobertura por desempleo, en 1989 se amplió el subsidio no contributivo, pues se redujo la edad necesaria para la prórroga indefinida del subsidio hasta la jubilación, se creo un nuevo subsidio especial de seis meses de duración en favor de los desempleados de larga duración mayores de cuarenta y cinco años, y se amplió la duración máxima del subsidio a desempleados de larga duración. El resultado fue que con estas medidas aumentó la proporción de parados cubiertos con prestaciones, incluyendo a los trabajadores temporales del campo[29]. Los subsidios por desempleo pasaron así de representar un 2,7% al 3,8% del PIB en tres años, en un período en el que el nivel de paro bajaba más de tres puntos porcentuales. La Ley 22/1992 de Medidas Urgentes sobre Fomento de Empleo y Protección por Desempleo[30] recortó, sin embargo, el fuerte incremento del gasto en la protección por desempleo y la aparición de un elevado déficit en su gestión[31]. Estas medidas de contención del gasto se complementaron con la Ley de Medidas Fiscales, de Reforma del Régimen Jurídico de la Función Pública y de la Protección por Desempleo, en diciembre de 1993.

En cualquier caso, este cambio de política de gasto se reflejó en la distribución funcional del gasto público. Si hasta 1988 el incremento del gasto social con respecto a 1980 representaba un 30%

---

complemento hasta dicho mínimo siempre que no supere el mínimo de renta. Este complemento de mínimos cubre un porcentaje importante de los pensionistas, pues en 1992 el 39,2% de los pensionistas percibían complemento de mínimos (Cruz Roche 1994).

[29] Mientras que en 1988 sólo disfrutaron de cobertura el 28,8% de todos los que se habían registrado como desempleados, esta proporción había subido en 1991 hasta el 51,9% y al 68,7% en agosto de 1993 (Cruz Roche 1994:1511).

[30] Se tomaron medidas restrictivas tales como establecer que el derecho al subsidio se extinguiría cuando los beneficiarios rechazasen participar en acciones de formación o una oferta adecuada, se reducía la cuantía y duración del subsidio contributivo, se establecía igualmente una reducción en el porcentaje de la base reguladora.

[31] La estimación de los efectos económicos de la Ley 22/1992, según el INEM, es que de no haberse aprobado la Ley, el coste real de las prestaciones de 2.119.961 millones de pesetas de gasto estimado en junio de 1993, se habría situado en 2.464.800 millones, con un incremento de 344.800 millones (Rodríguez Cabrero 1994:1513,1514).

del incremento del gasto público total, de 1980 a 1992 el incremento del gasto social con respecto del gasto público total pasaba a representar un incremento de alrededor de un 40% (Rodríguez Cabrero 1994:1457,1458). La distancia en el gasto social respecto de otros países de la Unión Europea se redujo igualmente pues aumentó a un ritmo más acelerado que en la Comunidad/Unión Europea en general. Si en 1983 la diferencia era de 6,8 puntos con respecto a la media de los doce países que componían la Unión Europea en 1992, y en 1986 había bajado a 6 puntos, en 1992 eran 4,6 puntos de diferencia (véase tabla 6).

1.3. El rechazo a las políticas del Gobierno: las alternativas sindicales

Como vimos, en el 34º Congreso la dirección de la UGT había dado un sí crítico a las políticas del Gobierno socialistas contempladas en su conjunto; por el contrario, en los siguientes celebrados en 1990 y 1994 consideraron que eran globalmente contrarias a los intereses de los trabajadores y de los sectores menos favorecidos de la sociedad (G.35C.UGT.1990:9). Para los ugetistas, las políticas llevadas a cabo por el Gobierno socialista habían dado unos resultados especialmente decepcionantes en cuanto a la evolución del mercado de trabajo y de la distribución de la renta, protección social, sistema impositivo, o participación sindical en el control de las empresas e instituciones del Estado. Finalmente, la política económica, además, había conducido a una grave recesión económica (G.36C.UGT.1994).

A la UGT le parecía inaceptable que, pese al crecimiento económico producido en la segunda mitad de los años ochenta, no se hubiera reducido más el elevado nivel de desempleo (G.35C.UGT.1990:10), o éste incluso hubiera vuelto a aumentar (G.36C.UGT.1994). Al mismo tiempo había crecido la temporalidad[32]. El crecimiento económico tampoco se había notado

[32] Así presentaban en su 35 Congreso que si en el segundo trimestre de 1987 el porcentaje de asalariados con contrato temporal era del 15,6%, nueve trimestres después había subido al 27,8% del total de asalariados, y a más del 60% de los asalariados jóvenes. Para la UGT "todo el empleo creado, en términos netos, se ha

en la distribución de la renta, pues la participación de las retribuciones de los asalariados se había reducido en favor del excedente empresarial (G.35C.UGT.1990:9,10). Por el contrario, el Gobierno socialista había reducido la fiscalidad de las rentas de capital, añadido grandes exenciones en el impuesto sobre los beneficios de las empresas, incrementado los impuestos sobre el consumo, y no había combatido eficazmente la evasión fiscal, predominante entre determinadas capas sociales (como entre los profesionales, y los comerciantes)[33].

En protección social no hacían mejor balance, pues la siguieron considerando deficiente durante todos estos años[34]. En 1990 criticaban que se hubiera mantenido constante el porcentaje de gastos con respecto al PIB y se mantuvieran las carencias en protección social a pesar del crecimiento económico. En 1994, no les parecía significativo el esfuerzo realizado en gasto social ya que, aunque se

---

cubierto con contratación temporal y, además, se ha sustituido a gran velocidad empleo fijo por temporal" y se había "dualizado y degradado el mercado de trabajo" (G.35C.UGT.1986:10). Más tarde denunciarían que el número de trabajadores asalariados con contrato temporal, el 29,8% del total, era tres veces superior a la comunitaria ("La Alternativa Socialdemócrata: equidad social y eficiencia económica" en *Información Sindical*, núm. 88, septiembre 1990, pág. 12).

[33] Véase la Memoria de Gestión del 35º Congreso Confederal de la UGT, pág. 106; "La Alternativa Socialdemócrata: equidad social y eficiencia económica" (pág. 12, op. cit); y la Memoria de Gestión del 36º Congreso Confederal de la UGT, pág. 19.

[34] Si en 1990 afirmaban:

"[E]l porcentaje de gastos sociales no ha aumentado en los últimos años, manteniendo el esfuerzo en niveles muy inferiores a los países de nuestro entorno. Esto ha significado la precarización de la protección social a nivel individual, ya que el número de beneficiarios ha aumentado considerablemente sin el correspondiente incremento de los recursos destinados a cubrir la protección social" (R.35C.UGT.1990:107).

Cuatro años más tarde seguían manteniendo:

"[E]l gran fracaso del Estado de Bienestar en España es su incapacidad siquiera para contener la exclusión y marginación social crecientes. A la incapacidad de generar empleo se suma insensibilidad en la lucha contra la exclusión y la pobreza, aunque sólo sea en un nivel asistencial mínimo, de mera subsistencia" (G.36C.UGT.1994:21).

había extendido la protección social, se había producido "a costa de reducir la intensidad protectora de la práctica totalidad de las prestaciones de la Seguridad Social", además de ser una "redistribución entre los propios trabajadores" (G.36C.UGT.1994:21). Para la dirección ugetista el Gobierno socialista, de hecho, había llevado a cabo constantes ataques al Estado del Bienestar, lo que explicaba que se diesen en España las mayores tasas de desempleo y precariedad, y una de las mayores de pobreza de la Europa comunitaria (G.36C.UGT.1994:21-23).

Estas críticas no las hizo la UGT en privado, o marcando diferencias con CCOO, sino que procedió a realizar una denuncia pública y constante de las políticas del Gobierno socialista y, además, en colaboración con sus antiguos rivales sindicales, los cuáles coincidían a grandes trazos con el sindicato socialista[35]. De hecho, ambos sindicatos se pusieron de acuerdo en sus principales reclamaciones al Gobierno socialista y elaboraron una serie de "propuestas" conjuntas. La primera de ellas fue la "Propuesta Sindical Prioritaria", en otoño de 1989[36]. Al año siguiente la UGT hizo público un documento titulado "La Alternativa Socialdemócrata: equidad social y eficiencia económica", donde expresaban su postura frente a los grandes desequilibrios económicos y sociales en el país, y sus propuestas para corregirlos. En julio de 1991, de nuevo conjuntamente con CCOO, elaboraron un "Cuadro de Compromisos Esenciales", y en noviembre de ese mismo año la "Iniciativa Sindical de Progreso". En ambos documentos UGT y CCOO denunciaban las políticas del Gobierno y ofrecían su alternativa para solucionar los principales problemas del país y hacer frente al proceso de integración europea. El último, en concreto, constituía la alternativa que ofrecían a la propuesta del Gobierno socialista de un Pacto de Competitividad para hacer frente a los retos del Mercado Interior Comunitario. Finalmente en febrero de 1993, presentaron el "Programa de Trabajo Sindical Unitario para 1993" donde ambos

[35] Véanse los "Documentos Aprobados en el V Congreso Confederal" de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, Madrid, febrero 1992.

[36] El documento apareció publicado en el núm. 75 de *Información Sindical*, octubre de 1989.

sindicatos exponían su compromiso de trabajar conjuntamente en sus reclamaciones al Gobierno y avanzar en la negociación colectiva. También elaboraron conjuntamente propuestas sectoriales como "Por una política industrial", a comienzos de 1992, o "Manifiesto por la Industria", de octubre de ese mismo año (G.36C.UGT.1994:3-9, 25-27). Se negaron igualmente a aceptar las nuevas propuestas realizadas por el Gobierno socialista de alcanzar pactos globales de contrapartidas para hacer frente a los desafíos de la integración europea, y con ello la moderación salarial que les pedía el Gobierno. Y llevaron a cabo una serie de movilizaciones y huelgas regionales, principalmente en la Cornisa Cantábrica, y una huelga general de ámbito nacional de media jornada en mayo de 1992[37] y otra en enero de 1994.

1.3.1. Valoración de las políticas del Gobierno socialista

Al comienzo de la tercera legislatura socialista los dirigentes ugetistas admitían que la política económica del Gobierno socialista había conseguido promover el crecimiento económico, pero consideraban que se fundamentaba en la postergación de mejoras sociales[38] al basarse en la congelación salarial[39], la contención del

---

[37] Según la propia UGT la huelga del 28 de mayo de 1992 tuvo como reclamaciones la retirada de la Ley 22/1992, una política industrial activa, una regulación democrática del derecho de huelga y un acercamiento de España a las condiciones de vida y trabajo de los países de su entorno (G.36C.UGT.1994:321). La primera huelga general convocada conjuntamente por UGT y CCOO se había producido el 14 de diciembre de 1988.

[38] En las resoluciones de su 35 congreso afirmaban que la política económica del Gobierno consistía en "un modelo de crecimiento basado en la desigualdad" que había "degradado la distribución que se da en el mismo proceso productivo, al tiempo que ha supuesto el deterioro de bienes y servicios públicos esenciales y, en algunos casos, el alejamiento directo de amplias capas de la población de la posibilidad de acceder a ellos, como es el caso de la vivienda" (R.35C.UGT.1990:112).

[39] "En los últimos años, un gran número de políticas gubernamentales, inspiradas por una ideología de "dejar hacer" o monetarista, han sido bastante semejantes; pero similitud no significa compatibilidad. Estas políticas, con las que cada Gobierno busca

déficit público[40], el fomento del empleo de baja calidad y precario[41] etc., o iba acompañado de estimaciones erróneas que perjudicaban a los trabajadores y sectores menos favorecidos de la sociedad[42]. Después, cuando empezó a renquear el crecimiento económico y se entró en la crisis económica de los noventa, la UGT la denunció, además, de ser económicamente ineficaz, al mismo tiempo que la calificaba ya sin reparos de corte "neoliberal" y "contraindustrial"[43]. La dirección de CCOO hacía una valoración similar[44].

Para la UGT el objetivo de la política económica del Gobierno socialista se había limitado a la atracción de inversiones extranjeras mediante unos tipos de interés muy por encima de los socios comunitarios, lo cual produjo un tipo de cambio sobrevaluado que

---

reducir sus déficits y mejorar su competitividad haciéndola recaer sobre los salarios y exportar su paro, llevan dentro de sí el germen de su destrucción" (R.35C.UGT.1990:111).

[40] "[E]n la situación actual, no se puede seguir privilegiando la reducción del déficit sobre la atención de una política redistributiva y a favor del empleo" (R.35C.UGT.1990:113).

[41] Acusaban al Gobierno socialista de buscar la competitividad "en la contención de los salarios, la flexibilidad en el empleo (hasta extremos que llevan a pensar que se asume el dumping social como vía de competitividad de la economía) y el crecimiento de los beneficios empresariales que, por no haber cauces de control, se dedican con frecuencia más a la especulación que a la creación de empleo" (G.35C.UGT.1990:12). Véase igualmente el núm. 82 de *Información Sindical* (mayo de 1990, pp. 10-11) o "La Alternativa Socialdemócrata: equidad social y eficiencia económica", pág 12, op. cit.; y la Memoria de Gestión del 36º Congreso Confederal de la UGT, pág. 19.

[42] Este era el caso de las previsiones de crecimiento del IPC, que según la UGT habían generado una "deuda social" con los colectivos cuyas rentas dependían de los Presupuestos Generales del Estado (pensionistas, desempleados y empleados públicos) y el agravamiento de la situación de los trabajadores sujetos a Salario Mínimo interprofesional (G.35C.UGT.1990:11).

[43] Véase la "Iniciativa Sindical de Progreso" en *Información Sindical*, núm. 101/102, octubre-noviembre de 1991 y la Memoria de Gestión de la Comisión Ejecutiva Confederal al 36º Congreso Confederal de UGT.

[44] Véanse los "Documentos Aprobados en el V Congreso Confederal" de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, Madrid, febrero 1992, pág. 82.

hizo perder competitividad[45] a los productos españoles y, consecuentemente, agravó el déficit comercial. Además, su empeño en reducir la inflación mediante una política monetaria muy restrictiva, limitar el crédito de familias y empresas, y la aceleración de la liberalización comercial y financiera con el exterior, había yugulado el crecimiento de la inversión y producción industriales, y reducido el crecimiento de los restantes sectores económicos y del consumo (G.36C.UGT.1994:14)[46]. Para terminar, había incrementado el gasto en infraestructuras para realizar proyectos como la Exposición Universal en Sevilla, el Tren de Alta Velocidad, o los Juegos Olímpicos, etc., debido a compromisos políticos[47]. Este gasto, junto a la reducción de ingresos por la crisis económica, fue el responsable del repunte del déficit público (G.36C.UGT.1994:14,325).

El Gobierno socialista no atacaba así las deficiencias estructurales de la economía española, como eran el tamaño excesivamente pequeño de las empresas, la tecnología mediocre, la escasa inversión por trabajador o la bajísima calidad de los productos, la inflación estructural en los servicios o los beneficios empresariales de carácter inflacionista. (G.36C.UGT.1994:13 y 17)[48]. Tampoco habían hecho nada por impedir la desindustrialización. En pocas palabras (G.36C.UGT.1994:14):

---

[45] La UGT además consideraba que el Gobierno sólo buscaba la competitividad de los productos españoles mediante la reducción de los costes laborales ("La Alternativa Socialdemócrata: equidad social y eficiencia económica" pág. 10, op. cit.; y la Memoria de Gestión del 36º Congreso Confederal de la UGT, pág. 325).

[46] Véanse "La Alternativa socialdemócrata: equidad social y eficiencia económica", op. cit., y la Memoria de Gestión de la CEC al 36º Congreso de la UGT, pp. 13 y 17.

[47] Lo cual no les impedía afirmar al mismo tiempo que la política fiscal del Gobierno socialista se caracterizó en el período que iba de 1990 a 1994 por ser "claramente restrictiva, tanto por la parte del gasto como por la del ingreso. En efecto, los Presupuestos presentados a lo largo de estos años se caracterizaron por una política de contención del gasto público y una reforma del impuesto sobre la renta que hizo recaer aún más esta figura impositiva sobre las rentas de los trabajadores y que supuso la práctica desfiscalización de las rentas de capital" (G.36C.UGT.1994:325).

[48] Véanse igualmente los "Documentos Aprobados en el V Congreso Confederal" de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, Madrid, febrero 1992, pág. 82.

"[P]or efecto de la política económica -contradictoria mezcla de contracción monetaria y expansión selectiva del gasto público en proyectos de gran contenido propagandístico- la industria entró en recesión en el segundo semestre de 1.990, la construcción lo hizo doce meses más tarde (2º semestre de 1.991) y los servicios alcanzaron el estancamiento a finales de 1.992".

1.3.2. Las políticas alternativas que proponía la UGT en unidad de acción con CCOO

La UGT no sólo no volvió a dar ese apoyo global, aunque crítico, de la primera legislatura socialista, sino que expuso públicamente una política económica alternativa, ahora acordada con CCOO. Básicamente ésta era la misma que había planteado en su congreso de 1983, salvó quizás un mayor énfasis en estimular la demanda interna gracias al incremento de los salarios reales y de las transferencias sociales, y consistía a grandes trazos en emplear el sector público como motor de la economía mediante planes sectoriales, aumentar la inversión pública, controlar el destino de las beneficios empresariales, bajar los tipos de interés y de cambio, y establecer una fiscalidad antiespeculativa. Así esperaban fomentar el empleo, frenar la contracción patrimonial del capital nacional, modernizar el aparato productivo, fortalecer la base industrial y afrontar la convergencia económica con Europa así como conseguir un desarrollo regional armónico (G.36C.UGT.1994). En líneas generales, la posición de CCOO era semejante[49].

Como en años anteriores, seguían insistiendo en que era necesaria una mayor planificación económica que orientase la política industrial, terciaria y tecnológica[50], y donde, además de mayor

[49] Véanse los "Documentos Aprobados en el V Congreso Confederal" de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, Madrid, febrero 1992.

[50] Para la UGT se podía optar entre una "estructura de país intermedio, basada en la ventaja de unos menores costes salariales, pero incompatible con la mejora

inversión pública, el sector empresarial del Estado fuese uno de los motores principales de la actividad económica, sobre todo en sectores estratégicos y/o de alto nivel de riesgo[51]. Con ese fin, la UGT proponía el establecimiento de marcos cuatrienales a base de planes sectoriales, que tuviesen en cuenta el papel de España en un gran mercado europeo, el modelo y equipamiento tecnológico más idóneo y el desarrollo regional[52]. Otra pieza clave del control del crecimiento era la creación de fondos de inversión para transferir las rentas obtenidas de los sobrebeneficios a sectores o actividades en crisis, y, además, progresar en la democracia industrial, incrementando la participación de los trabajadores en la gestión de las empresas. Con este fin se crearía un marco legal que facilitase la constitución de dichos fondos, precisando su sistema de financiación y titularidad patrimonial, su gestión socialmente compartida, y el destino de las

---

progresiva del bienestar social" o "por elevar progresivamente el grado de desarrollo económico y social a través de un amplio esfuerzo de modernización productiva" para lo que se requería "definir un objetivo de configuración industrial" y "el diseño del tipo de industria que se quiere potenciar preferentemente, de modo que sirva de orientación a las inversiones del conjunto de la economía" ("Iniciativa Sindical de Progreso", op. cit). Véase igualmente "La Alternativa Socialdemócrata: equidad social y eficiencia económica", pp. 29,31, op. cit.), y la Memoria de Gestión de la Comisión Ejecutiva del 36º Congreso Confederal de UGT. Para la posición similar de CCOO véanse los "Documentos Aprobados en el V Congreso Confederal" de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, Madrid, febrero 1992, pp. 82-83.

[51] "El sector público es el principal agente, con un peso muy importante dentro de la economía y, consecuentemente, susceptible de dirigir sus actuaciones hacia el empleo, realizando políticas directas cuando genera el producto e indirectas cuando detrae o reparte, además de las tutelares y de orientación que con carácter general le corresponden" (R.35C.UGT.1990:109).

Véanse también "170 propuestas de UGT para aumentar y mejorar el empleo" (documento fechado el 3 de marzo de 1988. Caja: FEJP/516. F.L.C.), las "Reflexiones de la UGT para un compromiso de progreso por el empleo" (en *Información Sindical*, núm. 60. mayo 1988), las "Prioridades del espacio social europeo" (en *Información Sindical*, núm. 67-68, enero-febrero 1989), y La Memoria de Gestión del 36º Congreso de la UGT, 1994, pp. 329-332.

[52] Véanse las "Reflexiones de la UGT para un compromiso de progreso por el empleo" (2), op. cit.

inversiones que se realizasen así como los rendimientos que produjesen[53].

Respecto a la política fiscal, reclamaban un mayor gasto público en inversiones y capítulos sociales, reduciendo fuertemente los gastos en Defensa e institucionales[54]. Para conseguir, además, mayores ingresos y, sobre todo, de una forma más justa, el Gobierno socialista debía aumentar la capacidad recaudatoria de los impuestos directos. Con ese fin se debían reducir las deducciones existentes en el impuesto de sociedades y el peso del trabajo dependiente en la recaudación del IRPF, establecer una verdadera imposición sobre el patrimonio y un tratamiento tributario especial sobre beneficios extraordinarios, plusvalías especulativas, los resultados del sistema financiero, etc. Igualmente se debería reducir el IVA a los bienes de primera necesidad y eliminar el fraude fiscal[55].

El estímulo de la demanda agregada se complementaría con "[u]na política salarial que supusiese ganancia de poder adquisitivo sin absorber la totalidad del aumento de la productividad global de la economía"[56]. La política de rentas tenía además que ir más allá de la meramente salarial y centrarse en la lucha contra la especulación mediante el control, como hemos visto, de los excedentes empresariales[57]. Igualmente, la inflación se combatiría con medidas

---

[53] Véanse las Resoluciones a su 35º Congreso de la UGT, pág. 110; la "Alternativa Socialdemócrata: equidad social y eficiencia económica", pp. 31, op. cit.; la "Iniciativa Sindical de Progreso" (op. cit.). Para la defensa de estos fondos de inversión en CCOO véanse los "Documentos Aprobados en el V Congreso Confederal" de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, Madrid, febrero 1992, pág. 71.

[54] Véanse las "170 propuestas de UGT para aumentar y mejorar el empleo", op. cit.; las "Reflexiones de la UGT para un compromiso de progreso por el empleo" (2) op. cit.; "Por un compromiso de empleo: propuestas de UGT" Madrid, 31 de marzo de 1989 (en *Información Sindical*, núm. 69-70, marzo-abril de 1989); "La Alternativa Socialdemócrata: equidad social y eficiencia económica", pp. 28-29, op. cit.

[55] Vid. supra. CCOO postulaba las mismas demandas en los "Documentos Aprobados en el V Congreso Confederal" de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, Madrid, febrero 1992, pág. 70.

[56] Véanse las "170 propuestas de UGT para aumentar y mejorar el empleo", medidas de la 136 a la 170, op. cit.

[57] Véanse las "Prioridades del espacio social europeo", op. cit.

estructurales en el campo del transporte, la comercialización, la distribución y los servicios administrativos, y practicar una política de control de precios activa y selectiva en tanto surtían efecto las medidas anteriores[58].

En cuanto a la política monetaria y cambiaria, reconocían que éstas iban a perder mucha autonomía tanto por la creciente internacionalización de la economía española como por su previsible vinculación al SME, pero, mientras se dispusiese de autonomía, solicitaban una reducción de los tipos de interés y de cambio; y evitar la entrada de "dinero caliente" especulativo que sobrevaluaba la divisa española[59].

Respecto a la medidas para fomentar el empleo y su estabilidad, consideraban necesario, en primer lugar, que el sector público empresarial fuese "beligerante en la creación de empleo"[60]. Se añadía la reforma de las modalidades de contratación[61] y la supervisión por parte de la Administración y sindicatos de su uso[62], la reducción de la jornada de trabajo, el control de las horas extraordinarias y el fomento de las jubilaciones anticipadas[63]; dedicar más recursos a formación, potenciar la economía social, la coordinación económica internacional etc. (R.35C.UGT.1990:110,111).

Finalmente, respecto a la protección social, reclamaban una "senda clara de acercamiento, lo más rápido posible, a los niveles medios europeos de protección social, [de] participación de los

---

[58] Véase el núm. 60 de *Información Sindical*, mayo 1988, pág. 71.

[59] Véanse las "170 propuestas de UGT para aumentar y mejorar el empleo" op. cit.; las "Reflexiones de la UGT para un compromiso de progreso por el empleo" (2), op. cit.; "Por un compromiso de empleo: propuestas de UGT" Madrid, 31 de marzo de 1989, op. cit.; "La Alternativa Socialdemócrata: equidad social y eficiencia económica", pp. 28-29, op. cit.; la "Iniciativa Sindical de Progreso", op. cit.

[60] Véase "Por un compromiso de empleo: propuestas de UGT", op. cit.

[61] Pedían la derogación del Real Decreto 1989/84 del contrato temporal de fomento del empleo, contrato por lanzamiento de nueva actividad, de colaboración social de carácter temporal, y la posibilidad de sucesión de contratos ("La Iniciativa Sindical de Progreso", pág. 3, op. cit.).

[62] Vid. supra., pág. 3.

[63] Vid. supra., pág. 4.

trabajadores y [a los] niveles de seguridad y salud en el trabajo"[64]. Así, incluso después de que hubiesen llegado a acuerdos con el Gobierno, siguieron reclamando incrementos en las pensiones contributivas y no contributivas, pues las cantidades medias pagadas no las consideraban como suficientes y dignas, y garantizar por ley la revalorización automática de las pensiones. El nivel de cobertura de desempleo seguía siendo muy bajo por lo que, en relación con el nivel contributivo, pedían una reducción del período mínimo de cotización, extender la cobertura a colectivos no cubiertos, y, con respecto al nivel asistencial, la extensión del subsidio. Además, se tenía que establecer una renta mínima garantizada o de inserción mediante una normativa de carácter estatal e incrementar el número de familias con derecho a la protección familiar. Para el Sistema Nacional de Salud pedían un incremento sustancial de los recursos, la elaboración de un plan estratégico para la sanidad, aumentar las prestaciones, y su financiación íntegra a través de los Presupuestos Generales del Estado. Añadían aumentar las dotaciones presupuestarias para la construcción de vivienda y mejora del sistema educativo[65]. Otro área objeto de sus demandas concernía al incremento de los derechos de participación de los trabajadores en las empresas. Demandas similares eran igualmente defendidas por CCOO[66].

En conclusión, el enfrentamiento de la dirección de la UGT con el Gobierno del PSOE se producía, por tanto, por cuestiones de redistribución del crecimiento económico que hubo en la segunda mitad de los ochenta[67] junto a una creciente disparidad de opiniones

---

[64] Véanse las "Prioridades del espacio social europeo", pp. 7-12, op. cit.

[65] Véanse "La Alternativa Socialdemócrata: equidad social y eficiencia económica", pág. 25, op. cit.; y "La Iniciativa Sindical de Progreso", pp. 10-15, op. cit.

[66] Véanse los "Documentos Aprobados en el V Congreso Confederal" de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, Madrid, febrero 1992, pp. 67-69,78.

[67] Así, en las Resoluciones de su 35º Congreso afirmaban que "el período de recuperación económica no se ha visto correspondido en lo social y se ha caracterizado por la ausencia de mecanismos de vertebración que garantizarán, a través del diálogo social, la necesaria cohesión económica y social" (R.35C.UGT.1990:107) y la Propuesta Sindical Prioritaria (elaborada el año anterior)

sobre cómo solucionar problemas de índole económico o social que se resistían a desaparecer, o reaparecían, a finales de esa década.

1.4. El acceso al Gobierno por parte de la UGT

Aunque este período se caracteriza por los enfrentamientos entre la dirección de la UGT con la del Gobierno socialista, los cuales se suman a los ya existentes entre éste último y CCOO, el sindicato socialista consiguió influir en la política social del Gobierno socialista, al mismo tiempo que se negó a practicar la moderación salarial pedida por el Gobierno (véase tabla 7)[68].

La propia UGT admitía, y se felicitaba, que la Propuesta Sindical Prioritaria, donde expusieron sus principales demandas al Gobierno, fue:

> "un éxito sindical e implicó logros importantes para los trabajadores y los sindicatos. No solamente porque se obtuvieron en gran medida las reivindicaciones más puntuales del 14-D, como el pago de la deuda social, la cláusula de revisión para los pensionistas o la revisión del REASS sino aspectos más estructurales como las

---

pretendía ser "un giro social orientado a equilibrar la actual política económica dotándola de un contenido social" consistente en priorizar "el aumento y mejora del empleo, la protección social, la redistribución de la renta y el protagonismo de los trabajadores" (R.35C.UGT.1990:108). Igualmente, a mediados de 1990, la UGT consideraba que el rasgo fundamental de España era "el desequilibrio social, en términos de rentas, protección social y equidad, que nos separa diferencialmente, y más que ninguna otra esfera comparativa, de los niveles comunitarios" ("La Alternativa socialdemócrata: equidad social y eficiencia económica", pág. 9, op. cit.). Un año más tarde, en el otoño de 1991, afirmaban que "el avance de nuestro sistema económico ha de ser abordado como una urgente necesidad, pero ello no debe implicar el aparcamiento de los graves retrasos estructurales en materia socio-laboral, respecto a los principales países comunitarios" ("La Iniciativa Sindical de Progreso", pág. 2, op. cit.).

[68] En 1987 CCOO pidió desde un principio de las conversaciones entre un 7 y un 8%, la UGT, si había acuerdo con la CEOE, entre en un 5 y un 7%, y si no lo había un 7%.

pensiones no contributivas, el salario social que se implantó en prácticamente todas las Comunidades Autónomas y el derecho de información en la contratación (...). [T]ras el proceso de manifestaciones y la huelga general del 14-D el Gobierno se vio obligado a llevar al Parlamento importantes modificaciones en sus planteamientos de gasto social (entre otros aspectos, con el aumento de la cobertura por desempleo) y se pactaron aspectos importantes" (G.36C.UGT.1994:25).

TABLA 7.Incrementos salariales pedidos por UGT y CCOO, e inflación prevista (1987-1991)

	1987	1988	1989	1990	1991
UGT	5-7%	6,0%	7,0%	9,0%	9,0%
CCOO	7-8%	6,0%	7,0%	9,0%	9,0%
$IPC_{p.}$	5,0%	3,0%	3,0%	5,7%	5,8%
$IPC_{m.}$	5,3%	4,8%	6,8%	6,7%	5,9%

$IPC_{p.}$ Previsión de inflación.

$IPC_{m.}$ Inflación en media anual.

Fuente: *El País*, varios años.

Para conseguir estos objetivos la estrategia de UGT combinó el recurrir a diferentes partidos políticos del arco parlamentario[69] con,

[69] "Durante el período de tiempo comentado [1990-1994], los miembros de la C.E.C. han celebrado numerosas reuniones con los Partidos Políticos y con los Grupos Parlamentarios para tratar sobre aquellas iniciativas legislativas de incidencia directa en los trabajadores y sindicatos (...). De este modo hemos conocido con antelación a su publicación en el Boletín de las Cortes Generales y Diario de Sesiones todas las posiciones, interpelaciones, mociones y preguntas elaboradas por los distintos grupos parlamentarios, para poderles trasladar posteriormente nuestras propuestas, alternativas y valoraciones" (G.36C.UGT.1994:350).

sobre todo, un acercamiento a su antiguo rival[70]. Respecto al primer procedimiento, los dirigentes de la UGT se reunieron en octubre de 1988 con los Grupos Parlamentarios para informarles de sus peticiones con motivo de la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas, subsidiados, y funcionarios, y cómo pensaban conseguirlas del Gobierno[71]. Sin embargo, la utilidad de los otros partidos políticos pronto se vio que tenía sus límites para conseguir promover sus objetivos en el ámbito político[72].

Pero la forma principal de alcanzar sus objetivos en la esfera política era la unidad de acción con CCOO[73]. Así, a diferencia de lo

---

[70] La pretensión de la UGT, en colaboración con CCOO, de realizar su propia actividad política queda de manifiesto cuando el Secretario General de la UGT elegido en el congreso de 1994 declaró que sus planteamientos ante el futuro de la enseñanza y de la sanidad los discute con el Gobierno Popular, advirtiendo que si éste quisiese desmantelar el sistema público "la UGT tomará una iniciativa sindical y abrirá un proceso de confrontación con el Ejecutivo", al mismo tiempo que rechaza formar plataformas conjuntas con el PSOE en defensa del Estado del bienestar (*El País* 11-2-97).

[71] El Secretario de Acción Sindical, Apolinar Rodríguez, caracterizaba dichos encuentros de "formales y puntuales". Igualmente informaba:

"[T]odos los grupos [les] trasladaron su deseo de mantener contactos institucionales periódicos con los sindicatos más representativos para conocer [sus] posiciones sobre temas sociales de cierta trascendencia como presupuestos, iniciativas legislativas y reformas estructurales. Sus propósitos se apoyaban en la necesidad institucional de vincular labor parlamentaria y tejido social, en beneficio de toda la sociedad" (Carta-circular del Secretario de Acción Sindical a las F.F. y U.U., fechada en Madrid a 26 de octubre de 1988, Caja: FEJP/517. F.L.C.).

[72] De hecho, el Partido Popular presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Ley 2/1.991, de 7 de enero, sobre Derecho de Información de los Representantes de los Trabajadores en materia de contratación, ley pactada entre el Gobierno con los sindicatos. Por el contrario Izquierda Unida hizo suyo el texto sindical en el Proyecto de Ley de Huelga y la postura sindical ante la reforma laboral de 1994 y la huelga general del 27 de enero de ese año (G.36C.UGT.1994:350-351).

[73] "La experiencia de la P.S.P. desmiente los mensajes desmovilizadores y hace más cierta la idea contraria: como demuestra la experiencia histórica los trabajadores sólo obtienen mejoras en sus condiciones de vida y de trabajo si son capaces de

ocurrido entre 1984 y 1987, a partir de 1988 las direcciones de ambos sindicatos se podrían de acuerdo para pedir los mismos incrementos salariales[74] y llevar a cabo la negociación colectiva, convocar movilizaciones, o, como se expuso anteriormente elaborar propuestas conjuntas ("La Propuesta Sindical Prioritaria" o "La Iniciativa Sindical de Progreso)[75].

Esta nueva estrategia de ampliar sus relaciones a otros partidos políticos y, sobre todo, unir fuerzas con CCOO para influir en las políticas gubernamentales no supuso el fin de la comunicación y colaboración entre el PSOE y la UGT. Así, se siguieron produciendo encuentros y negociaciones entre el aparato del Partido socialista y la dirección ugetista para solucionar contenciosos con el Gobierno[76]. Ahora bien, esta tarea de intermediación por parte del aparato del PSOE no se realizaba solamente entre Gobierno y UGT, sino también con la dirección de CCOO[77]. La UGT había pasado a

---

movilizarse, de defender políticas solidarias y de actuar unidos (G.36C.UGT.1994:25).

[74] Véase la nota a pie de página núm. 62.

[75] Véanse los "Documentos Aprobados en el V Congreso Confederal" de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, Madrid, febrero 1992, pp 20-21.

[76] La Secretaría de Asuntos Económicos, Sociales y Sindicales del PSOE se encargó desde 1990 de realizar actuaciones concretas con el fin de ayudar a la solución de diversos conflictos que interesaban a los sindicatos. Destaca así la participación, junto a la Secretaría de Organización, en la solución de la negociación del Plan de Futuro de Hunosa o en la negociación de la finalmente non-nata ley de Huelga y otras actividades con los sindicatos. Dichas reuniones, según la memoria de gestión del PSOE, tenían como objetivo "contribuir a potenciar un clima de entendimiento, que facilitara y apoyara la propia labor del gobierno en su interlocución social y que, a su vez, permitiera *establecer acuerdos concretos en torno a iniciativas de interés mutuo*" (Memoria de Gestión de la Comisión Ejecutiva Federal a su 33º Congreso, 18-19 de marzo de 1994, pp. 39,102, mía la cursiva).

[77] Así una delegación de la dirección del PSOE, formada por Alfonso Guerra, José María Benegas, Francisco Fernández Marugán y Eduardo Martín Toval, se reunió con las direcciones de UGT y CCOO en 1992 (con UGT en septiembre de 1992 y con CCOO en noviembre de 1992) y marzo de 1993 (G.33C.PSOE.1994:39).

compartir con CCOO la categoría de canal del PSOE para relacionarse, cuando fuese necesario, con el mundo del trabajo[78].

2. La nueva concertación social: los acuerdos concretos y limitados

2.1. Acuerdos alcanzados entre el Gobierno socialista y los sindicatos

A pesar de que la política económica y social del Gobierno era descalificada globalmente por su antiguo sindicato hermano, y tras tres años (de 1987 a 1989) en los que no había habido pactos entre el Gobierno y los sindicatos, la "concertación social" se retomó en 1990 con las siguientes características (Palomeque 1992: 53):

1) Fue un proceso continuado en el tiempo, compuesto por fases sucesivas, sin responder a la necesidad de acotar temporalmente períodos limitados de negociación destinados a conseguir un acuerdo marco unitario.

2) Se establecieron distintas relaciones de diálogo, entre el Gobierno y los sindicatos, entre el Gobierno y la patronal CEOE, y a tres bandas, en función de las materias tratadas.

3) Se alcanzaron diversos pactos sectoriales que no formaban parte de ningún acuerdo global temáticamente integrado.

4) Desde el lado sindical, fueron firmados tanto por UGT como por CCOO. La UGT no ha vuelto a firmar en solitario.

Los acuerdos alcanzados por UGT, CCOO y el Gobierno en ese segundo ciclo de concertación fueron (Palomeque 1992: 54-46; Solans Latre 1995:151-156):

1) Acuerdos en materia de pensiones y prestaciones familiares.

Se alcanzaron acuerdos sobre pensiones no contributivas que mejoraron las cuantías y aumentaron los beneficiarios de las prestaciones no contributivas. Se incrementó, en tanto se efectuara una reforma en profundidad de la contingencia de protección a la

[78] Según declaró Joaquín Almunia durante la entrevista con el autor del 29-7-96, el dirigente sindical de CCOO, Julián Ariza, suele manifestar la opinión de los sindicatos en los comités federales del PSOE. Esta labor fue confirmada por el propio Ariza durante una entrevista con el autor celebrada el 18-7-97.

familia dentro del sistema de Seguridad Social, la cuantía de la asignación familiar. Con respecto a las pensiones contributivas se mejoraron su cuantía y se estableció un mecanismo de mantenimiento del poder adquisitivo para lo que quedaba de legislatura.

2) Acuerdos relativos a los empleados públicos.

Se concedió una compensación económica al personal funcionario y al laboral dependiente de la Administración del Estado por la desviación del IPC registrado en 1989 y se les reconoció el derecho a la negociación colectiva.

3) Acuerdo sobre empleo y contratación.

Este acuerdo se componía de tres específicos sobre aspectos relativos al empleo y a la contratación laboral: 1) derechos de información y control de los representantes legales de los trabajadores; 2) constitución de comisiones provinciales (tripartitas) de seguimiento de la contratación laboral; 3) medidas de colaboración con la Inspección de Trabajo[79].

4) También se extendió la protección de los trabajadores eventuales del campo.

5) Acuerdos sobre formación profesional alcanzados en diciembre de 1992.

De ahí saldrían el Acuerdo nacional sobre Formación Continua y el Acuerdo Tripartito en materia de Formación Continua de los Trabajadores Ocupados con el fin de resolver el déficit formativo de los colectivos con mayores carencias educativas, adoptar medidas para la mejora del binomio formación-empleo, e incrementar la participación sindical en la ejecución de programas de formación profesional[80].

---

[79] J. Mª. Cuevas lo calificó de "compromiso impresentable", "el más grande ataque a la economía de mercado y a la libertad de empresa", "que aumentará la burocracia al introducir una nueva jurisdicción, la sindical", que daría lugar a una "nueva casta de comisarios políticos" (citado por Solans Latre 1995:155).

[80] Según la UGT el derecho a la formación permanente y el reciclaje en la empresa de los trabajadores constituía uno de los puntos reivindicativos sindicales recogidos en la "Propuesta Sindical Prioritaria" firmada con CCOO en octubre de 1989 (G.36C.UGT.1994:313).

6) Como resultado de las negociaciones entre el Gobierno y los sindicatos se decidió la constitución del Consejo Económico y Social (G.36C.UGT.1994:319; Solans Latre 1995:158).

En conclusión, este nuevo método de "concertación" abandonaba no sólo el tripartismo global explícito -el cuál, como hemos visto, nunca había sido del agrado de la UGT cuando gobernaba el Partido socialista- sino también acuerdos globales de contrapartidas que, sin ser formalmente tripartitos, implicasen que los firmantes apoyaban un mismo marco económico y social, como había ocurrido durante la primera legislatura socialista. Ahora, por el contrario, la firma por parte de los agentes sociales de uno de estos acuerdos sectoriales no impedía que rechazasen y criticasen otros aspectos de las políticas del Gobierno, como hemos visto que hacía la UGT en unidad de acción con CCOO. Se llegaban a acuerdos sobre asuntos concretos sin necesidad de ponerse de acuerdo globalmente, y, por tanto, los sindicatos podían lograr objetivos en determinados temas sin por ello tener que dar contrapartidas en otros (como era la contención salarial), y sin tener que confiar en que a medio o largo plazo el otro firmante cumpliese sus compromisos.

2.2. Las preferencias de los actores

Este era el método de concertación que la propia dirección ugetista afirmaba que prefería. Así en su Memoria de Gestión al 35º Congreso (1990) sostenían que el AES era un modelo de concertación agotado y que se proponían, por el contrario[81]:

> "una concertación social basada en la interlocución con los empresarios, con el Gobierno o las Administraciones Autonómicas, según la naturaleza de lo que se negocia; planteada con mayor profundidad en cada cuestión y con una prolongación en el tiempo; poniendo especial cuidado en las garantías de cumplimiento [...], que no suponga un sustituto o un freno a la negociación colectiva sino que, por el contrario, sirva para potenciarla en cuanto resulta

[81] Véase también la "Iniciativa Social de Progreso", pág. 2, op. cit.

> esencial la articulación para que llegue a los centros de trabajo" (G.35C.UGT.1990:19)[82].

Ahora bien, hay que señalar que en la concepción ugetista sobre el alcance de su influencia política no entraba "cogobernar" con el PSOE[83], es decir, implicarse en el diseño global de las políticas públicas[84]. Esta autolimitación era aclarada por los propios dirigentes ugetistas:

> "[E]l que hayamos rechazado negociar las cuentas del Reino en su conjunto, el que creamos que los sindicatos no tienen por misión legitimar una política económica, es plenamente compatible con que hayamos reclamado siempre que *determinadas cuestiones de carácter económico y social* que tienen incidencia sobre los trabajadores con empleo, los empleados públicos, los parados, los jubilados y, en general, amplias capas de la población, *tienen que ser negociadas con los sindicatos más representativos*" (vid. supra, mía la cursiva).

---

[82] En el siguiente congreso de 1994, la UGT se felicitaba de que gracias a esos acuerdos habían conseguido del Gobierno el derecho a la negociación colectiva de los funcionarios y el mantenimiento del poder adquisitivo de sus salarios (aunque el acuerdo se rompió a los dos años por parte del gobierno), la mejora del nivel asistencial de la protección por desempleo en 1989 (si bien hubo recortes a la protección por desempleo en 1992 y la Ley 22/93), o en materia de pensiones la Ley 26/90 de prestaciones no contributivas o el acuerdo de revalorización de las pensiones (G.36C.UGT.1994:22).

[83] "[E]n una sociedad democrática, un acuerdo global, en todos y cada uno de los puntos, *lo que implicaría una especie de cogobierno de los sindicatos*, ni es posible ni es deseable. Por supuesto, este acuerdo es más inviable si se pretende, además, que se logre en una mesa tripartita con los empresarios" ("Comentarios a la Presentación de los Presupuestos Generales del Estado para 1990", Madrid, 28 de marzo de 1990, caja: FEJP/520, FLC, mía la cursiva).

[84] "Antes de entrar a analizar sobre los Presupuestos para 1990, es necesario recordar cuál es la postura de U.G.T. en relación con el proceso de elaboración de los mismos. Desde hace ya varios años hemos venido diciendo con insistencia que no consideramos adecuado el método de negociar globalmente los sindicatos y el gobierno el conjunto de la política económica o el conjunto de los Presupuestos Generales del Estado" (vid. supra).

Así, en principio, se podría pensar que este rechazo a una suerte de "cogobierno" UGT-PSOE significaba sencillamente que los dirigentes ugetistas pretendían influir en aquellos aspectos de las políticas que más les interesasen sin por ello tener que aceptar como contrapartida otros con los que estuviesen disconformes. Pero considero que su rechazo iba más allá, y obedecía a su concepción tradicional sobre el reparto de papeles entre los sindicatos y los partidos políticos[85]. Para ellos, la planificación global de las políticas gubernamentales, así como la asunción de los posibles costes que entrañase su aplicación, era responsabilidad del Partido socialista, no de los sindicatos[86]. Así pues, el fin de las relaciones solidarias con el PSOE, junto a su afirmación de que el ámbito político no era exclusivo de los partidos políticos, significaba que la dirección de la

---

[85] Al año de comenzar la segunda legislatura socialista (1986-1989), y cuando el sindicato socialista todavía defendía las relaciones de solidaridad con el PSOE, el Secretario General de la UGT afirmaba que su sindicato nunca había sido partidario de negociar los Presupuestos Generales del Estado, sino de discutir determinadas partidas (*El País* 17-7-87).

[86] En este sentido, cuando todavía se mantenían las relaciones de solidaridad entre el PSOE y la UGT, los dirigentes de este sindicato hacían hincapié en que mediante el resultado de las urnas "la mayoría social" daba su respaldo a un determinado programa electoral de gobierno, en el cual se establecía la coherencia global de las distintas políticas entre sí, y cuya aplicación era responsabilidad exclusiva del Gobierno socialista (Véase la carta-circular del Secretario de Acción Sindical del 31 de julio de 1987, op. cit.). El diario *El País* (17 y 25-7-87, y 2-9-87) recoge igualmente declaraciones del Secretario General y de otros dirigentes de la UGT en las que afirmaban que la definición de cuestiones tales como un proyecto de sociedad y la política económica era tarea exclusiva del Gobierno socialista en las que la UGT no tenía por qué entrar. Por último, en la que sería una de las últimas intervenciones de Nicolás Redondo a favor de mantener unas relaciones preferentes con el PSOE durante el 31º Congreso de los socialistas, celebrado en enero de 1988, este dirigente señaló que esas relaciones se fortalecerían y estrecharían si se emprendía un esfuerzo conjunto orientado "hacia el progreso social que impulsemos todos con igual entusiasmo *desde la responsabilidad que a cada uno [le] corresponde*" (*Discurso de Nicolás Redondo al Congreso del PSOE de 1988*, Madrid: Unión Editorial, mía la cursiva).

UGT ya no aceptaba que su antiguo socio tuviese que ser el canal necesario, o preferente, para intervenir en política, pero no que el sindicato pretendiese implicarse además en la tarea de gobernar, asumiendo así la obligación de rendir cuentas ante la sociedad por su participación. Esta responsabilidad se la seguían cediendo de buen grado al partido del Gobierno y al Parlamento[87].

En el caso de CCOO, ya en su III Congreso habían rechazado igualmente que "todo acuerdo que comport[ase] el compromiso global con la política económica" y en su IV Congreso había manifestado que los pactos sociales firmados desde el Pacto de la Moncloa al AES era "una experiencia a superar". Sin embargo, en el V Congreso hacían la observación de que no rechazaban los acuerdos globales per se, como parece que hacía la UGT, sino aquellos que implicasen "políticas gubernamentales o patronales que consideremos negativas a cambio de 'concesiones', cualesquiera que sean"[88]. Ellos preferirían un acuerdo global donde pudieran modificar la política económica, pero considerando que alcanzar el acuerdo global no era posible con el Gobierno socialista y la patronal, se conformaban con "limitar la negociación a aquellos aspectos puntuales sobre los que podamos incorporar nuestras alternativas o propuestas concretas, eludiendo cualquier intento de comprometer a los sindicatos con la generalidad de una política antisocial y, por ende, económicamente contraria a los intereses de los trabajadores" (5C.CCOO.1991:64).

La CEOE, por su parte, consideró que se había producido una ruptura del tripartismo de la mano de las exigencias sindicales. Sólo se llegó a un acuerdo sobre cotización a la Seguridad Social (la

---

[87] No consideraban adecuado el ofrecimiento de negociar "el conjunto de la política económica o el conjunto de los Presupuestos Generales del Estado" porque, entre otras cosas, "es precisamente el órgano que representa la voluntad popular, es decir, el Parlamento, el que tiene como misión, y quizás es su misión más importante, debatir y elaborar los Presupuestos Generales del Estado" ("Comentarios a la Presentación de los Presupuestos Generales del Estado para 1990", op. cit.).

[88] "[N]i todos los acuerdos tripartitos son malos por definición, ni todos los bipartitos son buenos por principio" ("Documentos Aprobados en el V Congreso Confederal" de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, Madrid, febrero 1992, pág. 64).

cotización no habría de crecer por encima de la inflación prevista) (Palomeque 1992: 57). Pero, ¿era ésta la concertación preferida por el Gobierno socialista?

Al comenzar la década de los noventa el Gobierno socialista decidió dar el primer paso para mejorar sus relaciones con los sindicatos[89]. El Ministro de Economía, Carlos Solchaga creía que si aceptaban previamente el incremento de gasto social que les reclamaban los sindicatos, éstos serían menos reacios a entrar en algún tipo de pacto de rentas (Espina 1997:14)[90], aunque el resultado de las negociaciones incrementó el gasto más de lo que el Ministro de Economía había previsto[91]. Es muy posible, además, que Solchaga se mostrase más abierto a las demandas de UGT y CCOO como forma

---

[89] Según explicó Carlos Solchaga durante una entrevista de Burns Marañón (1996:160,161), a principios de 1989 el Ministerio de Trabajo decidió acceder a las demandas de los sindicatos en cobertura de desempleo, sin que aquello les satisficiese por lo que las tensiones continuaron. Tras las elecciones legislativas de octubre de 1989, nada más jurar su cargo como ministro, Solchaga le propuso al Presidente del Gobierno que había que alcanzar con los sindicatos algún tipo de acuerdo y que, para que no se cediese demasiado en las negociaciones, prefería ser él quien las condujera. Con ese fin se puso de acuerdo con el Secretario General de la UGT para discutir primero la llamada deuda social y a continuación introducir los asuntos que interesaban al gobierno. Alvaro Espina (1997:14) confirma la celebración de esos encuentros para negociar las reclamaciones sindicales.

[90] Esta opinión fue confirmada por el propio Carlos Solchaga durante la entrevista con el autor del 19-7-96.

[91] Refiriéndose al incremento del gasto del INEM en cobertura de desempleo, Carlos Solchaga lo explica tanto por el crecimiento del desempleo a partir de 1991 como porque "el Ministerio de Trabajo no midió las consecuencias de los pactos o minusvaloró el impacto de los mismos sobre el aumento de la cobertura por desempleo" (Solchaga 1997:293). Lo mismo ocurrió con el coste real del acuerdo sobre pensiones no contributivas (Solchaga 1997:293):

"A mí me asegura el ministro de Trabajo y de Seguridad Social que la deuda social va a costar noventa mil millones de pesetas y acabó costando doscientos cincuenta mil millones" [Entrevista a Carlos Solchaga por Burns Marañón (1996:162)].

de mejorar su posición política dentro del Partido socialista[92]. En cualquier caso, parece claro que la firma por parte del Gobierno de esos pactos sectoriales no implicaba que hubiese abandonado la idea de conseguir pactos globales de contrapartidas, y lograr así recuperar la contención salarial, sino todo lo contrario.

La reaparición, o mantenimiento, de problemas económicos lo hacían muy deseable en opinión del Gobierno socialista. A finales de los años ochenta se había producido un repunte de la inflación y el agravamiento del déficit comercial[93]. Para el Gobierno el repunte de la inflación era especialmente grave, una vez que había elegido unirse al proceso de integración europea por completo, porque provocaría una grave pérdida de competitividad, con sus consiguientes efectos sobre la balanza comercial y la creación de empleo. Así, había que intentar controlar la inflación para lo cual creían que sólo había dos

---

[92] Almunia sostuvo al respecto durante la entrevista con el autor celebrada el 29-7-96 que:

"Un año después [1990], cuando ya la gente se ha quedado con que Felipe no es eterno y con que incluso él [Felipe González] está pensando en irse, en dejar paso a otro, el número dos del Partido, que era todopoderoso en esta casa, el Vicepresidente del Gobierno, pues resulta que tiene un escandalazo con su hermano. Y, entonces, mi interpretación es que Solchaga cree que él puede ser el candidato, y hace campaña. En la mesa de negociación con los sindicatos no sólo ha cedido en la primavera del 89, sino que, al final de 1989 y principios de los 90, Solchaga entrega un segundo plazo de "deuda social". Y yo creo que eso lo entrega, no porque se lo esté pidiendo Chaves, como ministro de Trabajo, ni yo, como ministro de los funcionarios, sino que él va más allá a atender las demandas sindicales porque, yo creo, él durante esos meses ve que puede jugar un papel político. Entonces hay dos tacadas del gasto público, una en el 89, pero otra muy fuerte en el 90, que son las indiciaciones de las pensiones, indiciaciones de los salarios de los funcionarios, se da por fin el visto bueno a las pensiones no contributivas, la cobertura del desempleo...".

[93] La inflación subió de un 4,6% en diciembre de 1987 a un 6,9% en diciembre de 1989. La balanza por cuenta corriente entró en números rojos en 1988, con un déficit del 1,1% con respecto al PIB, y llegó hasta el 3,7% en 1990.

alternativas factibles: o hacer más restrictiva la política económica o llegar a una concertación de política de rentas[94].

La primera opción no era deseable, entre otras cosas, porque una política monetaria más restrictiva produciría una inmediata atracción de capitales que apreciarían el tipo de cambio de la peseta, perjudicando de nuevo la competitividad de los productos españoles, al mismo tiempo que entrañaría un aumento de la presión fiscal y/o reducción del gasto público. Esto último reduciría el gasto en programas sociales e infraestructuras[95]. Una política de rentas concertadas, por el contrario, permitiría que los procesos de consolidación fiscal y la instrumentalización de la política monetaria se acomodasen mejor a las necesidades de un crecimiento estable y de la creación de empleo. Se consideraba como imprescindible que los salarios no absorbiesen todos los incrementos de productividad del sistema, permitiendo la continuidad del proceso inversor generador de empleo y de futuras ganancias de productividad. Finalmente, un amplio acuerdo social permitiría, al dar crédito a un compromiso antiinflacionario del Gobierno, la conjunción de políticas de manejo de la demanda, reformas estructurales y políticas industriales, la cual produciría un crecimiento estable y no inflacionario[96]. De nuevo, sobre el papel, el corporatismo de oferta aparecía como el estilo de formación de políticas que proporcionaría los mejores resultados económicos y sociales.

No parece, sin embargo, que ésta fuera la solución óptima para el Ministro de Economía, Carlos Solchaga, pero sí más factible que otras en principio económicamente más eficientes[97]. Solchaga creía que, a veces, esos acuerdos globales se interponían con las fuerzas del mercado y, aunque a corto sus resultados podían resultar brillantes, en el medio plazo podrían ser contradictorios con los objetivos de crecimiento económico o del empleo. Así, por ejemplo, temía que,

---

[94] Esta opinión fue confirmada por el propio Carlos Solchaga durante la entrevista con el autor del 19-7-96. Véase igualmente el documento del "Pacto Social de Progreso", op. cit.

[95] Véase el documento del "Pacto Social de Progreso", op. cit.

[96] Vid. supra.

[97] Opiniones expuestas durante la entrevista con autor del 19-7-96.

con objeto de conseguir esa moderación salarial a través de la negociación centralizada, se aceptase a cambio un incremento del gasto público que pusiese en peligro el objetivo de reducir el déficit público. Tampoco parece que el Ministro de Economía estuviese muy convencido de lograr el acuerdo global, pues dudaba que, en una situación de expansión económica, los sindicatos quisieran contener sus demandas salariales, además de que los sindicatos se negaban a "avalar" las políticas económicas del Gobierno socialista. En resumen:

> "Yo creía que era mi deber en aquel momento tratar de conseguir ese pacto [global], pero es verdad que siempre me aproximé a él con bastante escepticismo"[98].

Por el contrario consideraba que en una economía bien organizada debería esperarse de los sindicatos acuerdos fundamentalmente con los empleadores y mucho menos con el Gobierno. Creía posible esa misma moderación salarial mediante una negociación salarial muy descentralizada, en el ámbito de las empresas, donde se ajustarían los crecimientos de los salarios al crecimiento de la productividad. Tenía el grave inconveniente, sin embargo, de que a menos que los propios agentes sociales aceptasen negociar a ese nivel, hubiera habido que aprobar una ley que impidiese la negociación supraempresarial, lo cual parecía políticamente excluido. La descentralización podía ser un desiderátum pero no era algo que estuviera al alcance de las decisiones que el Gobierno socialista podía tomar[99].

2.3. La ausencia de coordinación económica

El primer intento de lograr un nuevo pacto global se hizo con el llamado Pacto de Competitividad, en junio de 1990 (rebautizado después como Pacto de Progreso). Al mismo tiempo el proceso

---

[98] Afirmación realizada durante la entrevista con el autor del día 19-7-96.

[99] Vid. supra.

negociador anteriormente iniciado (reparto del empleo, reforma fiscal, ley de salud laboral y Consejo Económico y Social) languideció. Se conjuntaba la presión de la CEOE, una pérdida de interés por parte del Gobierno en la conducción del proceso, que pretendía ser condicionado ahora a la discusión del Pacto de Competitividad. Además, en el verano de 1990 el clima se enrareció por unos anunciados programas de ajuste económico (restricciones presupuestarias fundamentalmente) como consecuencia de la guerra del Golfo Pérsico (Palomeque 1992:58).

Al año siguiente, en junio de 1991, el Gobierno presentó en el Congreso de los Diputados su propuesta de Pacto Social de Progreso cuyos elementos principales eran:

1) Pacto de rentas: se proponía un pacto para los próximos tres años, 1992-94, que contemplase un incremento de salarios que se fuese aproximando a los que se produjesen en los países más estables de la Comunidad Económica Europea, con un compromiso de inflación anual siempre inferior al que se fijara para el aumento de los salarios nominales y garantizando el aumento del poder de compra de los salarios en función del incremento de la productividad del sistema, más una cláusula universal de revisión. Al mismo tiempo se proponía que los beneficios distribuidos por las empresas creciesen al mismo ritmo que los salarios nominales y que se destinasen el resto de los beneficios a la constitución de reservas para la inversión.

2) Se establecían otros mecanismos para controlar la inflación, especialmente en el sector servicios, mediante reformas estructurales: seguimientos sectoriales de la evolución de precios, la creación de empleo, la inversión realizada, los costes salariales y los niveles de endeudamiento.

3) Se mejoraba la competitividad de la economía española, además de por la reducción de los costes laborales unitarios, mediante (a) la simplificación del sistema de contratación, (b) la sustitución de las viejas Ordenanzas Laborales, (c) la revisión de la protección por desempleo, y (d) el reforzamiento de las medidas de formación profesional.

4) Se daría un tratamiento fiscal favorable entre 1992-94 a la constitución de fondos empresariales dedicados a la financiación de la

formación profesional y de los programas de investigación y desarrollo.

5) Se perseguía un nivel elevado de ahorro tanto privado como público mediante medidas que fomentasen el ahorro de las familias y empresas, y lograr el equilibrio presupuestario.

El Pacto Social de Progreso contenía toda una serie de guiños a los sindicatos, donde el Gobierno parecía aceptar parte de las demandas sindicales[100]. Así por ejemplo, se afirmaba explícitamente que para conseguir estos objetivos de política económica (desinflación, crecimiento económico y reducción del paro), y hacer frente a los problemas estructurales de la economía española y los retos de la competitividad, el Gobierno consideraba necesario llevar a cabo una combinación de políticas de ofertas con políticas de demanda. Se aceptaba que para que se diera un crecimiento económico no inflacionario también era necesario un comportamiento empresarial "orientado hacia una mejor integración de los recursos humanos en la actividad productiva, así como el incremento de la inversión en formación profesional, innovación tecnológica, gestión de calidad industrial y desarrollo de estrategias de internacionalización de nuestras empresas"[101]. Se pedía una moderación de los costes laborales unitarios, pero con la doble garantía de que "la moderación del crecimiento de los salarios nominales es compatible con el aumento en el poder de compra de los salarios y la seguridad de que los beneficios empresariales también contribuyen, vía fortalecimiento del ahorro empresarial, a la mejora de la competitividad de nuestras empresas". Se proponía también que los beneficios distribuidos por las empresas creciesen al mismo ritmo que los salarios nominales y que se destinase el resto de los beneficios a la constitución de reservas para inversión, que no se redujese la lucha contra la inflación al control de los incrementos salariales, o la búsqueda de competitividad a una cuestión de evolución relativa de

---

[100] La propia UGT reconocía en la memoria de gestión de la CEC al 36 Congreso que el Gobierno había recogido parte de la filosofía y las críticas que los sindicatos habían venido realizando sobre las deficiencias estructurales de la economía española.

[101] Véase el documento del "Pacto Social de Progreso", op. cit.

los costes laborales unitarios. Y finalmente se incluía un tratamiento fiscal favorable para los fondos empresariales dedicados a la financiación de la formación profesional y de los programas de investigación y desarrollo[102].

Mientras tanto, se siguieron manteniendo mesas de negociación sobre diversos temas: salud laboral, formación profesional, reparto del empleo, reforma del INEM y modalidades de contratación. Se constituyó por fin el Consejo Económico y Social (Palomeque 1992:59) pero otros acuerdos no salieron a la luz sobre asuntos tales como "salud laboral" o la "ley de huelga". El primero se empezó a negociar en julio de 1990, y tras algunas interrupciones en la negociación, a principios de 1992 se alcanzó un acuerdo básico sobre el borrador del proyecto de ley, que no vio nunca la luz (G.36C.UGT.1994:315-316). A este acuerdo se oponía la CEOE, que se negaba a aceptar nuevos órganos de participación y representación de los trabajadores a cargo de la empresa, y añadía además la disparidad de criterio entre los Ministerios de Trabajo y Economía (Solans Latre 1995:159). Finalmente el Anteproyecto presentado por el Gobierno en septiembre de 1994 sería criticado por UGT y CCOO. La negociación de la ley de Huelga tuvo una suerte parecida. Su negociación comenzó en septiembre de 1991 y pareció alcanzarse un acuerdo con el Ministro de Trabajo. El proyecto no tuvo su terminación legal en las Cortes al disolverse éstas y no fue continuado en la siguiente legislatura (G.36C.UGT.1994:317-318).

El Gobierno, después de intentar sin éxito la consecución de una política de rentas pactada con los sindicatos se decidió a adoptar el Plan de Convergencia con la Comunidad Europea (1992-1996), aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados el día 12 de mayo de 1992 con el apoyo de los grupos parlamentarios socialista, vasco y catalán. Tampoco obtuvo el apoyo de los sindicatos. Este se componía de (Palomeque 1992:62-66):

1) Medidas estructurales dirigidas a la desregulación y flexibilización de los mercados de bienes y factores.

---

[102] Vid. supra.

2) Un conjunto de compromisos y medidas de política económica en el terreno de la política monetaria y fiscal.

La posición de la UGT (en unidad de acción con CCOO) fue la de mostrar su rechazo total a nuevos pactos globales de contrapartidas[103]. Para la UGT el "Pacto Social de Progreso" continuaba con los mismos planteamientos que habían presidido la política económica de años anteriores: subvenciones y desgravaciones fiscales a empresas de manera indiscriminada y contención de los costes laborales (G.36C.UGT.1994:326)[104], un pacto puro y duro de control de salarios (G.36C.UGT.1994:17). El Plan de Convergencia del Gobierno, presentado en la primavera de 1992, se proponía, según la UGT, unos objetivos macroeconómicos irrealizables, y no contenía innovaciones sustanciales respecto a las propuestas políticas del Gobierno que la UGT ya venía rechazando (G.36C.UGT.1994:17-26).

3. Conclusión: de la solidaridad a la conveniencia

Parecen así existir diferencias apreciables entre las relaciones que mantuvieron el Gobierno socialista y la dirección de la Unión General de Trabajadores durante la primera legislatura socialista (de 1982 a 1986) y las desarrolladas posteriormente durante la tercera (de 1989 a 1993). Estas diferencias que nos indican un cambio en su forma de relacionarse son principalmente la presencia primero y ausencia después de (a) una mayor confianza por parte de la UGT que por la de CCOO con respecto a la bondad de las políticas del

---

[103] "La etapa de los pactos globales ha pasado" ("Iniciativa Social de Progreso", pág. 2, op. cit.). Para la posición similar de CCOO, véanse los "Documentos Aprobados en el V Congreso Confederal" de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, Madrid, febrero 1992, pág. 19.

[104] "El Gobierno desde 1990 lleva considerando la necesidad de un pacto económico de cara al aumento de la competitividad, pacto económico que siempre ha quedado reducido a la contención de los salarios, a la eliminación de supuestas rigideces en el mercado de trabajo y al recorte del gasto social" (G.36C.UGT.1994:325).

Gobierno socialista, y (b) una interlocución preferente que tenía el sindicato socialista para el Gobierno socialista con respecto a otros agentes sociales.

En la primera legislatura socialista (1982-1986) la UGT, a pesar de sus preferencias en política económica, confió en que la estrategia económica del Gobierno socialista centrada en la disciplina macroeconómica y mejorar el lado de la oferta de la economía terminaría promoviendo el crecimiento económico, y con él el empleo y mejoras sociales. Los dirigentes ugetistas esperaban en que los beneficios finales compensasen los costes transitorios que tales políticas entrañaban, si bien cuando éstos aparecieron intentó que fueran los menos. Aceptó así la reconversión industrial, la contención salarial y la pacificación de las relaciones laborales, participando en acuerdos globales de contrapartidas en los que se materializaba la coordinación económica. Ambas organizaciones socialistas intentaron así pues mantener esta coordinación entre la acción sindical en la negociación colectiva y las políticas económicas aunque estas últimas no fueran las keynesianas. El otro sindicato representativo en el ámbito de todo el Estado, CCOO, por el contrario rechazó tal coordinación (salvo durante un corto período tras llegar el PSOE al poder), y descalificó sin ambages las políticas gubernamentales del Partido socialista.

Es importante señalar, sin embargo, que la realización en sí de la coordinación económica, e incluso el apoyo electoral por parte de la UGT hacia el PSOE, no indican por sí sólo la existencia de relaciones de solidaridad entre ambas organizaciones. Como se afirmó en el primer capítulo, en sí mismos tales intercambios y coordinación de actividades también se pueden dar bajo un modelo de relaciones por intereses concretos. Pero el rasgo solidario de sus relaciones se evidenciaba, además de la confianza anteriormente expuesta, en que el sindicato socialista tuvo un mayor acceso al Gobierno en general que los otros interlocutores sociales gracias a esa doble militancia de ugetistas y miembros del Gobierno. Esto le permitió reducir, a corto plazo, los costes sociales de las políticas del Gobierno, como ocurrió en el caso de la reconversión industrial, y logró, sobre todo al principio, la clase de pacto global que deseaba.

Los dirigentes ugetistas siempre tuvieron claro que mediante la concertación social la CEOE no podía renegociar sus compromisos alcanzados por su sindicato con el Partido socialista.

Así, en general, unos y otros intentaron que sus relaciones siguiesen el diseño estratégico solidario. La UGT intervenía en las acciones del Gobierno principalmente gracias a su relación preferente con los miembros del Partido socialista y a su vez apoyaba sus políticas en el ámbito de las relaciones laborales. El Partido socialista, además de obtener el apoyo expreso de la UGT en los procesos electorales, contaba así con un importante apoyo para sus políticas. Bien es cierto que la influencia de la UGT no llegó a ser del grado que hubiera deseado su dirección, ni los canales de comunicación fueron siempre tan eficaces, pero con todo el balance fue lo suficientemente positivo como para renovar las relaciones solidarias al término de la primera legislatura socialista.

Por el contrario, en la tercera legislatura (1989-1993), a pesar de que el Gobierno socialista aumentó el ritmo del gasto social con respecto a sus dos legislaturas anteriores al mismo tiempo que incrementaba la inversión pública en infraestructuras y formación, la UGT, en unidad de acción con CCOO, rechazó entrar en ninguna clase de acuerdos cuyos beneficios no fuesen inmediatos o le implicasen una aceptación global de las políticas del Gobierno, las cuales calificaba abiertamente de neoliberales y negativas para los intereses de los trabajadores. La dirección ugetista no confiaba en absoluto en la política económica del Gobierno socialista, y se negó en rotundo a llevar a cabo la moderación salarial que le pedía el Gobierno socialista.

Al mismo tiempo, el trato preferencial mutuo desapareció. El Partido Socialista negociaba sus propuestas con ambos sindicatos, y la UGT ya no volvería a firmar en solitario ningún acuerdo. Esto no significó, sin embargo, que no hubiese relaciones entre el aparato del Partido y la dirección ugetista, o que no se llegasen a acuerdos con el Gobierno como hemos visto; pero sus relaciones no serían a partir de entonces sino un procedimiento más para conseguir que el Gobierno accediese a sus reclamaciones, y no excluía en el caso del sindicato socialista que se relacionase con otros partidos políticos o, sobre todo,

realizara movilizaciones junto a su antiguo rival sindical para presionarle. En definitiva, no se trataba solamente de que ambas organizaciones estuviesen enfrentadas, sino que pretendían reconstruir sus relaciones sus relaciones sobre bases nuevas en las que el sindicato no reconocía al ámbito político como exclusivo de los partidos, y el Partido socialista equilibraba sus relaciones dentro del movimiento sindical, si bien en general ya no consideraba a los sindicatos unos aliados estratégicos imprescindibles.

Las diferentes características que presentan las relaciones entre el Gobierno socialista y los sindicatos nos indican, por tanto, que los modelos de relaciones establecidos en sus congresos no eran simple retórica. Estos modelos reflejaban un intento por parte de los actores de llevar una relaciones de una u otra forma. En el primer caso, se trataba de que su colaboración mutua era la estrategia necesaria para alcanzar sus objetivos; en el segundo, que de la colaboración no era sino un recurso más que no excluía otras estrategias.

CAPITULO QUINTO

PARADOJAS DEL ENFRENTAMIENTO ENTRE EL PSOE Y LA UGT

En los capítulos anteriores hemos visto como entre 1982 y 1993 se produjo una transformación de las relaciones entre el Partido socialista en el gobierno y la Unión General de Trabajadores. Aunque ambas organizaciones siguieron colaborando, para cuando comenzó la tercera legislatura socialista (1989-1993) habían abandonado aquel consenso sobre el solapamiento de sus objetivos finales, ámbitos en los que había que actuar, reparto de tareas y coordinación de actividades. Esta transformación de sus relaciones es uno de los casos más claros donde se puede plantear el debate expuesto en el primer capítulo sobre si los crecientes fracasos en los intercambios de bienes y coordinación de actividades entre los partidos socialdemócratas y los sindicatos son producto (a) de unos supuestos cambios macroestructurales, que habrían afectado a las políticas económicas y sociales de los gobiernos socialdemócratas así como a la acción sindical, o (b) no son sino un ejemplo más de cómo afectan los entornos institucionales -y más en concreto de las estructuras organizativas de los movimientos sindicales- a sus opciones estratégicas. Pero antes de entrar en este debate, considero necesario recordar que el socialismo español constituye un caso aparte dentro del Sur de Europa donde, generalmente, la literatura sobre partidos y sindicatos socialdemócratas suele sostener que "[w]hile the Nothern European parties had strong ties to organized labor, the parties in France, Italy and Spain have remained apart" (Padgett y Paterson 1991:3). Históricamente, tanto en el PSOE como en la UGT se defendió un modelo de relaciones partido-sindicato similar a los del Norte de Europa.

1. El peso de la tradición y su importancia para los militantes de base

1.1. Las relaciones tradicionales entre el PSOE y la UGT

Aunque en un primer momento en la UGT se afirmó no sólo su autonomía frente a todo partido, sino incluso su neutralidad en cuestiones políticas[1], a medida que transcurrieron los primeros años del siglo XX, su apoyo al PSOE se fue haciendo más evidente (como en el caso de su respaldo en las elecciones de 1909) hasta que por fin en 1918 se declararon socialistas (Pérez Ledesma 1987:230-232). En el PSOE, por el contrario, no se dudó en mostrar su preferencia explícita por ese sindicato desde un primer momento, lo cual se reflejaba en la obligación estatutaria que tenían sus miembros de afiliarse a la Unión General de Trabajadores. No tuvieron tampoco inconveniente en postular claramente el reparto de tareas entre el partido y el sindicato en defensa de una misma causa: mientras que el primero se dedicaría a la lucha política (presentar candidaturas "de clase" en las elecciones y difundir los programas máximo y mínimo), el segundo se ocuparía de la mejora de los trabajadores por medio de la resistencia y de lograr una legislación laboral favorable a la clase obrera.

Sin embargo, manteniendo siempre su independencia formal, desde el punto de vista de las relaciones como redes existía entre ambas organizaciones una relación muy imbricada. Los militantes dobles representaban a principios de siglo una sexta parte del total de adheridos al sindicato, existían sociedades afiliadas a la vez al partido y al sindicato, la mayoría de las actividades propagandísticas se realizaban de forma conjunta. Y, sobre todo, las direcciones de ambas

[1] "La Unión no defiende principios económicos determinados, no pertenece a ningún partido político, no profesa ninguna religión y no reconoce distinciones de raza o nacionalidad. Sus miembros son libres personalmente de defender y propagar las opiniones que consideren más acertadas independientemente de la organización" (Declaración incorporada en la reforma de los Estatutos realizada en el Congreso de Málaga, citado por Pérez Ledesma 1987:230).

entidades se encontraban concentradas en las manos de un mismo líder, Pablo Iglesias, y de un pequeño grupo de seguidores (Pérez Ledesma 1987:232)[2]. Según afirmó años después Largo Caballero, dirigente del partido y del sindicato, la separación formal entre ambas organizaciones se había debido más a una política de atracción y proselitismo en el sindicato que por un convencimiento de que el proletariado organizado se tenía que abstener de participar en acciones políticas[3]. Los ugetistas se tenían que defender especialmente de la acusación de estar al servicio de "un partido político" que les hacían sus correligionarios anarquistas[4].

Durante la Segunda República y la Guerra Civil sus relaciones, en términos de redes, padecieron tensiones y enfrentamientos, pero "más que por una división entre UGT y el PSOE, por las divisiones internas del PSOE mismo, que se manifestaron también en la UGT"[5]. En los años de exilio y clandestinidad, con un PSOE y una UGT muy menguados, ambas organizaciones eran estrictamente similares en cuanto a su estructura organizativa, afiliación y acuerdos. La dirección en el interior era común, la dirección en el exterior estaba en las mismas manos, la acción era conjunta. En la UGT se rechazaba toda vinculación con otros partidos mientras que en el

---

[2] Hay que recordar que, de entre todos los dirigentes socialistas europeos del momento, Pablo Iglesias fue el único que ocupó los cargos máximos del partido y del sindicato al mismo tiempo (Pérez Ledesma 1992:140).

[3] Ahora bien, siempre existió en el seno de la UGT una minoría discrepante con la colaboración, y además exclusiva, con el PSOE como reconocía el propio Pablo Iglesias (Pérez Ledesma 1987:233).

[4] Un dirigente anarquista, José Prat, escribía al respecto en *La Aurora Social*, órgano sindicalista de la Federación de sociedades obreras de Zaragoza en mayo de 1910:

"Según recientes manifestaciones orales del jefe del partido socialista español, la U.G. de T. está enfeudada a dicho partido, sirve sus inspiraciones, supedita la acción económica a la acción política, y tanto es así, que 'acepta la fórmula' de conjunción republicano-socialista, impuesta por las conveniencias electorales del presente momento" (Citado por Anselmo Lorenzo 1974 [1923]:308).

[5] Intervención de Santiago Carrillo en el seminario *Las relaciones entre partidos políticos y sindicatos en la sociedad contemporánea*, organizado por la Universidad Complutense de verano y publicado en Carlos Otero Hidalgo (1996:55).

PSOE se reafirmaba que todo afiliado al partido debía estar a la vez integrado en ese sindicato (Pérez Ledesma 1992:143). Al comienzo de la Transición se planteó la cuestión de sus relaciones, pero esta vez la memoria de una historia común permitía plantear el modelo solidario de una forma abierta en ambas organizaciones: fines comunes, división de tareas según ámbitos, autonomía, exclusivismo (Redero San Román 1992:189)[6].

Es decir, a diferencia del caso de otros países del Sur de Europa, la familia socialista española contaba al menos con la memoria histórica de haber tenido una modalidad solidaria de colaboración que los años del exilio y clandestinidad habían reforzado más si cabe. Todo parece sugerir que el socialismo español había mantenido un modelo solidario o "nórdico" de relaciones partido-sindicato en un contexto "meridional" de división de los partidos de izquierdas y de las organizaciones sindicales. En España no se trata de explicar la ausencia de un modelo solidario de relaciones del partido socialista con aquel sindicato que se identificase como socialista, como en el caso francés o italiano, sino por qué se cambió en favor de uno por intereses concretos.

1.2. La posición de las bases de las organizaciones frente a la ruptura del modelo histórico

[6] Según un libro editado por la UGT en 1977, pág. 18, para darse a conocer, en el apartado dedicado a analizar las relaciones partido-sindicato se podía leer:

"Partido y sindicato están, pues, condenados a relacionarse continuamente entre sí, como dos organizaciones soberanas que, cada una en su respectivo campo de actuación, luchan por los mismos objetivos. En esta perspectiva se sitúan las relaciones fraternales que la UGT mantiene con el PSOE, con el que comparte un mismo concepto de Libertad, Democracia y Socialismo. Es precisamente esa identidad la que evita el peligro de que una organización quiera relegar a la otra a un papel de subordinación, no compatible con la autonomía de cada una de ellas".

Se podría plantear, sin embargo, que esa memoria histórica de relaciones solidarias entre el PSOE y la UGT no era más que eso[7]: un mero recuerdo, sentido probablemente por los viejos militantes que se afiliaron en su juventud; y que España había experimentado durante la Dictadura de Franco unas profundas transformaciones sociales y culturales del tipo que provocó en Holanda la descomposición del "pilar" católico a mediados de los años setenta al unirse el sindicato de esta denominación con el socialista mientras que su antiguo partido hermano escogía a los protestantes. De hecho, durante la transición española ya no estuvo tan extendido que cargos dirigentes de las dos organizaciones estuviesen ocupados por una misma persona, ni que los dirigentes del Partido tuviesen una extracción mayoritariamente obrera o una carrera sindical (Pérez Ledesma 1992:145). Como vimos en el segundo capítulo, mientras que la doble militancia alcanzaba niveles del 100% en los directorios nacionales, se reducía mucho entre los afiliados de base: alrededor del 50% de los militantes del PSOE en 1990 (*El País* 9-11-90) y del 12% en la UGT (Bouza 1989)[8]. Es más, Pérez Díaz (1993:292) encontró que el 55,5% de los trabajadores en 1980, y el 57% en 1984, preferían que los sindicatos fueran independientes de los partidos políticos, o que, como mucho, establecieran acuerdos ocasionales con los partidos sobre temas específicos (el 33% en 1980 y en 1984).

Sin embargo, atribuir el abandono del modelo solidario a un cambio en la composición social o ideológica de sus militancias, o a

---

[7] Ludolfo Paramio sostiene en concreto que "se olvida que el modelo dual [lo que viene a ser el modelo solidario aquí expuesto], en el comienzo de la transición democrática, era más un diseño estratégico (o un recuerdo del período anterior a la guerra civil) que una realidad operante" (Paramio 1992:522).

[8] En los estudios sobre la militancia del PSOE se encontró que cuanto más reciente era la fecha de afiliación, mayor era la tendencia a no afiliarse a las dos organizaciones, de tal forma que la doble militancia era una característica cada vez más ligada al grado de antigüedad en las organizaciones (Puhle 1986:331). Bouza encontró el mismo patrón entre los delegados de los Comités de Empresa afiliados a la UGT: la proporción de afiliados al PSOE aumentaba cuanto más años llevaban militando en el sindicato, también mostraban ser los que se situaban más a la izquierda (Bouza 1989:10).

una preferencia creciente por separarse, choca con el hecho de que no encontremos ningún movimiento de las bases, ni en el partido ni en el sindicato, que llevase a líderes nuevos, o a obligar a los antiguos, a dar por terminado el modelo anterior de relaciones. Así, el congreso socialista que cambió el modelo de relaciones partido-sindicato, celebrado en 1990, aprobó por unanimidad la gestión de la ejecutiva salida del último congreso donde se defendió el modelo solidario, celebrado dos años antes. Además, comparando ambos congresos, se observa que 20 de los 23 miembros de la anterior ejecutiva volvieron a ser elegidos[9]. Con similar patrón nos encontramos en el caso de la UGT. De nuevo la gestión de la ejecutiva elegida en el último congreso donde se propusieron llevar a cabo unas relaciones fraternales con el Partido Socialista, celebrado en 1986, recibió cuatro años más tarde una aprobación unánime por parte de los delegados del 35º Congreso ugetista, sin abstenciones ni ausencias. Igualmente, 7 de los 11 miembros de la ejecutiva elegida en el anterior congreso volvieron a estar en la nueva ejecutiva. De hecho, el cambio de miembros de la ejecutiva de UGT en 1990 fue de los menores de los ocurridos en sus congresos[10]. Se puede rechazar, por tanto, que el cambio de modelo de relaciones viniese producido porque las bases de ambas organizaciones reprobasen a los dirigentes que habían defendido el modelo tradicional de relaciones o eligiesen a nuevos dirigentes para que se encargasen de llevar a cabo una nueva forma de relaciones. Parece así que el cambio

---

[9] De hecho, se observa que el 65% de la ejecutiva salida del congreso de 1990 había estado en la anterior ejecutiva, una proporción sólo superada por la salida del congreso de 1981 (75% había estado en la anterior) y la del congreso de 1984 (71%), y era un porcentaje de "veteranía" superior al que tenían las ejecutivas salidas en los congresos de 1976 (37%), 1979 (42%) y 1988 (57%).

[10] El 64% de los miembros de la ejecutiva salida del 35º Congreso de la UGT (1990) había estado en la ejecutiva anterior. Este porcentaje sólo es superado por las ejecutiva salida del 33º Congreso (donde el 91% había estado en la anterior ejecutiva) y la del 34º Congreso (donde repetían el 73%) y es superior a la salida del 32º y 31º congreso (62% y 47% respectivamente) y, sobre todo, con respecto a la mayor renovación producida en una ejecutiva ugetista desde la vuelta de la democracia, en el 36º Congreso donde sólo el 28% de la ejecutiva había estado en la anterior.

de modelo de relaciones que se produjo en el 35º Congreso de la UGT y en el 32º Congreso del PSOE, ambos en 1990, fue producto de un cambio de apreciación sobre la relevancia y efectividad de la cooperación recíproca por parte de sus direcciones, y no tanto de los militantes de base. Con respecto a estas últimas se puede considerar que la actitud de la mayoría con respecto al cambio de modelo de relaciones se mantuvo entre la indiferencia y la resignación. Esta cuestión no les había impedido afiliarse, si es que no estaban interesados en el modelo solidario, ni les impelió a abandonarlas, si es que lo defendían[11].

2. Los cálculos de los dirigentes

Podemos salir así de la ambigüedad que he mantenido hasta ahora respecto a quienes entendieron que era conveniente un cambio en el modelo de relaciones partido-sindicato dentro de ambas organizaciones. Veremos que éste fue producto de un cálculo estratégico de sus dirigentes, pero ¿por qué dejaron éstos de creer que sus relaciones recíprocas eran la mejor estrategia para alcanzar sus objetivos tanto instrumentales como finales? Vamos a repasar ahora las principales teorías que se han elaborado para explicar la transformación de relaciones entre partidos y sindicatos socialdemócratas en Europa en estos últimos años, así como explicaciones más específicas del caso español.

Como dijimos en el primer capítulo, España no es el único país de Europa donde los partidos socialdemócratas y los sindicatos se han replanteado sus relaciones (Howell y Daley 1992-93, Padgett y Paterson 1991). En el Norte de Europa esto ha sido explicado principalmente porque, en última instancia, toda una serie de cambios en la estructura económica y social de las sociedades capitalistas avanzadas imposibilita seguir intercambiándose los

[11] Según los datos que proporcionan Van der Meer (1995) y Jordana (1996:216) la UGT, lejos de perder afiliados, siguió creciendo: en 1986, 442.200; en 1988, 531.100; en 1990, 655.200; en 1992, 874.100. El PSOE, por su parte, contaba con 213.015 afiliados en 1988 y 309.401 en 1991 (Gangas 1995:163).

mismos servicios y favores como habían estado haciendo hasta entonces, o bien esos intercambios se vuelven cada vez más improductivos o superfluos, provocando el abandono del diseño estratégico *solidario*. En el intercambio político-electoral, tales transformaciones llevan a que ni el sindicato obtenga pleno empleo, más gasto social, redistribución, ni su apoyo le represente al partido un activo electoral (o le resulta incluso perjudicial). En la coordinación económica, la negociación colectiva centralizada pasa a ser percibida como inapropiada para defender los intereses de las bases sindicales, y además innecesaria o incluso perjudicial para el éxito de las políticas económicas. El resultado es que las direcciones de ambas organizaciones socialistas se replantean la conveniencia de seguir manteniendo sus relaciones, o al menos de la misma forma, pues en cada una de ellas se constataría que su antiguo socio ha dejado de proporcionar los anteriores bienes y servicios, no compensándoles entonces las restricciones estratégicas que entrañan estas relaciones.

Pero también se expuso que eran necesarias unas condiciones organizativas, sobre todo por parte del movimiento sindical, para que tales intercambios y coordinación de actividades fuesen posibles y diesen esos provechosos resultados para los partidos y sindicatos socialdemócratas. En este sentido la literatura especializada solía señalar que las características de un sindicalismo dividido y organizativamente frágil explicaban en el sur de Europa la ausencia de victorias socialistas y de una economía concertada con las organizaciones obreras durante los años cincuenta, sesenta y setenta.

2.1. Sindicatos, partidos y votos: el papel de los sindicatos españoles en las elecciones legislativas

En primer lugar se ha señalado que la estructura social así como las preferencias de los electorados europeos se han transformado volviendo inviable aquel intercambio político-electoral, donde los sindicatos ayudaban a ganar elecciones a cambio del apoyo legislativo por parte de los partidos socialdemócratas. Como vimos en el primer

capítulo, sin embargo, no parece que todos los posibles cambios estructurales que se hayan producido tengan que cuestionar la utilidad de los sindicatos para ganar elecciones. La reducción del peso relativo y absoluto de la audiencia tradicional de los partidos socialdemócratas, los obreros manuales, de hecho podría reforzar este intercambio desde el punto de vista de los partidos socialdemócratas, pues estos últimos podrían atraerse votos de los nuevos colectivos sociales mientras los sindicatos les aseguran el apoyo de las clases trabajadoras (Przeworski y Sprague 1986:78). Es cierto que la comentada fragmentación de estas últimas así como del movimiento sindical pondría más difícil a los sindicatos la organización de los trabajadores así como homogeneizar sus intereses, pero esto sólo explicaría las dificultades crecientes de los partidos socialdemócratas para alcanzar la victoria en las elecciones, esto es, la razón de que los sindicatos hayan dejado de ser ese "activo" electoral. No conlleva, sin embargo, que además rompan con ellos. Es un caso concreto de cambio de estructura social el que realmente pondría en cuestión la continuidad de las relaciones de solidaridad por cálculos electorales. En las sociedades occidentales cobran cada vez más peso unos nuevos grupos sociales, no fácilmente identificables con una clase social concreta, cuyas demandas chocan con las peticiones tradicionales de los sindicatos[12]. Los líderes de los partidos socialdemócratas, conscientes de los pocos votos que aportan los sindicatos y de los muchos que ahuyentan, llegarían a la conclusión de que sus antiguas coaliciones de clases son impracticables y de que compensa electoralmente "desengancharse" de los sindicatos para acceder a estos nuevos colectivos sociales. ¿Explica esto el caso español? ¿Obedece la transformación del modelo oficial de relaciones partido-sindicato a una transformación de la estructura social del electorado español? Para contestar a estas preguntas se van a comprobar dos hipótesis alternativas: (i) la transformación de las relaciones la llevó a cabo el PSOE para así

[12] Se incluyen aquí, por un lado, colectivos preocupados por la participación política, la igualdad entre sexos o la protección del medio ambiente, y que tienden a considerarse de izquierdas; y, por otro, individuos interesados en la autonomía y el ascenso personal, y que se inclinan más bien por una nueva derecha.

poder aumentar sus votos entre las nuevas clases medias y (ii) la transformación de relaciones la llevó a cabo el PSOE para, una vez que los intereses de las clases trabajadoras y de las clases medias entraron en contradicción, retener el apoyo de las segundas.

Desde las primeras elecciones libres la mayoría de los afiliados a la UGT votaban por el PSOE (entre 1977 y 1986 lo hicieron más del 80% de sus miembros), por lo que *parece* que este sindicato estaba realizando esa típica tarea sindical de encauzar votos a su partido de referencia (Gunther 1986:243; Puhle 1986:311). A CCOO, sin embargo, le era más difícil hacerlo en favor del PCE. En 1979 sólo el 62% de sus miembros votaron por dicho partido (mientras que un 26% lo hacía por el PSOE). En 1982, el año del gran éxito electoral del PSOE, la proporción de miembros de CCOO que votó por el PCE bajó a un 32%, mientras que un 41% lo hizo por el Partido Socialista. No debemos, sin embargo, exagerar el papel que han tenido los sindicatos en las victorias del PSOE, incluso si el área de influencia de éstos abarca en España a sus afiliados[13] y a los votantes de las elecciones sindicales[14]. Los estudios muestran, en primer lugar, que los propios afiliados no consideraban la orientación de su sindicato como un factor relevante a la hora de votar[15]. En segundo lugar, el voto de los trabajadores no era suficiente para ganar las elecciones[16], por mucho que el PSOE (a pesar de su relación

[13] La afiliación sindical representaba solamente un 11-14% del electorado. En 1982, sólo un 17% de los votantes del PSOE estaba afiliado a un sindicato, de los cuales un 60% lo estaba a la UGT y un 31% a CCOO (Puhle 1986:307).

[14] Un 72% de los votantes de UGT en las elecciones sindicales de 1978 votaron por el PSOE en las elecciones legislativas de 1979; un 45% en el caso de los que habían votado a CCOO (Puhle 1986:311).

[15] Según un estudio realizado en 1978, sólo un 17% de los afiliados sindicales tenían en cuenta la orientación ideológica de sus organizaciones cuando votaban (Puhle 1986:311).

[16] Igualmente, la clasificación de los cabezas de familia por ocupación en 1974 mostraba que la clase obrera tradicional representaba solamente un tercio del total (Gunther, 1986:218). Estudiando las clases objetivas, sobre cuya construcción existe diversas propuestas, los obreros de la industria, servicios y campo no llegaban a ese 50% (Juárez y Renes Ayala 1994:255-256). Estudiando la autoubicación de los

preferente con UGT) consiguiese los votos de una proporción no despreciable de votantes y miembros de CCOO. La dirección del PSOE desarrolló así una estrategia "catch-all", sin renunciar a su relación de solidaridad con la UGT (Puhle 1986:290,291; Maravall 1991:17)[17].

Esta estrategia no implicó que el PSOE perdiera votos entre los trabajadores[18]. Tras quedar el PSOE como segundo partido más votado en las primeras elecciones de la democracia en 1977 y 1979 (con un 29% y 30% de los votos respectivamente), ganó las tres elecciones siguientes (con un 48% en 1982, un 44% en 1986 y un 40% en 1989). Si bien durante los años ochenta la estructura ocupacional del voto socialista fue representativo del electorado en general, existió un importante sesgo hacia trabajadores con empleo y parados. En 1979 un 44,9% de los obreros manuales votaron por el PSOE (un 13,8% lo hizo por el PCE y un 31,1% por UCD), y un 33,7% de los trabajadores no manuales (un 9,8% por el PCE y un 36,2% por UCD)[19]. En 1982 votaron por el Partido socialista un 49%

---

entrevistados -o clase subjetiva- realizado en la encuesta FOESSA-93, el grupo de personas que eligió para sí mismos la denominación de clase media es de prácticamente la mitad (49,3%), un 0,2 se consideraría de alta, un 5,3 de media alta, un 19 de media baja, un 24,1 de obrera y un 2,1 de pobre (Juárez y Renes Ayala 1994:254). Tezanos (1994:23,24) señala que, según las encuestas del CIS, la proporción de quienes se consideraban de clase media aumentó significativamente en la década de los sesenta, pasando de un 28,2% en 1966 a un 55% en 1974, si bien desde entonces se ha mantenido alrededor de un 50%. La autoidentificación como perteneciente a la clase trabajadora tradicional pasaría en esos años de un 60% a un 42%, manteniéndose posteriormente entre un 40 y un 50%.

[17] Puhle señala que el PSOE ganó las elecciones de 1982 porque atrajo una proporción sustancial del electorado de UCD y del Partido Comunista. Estos últimos esperaban una política de izquierdas, cuya expectativa radicaba "en la tradición programática e idelógica del partido y en su estrecha vinculación con el sindicato obrero socialista UGT" (Puhle 1986:291).

[18] Los datos que se ofrecen a continuación están tomados de Gunther (1986:221), Puhle (1986:290), Maravall (1991:18) y Boix (1996:243).

[19] Por el contrario, entre los autoempleados manuales el voto socialista bajaba a un 22,7%, el comunista a un 5,5% y el dado a UCD subía a un 65,2%. Entre los

de los trabajadores de industria y servicios cualificados y un 45% de los trabajadores de industria y servicios no cualificados, un 41% de los trabajadores en agricultura, un 55% de los capataces y supervisores. En general durante la década de los ochenta un 58% de los trabajadores con empleo y un 57% de los parados lo hicieron por el PSOE. Al mismo tiempo, su identificación con la UGT no le impidió movilizar con éxito a otros grupos sociales no "sindicalizados" en 1982, o que le renovasen su apoyo en 1986[20].

No parece, por tanto, que la cúpula del PSOE tuviese necesidad de deshacer sus relaciones históricas con la UGT para ganar votos entre el electorado alejado de los sindicatos como ha sido sugerido para el Partido Laborista o el SPD. Tampoco se confirma en el caso español que las victorias del PSOE obedeciesen a sus tenues vínculos con los sindicatos, explicación de Howell y Daley (1992-93:12) para los éxitos de los partidos socialistas en el Sur de Europa. El PSOE ganaría las elecciones de 1982 y 1986 contando con un apoyo explícito de la UGT, y sin que eso le supusiese un estorbo para ganar votos entre un electorado alejado de los sindicatos.

Podemos pasar a comprobar la segunda hipótesis. Aguilar y Roca (1991:46,52) han planteado que el conflicto entre el PSOE y la UGT era una de las muestras de que la socialdemocracia europea[21]

---

autoempleados no manuales el voto socialista era del 27,4%, el comunista del 6,6% y el de UCD era del 47,7% (Gunther 1986:221).

[20] Según datos proporcionados por Boix (1996:243) el PSOE quedó por encima de su más directo rival conservador (AP) en todas las categorías ocupacionales de los no asalariados o asalariados empleados en oficinas salvo entre los empresarios con empleados (un 28% en ambos casos). El PSOE ganó por poco entre los profesionales (un 24% en favor del PSOE frente un 21% a AP), autónomos en industria y servicios (un 24% al PSOE y un 23% a AP) y directivos intermedios (un 24% al PSOE y un 22% al PP) y por 9 puntos o más en el resto: entre los autónomos en agricultura (un 26% para el PSOE y un 17% para AP), entre altos directivos (un 36% para el PSOE y un 11% para AP), entre los empleados de oficina (un 42% para el PSOE y un 11 para AP), entre los vendedores (un 44% al PSOE y un 11% a AP) y entre los empleados no manuales inferiores (35% al PSOE y un 14% a AP).

[21] La socialdemocracia para estos autores se habría caracterizado por unos estrechos lazos con el movimiento obrero, respetar la lógica del beneficio privado y el

estaba procediendo a una búsqueda de nuevas pautas de acomodación entre grupos y clases sociales a causa de las crecientes contradicciones dentro de la alianza interclasista que hasta ese momento les había apoyado. Así, cuando fue imposible seguir aunando los intereses de las clases trabajadoras y de las clases medias que componían su bloque interclasista de apoyo, el PSOE se desligó de la UGT para retener el apoyo de estas últimas en detrimento de la primeras (Gillespie 1990).

Los estudios sobre los apoyos electorales del PSOE en los años noventa no parecen confirmar esta hipótesis. A principios de los noventa, y, por tanto, tras su enfrentamiento abierto y público con la UGT, el PSOE efectivamente perdía votos. Se le había ido prácticamente un quinto del apoyo conseguido en 1982, y perdía terreno en 43 de las 45 provincias, particularmente en las grandes ciudades. Pero esto no ocurría porque los trabajadores manuales estuviesen abandonando un partido enfrentado con los sindicatos, sino porque grandes proporciones de jóvenes y de las clases medias urbanas se alejaban del Partido Socialista (Maravall 1991:19; Tezanos 1994:20)[22]. No parece, por tanto, que el PSOE rompiera con la UGT

---

funcionamiento de las instituciones políticas de la democracia liberal, y por una orientación abiertamente interclasista (Aguilar y Roca 1991:44).

[22] Así, según los datos que maneja Boix (1996:243,244), el apoyo de los trabajadores de industria y servicios pasó de un poco menos del 50% en 1982 a un 40% en 1993, y en agricultura subía de un 41% a un 43%. Los empleados, por el contrario, desertaron del Partido: el apoyo entre los altos directivos cayó desde un 36% en 1982 a un 14% en 1993; entre los directivos intermedios pasaba de un 24% a un 22%; entre los empleados de oficina, de un 42% a un 17%; entre los vendedores, de un 44 a un 27; y entre los empleados no manuales inferiores, de un 35% a un 27%. Tras casi once años de gobierno, el PSOE sostenía con notable éxito el voto de la clase trabajadora tradicional, es decir, los obreros manuales de los sectores industriales y de servicios, pero lo perdía en las áreas urbanas, entre los votantes más instruidos y probablemente en las áreas más competitivas, orientadas a la exportación (Boix 1996:246). Por su parte Tezanos (1994:27) señala que el voto del PP, como el de los partidos regionalistas e IU, se está incrementando moderadamente entre quienes se identifican como clase media. Pasaría así entre 1986 y 1992 desde un máximo en 1987 de un 42,9% a un mínimo de un 28,3% (mientras que en el caso de los trabajadores bajaba en ese período desde un 44,5% en 1986 a un 40,8%).

para mantener el apoyo de las clases medias o de sectores fuera del radio de acción directo de los sindicatos.

Lo que sí parecen mostrar los datos es que un apoyo explícito de la UGT por el PSOE no era realmente un gran activo electoral y constituyese un importante anclaje de votos, al cual sumar otros. Al respecto, el estudio de Gunther y Montero (1994) señala que el voto en España está mucho menos afectado por la posición de clase objetiva que en otros países, salvo en las elecciones de 1982, y se ha producido durante los años ochenta un declive importante y continuado en el impacto político de la conciencia de clase, lo mismo que la relación entre la afiliación sindical y el apoyo electoral. Finalmente, su estudio muestra que la división en la dimensión izquierda-derecha constituyó en las elecciones de 1993 un anclaje del voto, especialmente a un campo o bloque ideológico, sustituyendo a otros ligados a factores socioestructurales. En este sentido se podría señalar que la transformación ocurrida en España en la naturaleza de los anclajes de los partidos no explicaría tanto el abandono del modelo tradicional de relaciones entre el PSOE y la UGT como que el mismo no supondría para el Partido socialista importantes costes electorales.

En conclusión, la evidencia empírica no parece confirmar las hipótesis de que la cúpula del PSOE, llevado por su "cultura de partido como máquina electoral" (Aguilar y Roca 1991:52), buscase: o bien desligarse de la UGT para aumentar votos entre las nuevas clases medias, o bien, si es cierto que llegó un determinado momento en que fue imposible seguir aunando los intereses de las clases trabajadoras y de las clases medias que componían su bloque interclasista de apoyo, desligarse de su sindicato hermano para retener a las segundas. En España, tanto socialistas como comunistas, como muestran sus intentos por reconstruir o mantener sus tradicionales relaciones con los sindicatos, no parece que les consideren como un estorbo electoral por mucho que una relación estrecha con ellos no constituya un gran "activo" para ganar las elecciones. De hecho en el PSOE no sólo no se buscaba la ruptura con la UGT por cuestiones de estrategia electoral sino que, por el contrario, parece que, sobrevalorando la contribución del apoyo de la

UGT a sus victorias electorales, causaba cierta preocupación entre sus dirigentes por ser un factor de deslegitimación entre sectores de clases medias que se consideraban de izquierdas[23]. Pero ni tan siquiera el hecho de que los sindicatos españoles no proporcionen una base electoral lo suficientemente amplia como para ganar unas elecciones, ni tengan esa capacidad para encauzar el voto de los trabajadores hacia un partido político determinado, conlleva que no puedan contribuir a que los partidos se mantengan en el poder. Si, como defiende Esping-Andersen, los éxitos de las políticas públicas se crean sus bases de apoyos y la colaboración de los sindicatos constituye un recurso para el éxito de éstas, éstos estarían colaborando indirectamente en la permanencia del partido en el poder y continuarían siendo así un poderoso recurso desde el punto de vista electoral[24].

No siendo producto de cálculos electorales el motivo del cambio de relaciones entre el PSOE y la UGT, todo sugiere que en España, para entender la transformación de sus relaciones, hay que centrarse en las políticas del Gobierno socialista y la reacción ugetista ante ellas.

2.2. La legislatura de la discordia 1986-1989: dos versiones de los enfrentamientos entre la UGT y el gobierno socialista

La mayoría de las explicaciones que se han dado sobre la transformación de las relaciones entre ambas organizaciones

---

[23] Joaquín Almunia afirmó durante una entrevista con el autor celebrada el 29-7-96 que el enfrentamiento con la UGT suponía:

"una especie de manifestación de que se había perdido autenticidad, de que se había transigido demasiado, de que se había sido poco consecuente con compromisos electorales establecidos, de deslegitimación, de desmovilizar una parte del electorado. Y probablemente nos ha hecho perder más votos por el centro Nicolás Redondo, que los votos que se hayan pasado a Izquierda Unida gracias a los discursos de Nicolás Redondo".

[24] Quizás se pueda entender así el recelo de los partidos políticos de la oposición a la colaboración de los sindicatos y patronal en las políticas gubernamentales, incluso aunque estén de acuerdo con estas.

socialistas se centran, por tanto, en las tensiones por las políticas de gobierno del PSOE. Como hemos expuesto, existen dos grandes tipos de explicaciones al respecto. La primera sostiene que se enfrentaron principalmente porque discrepaban sobre las políticas económicas que tenían que llevarse a cabo, de tal forma que llegó un momento en que a la UGT se le hizo imposible seguir apoyando al Gobierno socialista. La segunda clase de explicaciones destaca más bien que los sindicatos en España carecen de las condiciones organizativas necesarias para apoyar de una forma sostenida las políticas socialdemócratas, principalmente porque sólo defienden a un reducido sector de las clases trabajadoras. ¿Rompió la UGT con el Gobierno socialista por la naturaleza de sus políticas económicas? ¿Lo hizo porque no podía seguir apoyándole a menos que se arriesgase a perder afiliados? El análisis de la segunda legislatura del Gobierno socialista (1986-1989) nos va a permitir comprobar estas dos hipótesis.

2.2.1. Las políticas económicas del Gobierno socialista y la crítica ugetista: el fin del corporatismo de oferta en España

Existe una interpretación de los enfrentamientos que encuentra en la práctica de las políticas "neoliberales" llevadas a cabo por el PSOE la explicación de la ruptura con su sindicato. Köhler (1995:155-165) es uno de los autores más claros que defienden esta interpretación. Para este autor la pretensión del PSOE de integrar la economía española en el capitalismo europeo occidental le condujo a una política económica austera, que califica de "ajuste brutal", la cual saneó el sector financiero, pero destruyó los sectores industrial y agrario, y emprendió además una política fiscal de redistribución en favor de las clases más pudientes. Para llevar a cabo esta política, Köhler defiende que el Gobierno socialista se apoyó en los grandes bancos haciendo caso omiso de sindicatos e, incluso, de las asociaciones empresariales. Otros autores puntualizan que el enfrentamiento se produjo más bien por haberse mantenido esas políticas cuando ya no eran necesarias al crecer la economía en la

segunda mitad de los años ochenta. Gillespie (1990:47) señala así que el enfrentamiento entre el PSOE y la UGT fue una disputa entre "ministros neoliberales y defensores [la UGT] de los valores socialdemócratas", pues, a pesar de que se daban mayores tasas de crecimiento económico, el Gobierno socialista mantuvo de la legislatura anterior las prioridades económicas "thatcheristas": la reducción de la inflación y del déficit público (Gillespie 1990:53,54)[25].

Estas interpretaciones las podemos ligar con la hipótesis expuesta en el primer capítulo referente a la quiebra del keynesianismo concertado y sus efectos sobre la coordinación económica (y finalmente sobre las relaciones partido-sindicato). Pero antes de comenzar una discusión sobre cuáles son las causas que llevaron al Gobierno socialista español a no practicar la típica estrategia expansiva atribuida a los socialdemócratas (deseos de abrir la economía española, crisis fiscal del Estado, transformación posfordista de la economía española, etc.), podemos comenzar discutiendo, en primer lugar, hasta qué punto es cierto que el carácter de las políticas emprendidas separase a la UGT del Gobierno del PSOE.

Contemplando en conjunto las políticas económicas que el Gobierno socialista llevó a cabo de 1982 a 1993, difícilmente se puede decir que defendiesen los planteamientos monetaristas ortodoxos[26], al igual que ciertamente tampoco lo hacían con los keynesianos. Es cierto que en sus políticas los ministros de economía del PSOE recogieron análisis y medidas que hubieran aplicado igualmente defensores de la versión "monetario-conservadora" de la política de oferta, tales como:

1º Una interpretación del origen del paro en España por unos costes laborales desmedidos y una regulación excesiva del mercado de trabajo heredada de la dictadura de Franco, y no por falta de

---

[25] Añaden otros factores (como la competencia entre los sindicatos, falta de una oposición política fuerte a la derecha e izquierda del PSOE, etc) para explicar por qué se produjo en ese momento el enfrentamiento de la UGT, y por qué el PSOE pudo mantener su política neoliberal a pesar de la oposición de los sindicatos.

[26] Por monetaristas ortodoxos estoy considerando aquí a los economistas que defienden los postulados de la *Nueva Macroeconomía Clásica*.

demanda de la economía; pero igualmente consideraban que existían deficiencias en capital físico y humano que requerían de la intervención del Estado para corregirlas.

2º, Practicar políticas de estabilización y ajuste estructural para luchar contra la crisis económica; pero igualmente se subió la presión impositiva y aumentó el gasto público.

3º, Practicar políticas monetarias restrictivas, no así fiscales; pero el Gobierno socialista las justificaba aduciendo que la dureza era superior a la que hubieran realizado de no haberse producido la "incontinencia" salarial de los sindicatos.

Es verdad que el Gobierno socialista recogió explicaciones "de oferta" sobre los orígenes del desempleo, que estaba convencido de que los incrementos salariales eran la causa principal de la inflación, que practicó políticas monetarias restrictivas, y que se rechazaron los proyectos económicos que coartasen la iniciativa privada[27]. Pero ¿fueron sus medidas realmente tan austeras como a los "liberales" les hubiera gustado?

El gasto público corriente pasó de alrededor de un 21% del PIB en 1975, a alrededor de un 36% a mediados de los años 80 y a más de un 44% en 1993. La presión fiscal aumentó de 31,6% en 1982, 39,5% en 1989 y 42% en 1993. Sin embargo, este incremento de los ingresos fiscales no fue suficiente para hacer frente al incremento del gasto público. Es cierto que la expansión de la segunda mitad de los años 80 redujo el déficit público, pero la consolidación fiscal no se produjo totalmente, el resultado fue que si en 1982 el déficit público era del orden de un 5,6% con respecto al PIB, en 1993 era del orden del 7,5% (y la media anual entre ambos años era del 4,7%). La deuda pública pasó de un 26,6% en 1982 a un 43,2% en 1989 y un 60,5% en 1993. Jimeno, Andrés y Taguas (1994:104-105) califican a la política presupuestaria desde 1989 de "blanda" porque "las

---

[27] Así el Ministro de Economía y Hacienda se opuso a la propuesta ugetista de que se legislase la creación de unos fondos de inversión en cuyo control participasen los sindicatos (según mantuvo durante una entrevista con el autor que tuvo lugar el 19-7-1996). En palabras suyas:

"Yo creía que [los fondos de inversión] estaban en contra de lo que era la filosofía económica del gobierno y también la visión de lo que es un país moderno".

desviaciones presupuestarias [fueron] cercanas al 25% en el lado del gasto". No es fácil, por tanto, que un liberal ortodoxo, o no tan ortodoxo, diera su aprobado al Gobierno socialista con estos datos[28].

Pero, además, si se puede cuestionar la ortodoxia neoclásica del Gobierno socialista, también se puede dudar de que los dirigentes ugetistas rechazasen sus políticas económicas porque defendiesen a ultranza, no ya posiciones anticapitalistas o antimercado, sino incluso la estrategia keynesiana basada en políticas estabilizadoras o contracíclicas.

1. Con respecto a lo primero, la UGT "siempre ha considerado que es conveniente que las empresas obtengan beneficios" (R.35C.UGT.1990:110).

2. No pedían más nacionalizaciones y, aunque rechazaban las privatizaciones, no lo hacían taxativamente[29].

3. Rechazaban desenganchar la economía española de los movimientos del mercado internacional para escapar a los condicionantes del capitalismo internacional. Así no se opusieron a la entrada en el S.M.E.[30] y dieron un sí, crítico, a los acuerdos firmados en Maastricht (G.36C.UGT.1994:327)[31].

---

[28] "[E]s difícil calificar de política 'liberal' a la que lleva la participación del gasto público a casi el 50% del PIB, y ello con incrementos de los gastos llamados sociales continuada y sustancialmente superiores al crecimiento de la economía. Esto no ha sido suficiente, sin embargo, para disipar la acusación reiteradamente formulada por los sindicatos de derechización y neo-liberalismo" (Círculo de Empresarios 1993:6).

[29] "No puede ser aceptada la política de privatización llevada a cabo por el Sector público. No obstante, y manteniendo lo expuesto hasta el momento, en casos concretos, cada federación adoptará en sus órganos de decisión la actitud de diálogo necesaria para dar salida a estas situaciones, dado que puede existir una serie de circunstancias que hayan de ser consideradas y valoradas, a la hora de pronunciarse sobre la privatización de una empresa" (R.35C.UGT.1990:109).

[30] Véasen las "Reflexiones de la UGT para un compromiso de progreso por el empleo (2)", op. cit.

[31] "La UGT planteó un sí crítico al Tratado de Maastricht porque consideramos que la convergencia no puede limitarse a variables nominales con un carácter más monetario que real, sino que es precisa una convergencia de situaciones económicas más allá de los indicadores requeridos: tasa de inflación, tipo de interés a largo plazo, déficit y deuda pública, y balanza por cuenta corriente" (G.36C.UGT.1994:327).

4. Se hacían igualmente eco de los fracasos de las políticas económicas expansivas practicadas en un sólo país[32]; si bien estuvieron oscilando entre la aclaración de que "lo planteado [es decir, sus peticiones] no es en absoluto una política de relanzamiento de la demanda, puesto que ésta estaría bajo el signo de la suficiencia y la moderación"[33], y su exigencia de que "el diseño de las políticas para crear empleo debía asignar un cierto protagonismo a las políticas de demanda, mientras las políticas de oferta, las únicas que hasta hoy ha realizado el Gobierno, debían ser esencialmente de acompañamiento"[34].

5. Tampoco rechazaban, como hemos visto, que se llevaran a cabo políticas de oferta, ni criticaron los ugetistas el hecho en sí de la reconversión industrial[35], o la necesidad de luchar contra la inflación.

6. Finalmente, no se opusieron a la "la moderación salarial" (R.33C.UGT.1983:47; R.34C.UGT.1986:78); si bien es cierto que a partir de 1987 la entenderían de otra manera: moderación salarial no significa congelación del salario real.

Esto no quiere decir que entre el área económica del Gobierno del PSOE y la dirección de la UGT no existiesen diferencias sobre política económica. En primer lugar, como Maravall (1991, 1993) ha

---

[32] En su congreso de 1986 exponían:

"La expansión unilateral de la demanda se ha revelado como una política de escasa eficacia, al traducirse rápidamente en un desequilibrio de la balanza de bienes y servicios y en un recrudecimiento de la inflación" (R.34C.UGT.1986:63). Y "[l]a U.G.T. considera, en coherencia con la Confederación Europea de Sindicatos, que individualmente ningún país de Europa puede obtener buenos resultados en su política económica al margen del resto de los países" (R.35C.UGT.1990:111).

[33] Véanse las "Reflexiones de la UGT para un compromiso de progreso por el empleo (2)", pág 79, op. cit.

[34] Véase "Por un compromiso de empleo: propuestas de UGT" Madrid, 31 de marzo de 1989, pág. 26, op. cit.

[35] "Cabe recordar que una idea clave en nuestra postura era y es que los sacrificios actuales en materia de ajuste industrial se asumen para asegurar un futuro a los trabajadores del mañana más inmediato. El intentar pertinaz y demagógicamente mantener un sistema obsoleto e incompetitivo es, sencillamente, sacrificar a la clase trabajadora del futuro y UGT defiende a todos los trabajadores, los que fueron activos (jubilados), los que lo son y los que lo serán" (G.34C.UGT.1986:127).

señalado, gran parte de las disensiones estuvieron motivadas por divergencias sobre los efectos que tenían ciertas medidas o peticiones de la UGT sobre los objetivos de la política económica del Gobierno socialista, sin discutir éstos. No se ponían así de acuerdo sobre los efectos que los incrementos salariales tenían sobre la inflación, las tasas de inversión y la competitividad (sobre cuya reducción, en el primer caso, y mejora en el segundo y tercero, ambos estaban de acuerdo), ni en las repercusiones económicas de mantener el déficit público, o reducirlo más lentamente, ni en los márgenes que daba el mayor crecimiento económico desde mediados de los años ochenta o la internacionalización creciente de la economía española. Pero las diferencias no se reducían a cuestiones meramente técnicas sobre efectos de aumentos salariales o el déficit público. Ya vimos que existían divergencias más profundas: como cuáles eran los orígenes de los problemas económicos, el grado de implicación del Estado en la actividad económica y, sobre todo, la libertad que tendría el mercado en la asignación de los recursos productivos. Se puede, por tanto, concluir que, si bien no es fácil caracterizar el enfrentamiento entre el Gobierno del PSOE y la UGT por concepciones económicas como un choque entre políticas neoliberales y socialdemócratas clásicas[36], sí que existían diferencias de fondo en materia económica reflejadas en el papel del Estado, del mercado y del control de los beneficios empresariales. Ahora bien, hemos visto cómo estas diferencias se daban desde el inicio de la llegada del PSOE al poder, y ni el Gobierno socialista cambió sustancialmente sus políticas, ni la UGT sus peticiones a lo largo de los diez años[37]. Por tanto, si el

---

[36] Así por ejemplo Nicolás Redondo afirmaba (*El País* 3-7-88):

"Hemos de huir de la tesis de algunos socialdemócratas alemanes que sostienen que es necesario favorecer los excedentes empresariales porque significan inversiones para mañana y empleo para pasado mañana. Hay que advertir que la tarta hay que repartirla según se va haciendo grande".

[37] Los cambios que existieron en las políticas económicas del Gobierno socialista, como mayor gasto público, de hecho iban por el camino que le pedía la UGT. Por su parte, en la UGT se observa una insistencia de demandas que ya venía realizando desde antes como fueron los fondos de inversión controlados por los sindicatos, los

enfrentamiento se produjo por distintas concepciones de política económica, negándose la UGT a colaborar con una que calificaría de abiertamente "neoliberal" y el Gobierno a cambiarla, y sus diferencias ya se daban desde 1983, ¿Por qué esperó la dirección de la UGT a 1988/1989 para romper con el Gobierno socialista? ¿Por qué dio su visto bueno a la estrategia económica "neoliberal" del PSOE en 1986 y 1987, comenzada ya la segunda legislatura socialista y cuando la economía crecía a buen ritmo?

2.2.1.1 Del renovado entendimiento al inicio de la ruptura definitiva

Las relaciones entre el Gobierno socialista y la UGT se habían calentado mucho por la reforma de las pensiones en la primera mitad de 1985, aunque este sindicato no llegó a apoyar la huelga general convocada aquel año por CCOO. Continuaron tensas por el grado de incumplimiento de la cobertura de desempleo prometida en el AES y por ciertas partidas en los Presupuestos Generales del Estado para 1986. La Unión General de Trabajadores no apoyó al PSOE en el referéndum de la OTAN, si bien no participó en la campaña liderada por el PCE y CCOO en contra de la permanencia. En el 34º Congreso del sindicato socialista, celebrado en abril de 1986, la dirección ugetista parecía mostrar que se resentía su confianza en la forma de llevar la política económica. Sin embargo, la sintonía entre ambas direcciones se recuperó y volvió a dar su apoyo al PSOE en las elecciones legislativas celebradas dos meses después.

a) Las demandas económicas y sociales de la UGT, y la política económica del PSOE al comenzar la 2ª legislatura socialista

En su 34º Congreso la UGT se reafirmó en sus planteamientos económicos que vimos en el capítulo anterior, es decir, pedían una política *económica planificada*, concertada con los sindicatos y en

---

incrementos salariales para sostener la demanda, o la redistribución del crecimiento económico.

coordinación con los otros países de la CEE, donde el sector público empresarial tuviese un papel fundamental en la modernización y competitividad del sistema productivo, con un mayor énfasis en fomentar la demanda agregada, a la vez que se mejorasen las condiciones de oferta de la economía mediante el incremento de las inversiones públicas en infraestructuras, formación, etc., y la creación de fondos de inversión para asegurar que los beneficios se encaminasen a la inversión (R.34C.UGT.1986:57-77). Bien es cierto que, de nuevo, se aceptaban las políticas de oferta[38], mantenían su compromiso de seguir luchando contra la inflación[39], y se hacían eco de los fracasos de las políticas económicas que confiaban en salir de la crisis fomentando la demanda (R.UGT.34C.1986:63). En política social pedían, de forma general, la mejora del Estado del Bienestar[40] y un incremento de la financiación estatal de la Seguridad Social a cargo de los PGE, además de hacer una descripción pormenorizada de donde querían que se produjese éste (R.34C.UGT.1986:99). El mayor gasto tenía que ser, además, un instrumento para la redistribución de la renta que corrigiese las desigualdades sociales (R.34C.UGT.1986:98) y rechazaban que el incremento de la protección, y, por tanto, del gasto, fuese en contra del crecimiento

---

[38] "La constatación de la insuficiencia de la macropolíticas de demanda para la lucha contra el paro genera un interés especial en las políticas de oferta que promueven y estimulan la iniciativa y el riesgo. Ahora bien, las medidas de promoción que se adopten deben adaptarse a las características estructurales y humanas de las zonas cuya recuperación se desea" (R.34C.UGT.1986:64-65).

[39] "La UGT sigue considerando que una alta tasa de inflación es sumamente negativa para la clase trabajadora y para las capas más débiles de la sociedad. Además de falsear las expectativas y de generar una pérdida de competitividad generalizada, crea una dinámica de apropiación de rentas y mantenimiento del ahorro en la que los sectores más débiles (jubilados, parados, trabajadores con salario mínimo, etcétera) no tendrán la fuerza negociadora de mantener su poder adquisitivo. La inflación es así un cáncer económico, a la vez que un elemento negativo para la distribución. Por lo tanto, la UGT sigue considerando necesaria la lucha contra la inflación" (R.34C.UGT.1986:64).

[40] Véase "Sindicalismo y Acción Social" (en el núm. 34 de *Información Sindical*, enero 1986); y las Resoluciones del 34º Congreso de UGT pp. 58,95.

económico, sino todo lo contrario, pues el "desarme" social iba contra la expansión de la demanda (R.34C.UGT.1986:58).

Ahora bien, tanto en la exposición que hizo el secretario de organización de la UGT, Antón Saracíbar, de las peticiones ugetistas al PSOE para las elecciones legislativas de 1986 (*El País* 10-5-86), como en "La Propuesta Programática de U.G.T. ante las Elecciones Generales del 22 de Junio de 1.986"[41], vemos que la política económica preferida por la UGT quedaba de nuevo "congelada" al tiempo que este sindicato enfatizaba sus demandas sociales. Las cuestiones de índole económica se reducían a peticiones genéricas como que hubiese un mayor crecimiento y un aumento de la inversión pública (creciendo a mayor ritmo que el PIB y desarrollar "grandes programas de infraestructura nacional"), respaldar a las PYMES, reorientar las ayudas del Gobierno a la inversión "hacia fines más operativos y socialmente más deseables", y "dinamizar" el sector público empresarial[42]. Confiaban conseguir la reducción del desempleo potenciando la economía social, mejorando la formación profesional, reduciendo la jornada laboral a 35 horas y anticipando las jubilaciones, y creando fondos de inversiones[43]. En política de rentas mantenían la posición defendida en su 34º Congreso[44], oponiéndose tan sólo a una caída del salario real mientras que su aumento quedaba reservado para "niveles medios y bajos", como forma de incentivar la demanda interna[45]. La solicitud, sin embargo,

---

[41] Publicada en *Información Sindical*, núm. 39, junio de 1986.

[42] Véase "La Propuesta Programática de U.G.T. ante las Elecciones Generales del 22 de Junio de 1.986", pág. 4, op. cit.

[43] Para el caso concreto del paro juvenil pedían ampliar los apoyos a la contratación de jóvenes, señalando que fuese "por tiempo indefinido a tiempo completo", apoyar cooperativas de jóvenes y mejorar la formación profesional ("La Propuesta Programática de U.G.T. ante las Elecciones Generales del 22 de Junio de 1.986", pág. 6, op. cit.).

[44] Entonces se proponían defender "[l]a mejora o, en su caso, el mantenimiento del poder adquisitivo global de los trabajadores y de los pasivos" (R.34C.UGT.1986:78).

[45] "Para mantener la demanda de consumo interno, debe continuar la lucha contra la inflación pero, a la vez propiciarse una política de rentas que aumente la capacidad de consumo de los niveles medios y bajos. Particularmente, deberá propiciarse la

de una "política económica más expansiva" concertada con otros países europeos, la planificación industrial y tecnológica, "el desarrollo de una política activa de fomento y creación de empleo", la conversión del sector público en "un motor real de la modernización orientada y planificada del aparato productivo", etc (R.34C.UGT.1986) no aparecían. Por el contrario, hacían hincapié con gran detalle en las cuestiones sociales, comenzando por la "[e]levación paulatina de los gastos sociales hasta que alcan[zasen], respecto al PIB, la proporción existente en los países de la C.E.E." y la reforma global del sistema de Seguridad Social manteniendo su carácter público y acentuando su cobertura general[46]. De manera más concreta, reclamaban la revalorización de todas las pensiones de acuerdo con el IPC, asegurando subidas anuales superiores para las pensiones más bajas, la expansión de las pensiones no contributivas e igualar la cuantía de las pensiones mínimas a la del salario mínimo. Igualmente solicitaban que las prestaciones de carácter asistencial alcanzasen el 50% del salario mínimo, que la cuantía de éste se elevase más que el IPC, que la cobertura de desempleo llegase al menos al 50% de los parados. En cuanto a suministro de bienes colectivos pedían principalmente mejoras en la asistencia sanitaria y potenciar el sector de la vivienda. Finalmente también exigían que se completase el marco institucional de las relaciones laborales[47].

¿Aceptaron los dirigentes del PSOE las exigencias de la UGT? ¿Les pareció a los líderes ugetistas que el programa electoral de los socialistas había incorporado suficientemente sus demandas como

---

mejora, o, como mínimo, el mantenimiento de los salarios reales en los sectores que de él dependan y creará un clima favorable a esa práctica para que la recuperación económica en ningún caso se sustente exclusivamente sobre el abaratamiento del coste laboral" ("La Propuesta Programática de U.G.T. ante las Elecciones Generales del 22 de Junio de 1.986", pág. 5, op. cit.).

[46] "La Propuesta Programática de U.G.T. ante las Elecciones Generales del 22 de Junio de 1.986", pág. 8, op. cit.

[47] Vid. supra.

para darle su visto bueno?[48]. El Secretario General de la UGT afirmó que el Partido Socialista había aceptado incluir en su programa electoral casi todas las propuestas presentadas por la UGT (*El País* 13-5-86)[49], dando su apoyo explícito días más tarde (*El País* 17-5-86).

Ahora bien, siendo cierto que el programa del PSOE para 1986 se comprometía a esas cuestiones de índole social que defendía la UGT, es decir, que había que "[a]umentar la justicia y la solidaridad mediante el establecimiento de prestaciones sociales y servicios públicos que contribu[yesen] a elevar la calidad de vida y a mejorar las rentas de los de los grupos menos favorecidos de nuestra sociedad", y "redistribuir la renta"[50], lo es igualmente que, en los

---

[48] El sindicato socialista afirmaba que ponía como condición para volver a apoyar el programa electoral del PSOE para las elecciones legislativas de junio de 1986 que incluyese propuestas suyas (*El País* 10-5-86).

[49] En materia social el programa electoral del PSOE se comprometió, en general, a incrementar las transferencias corrientes dirigidas al aumento del nivel de la renta familiar y de la calidad de vida (Programa Electoral del PSOE para las Elecciones Legislativas de 1986, pp. 59-71, op. cit.):

-En educación, se proponían seguir trabajando por una escuela integradora, no discriminativa, participativa y completa.

-En pensiones, proponían el mantenimiento global de su capacidad adquisitiva, la progresiva mejora de aquellas que se encontraban aún por debajo del SMI y extender las no contributivas a más beneficiarios.

-En cobertura de desempleo, pretendían mejorar los niveles de cobertura, pero sin concretar una cifra.

-En sanidad, se comprometían a la universalización de las prestaciones, la financiación pública y la participación de los agentes sociales.

-En vivienda, se elaboraría un programa al respecto y se facilitaría el acceso para las familias con menores niveles de renta.

-En servicios sociales, se comprometían a garantizar unas prestaciones básicas para todos los ciudadanos.

Sin embargo el programa electoral del PSOE no recogía la demanda de UGT de elevar el SMI "en forma acentuada sobre el IPC", ni sus demandas tributarias, ni los fondos de inversión, ni la reducción de la jornada laboral a 35 horas (al respecto sólo se comprometían a estimular acuerdos entre los interlocutores sociales).

[50] Vid. supra., pp 20 y 26.

objetivos básicos de su política económica, se defendía "[p]rofundizar y ampliar la política de reformas económicas y sociales, para permitir una integración más rápida e intensa de nuestro sistema económico en el más amplio y competitivo de la CEE"; o que, para alcanzar estos objetivos generales, era necesario una política económica que "cuid[ase] los equilibrios básicos e impuls[ase] la modernización de los sectores productivos". Esto implicaba, en concreto, fijarse como metas: la reducción de la *inflación*, hasta lograr aproximarla al nivel de la CEE, y del *déficit público*, lo cual permitiría "un mayor crecimiento económico y una mayor satisfacción de las necesidades sociales". En segundo lugar, el sector público no sería empleado como motor de la economía, sino para "fijar las reglas del juego (...) mientras el gasto público se orientará principalmente hacia actuaciones que mejoren las condiciones de vida de los ciudadanos". En tercer lugar, confiaban en que el crecimiento económico crearía más empleo, para lo cual se habría de tener en cuenta las condiciones que incentivarían dicho crecimiento, es decir: reducir la inflación y el déficit público, "continuar y consolidar las medidas de fomento del empleo adoptadas", "coordinar las actuaciones que puedan realizar las distintas Administraciones Públicas", elevar "la cualificación profesional de los trabajadores", reducir el tiempo de trabajo a conseguir mediante "acuerdos de este tipo entre los interlocutores sociales" y el fomento de" cooperativas y las sociedades anónimas laborales". En cuarto lugar, se prometía *el mantenimiento* del poder adquisitivo global[51] mientras que su mejora sólo se daría en determinadas circunstancias[52]. Finalmente, la mejora de las pensiones y su extensión se haría "dentro del marco de los recursos disponibles

---

[51] "[L]os aumentos salariales deberán fijarse en torno a la inflación prevista. Se propiciará que los acuerdos salariales garanticen el mantenimiento global del poder adquisitivo de los salarios" (vid. supra., pág. 24).

[52] "Estos acuerdos [los salariales] podrían asimismo establecer que parte de los incrementos salariales estén parcialmente ligados a los resultados de las empresas. Al mismo tiempo, la negociación colectiva debe enriquecerse incluyendo a la productividad. Los aumentos de productividad harán posible que se recuperen la inversión y el empleo, que se reduzcan los costes y que suban los salarios sin generar por ello nuevas presiones inflacionistas" (vid. supra., pág. 24).

que permit[iese] nuestra realidad económica"[53]. En conclusión parece que, en junio de 1986, la dirección de la UGT daba su visto bueno a la continuación de la política económica de Solchaga[54].

Aun así, quizás la dirección ugetista esperaba que la ejecución de la política económica tuviese una interpretación menos "liberal"[55]. Al respecto conviene recordar que Carlos Solchaga, el ministro de Economía y Hacienda durante todo el período de enfrentamiento, había sido ya ministro de Industria de 1982 a 1985, y de Economía a partir de ese año. Es difícil creer que la dirección ugetista no supiese, esta vez, la forma de pensar que tenía el ministro encargado de llevar a la práctica la parte económica del programa electoral socialista. Pero, con todo, quizás la dirección de la UGT confió en que no le renovarían como ministro de Economía. ¿Rompió entonces con el Gobierno socialista cuando Carlos Solchaga fue confirmado en su cargo en el verano del 86 y continuó con esa política económica que no era su preferida, y que posteriormente tacharía de neoliberal? La respuesta es que no sólo no rompió con el Gobierno del PSOE sino que dio el visto bueno a su política económica tras las elecciones de junio de aquel año.

---

[53] Vid. supra., pág. 67.

[54] El Secretario General de la UGT calificaría este programa electoral de "más socialista que el presentado en 1982" (*El País* 22-5-86).

[55] En la anterior legislatura, para sorpresa de la dirección ugetista, quienes habían negociado con ellos la sección económica del programa electoral de 1982 no fueron los encargados de llevarla a cabo:

"Pero los economistas que intervinieron [en las negociaciones con la UGT sobre el programa electoral del PSOE para las elecciones generales de 1982] tampoco han sido los que han aplicado el programa (...). La verdad es que un programa que elaboraron unos y aplican otros... tiene mal apaño" [Declaraciones de Nicolás Redondo en la entrevista Guindal y Serrano (1986:121,122].

b) La aceptación de la UGT de la política económica y social del Gobierno socialista: la negociación de los Presupuestos Generales del Estado para 1987

Tras formarse el nuevo gobierno de Felipe González, y confirmado Carlos Solchaga como ministro de Economía, se retomó la concertación tal y cómo la UGT prefería, es decir, negociando por un lado con el Gobierno y por otro con la patronal, y rechazando expresamente otro pacto tripartito de carácter global como el AES[56]. El significado que tuvieron estas negociaciones para la concertación social, que la mayoría de sus investigadores pasan por alto, las veremos más adelante. Por ahora nos interesa retener sus implicaciones sobre la valoración que hicieron los agentes sociales de las políticas del PSOE al comenzar la legislatura 1986-1989.

En esas negociaciones el Gobierno socialista realizó unos retoques[57] "para establecer las coordenadas económicas en las que [pudiese] fructificar un pacto social" (declaración de Carlos Solchaga a *El País*, 12-9-86)[58], sin cambiar sus objetivos básicos[59], que

---

[56] Véase el tercer capítulo. Solchaga (1997:143) sostiene que era también lo que él quería:

"[N]o me pareció sorprendente que después de las elecciones de junio de 1986 fracasara la iniciativa de prorrogar el pacto social. Tampoco hice mucho para impulsarlo, convencido de que ya no se daban las condiciones para que las negociaciones culminaran con éxito".

[57] Las modificaciones que el Ejecutivo había aceptado realizar en el proyecto de presupuestos para 1987 habían consistido (*El País* 12 y 18-9-86): 1) incremento del gasto público en más de 140.000 millones de pesetas, casi dos puntos más que las previsiones iniciales, 2) subida de la previsión de inflación para 1987 del 4% al 5%, 3) aumento en 57.700 millones de pesetas la inversión pública, 4) incremento de la participación del Estado en la financiación de la Seguridad Social (37.000 millones más), 5) incremento del dinero destinado a cobertura de desempleo, 6) Participación de las organizaciones sindicales representativas en la distribución de un fondo global de 200.000 millones de pesetas.

[58] "A las cinco de la tarde de hoy, una delegación de la Comisión Ejecutiva Confederal encabezada por nuestro Secretario General celebrará una reunión con el Ministro de Economía y su equipo. Se trata del primer contacto institucional para conocer formalmente el avance del Gobierno a los Presupuestos Generales del

satisficieron a la CEOE y a la UGT, no así a CCOO[60]. El sindicato socialista, en cuanto a cuestiones substantivas de política económica, estimó que había "una tendencia positiva en el sucinto cuadro macroeconómico de previsiones" y, en concreto, destacaron:

"Los aspectos que recogemos son los que indican un reforzamiento del crecimiento en 1.987 y en 1.988 donde se alcanza el 4% basado en la recuperación de la inversión y, muy particularmente, del consumo privado. Esta última variable debe entrañar un crecimiento de puestos de trabajo y de las rentas salariales que la UGT desea y apoya. El cuadro macroeconómico, de responsabilidad exclusiva del Gobierno, es una base de partida

---

Estado para 1.987 y al mismo tiempo trasladar nuestros puntos de vista sobre los mismos. Nuestro propósito estriba en negociar aquellos aspectos de los Presupuestos que directamente inciden en la política de concertación. Especial insistencia haremos en dotar de realismo y consenso al objetivo de inflación para 1.987, que a nuestro juicio no puede ser el 4% adelantado" (Carta-circular del Secretario de Acción Sindical, Apolinar Rodríguez, a las F.F. y U.U., fechada en Madrid a 3 de septiembre de 1.986. Caja FEJP 514. F.L.C.).

[59] Carlos Solchaga declaraba que el Gobierno había reajustado su política económica para favorecer el pacto social, sin cambiar sus objetivos económicos: 1) crecimiento económico del PIB en un 4% para 1987, 2) reducción del déficit público hasta el 4% para 1987 y 3) situar la inflación a finales de 1988 en un 3% (*El País* 12-9-86).

[60] Según explicaba el Secretario General de CCOO, Marcelino Camacho, el rechazo de su confederación sindical se debía a diferencias sobre políticas económicas para superar la crisis. Consideraban que había que dar más énfasis a la demanda interna para reactivar la economía, que se le daba escaso papel a la inversión pública, y que no existía plan alguno de creación de empleo. Tampoco estaban de acuerdo con la subida de las pensiones y sueldos de los funcionarios prevista en los presupuestos (*El País* 12-9-86). En la *Gaceta Sindical,* núm. 44, agosto de 1986, pág. 22, afirmaban:

"Ya desde la primera reunión, el Gobierno mostró claramente cuál era su postura: se trataba de informar, pero los Presupuestos eran innegociables. Los objetivos de los Presupuestos, por lo que se deduce de la primera reunión, eran la reducción de la inflación y la reducción del déficit público. Lo que significa continuidad en la política de ajuste duro iniciada por el Gobierno socialista en 1982".

aceptable una vez modificada por el gobierno la previsión inicial de inflación"[61].

Además de la previsión de inflación, la dirección ugetista dio explícitamente su visto bueno a las inversiones públicas previstas[62] y a la política fiscal[63].

La política social del Gobierno socialista también recibió el visto bueno ugetista[64]. Destacaban así que el presupuesto de la Seguridad Social para 1987 hubiera experimentado un incremento (del 10,47%) respecto al presupuesto inicial de 1986, lo cual, señalaban, era un incremento muy superior a la inflación prevista (del 5%) para 1987[65].

---

[61] Véase "Encuentro Confederal de Acción Sindical: Presupuestos en 1.987", apartado I, pág. 1, adjunto a la carta-circular del Secretario de Acción Sindical, Apolinar Rodríguez, a los Secretarios de Acción Sindical de las F.F. y U.U., fechada en Madrid a 26 de septiembre de 1.986. Caja: FEJP/514. F.L.C.

[62] "Resumiendo: en el capítulo de inversiones públicas, globalmente considerado, la UGT aprecia muy favorablemente la receptividad del Gobierno a sus requerimientos diversos para aumentar muy sustancialmente la inversión pública del Estado sobre el año anterior, y sobre la primera propuesta presentada, lo que permite un incremento de la participación de las inversiones públicas en el P.I.B." (vid. supra., pág. 8).

[63] "Es cierto que España aún tiene un diferencial importante con los países de su entorno en cuanto a presión fiscal, por lo que éste deberá ir aumentando, tanto más en tanto en cuanto persistan los problemas actuales de déficit público. Sin embargo tan importante es alcanzar recaudaciones 'a nivel europeo', como cuándo y cómo. Puede parecer razonable que en este momento de esbozo de recuperación no se quiera frenar o disminuir la senda emprendida, y, sobre todo, la mayor recaudación ha de ser fruto de una reestructuración largamente madurada que cumpla, además, objetivos redistributivos. En el momento presente, un aumento suave puede ser lo indicado, si se acompaña de un estudio sobre la futura optimización de la estructura tributaria en todos sus aspectos" (vid. supra., apartado II, pág. 5).

[64] El año anterior la dirección de la UGT había rechazado los presupuestos de la Seguridad Social para 1986 "por considerar que las cantidades asignadas en dichos Presupuestos eran gravemente restrictivas e insuficientes" (G.34C.UGT.1986:138).

[65] Véase "Encuentro Confederal de Acción Sindical: Presupuestos De la Seguridad Social e INEM" [pág. 3], adjunto a la carta-circular del Secretario de Acción Sindical, Apolinar Rodríguez, a los Secretarios de Acción Sindical de las F.F. y U.U., fechada en Madrid a 26 de septiembre de 1.986, op. cit.

En cuanto a prestaciones económicas, señalaban un incremento general del 9,6% con respecto al presupuesto de 1986 y de un 10,10% del gasto general en pensiones con respecto al presupuesto de 1986[66]. En prestaciones sociales señalaban un incremento del 11,10% del gasto de prestaciones sanitarias con respecto al presupuesto de 1986[67]. Según la UGT este incremento permitiría en 1987 la potenciación de la atención primaria, el incremento de la atención hospitalaria, y la puesta en marcha de programas especiales. Igualmente, en cuanto a otros servicios sociales, destacaban:

> "los 73.573 millones de pts. presupuestados por servicios sociales, de los cuales 67.649 millones de pts correspondían al INSERSO con un incremento del 25% y 24% respectivamente sobre los presupuestos de 1986. Este importante aumento tiene por finalidad potenciar la asistencia a la tercera edad y a los minusválidos, así como la apertura a nuevas modalidades de protección, como son la atención a toxicómanos y a refugiados. Destaca en esta área el considerable incremento, el 35%, de las inversiones sobre el año anterior"[68].

También aprobaban que dicho incremento del gasto de la Seguridad Social se efectuase incrementando la aportación del Estado mientras se mantenía los mismos tipos de cotización de 1986 con el fin de no incrementar la presión contributiva de las empresas. Por último, dieron su aprobación al incremento de gastos del INEM[69]. En pocas palabras[70]:

---

[66] vid. supra., pág. 3.

[67] "Este presupuesto quiebra, por primera vez desde 1983, la tendencia a la progresiva disminución del peso porcentual del INSALUD sobre el PIB, incrementando el gasto por persona protegida" (vid. supra., [pág. 3]).

[68] Vid. supra. [pág. 4].

[69] Vid. supra., pp. 1, 2.

[70] Véase "Encuentro Confederal de Acción Sindical: Presupuestos en 1.987", apartado I, pág. 13, adjunto a la carta-circular del Secretario de Acción Sindical, Apolinar Rodríguez, a los Secretarios de Acción Sindical de las F.F. y U.U., fechada en Madrid a 26 de septiembre de 1.986, op. cit.

"La UGT ha apreciado un cambio de enfoque del Gobierno muy importante en tres aspectos claves: la inflación prevista, el impulso a inversiones públicas y fondos y la remuneración de funcionarios y pensionistas. Las reivindicaciones de UGT en estos campos han sido atendidas plenamente; ello, y una receptividad apreciable en los otros temas expuestos, pendiente de concreción en el caso de las fiscalidad, hacen que la UGT considere los Presupuestos del Estado para 1987 como un marco adecuado que deberá facilitar la concertación posterior con los empresarios y permitir a la clase trabajadora aprovechar mejor un cierto nivel de recuperación económica que entraña algunos matices nuevos en la política económica"[71].

La UGT, tras las elecciones legislativas de 1986 y confirmado Carlos Solchaga como ministro de Economía y Hacienda, volvía a apoyar la política económica y social del Gobierno socialista.

c) De la crítica puntual a la descalificación global de la política económica (1987-1989)

Llevada a cabo la primera fase de la concertación social al apoyar la UGT los Presupuestos Generales para 1987, la segunda fase se pospuso por las elecciones sindicales de otoño de 1986 y finalmente fracasaría a principios de 1987 al cambiar este sindicato su política salarial[72] y no aceptar la CEOE la propuesta ugetista de situar así la

---

[71] En otra información de *El País* (18-9-86) se afirmaba que Redondo consideraba positivos los acuerdos sobre los PGE para 1986, en materia de salarios y pensiones (recogidos en el anteproyecto de los PGE de 1987). Sostenía además que existía un compromiso con el Gobierno para que éste promulgase antes de final de año un decreto por el que la cobertura del desempleo sería de hasta un 48%. Redondo valoraba positivamente el fuerte incremento de la inversión pública prevista para 1987 respecto de 1986. También afirmaba que los acuerdos alcanzados con el Gobierno en materia presupuestaria para 1987 permitiría a las organizaciones sindicales representativas participar en la distribución de un fondo global de 200.000 millones de pesetas.

[72] En noviembre de 1987 explicaban así el cambio de política salarial:

parte inferior de la banda salarial en la tasa de inflación prevista para finales de aquel año[73]. Este enfrentamiento con la patronal supuso el comienzo de un proceso de discrepancias y tensiones entre la UGT y el PSOE que terminaría desembocando en el fin de su modelo tradicional de relaciones. Pero ¿por qué unas discrepancias sobre incrementos salariales en el sector privado tenían que transformarse en una disputa con el Gobierno socialista?

En diciembre del año anterior la dirección de la UGT mostraba un creciente malestar con la CEOE, en primer lugar, por acusarles de impedir la recuperación económica. Rechazaban igualmente que la CEOE denunciase que el Gobierno hacía "dejación de sus funciones cuando remit[ía] a las partes sociales las posibles modificaciones en las relaciones laborales" pues "[e]n todo caso, tendría[n los ugetistas] toda la legitimidad moral y política para solicitar la actuación del Gobierno, en sentido contrario al reclamado por CEOE, a favor de los trabajadores y otros colectivos desprotegidos y ello sería coherente con la orientación y contenido social que se deriva del programa

---

"En años anteriores, hasta 1986 concretamente, los incrementos nominales de salarios que se negociaron se situaban en una banda que contenía en ella o se centraba en la inflación prevista, salvo una sola excepción. Sin embargo, en el nuevo contexto económico español, desde 1987, las subidas nominales de salarios pueden, desde el punto de vista económico, y deben, en su vertiente social, situarse por encima de la inflación prevista" ("Jornadas Sobre Negociación Colectiva" adjunto a la carta-circular del Secretario de Acción Sindical, Apolinar Rodríguez, a los Secretarios de Acción Sindical de las F.F. y U.U., fechada en Madrid a 6 de noviembre de 1.987. Caja FEJP/515. F.L.C.).

[73] "Sin hacer del tema cuestión de protocolo, pedimos nosotros la reunión, fijada el 5 de febrero, para cotejar las bandas salariales posibles de una y otra parte. Frente a nuestras propuestas 5/7%, la dirección de la CEOE sólo aceptaba bandas en cuya media aritmética se situase el objetivo de inflación. Al margen de otros contenidos, tal diferencia impedía toda posibilidad de acuerdo, lo que se hizo público a las pocas horas y de modo formal tanto por CEOE como por nuestra parte" (Memoria de Gestión de la Secretaria de Acción Sindical con registro de entrada por la FEJP del 30 de marzo de 1987. Caja: FEJP/515. F.L.C.).

electoral masivamente respaldado"[74]. Este malestar se extendió a sus relaciones con el Gobierno socialista. Así, a principios de 1987 el Secretario General de la UGT expuso las quejas de su sindicato al Presidente del Gobierno en una reunión que mantuvieron[75]. El máximo dirigente ugetista se lamentaba de la falta de reconocimiento de la labor concertadora de la UGT, de "ciertas declaraciones y actitudes" por parte del Gobierno socialista[76] y de la ausencia de "discursos de defensa y lanzamiento del estado de bienestar, impregnando a la sociedad con los valores de la izquierda". En general, por aquel entonces, la dirección de la UGT hacía responsable al Ministro de Economía de haber generado un "clima enrarecido" (en palabras de la UGT) entre este sindicato y el Gobierno socialista[77]. Los dirigentes ugetistas se quejaban, en primer lugar, de que el Gobierno fijase en sus negociaciones "posiciones previas duras, (carentes de realismo) que las decisiones finales de Gobierno ya no han podido eliminar ni nuestra Organización, en los casos de acuerdo, rentabilizar adecuadamente ante la desquiciada lógica de actuaciones en dos tiempos". En segundo lugar, y entrando en cuestiones más concretas, lamentaban que en el verano de 1986 el Ministro de Economía, Carlos Solchaga, hubiera abierto una

---

[74] Véase "UGT, ante la Concertación Social para 1987" adjunto a la carta del Secretario General y del de Acción Sindical a las F.F. y U.U., fechada en Madrid a 17 de diciembre de 1986, [pág 2]. Caja: FEJP/514. F.L.C.

[75] Aquel encuentro se celebró a resultas de la petición de Nicolás Redondo realizada al Presidente del Gobierno a mediados de diciembre de 1986 con objeto de exponerle los criterios de la UGT sobre un posible acuerdo interconfederal con los empresarios para 1987 así como para conocer los puntos de vista de Felipe González sobre esta cuestión y tener además un cambio de opiniones sobre planteamientos económicos y sociales para el ejercicio que comenzaba (Carta-circular del Secretario General y del de Acción Sindical de UGT a las F.F. y U.U., fechada en Madrid a 7 de enero de 1.987. Caja: FEJP/514. F.L.C.).

[76] En concreto, "[l]as famosas 27 medidas de flexibilidad, la instrumentalización de la entrevista del Presidente de la CEOE con el Presidente del Gobierno; el mensaje de privatizaciones de empresas públicas, incluso la sensación de que UGT esta[ba] codecidiendo por muy falsa e interesada que esta imagen sea" (vid. supra.).

[77] Memoria de Gestión de la Secretaria de Acción Sindical con registro de entrada por la FEJP del 30 de marzo de 1987, pág. 26. op. cit.

polémica sobre la tasa de desempleo en España al afirmar que era seis puntos inferior a la cifrada, justamente cuando la UGT estaba reclamando el decreto de ampliación de la cobertura. Esto les hacía pensar que Solchaga ponía en cuestión "las políticas de protección social que subsidian el desempleo". Tercero, criticaban que, en pleno período de elecciones sindicales, Solchaga hubiera apoyado una ofensiva de la CEOE sobre flexibilidad laboral, aclarando que finalmente no se llevó a cabo por la oposición del Ministro de Trabajo, el Vicepresidente del Gobierno y, al final, el propio Felipe González. Cuarto, censuraban algunas medidas del Gobierno como el decreto de revisión nominal del Salario Mínimo Interprofesional -por insuficiente y unilateral- y la Prórroga de los Fondos de Promoción de Empleo -pues consideraban que imponía la rescisión de contrato de los trabajadores afectados por la reconversión industrial, la movilidad geográfica y funcional, y reducía las garantías retributivas anteriores. Todo ello, en fin, había creado un "clima enrarecido" con la presencia de "obstáculos a veces innecesarios que en muchos casos incluso han desdibujado definitivamente los favorables compromisos alcanzados".

En este contexto, la dirección de la UGT consideró inaceptable que Solchaga se opusiese a sus demandas de incremento salarial y que incluso llegara a presionar a los empresarios para que no cediesen[78]. Para los líderes ugetistas, Carlos Solchaga había conseguido transformar así en un enfrentamiento con el Gobierno socialista lo que en un principio había sido exclusivamente una

[78] "El servicio cubierto a CEOE [por parte del Ministro de Economía] no sólo ha consistido en deslegitimar nuestras propuestas en la negociación, que ya es mucho, sino establecer también una dura e injusta dicotomía de estar a favor o en contra del Gobierno en función de aceptar o no la banda salarial de CEOE. El Ministro de Economía ha pretendido salvar a los empresarios de todo desgaste ante el desacuerdo, instruyendo las posiciones en la negociación y supliendo la función del sujeto negociador en la explicación posterior (...). Para redondear la situación ahora se juega la carta de las cotizaciones sociales de los empresarios a la Seguridad Social. Si los empresarios consiguen imponer su propia política salarial en la negociación colectiva tendrán como compensación (!) una reducción de las cuotas negociadas unilateralmente con CEOE" (vid. supra., pág. 26).

disputa de la UGT con la patronal[79]. Por su parte, el Ministro de Economía se sentía engañado por la dirección ugetista pues, según afirmó Carlos Solchaga, había alcanzado con Nicolás Redondo, por la UGT, y José Mª Cuevas, por la CEOE, "un acuerdo informal como guía para la negociación en los salarios en 1987"[80].

El enfrentamiento con el Gobierno continuó además en tanto que "patrono" de los trabajadores de las empresas públicas, antes del verano de 1987, y, ya en otoño, de los colectivos cuyas rentas dependían directamente de los PGE, como los funcionarios[81]. El hecho de que el Gobierno del PSOE mostrase incluso una postura más firme que los empresarios privados en la moderación salarial no hizo sino reforzar el rechazo ugetista hacia éste, especialmente de su área económica[82]. Tras un período de calma en 1988 por estas

---

[79] "[L]a beligerancia explícita del Ministro de Economía a favor de las posiciones de CEOE ha transformado el rechazo de UGT a las propuestas empresariales en una confrontación dirigida a los objetivos del Gobierno y a su cuadro macroeconómico (...). En esta ocasión no echamos en falta la ayuda de nuestra Gobierno para coadyuvar a la consecución de nuestros objetivos, sino que añoramos la mera función arbitral del Gobierno, respetuosa con la autonomía de las partes. El debate televisado del pasado 19 de febrero fijó un bloque insólito, Solchaga-Cuevas, cuyo alcance es de la mayor trascendencia ya que el propio Ministro se empeñó en dejar claro que su posición no era personal" (vid. supra., pág. 26).

[80] "[A]ntes de terminar 1986 UGT dejó claro que favorecería una plataforma de subida de salarios dentro de una banda entre el 5 y el 7 por ciento, por encima de la inflación prevista. Cuando mostré mi desacuerdo y el del Gobierno, la respuesta de UGT fue que cambiaría su oferta de negociación situándola ahora a partir del 7 por ciento" (Solchaga 1997:143).

[81] En septiembre de 1987 la UGT presionó al Gobierno para que el incremento del sueldo de los funcionarios fuese mayor al previsto. El sindicato socialista sostenía que los empleados públicos habían sufrido pérdidas con respecto al resto de trabajadores (un 20% en los últimos diez años) al carecer del derecho de negociación colectiva, de la cláusula de revisión salarial, y tener que someterse cada año a la Ley de Presupuestos fijada por el Gobierno (Documento titulado "Reunión con las Federaciones", Madrid, 30 de septiembre de 1987. Caja: FEJP/515. F.L.C.).

[82] Señalaban así:

"En la negociación colectiva de este año [1987] ha sido necesario acentuar mecanismos de presión ante una inicial cerrazón empresarial y debemos señalar el

cuestiones[83], en 1989 se volvieron a reproducir los enfrentamientos Gobierno-sindicatos por los incrementos salariales[84]. Pero para

---

hecho de que la intransigencia ha sido mayor en la empresa pública" (Carta-circular del Secretario de Acción Sindical, Apolinar Rodríguez, a las F.F. y U.U., fechada en Madrid a 31 de julio de 1.987. Caja: FEJP/515. F.L.C.).

En el mismo sentido señalaban un año más tarde:

"Por una parte, la negociación puntual en la empresa privada que se desarrolla con gran fluidez, alcanzando sin obstáculos acuerdos en torno al 7%. Por otro lado, hay una clara obstrucción al proceso negociador en los convenios de empresa pública, debido a la tenaz resistencia de los gestores de éstas a pactar por encima del 5%" ("Balance Negociación Colectiva: 1987" adjunto a la carta-circular del Secretario de Acción Sindical, Apolinar Rodríguez, a las F.F. y U.U., fechada en Madrid a 14 de marzo de 1988. Caja: FEJP/516. F.L.C.).

O lo mismo en 1989:

"El objetivo de inflación del 3% fijado en los presupuestos, ha tratado de imponerse como referencia, a pesar de su absoluta inconsistencia incluso de su abandono por el gobierno a otros efectos. Los topes salariales derivados de ese 3% en el sector público, tan injustos como caprichosos, han enrarecido toda la negociación de la empresa pública. Por su parte, la dirección de CEOE también fijó un tope salarial del 5% que luego abandonó, por resolución de su asamblea, por un criterio más flexible, aunque igualmente inoperante y ajeno a la realidad, de subidas en torno al 5%" Negociación Colectiva. Informe Semestral" Madrid, 31 de julio de 1.989 ("Negociación Colectiva 1.989. Informe Semestral" adjunto a carta-circular del Secretario de Acción Sindical, Apolinar Rodríguez, a las F.F. y U.U., fechada en Madrid a 31 de julio de 1.989. Caja: FEJP/518. F.L.C.).

[83] Los ugetistas comentaban satisfechos así:

"Podemos observar como este año [por 1988] partimos con la ventaja de que nuestro razonamiento y análisis del papel coyuntural de la política salarial ha sido aceptado. En efecto, nuestra estrategia de 1987 de pedir la inflación final más dos puntos, que en su momento fue tildada de ruinosa y catastrófica, es exactamente la que adopta este año la CEOE. (En ello habrá influido, sin duda, que en 1988 no ha habido injerencia explícita del Ministerio de Economía en la negociación salarial)" ("Circular de Negociación Colectiva para 1.988" fechada en Madrid a 1 de febrero de 1988. Caja: FEJP/516. F.L.C.).

[84] Así exponían:

"Los problemas surgieron pronto, así, el Gobierno, en una actitud aparentemente ilógica, mantiene para 1989, en contra de la opinión no ya sólo de los sindicatos sino incluso de la mayoría de los expertos, una previsión de aumento de

entonces las disensiones con el Gobierno socialista ya no se limitaba a cuestiones meramente salariales.

El enfrentamiento producido en los primeros meses de 1987 no suponía, sin embargo, que la UGT estuviese rechazando ya la estrategia económica del Gobierno socialista[85]. Todo lo contrario, durante la primera mitad de aquel año prestaron especial cuidado en aclarar que los incrementos salariales reclamados no ponían en cuestión el cuadro macroeconómico del Gobierno sino que pretendían conseguir los objetivos macroeconómicos del Gobierno por otras vías[86], aunque en el verano ya no les parecía que su estricto

---

precios de un 3%, en un intento por disciplinar unos salarios que habían estado teniendo un comportamiento muy moderado. La realidad es que esta previsión ni tan siquiera el propio Gobierno se la creía, *pero sirvió de apoyo a la cúpula empresarial y a los dirigentes de las empresas públicas,* al plantear una postura obstinada de negociar en base a la previsión del 3%" ("Negociación Colectiva 1.989. Informe Semestral", op. cit., mía la cursiva).

[85] Así, en una entrevista a Nicolás Redondo, afirmaba (*El País* 22-3-87):

"No se puede decir que las diferencias [con el Gobierno] sean nuevas; quizá sean más profundas, pero no nuevas. Fíjense que, en realidad, la mayor diferencia se manifiesta ahora en dos puntos de incremento de los salarios. *No creo que sea para tanto; no estamos descalificando de modo global la política económica del Gobierno. Si ha habido un cambio tenue en la política de UGT es porque también ha habido un giro a favor en la economía; UGT sólo dice: súbanse los salarios dos puntos por encima de la inflación esperada. ¿Es esto radicalidad? La acusación de radicalidad es para consumo interno del PSOE*" (mía la cursiva).

Igualmente al mes siguiente Nicolás Redondo sostenía que la UGT no quería practicar una política de acorralamiento al Gobierno y que las divergencias con éste, si bien numerosas, no suponían una descalificación global (*El País* 12-4-87).

[86] Afirmaban así:

"Nos preocupamos de fijar una política salarial que fuese, antes de nada, socialmente entendible y económicamente posible (...). Con las mismas herramientas de predeterminación que hayan podido utilizar las otras partes, comprobamos su encaje macroeconómico. Hicimos estudios desde el lado de la formación de precios y sin modificaciones sustanciales de otras políticas (que también hubiese sido legítimo reclamar) la inflación esperada apenas se desviaba significativamente de la prevista por el Gobierno. También hicimos evaluaciones desde la perspectiva de la demanda interna y las necesidades de renta disponible, con resultados análogos a otros estudios

cumplimiento fuese una prioridad[87]. El sindicato socialista lo que ponía en cuestión no eran ni los objetivos económicos del Gobierno

---

encargados desde el Gobierno o el Partido. Nuestra propuesta de Acuerdo Interconfederal era totalmente coherente con el compromiso de los Presupuestos, eran su traducción rigurosa a la negociación colectiva (...). [C]abe concluir que planteamos la política de rentas más progresista, coherente con el cuadro macroeconómico [del Gobierno] fijado como objetivo" (Memoria de Gestión de la Secretaría de Acción Sindical con registro de entrada por la FEJP del 30 de marzo de 1987, op. cit.).

Meses después la UGT se volvía a defender de la acusación de que su propuesta de incrementos salariales hubiera puesto en cuestión el cuadro macroeconómico del gobierno:

"Se argumentaba que nuestra petición chocaba con el cuadro macroeconómico del gobierno. Si los salarios crecían más allá de la inflación prevista, los precios subirían por encima del 5% y se retraería el crecimiento económico. Por el contrario, en UGT pensábamos que la subida moderada de los salarios reales, además de atender a insoslayables demandas sociales, aseguraría un nivel suficiente de la demanda interna y del crecimiento en un momento en que la balanza comercial no era favorable. La realidad de los últimos meses nos ha dado la razón a los ugetistas que defendíamos salarios en torno al 7%, sin menoscabo de otros logros que compartíamos: reducción de la inflación (5%) y mayor crecimiento de la economía (al menos 3,5%). [...] El primer semestre de este año ha demostrado como las cifras macroeconómicas son cambiantes, e incluso, como las que reúnen el acuerdo de todos (la inflación) son alcanzables por distintas vías" (Carta-circular del Secretario de Acción Sindical, Apolinar Rodríguez, a las F.F y U.U., fechada en Madrid a 31 de julio de 1.987, op. cit.).

[87] "Aún entenderíamos menos que la coherencia global, el gran marco, estuviera en un cuadro macroeconómico. El encaje macroeconómico, sus cifras, son aspiraciones sometidas a coyunturas y aleatoriedades que deben estar al servicio de otros objetivos más importantes. Los cuadros macroeconómicos son puntos de referencia, pero en ningún caso pueden constituirse en el marco esencial que configure un modelo social. (...). No vamos a caer (...) en la fatuidad de pretender que nuestro sistema de casar las cifras macroeconómicas era el técnicamente único y verdadero. Pero, al menos, este primer semestre 87 nos permite decir sin ambages que nunca un conjunto de cifras macroeconómicas pueden constituir un marco único y verdadero que condicione la dinámica social. (...) Esta importante convergencia de voluntades, para que finalmente todos los interlocutores sociales compartan un modelo de concertación ambicioso y viable como el que hemos propuesto, no puede empañarse

ni los resultados de sus políticas, sino un instrumento muy preciso: la necesidad de la congelación del salario real en momentos de expansión económica.

En otoño de aquel año la dirección de la UGT empezó a rechazar ciertos objetivos macroeconómicos del Gobierno socialista, como era el de inflación para 1988, por parecerles irrealizable[88] al mismo tiempo que empezaban a "descongelar" antiguas propuestas

---

con intento de constreñir la concertación a un cuadro macroeconómico orientativo que fundamentalmente debe servir al gobierno en su necesidad de programación económica" (vid. supra., pág. 8).

[88] Véanse *El País* (5 y 10-9-87) y las "Jornadas Sobre Negociación Colectiva" adjunto a la carta-circular del Secretario de Acción Sindical del 6 de noviembre de 1987, op. cit.:

"El objetivo de inflación fijado por el Gobierno a final de año, 3 por ciento, carece de la credibilidad social de años anteriores y lo que se plantea desde ámbitos muy diversos es su carácter incompatible con el resto de las proyecciones macroeconómicas del propio Ejecutivo. Ni el entorno internacional, ni las previsiones de otros gobiernos europeos, ni el contexto y el momento de la propia economía española avalan esta previsión. No es posible creer que se alcance cuando se parte de datos de crecimiento interno elevado y de un contexto internacional con precios menos moderados".

Igualmente, la "Circular de Negociación Colectiva para 1.988", pp. 6,7, op. cit.:

"[E]n este año y dentro de nuestro enfoque global de la coyuntura, hemos de decir que, a diferencia del año pasado, estimamos excesivamente difícil alcanzar la previsión de inflación del 3%. Este vaticinio, que no tiene crédito social, pretende llevar la inflación española por debajo de la medida comunitaria y por debajo de la americana en un solo año. Este objetivo tiene como dificultades que se plantean en un momento de cierto rebrote inflacionista en Occidente y, sobre todo, habiéndose llegado a tasas ya muy bajas de inflación, posteriores reducciones dependen en gran medida de transformaciones estructurales (distribución, transporte, administración, etc...). Por supuesto, la implantación de medidas deflacionistas recesivas (por ejemplo la monetaria) no sería pensable en un país con tres millones de parados y que está sólo a 0,7 puntos de la media de inflación comunitaria. Por todo ello pensamos que el objetivo de I.P.C. para 1988 no se ajusta a las necesidades ni posibilidades sociales de nuestro país. Aun así, hacemos pivotar nuestra estrategia alrededor de un 4% de inflación promedio, que supone aceptar el 3% final, si bien se hará más indispensable que nunca la cláusula de revisión salarial para evitar mermas en el poder adquisitivo".

suyas, como por ejemplo la legislación de fondos de inversión en cuyo control participasen los sindicatos[89]. Pero, en general, el Secretario General de la UGT estuvo jugando durante todo 1987 a criticar la política económica del gobierno para posteriormente declarar que no lo hacía globalmente[90].

En la intervención que efectuó el Secretario General de la UGT en el 31º Congreso de los socialistas (en enero de 1988), Nicolás

---

[89] Vid. supra. Igualmente, según *el País* (15-3-88), el Secretario General de la UGT había enviado una carta al Presidente del Gobierno, fechada el 17 de diciembre de 1987, en la que le pedía al Presidente del Gobierno una iniciativa legislativa para poner en marcha fondos de inversión en los que participasen los sindicatos.

[90] -UGT considera que es el Gobierno el que está equivocado en su política y el que debe rectificar (*El País* 19-3-87).

-Entrevista a Redondo (*El País* 22-3-87):

"Pretender dar un marco ideológico de tipo progresista a una política económica de rigor, no corresponde a la verdad. [Pero] no estamos descalificando de modo global la política económica del Gobierno".

-Duras acusaciones a la política económica del Gobierno en el congreso de UGT de la construcción (*El País* 29-3-87).

-"Tenemos discrepancias que no son sólo salariales sino también sobre privatización de las empresas públicas, el recorte de las prestaciones sociales e incluso la política fiscal, pero que sumadas no suponen una descalificación global. Así que no deben ser tantas. Esta organización no quiere una política de acorralamiento al Gobierno. Punto" (Declaración de Nicolás Redondo en *El País* 12-4-87).

-Nicolás Redondo reitera que UGT mantiene diferencias "muy estimables" respecto a la política económica del Gobierno (*El País* 1-5-87).

-"Es precisa una nueva orientación en las políticas a aplicar, de manera que sean más favorables para los trabajadores" (Comunicado público de UGT recogido en *El País* 22-8-87).

-Redondo reclama un "giro" en la política económica del Gobierno para que se situase el problema del paro como prioritario (*El País* 6-11-87).

-Redondo puntualizaba que el enfrentamiento entre UGT y el Gobierno no obedecía a un rechazo total del sindicato a la política económica del Gabinete sino a un desacuerdo puntual en aspectos concretos de dicha gestión (*El País* 19-1-88).

-Redondo "no se trata de cambiar el ministro de Economía sino de reorientar toda la política económica (*El País* 27-2-88).

-La política más cercana a la socialdemocracia la está haciendo en España la UGT (Afirmación de Nicolás Redondo recogida por *El País* 26-4-88).

Redondo no criticaba la estrategia económica llevada a cabo sino lo que denunciaba era la ausencia de "un mejoramiento de indicadores sociales básicos". Lamentaba así el incremento del paro, la precariedad contractual y la desigualdad en la distribución de la renta entre individuos y regiones, así como que existiese menor protección pública en algunas áreas fundamentales (señalaba en concreto en desempleo e invalidez) e incluso que existiese "un palpable divorcio entre el Gobierno y las organizaciones obreras"[91]. Es decir, se criticaban los resultados sociales de las políticas, no tanto las medidas de carácter económico emprendidas[92]:

> "[L]a exigencia de un reparto equilibrado, la traducción social de la mejora económica, en otras palabras, el progreso social que el crecimiento permite, es lo que identifica la razón de ser y el empeño socialista como proyecto diferenciado de otros con los que legítimamente pugna"[93].

Por aquel entonces Nicolás Redondo sólo censuraba, en cuanto a medidas económicas, los topes salariales y un supuesto cuestionamiento del sector público. Y como medidas para "traducir socialmente esa mejora [económica]", además del "uso de los instrumentos de redistribución propios del estado", proponía "nuevas fórmulas de mayor equilibrio social en el progreso mismo de la producción y la distribución de la renta, garantizando el destino de los excedentes hacia el empleo y la modernización" (esto es, los fondos de inversión) y "[p]oner en práctica auténticas políticas de reducción y reparto del tiempo de trabajo"[94].

---

[91] Discurso de Nicolás Redondo al Congreso del PSOE de 1988, pp. 10, 13, op. cit.

[92] "Estamos, por lo tanto, en una situación de claroscuros en la que *es evidente un crecimiento económico que no se corresponde con una progresión social* lo que lleva a UGT a rechazar tanto las posturas catastrofistas de la derecha, de negar todo lo que ha hecho el Gobierno, como la versión triunfalista que éste hace de su propia actuación" (vid. supra., pág. 10, mía la cursiva).

[93] Vid. supra., pág. 12.

[94] Vid. supra., pp. 13-15.

Es en la primavera de 1988 cuando la UGT comienza a criticar un "modelo de crecimiento" desarrollado por el Gobierno que no acababa de solucionar el alto nivel de desempleo existente[95]. Para la dirección ugetista la política económica del gobierno se había limitado a "liberar fondos, ya sea al sistema financiero, ya sea al sistema productivo vía márgenes empresariales, para despreocuparse totalmente de su utilización y del marco en el que iban a ser utilizados". Así, "gran parte de esos fondos [se habían] ido a la especulación financiera e improductiva" al mismo tiempo que se ignoraba si "las inversiones producidas [eran] las más adecuadas para las necesidades de puestos de trabajo en España, o si, sencillamente, [se estaba] construyendo el tejido productivo adecuado para una España totalmente en la C.E.E. dentro de cinco años". Por el contrario, recuperando sus preferencias en materia económica, proponían una estrategia basada en la planificación económica, el protagonismo del sector público empresarial, una mayor inversión pública, la reducción de los tipos de interés y de cambio, aumentar los impuestos, y crear por ley los fondos de inversión[96]. El

---

[95] Véanse "Reflexiones de la UGT para un compromiso de progreso por el empleo (2)" en *Información Sindical*, núm. 60, mayo de 1988:

"Hemos indicado ya cómo la creación continua en el tiempo de empleos estables y de calidad depende del modelo de crecimiento. Entendemos que la ausencia de tal modelo es la más grave carencia de la actual economía española. En efecto, la filosofía base que ha imperado ha sido la de liberar fondos, ya sea al sistema financiero, ya sea al sistema productivo vía márgenes empresariales, para despreocuparse totalmente de su utilización y del marco en el que iban a ser utilizados. El resultado, conocido por todos, ha sido que gran parte de esos fondos ha ido a la especulación financiera e improductiva (...) Creemos, antes al contrario, que es urgente que el gobierno se plantee los siguientes temas [papel de España en el mercado europeo, equipamiento tecnológico idóneo, desarrollo regional]. Estos tres estudios básicos, sin duda complementables (...) deben plasmar sus resultados en un marco orientador para la política industrial y de servicios y para una política de desarrollo regional".

[96] Aun así, en las peticiones que realizó el Secretario General de la UGT al Presidente del Gobierno durante una reunión que celebraron en junio de 1.988, como cuestiones de índole económica, sólo aparecía su demanda de legislar la creación de fondos de inversión y una mayor inversión pública (véase documento

recalentamiento de la economía al año siguiente no hizo sino confirmar a la UGT en sus críticas a la política económica del Gobierno y en su exigencia de cambiarla.

2.2.1.2. ¿Qué concertación? ¿Qué concertar? ¿Cómo concertar?: el fin de la coordinación económica.

En el capítulo anterior vimos que en la concertación social practicada en la tercera legislatura socialista se había producido una serie de cambios tanto en la *forma* como en los *contenidos*. En concreto, ni volvieron a aceptarse más acuerdos globales de contrapartidas, formales o informales, ni en los pactos alcanzados se incluyó de nuevo la moderación salarial que quería el Gobierno socialista. En pocas palabras, se había abandonado la coordinación de las políticas económicas del Gobierno socialista con la acción sindical en la negociación colectiva. ¿Cuándo se produjo el cambio? ¿Quién dejó de aceptar la antigua concertación?

a) El último intento de coordinación económica en España

A finales de 1986 expiraba el AES, y sus firmantes tenían que plantearse la continuación de los acuerdos globales de contrapartidas en los que, entre otras cosas, se coordinaría la política salarial de los sindicatos con las políticas del Gobierno. Vimos en los capítulos anteriores que en su 34º congreso celebrado en abril de 1986 la UGT había seguido aceptando la "vieja" concertación social[97]. Por su parte,

---

titulado "Puntos a Tratar en la Entrevista U.G.T.- Presidente del Gobierno", fechado el 31 de mayo de 1988. Caja: FEJP/516. F.L.C.).

[97] La UGT pedía un aumento moderado del poder adquisitivo global "o, en su caso, el mantenimiento del poder adquisitivo global de los trabajadores y de los pasivos y una mejora de las prestaciones y los servicios sociales asumidos por el Estado como mecanismo de redistribución de la riqueza y de sostenimiento de actividad económica" (R.34C.UGT.1986:78). Es decir seguían abiertos a esos

el Ministro de Economía, Carlos Solchaga, también era favorable a conseguir la moderación de las subidas salariales mediante algún tipo de intercambio con la UGT en vez de mediante una política monetaria austera. El Ministerio de Economía calculó que el repunte de la inflación producido en 1986 por la entrada en vigor del IVA desaparecería al año siguiente[98] y, si los sueldos se pactaban alrededor del 5%, sería posible alcanzar a finales de 1987 una tasa de inflación con ese mismo incremento. Se propuso así "un acuerdo discreto con la UGT sobre guías de crecimientos salariales para 1987" (Solchaga 1997:143)[99]. El Gobierno socialista y la dirección de la UGT alcanzaron así un acuerdo sobre los Presupuestos Generales del Estado para 1987 ¿Qué representa el acuerdo sobre los Presupuestos Generales del Estado para 1987? ¿Se abandonaba el antiguo modelo de concertación social practicado hasta entonces?[100].

Parece que éste no era el caso, y que tanto el Gobierno socialista como la UGT siguieron apostando, mediante ese "acuerdo discreto", por la clase de concertación social de la anterior legislatura. En concreto, para la dirección ugetista:

---

acuerdos globales donde los trabajadores renunciaban a subidas de su salario real nominal a cambio de mayor empleo y servicios sociales.

[98] Según cálculos que hacía el ministerio de Economía y Hacienda en el momento en que se produjera la sustitución de la vieja imposición por el IVA se produciría, de una sola vez, un efecto inflacionista de entre 2 y 3% (entrevista del autor con Carlos Solchaga del día 19-7-96).

[99] Según el antiguo ministro de Economía de hecho se llegó a un acuerdo informal como guía para la negociación en los salarios en 1987 por lo cual éstos crecerían en el entorno de la tasa de inflación para ese año, el 5% (Solchaga 1997:143).

[100] Así parece sugerirlo CCOO en su revista *Gaceta Sindical* (núm. 44, octubre 1986, pág. 22) donde se puede leer que: "El Gobierno cambia el modelo de concertación". Pero ellos se estaban refiriendo más bien a la "forma":

"Por lo que se refiere a la política de concertación, después de las reuniones celebradas en el mes de septiembre, se puede afirmar que el Gobierno ha renunciado expresamente a un modelo de acuerdo de carácter tripartito -sindicatos, Gobierno, patronal- que abordará temas de desempleo, política presupuestaria, etcétera".

"Así las cosas creemos haber obtenido para 1987 un acuerdo que cumple los objetivos en los que hemos enmarcado la política de concertación social y que por ello es satisfactorio para U.G.T"[101].

Aquel acuerdo no se trataba de un pacto formal tripartito[102], es decir, que se hacía realidad la preferencia de la UGT, ya manifestada en 1983, por negociar separadamente con el Gobierno y con los empresarios[103], con objeto de evitar así que el primero hiciese concesiones a la CEOE de modo que ésta siguiese aceptando la negociación colectiva centralizada[104]. No parece, sin embargo, que por aquel entonces el Gobierno hiciese del tripartismo formal una cuestión de principios[105]. Pero esta negociación tiene las características

---

[101] Véase "Encuentro Confederal de Acción Sindical: Presupuestos en 1.987", apartado I, pág. 3. op. cit.

[102] En septiembre de 1986 Solchaga declaraba públicamente que la concertación para 1987 *formalmente* quedaría reducida al acuerdo que pudiesen alcanzar patronal y sindicatos (*El País* 12-9-86). Pero días antes el Presidente de la CEOE había afirmado que "hay acuerdos que no precisan de ninguna firma" (*El País* 4-9-86).

[103] Se felicitaban así de haber logrado "mediante acuerdo con el Gobierno aunque éste no se instrumente formalmente por escrito, mejorar el contenido presupuestario del AES sin perjuicio de abordar la negociación colectiva en negociaciones posteriores con los empresarios" ("Encuentro Confederal de Acción Sindical: Presupuestos en 1.987" Apartado I, pág. 4, op. cit.).

[104] Así, al año siguiente, cuando el Gobierno y la CEOE intentaron conseguir un pacto tripartito con la UGT, este sindicato exponía:

"La CEOE parece mostrar poco entusiasmo en favor de un Acuerdo Interconfederal tras el fracaso del modelo tripartito propuesto por el Gobierno que ésta defendía y apoyaba porque, sin duda en aquel marco, sus reiteradas pretensiones sobre flexibilidad y reducción de costes laborales (reducción de cotizaciones a la Seguridad Social) podían ser planteadas con cierta garantía de "intercambio" ("Jornadas Sobre Negociación Colectiva" adjuntas a la carta-circular del Secretario de Acción Sindical del 6 de noviembre de 1.987, op. cit.).

[105] Así, el Secretario de Acción Sindical de la UGT, en su resumen de una reunión mantenida entre Nicolás Redondo y Felipe González, afirmaba "[c]oincide nuestra propuesta [de un acuerdo interconfederal entre empresarios y sindicatos sin la presencia del Gobierno] con su propósito [de Felipe González] de concertación. El Gobierno no participará en un Acuerdo Interconfederal que debe negociarse, dentro de la autonomía de las partes" (carta-circular del Secretario General y del de Acción

de los acuerdos globales de contrapartidas cuyo fin era el éxito de las políticas económicas y sociales del Gobierno socialista[106]. Así, pese a que se separaban formalmente las negociaciones con el Gobierno socialista y empresarios, los ugetistas sí que se comprometieron a tener en cuenta el marco macroeconómico del Gobierno a la hora de fijar sus objetivos de acción sindical[107].

Sindical a las F.F. y U.U. del 7 de enero de 1987, op. cit.). Igualmente Carlos Solchaga afirma que no hizo mucho por impulsar la renovación de un pacto social del tipo del AES (Solchaga 1997:143).

[106] "Esa política [de concertación], como su propia experiencia histórica lo demuestra, tuvo como característica fundamental la definición de metas (tales como la defensa del poder adquisitivo de retribuciones y pensiones, la potenciación de las medidas creadoras de empleo o el incremento de la protección social) que *pueden alcanzarse con medios instrumentales distintos* (...). Ello reviste singular importancia desde varios puntos de vista: Por una parte, *implica la continuidad de una política de concertación* a la que asignamos el objetivo de hacer de los sindicatos activos partícipes de los comportamientos económicos en cuanto tienen influencia directa sobre la clase trabajadora. Por otra, permite mantener y potenciar todos aquellos capítulos del A.E.S. de cuya aplicación han derivado los mayores beneficios. Finalmente, resulta de gran importancia, desde el punto de vista de la actividad sindical, que se mantenga el principio de información, participación y seguimiento de la aplicación de medidas fundamentales en cuanto tienden a promover un desarrollo con justicia que defendemos plenamente" ("Encuentro Confederal de Acción Sindical: Presupuestos en 1.987" Apartado I, pp. 3,4, op. cit., mías las cursivas).

[107] A principios de 1987 los líderes de UGT afirmaban:

"En las negociaciones de los Presupuestos del pasado mes de septiembre [de 1986], aceptamos el cuadro macroeconómico del Gobierno como marco de referencia a la hora de fijar nuestros objetivos (...). Nuestra propuesta de Acuerdo Interconfederal era totalmente coherente con el compromiso de los Presupuestos [para 1987]" (Memoria de Gestión de la Secretaria de Acción Sindical con fecha de entrada en la FEJP del 30 de marzo de 1987, pp 23,24, op. cit.).

Por su parte, CCOO hacía la siguiente valoración de las pretensiones del ministro Solchaga (*Gaceta Sindical*, núm. 44, octubre de 1986, pp. 22,23,:

"Después de la segunda reunión de los ministros de Economía y Hacienda y Trabajo con CC.OO., UGT y CEOE, el Gobierno presenta algunas modificaciones sobre los expuesto en el primer borrador. El más significativo es la fijación del 5 por 100 en la tasa de inflación prevista para 1987, sustituyendo al 4 por 100 anterior. Aún valorando positivamente este aumento, debido a la presión de los

A cambio, obtuvieron una serie de contrapartidas. La dirección de la UGT consideraba, en primer lugar, que había conseguido participar en la elaboración de "los Presupuestos Generales del Estado, negociando el montante de partidas claves desde un punto de vista sindical"[108]. Claro está, no habían conseguido todo lo que hubiesen querido, pero al fin y al cabo "en una negociación es muy difícil conseguir el 100% de lo que se pretende"[109]. En segundo lugar, habían conseguido subir la previsión de inflación para 1987[110], aumentar las inversiones públicas ("objeto de atención preferente en

---

sindicatos, no puede ignorarse que esta cifra significa una fuerte pérdida del poder adquisitivo (...). *Con la fijación de este 5 por 100, el Gobierno intenta condicionar la negociación colectiva*" (mía la cursiva).

[108] Véase "Encuentro Confederal de Acción Sindical: Presupuestos en 1.987", apartado I, pág. 1, op. cit. Igualmente:

"En primer lugar, la UGT debe destacar como importante el hecho de que ha participado a la hora de elaborar los Presupuestos Generales del Estado, negociando el montante de partidas claves desde un punto de vista sindical. Los Presupuestos se convierten en el eje condicionante de muchos aspectos de la vida social del país, y, por lo tanto, aunque la capacidad de propuesta compete plenamente al Gobierno, y la decisión exclusivamente al legislativo, es manifiesto que en épocas en que los trabajadores se ven requeridos para grandes sacrificios solidarios han de poder hacer oír su voz, a través de sus organizaciones representativas, sobre los aspectos presupuestarios que les van a afectar más directamente. En este sentido es justo destacar que las conversaciones mantenidas entre el Gobierno y la UGT sobre estos temas son, de por sí, un eslabón muy importante de la cadena de la participación del sindicato en la vida socio-económica española" ("Encuentro Confederal de Acción Sindical: Presupuestos en 1.987", apartado I, pág. 1, op. cit.).

[109] Vid. supra., Apartado II, pág. 2.

[110] "[R]ebajar la inflación a un 4% en 1.987 nos parecía inviable y draconiano (...). UGT estimó que una reducción de importancia, a la vez que plausible, consistía en llegar al 5% (...). El considerar una inflación prevista del 5% para 1987 y del 3% para 1988 refuerza, a nuestro modo de ver, la viabilidad del cuadro macroeconómico (sobre todo crecimiento del consumo privado, de la inversión y de la demanda interna) y, de cualquier forma, era una condición sine qua non para llegar a un acuerdo. Nos congratulamos de haber obtenido satisfacción, y por ello pudimos entrar a dialogar sobre los presupuestos como comentamos en las páginas siguientes" (vid. supra., apartado I, pág. 2,3).

nuestras conversaciones[111]")[112] y fomentar así el empleo[113], incrementar la financiación de la seguridad social[114], subir las retribuciones de funcionarios[115] y las pensiones[116], la cobertura de desempleo[117] e influir en la fiscalidad[118].

---

[111] Para la UGT:

"Las inversiones públicas juegan un papel crucial, en estos momentos de crisis, tanto para servir de motor económico (con la creación de empleo que ello supone) como para mejorar todo el equipamiento social de nuestra nación" (vid. supra., apartado I, pág. 5).

[112] "Las negociaciones han desembocado en una subida muy importante de las inversiones públicas sobre la propuesta inicial del Gobierno (...). Ello indica que dicho esfuerzo inversor [del Estado] aumenta su participación en el P.I.B. (crecimiento nominal del 8,5%) con relación a 1986, y todo ello pese a la transferencia de abundantes funciones inversoras a las CC.AA). Con esta recuperación del nivel de actividad inversora del Estado dentro del conjunto de la economía nacional, creemos que lo conseguido tras las negociaciones suponen un logro cualitativo y cuantitativo de suma importancia" (vid. supra., apartado I, pp. 5-7).

[113] "En este terreno la UGT aprecia haber obtenido: la supervivencia y la actualización del 5% del "Fondo de Inversiones Públicas del A.E.S (...). La actualización del fondo del INEM para convenios con corporaciones locales y otros organismos en un 5% (...). Poder participar plenamente en la vida del Fondo Social Europeo y de constatar que este año el Fondo supondrá un montante de 120.000 millones de pesetas en inversión pública. Por otra parte, la UGT ha exigido y obtenido la actualización al 5%, al menos, de cuantas partidas del INEM se dediquen a la promoción de empleo" (vid. supra., apartado I, pp. 7,8).

[114] "En cuanto al montante asignado a la Seguridad Social, la UGT lo estimó mejorable y tras arduas negociaciones se ha visto aumentado en 27.500 millones más de lo previsto (...). Lo obtenido por la UGT supone pasar de un aumento nominal del 11,3% previsto por el Gobierno (1.053.189) al 14,2% ya expuesto" (vid. supra., apartado I, pág. 11).

[115] "El fondo obtenido es de 7.000 millones de pesetas, que supone que la subida de retribuciones promedio de los funcionarios podrá ser del orden del 5,6%, por primera vez en abundantes años superior a la inflación prevista. UGT considera un logro este cambio sustancial de concepto y de tendencia que atiende a su reivindicación (vid. supra., apartado I, pág. 9).

[116] "[S]obre la intención inicial del Gobierno de subir las pensiones anteriores a la ley de Reforma en un 4%, UGT reivindicó una subida del 5% más un fondo para mejorar las pensiones más reducidas y paliar, en alguna medida, una grave situación

Todo parece, pues, indicar que en septiembre de 1986 se abandonaba el tripartismo formal, pero no el modelo anterior de concertación social a base de acuerdos globales de contrapartidas pues, en palabras de UGT, "[e]sa política [de concertación], (...) tuvo como característica fundamental la definición de metas (tales como la defensa del poder adquisitivo de retribuciones y pensiones, la potenciación de las medidas creadoras de empleo o el incremento de la protección social) que *pueden alcanzarse con medios instrumentales distintos* (...)". En definitiva, aquel acuerdo Gobierno-UGT de septiembre de 1986 "implica[ba] la continuidad de una política de concertación"[119] tanto para la UGT, como para el Gobierno socialista[120].

---

social. La reivindicación ha sido atendida, y a la subida del 5% se sumará un fondo de 7.000 millones (...). En cuanto a las pensiones asistenciales, y sin que se financien con el fondo anterior, se ha obtenido un incremento del 8%, muy superior a la inflación prevista" (vid. supra., apartado I, pág. 10).

[117] "Nuestra postura ha sido en todo momento el mantenimiento de los objetivos establecidos en el A.E.S. y, a tal efecto, que se mantengan durante 1987 el Real Decreto de ampliación de las prestaciones oportunamente negociado y que, por lo tanto, se asuma como obligación ineludible los gastos que demande su aplicación. En el transcurso de estas negociaciones se obtuvo como compromiso por parte de la Administración: La inmediata publicación en el Boletín Oficial del Real Decreto ampliatorio de la cobertura ya establecida por la Ley de Protección por Desempleo, que permitirá incluir como beneficiarios de prestaciones a 200.000 parados más. La extensión de la vigencia del Real Decreto durante todo el año 1987. Todo ello implica un avance sustancial en un problema sobre el que insistimos permanentemente" (vid. supra., apartado I, pp. 11, 12).

[118] "Así vemos como dos de las tres reivindicaciones de la U.G.T., en el terreno de la fiscalidad (nos atreveríamos a decir que las más sustanciales) fueron debidamente negociadas y atendidas" (vid. supra., apartado II, pág. 4).

[119] Vid. supra., apartado I, pp. 3, 4, mía la cursiva.

[120] El Ministro de Economía, Carlos Solchaga lo defendió así en su intervención en el Congreso de los Diputados del 28 de octubre de 1986:

"Este año, como ustedes conocen, se terminaba la vigencia del Acuerdo Económico y Social (...). Sin entrar en consideraciones de si es o no más conveniente la negociación salarial por separado, el Gobierno creyó que era imprescindible para los próximos dos años hacer un acuerdo de concertación poniendo en la balanza

Como hemos visto, los intentos de alcanzar un Acuerdo Interconfederal entre sindicatos y empresarios para encuadrar la negociación colectiva de 1987 terminaron fracasando y provocando un enfrentamiento entre el Gobierno socialista y la UGT. Meses después, en abril de aquel año, el Comité Confederal de la UGT le propuso al Gobierno socialista la reanudación del diálogo social deteriorado "como consecuencia de los desacuerdos de principios de año"[121], lo cual dio lugar a dos períodos de negociación. La primera tanda tuvo lugar entre mayo y julio mientras que la segunda entre septiembre y mediados de otoño. Ambos intentos terminarían fracasando: el primero por cuestiones *procedimentales*, pero que significaba el fin del modelo de concertación social practicado hasta entonces a base de acuerdos globales de contrapartidas; el segundo por cuestiones *substantivas o de contenidos*, las cuales implicaban reorientar la estrategia económica del Gobierno socialista. En este apartado nos centramos en la primera fase, la segunda la veremos en el siguiente.

b) El disenso sobre el modelo de concertación social y sus contenidos

---

también la elaboración de los Presupuestos y la estructura de composición de los mismos. Las conversaciones que se mantuvieron sobre las líneas generales de los Presupuestos con los interlocutores sociales a los que he hecho referencia permitieron alcanzar un acuerdo de principio sobre una senda-objetivo de inflación para 1987 y 1988 del 5 y del 3 por ciento, senda a la cual sujetarán sus previsiones de negociación -naturalmente dentro de la libertad que les corresponde- tanto la Confederación Empresarial Española como la Unión General de Trabajadores, ya que Comisiones Obreras decidió no aceptar el acuerdo que el Gobierno le proponía en lo que se refería a la composición de presupuestos si se aceptaban estas tasas de crecimiento de los precios. *Yo creo que este acuerdo de principios, que va a configurar la concertación social para los próximos dos años,* es enormemente positivo y va a disminuir grandemente las incertidumbres que podíamos tener en el frente de la evolución de los costes salariales y de los costes laborales unitarios para el año que viene" (mía la cursiva).

[121] "Circular de Negociación Colectiva", fechada en Madrid a 1 de febrero de 1988, op. cit.

La propuesta que hizo el Gobierno en el verano del 87 era la siguiente:

"El 16 de julio de 1987, en reunión tripartita, y el 20 del mismo mes, a través de la revisión de un documento formal, el Presidente del Gobierno propuso textualmente a las centrales sindicales y a la patronal lo siguiente: alcanzar un acuerdo socio-económico de tres años de duración; decidir como objetivos básicos de la política socio-económica la creación de empleo, el aumento en la solidaridad, el incremento en la eficacia y proseguir después con una negociación sectorializada tema por tema"[122].

En un primer momento el Gobierno socialista pretendió que el acuerdo fuese cerrado y único, más tarde aceptaba conciliar un gran acuerdo con otros sectoriales y de negociación permanente[123], pero cualquier acuerdo parcial tenía que ir incluido dentro de un mismo marco económico y social, de una definición conjunta de un proyecto económico y social[124]. En él se discutirían cuestiones salariales[125], la

---

[122] Intervención del Ministro para las Relaciones con las Cortes, Virgilio Zapatero, en el Congreso de los diputados el 30 de noviembre 1988.

[123] Es decir, no se rechazaba que dentro de ese gran acuerdo hubiese acuerdos entre patronal y sindicatos, y entre el Gobierno y algunas de las partes más afectadas en determinadas materias (*El País* 17-7-87).

[124] Véanse *El País* (16, 17, 20 y 24-7-87) y la "Circular de Negociación Colectiva" fechada en Madrid a 1 de febrero de 1988, op. cit., donde exponían:

"[E]n el Comité Confederal del 10 de abril de 1987, la Unión General de Trabajadores resolvió proponer de manera pública, y expresamente al Gobierno, la reanudación del diálogo social deteriorado como consecuencia de los desacuerdos de principios de año. Ante ese requerimiento el Gobierno, tras algunos meses, presentó en documentos de los días 16 y 20 de julio su oferta de concertación *centrada en un diagnóstico común y un acuerdo básico sobre la política socioeconómica*" (mía la cursiva).

[125] Solchaga declaraba así que pretendía concertar un objetivo de inflación que permitiese mantener y mejorar la situación de competitividad y una banda salarial acorde con ese objetivo de inflación, pero que permitiese una evolución favorable de los salarios (*El País* 22-7-87).

concreción de los grandes objetivos macroeconómicos[126] y la armonización de una política de solidaridad con una política competitiva (*El País* 9-7-87). Mediante este acuerdo se buscaba la creación de empleo, el aumento de la cohesión social y el incremento de la eficacia de la economía española[127]. El Gobierno esperaba así "que se estableciera, si fuera posible, un grado de compromiso de los sindicatos y de los empresarios en la consecución de dichos objetivos prioritarios, así como las asignaciones presupuestarias que fueran oportunas y necesarias"[128]. En pocas palabras, el Gobierno socialista seguía defendiendo la antigua concertación social consistente en un acuerdo global de contrapartidas[129].

---

[126] Como objetivos macroeconómicos a alcanzar Solchaga había fijado un crecimiento económico del 3% al 4%, reducir la inflación hasta niveles del 3%, avanzar en la disminución del déficit público y garantizar que el empleo aumentase cada año a un ritmo del 1% o 1,5% sobre la población activa (*El País* 28-5-87).

[127] También se trataría temas como la participación institucional de los sindicatos, el CES, sector público, medidas fiscales, etc (*El País* 17-7-87).

[128] Intervención del Ministro de Trabajo, Manuel Chaves, en el Congreso de los Diputados, el día 1-2-89.

[129] Así, por ejemplo, el Ministro de Trabajo, Manuel Chaves, afirmó en septiembre de aquel año que las previsiones de incremento de pensiones y salarios de los funcionarios, un 4%, no podían ser objeto de negociación. Unicamente podía discutirse la redistribución interna de estas subidas. Explicaba la negativa del Gobierno porque la oportunidad de negociar la cuantía de los incrementos había pasado al haber rechazado los sindicatos la oferta del Gobierno que recogía un pacto global a tres años en el que se hubieran integrado todos los temas a discutir *(El País* 23-9-87). Igualmente, el Ministro de Administraciones Públicas, Joaquín Almunia, afirmaba que:

"no se puede hablar con unos interlocutores que no tienen en cuenta una visión de conjunto [...]. No hay posibilidad de entenderse, por ejemplo, en el tema de las retribuciones de los funcionarios si antes no se acepta el objetivo de inflación" (*El País* 12-9-87).

Por su parte Virgilio Zapatero afirmaba (Congreso de los Diputados, 30-11-88):

"Las centrales sindicales se negaron a entrar a examinar las cuentas del Reino, por considerar que eso es exclusiva responsabilidad del Gobierno. Ellos sólo

Ahora bien, esta concertación social con sindicatos y empresarios tenía sus límites. Los sindicatos no podían esperar que mediante dicho pacto variasen los grandes objetivos de su política económica, pues el propio Gobierno afirmaba que aplicaría la misma política económica con o sin acuerdo (*El País* 20-7-87 y 6-8-87). Mediante éste se podían variar los "instrumentos", "las prioridades" en opinión de Chaves (Congreso de los Diputados, 1-2-89), pero no los "objetivos"[130], pues éstos eran los que se desprendían del "marco de nuestra realidad económica" (Chaves, Congreso de los Diputados, 1-2-89). El Gobierno socialista tenía claro que no haría otra política económica (*El País* 28-5-87), aunque pensaba que, si había acuerdo con sindicatos y patronal, sería más fácil alcanzar sus objetivos de mayor competitividad y mayor empleo (*El País* 20-7-87). La propuesta de concertación del Gobierno sólo fue aceptada por la patronal (*El País* 17 y 24-7-87).

La dirección de la UGT, en el verano de 1987, rechazó esta propuesta de un pacto global de contrapartidas ("un sólo marco global gestado desde una parte y aceptado por todos") con el argumento de que cada interlocutor social defendía intereses y enfoques distintos y se amoldaban a sus propios marcos de coherencia[131]. Semejante pacto único sólo sería posible, para la dirección de la UGT, si existiese "una identidad programática y política de todos los agentes sociales", lo que no era el caso. No era posible "conseguir el apoyo global de CEOE y CC.OO. a un programa de gobierno que habían rechazado abiertamente en junio de 1986", por lo que los acuerdos sólo serían posibles en aquellos "puntos de encuentro entre coherencias globales distintas, confluyendo en compromisos sociales concretos y operativos". La dirección de UGT, al igual que CCOO, proponía por el contrario una negociación continuada con el Gobierno, llegar a

---

quisieron hablar de política social, como si se pudiera separar la política social de la política económica y la política económica de la social".

[130] Un escrito remitido por González a patronal y sindicatos a finales de julio de 1987 exponía así la necesidad de mantener sujeto el déficit público y los efectos que en el mismo creaba un aumento del gasto público (*El País* 22-7-87).

[131] Véase la carta-circular del Secretario de Acción Sindical del 31 de julio de 1987, op. cit.

acuerdos con interlocutores distintos según el contenido de la negociación, sin que el desacuerdo en unos impidiese cerrar otros[132].

Su propuesta planteaba igualmente el papel de cada una de las partes en el proceso de concertación (*El País* 8-7-87)[133]. Así, al Gobierno se le encomendaría la definición de "un horizonte estratégico y de grandes orientaciones" de responsabilidad exclusiva (*El País* 17-7-87 y 2-9-87). En ese marco de objetivos habría que incluir, según la UGT, el papel del sector público, la fiscalidad, el nivel de protección social, la plena institucionalización de las organizaciones sindicales. Se discutiría así aspectos concretos como eran el reconocimiento de la negociación colectiva de los funcionarios, la constitución del Consejo Económico y Social, la gestión de las prestaciones sociales, la regulación de las pensiones y la tasa de cobertura del desempleo (*El País* 8 y 25-7-87). Con la patronal, de la cual seguían teniendo una visión muy negativa[134],

---

[132] Véanse *El País* (7, 8, y 17-7-87), la carta-circular del Secretario de Acción Sindical del 31 de julio de 1.987 (op. cit.) y la "Circular de Negociación Colectiva" fechada en Madrid a 1 de febrero de 1988 (op. cit.) donde exponían:

"Con fecha 23 de julio de 1987, la Unión General de Trabajadores remitió al Presidente del Gobierno su propuesta consistente en *un amplio conjunto de acuerdos* que abarca el conjunto de los problemas y que exigía una definición de la política de progreso por parte del Ejecutivo" (mía la cursiva).

[133] "Las circunstancias descritas han llevado al sindicato a proponer un modelo de negociación distinto y cualitativamente más profundo basado en acuerdos bipartitos entre el gobierno y los sindicatos que profundicen en la corrección de los graves desequilibrios sociales que soporta nuestra sociedad, y que tendría temas clave como la lucha contra el desempleo, el aumento de la cobertura de los parados, la profundización en la participación institucional de los sindicatos, etc. También proponemos acuerdos sindicatos-empresarios, cuyo objetivo básico sería, además de los reivindicativos en materia salarial, de jornada etc..., profundizar realmente en la modernización de las relaciones productivas, en la democracia industrial, tendiendo a que se apliquen de manera homogénea" (Véase el memorándum "La Negociación Colectiva en España desde el Punto de Vista de la Unión General de Trabajadores", adjunto a una carta del Secretario de Acción Sindical, Apolinar Rodríguez, a las F.F. y U.U. fechada en Madrid a 3 de noviembre de 1.987. Caja FEJP/515. F.L.C).

[134] "Es evidente que la ofensiva neoliberal predominante en todas las naciones industrializadas cuestiona fuertemente la intervención del Estado en la economía y en

discutirían sobre negociación colectiva, productividad, modernización de la producción, participación, etc y no rechazaban alcanzar acuerdos interconfederales con ellos[135]. La UGT aceptaba una negociación también tripartita (Gobierno, patronal y sindicatos), pero sectorial. En ella se abordaría la reforma del INE, formación profesional, o la política industrial (*El País* 8-7-87 y 6-9-87). La oferta final de la UGT, ya en septiembre de 1987, consistió en que el Gobierno convocase dos reuniones paralelas. En la primera sólo asistiría el propio Gobierno y los sindicatos, y se discutirían asuntos como las condiciones laborales de los funcionarios y cobertura de desempleo. La segunda sería tripartita y se trataría la política de formación profesional (*El País* 9-9-87).

Pero este primer intento de concertación social a principios del verano de 1987 se acabó frustrando pues, al no aceptar el Gobierno socialista "las negociaciones en escenarios diferentes sobre el completo temario que propusimos, se dio por fracasado el intento de concertación propuesto por [éste]"[136]. El Gobierno socialista en aquellos años finales de los ochenta reconocía su revés:

> "Pero si hay que sacar una conclusión, una vez dicho esto, es la que ya manifestó también el Presidente del Gobierno: la concertación social, tal como se había concebido durante los años de la transición, tal como en definitiva, se había valorado en cuanto a sus efectos sobre la política económica y sobre la propia situación

---

las relaciones laborales (...). Este marco ha dado lugar a una campaña empresarial para, beneficiándose del desempleo masivo, reducir las conquistas sociales de los trabajadores, disminuir los salarios, desregular e introducir la arbitrariedad en las relaciones laborales, quebrar la negociación colectiva y debilitar la fuerza de las organizaciones sindicales. Modificar, en suma, la relación de fuerzas en la sociedad" (vid. supra., pp. 12, 13).

[135] Véanse las cartas de Apolinar Rodríguez fechadas en Madrid el 3 y 6 de noviembre de 1987 (op. cit.), el núm. 56 de *Información Sindical* (1ª quincena de diciembre de 1987) y una carta-circular del Secretario de Acción Sindical a las F.F. y U.U. sobre una entrevista de trabajo UGT-CC.OO, fechada en Madrid a 19 de septiembre de 1.988. Caja: FEJP/516. F.L.C.

[136] Véase la "Circular de Negociación Colectiva", fechada en Madrid a 1 de febrero de 1988, op. cit.

> política del país, en estos momentos se puede considerar como acabada, está muerta" (Chaves, Congreso de los Diputados, 1-2-89).

La dirección ugetista estaba rechazando la concertación de "contrapartidas", es decir, que para alcanzar unos objetivos en unos campos tuviese que ceder en otros asuntos, empezando por las subidas salariales[137]. Por el contrario, quería conseguir los bienes que había conseguido antes, como tener acceso a la toma de decisiones presupuestarias, en una "negociación continua" y sin tener que negociar su política salarial o derechos laborales adquiridos (que la patronal ponía en cuestión al hablar de la flexibilidad)[138]. De ahí que afirmasen que la concertación pasaba por el reconocimiento de los sindicatos como auténtica institución, y que eran importantes no sólo a la hora de firmar un pacto (*El País* 7-7-87). Por el contrario para el Gobierno de lo que se trataba era de:

---

[137] A mediados de septiembre de 1987 los líderes sindicales afirmaban no entender por qué el Gobierno había accedido a convocar dos mesas separadas (una tripartita y otra entre Gobierno y sindicatos) cuando todo seguía condicionado a la idea fija de la corresponsabilidad sindical (*El País* 12-9-87). Días más tarde, Apolinar Rodríguez, secretario de organización de UGT, señalaba que:

"Nosotros, en cualquier caso, no buscamos desde UGT un acuerdo de contrapartidas, como parece que persiguen el Gobierno y la CEOE" (*El País* 16-9-87).

En el mismo sentido, Zufiaur, reflexionando sobre la concertación social, consideraba que las sociedades más estructuradas son aquellas en las que "los sindicatos tienen mayor poder institucional, hay una amplia democracia industrial, sindicatos fuertes, y los sindicatos no tienen que estar dando continuamente a cambio contrapartidas para lograr cuestiones que forman parte de una sociedad desarrollada" (*Claridad*, núm. 29/30, enero-abril 1989, pág. 12).

[138] Para Apolinar Rodríguez, la falta de acuerdo o pacto social no podía ser obstáculo para que se discutiesen las retribuciones de los funcionarios, ofertas de empleo público, las condiciones de las clases pasivas y, sobre todo, que se estableciese un sistema de negociación colectiva en la función pública *(El País* 22-9-87).

"continuar con un modelo de concertación global que desde nuestro punto de vista había tenido un papel muy importante en la transición democrática, no sólo desde la perspectiva económica, en cuanto que ayudó de una manera pacífica a una salida de la crisis económica, sino también por lo que había representado de estabilidad durante aquellos años del propio sistema democrático. Desde nuestro punto de vista, dicho modelo, con los contenidos que se quiera, quizá distintos, con otros matices, sigue siendo válido para afrontar los retos económicos inmediatos, a corto y medio plazo, porque no podemos olvidar (...) que nuestro país todavía tiene tasas de desempleo muy altas, las más altas de la Comunidad Económica Europea, que, en definitiva, también nuestro diferencial de protección social sigue distante con respecto a la media de los países comunitarios y, por supuesto, que nuestras empresas tienen que afrontar un reto de competitividad en relación con la creación del gran mercado interior a partir del 1º de enero del año 1993" (Chaves, Congreso de los Diputados, 1-2-89).

Con los empresarios, la concertación social no tuvo mejor suerte. Un acuerdo marco interconfederal para 1988 quedó frustrado "tras la decisión de CEOE, rechazada por UGT, de proponer incrementos salariales con el mismo criterio que el defendido por el Gobierno, es decir, aumentos en torno al 4% que es el punto medio de la banda, 3-5% propuesta por los empresarios"[139]. Lo mismo volvió a ocurrir al año siguiente[140]; de hecho, la negociación colectiva centralizada había llegado a su fin en España.

La transformación de la concertación social española no consistió, por tanto, en que a partir de 1987 la dirección ugetista

---

[139] Véase la "Circular de Negociación Colectiva", fechada en Madrid a 1 de febrero de 1988, op. cit.

[140] Para 1989, tanto los empresarios públicos como la CEOE pretendieron fijar como referencia para le negociación colectiva de 1989 el objetivo de inflación del 3%, fijado por el Gobierno en los Presupuestos. En concreto la CEOE intentó fijar un tope salarial del 5% que luego tuvo que abandonar, como en el caso de la empresa pública (Documento de la Secretaria de Acción Sindical de la caja: FEJP/517. F.I.L.C.).

rechazase firmar los acuerdos globales tripartitos, pues esta oposición suya no era nueva. Es cierto que el ANE y el AES fueron o incluyeron pactos tripartitos, pero no así el ABI, el AMI, el AI de 1983, ni lo hubiera sido el nonato AI para 1984. Y, como hemos visto, la separación entre negociaciones ya había sido aceptada por el Gobierno y la patronal en septiembre de 1986 cuando la UGT apoyó los Presupuestos Generales del Estado para el año siguiente. Tampoco significaba que a la UGT, o a CCOO, les dejase de interesar el ámbito político, y pretendiesen concentrarse exclusivamente en la negociación colectiva con los empresarios, como pudimos ver en el capítulo anterior. El cambio realmente estuvo en su resistencia a firmar acuerdos globales de "contrapartidas" sobre unos asuntos que ya no estaban dispuestos a ligar y en los que tenían que seguir aceptando la moderación salarial exigida por el Gobierno socialista a cambio de más empleo o gasto social[141]. Independientemente de que se pueda discutir si lo que quería la dirección de la UGT era concertación social o no[142], está claro que la UGT daba por terminada la experiencia del corporatismo de oferta, es decir, la experiencia de practicar una coordinación económica con políticas de oferta.

---

[141] Esto era así independientemente de si se empleaba la fórmula de un pacto tripartito formal, como fue el ANE o el AES, o un pacto interconfederal con los empresarios que siguiese en la práctica las sugerencias del Gobierno sobre aumentos salariales para no poner en peligro sus objetivos macroeconómicos, como fue el AMI o el AI de 1983. En todos estos casos se negociaron con empresarios y gobiernos (de UCD o del PSOE) cuestiones procedentes de muy distintas áreas (económicas, sociales, laborales, organizativas).

[142] La CEOE, por ejemplo, afirmó en el verano de 1987 que un acuerdo que no se basase en la aceptación de compromisos por cada una de las partes "no podría considerarse como el desarrollo de un proceso de concertación, sino que se inscribiría dentro de las relaciones normales de la Administración y las fuerzas sociales" (*El País* 24-7-87). Pero realmente es difícil contestar a esta pregunta de si lo que pedía la UGT era o no concertación social pues este término, así como el de neocorporativismo, intercambio político, etc. no tienen un único significado aceptado por todos los investigadores y actores sociales.

Esto nos conduce a una primera reflexión sobre la concertación en España. Se ha discutido mucho si su fin hacia 1987 se debió a la actitud de los sindicatos o a la del Gobierno socialista. Algunos politólogos consideran que fue responsabilidad de este último pues, una vez que la democracia estaba asentada y gracias a que el PSOE seguía gozando de mayoría absoluta en el Parlamento tras las elecciones de junio de 1986, el Gobierno socialista podía hacer caso omiso de los sindicatos y conseguir la moderación salarial mediante una política monetaria restrictiva. Otros investigadores, sin embargo, consideran que fue responsabilidad de los sindicatos (ya fuese porque no *podían* -dado que carecían de las condiciones necesarias que vimos en el primer capítulo- ya porque no *querían* -dado los incumplimientos del Gobierno). Podemos ver, sin embargo, que este debate está mal planteado. De lo que se trataba en el verano de 1987 no era de si concertación sí, o concertación no, *sino de qué clase de concertación social* se emprendería. El Gobierno socialista quería mantener "el modelo de concertación global" practicado hasta la fecha, y la dirección de la UGT quería cambiarlo[143]. Ahora bien, se podría cuestionar que fuese la UGT la única que pretendiese una clase de concertación distinta, pues la concertación global que ofrecía el Gobierno socialista era igualmente "atípica" por cuanto la actividad sindical en la negociación colectiva no se coordinaría con políticas que buscasen promover el crecimiento y el empleo fomentando la demanda agregada, como había sido lo normal en esta clase de intercambios en Europa hasta principios de los años 80. Al respecto se pueden hacer las siguientes observaciones. Como se discutió en el primer capítulo, cambiar el peso de la estrategia económica de las políticas de demanda a las políticas de oferta suponía en principio conseguir los objetivos de siempre (crecimiento, empleo) *por nuevos medios* (más tarde discutiremos la cuestión de los objetivos satisfechos a medias). En segundo lugar, el AI de 1983, el AES firmado en 1984 y el acuerdo para los Presupuestos Generales de 1987 se hicieron con una política económica centrada hacia el lado

[143] Aguilar y Roca (1991) incidieron en que la UGT quería cambiar el tipo de concertación social.

de oferta de la economía, por lo que en 1987 el Gobierno socialista no ofrecía nada nuevo.

En conclusión, las interpretaciones que explican la ruptura entre la UGT y el PSOE porque éste no llevó a cabo las clásicas políticas de los socialdemócratas no acaban de convencer, pues ni la política económica del Gobierno socialista fue tan "neoliberal", ni la alternativa de la UGT era tan "keynesiana". Es cierto, sin embargo, que existían diferencias de fondo en materia económica, y que el Gobierno socialista se mostró bastante intransigente con respecto a cambiar objetivos estratégicos de su política económica (como eran la reducción de la inflación o del déficit público), pero no se acaba de entender por qué, si a la UGT esas diferencias le hacían imposible apoyar al Gobierno socialista, no rompió antes con él. Durante su fase inicial, y en lo más hondo de la crisis económica, el Gobierno socialista se encontró con menores resistencias por parte de la UGT en unas decisiones económicas que, como señala Maravall (1993), fueron paradójicamente más duras. Por el contrario, el conflicto entre la UGT y el Gobierno del PSOE se exacerbó cuando la economía y el empleo crecían a buen ritmo[144]. Algunos autores intentan resolver esta paradoja aduciendo que los ugetistas dejaron de apoyarle cuando constataron que seguía practicando las mismas políticas económicas en un momento de expansión económica. Pero, independientemente de la discusión sobre el supuesto carácter "neoliberal" de la lucha contra la inflación o la necesidad de combatirla en un momento de expansión económica[145], no se entiende entonces por qué en el verano de 1986, cuando comenzaba la 2ª legislatura socialista y la economía crecía a un ritmo de un 3,2% del PIB, la dirección de la UGT volvió a "congelar" su política económica preferida y aceptó en

---

[144] Aún hoy el antiguo líder de la UGT hace la siguiente valoración:

"Y hasta el ochenta y cinco y el ochenta y seis hubo una política que se podía seguir aceptando. Incluso llegamos a acuerdos sobre la reconversión industrial" [entrevista de Burns Marañón (1996:213)].

[145] Recordemos que la literatura sobre las políticas económicas "clásicas" de los socialdemócratas señalaban que éstos luchaban tanto o más que los conservadores contra la inflación, sólo que de otra forma (Cameron 1984, Scharpf 1992, Howell y Daley 1992-93).

cambio la política económica del Gobierno socialista en el programa electoral del PSOE para las elecciones de 1986, en el acuerdo sobre los Presupuestos Generales del Estado para 1987 y al año siguiente se esforzó en demostrar precisamente que su rechazo a la contención salarial no ponía en cuestión los objetivos de la política económica, en vez de denunciar su continuación como hizo CCOO. La descalificación total de las políticas económicas no se produce sino a partir de 1988 y, sobre todo, 1989.

2.2.2. Las demandas sociales de la UGT

El segundo grupo de explicaciones argumenta que los sindicatos no colaboran con las políticas de los gobiernos, y posiblemente terminen enfrentados con ellos, cuando carecen de ciertas condiciones necesarias para poder seguir defendiendo los intereses de los asalariados en su conjunto. En concreto, de entre esas condiciones comentadas en el primer capítulo, varios autores han destacado el nivel de afiliación de los trabajadores. Según un estudio de Olson (1982), los sindicatos que representan a grupos reducidos de trabajadores carecen de los incentivos racionales para realizar un esfuerzo que incremente el bienestar general, prefiriendo por el contrario aumentar su participación en el ya existente. Esta situación llevaría así a un enfrentamiento de objetivos entre los sindicatos y los gobiernos socialdemócratas: mientras que los primeros defienden los intereses de la sección de los asalariados que representan, los segundos defienden los de la clase trabajadora en general. Vimos igualmente que ésta no era la única explicación posible dentro de las teorías que inciden en las condiciones del movimiento sindical. Pero antes de entrar a discutir si las clases trabajadores españolas y el movimiento sindical se han fragmentado más de lo que estaban por cambios estructurales del sistema de producción español, como se ha sugerido para otros casos europeos, o, por el contrario, su fragmentación inicial bastaba ya para que no pudieran ayudar a un

gobierno que buscase su respaldo[146], podemos plantearnos hasta qué punto la UGT rechazó las políticas del Gobierno socialista por defender exclusivamente los intereses de sus afiliados.

Carles Boix (1996:212-220) es uno de los autores que han utilizado de una forma más explícita esta hipótesis sobre el bajo nivel de afiliación del sindicalismo y su sesgo hacia una determinada clase de asalariados para explicar los enfrentamientos de los sindicatos españoles con el Gobierno socialista a finales de los años ochenta. Apunta así que los primeros no son organizaciones amplias sino de baja afiliación -alrededor del 16 por ciento de los trabajadores- y concentradas principalmente entre trabajadores manuales especializados con contratos indefinidos en empresas medias y grandes. Esto les lleva a que no sean "proclives a adherirse a una estrategia sostenida de moderación salarial a cambio de más empleo para trabajadores temporales y sin especializar", sino a defender los intereses de sus escasos afiliados[147]. Añade además que la estructura del sistema español de negociaciones salariales, caracterizado por negociaciones anuales principalmente en el nivel sectorial, no favorecía que UGT y CCOO mantuviesen acuerdos de contención salarial[148]. Estos factores les impedían aceptar "un régimen corporatista de moderación salarial a cambio de políticas fiscales expansivas y una política redistributiva a largo plazo mediante transferencias sociales". Ante esta actitud sindical, al Gobierno socialista no le quedó más remedio que "enfrentarse con los sindicatos y adoptar una política de

---

[146] Recordemos que no hubo coordinación económica en los años sesenta ni en Francia ni en Italia.

[147] Boix (1996:216) enfatiza además que "aun cuando el movimiento sindical es pequeño en tamaño, el marco jurídico español que regula el sistema de elecciones sindicales y el proceso de negociación colectiva amplía el poder de los sindicatos (y, por tanto, el de los *"insiders"*) tanto en el mercado de trabajo como en la arena política". Para él son las elevadas barreras electorales las que permiten que CCOO y UGT, con tan baja afiliación, controlen, sin embargo, las tres cuartas partes de todos los delegados sindicales o que estén representados en más del 90 por ciento de todas las mesas de negociación de los convenios colectivos.

[148] También considera que sus líderes estaban "imbuidos de una ideología radical respecto al papel del Estado dentro de la economía" (Boix 1996:216).

estabilización antes que seguir una estrategia acomodaticia y arriesgar su posición electoral (entre votantes centristas) y el proyecto de integración europea" (Boix 1996:217).

Ahora bien, ¿es cierto que la UGT y CCOO sólo representan a ese 16% de los trabajadores? Considero que esto implica conceder a la tasa de afiliación sindical en España un significado equivocado[149]. Es indudable que los bajos niveles de afiliación en España tienen efectos importantes, y los propios líderes sindicales son conscientes de ello[150]. Pero, en primer lugar, la tasa de afiliación no mide en este país la proporción de trabajadores que está dispuesta a permitir que los sindicatos actúen en su nombre como mediadores en sus relaciones con los empresarios, o el Estado y otros agentes políticos[151]. Por el contrario, los trabajadores españoles muestran su aceptación a que los sindicatos realicen esta actividad mediante la elección de la lista de su preferencia en las elecciones a comités de empresa y

---

[149] En este sentido Jordana (1996:220) ha cuestionado la utilidad de las comparaciones de la tasa de afiliación sindical entre diferentes países "because membership dynamics work differently under different rules and systems of industrial relations". De hecho considera que "Anglo-Saxon debates on union membership focus heavily on this indicator as the basic reflection of union strength and, as a result, these debates do not consider other forms of workers' representation as a mesure of union strength". La misma postura defiende Escobar (1993:7). Pontusson (1992:11) también ve inconvenientes a la utilización de los datos de afiliación como indicador del poder sindical porque, entre otras cosas, "the meaning of union membership varies from one country to another".

[150] Durante una entrevista con el autor celebrada el 18-7-97, Julián Ariza consideraba que tener más o menos afiliados influía en las *formas de ejercer la presión* de las que disponía un sindicato, de tal forma que cuando la afiliación era alta no habría que radicalizar los conflictos.

[151] En aquella misma entrevista con el autor, Julián Ariza señalaba al respecto que según estudios de CCOO en determinados lugares hasta casi la mitad de sus delegados en los comités de empresa no están afiliados a este sindicato. Igualmente un estudio encargado por la UGT mostraba que en 1988 el 24% de la muestra de delegados por las listas de UGT en los comités de empresa no estaba afiliado al sindicato socialista (Bouza 1989:11).

delegados de personal[152]. En segundo lugar, el comportamiento de los sindicatos españoles (en concreto, sus variaciones en estrategias tanto para las relaciones laborales como para el ámbito político) es más sensible a cambios en sus resultados en dichas elecciones que a movimientos de afiliación y desafiliación. En pocas palabras, los sindicatos españoles se interesan más por ganar votos que por ganar afiliados[153]. De ahí que el sindicalismo español haya sido caracterizado como un "sindicalismo de electores en lugar de un sindicalismo de afiliados" (Jordana 1994:139). Ambos hechos tienen su origen tanto en las funciones atribuidas a los comités de empresa españoles en los centros de trabajo como en los derechos que los resultados de las votaciones a dichos comités otorgan a las organizaciones sindicales para la negociación supraempresarial y la actividad en el ámbito político.

2.2.2.1. Sindicalismo de electores y sindicalismo de afiliados

En los centros de trabajo, el ordenamiento laboral español fijó un modelo formalmente "dual" de representación de los empleados constituido por las secciones sindicales y los comités de empresa. Las secciones sindicales son órganos de los sindicatos en las empresas, y están integrados por sus afiliados, los cuales -y no el sindicato- eligen a los representantes de la sección sindical, los delegados sindicales. Ahora bien, para que éstos gocen de todas sus prerrogativas y derechos sobre negociación y acción colectiva tienen que actuar en empresas o centros de 250 trabajadores o más y tener una determinada audiencia entre ellos, la cual se mide mediante los

---

[152] Estoy empleando la concepción de Lange y Ross (1990:294) que plantea a los sindicatos como sistemas de mediación y de intercambio entre quienes necesitan vender su fuerza de trabajo y quienes pueden comprarla y/o con instancias políticas.

[153] Durante una entrevista con el autor celebrada el día 18-7-97, Julián Ariza afirmó:

"Nosotros realmente hemos hecho siempre, y aún hoy, mucho más esfuerzo en las elecciones sindicales que en afiliar. Eso es un defecto. Es una cosa que tenemos que decir en sentido autocrítico".

resultados del sindicato en las elecciones al comité del centro de trabajo en cuestión[154] o "por irradiación", es decir, pertenecer a sindicatos considerados como "más representativos" a nivel estatal o de Comunidad Autónoma (Sáez Lara 1992:167 y ss, 241). Los comités de empresa son, por su parte, una representación unitaria de todos los trabajadores en los centros de trabajo, elegidos por ellos mediante listas cerradas y bloqueadas, independientemente de que estén o no afiliados a un sindicato o de la clase de contrato que tengan[155]. Por ley, a partir de diez trabajadores los centros de trabajo tienen que tener delegados de personal, y comités de empresa a partir de cincuenta (Sáez Lara 1992)[156]. Hasta aquí el modelo "dual" español se asemeja al existente en otros países europeos[157].

---

[154] Este modelo se ha repetido en la Hungría poscomunista donde, ante la fragmentación y rivalidad sindical, había que dirimir qué sindicatos estaban legitimados para negociar los convenios colectivos en las empresas. La postura finalmente adoptada estableció que los empresarios negociasen exclusivamente con aquellos sindicatos cuyas listas hubieran obtenido un 10% de los votos en las elecciones a comités de empresa (Davis 1995:382).

[155] Para su elección existen dos colegios electorales: uno para técnicos y administrativos (trabajadores no manuales), y otro para trabajadores especialistas y no cualificados (trabajadores manuales); pero la representación de los diferentes categorías profesionales no está diferenciada en el seno del comité, pues los representantes designados por cada colegio quedan integrados como miembros del órgano colegiado unitario, el cual ostenta indivisiblemente la representación de todo el personal de la empresa (Sáez Lara 1992:142). Hasta la reforma de 1994 existía un período limitado de cómputo de delegados a comités de empresa para medir la representatividad de los distintos sindicatos. Este período se establecía cada cuatro años y daba lugar a la proclamación oficial de resultados electorales. A partir de 1994 se suprime ese período de cálculo cerrado por lo que ahora la medición de la representatividad de los sindicatos se hará constante y no cada cierto tiempo (Matía Prim 1994:228-234).

[156] En Austria, Alemania, Italia, España y los Países Bajos, pueden presentarse candidatos no afiliados a ningún sindicato en las elecciones a comités de empresa (Visser 91/92:36). En Francia, por el contrario, en una primera vuelta, sólo los "sindicatos representativos" pueden presentar listas de candidatos. Si éstos no obtienen un 50% de los votos válidos, candidatos no sindicales pueden presentarse en una segunda vuelta (Rogers y Streeck 1994:122). En España, por el contrario, el

Los comités de empresa en España se diferencian, sin embargo, de la mayoría de sus homónimos europeos porque no se reparten con las secciones sindicales las funciones de intermediación entre los trabajadores y los empresarios (Sáez Lara 1992:208; Matía Prim 1994:223; Rogers y Streeck 1994)[158]. Así tanto unos como otros están

---

derecho a la presentación de candidaturas para las elecciones a representantes del personal corresponde a todo sindicato legalmente constituido, al margen de su peso representativo, o a candidatos avalados por un número de firmas de electores equivalente al menos a tres veces el número de puestos a cubrir. Obtendrán derecho a la atribución de representantes aquellas candidaturas que obtengan un 5% de los votos de su colegio electoral. La facultad para promover estas elecciones fue atribuida a los sindicatos "más representativos", a aquellos sindicatos que tuviesen un mínimo de un 10% de representantes en los centros de trabajo; o a los trabajadores del centro de trabajo a través del acuerdo mayoritario de los mismos (Sáez Lara 1992:142,149-153). Es muy dudosa, por tanto, la afirmación realizada por Boix de que las elevadas barreras electorales en la asignación de representantes sindicales es uno de los factores que explica que UGT y CCOO controlasen las tres cuartas partes de todos los delegados sindicales en 1986. El Tribunal Constitucional de hecho afirmaba con respecto a las limitaciones existentes para promover las elecciones sindicales que éstas constituían "una medida lógica de ordenación del proceso electoral [que] pretende evitar las disfuncionalidades derivadas de una atribución indiscriminada, y no altera los derechos de los excluidos, pues éstos pueden presentar su candidatura" (sentencia citada por Sáez Lara 1992:151).

[157] En Europa occidental los comités de empresa están regulados por ley en Austria, Bélgica, Alemania, Francia, Países Bajos y España (Visser 91/92:17). También lo están en Hungría (Davis 1995:380). En otros países, como Italia, Portugal o Noruega, son producto de la negociación colectiva (Visser 91/92). En Gran Bretaña, Irlanda, Suecia no existen propiamente dichos comités de empresa, es decir, representantes de todos los trabajadores en un centro de trabajo independientemente de que estén afiliados o no a un sindicato. Austria es el único país donde sólo nos encontramos en los centros de trabajo comités de empresa por lo que no existen secciones sindicales (Visser 91/92:13; Traxler 1992:274).

[158] Sólo los comités de empresa en Italia pueden ocuparse, como los españoles, de la negociación colectiva (Rogers y Streeck 1994:138). En Austria, que como vimos sólo tienen comités de empresa, éstos no pueden entrar en estas cuestiones, por lo que forzosamente la negociación colectiva en ese país es supraempresarial (Traxler 1992:274,275).

capacitados para negociar convenios colectivos y convocar huelgas[159], si bien, para que las secciones puedan negociar convenios que afecten a la totalidad de los trabajadores de la empresa, el ordenamiento laboral español determina que el respectivo sindicato debe poseer mayoría de miembros en el Comité de Empresa (Sáez Lara 1992:192-214)[160]. Igualmente, ambos tienen las mismas competencias para la participación en la gestión empresarial (Sáez Lara 1992:213, 239)[161]. Algunos autores han considerado que el legislador español dio preferencia a la representación unitaria frente a los sindicatos en la negociación colectiva en las empresas (Führer 1996:202), o creen que se dan colisiones de competencias (Sáez Lara 1992:243); pero dicha preferencia es más formal que real porque los sindicatos

[159] En Alemania, los trabajadores son representados en los lugares de trabajo por comités de empresa que, como en España, formalmente no son cuerpos sindicales. Estos son elegidos cada tres años por todos los trabajadores independientemente de que estén afiliados o no. Los sindicatos pueden nombrar candidatos y competir con candidatos no afiliados, pero la DGB regularmente obtiene el 80% de los puestos. Los miembros de los comités de empresa tienen derecho a ser relevados de su trabajo para ocuparse de sus funciones en el comité, y los patronos tienen que proporcionarles espacio y otros recursos para que desempeñen su tarea. Tienen amplios derechos en la codeterminación, especialmente en el área de recursos humanos, pero no están autorizados a inmiscuirse en acciones de presión. Por ley, tienen la obligación de cooperar con el patrón (Streeck 1984: 306). En la Hungría poscomunista se volvieron a instituir comités de empresa para las empresas de más de 50 trabajadores (las de menor tamaño eligen a un delegado de personal) elegidos por todos los trabajadores de la empresa y donde los diversos sindicatos húngaros pueden nominar a sus candidatos. Las funciones de los comités consisten en decidir cómo se distribuyen prestaciones no salariales, vigilar sobre la normativa de salud laboral, dar su opinión en cuestiones privatización, formación y jubilación, inversión. Sin embargo, sólo los sindicatos pueden convocar huelgas, y los comités de empresa no pueden interferir en la negociación colectiva (Davis 1995:380,381). Lo mismo ocurre en Austria y en los Países Bajos (Visser 91/92:35).

[160] En cambio, todas las secciones sindicales de cualquier sindicato, con independencia de su representatividad en la empresa, son competentes en materia de planteamientos de conflictos individuales y colectivos (Sáez Lara 1992:215).

[161] De nuevo, en el caso de la sección sindical, ésta ha de actuar en empresas de 250 trabajadores o más (Sáez Lara 1992:209)

españoles han convertido a los primeros, mediante la presentación de candidatos, en sus instrumentos de actuación en los centros de trabajo (Fishman y Mershon 1993:68). En pocas palabras, dadas sus competencias, éstos no son un "segundo canal" para la comunicación entre los trabajadores y la dirección de las empresas (Rogers y Streeck 1994:127), sino la institución a través de la cual el ordenamiento jurídico español ha dispuesto que los sindicatos actuasen dentro de las empresas. De hecho, en opinión de Fishman y Mershon (1993:68), "[e]n España el mecanismo central para la representación y liderazgo en los centros de trabajo es el comité de empresa"[162].

Pero la importancia de las elecciones a comités de empresa para entender el comportamiento sindical no se limita a sus efectos sobre las competencias de los sindicatos en los centros de trabajo, sino también en las negociaciones de ámbito supraempresarial: con las organizaciones patronales, las Administraciones Públicas, o ambas. En principio, el ordenamiento laboral optó, esta vez, por una regulación clara en favor de los sindicatos, otorgándoles la exclusiva capacidad colectiva en representación de los intereses de los trabajadores. Ahora bien, ante la cuestión de qué sindicatos estaban legitimados para hacerlo, el legislador español estableció como único criterio los resultados de las elecciones sindicales, de tal forma que sólo están capacitados aquellos que cuenten con un mínimo del 10% de los miembros de los comités de empresa comprendidos en el ámbito de aplicación del convenio colectivo negociado. El resto de sindicatos queda así excluido como representantes de los trabajadores en las negociaciones colectivas supraempresariales[163]. Igualmente, los

---

[162] Se comprende de esta manera que la UGT afirmase (R.34C.UGT.1986:39):

"Nuestros delegados y miembros de Comités de Empresa son el mayor capital político y humano que tiene la UGT. En torno a ellos tenemos que conectar con el conjunto de los trabajadores de su entorno, única manera de caminar hacia el crecimiento en la afiliación y de conseguir en el tiempo una UGT hegemónica".

[163] El legislador admitió una excepción en los convenios colectivos de ámbito estatal al reconocerse también capacidad de negociación a aquellos sindicatos cuyo ámbito de representación fuese exclusivamente el de una Comunidad Autónoma y hubiesen alcanzado al menos un 15% de todos los miembros de Comités de Empresa o Delegados de Personal en dicho ámbito (Führer 1996:202).

resultados de las elecciones sindicales constituyen el único criterio jurídico-laboral de regulación de todos los derechos de representación legal y económicos de los sindicatos (Führer 1996:257)[164]. En palabras de la propia UGT:

> "De la importancia que tienen el concepto y la cuantificación de central sindical representativa recogida en la LOLS se derivan toda una serie de competencias vitales para la práctica y el desarrollo de una central sindical (...). En dicha Ley sólo los sindicatos más representativos tienen garantizada su presencia en la negociación colectiva (esencia de un sindicato); en la representación institucional; su acceso al reparto del patrimonio sindical acumulado, etc. En definitiva, a cualquier tipo de ayuda institucional que se establezca. Este conjunto de garantías se traslada a todos los niveles de la acción sindical por el poder de irradiación que contempla la LOLS para los sindicatos más representativos" (R.34C.UGT.1986:39,40).

En conclusión, la importancia de las elecciones a los comités de empresa en España se pone de manifiesto al observar que no son sólo un indicador del nivel de apoyo del que goza un determinado sindicato entre los trabajadores, sino el procedimiento existente para que pueda participar en la negociación colectiva con los empresarios en sus diferentes niveles, así como para tener acceso al ámbito político[165]. De hecho, España parece ser así el único país europeo donde se combina a la vez la capacidad de los comités de empresa para negociar salarios y convocar huelgas en las empresas, con la

---

[164] Si en un primer momento las subvenciones públicas sólo se distribuyeron entre los sindicatos más representativos, una sentencia del Tribunal Constitucional dictaminó que también se concediesen entre todas aquellas organizaciones sindicales que en las elecciones sindicales hubieran conseguido delegados con objeto de garantizar la libertad sindical (Führer 1996:181).

[165] De este modo, la pérdida de afiliados puede suponer un quebranto económico y una pérdida de apoyo por parte de los trabajadores, pero no implica que el sindicato pierda además su capacidad para actuar en una determinada empresa o sector, o de cara a las Administraciones Públicas. Esto sí que puede ocurrir si pierde un determinado nivel de representatividad medido en las elecciones sindicales.

utilización de sus resultados electorales como único criterio para medir la representatividad de los sindicatos españoles y otorgarles así capacidad de negociación supraempresarial y de participación en las Organismos Públicos, obtener financiación etc[166]. En otras palabras, en aquellos países donde algún tipo de elección laboral es utilizado para medir la representatividad de los sindicatos[167], los comités de empresa no están autorizados a convocar huelgas y negociar salarios; pero cuando sí lo están, caso italiano[168], las leyes laborales no se basan

[166] Véase Matía Prim (1994) para la doble finalidad del sistema electoral sindical en España.

[167] No sólo en España se mide la representatividad de los sindicatos por otros medios diferentes a la afiliación. En Francia, hasta mediados de los años sesenta, se utilizaron los resultados de las elecciones a los consejos de la Seguridad Social, de 1966 a 1979, los resultados de las elecciones a los comités de empresa, y a partir de ese año a los comités "prud'homales" o comités paritarios (Mouriaux 1985:160). En Bélgica y en Hungría se utilizan los resultados de las elecciones a comités de empresa como indicador de la representatividad de cada sindicato (Vilrokx y Van Leemput 1992:375; Cox y Vass 1994:169; Davis 1995:375). En Austria, el sindicalismo es organizativamente unitario, pero no así en tendencias ideológicas. Siete facciones políticas conviven dentro de la ÖGB, con un status cuasi-oficial. La fuerza de cada facción política y su representación en los cuerpos sindicales a todos los niveles se determina por el resultado de las elecciones a comités de empresa donde cada facción presenta listas separadas de candidatos, compitiendo por el apoyo de los trabajadores. Sólo un 10% de los miembros de los comités de empresa austriacos no pertenecen a la ÖGB (Traxler 1992:281).

[168] En Italia existen los *consigli de fabbrica*, los cuales representan a todos los trabajadores en una empresa, pero, a diferencia de los comités de empresa españoles, los *consigli* constituyen la base estructural común de las diferentes confederaciones sindicales italianas desde 1972. Además mientras que en España los comités de empresa son elegidos según procedimientos establecidos por el ordenamiento laboral, en Italia los consejos son elegidos por unos mecanismos menos institucionalizados establecidos en el transcurso de la acción colectiva de los trabajadores, sin que la federación CGIL-CISL-UIL nunca haya establecido, y raramente discutido, reglas formales de elección de los consejos de fábrica y sus operaciones. Así en las empresas italianas es poco frecuente que haya listas formales de candidatos sindicales -al contrario de caso español donde la ley laboral establece incluso cómo han de ser- "and the confederations do not engage in institutionalised competition in factory council elections (...). Although workers tend to know the

en tales resultados para discriminar a los sindicatos representativos de los que no lo son[169]. Parece claro, por tanto, que la representatividad de UGT y CCOO no se limita a ese 16% de afiliación, sino viene dada por los resultados de las elecciones a comités de empresa y delegados de personal, y que, por ello, estas elecciones son objeto de un interés mayor que la afiliación por parte de las organizaciones sindicales.

De hecho, mientras que la tasa de afiliación de CCOO y UGT (y del conjunto de las organizaciones sindicales españolas) cayó desde 1978 hasta mediados de los 80[170], la proporción de

TABLA 8.Resultados de las elecciones sindicales en España[171]

confederal affiliation of candidates, the candidates do not stand as official representatives of a confederation" (Fishman y Mershon 1993:69,74). Parece, así pues, que el sistema italiano de consejos de fábrica no ha favorecido la competencia intersindical como sí ha hecho el sistema español.

[169] La UGT consideraba respecto a las elecciones sindicales de otoño de 1986 que sus "resultados van a ser claves para el futuro del Movimiento Sindical y particularmente para conformar un mapa sindical tanto en las Comunidades Autónomas como en todo el país [y] el protagonismo de la UGT a medio plazo va a depender de esos resultados" (G.34C.UGT.1986:83,84).

[170] Los estudios de Jordana (1996:215) señalan que la tasa de afiliación estuvo cayendo en España desde 1978 hasta mediados de la década, pero que a partir sobre todo de 1987 se produjo un crecimiento ininterrumpido hasta la crisis económica de 1993. La tasa de afiliación varía en función de cómo la medimos:

-Si tomamos en cuenta la afiliación total con respecto al total de la población asalariada más desempleados, pasó de una tasa del 25,97% en 1978 a un mínimo del 10,49% en 1986, para remontar al 17,91% en 1992, bajando al 17,2% en 1994.

-Si tomamos en cuenta la afiliación (descontando los miembros sin ocupación) con respecto a total de la población ocupada asalariada, pasó de una tasa del 28,45% en 1978 a la mitad (13,64%) en 1986, para remontar al 21,54% en 1992, y 22,68% en 1994.

[171] Según Escobar (1993:21) alrededor del 75% de los trabajadores en empresas de más de 50 empleados tienen la oportunidad de votar en las elecciones sindicales y alrededor del 70% de estas empresas tienen un comité de empresa. La participación rondó el 79,8% en las elecciones de 1986 y el 74% en las de 1990 (Escobar 1993:41).

Elecciones	UGT	CCOO	Otros sindicatos	Grupo de trabajadores
1978	21,7	34,4	25,7	18,1
1980	29,3	30,9	24,0	15,8
1982	36,7	33,4	17,8	12,1
1986	40,9	34,5	17,8	7,6
1990	43,0	37,5	17,3	3,8
1995[172]	34,7	37,8		[27,5]

delegados a comités de empresa que iban por las listas de estos dos sindicatos aumentó hasta alcanzar su cénit en las elecciones sindicales de 1990 con un 80% de los delegados[173].

[172] Como hemos comentado antes, en 1994 se suprimió el establecimiento de un período de cómputo de delegados a comités de empresa (hasta 1982 se fijaba cada dos años). Los datos que aquí se dan son los resultados de la representatividad a los comités de empresa de 1995.

[173] Varios autores (Jordana 1994: 156; Visser 1991/92:5) han mantenido que la importancia de las elecciones sindicales en España influye en la forma que tienen los trabajadores de mostrar su implicación en la acción colectiva organizada, no incentivando la afiliación a los sindicatos. Al respecto Antón Saracíbar y Pedro Gil (1987:49) defendían que era "imprescindible superar una situación como la que se produce en nuestro país, en la que el trabajador afiliado se encuentra discriminado frente al no afiliado, ya que éste, eludiendo todo compromiso económico y personal con el sindicato, obtiene las mismas ventajas que el trabajador afiliado". Lo mismo sostuvo Julián Ariza durante la entrevista con el autor celebrada el 18-7-97. Sin embargo, se ha defendido igualmente que el sistema italiano de comités de empresa, cuyas competencias son similares a las de los comités españoles, produce el efecto contrario sobre la afiliación a los sindicatos en aquel país (Rogers y Streeck 1994:139). Hay que añadir, sin embargo, que según Fishman y Mershon (1993:70) muchos líderes sindicales de empresa muestran bastante desinterés por aumentar la afiliación pues su forma de entender la acción sindical -en gran parte producto de la experiencia bajo el franquismo- les anima a representar y movilizar a los trabajadores sin tener en cuenta si están afiliados o no y, por tanto, hacen poco por intentar aumentar la afiliación. Parece, pues, que la cuestión de por qué la afiliación en

Esto no quiere decir que la afiliación sea un asunto menor o irrelevante para las organizaciones sindicales españolas. El propio sindicato socialista defendía que afiliación y elecciones sindicales eran "los dos indicadores más claros de la implantación y el crecimiento de la UGT" (R.34C.UGT.1986:39). Los ugetistas consideraban que, si en las confrontaciones electorales los trabajadores refrendaban su apoyo a su opción sindical, mediante el incremento de su afiliación se corroboraba que "el proyecto sindical que [propugnaban era] atractivo y respond[ía] a las demandas, necesidades e intereses de una amplísima fracción de la clase trabajadora" (R.34C.UGT.1986:39). Creían conveniente de esta manera contar con una importante afiliación para tener realmente unas estructuras orgánicas fuertes y amplias por lo que la organización "debía sentir como necesidad prioritaria la captación de nuevos miembros" (R.34C.UGT.1986:39; R.35C.UGT.1990:30) y hacer "útil y necesaria la sindicación de la mayoría de los trabajadores, tanto activos como inactivos" (R.35C.UGT.1990:29). Pero, en última instancia, dado lo que disponía la LOLS y las modificaciones introducidas en el Estatuto de los Trabajadores, las elecciones sindicales eran claramente para la UGT el instrumento mediante el cual los trabajadores españoles mostraban su preferencia sobre los diferentes modelos de relaciones laborales defendidos por cada sindicato (R.34C.UGT.1986:39)[174], por lo que, aun teniendo la sección sindical un papel primordial en la expansión del sindicato, los delegados y miembros de los comités de empresa constituían su "mayor capital político y humano", y los resultados electorales indicarían qué política sindical contaba con el respaldo de los trabajadores españoles (Saracíbar y Gil 1987:48).

España es una de las más bajas de Europa es bastante compleja, pero en cualquier caso "la caída de la afiliación [sindical] puede ser compatible con el mantenimiento de un grado importante de apoyo [a los sindicatos]" (Pérez Díaz 1993:321).

[174] Así, en la cuestión de la Reconversión Industrial manifestaban que "[t]anto la marcha de las ZUR [zonas de urgente reindustrialización] que están captando interesantes inversiones, como la de los Fondos de Promoción de Empleo, *como algunas elecciones sindicales recientes* (UGT ha ganado en AESA y en Astilleros de Gijón, por ejemplo) demuestra que la lucha de UGT no ha sido en vano ni muchísimo menos" (G.34C.UGT.1986:128, mía la cursiva).

Aun así, se podría alegar que los sindicatos no defienden a aquellas secciones de las clases trabajadoras que, por la razón que sea, no votan en las elecciones sindicales, por ejemplo los trabajadores con contratos temporales o los jubilados y pensionistas[175]. Pero, ¿es cierto que la UGT y CCOO sólo defendían los intereses de sus votantes o afiliados, de los trabajadores manuales con contratos indefinidos? Si esto es así, ¿por qué hacían demandas en favor de

[175] De hecho, Streeck (1984:306) ha ofrecido una explicación alternativa para el "egoísmo" sindical basada en la posesión de determinadas facultades por parte de los comités de empresa y no porque constituyesen organizaciones con pocos afiliados. Este autor consideraba fundamental que los comités de empresa no tuviesen la facultad de declarar huelgas y negociar convenios pues temía que, si bien pueden prevenir la fragmentación de los intereses de la fuerza de trabajo *dentro de la empresa*, sólo tendrían representación y defensa de sus intereses los individuos que estuviesen autorizados o pudiesen participar en las votaciones a dichos comités, de tal forma que mediante los comités de empresa "the voice of labour is now more than ever that of those employed, and wanting to remain employed, in a specific place of work; and it is their interest, highly particularistic from a class perspective and no longer contaminated by organizationally enforced 'solidarity', that puts to its own use the institutional instruments of work-place participation which were created in the past for other, more general purposes". Así, los comités de empresa se convertían en "the border guards and, indeed, the rulers of the internal labour market, ensuring that nobody is allowed in who might in the future threaten the employment status of those already employed" (Streeck 1984:306-308). Finalmente, temía que, como la mayoría de los miembros de comité de empresa pertenecían a los sindicatos, influyesen para que las políticas sindicales se ajusten a sus opiniones e intereses; o, si no, que hiciesen caso omiso de las directrices de las cúpulas sindicales (Streeck 1984:308,309). Esta hipótesis la podemos poner en conexión con la crítica que hace Pontusson de la utilización de la tasa de afiliación como indicador de la amplitud de las organizaciones sindicales (Pontusson 1992:13). Señala en concreto que un movimiento sindical puede tener más afiliados que otro (en concreto compara el caso británico y alemán) pero estar compuesto el primero, sin embargo, de sindicatos que representen a grupos de trabajadores pequeños mientras que en segundo cada sindicato particular representa a amplios grupos de trabajadores. De ahí que concluya que "the British *labor movement* is quite encompassing, but British *unions* represent narrow constituencies" (suya la cursiva). Esto puede ocurrir igualmente con un sindicalismo donde las decisiones se tomen a nivel de empresa, como sería el caso de unos comités de empresa que *sólo* rindiesen cuentas a sus votantes.

incrementar el gasto social? ¿Lo hubiera hecho un sindicalismo que verdaderamente sólo defendiese a sus miembros, sean afiliados o votantes? A modo de ejemplo, podemos recordar el sindicalismo de Jimmy Hoffa, líder sindical americano de la "Hermandad Internacional de Transportistas" (IBT) en los años cincuenta y sesenta[176]. Su actividad sindical se caracterizaba por carecer de objetivos que no fuesen la defensa -por cualquier medio- de los intereses materiales, especialmente condiciones de trabajo y salario, de los miembros de su sindicato; y menospreciaba así el llamado "sindicalismo social", ligado al "liberalismo" americano, por considerarlo poco pragmático y excesivamente teórico. Hoffa no dudaba, sin embargo, en emplear una retórica radical y obrerista cuando la ocasión lo requería[177].

Parece que Hoffa en sus negociaciones con los empresarios tuvo bastante éxito, alcanzando los objetivos que se proponía. Consiguió así cuantiosos beneficios para los trabajadores afiliados a la IBT: sus salarios se triplicaron durante su mandato, aumentaron los períodos de vacaciones y descanso y las pensiones, se mejoraron los seguros médicos por percances durante los trayectos y otros servicios. Estas ganancias tangibles, junto a un estilo directo de relacionarse con el trabajador de a pie, le reportó bastante popularidad entre los miembros de la IBT, algunos de los cuales -cuando Hoffa comenzó a tener problemas con la justicia por sus relaciones con la mafia- respondían:

"Jimmy [Hoffa]'s always been good to us drivers and that's all we care about" (citado por Sloane 1991:128)[178].

---

[176] La descripción que aquí se da de Hoffa está tomada de la biografía de Sloane (1991) especialmente entre las páginas: 127-129 y 143-146.

[177] El pensamiento sociopolítico de Hoffa, sin embargo, estaba más cerca del conservadurismo americano; y defendía la libre empresa, la búsqueda de beneficio privado y la supervivencia de los mejores, al mismo tiempo que recelaba de lo que los estadounidenses llaman "Big Government".

[178] Reprochado una vez de tener unos objetivos sindicales muy limitados, respondió:

La dirección de la UGT, por el contrario, siempre proclamó que pretendía defender, a corto y medio plazo, las condiciones materiales de todos los trabajadores, con especial insistencia de los menos favorecidos; a más largo plazo defendía la creación de una sociedad socialista[179]. Estos objetivos le llevaron, como hemos visto en los capítulos anteriores, a censurar la política social del Gobierno socialista al final de su primera legislatura (1982-1986) y de nuevo a partir de 1987 hasta el final del período que aquí se estudia[180].

La dirección de la UGT consideraba que el hecho de que el excedente bruto de explotación hubiese vuelto a sobrepasar a la remuneración de los asalariados en el reparto de la Renta Nacional significaba que el crecimiento económico no había venido

---

"Don't give me that! What do you think I am, the State Department? I don't want to get into world politics. *I have enough trouble taking care of my own members*" (citado por Sloane 1991:146, mía la cursiva).

[179] Uno de los objetivos principales de política sindical fijados en las resoluciones de los congresos de la UGT anteriores a la ruptura lo constituye su preocupación por proteger y mejorar la suerte de los sectores de la población más débiles. Así en el 33º Congreso este objetivo implicaba que había que dar una "salida solidaria" a la crisis económica y desarrollar una mayor protección a los desempleados y sectores más desprotegidos (R.33C.UGT.1983:40). En el 34º Congreso el mismo objetivo debía plasmarse en una especial atención al poder adquisitivo de los sectores más desprotegidos, la lucha contra el incremento de las desigualdades sociales y la exigencia de políticas redistributivas, y "proteger e integrar en la acción sindical al número creciente de trabajadores que [tenían] peores condiciones de trabajo y derechos disminuidos o inexistentes, evitando la tendencia hacia la dualidad cada vez más acentuada en el seno de la clase trabajadora, la precarización del empleo y el crecimiento de la economía sumergida" (R.34C.UGT.1986:60).

[180] Como hemos visto, la dirección de la UGT se quedó conforme con la marcha de la política social en la segunda mitad de 1986, pero a partir del año siguiente volvió a denunciar los resultados sociales de las políticas del gobierno socialista. Así el Secretario General de la UGT mostró su descontento con la política social del Gobierno socialista en el Congreso de los socialistas de enero de 1988 y las críticas se recrudecerían en el primer informe de la *Evolución Social en España*, llevado a cabo por un instituto de la UGT, el Instituto Sindical de Estudios (ISE), aparecido en julio de 1988.

"acompañado de la correspondiente progresión social" (ISE 1988:200-204). Esto también se evidenciaba en el hecho de que el gasto en Seguridad Social a partir de 1982 se hubiese estabilizado en prácticamente el mismo porcentaje del PIB, así como que las prestaciones sociales hubieran crecido menos que el conjunto de los gastos del Estado (ISE 1988:230). Entrando ya en críticas más concretas, en el capítulo de pensiones rechazaban principalmente que desde 1977-78 su incremento se hubiera concentrado prácticamente en las mínimas, congelando las superiores[181], o la escasa generalización de las pensiones no contributivas[182]. Con respecto a la cobertura por desempleo -una de las formas que tenía la UGT de entender la solidaridad de los ciudadanos con empleo hacia los parados (R.34C.UGT.1986:100)- ya vimos que en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado para 1987 la UGT consideraba que el Gobierno había realizado un "avance sustancial". Sin embargo, la cuestión continuaría siendo fruto de enfrentamientos en los años siguientes[183] y terminaría siendo uno de los motivos que llevaron a UGT y CCOO a convocar una huelga general de 24 horas en diciembre de 1988[184]. Igualmente criticaron el incremento de la

[181] Además consideraban que esa revalorización mayor de las pensiones mínimas no había sido tan importante. Señalaban que el mayor incremento de las pensiones mínimas se había producido en el período 1977-82, después sólo habían ganado poder adquisitivo las pensiones mínimas con cónyuge a cargo mientras que perdía o mantenía su poder adquisitivo en el mejor de los casos el resto de pensiones mínimas (ISE 1988:246).

[182] Aunque reconocían el incremento en la cuantía de las pensiones asistenciales por ancianidad, que en 1987 era un 82% superior respecto a la de 1982 en pesetas constantes de 1982 (ISE 1988:253).

[183] En 1984 la tasa de cobertura bruta por desempleo era del 26,4% con respecto al total del desempleo registrado, subió hasta el 32,4% en 1985 para volver a caer hasta el 28,9% en 1988.

[184] En "Reflexiones de UGT para un compromiso por el empleo (1)" (*Información Sindical*, núm. 59, abril de 1988, pp. 19, 20) denunciaban no sólo que la tasa de cobertura hubiera descendido constantemente desde 1985 sino también que había disminuido el volumen absoluto de desempleados protegidos. Para este sindicato se había pasado, medido en tasa bruta de cobertura, de un 48,66% en 1980 a un 28,97% en 1987; y consideraban que esa tendencia decreciente continuaba, ya que en

"precariedad en el trabajo"[185] o la ralentización en la creación de

---

enero de 1988 la tasa bruta de cobertura había bajado a un 27,5% de los parados (*Información Sindical*, núm. 62, julio de 1988). Véase igualmente "Prioridades del espacio social europeo. Postura de la UGT", pág. 11, op. cit.

[185] En "La propuesta programática de U.G.T. ante las Elecciones Generales del 22 de Junio de 1.986" (pág. 3, op. cit.) mostraban ya su preocupación por "el progresivo crecimiento de la importancia que representa la contratación especial acogida a las diversas modalidades de fomento del empleo frente a la ordinaria, por tiempo indefinido". En noviembre de 1987 criticaban que en el primer semestre de ese año, el 47,13% de las nuevas contrataciones se hubiese acogido a los programas de Fomento del Empleo, y que de ese porcentaje, el 38,23% correspondiese a contratos temporales ("Jornadas Sobre Negociación Colectiva. Secretaria Confederal de Acción Sindical", documento adjunto a la carta del Secretario de Acción Sindical del 6 de noviembre de 1.987, op. cit.). En abril de 1988 se temían la progresiva desaparición del empleo fijo ante el ritmo de crecimiento de la contratación temporal ("Reflexiones de UGT para un compromiso por el empleo", op. cit.), y en mayo denunciaban:

"[E]l volumen de trabajadores sin contrato ordinario fijo en España (21,12% de los asalariados) alcanza tasas inauditas en Europa y un volumen muy peligroso para la consecución de una sociedad solidaria y vertebrada..." (Véanse los "Comentarios sucintos a la medida para la inserción laboral y el empleo de los jóvenes propuesta por el PSOE", Madrid, 26 de mayo de 1988. Documento remitido por el Secretario de Acción Sindical, Apolinar Rodríguez, a las F.F y U.U. el 31 de mayo de 1988. Caja: FEJP/516. F.L.C.).

En la primavera del año siguiente creían que si el incremento del uso de contratos temporales continuaba al mismo ritmo, a finales de 1992 se tendría en España un índice de precarización del 50%, "con un enorme peso entre las mujeres y la práctica totalidad de los jóvenes, con lo que incluso podríamos llegar a una situación en que la relación laboral estable fuera la excepción y la precaria la norma, lo que conduciría a riesgos elevados sobre la estabilidad social, completamente desconocidos en la historia reciente de los países de la cultura europea" (en *Información Sindical*, núm. 69/70, marzo/abril 1989, pág. 23). Meses después:

"La evolución del mercado de trabajo, que nos sitúa ya en más del 25% de contratos temporales sobre el total de asalariados, asistiendo pasivamente la Administración. Los sindicatos, dentro de la lucha contra la precarización, hemos redoblado los esfuerzos por la vía de la negociación" (en "Negociación Colectiva 1.989. Informe Semestral", adjunto a la carta-circular del Secretario de Acción Sindical del 31 de julio de 1.989, op. cit.).

empleo[186]. En el caso de la contratación temporal, la dirección de la UGT puntualizaba que su incremento no era el producto de las medidas del Gobierno, que ellos habían aceptado en el AES, sino del abuso por parte de los empresarios y la falta de control de la Administración[187]. Finalmente también criticaban el bajo gasto en protección familiar, la extensión de la protección sanitaria a costa de su intensidad[188] y concesiones "a los sectores más corporativos de la sanidad pública" (ISE 1988:262), que los gastos en educación no se hubiesen incrementado al mismo ritmo que el conjunto de los Presupuestos del Estado[189], o el encarecimiento del precio de la

---

Como vimos en tercer capítulo, ésta sería una de las críticas de la UGT al Gobierno del PSOE durante la tercera legislatura.

[186] Señalaban que mientras en 1986 se crecía al 3,3% con un aumento del empleo del 3% y en 1987 -creciendo la economía un 5,5%- aumentaba la ocupación un 5,2%, en 1988, con un crecimiento económico similar -un 5%- el empleo se sólo crecía un 2,8% a pesar de un incremento de inversiones similar (en *Información Sindical*, núm. 69/70, marzo/abril de 1989).

[187] Véanse las "Jornadas Sobre Negociación Colectiva. Secretaria Confederal de Acción Sindical" adjunto a la carta del Secretario de Acción Sindical del 6 de noviembre de 1.987, op. cit.; las "Reflexiones de UGT para un compromiso por el empleo", op. cit.; la carta-circular del Secretario de Acción Sindical, Apolinar Rodríguez a los Secretarios de Acción Sindical de las F.F. y U.U., fechada en Madrid a 1 de junio de 1988 (Caja: FEJP/516, FLC); el documento de la Secretaría de Acción Sindical de la caja FEJP/517, (FLC). En todas ellas en general se exponía:

"La política empresarial de contrataciones, basada en el mal uso y en el abuso de figuras contractuales, principalmente de fomento de empleo, sin atender a las características, circunstancias y requisitos para las que estas contrataciones fueron creadas, está dando lugar a una creciente precarización del mercado de trabajo" ("Circular de Negociación Colectiva para 1989", adjunta a la carta del Secretario de Acción Sindical, Apolinar Rodríguez, a las F.F. y U.U., fechada en Madrid a 30 de enero de 1.989, pág. 12. Caja: FEJP/517, FLC).

[188] Si en 1982 el gasto por persona protegida (en pesetas constantes de 1982) era de 23.461, en 1984 bajaba a 20.516 para aumentar hasta 23.335 en 1987 (ISE 1988:257).

[189] En tanto que éstos experimentaron un crecimiento del 603%, los de educación crecieron en un 430% en el período señalado (ISE 1988:268).

vivienda, etc[190]. En pocas palabras, para la dirección de la UGT "la política de ajuste no [había] conllevado un mejoramiento de indicadores sociales básicos"[191]. ¿Eran mera retórica estas críticas para cubrir lo que realmente les interesaba: los salarios de sus afiliados y votantes? ¿Iban en serio los líderes de la UGT en su denuncia de las carencias sociales?

2.2.2.2. Los enfrentamientos en política social

En septiembre de 1987 la dirección de la UGT se enfrentó con el Gobierno socialista por el incremento de las pensiones, sueldos de los funcionarios y del S.M.I. para el año siguiente. La dirección de la UGT quería que éstos colectivos tuviesen un incremento similar al que habían reclamado en la negociación colectiva con los empresarios a principios de año, lo que implicaba dos puntos por encima de la inflación media prevista para 1988[192]. Por el contrario, el área

---

[190] La consideración de la UGT de que al Gobierno socialista le faltaba preocupación social queda plenamente puesto de manifiesto por ejemplo cuando afirmaban con respecto del SMI:

"Sin duda, las posibilidades del momento económico han permitido durante estos años un mayor incremento para los trabajadores sujetos a SMI, de ahí que sólo podamos entender lo ocurrido como el resultado de una política insolidaria" (Carta del Secretario de Acción Sindical, Apolinar Rodríguez, a las F.F. y U.U., sobre la revisión del SMI, fechada en Madrid a 13 de enero de 1.989. Caja FEJP/517, FLC).

[191] Discurso de Nicolás Redondo al Congreso del PSOE de 1988, Unión Editorial, Madrid, 1986.

[192] La inflación prevista para finales de 1988 era del 3% y la media del 4% por lo que pedían un incremento medio del 6%. Posteriormente aceptaron rebajar en medio punto su demanda ("Circular de Negociación Colectiva para 1.988", documento adjunto a la carta-circular del Secretario de Acción Sindical del 1 de febrero de 1988, op. cit.). Además de ese incremento medio de las pensiones de 5,5%, reclamaban también igualar las pensión mínima para aquéllas viudas o viudos mayores de 65 años que no tuviesen otra renta con la pensión mínima por jubilación sin cónyuge a cargo, igualar las pensiones por invalidez total a los menores de 65 años con las de los pensionistas de jubilación menores de 65 años y reducción de 69 a 65 años la edad para percibir la pensión asistencial por ancianidad (Documento

económica del Gobierno consideraba que ese incremento impedía consolidar la evolución económica y mantener el saneamiento financiero del sector público con una reducción de otro medio punto del déficit público (*El País* 19-9-87). Tras semanas de intensas negociaciones entre el Gobierno y la UGT, durante las cuales miembros del aparato del Partido y del Gobierno intentaron conciliar las dos posturas, no se llegó a ningún acuerdo final a causa de la firme oposición del Ministro de Economía, Carlos Solchaga, quien contaba con el apoyo del Presidente del Gobierno, Felipe González[193]. Para la

---

"Reunión con las Federaciones", Madrid a 30 de septiembre de 1987. Caja: FEJP/515, FLC). Pedían igualmente que se ampliase la cobertura a los desempleados, el reconocimiento del derecho de las centrales sindicales a negociar las condiciones salariales y laborales de los funcionarios (establecimiento de una cláusula de revisión salarial), control de la oferta de empleo público, y aumento de los fondos adicionales para equilibrar desigualdades retributivas de los funcionarios (*El País* 30-9-87).

[193] Con objeto de evitar la ruptura entre el PSOE y la UGT, el Vicepresidente del Gobierno y Vicesecretario General del partido, Alfonso Guerra, el Ministro de las Administraciones Públicas, Joaquín Almunia, y el de Trabajo, Manuel Chaves, alcanzaron un preacuerdo con el Secretario de Organización de la UGT, Antón Saracíbar, y de Administración, Paulino Barrabés. Según documentos de la UGT, en ese preacuerdo el Vicepresidente del Gobierno llegó a aceptar una subida del 5,5% de las pensiones y sueldos de los funcionarios para 1988 ("Circular de Negociación Colectiva para 1.988", op. cit.).

Carlos Solchaga describió así los acontecimientos durante la entrevista con el autor celebrada el día 19-7-96:

"Se acaba la reunión e informan de lo que podrían ser unas líneas de acuerdo al Presidente del Gobierno, Felipe González, y éste les dice: pues id vosotros dos, el Ministro de Trabajo y el de Administraciones Públicas, a ver qué dice el Ministro de Hacienda y si él lo acepta, pues tiramos para adelante. Yo ya no me acuerdo de los términos concretos de la negociación, pero yo no lo acepté. Y para que no cupiera duda de donde estaban las cosas, delante de los dos Ministros llamé al Presidente. Le dije: mira no me parece aceptable por a, b, c y d. El presidente dijo que no [se aceptaba el preacuerdo]".

Por su parte, Joaquín Almunia, tiene un recuerdo similar, según lo describió en la entrevista con el autor del 29-7-96:

"Con la UGT llegamos a unos términos de acuerdo, no me puedo acordar cuáles eran, para el Presupuesto del 88, y se lo vamos a contar a Carlos Solchaga,

dirección de la UGT, los aumentos finalmente fijados para las pensiones, sueldos de los funcionarios y el SMI mostraban que el Gobierno rehusaba dar mayor énfasis a la política social (*El País* 5-9-87)[194]. Las discrepancias fueron lo suficientemente importantes como para que renunciaran a sus escaños por las listas del PSOE, el Secretario General de la UGT, Nicolás Redondo, y el de

---

Manuel Chaves y yo, a la calle Alcalá. Carlos Solchaga, aquello no lo ve. Llama a Felipe [González], le convence de que no se puede hacer por los equilibrios económicos y desbarata aquel acuerdo que hubiese podido permitir, por lo menos, desactivar algo que no intuíamos que estuviese tan extendido, que [los trabajadores] veían que no les llegaban más que las migajas de un crecimiento económico muy rápido".

Al final los incrementos fueron de un 5,3% para las pensiones pero:

"No obstante esa mejora de las pensiones, la valoramos insuficiente porque la capacidad de los Presupuestos permitía, cuando menos, acceder a nuestra reivindicación de mínimos, esto es, el 5,5% fijado por el Comité Confederal y que recogía el preacuerdo con el Vicepresidente del Gobierno, roto posteriormente" ("Circular de Negociación Colectiva para 1.988", pág. 8, op. cit.).

En cuanto al sueldo de los funcionarios:

"En el fallido preacuerdo con el Vicepresidente del Gobierno se acuerda que las retribuciones de los empleados públicos se incrementen el 5,5% para todo el colectivo, porcentaje que seguimos reivindicando como garantía mínima frente al 4% impuesto unilateralmente por el Gobierno" (vid. supra., pág. 9).

Finalmente en la cuestión del S.M.I:

"Como es sabido, otro aspecto conflictivo que ha marcado la etapa previa a la negociación colectiva ha sido la fijación del aumento del S.M.I. Una vez más, el Gobierno ha rehusado negociar en profundidad este tema y se ha limitado a evacuar la consulta preceptiva prevista en el E.T. y, sin estudio detallado ni contestación a nuestra propuesta, fijar unilateralmente la subida en 4,5% para 1988. Esta subida dista mucho de la requerida por UGT (7%) que pretendía recuperar en 1988 parte del poder adquisitivo perdido por el SMI desde 1983, y completar esa recuperación en 1989" (vid. supra., pág. 9).

[194] "La elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 1988 implicó un complejo proceso cuyos resultados en materia de retribuciones en la función pública y pensiones se resumen brevemente en el punto siguiente. La falta de acuerdo en estos puntos y la falta de sensibilidad demostrada en el establecimiento del Salario Mínimo Interprofesional no han supuesto, ciertamente, un restablecimiento del clima de diálogo social" (vid. supra., pág. 2).

Organización, Antón Saracíbar, así como que Justo Zambrana, diputado del PSOE, tuviese que abandonar su cargo de responsable de Relaciones Institucionales de la UGT.

2.2.2.3. Hacia la primera huelga general de la UGT al Gobierno del PSOE

Al año siguiente, 1988, la dirección ugetista continuó reclamando al Gobierno socialista[195] medidas de carácter laboral y participación sindical (como la reforma del INEM, la participación sindical en la gestión de las empresas públicas, constitución del CES, reconocimiento pleno del derecho a la negociación colectiva en la función pública), social (como dar cumplimiento a lo acordado en el AES sobre cobertura por desempleo, fomentar el empleo estable, retribuciones de pensionistas, subsidiados), económico (legislar la constitución de los fondos de inversión, mayor creación de empleo e inversión pública), y que sus opiniones fueran tenidas en cuenta en leyes diversas[196].

Sin embargo, a mediados del primer semestre de 1988, el Gobierno socialista pareció mostrarse más receptivo a las demandas sociales de la UGT (*El País* 11-5-88)[197]. El Presidente del Gobierno seguía considerando que una concertación global tripartita era la mejor forma de tratar los problemas pero, aun sin ella, estaba

---

[195] Véase el documento titulado "Puntos a Tratar en la Entrevista U.G.T. - Presidente del Gobierno", fechado el 31 de mayo de 1988. Caja: FEJP/516, FLC.

[196] Ley de Fondos de Pensiones, Ley de Infracciones y Sanciones en Materia Social o los proyectos de leyes de adaptación de la legislación sobre sociedades a las disposiciones comunitarias y de Bases de Procedimiento Laboral (vid. supra).

[197] En una conferencia de prensa, el Presidente del Gobierno, Felipe González, confirmaba que estaba dispuesto a ampliar los márgenes de la política social siempre que no se incrementase el déficit público (*El País* 11-5-88). A comienzos de junio de ese año Felipe González anunciaba que en los presupuestos de 1989 se incrementarían los gastos sociales, haciendo un esfuerzo importante en las partidas presupuestarias destinadas a pensiones, educación, justicia y sanidad, obras de infraestructuras intensivas en mano de obra (*El País* 8-6-88).

dispuesto a negociar las cuestiones planteadas por la UGT, junto a la puesta en marcha de un plan de empleo juvenil[198]. Además, algunos conflictos laborales parecían solucionarse por la vía de la negociación como los que afectaban al sector naval, Alúmina-Aluminio y el de los maestros (*El País* 11-5-88). Así, tras una serie de contactos que culminaron en la celebración de una reunión entre el Presidente del Gobierno y el Secretario General de la UGT, en junio de aquel año, el sindicato socialista llegó a creer "con cautela" que había conseguido del Gobierno que la concertación social ya no fuese de contrapartidas, y con los contenidos que quería[199]. En consecuencia, a

---

[198] "Si se quiere un aumento sostenido de la economía y que se cree empleo, la concertación es un mecanismo imprescindible. Por ejemplo, el control de la inflación es difícil de aplicar si no hay consenso. No insistiré, como el año pasado, en que ello se articule sobre un pacto social de carácter global. Pero sí que la línea directriz y la prioridad sea el empleo" (*El País* 8-6-88).

[199] El encuentro tuvo lugar el día 9 de junio de 1988. El Presidente del Gobierno estuvo acompañado por el Ministro de Trabajo. La delegación de la Comisión Ejecutiva de UGT estuvo presidida por el Secretario General y asistieron todos sus miembros salvo el Secretario de Organización y el de Relaciones Internacionales. Según Apolinar Rodríguez, el propósito de la entrevista era concretar la aceptación de las propuestas de UGT y fijar los procesos de negociación de las cuestiones planteadas. Como conclusión de la reunión, el Secretario de Acción Sindical afirmaba:

"La reunión mantenida ha sido positiva, permite desbloquear los temas que UGT venía planteando y abre unas negociaciones cuyos resultados requieren prudencia y cautela. No obstante, hemos encontrado receptividad a nuestros argumentos, un cambio de talante cuyo valor de fondo se tendrá que descubrir en las mesas comprometidas. Las negociaciones que se iniciarán pueden decantar el marco de reformas estructurales a favor del empleo y de los trabajadores, con su participación, *lo que supondría el giro social que demandamos. Pero tal situación no conduce a un único acuerdo global y tripartito*. Nuestro propósito de llevar a buen puerto las negociaciones que emprendamos no pretenden avalar políticas, sino defender los compromisos que alcancemos y hacerlos cumplir, puesto que nunca podremos mantener comportamientos laxos ante medidas negativas. Todo ello revela que las posiciones de UGT se abren camino en la sociedad, fruto de un trabajo que no es de la Comisión Ejecutiva sino de los cuadros y militancia a los que debemos felicitar por su esfuerzo" (Circular "Entrevista UGT-Presidente del

comienzos del verano de 1988 parecía que aún era posible frenar la escalada de enfrentamientos, o al menos así lo creía Nicolás Redondo quien advertía "[e]l año 1.989 está en nuestras manos, podemos salir de esta situación"[200].

El proceso negociador no marchó, sin embargo, como se había previsto. En primer lugar, UGT y CCOO rechazaron de plano las medidas propuestas por el Partido Socialista para combatir el paro juvenil[201], pues les parecía que en la lucha contra el paro no se trataba de potenciar "las contrataciones temporales y subvenciones [sino] la creación de empleo estable y la eliminación del subempleo camuflado"[202]. Para los líderes ugetistas el aumento de la contratación temporal no era el precio que había que pagar por la disminución del paro, sino el resultado de la sustitución de empleo estable por precario que hacían los empresarios[203]; el objetivo de la UGT era más y mejor empleo[204]. En segundo lugar, el Gobierno no accedió

Gobierno" enviada por el Secretario de Acción Sindical, Apolinar Rodríguez, a los Secretarios Generales y de Acción Sindical de las F.F. y U.U., fechada en Madrid el 10 de junio de 1988. Caja: FEJP/516, FLC, mía la cursiva).

En aquella reunión, según el resumen que hizo Apolinar Rodríguez, el Presidente del Gobierno consideraba que existía un mayor margen social -dentro del rigor- y que, aun sin ir mal, se podía crear más empleo si se mantenía el grado de crecimiento económico (en torno a un 4 o 5%) y de inversión (12%), teniendo en cuenta el desafío del 92. De nuevo volvió a mostrar su preferencia por mecanismos de coordinación y concertación los más amplios posibles, sin rechazar acuerdos a otros niveles.

[200] Vid. supra. Igualmente el Secretario General de la UGT reconocía un mes más tarde que las relaciones entre el sindicato y el Gobierno habían mejorado tras su entrevista con Felipe González (*El País* 3-7-88).

[201] Véanse los "Comentarios sucintos a la medida para la inserción laboral y el empleo de los jóvenes propuesta por el PSOE", op. cit.

[202] "Jornadas Sobre Negociación Colectiva. Secretaria Confederal de Acción Sindical", documento adjunto a la carta del Secretario de Acción Sindical del 6 de noviembre de 1.987, pp. 21-22, op. cit.

[203] Véase la carta-circular sobre precarización del Secretario de Acción Sindical del 1 de junio de 1988, op. cit.

[204] "[E]l incremento en la cantidad de empleos como objetivo no debe hacernos perder de vista la necesidad de una creciente mejora y estabilidad en los puestos de

finalmente a las peticiones de los sindicatos en las mesas abiertas durante el verano de 1988[205]. Hacia el mes de septiembre la dirección ugetista se mostraba decepcionada ante los obstáculos en la mesa de la reforma del INEM, por el cierre de las mesas donde se discutían las cuestiones vinculadas a las rentas públicas antes de conocer la evolución de los precios en agosto y su proyección para todo el año, ante la falta de avances en la mesa de cobertura de desempleo, y porque tampoco se habían producido consultas en las inversiones públicas, ni se había llegado a abrir la mesa encargada de analizar los fondos de inversión y la empresa pública[206]. Un mes más tarde el enfrentamiento se recrudecía ante la negativa del Gobierno socialista a compensar la pérdida de poder adquisitivo de los colectivos que dependían de los PGE (pensionistas, funcionarios y desempleados) por el repunte que se había producido de la inflación[207]. La

---

trabajo, tanto los que ya existen como los que se creen en adelante" ("Circular de Negociación Colectiva para 1989", adjunta a la carta del Secretario de Acción Sindical del 30 de enero de 1.989, pág. 9, op. cit.).

[205] Las "mesas" que se abrieron fueron: la reforma del INEM, la protección por desempleo, negociación de las retribuciones de los funcionarios, pensiones y empleo.

[206] Los sindicatos UGT y CCOO denunciaban así (documento del 19 de septiembre de 1988 que trata de una entrevista de trabajo entre UGT y CCOO): la unilateralidad del gobierno en la toma de sus medidas, su coincidencia con los planteamientos de los empresarios, y lo que ellos consideraban ruptura de las reglas institucionales al buscar el aval de otras asociaciones o grupos corporativos. La UGT presentó así una queja contra el gobierno español ante la O.I.T. por considerar que un acuerdo sobre incremento de pensiones alcanzado entre el Gobierno y la Unión Democrática de Pensionistas era un atentado contra la libertad sindical y el derecho de negociación colectiva (Carta del Secretario de Acción Sindical, Apolinar Rodríguez, a las F.F. y U.U., fechada en Madrid a 11 de octubre de 1.988. Caja: FEJP/517, FLC). La OIT, sin embargo, determinó que el Gobierno español no había conculcado la libertad sindical en el acuerdo firmado con la UDP (*El País* 25-6-89). El Gobierno socialista también llegó a un acuerdo sobre incremento salarial para los funcionarios con la CSIF, el cual fue rechazado por UGT y CCOO.

[207] Véanse las cartas del Secretario de Acción Sindical, Apolinar Rodríguez, a las F.F y U.U, fechadas en Madrid los días 3, 4, 6 y 26 de octubre de 1.988. Véanse también las cartas del Secretario General de UGT, Nicolás Redondo, al Ministro de Trabajo y Seguridad Social, al de Administraciones Públicas, y al Portavoz del Grupo

recuperación del poder adquisitivo para estos colectivos, junto al rechazo del Plan de Empleo Juvenil, la equiparación de las pensiones mínimas al SMI, el reconocimiento del derecho de negociación de los funcionarios y la exigencia del cumplimiento del compromiso del AES en materia de cobertura del desempleo llevaron a la convocatoria por los sindicatos, y en el caso de UGT por primera vez, de un paro general de 24 horas para el 14 de diciembre[208]. Como vimos en el capítulo anterior, los acuerdos no se retomarían hasta pasado un año y porque el Gobierno cedió finalmente a gran parte de las exigencias sindicales. Ahora bien, ¿pretendía la dirección ugetista con sus demandas proteger exclusivamente a sus afiliados o votantes?

2.2.2.4. ¿En interés exclusivo de los "insiders"?

Esta demanda de mayor gasto público que hacían UGT y CCOO, que para algunos investigadores terminaría poniendo en un grave aprieto la estrategia económica socialdemócrata del PSOE[209], la cual fue motivo de enfrentamientos con el Gobierno socialista a partir de 1987, difícilmente puede ser explicada, salvo en el caso evidente de los funcionarios, como fruto de un interés exclusivo por los "insiders".

Comenzando por la cuestión de las pensiones, las resoluciones de los congresos de la UGT exigían la equiparación de las pensiones mínimas con el SMI, mayores incrementos para las pensiones más

---

Parlamentario Socialista, fechadas en Madrid a 5 de octubre de 1.988. Caja: FEJP/517, FLC.

[208] Véase la nota-resumen de las peticiones de UGT adjunta a la carta del Secretario de Acción Sindical, Apolinar Rodríguez, a las F.F. y U.U., fechada en Madrid a 11 de enero de 1.989. Caja: FEJP/517, FLC.

[209] Según Boix la UGT insistió tanto en sus demandas sociales que finalmente conseguiría que el Gobierno del PSOE comprometiese "la consecución de un presupuesto equilibrado y que, en la medida en que el Ministerio de Economía hubo de compaginar concesiones sociales sustanciales a los sindicatos con sus previsiones presupuestarias iniciales, alteraron en parte la estrategia gubernamental de intensificar la inversión pública" (Boix 1996:220).

bajas y el reconocimiento de un derecho subjetivo a pensiones asistenciales. Ya hemos visto los enfrentamientos ocurridos en el otoño de 1987; al año siguiente se reprodujeron. El objetivo general de la UGT de mejorar las pensiones para 1989 se concretó en una subida de la masa de las pensiones del 7,63% con mayores incrementos para las más bajas (véase tabla 9).

TABLA 9.Demandas de incrementos para las pensiones por parte de la UGT

	1987	1988	1989
Pensiones asistenciales	8	10	16,27
Pensiones mínimas con cónyuge	5[1]	8	13,3
Pensiones mínimas sin cónyuge	5	7	11,2
SOVI con cónyuge	5	7	6,5
SOVI sin cónyuge	5	6	6,5
Resto de pensiones hasta el SMI	5	6	6,5
Desde SMI hasta 90.000 ptas	5	5	5,5
Más de 90.000 ptas	5	3	4,5
IPC previsto	5	3	3

1: La UGT consiguió además un fondo de 7.000 millones de pesetas para incrementar las pensiones más reducidas.

Fuente: Carta-circular del Secretario de Acción Sindical del 26 de septiembre de 1986, op. cit.; "Reunión con las Federaciones", Madrid a 30 de septiembre de 1987, caja: FEJP/515, FLC; y carta-circular del Secretario de Acción Sindical, Apolinar Rodríguez, a las F.F. y U.U., fechada en Madrid a 19 de septiembre de 1.988, caja: FEJP/516, FLC.

Reclamaban igualmente ir acercando las pensiones mínimas al SMI[210], que las pensiones asistenciales se equiparasen al 50% del SMI

[210] Pretendía en concreto que las pensiones mínimas con cónyuge a cargo se equiparasen al 100% del SMI en dos años, sin cónyuge a cargo al 85% del SMI en ese plazo, y que las pensiones mínimas de viudedad para mayores de 65 años se equiparasen al 85% del SMI en cuatro años, de 1989 a 1992 (carta del Secretario de Acción Sindical del 19 de septiembre de 1988 sobre la negociación de las pensiones, op. cit.). El Ministerio de Trabajo por su parte se comprometía a equiparar en tres

en tres años, y que se redujese de 68 a 65 años la edad para poder percibir la pensión por ancianidad[211]. El Gobierno no accedió a sus exigencias y acordó con la Unión Democrática de Pensionistas, una subida media del 5,35% (*El País* 16, 17, y 18-9-88)[212]. Los desacuerdos también se produjeron por la subida concreta de las pensiones asistenciales[213] y la edad mínima para percibirlas[214]. Finalmente, el Gobierno accedió a "descongelar" las pensiones más altas de la Seguridad Social[215] [216].

---

años las pensiones mínimas con cónyuge al salario base neto (el SMI menos el 6% que pagan los trabajadores en activo a la SS). También en tres años las pensiones mínimas sin cónyuge se situarían en el 85% de las prestaciones por unidad familiar. Las de viudedad para mayores de 65 años se igualarían a las anteriores en cuatro años (*El País*, 17-9-88 y 18-9-88).

[211] Carta del Secretario de Acción Sindical del 19 de septiembre de 1988, op. cit.

[212] Hay que señalar que la cifra acordada con la UDP era inferior a la última oferta que la Administración había realizado a la UGT de un incremento del 5,45%, además de que "[c]uando ya prácticamente se había llegado a un acuerdo en torno al 6,7% de incremento, incomprensiblemente la Administración redujo su oferta a un inamovible 5,45%, porcentaje con el que se rompía cualquier posibilidad de acuerdo al ser absolutamente insuficiente" (carta del Secretario de Acción Sindical del 19 de septiembre de 1988, op. cit.).

[213] El Gobierno proponía una subida de las pensiones asistenciales de 17.200 pesetas a 19.450 pesetas, lo que suponía el 13,08% -UGT y CCOO habían pedido que aumentasen a 20.000 pesetas-.

[214] La edad mínima para percibirlas bajaba de 68 años a 67. La dirección de la UGT pedía que la edad de percepción bajase a los 66 años en 1989 y al año siguiente en los 65 años.

[215] El tope máximo, fijado hasta entonces en 187.950 pesetas mensuales, se colocaba en 193.600 pesetas (*El País* 17 y 18-9-88).

[216] El Gobierno pensaba destinar 350.000 millones de pesetas a la mejora de las pensiones a partir del siguiente 1 de enero. Un total de 174.000 millones se destinaría a la subida de las prestaciones de los 5,6 millones de pensionistas actuales y otros 176.000 millones de pesetas a los 400.000 nuevos beneficiarios que habría el próximo año. Esto suponía una subida del 6,5% del gasto en pensiones, incluida la revalorización media del 5,35%, y la aplicación de una nueva paga extraordinaria para los pensionistas del régimen especial agrario, autónomos y empleadas del hogar (*El País* 18-9-88). Por su parte, los sindicatos UGT y CCOO sostenían que dentro de la negociación no debía incluirse la partida destinada a los nuevos pensionistas, ya que

Si a la UGT sólo le preocupa los resultados de las elecciones sindicales ¿por qué esa preocupación por las rentas de los pensionistas, los cuales no votan? O si sólo se preocupa de sus afiliados ¿por qué esa insistencia en conseguir incrementos en las pensiones para todos aquellos que no fuesen trabajadores manuales especializados con contratos indefinidos? Con respecto a esto último se puede argumentar que la dirección de la UGT pretendía incrementar las pensiones de sus afiliados, pero que, dado el carácter de bien colectivo que tiene el gasto social, le era inevitable que de su presión se beneficiasen otros trabajadores no afiliados. Esto podría explicar su exigencia general de un incremento de todas las pensiones y que ninguna, incluso las más altas, perdiesen poder adquisitivo, pero ¿por qué exigir además que las pensiones mínimas se acercasen al SMI, o que tuviesen mayores incrementos las pensiones más bajas, o su exigencia de que se extendiesen las pensiones no contributivas, es decir personas que nunca habían cotizado, y que, por tanto, es dudoso que hubieran estado nunca afiliadas? Parece claro que, independientemente de los efectos que tuviesen sus peticiones de incremento del gasto en pensiones sobre el objetivo del Gobierno socialista de reducir el déficit público, éstas no acaban de ser explicadas por un interés exclusivo en los "insiders" o por cuestiones meramente electorales.

En la cuestión de la cobertura por desempleo, por el contrario, su comportamiento podría parecer que encaja con el de un sindicalismo interesado exclusivamente por los trabajadores con empleo estable. Así, en vez de "adherirse a una estrategia sostenida de moderación salarial a cambio de más empleo para trabajadores temporales y sin especializar" (Boix 1996:216), la UGT presionaba por conseguir incrementos salariales y unas elevadas prestaciones por desempleo, mientras que las mujeres, jóvenes y trabajadores menos

---

esto en realidad no implicaba la revalorización de las pensiones. Por eso, las dos centrales cifraban su oferta global al margen de esa partida. UGT proponía que la cantidad que debía dedicar el Gobierno a subir las pensiones el próximo año había de ascender a un total de 200.000 millones de pesetas, mientras que CCOO calculaba un desembolso de 220.000 millones (*El País* 17-9-88).

cualificados no obtenían empleos, entre otras cosas, porque los empresarios no tenían beneficios suficientes para contratarles.

Sin embargo, la petición ugetista de incremento del número de parados cubiertos con subsidios de desempleo no iba destinada principalmente para esos colectivos que tienden a estar más afiliados o a votar en las elecciones sindicales, sino a desempleados de mayor edad, a jóvenes, incluso si nunca hubiera trabajado[217], y a trabajadores con contratos temporales[218]. También exigían la creación de prestaciones de carácter asistencial a desempleados con cargas familiares. En total pedían extender el subsidio a 587.000 personas más, de los cuales sólo 60.000 serían trabajadores cubiertos por el sistema contributivo y el resto por la protección asistencial[219]. Por su parte, el representante del Ministerio de Trabajo respondía que el incumplimiento del AES era menor[220] y que sólo las prestaciones asistenciales eran bajas en comparación con otros sistemas de protección ante el desempleo de la OCDE (*El País* 13-7-88), por lo que la prioridad era proteger a las personas que hubieran agotado

---

[217] Pedían dos años y medio de subsidio igual al 60% del salario mínimo si se tenía cargas familiares, y el 50% del salario base durante un año si se carecía de dichas cargas.

[218] Reclamaban la reducción del período mínimo de cotización a tres meses para tener derecho a prestación contributiva, y la ampliación de la duración de la prestación por desempleo en función de los períodos de ocupación cotizada en los seis años anteriores a la situación legal del desempleo (*El País* 21-7-88).

[219] En concreto hacían los siguientes cálculos (véase nota-resumen de UGT fechada en Madrid a 11 de enero de 1.989, op. cit.):

-Demandantes de primer empleo: 135.000 individuos.

-Parados de larga duración: 305.000 individuos.

-Parados mayores de 45 años: 87.000 individuos.

[220] Alvaro Espina sostenía que había más parados protegidos que los recogidos en las estadísticas de cobertura: 874.000 personas. A esa cifra había que sumarle 287.000 jornaleros del Régimen Especial Agrario, 108.000 personas que tramitaban actualmente el subsidio, y entre 600.000 y 700.000 personas que recibían beca o subsidio en la formación profesional ocupacional o habían capitalizado sus prestaciones de desempleo para hacerse autónomos o convertirse en cooperativistas. En total, entre 1 millón y 1,2 millones de parados contaban con algún tipo de protección social (*El País* 13-7-88).

todas las prestaciones por desempleo: los parados mayores de 50 años y los desempleados de larga duración con más edad (entre 180.000 y 260.000 desempleados). Pero rechazaba subsidiar a las personas que buscasen su primer empleo[221], aunque tuviesen cargas familiares (*El País* 13 y 14-7-88). El Gobierno socialista estaba así sólo dispuesto a extender el subsidio a 200.000 parados más (a parados de larga duración y con edades superiores a los 45 años) y no a 587.000 personas más como reclamaba UGT, o a las 600.000 que pedía CCOO (*El País* 21-7-88)[222].

Otras exigencias de la UGT tampoco se acaban de explicar si es cierto que UGT y CCOO sólo se ocupaban de los intereses de los trabajadores fijos, como por ejemplo la reconsideración al alza del SMI para alcanzar, en el menor tiempo posible, el 68% del salario medio que recomendaba la Carta Social Europea[223], el incremento de la prestación familiar y el estudio de la introducción de una renta

---

[221] Según Alvaro Espina "siempre será mejor dedicar el dinero disponible a crear empleo, a propiciar el reciclaje y a la formación profesional, que dar un subsidio para no hacer nada" (*El País* 4-8-88). Por su parte el Presidente del Gobierno afirmaba:

"¿Tenemos, ahora sí, derecho como Gobierno a sacar nuestras propuestas en la mesa de negociación para contrastarlas con las de los interlocutores sociales y, por consiguiente, buscar una vía de salida al problema del empleo juvenil, con una filosofía que conduzca sobre todo a conseguir empleo, no a subvencionar a jóvenes en paro?" (Felipe González, Congreso de los Diputados, 21-12-88).

[222] Para mayores de 50 años el Gobierno estaba dispuesto a la ampliación del subsidio por un año y para los mayores de 45 años con responsabilidades familiares 18 meses. El resto de los afectados tendría una ampliación de cobertura por seis meses (*El País* 23-7-88).

[223] En el 34º Congreso de la UGT se reclamaba que sus incrementos tuviesen un tratamiento más favorable que el resto de las rentas (R.34C.UGT.1986:78). A principios de 1988 denunciaban que el Gobierno hubiese fijado unilateralmente la subida en un 4,5% para 1988 mientras ellos pedían un 7% ("Circular de Negociación Colectiva para 1.988", op. cit.). En una carta del Secretario de Acción Sindical a las F.F. y U.U. de UGT Apolinar Rodríguez resumía un informe del Comité de Expertos de la Carta Social Europea que señalaba incumplimientos graves en España en materia de salario mínimo y pensiones (carta fechada en Madrid a 13 de octubre de 1.988, Caja: FEJP/517. FLC).

mínima de inserción[224], o que se pusiese en marcha un plan global de lucha contra la pobreza[225].

En conclusión, la interpretación de que UGT y CCOO se preocupaban de defender a sus afiliados (o, mejor dicho, a sus votantes) puede que explique su insistencia en conseguir incrementos del salario real en la negociación colectiva. Pero no se acaba de entender por qué además presionaron por conseguir un incremento del gasto social, esto es, conseguir bienes públicos. Si es verdad que los sindicatos españoles son tan pequeños como sus cifras de afiliación sugieren, siguiendo la lógica olsoniana éstos no habrían tenido incentivos racionales para emprender unas acciones de presión de cuyos resultados sus afiliados de base no se beneficiarían en exclusiva[226]. Mucho menos se explica aun que presionasen por conseguir rentas para grupos sociales entre los cuales tenían pocos afiliados. Parece claro que además en España la representatividad de los sindicatos se mide por los resultados de las elecciones a comités de empresa y delegados de personal, y no por la tasa de afiliación, por lo que su representatividad es mayor de lo que las cifras de afiliación indican. Pero tampoco parece que la actuación del sindicato socialista se pueda reducir a lo que hacían sus delegados en los comités de empresa, y que por tanto la UGT no hiciese sino defender exclusivamente a los trabajadores que votan para dichos comités. La dirección ugetista quiso así, junto a un incremento del salario real de los votantes, aumentar igualmente el gasto social destinado a las rentas

---

[224] Véanse las "Prioridades del espacio social europeo. Postura de la UGT", op. cit.

[225] Véase "El ingreso mínimo garantizado y su implantación en España" en *Información Sindical*, núm. 79, febrero de 1990.

[226] Siguiendo la lógica de Olson, hubieran presionado por conseguir más bienes selectivos como el acuerdo alcanzado entre la UGT y Renfe por el que los afiliados a la UGT, así como sus familiares, obtenían un 30% de descuento sobre la Tarifa General para días azules (Carta-circular del Secretario de Administración Confederal, Paulino Barrabés, a las F.F. y U.U., fechada en Madrid a 12 de abril de 1989. Caja: FEJP/521, FLC). El acuerdo fue renovado al año siguiente (carta del Secretario Confederal de Administración, Sebastián Reyna, a la Comisión Ejecutiva Confederal, Federaciones Estatales, Uniones Territoriales y Organismos de UGT, fechada en Madrid a 26 de septiembre de 1.990. Caja: FEJP/521, FLC).

de otros grupos sociales. Esto no es de extrañar si recordamos que el propio Olson incidía en que "peak associations should on average take a somewhat less parochial view than the narrow associations of which they are composed" (Olson 1982:50). Existe así una diferencia capital entre un sindicato de rama y una confederación sindical de ámbito estatal. Esto no quiere decir que la dirección de la UGT no pudiese equivocarse en cuanto a sus preferencias de política económica o en sus valoraciones sobre el incremento del gasto social ocurrido bajo los gobiernos del PSOE. Representar a una parte sustancial de los trabajadores, y además distribuidos éstos por diferentes sectores y territorios, puede que sea un incentivo para tener en cuenta intereses muy amplios, pero no excluye tomar decisiones equivocadas como el mismo Olson hizo hincapié (1992:52,53). De los errores que estos líderes puedan haber cometido no se deduce, por tanto, que necesariamente los cometieran porque defendiesen intereses minoritarios[227]. Finalmente, lo irónico del caso es que, como algunos economistas y científicos sociales españoles atribuyen gran parte de la responsabilidad de la distorsión de la política económica del Gobierno al incremento del gasto social pedido por los sindicatos, si UGT y CCOO sólo se hubieran preocupado realmente de las rentas salariales de sus afiliados, la política fiscal del gobierno no hubiera sido tan expansiva y el déficit público hubiera sido menos difícil de contener[228]. Un sindicalismo auténticamente pequeño,

---

[227] Esto no quiere decir que la dirección de la UGT no tuviese en cuenta cuestiones organizativas. Probablemente pretendía incrementar su afiliación mediante esas demandas, es decir satisfaciendo lo que creía que era lo que pedían trabajadores, parados y pensionistas. Pero contemplados en conjunto los enfrentamientos entre el sindicato socialista y el Gobierno del PSOE, no parece que el primero tuviese como único objetivo incrementar la renta de sus afiliados, sino la de su base potencial de afiliación, la clase trabajadora futura, presente y pasada. En este caso lo que le condujo al enfrentamiento con los planes del Gobierno socialista no fue su preocupación exclusiva por sus trabajadores afiliados, sino su preocupación por aumentar su afiliación fuera de su reducida base.

[228] El antiguo ministro de Economía Carlos Solchaga ha afirmado recientemente que dos de los tres acuerdos con los sindicatos que tuvieron mayor efecto sobre el gasto y déficit público fueron los que se referían a la ampliación de la cobertura del

preocupado sólo por sus afiliados, hubiera resultado más económico y fácil de satisfacer; el PSOE se habría evitado así al menos gran parte de los enfrentamientos de otoño de 1987 y habría habido menos motivos para la huelga general de 1988[229].

Con todo hay que introducir una serie de observaciones más sobre las actuaciones solidarias de la UGT con sectores sociales menos favorecidos. En primer lugar, lo dicho hasta ahora cuestiona que el comportamiento de la dirección ugetista pueda estar motivado exclusivamente por la defensa de sus afiliados o votantes, pero no excluye que la importancia que tienen los resultados de las elecciones sindicales (y no tanto cuestiones de afiliación) impidiera que los dirigentes de la UGT pudiesen hacer frente a los posibles costes que entrañase su apoyo al Gobierno socialista para los trabajadores que votan en las elecciones sindicales. Esta hipótesis la trataremos con más detenimiento en los siguientes capítulos, pero parece claro que en un determinado momento (1987) la UGT dejó de aceptar que, para que unos trabajadores mejorasen su posición personal, otros tuvieran que congelar mejoras individuales. La dirección de la UGT quería más poder adquisitivo para todos los trabajadores y así reducir las diferencias de renta entre los asalariados y los que no lo son (como empresarios, profesiones liberales y rentistas). En palabras de Nicolás Redondo:

"[U]n proyecto socialista conlleva un sentido de la solidaridad al que jamás renunciaremos, pero ésta encuentra su verdadero sentido

---

desempleo a nuevos colectivos y la creación de las pensiones no contributivas, es decir aquellos que no beneficiaban más directamente a sus afiliados, aunque sí deberían pagarlos vía impuestos. Por el contrario, los "otros acuerdos alcanzados durante la concertación social de 1989 y 1990, como la actualización de las pensiones y de salarios de los funcionarios, no tuvieron un efecto tan grave sobre el incremento del gasto público ni incidieron de manera tan significativa en el déficit del Estado como las anteriores partidas" (Solchaga 1997:291-294).

[229] Es dudoso que aquella huelga hubiera tenido el apoyo general que tuvo si se hubiera convocado exclusivamente para mantener el poder adquisitivo de los funcionarios y su derecho a la negociación colectiva.

> en la justicia, porque *exigir solo solidaridad de los trabajadores hacia sí mismos* implicaría profundizar en la desigualdad social"[230].

En segundo lugar, aunque la UGT siempre ha incluido en sus resoluciones la defensa de las condiciones materiales de los menos favorecidos, parece que su interpretación de esa defensa varió en el tiempo. Su apoyo al gasto social en septiembre de 1986 indica que no puede ser simplemente porque intentase ajustar el cumplimiento de las resoluciones de sus congresos a un nuevo contexto económico, sino que tiene que haber algún elemento más para explicar el cambio[231].

3. Conclusión: las tres preguntas claves

Recapitulando las conclusiones de este capítulo, han surgido una serie de debates donde se discute hasta qué punto los partidos y sindicatos socialdemócratas no siguen teniendo buenos motivos para mantener sus tradicionales relaciones a pesar de ciertos cambios de orden macroeconómico y social así como sobre los efectos de los marcos institucionales en las opciones estratégicas de los sindicatos. En cuanto al intercambio político-electoral, podemos empezar sugiriendo que hacia 1988 y 1989 no hay por qué pensar que los dirigentes del PSOE tuviesen motivos para romper la identificación del Partido con la UGT con objeto de ganar las elecciones, es decir,

---

[230] Discurso de Nicolás Redondo al Congreso del PSOE de 1988, pág. 17, op. cit. mía la cursiva.

[231] Este cambio de actitud por parte del sindicato socialista fue señalado por el propio Ministro de Economía durante las negociaciones de otoño de 1987. Solchaga declaraba que le era difícil entender la negativa de UGT a los incrementos propuestos por el Gobierno para funcionarios y pensionistas cuando el pasado año había considerado aceptables unos presupuestos para estos colectivos con una subida de un 5% (la inflación prevista para 1987), más un fondo de medio punto, mientras que en 1987 el Gobierno proponía una subida salarial por encima de la inflación (un 4% con respecto a una previsión de inflación del 3% para finales de 1988) (*El País* 14-10-87).

que no se habían producido cambios estructurales tan profundos que hacía finales de la década de los ochenta fuera ya imposible seguir practicando el intercambio político-electoral como se había hecho en las elecciones de 1977, 1979, 1982 y 1986. Más adelante veremos que, de hecho, hacían la valoración contraria; el no contar con el apoyo de la UGT era un salto a lo desconocido cuyos resultados electorales estaban por ver para la mayoría de los miembros de la Ejecutiva y del Comité Federal del PSOE. Paradójicamente, mientras que se rompía el modelo histórico de relaciones con el antiguo sindicato hermano y emprendían las nuevas relaciones por intereses concretos, el Partido socialista perdía más votos entre las clases medias y sectores ajenos a la acción sindical que entre los trabajadores. No está tan claro, por tanto, que todas las transformaciones sociales en los electorados europeos hagan perder interés de los partidos socialdemócratas en contar con los apoyos de los sindicatos, incluso aunque el peso electoral de los sectores movilizados políticamente por éstos haya disminuido y en contextos donde el movimiento sindical se encuentra dividido en confederaciones rivales.

La coordinación económica daba, sin embargo, bastantes más problemas. En este caso hemos visto cómo los dirigentes de la UGT terminaron la segunda legislatura evaluando que las políticas sociales y económicas del Gobierno socialista eran insatisfactorias, así como que al año escaso de haber comenzado dicha legislatura consideraron que el tiempo en que se coordinaban las acciones sindicales en la negociación colectiva con las políticas económicas había terminado. Pero las explicaciones más habituales que se suelen dar tanto para explicar una transformación de las relaciones partido-sindicato en general como en el caso concreto de la UGT y del PSOE crean más preguntas de las que resuelven. Así, aun existiendo diferencias en sus preferencias sobre políticas económicas, ni la política económica del Gobierno socialista fue tan "neoliberal" ni la alternativa que proponía la UGT era tan "keynesiana". Pero más paradójico todavía es que si la UGT rechazaba apoyar al Gobierno del PSOE por sus políticas, principalmente económicas y sociales, y los objetivos y demandas de este sindicato fueron prácticamente los mismos desde que el Partido

Socialista llegó al poder en 1982, ¿por qué esperó a 1988/1989 a romper con él, habiéndolas aceptado explícitamente en el programa electoral de 1986 y en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado para 1987? Y ¿por qué apoyó igualmente al incremento del gasto social en aquella misma negociación?

La otra interpretación alternativa, aquella que se centraba sobre todo en los bajos niveles de afiliación en España, deja igualmente importantes interrogantes. Si la UGT sólo defendía a los trabajadores fijos, ¿por qué gran parte de sus demandas sociales -en la cuestión de pensiones, cobertura de desempleo, SMI- no protegían directamente a estos? y ¿por qué los sindicatos españoles unas veces aceptaron la congelación salarial y otras no? Si los sindicatos españoles sólo defienden a aquellos trabajadores que tienen la menor probabilidad de ir al paro (es decir, defienden a los fijos o "insiders"), y por eso no dudan en pedir el mayor incremento salarial posible ¿cómo es que CCOO no tuvo éxito en 1979 y 1980 en su estrategia de romper el AMI de 1980 firmado por la UGT y la CEOE en la negociación colectiva en las empresas? Pero además, aun aceptando que una serie de condicionantes llevaron a la UGT a rechazar la congelación salarial y, por tanto romper con la coordinación económica, ¿implica necesariamente esto que tuviesen además que descalificar las políticas del Gobierno socialista de una forma global y dura a partir de 1988? ¿Por qué no continuaron defendiendo que sus demandas no ponían en cuestión la política económica del gobierno socialista, como hicieron durante 1987?

Lo único que hasta ahora parece claro son los siguientes hechos: en primer lugar, que la reflexión que condujo a un cambio de modelo de relaciones se produjo entre los dirigentes de una y otra organización que habían defendido las relaciones solidarias, entre la indiferencia o resignación de los militantes de base. En segundo lugar, fue la dirección ugetista la que en un momento determinado (entre finales de 1986 y la primavera de 1987) dio por finalizada y pasada a la historia la coordinación entre sus actuación en la negociación colectiva y las políticas económicas del Gobierno socialista, y tal ruptura se produjo cuando la economía crecía y, como veremos, se reducía el desempleo. En tercer lugar, que su descontento con estas

políticas se produjo porque éste se negaba a cambiarlas con la intensidad que le reclamaba la dirección ugetista, no porque hubiera dado un giro como hizo el gobierno francés en 1982/83. Pero dicho descontento no se debió a que fuese un sindicalismo minúsculo que representa solamente a un 16% de la población asalariada y se preocupa en exclusiva de los *insiders*. Está claro que la dirección de la UGT quiso mejorar las condiciones materiales de personas que ni tienden a afiliarse ni a votar en las elecciones sindicales.

En pocas palabras, la pregunta sobre por qué los dirigentes del PSOE y la UGT cambiaron su apreciación sobre la relevancia de su cooperación recíproca sigue todavía abierta. Para contestar a este interrogante creo necesario descomponer la pregunta sobre por qué los dirigentes del PSOE y de la UGT cambiaron su apreciación de la relevancia de la cooperación recíproca, proceso que como hemos visto fue acompañado de importantes enfrentamientos y descalificaciones mutuas, en otras tres:

1º ¿Por qué la dirección de la UGT dio por acabada la coordinación económica durante la segunda legislatura socialista si la había aceptado al poco de empezar esta legislatura?

2º ¿Por qué la dirección de la UGT aumentó a partir de un determinado momento su presión al Gobierno socialista para que aumentase el gasto en transferencias sociales así como consideró finalmente que la política económica del Gobierno estaba equivocada e iba contra los intereses de los trabajadores? ¿Por qué el Gobierno socialista rechazó satisfacer las demandas sociales de la UGT al igual que mantuvo su estrategia económica a pesar de los graves enfrentamientos que aquello conllevaba con su antiguo sindicato hermano?

3º ¿Por qué la dirección de la UGT consideró que no le compensaban los beneficios que obtenía del partido hermano a cambio de la estrategia sindical que tenía que practicar en las relaciones laborales y de abstenerse de participar directamente en política? ¿Tuvo algo que ver que emprendiese un proceso de unidad de acción con CCOO? ¿Por qué la dirección del PSOE evaluó igualmente que no le compensaba la contribución que hacía el sindicato a sus éxitos electorales a cambio de la actividad política que

tenía que realizar en su favor, y en el caso de que estuviese en el gobierno, pactar con él sus políticas gubernamentales?

CAPITULO SEXTO

LOS EFECTOS DE UN SINDICALISMO PLURALISTA Y COMPETITIVO

Del capítulo anterior parece deducirse un cierto protagonismo de la dirección de la Unión General de Trabajadores en la transformación de sus relaciones con el Partido socialista. Se ha mostrado así que fue la dirección ugetista quien dio por terminado hacia la primavera de 1987 uno de los componentes que las hacían deseables para los dirigentes del PSOE: la coordinación económica. Estos no parece que tuvieran, sin embargo, razones para considerar que sus relaciones con la UGT fuesen un auténtico estorbo para ganar las elecciones[1]. Tampoco dio el Gobierno socialista ningún giro a sus políticas económicas y sociales en un sentido que a la dirección ugetista le resultase inaceptable. La cuestión, de hecho, era precisamente que no las daban el "giro" que querían los dirigentes ugetistas. En el capítulo noveno, veremos además que fue la dirección de la UGT quien dio primero por finalizado el modelo solidario de relaciones porque de alguna forma evaluó que no era aquel recurso esperado para influir en el ámbito político.

Este protagonismo del sindicato socialista concuerda con una de las principales conclusiones de la economía política y el neocorporativismo consistente en la gran relevancia que tienen las estructuras organizativas sindicales para explicar sus opciones estratégicas (Pontusson 1992) y, por tanto, sus relaciones con los gobiernos, e incluso el éxito de las políticas de éstos (Alvarez, Garret y

[1] De hecho, veremos en el capítulo noveno que su valoración de los efectos electorales era más bien la contraria hasta las elecciones europeas de 1989.

Lange 1991)[2]. En el capítulo anterior revisamos así la cuestión de la densidad de afiliación existente en España, si bien no parecía explicar el comportamiento de la Unión General de Trabajadores. La literatura especializada también ha señalado la importancia que tienen las diferentes formas de organización, representación y movilización de los asalariados. Es en esta cuestión que nos vamos a centrar ahora en el estudio del sindicalismo español.

En este capítulo se ofrece un modelo teórico para explicar el comportamiento de la UGT a partir de una forma concreta que tiene el movimiento sindical español de organizar a los trabajadores: su pluralismo competitivo. Se quiere identificar así cuáles puedan ser los efectos que dicha forma de organización de los trabajadores tenga sobre el comportamiento sindical, y por tanto, sobre las relaciones partido-sindicato, suponiendo constantes otros factores.

1. El pluralismo sindical competitivo

Como se sostuvo en el primer capítulo, los movimientos sindicales de los países europeos se estructuran de formas variadas, destacándose, en concreto, su grado de centralización y de fragmentación (o concentración). Dentro de esta última característica, existen a su vez varias clases diferentes (Pontusson 1992:14).

Una primera clase lo constituye el movimiento sindical dividido en organizaciones que pretenden actuar en nombre de distintos colectivos de trabajadores, por lo que no compiten por su representación[3]. Recordemos que existen organizaciones sindicales que pretenden representar solamente a trabajadores de ciertos pueblos, etnias o razas; de ciertos oficios u ocupaciones; de ciertas

---

[2] Sin embargo, mucha menos importancia se ha dado a las diferentes formas de organización del movimiento sindical para explicar las relaciones de los sindicatos con los partidos políticos.

[3] En Europa esta modalidad de fragmentación se refiere principalmente a la existencia de organizaciones sindicales que pretenden representar no sólo a trabajadores de un determinado oficio u ocupación, sino también a una determinada categoría profesional (principalmente manual o no manual) (Pontusson 1992:14).

categorías profesionales; y por último, generalmente denominados *sindicatos de clase*, organizaciones que pretenden representar a todos los trabajadores de un determinado país[4]. Una segunda clase lo constituye la fragmentación competitiva (también se le conoce en la literatura por pluralismo competitivo). En este caso las diversas organizaciones sindicales podrían potencialmente competir por la representación de los trabajadores, y, consecuentemente, éstos son libres de dar su apoyo a distintas organizaciones sindicales (Martin 1989:117; Lange y Ross 199O:310; Pontusson 1992:14,15).

A su vez, esta competición puede ser "total" o "parcial". Puede ocurrir que las organizaciones sindicales pretendan representar exactamente el mismo universo de trabajadores, lo que podríamos calificar de competencia total, como es el caso de confederaciones sindicales que se diferencian, o diferenciaban originariamente, por motivos principalmente políticos. En Europa esto ocurre en Portugal, España, Italia, Francia, Luxemburgo, Bélgica, Holanda, Suiza, Polonia, Hungría, Rumanía, Eslovenia y Bulgaria[5]. Pero puede que sólo se solapen parcialmente los universos de trabajadores que pretenden representar como en el caso de un sindicato "nacionalista" y otro "nacional" (i.e. ELA/STV con respecto a CCOO o UGT), o de una determinada categoría profesional frente a otros "de clase" (i.e. la CGC, sindicato de cuadros, con respecto a las CGT, CFDT, FO en Francia o la TVK, sindicato de cuadros, y el SAK, sindicato de clase, en Finlandia[6]). A los países anteriormente señalados hay que incluir Finlandia y la República Federal Alemana.

---

[4] Caso aparte lo constituyen los llamados "sindicatos generales" que existen en EEUU, Gran Bretaña y Dinamarca. Son sindicatos que, sin pretender agrupar a todos los trabajadores de un país, representan a trabajadores de varias ramas productivas.

[5] No dispongo de datos sobre las otras repúblicas que formaban la antigua Yugoslavia o las que componían la Unión Soviética. Las repúblicas checa y eslovaca parecen ser los únicos países de la antigua Europa comunista donde el sindicalismo unitario se ha mantenido, aunque de hecho allí existen también pequeñas confederaciones independientes.

[6] En Finlandia un 30% de los empleados sindicados prefiere apoyar al sindicato "de clase" SAK y no al exclusivo de cuadros TVK (Lilja 1992:200).

Ahora bien, la literatura especializada no suele aclarar cuándo debemos considerar que una organización sindical es lo suficientemente grande como para considerarse rival de otra. Está claro, sin embargo, que es distinguible el caso alemán (donde la DGB cuenta con 7 millones de miembros frente a los 280 mil de la confederación cristiana) del caso belga (donde el sindicato católico cuenta con 1.460.000 afiliados y el socialista con 1.075.000). Sólo un estudio más detallado nos permitiría decidir si habríamos de escoger como criterio un determinado umbral de afiliados o votos, o quizás el grado de monopolio que tiene una organización sindical determinada en la firma de los convenios colectivos.

2. Efectos del pluralismo sindical competitivo

La literatura especializada tampoco suele aclarar si el pluralismo competitivo presenta alguna particularidad especial, o no es sino una forma más de fragmentación sindical interesante desde un punto de vista exclusivamente "taxonómico". Pontusson señalaba al respecto que "cuando los sindicatos compiten por la misma afiliación potencial, tienden a aprovecharse de las condiciones de negociación favorables en el ámbito local, y el poder tiende a gravitar alrededor de los líderes sindicales más cercanos a los trabajadores" por lo que la competencia intersindical dificulta la necesaria centralización de los movimientos sindicales para el "intercambio político" (Pontusson 1992)[7]. Es de esperar así que en estos contextos los sindicatos no puedan apoyar a los gobiernos, si éstos les piden que moderen sus actuaciones en los centros de trabajo, por miedo a perder el favor de los trabajadores en beneficio de los sindicatos rivales que mantengan una estrategia de movilización. El sindicato "movilizador" arrastra así a aquel que hubiese estado predispuesto a la moderación (Espina 1994:284). Existen numerosos casos empíricos donde estos procesos se han puesto de manifiesto:

[7] Por "intercambio político" Pontusson se refiere a la estrategia de negociación política centralizada.

Finlandia (años sesenta)[8]

La confederación unitaria finlandesa SAK se dividió a principios de los años sesenta[9] y sus dos ramas resultantes compitieron por el apoyo de los trabajadores, pujando en sus demandas ante los empresarios y recurriendo a las movilizaciones para ofrecer mejores resultados a los trabajadores que los de sus rivales (Lilja 1992:206). Al mismo tiempo las ideas de gestión macroeconómica se hicieron hueco en Finlandia, pero los primeros intentos de concertar políticas de rentas con los sindicatos, por los gobiernos conservadores, fracasaron en 1963, 1964 y de nuevo en 1966. Tras la entrada en el gobierno de socialistas y comunistas en 1966 y la recuperación de la unidad sindical, se hicieron dos nuevos intentos de acuerdos de rentas concertados en 1968 y 1969, que esta vez sí llegaron a firmarse. Sin embargo, como continuó existiendo un alto grado de rivalidad entre sindicalistas comunistas y socialistas, junto a la existente entre sindicatos de distintas ramas o categorías profesionales, la negociación colectiva centralizada siempre ha sido muy inestable en aquel país (Lilja 1992:207-211).

Francia (años ochenta)[10]

El movimiento sindical francés fue aumentando su fragmentación competitiva durante el transcurso del siglo XX[11]. En la década de los

[8] Para un estudio del sindicalismo finés véase el estudio de Lilja (1992:200-211).

[9] En 1955 la SAK tenía 269.400 afiliados; en 1960, 228.500 y su nueva rival, la SAJ, 53.500; en 1965 la SAK tenía 248.000 y la SAJ 105.400 (Lilja 1992:200).

[10] Para un estudio del sindicalismo francés y su relación con los partidos políticos véase el estudio de Mouriaux (1985).

[11] La Confederación General del Trabajo (CGT) se había fundado a finales del siglo pasado y en 1919 se creó la Confederación Francesa de Trabajadores Cristianos (CFTC). A finales de la Segunda Guerra Mundial se constituyó una confederación sindical para empleados, la Confederación General de Cuadros (CGC). En 1947, tras acceder los sindicalistas de ideología comunista a la dirección de la CGT, un sector

setenta, los sindicatos más importantes, la CGT y la CFDT, por fin mantuvieron una postura común en la negociación colectiva y en sus movilizaciones, al mismo tiempo que lo hacían los partidos comunista y socialista. Pero esta estrategia se vino abajo en 1977[12]. La posterior victoria del *Parti Socialiste* en 1981 y la entrada de comunistas en el gobierno no consiguieron, sin embargo, reconstruir la unidad de acción de los sindicatos para apoyar juntos al gobierno de izquierdas, pues le prestaron su apoyo por separado[13]. Por su parte, el tercer sindicato en importancia, Fuerza Obrera, se mantuvo mucho más distante con respecto al gobierno de Mitterrand ya desde su llegada[14].

---

de este sindicato se escindió y dio lugar a la CGT-Fuerza Obrera (FO). Finalmente, en 1964 la antigua CFTC abandonó su carácter confesional y adquirió tintes socialistas autogestionarios -en 1970 se proclamó oficialmente socialista- pasándose a denominarse Confederación Francesa Democrática del Trabajo (la CFDT), si bien un sector recalcitrante mantuvo la CFTC "maintenu".

[12] El líder de la CFDT, Edmond Maire, anunció así el "recentrage" de su organización al mismo tiempo que evaluaba que la estrategia sindical practicada por su sindicato entre 1974 y 1978 se había politizado en exceso, además de haberse caracterizado por un negativismo sistemático. La nueva estrategia fue denominada "resindicalización".

[13] Para la CFDT la victoria de Mitterrand, el retroceso del PCF, la mayoría socialista en la Asamblea Nacional, la entrada de muchos militantes suyos en la Administración, parecía abrir nuevas posibilidades para alcanzar sus objetivos sociales y organizativos. Según Mouriaux (1985:92) las leyes laborales "Auroux" tuvieron una marcada influencia cedetista. Por su parte el *Bureau confédéral* de la CGT, sindicato que había apoyado la candidatura de Mitterrand en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, declaraba en junio de 1981 que apoyarían todas las medidas progresistas al mismo tiempo que, manteniendo su autonomía de juicio y de acción, velarían por los intereses de los trabajadores.

[14] Tras la formación del gobierno de Mauroy en junio de 1981, en el que participan cuatro ministros comunistas, Fuerza Obrera mostró su rechazó. Al año siguiente denunciaba lo que consideraba una auténtica infiltración comunista en el aparato del Estado mientras criticaba el bloqueo de la negociación colectiva. En 1983 dejaba bien claro sus diferencias con respecto a la CGT y la CFDT, incidiendo en su "independencia sindical", al mismo tiempo que manifestaba su desacuerdo con la nueva política económica de rigor y organizaba una huelga general de una hora de duración el 18 de mayo de 1983 (Mouriaux 1985:80,81).

En los primeros dieciocho meses de gobierno (1981-1982), la coalición de izquierdas puso en marcha medidas para reactivar la economía (aumento del gasto público, del salario mínimo, de las ayudas familiares, pensiones etc), nacionalizaciones, elevación de los impuestos sobre las empresas, las grandes rentas y el patrimonio, cuyos resultados fueron decepcionantes (Merkel 1995:285). A mediados de 1982 el gobierno francés tuvo que devaluar el franco, congelar precios y salarios, recortar el gasto público, rebajar los impuestos sobre las empresas y traspasar una parte de la carga de las cotizaciones sociales de los empresarios a los trabajadores. Estas medidas se intensificaron al año siguiente.

Sin embargo, este giro en la política económica, con el abandono del keynesianismo en un sólo país, no implicó que la CFDT o la CGT le retiraran inmediatamente su apoyo. A comienzos de 1983 los cedetistas todavía manifestaban su comprensión ante las medidas de ajuste y exponían que se oponían "a toda radicalización política y al proteccionismo"[15]. Por su parte la CGT, si bien había manifestado su preocupación por los resultados de las elecciones "prud'homales" de diciembre de 1982[16], mantuvo también su apoyo "crítico" al tiempo que hacía llamamientos para frenar a la derecha. Es en otoño de 1983 cuando se produjo el primer cambio en el campo sindical. La CFDT -que en su congreso de mayo de 1982 había expuesto su deseo de convertirse en la primera central sindical francesa- quedó en un tercer puesto, tras la CGT y la FO, en las elecciones a las cajas de la Seguridad Social celebradas el 19 de octubre de 1983[17]. La dirección

---

[15] *Syndicalisme* nº 1950, febrero 1983, citado por Mouriaux (1985:93).

[16] Elecciones a comités paritarios. En aquellas de 1982 la CGT bajó con respecto a 1979 de un 42,09% de los votos a un 36,81%. La CFDT y la FO apenas variaron (la CFDT, de un 23,3% a un 23,5%; FO, de un 17,38% a un 17,78%) pero más la CFTC (de un 7,15 a un 8,46%) y la CGC (de un 5,24%, a un 9,64%) (Datos aportados por Mouriaux 1985:199).

[17] Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta 1967 se celebraron elecciones diferenciadas para los comités de empresa y para la Seguridad Social. Hasta 1967 se utilizaban las segundas para medir la representatividad de los sindicatos pero como fueron suprimidas en aquel año se emplearon las primeras para esta tarea hasta 1979. En este año se introdujeron las elecciones a consejos de "prud'hommes" o comités

cedetista interpretó estos resultados electorales como una derrota producto de su "identificación con el poder político". El *Parti Socialiste* había perdido su principal apoyo sindical[18]. En diciembre de aquel año, el líder de la CFDT criticó severamente la política industrial del gobierno, los despidos realizados, su exclusión de supuestos acuerdos secretos entre el PS y el PCF, y declaró que eran "un sindicato y no ten[ían] porqué situarse ni en la mayoría, ni en la oposición" (citado por Mouriaux 1985:94). La CGT, por el contrario, había mantenido el primer puesto en aquellas elecciones, y su enfrentamiento abierto con el Gobierno socialista no se produjo hasta después de la salida de los comunistas del gobierno en 1984. En general, si tenemos en cuenta las tres clases de elecciones donde participan los sindicatos franceses (las "prud'homales", celebrada en 1982; a la Seguridad Social, celebrada en 1983; y a los comités de empresa) los únicos sindicatos que mejoraron sus resultados entre 1981 y 1985 fueron la FO, la CFTC y la CGC, es decir, los sindicatos que no habían apoyado al Gobierno socialista.

---

paritarios, que, entre otras cosas, se encargarían de señalar la audiencia real de cada organización sindical en el sector privado. En 1983 se reinstauraron las elecciones a la Seguridad Social. En ellas podrían votar no sólo los trabajadores activos sino también parados, estudiantes, jubilados, etc por lo que sus resultados reflejarían el apoyo de los sindicatos fuera de la zona natural de afiliación, pero sólo la CGT, la FO, la CFDT, la CFTC y la CGC estaban autorizadas a participar. Las elecciones fueron politizadas por los partidos de derecha que invitaron a los electores a castigar la política gubernamental y a las organizaciones sindicales CGT y CFDT "vinculadas al poder", según expresión de uno de los principales líderes de la oposición conservadora, Jacques Chirac. La CGT obtuvo el 28,2% de los votos, la FO el 25%, la CFDT el 18%, la CGC el 16% y la CFTC el 12% (Datos de Mouriaux 1985:199).

[18] En el seno del PS se acusó en 1983 a la FO, cuyo máximo líder seguía siendo militante de dicho partido, de estar haciendo el juego a los gaullistas del RPR, acusaciones rechazadas por la FO. Sin embargo, el RPR, que ya había aconsejado la afiliación a este sindicato en 1982, aplaudió durante 1983 sus iniciativas e incluso animó públicamente a votar por él en las elecciones a la Seguridad Social de aquel año.

Polonia (años noventa)[19]

El movimiento sindical de la Polonia poscomunista se caracteriza por ser también pluralista y competitivo. Desde 1989 existen en Polonia tres grandes grupos sindicales: los sindicatos afiliados a Solidaridad (que reaparece tras su prohibición en 1981)[20], los afiliados a la OPZZ (la Alianza de Sindicatos Polacos)[21] y los no afiliados a ninguna de las confederaciones anteriores[22]. En un principio, durante 1990 y 1991, Solidaridad apoyó en solitario las reformas económicas de los primeros gobiernos democráticos, llegándoles a ofrecer una "pantalla protectora" (Deppe y Tatur 1994:28), pues su estrategia no fue compartida ni por la OPZZ ni por los sindicatos "independientes". Las relaciones intersindicales se caracterizaron así por "un rechazo mutuo a emprender cualquier forma de cooperación sindical"[23]. Sin

[19] Para un estudio del sindicalismo polaco tras la caída del comunismo véanse los trabajos de Kloc (1993) y Deppe y Tatur (1994).

[20] La reconstituida confederación sindical Solidaridad jugó un papel muy importante en la caída final de la dictadura comunista en Polonia en 1989. En aquel año ganó todos los puestos de las elecciones semilibres a las que podía concurrir. Una vez formado un nuevo gobierno no-comunista, Solidaridad apoyó las reformas asociadas al programa de Balcerowicz, incluso si dichas reformas no seguían el diseño socioeconómico que había elaborado en 1981. A principios de los años noventa tenía una afiliación de 1,7 millones de miembros (Kloc 1993:125,126).

[21] La OPZZ se había reconstituido como sindicato oficial en 1984 por lo que tenía una imagen de "colaborador comunista". A diferencia de Solidaridad, que combina características sindicales y partidistas, la OPZZ se considera exclusivamente un sindicato, con la exclusiva preocupación de proteger a los trabajadores. La OPZZ no ha rechazado las reformas hacia el mercado, pero se concentra en criticar los efectos sociales de las sucesivas políticas económicas. Su afiliación a principios de los noventa era de 4 millones de miembros (Kloc 1993:126).

[22] Estas otras organizaciones sindicales nacieron a partir de escisiones de las anteriores (como Solidaridad 80, o el sindicato de mineros escindido de la OPZZ) o eran organizaciones profesionales que no se afiliaron ni a Solidaridad ni a la OPZZ. Estas organizaciones se han caracterizado por su radicalismo y hacer hincapié en su independencia como seña de identidad para atraerse nuevos miembros.

[23] Solidaridad prohibió incluso a sus secciones de fábrica que cooperasen durante las huelgas con otros sindicatos (Kloc 1993:127).

embargo, el apoyo prestado por Solidaridad al Gobierno durante un período en el que las reformas tuvieron un fuerte coste social, en términos sobre todo de puestos de trabajo, permitió a sus rivales sindicales aumentar su audiencia entre los trabajadores a costa de ella (Deppe y Tatur 1994:29)[24]. Solidaridad no aguantó y se radicalizó, especialmente en aquellas áreas más afectadas por la recesión[25], hasta el punto que en 1992 iniciaron el 60% de los conflictos y huelgas frente al 25% convocadas por la OPZZ (Kloc 1993:127-130)[26].

Sin embargo, no siempre en estos contextos de pluralismo competitivo los sindicatos movilizan a los trabajadores contra los empresarios y gobiernos. En España la UGT estuvo practicando una estrategia de negociación centralizada en solitario de 1979 a 1981, y

---

[24] Si en 1989, y durante los primeros meses de 1990, la mayor parte de la sociedad polaca en general estaba convencida de la necesidad de una transformación radical hacia la economía de mercado, desde mediados de 1990, y durante 1991, apareció un creciente descontento con los efectos de las reformas económicas. Las demandas de los trabajadores se concentraron sobre todo en mantener sus puestos de trabajo, y no tanto en incrementos salariales.

[25] Sin embargo, según Kloc (1993:129-130), aunque tanto Solidaridad como la OPZZ mostraron una actitud más confrontacionista en 1991 y 1992 no coordinaron sus acciones, Si bien este autor sostiene que "mutual distrust between the union centres was less pronounced at the entreprise level", parece que en 1992 las secciones sindicales de Solidaridad sólo apoyaron a un 25% de las demandas de otra organización sindical, mientras que la OPZZ apoyó a un 50% de las demandas de Solidaridad.

[26] Kloc (1993:131) concluye que "Had Solidarity continued with its consistent and unlimited support for neo-liberal methods of economic transformation, the result would probably have been the union's self-destruction". De hecho, los antiguos sindicatos oficiales de la Europa Comunista han mantenido el primer puesto entre los trabajadores. En Hungría, según los resultados de las elecciones a comités de empresa celebradas en mayo de 1993, la Confederación Nacional de Sindicatos Húngaros obtuvo el 71,7% de los delegados, la Confederación de Sindicatos Autónomos el 18,6%, la Liga Democrática de Sindicatos Independientes el 5,7%, y Comisiones Obreras 2,2% (Cox y Vass 1994:169; Davis 1995:375). En el caso de los funcionarios, el sindicato de funcionarios -el Foro para la Cooperación Sindical- obtuvo el 66,9% de los delegados, seguido a mucha distancia por la CNSH (12,8%) (Davis 1995:375).

de nuevo de 1984 a 1986; y, de hecho, se ha defendido que esa estrategia le llevó a incrementar sus apoyos entre los trabajadores y finalmente a superar a su rival, CCOO, en las elecciones sindicales de 1982 (Pérez Díaz 1993). Igualmente la UGT portuguesa firmó en 1986 y 1987 acuerdos de contención salarial, en 1990 un *Acordo Económico e Social* con el gobierno conservador de Cavaco Silva, y de nuevo en 1996 con el nuevo gobierno socialista de Antonio Guterres, todos ellos en solitario (Barreto 1992:477).

Pero, en cualquiera de los casos, el rechazo sindical a apoyar a los gobiernos mediante una estrategia de negociación más o menos centralizada ocurría igualmente bajo condiciones de pluralismo sindical no competitivo (Lange 1984; Scharpf 1992; Pontusson 1992:18). Parece así que, al menos para las relaciones gobierno-sindicatos, las dos modalidades de fragmentación sindical producen efectos similares (dificultan la necesaria centralización de la negociación colectiva). Ahora bien, ¿no habría de influir en las relaciones entre los partidos políticos y los sindicatos el hecho de que el movimiento sindical estuviese dividido en organizaciones rivales? Al establecerse unas relaciones de solidaridad entre los partidos socialistas y las organizaciones sindicales, ¿no recelarían los sindicalistas disconformes con la ideología socialista, como anarquistas o socialcristianos? ¿Y no habría de influir, en la capacidad de los partidos y los sindicatos para ayudarse mutuamente, el hecho de que el sindicato aliado tuviese un competidor?

Todas estas preguntas han quedado generalmente sin contestar en los estudios teóricos sobre relaciones partido-sindicato y/o el neocorporativismo dado que asumían que el movimiento sindical, aunque pudiese estar organizado de formas diversas, era al menos unitario desde un punto de vista ideológico y, además, socialdemócrata. Así los movimientos sindicales que no encajaban con estos supuestos eran contemplados como casos desviados o curiosos, pero influidos en cualquier caso por circunstancias "excepcionales" (el peso de la religión, el éxito de los comunistas tras la Segunda Guerra Mundial, o incluso el atraso del país o idiosincrasias nacionales). Dado, por tanto, los prejuicios contra este sindicalismo "excepcional" no es extraño que en los estudios teóricos

sobre el comportamiento sindical esta característica desapareciese de los supuestos "relevantes".

2.1. El dilema sindical

El trabajo de Martin (1989) sobre los efectos del pluralismo sindical competitivo en las relaciones partido-sindicato es uno de los pocos que existen sobre esta cuestión. En su estudio llegó a la conclusión de que existe cierta asociación entre: (a) el grado de antagonismo entre los partidos políticos, (b) la naturaleza de las relaciones partido-sindicato y (c) la intensidad de la competición entre los sindicatos rivales (Martin 1989:132). Así, cuando los partidos controlan a los sindicatos, y existe un grado elevado de antagonismo entre los primeros, nos encontramos entonces con una intensa rivalidad entre las organizaciones sindicales. Por el contrario, cuando los partidos controlan a los sindicatos, pero no existe ese antagonismo entre los primeros, entonces nos encontramos con una rivalidad débil o inexistente entre los sindicatos. Finalmente, en aquellos casos donde existe un elevado antagonismo entre partidos políticos, pero los sindicatos cooperan entre ellos, los partidos no controlan a los sindicatos.

Martin no probaba que los partidos políticos controlasen realmente a los sindicatos, pero quizás sus asociaciones se mantuviesen con otra concepción de la naturaleza de las relaciones partido-sindicato. Para comprobar si este era el caso, he realizado un estudio similar al suyo, utilizando, sin embargo, los conceptos de relación de solidaridad o de intereses concretos, y centrándome exclusivamente en los países del Oeste y Sur de Europa. Los países escogidos son aquellos cuyas diferentes confederaciones sindicales han buscado la representación de similar universo de trabajadores desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta principios de los

años noventa[27]: Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Suiza, Italia, Francia, Portugal (desde 1974), España (desde 1976).

TABLA 10.Escenario del pluralismo sindical desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta finales de los años cincuenta.

	Arena sindical	Relaciones P.-S.	Arena partidaria
Bélgica	UAS	RS	CIP
Holanda	UAS	RS	CIP
Suiza	UAS	RS	CIP
Italia	CIS	RS	AP
Francia	CIS	RS[28].	AP

UAS: unidad de acción sindical[29].

RS: relaciones de solidaridad.

RI: relaciones de intereses.

CIP: Cooperación interpartidaria.

[27] Quedan excluidos así los países europeos que, aún teniendo distintas confederaciones sindicales, éstas no compiten por el apoyo de los mismos trabajadores, o sólo lo hacen parcialmente. Se podría plantear, con todo, que los sindicatos socialistas y los confesionales no pretendían representar al mismo universo de trabajadores. Hay que decir, sin embargo, que cada una de las organizaciones consideraba que su sindicalismo podía llegar prácticamente a todos los trabajadores. De hecho, el éxito del sindicato socialista entre trabajadores practicantes en Holanda llevó a que en 1954 los obispos les pidiesen expresamente que no se afiliaran o abandonasen el sindicato socialista, recomendación no levantada hasta 1965. Esta "recomendación" fue lo suficientemente grave como para que el sindicato socialista abandonase durante cuatro años los consejos corporativos en los que participaba (Martin 1989:135; Pasture 1994:30). Incluso entre la organización católica y la protestante podía haber competencia por cuanto la segunda era en principio interconfesional, habiendo católicos entre sus afiliados (Pasture 1994:28).

[28] Parece que las relaciones solidarias se daban más entre la CGT y el PCF que entre la FO y la SFIO, o entre la CFTC y los diferentes partidos conservadores franceses (Mouriaux 1985).

CIS: competencia intersindical.
AP: Antagonismo partidario.

TABLA 11.Escenario del pluralismo sindical en los años 70

	Arena sindical	Relaciones P.-S.	Arena partidaria
Bélgica	UAS	RS	CIP
Holanda	UAS	RI	AP[30]
Suiza	UAS	RS	CP
Italia	UAS	RI	AP[31].
Francia	UAS[32]	RS	CIP[33]
Portugal	CIS	RS	AP
España	CIS	RS	AP

TABLA 12.Escenario del pluralismo sindical a principios de los años 90

	Arena Sindical	Relaciones P.-S.	Arena Partidaria

[29] Por unidad de acción sindical no se ha de entender que los diferentes sindicatos presenten la misma estrategia sindical, sino que coordinen sus acciones.

[30] Desde mediados de los años sesenta el Partido socialista holandés emprendió una nueva política de polarización en la arena política (Daalder 1987:207).

[31] Hasta el *compromesso storico*.

[32] Entre la CFDT y la CGT.

[33] Entre el PS y el PCF. Para las elecciones presidenciales de 1965 los partidos de izquierdas franceses ya había presentado un candidato común. En 1972 el sucesor de la SFIO, el PS, y el PCF presentan un programa común de gobierno (Mouriaux 1985:77,78).

Bélgica	UAS	RS	CIP
Holanda	UAS	RI	CIP
Suiza	UAS	RS	CIP
Italia	UAS	RI	CIP
Francia	CIS	RS	AP
Portugal	UAS/CIS	RS	AP
España	UAS	RI	AP

Parece que se pueden distinguir así dos grupos dentro de los países con sindicalismo competitivo según el momento en que comenzaron la unidad de acción sindical: aquellos países que emprendieron la unidad de acción al menos desde finales de la Segunda Guerra Mundial (Bélgica, Holanda, Luxemburgo y Suiza) y aquellos que no lo hicieron hasta finales de los años 60 (Italia y Francia) o ya en los 80 (Portugal y España). En el primer grupo de países se constata que sus respectivos partidos socialistas y democristianos han estado colaborando a menudo en tareas de gobierno[34], por lo que parece existir una relación entre esta cooperación y la existente entre los sindicatos (Martin 1989:126,134)[35]. A este grupo se incorporaría Francia a principios de

[34] En Bélgica los socialistas han formado parte de gobiernos de coalición con los democristianos de 1947 a 1949, de 1954 a 1958 con los liberales, con los democristianos de nuevo de 1961 a 1966, de 1968 a 1974, de 1977 a 1981, y a partir de 1988 (De Winter 1992). En Holanda los socialistas han formado parte de gobiernos de coalición con los diversos partidos confesionales (Católicos, Antirrevolucionarios y Cristianos Históricos, los cuales se unirían a finales de los años 70) de 1946 a 1958, de 1965 a 1966, en 1971, de 1973 a 1977, en 1981, y a partir de 1988 (Daalder 1987:204-205). En Suiza, los socialistas han estado gobernando en coalición con los radicales, los democristianos y los populares suizos desde 1943 hasta el día de hoy, salvo entre 1954 y 1959 (Kerr 1987:126).

[35] La competición entre los distintos sindicatos belgas por el apoyo de los trabajadores fue en su día intensa, pero desde los años cincuenta el sindicato socialista

los años 70, pues la cooperación entre la CGT y la CFDT tiene su correspondencia entre los partidos de izquierda y el *programme uni de la Gauche*. Estos países se caracterizan, además, por haber tenido o tener unas relaciones partido-sindicato solidarias, al menos en una de las familias ideológicas[36].

---

y el católico vienen practicando la unidad de acción en la negociación colectiva (Martin 1989:126; Pasture 1994:49). En los Países Bajos, tras la Segunda Guerra Mundial, se formó incluso un Consejo de las Federaciones Sindicales para la reunión de los sindicatos socialistas, católicos y protestantes. Estos también igualaron sus cuotas y se comprometieron a no aceptar a ningún trabajador expulsado de otro sindicato. Tras algunas tensiones ya comentadas, en 1967 los tres sindicatos publicaron conjuntamente un "Programa de Acción" (en 1963 ya lo habían hecho católicos y socialistas). Durante los años setenta se celebraron negociaciones para formar una única confederación sindical, pero al final sólo se unieron en 1976 la confederación socialista y la católica (Martin 1989:134,135). En Suiza el sindicato socialista y el cristiano (en 1982 se integró el sindicato protestante en el católico) suelen cooperar en sus actividades, y desde 1965 existe un comité de coordinación (Pasture 1994:56).

[36] En Bélgica y Países Bajos las relaciones de solidaridad entre partidos y sindicatos formaban parte de los llamados "pilares" ("versuil") o coaliciones de organizaciones que incluían también cooperativas de consumo, mutuas de seguros, sociedades culturales y educativas, prensa, que compartían una religión o ideología común: socialista, confesional (católico o protestante) y liberal. En Bélgica la confederación sindical socialista se había formado en 1898, estrechamente asociada al partido obrero belga, y en 1909 la católica. En el período de entreguerras se creó también un sindicato vinculado con el partido liberal (Martin 1989:125). Tras la Segunda Guerra mundial el partido obrero pasó a denominarse Partido Socialista para atraerse los votos de otras clases sociales, y la afiliación colectiva entre los sindicatos y el partido socialista fue abolida, pero sus organizaciones (partido, sindicato, cooperativas, mutua de seguros) establecieron una organización llamada la Acción Socialista Común con objeto de coordinar sus esfuerzos a nivel nacional y local. Esta organización hacía de marco para movilizar apoyos en favor de las demandas políticas socialistas y repartirse los costes financieros de las campañas electorales (De Winter 1992:170,171). En 1964 el sindicato socialista, FGTB, tomó la decisión de hacer incompatibles los cargos sindicales y parlamentarios, pero las relaciones entre los partidos y sindicatos belgas continuaron caracterizadas por basarse en la afinidad y confianza (Lorwin, citado por Martin 1989:126). En los Países Bajos, antes de la Segunda Guerra Mundial se habían formado tres organizaciones sindicales: una socialista, otra católica

La cooperación en Italia entre la CGIL, la CISL y la UIL, sin embargo, no parece seguir este modelo, pues la cooperación en la esfera sindical es previa en varios años al *compromesso storico*. Lo mismo parece que ha ocurrido en España y Portugal[37], donde la unidad de acción entre los sindicatos, iniciada a finales de los 80, no ha venido asociada a un correlativo acercamiento entre los partidos socialistas y comunistas (especialmente en España). Nos encontramos así que se ha producido una transformación de las relaciones partido-sindicato[38], y lo que acontece en la esfera política, cooperación o duro antagonismo[39], no tiene su correspondencia en la esfera sindical.

---

y otra protestante. El sindicato socialista tenía vínculos estrechos e informales con el partido socialista, la organización católica con el Partido Católico del Pueblo, y la protestante con el Partido Antirrevolucionario y la Unión Cristiana Histórica (Martin 1989:133,134). Aquí, el partido socialista también cambió de nombre (pasó a denominarse Partido del Trabajo) tras la Segunda Guerra Mundial con objeto de atraerse los votos de los trabajadores que hasta la fecha habían votado a los partidos confesionales holandeses, pero dicha estrategia no tuvo mucho éxito y los "pilares" se mantuvieron intactos. Como en Bélgica, diferentes familias ideológicas existían en la sociedad holandesa sin tener mucho contacto una con otra donde los miembros escogían las organizaciones sociales de su "pilar" (Koole 1992:211). Finalmente, en Suiza Kerr (1987:173-175) comentaba la existencia de "virtually formal alliances such as those between the Swiss Federation of Trade Unions and the Socialist Party", de tal manera que "in spite of the autonomous stance taken by most interest groups, political parties are, on their side of the relationship, permeable institutions whose programmes and policies are orientated more towards some interests than others. The Socialist Party links its programmatic strategies with those of the Swiss Federation of Trade Unions". Relaciones similares han existido entre la confederación sindical cristiana y el partido democristiano suizo (Pasture 1994:54).

[37] La unidad de acción sindical en Portugal empezó a debilitarse a comienzos de los años noventa (Stoleroff 1992:143) y parece que ha cesado pues, por ejemplo, la UGT portuguesa aceptó firmar un pacto social con el nuevo gobierno socialista portugués, no así la CGT-P tradicionalmente relacionada con el Partido Comunista.

[38] En Holanda, al contrario que en Bélgica, la división político-social por pilares se deshizo a partir de los años sesenta (Pasture 1994:21). Los lazos formales entre los partidos y las organizaciones sociales fueron disolviéndose, comenzaron a ser bastante menos frecuentes las relaciones personales entre los miembros del mismo

No parece existir así ningún caso donde los partidos y los sindicatos mantengan relaciones de solidaridad (con lo que ello implica, fines y activistas comunes, intercambios de influencias y servicios, etc), un grado alto de antagonismo entre los partidos políticos (evidenciado en rechazos mutuos a establecer coaliciones o compromisos en la toma de decisiones) y, al mismo tiempo, cooperación en los sindicatos en el ámbito de las relaciones laborales.

Ahora bien, existe una diferencia de relevancia entre el primer y el segundo escenario de unidad de acción. En el primero caso, un sindicato puede mantener a la vez las relaciones de solidaridad con su partido de preferencia y la unidad de acción con otros sindicatos. Por el contrario, cuando entre los partidos políticos existe un grado alto de antagonismo, los dirigentes sindicales tienen que optar entre mantener sus relaciones de solidaridad con un partido concreto o la unidad de acción con otros sindicatos[40]. Esto les supone un dilema sobre qué opción escoger, ¿qué les reportará más beneficios: las relaciones de solidaridad con un partido político concreto o la unidad de acción con otros sindicatos?, ¿qué perderán si eligen una u otra opción?

La existencia de un dilema similar se atestigua también en aquellos países con movimientos sindicales unitarios (al menos para los trabajadores manuales), pero cuyos líderes tienen diferentes preferencias partidistas. En este caso hay que optar entre esas

---

pilar y se redujo el exclusivismo con que las organizaciones se relacionaban con su entorno. Así, el partido socialista holandés se interesó por los nuevos movimientos sociales, si bien siguió manteniendo contactos con los sindicatos (Koole 1992:211). No deja de ser indicativo de la "despilarización" ocurrida en Holanda que mientras que la mayoría del sindicalismo católico se unió con los socialistas, el partido católico escogió a los partidos protestantes y formaron la "Christian Democratic Appeal" (Martin 1989:135). Por el contrario, en Suiza, como ya dijimos, los sindicalistas católicos y protestantes se unieron en 1982 tras años de colaboración (Pasture 1994:55).

[39] E incluso colapso del partido al que tradicionalmente un sindicato había estado vinculado.

[40] Veremos más adelante que no hay que excluir que los sindicatos no escojan ni lo uno ni lo otro, comportamiento que se constata empíricamente en algunos países.

relaciones partido-sindicato de solidaridad y la unidad misma de la organización; y, de nuevo, sería de esperar que un bajo antagonismo entre sus partidos políticos de referencia atenuase el dilema. Los países europeos que han tenido desde el fin de la Segunda Guerra Mundial un movimiento sindical con diferentes preferencias partidistas dentro de una única organización han sido Finlandia, República Federal de Alemania, Austria, Grecia, Italia (entre 1944 y 1948) y Portugal (1974-1978).

El sindicalismo alemán, al igual que el austriaco, estaba dividido en confederaciones rivales según líneas ideológicas hasta el acceso de Hitler al poder en 1933 (Martin 1989:196). La reconstitución del sindicalismo en la República Federal Alemana, con la creación de la DGB, se hizo siguiendo principios organizativos unitarios al igual que en Austria, y se intentó en Italia entre 1944 y 1948. La DGB es una organización formalmente apartidista, y ni contribuye a la financiación de los partidos ni se decanta explícitamente por partido alguno en las elecciones. Hay algunas restricciones legales sobre estas cuestiones, pero, sobre todo, según Padgett y Paterson (1991:181), "the display of independence stems from the need to recognize and accommodate the presence of non-socialist elements within their ranks. The German trade union's open support for the Social Democratic Party in the Bundestag election of 1953 precipitated a crisis within the confederation, with Christian Union supporters threatening to break from the confederation. Subsequently the DGB refrained from declaring its support for the SPD"[41]. Esto no significa que los sindicalistas alemanes no tengan un importante papel dentro del SPD (Martin 1989:197), pero los sindicatos alemanes no varían sus políticas según los intereses partidistas, ni los gobiernos socialdemócratas alemanes pueden estar seguros de contar con el apoyo de sus políticas (Scharpf 1992:245). Los ejemplos de Italia a finales de los años cuarenta, Finlandia a principios de los sesenta, Portugal en los setenta o Grecia en los ochenta son buenos

[41] De hecho, en 1955 parte de los sindicalistas democristianos rompieron con la DGB y decidieron crear su propia confederación sindical cristiana, si bien ésta nunca ha llegado a amenazar la hegemonía de la DGB (Martin 1989:197).

exponentes de lo que ocurre cuando esta "regla" no se respeta: la ruptura de la organización sindical unitaria[42].

Finalmente, la relación más estrecha entre la ÖGB y el SPÖ en Austria (Scharpf 1992) se acomoda también a estas asociaciones, pues allí las estrechas relaciones entre los sindicalistas y el SPÖ, al mismo tiempo que la unidad de un movimiento sindical ideológicamente dividido se asocia con la ausencia de un antagonismo intenso entre socialdemócratas y democristianos, como sus frecuentes coaliciones

[42] En estos cuatro casos la organización sindical unitaria se fragmentó. En Italia en 1944 comunistas, socialistas y democristianos negociaron la formación de una confederación sindical unitaria (la CGIL) que sería formalmente apartidista y en cuyo comité ejecutivo estarían representadas las diferentes tendencias ideológicas. La confederación se mantuvo unida mientras los tres partidos colaboraron en tareas de gobierno. A mediados de 1947 los comunistas y el principal partido socialista salieron del gobierno italiano. Al año siguiente, los sindicalistas democristianos abandonaron la CGIL acusando a su dirección de seguirle el juego a los comunistas, y un año más tarde también lo hacían otros sindicalistas no comunistas. Para 1950 existían en Italia tres confederaciones sindicales (Martin 1989:122). En Finlandia, tras la Segunda Guerra Mundial, se constituyó una confederación sindical unitaria, al menos entre los obreros, la SAK. Sin embargo, la fuerte rivalidad entre socialistas y comunistas condujo a su división formándose una confederación rival, la SAJ, en 1960 (Lilja 1992:206). En Portugal, tras la Revolución de los Claveles se mantuvo el sindicalismo unitario de la época de la dictadura agrupado en la Intersindical, pero bajo una nueva dirección, principalmente comunista. Esta confederación agrupaba a dos tercios de todos los sindicatos y gozaba del monopolio legal por la ley sindical de 1975. Al año siguiente la nueva constitución abolió el monopolio legal de la Intersindical, y los sindicalistas socialistas y conservadores terminaron formando una confederación rival, la UGT, con el apoyo del PS y del PSD (Barreto 1992:462-464). Finalmente, en Grecia, la confederación sindical unitaria, la GSEE, en cuya dirección estaban representados sindicalistas de diversas tendencias ideológicas, se fracturó en 1985 entre los sindicalistas que apoyaban las medidas de austeridad introducidas por el PASOK en aquel año y los que las rechazaban (Kritsantonis 1992:617-618). En Finlandia (tras unos diez años de rivalidad) y en Grecia (cuatro años) la confederación unitaria se consiguió recomponer. En Finlandia se asocia con el acercamiento entre socialistas y comunistas, pues en 1966 entraron en el gobierno (Lilja 1992:207), y en Grecia con la salida del PASOK del gobierno y la llegada de los conservadores al poder (Kritsantonis 1992:619).

de gobierno ponen de manifiesto hasta el día de hoy[43]. Y, con todo, "to be sure, the social democratic connection is dominant, and the presidents of the ÖGB and its member unions are invariably well-known socialists, but still the confederations has maintained a formal neutrality in deference to its non-socialist minority. In 1966, for instance, when the SPÖ went into opposition, the ÖGB emphasized its supra-partisanship, making clear its readiness to cooperate with the non-socialist government" (Padgett y Paterson 1991:181[44]). Es decir, mientras que la unidad organizativa del sindicalismo austriaco se produjo siguiendo más bien el modelo de Bélgica o los Países Bajos, en el caso alemán la unidad sindical entrañó la disolución de las relaciones de solidaridad con partidos político concretos, como luego ocurría en Italia[45].

Hemos visto, así pues, cómo los líderes sindicales que actúen en contextos de pluralismo sindical potencialmente competitivo y antagonismo partidista tienen que optar entre la unidad de acción u orgánica del movimiento sindical y las relaciones de solidaridad con los partidos políticos. El comportamiento de los sindicatos en el Sur de Europa muestra que no hay una respuesta unívoca a este dilema. Durante la posguerra, los sindicatos italianos y franceses prefirieron

---

[43] Han estado colaborando juntos desde 1945 a 1966 y de nuevo desde 1986 hasta hoy.

[44] Martin (1989:195) afirma que "[t]here is no doubt that the OGB's ties with the Social Democratic Party are very close. Major trade union leaders customarily occupy senior positions in the party's structure and hold parliamentary seats as party representatives. They have also held ministerial posts in its name. Nevertheless, the distinction between the OGB and the party has been carefully maintained by union leaders. They have been sensitive to the necessity of avoiding too intimate an identification with the party if the OGB's position, as a comprehensive and basically non-party confederation, is to be preserved".

[45] Quedaría, con todo, por explicar por qué en Bélgica, los Países Bajos, Luxemburgo o Suiza no procedieron a unificar sus antiguas confederaciones sindicales anteriores a la Segunda Guerra Mundial como sí hicieron alemanes, austriacos e italianos (si bien en Italia, como hemos visto, la unitaria CGIL se fragmentó en 1948).

mantener relaciones de solidaridad con los partidos políticos, sobre todo en el caso de los sindicatos de ideología comunista y democristiana; y, en la actualidad, los italianos y españoles prefieren la unidad de acción entre ellos a esta clase de relaciones, no estando esto tan claro entre franceses y portugueses. Por otro lado, en Francia los diferentes sindicatos de tendencia "socialista" no escogieron ninguna de las dos opciones[46]; y lo mismo parecen hacer los antiguos sindicatos oficiales en la Europa del Este[47]. ¿En qué circunstancias los

[46] En Francia hay desde los años sesenta dos confederaciones sindicales que, o bien se han declarado en algún momento como socialistas, o bien la mayoría de su militancia es de tendencia socialista, comenzando por sus máximos líderes: Fuerza Obrera (FO) y la Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT). La primera procede de una escisión de la CGT de preguerra ocurrida en 1947 tras la toma de control del sindicato por miembros de inspiración comunista. Si bien en los años cincuenta la FO y la SFIO compartieron la pretensión de crear una tercera fuerza entre comunistas y conservadores, en los años sesenta y, sobre todo, setenta, la FO rechazó participar en el acercamiento producido entre los diversos sindicatos franceses así como prestar su apoyo a los partidos de izquierda. No practicaba así ni la unidad de acción sindical, ni buscaba mantener relaciones de solidaridad con algún partido político alternativo. Incluso con la llegada de los socialistas al poder en los años ochenta, mantuvo, como hemos visto, una postura de confrontación tanto con el gobierno socialista como con los sindicatos que le apoyaban. La ruptura de éstos con el PS, no le llevó, sin embargo, a acercarse ni a la CFDT -a la que acusaba de obstinarse en ser "una segunda izquierda" y de "competir con los partidos políticos"- ni al PS, ahora que ya no contaba con el apoyo de este sindicato. Igualmente, la CFDT tras considerar en el invierno de 1984 que no podía seguir apoyando las políticas del Gobierno socialista, no emprendió la unidad de acción con la FO, ni con la CGT cuando este sindicato también rompió con el Gobierno de Mitterrand (Mouriaux 1985).

[47] Salvo en el caso de la antigua Checoslovaquia, en Europa Oriental el movimiento sindical se divide principalmente entre los antiguos sindicatos oficiales refundados y otros de nueva formación. En general, los primeros terminaron sus vínculos formales con los partidos comunistas, o sus sucesores, durante los procesos de transición a la democracia, como fue el caso de la CITUB en Bulgaria (Thirkell, Atanasov y Gradev 1993:102,103), la OPZZ en Polonia (Kloc 1993:126) y la Confederación Nacional de Sindicatos Húngaros (Cox y Vass 1994:165,166). Los nuevos sindicatos, sin embargo, mantienen unas relaciones más estrechas con respecto a los partidos enfrentados a los excomunistas. Además de Solidaridad, que

beneficios derivados de una de las opciones serán reconocidos por los líderes sindicales como mejores que los de las otras? ¿Hasta qué punto los líderes sindicales se encuentran realmente ante un dilema[48]? Para entender esta variedad de respuestas posibles, hay que plantearse, por tanto, a qué están renunciando los líderes sindicales cuando se decantan por una u otra alternativa y qué esperan conseguir de ella, pues sólo cuando consideren que las ganancias de una determinada opción exceden a los costes estarán valorando racionalmente qué estrategia les conviene más. Es así más fácil entender por qué un sindicato querrá aceptar, o promover, las relaciones de solidaridad o la unidad de acción sindical, o ni lo uno ni lo otro, si su elección es interpretada como el resultado de un cálculo entre los costes y los beneficios que cada opción acarrea.

La opción de la unidad de acción sindical implica, por de pronto, que los sindicatos renuncien a conseguir la hegemonía sobre los restantes (y conseguir así la unidad orgánica del movimiento sindical sin tener que proceder a fusiones de organizaciones con tradiciones, características internas e ideologías, en principio, diferentes)[49]. Así, mientras los líderes sindicales mantengan esta pretensión, rechazarán coligarse con el rival al que pretenden laminar. En segundo lugar, supone renunciar a lo que pueda ofrecer el partido por tener con él unas relaciones de solidaridad, o lo que es lo mismo, a la vía supuestamente más útil para influir en el ámbito político y alcanzar así objetivos sindicales que requieran de la actuación gubernamental, sobre todo cuando el partido accede al gobierno. Ahora bien, estas "renuncias" podrían no ser tales si la hegemonía sindical se mostrase

---

tiene una rama partidista, en Bulgaria el nuevo sindicato Podkrepa, formado clandestinamente en febrero de 1989, participó en la fundación del principal grupo opositor, la Unión de Fuerzas Democrática, y entre un cuarto y un tercio de diputados de la UFD eran miembros de ese sindicato tras las elecciones de otoño de 1991.

[48] Esto es, ¿hasta qué punto renunciar a una de las opciones tiene costes?

[49] Véanse los trabajos de Pasture (1994) y Lange y Vannicelli (1990) sobre los intentos, finalmente fracasos, de crear una organización sindical unitaria en Holanda e Italia a finales de los años sesenta y principios de los setenta.

como inalcanzable, o los partidos no proporcionasen los resultados esperados.

La opción de las relaciones solidarias con los partidos políticos implica, como vimos en el primer capítulo, que el sindicato tendría que abstenerse de actuar directamente en el ámbito político (o por lo menos hacerlo de forma coordinada con su partido hermano). Pero además, en el caso de que el partido hermano fuese socialdemócrata y estuviese en el gobierno, implicaría que la estrategia de presión en los centros de trabajo quedase excluida en favor de una estrategia de moderación (que hasta los años noventa se realizaría mediante una negociación colectiva centralizada). Si, además, los partidos políticos eran antagónicos entre sí, el sindicato tendría que olvidarse de emprender acciones para cuyo éxito fuese imprescindible contar con el apoyo de otros sindicatos. Ahora bien, podría ocurrir igualmente que esa unidad de fuerzas sindicales no fuese tan necesaria si, por ejemplo, cada sindicato rival fuese fuerte en unos sectores productivos o regiones.

Así, la elección entre la unidad de acción sindical o las relaciones partido-sindicato de solidaridad supone que el sindicato elija entre diferentes opciones estratégicas tanto para acceder al ámbito político[50] como para actuar en la negociación colectiva con los empresarios (sobre todo para el caso de un sindicato socialdemócrata y cuando su partido hermano estuviese en el gobierno). En el primer ámbito, los sindicatos elegirían entre actuar a través de un determinado partido político o, por el contrario, unir sus fuerzas para influir directamente a los gobiernos, relacionarse con diferentes partidos políticos o actuar a través de los canales "neocorporativos". En la negociación colectiva los sindicatos elegirían entre coordinar su actuaciones con sus partidos hermanos respectivos (lo cual implicaba, en la familia

[50] Emprender la unidad de acción con otros sindicatos, rompiendo con las relaciones de solidaridad, no implica necesariamente que a los dirigentes sindicales les haya dejado de interesar el ámbito político, sino que pueden querer influir en él por aquellas otras vías consideradas hasta entonces como menos provechosas: relaciones de intereses concretos con diferentes partidos políticos, presionando al gobierno de turno con movilizaciones y huelgas, o adquiriendo el derecho a intervenir y decidir en instituciones públicas.

socialista y para cuando el partido estuviese en el poder, una estrategia de negociación centralizada) o, por el contrario, coordinar entre sí sus estrategias. Pero, a su vez, podría ocurrir que esta elección supusiese de hecho una elección entre maximizar objetivos políticos o laborales. Por ejemplo, cuando los dirigentes sindicales se decantasen por las relaciones solidarias, no sólo estarían confiando en que éstas fuesen la mejor estrategia para influir en el ámbito político, sino que además esperarían obtener todos sus objetivos por esta vía, pues la propia división sindical podría dificultar las posibilidades de presionar o negociar en las relaciones laborales (de ahí que, cuando eligen las relaciones de solidaridad con un partido político determinado, se hable de la "sobrepolitización" del sindicato y, cuando se alejan, se hable de "resindicalización). Pero no necesariamente, si el sindicato tuviera la suficiente fuerza en el mercado de trabajo podría, en el caso de un sindicato comunista, presionar en solitario a los empresarios para obtener sus objetivos en las relaciones laborales y esperar a que su partido llegase al poder para satisfacer sus objetivos políticos, o, en el caso de un sindicato socialdemócrata y su partido estuviese en el poder, podría llevar a cabo la estrategia de negociación centralizada para conseguir sus objetivos en este ámbito al mismo tiempo que su gobierno le satisfacía sus objetivos políticos. Los sindicatos elegirán entre uno u otro conjunto de estrategias que entrañan las relaciones solidarias o la unidad de acción sindical en función de cuál se muestre más eficaz para conseguir sus objetivos tanto políticos como laborales, eficacia que depende a su vez de (a) cómo se comporten los partidos políticos, (b) de cuáles sean los efectos de la no colaboración intersindical para los propios sindicatos y (c) de hasta qué punto es factible que una de las organizaciones se convierta en la central sindical hegemónica.

Podemos pensar así que los líderes sindicales preferirían las relaciones de solidaridad con un partido político concreto -y, por tanto, la no cooperación entre los sindicatos- si la victoria de "su" partido pareciese inminente, éste se mostrase muy dispuesto a satisfacer los objetivos sindicales que requiriesen de la actuación legislativa y, además, creyesen que se podría destruir a los sindicatos rivales, proceder a la unidad del movimiento sindical bajo sus siglas, y

"disolver" así ese dilema. Si, por el contrario, ocurriese que el objetivo de hegemonía sindical resultase claramente inalcanzable, la falta de unidad entre los sindicatos debilitara su posición frente a los empresarios, y las relaciones de solidaridad dejasen mucho que desear como vía para influir en las decisiones gubernamentales porque el partido no llegara nunca al poder, o porque, cuando lo hiciese, no proporcionara los bienes esperados, entonces probablemente los líderes sindicales escogerían la unidad de acción sindical.

Ahora bien, como vimos, desde la Segunda Guerra Mundial se fue extendiendo la opinión entre los socialdemócratas de que sus relaciones de solidaridad rendían su máximo provecho cuando el Partido llegaba al gobierno y el Sindicato coordinaba con él sus actividades en el ámbito laboral. Pero, ¿era posible que esta coordinación diese los resultados esperados si el resto de los sindicatos no la apoyaban? ¿Cómo afecta la división sindical competitiva en los apoyos que un sindicato puede prestar a los gobiernos para que éstos proporcionen los beneficios que desea? Quizás el sindicato aliado del Gobierno podía intentar esquivar este escollo si, gracias a su acceso privilegiado al ámbito político, vencía al sindicato rival, ¿o era esto matar demasiados pájaros de un mismo tiro? Finalmente, ¿necesariamente los sindicatos en estos contextos tienen que elegir entre unidad de acción o relaciones de solidaridad? ¿Por qué hay sindicatos que no escogen ni lo uno ni lo otro?

2.2. La lucha intersindical, los gobiernos y los partidos políticos

De lo anteriormente dicho parece deducirse que el comportamiento de un actor no sólo viene determinado por sus objetivos, sino también por las actuaciones de otros actores. Con objeto de estudiar estas interrelaciones que explican cuándo el pluralismo sindical competitivo conduce a que los sindicatos se abstengan de apoyar a los gobiernos, sus preferencias entre las relaciones de solidaridad y la unidad de acción sindical, así como las posibilidades de un sindicato para hacerse hegemónico, se va a

recurrir al enfoque teórico de la elección racional por ser precisamente las interrelaciones de las motivaciones y decisiones de los actores uno de sus principales centros de interés (Morrow 1994). Empezaremos estableciendo un modelo teórico para deducir cuáles puedan ser los efectos del pluralismo competitivo en las relaciones entre los gobierno y sindicatos, y en concreto en esos acuerdos que forman la coordinación económica. Después veremos otras consecuencias que pueden deducirse sobre las relaciones intersindicales al igual que en las relaciones entre los sindicatos y los partidos políticos[51].

Partimos, en primer lugar, del supuesto de que el Gobierno (y el partido o partidos que le apoyan) está interesado en conseguir el apoyo de los sindicatos a sus políticas económicas y, en concreto, la congelación del salario real con objeto de luchar contra la inflación y restaurar los beneficios empresariales y/o el cierre de empresas públicas deficitarias. Promete a cambio una reducción a medio plazo del nivel de desempleo, gracias a la coordinación de la política salarial con las políticas fiscales y monetarias, y un incremento a corto plazo del gasto social. Además, para vencer recelos entre las organizaciones sindicales, ofrece ciertos bienes, que llamaremos "organizativos" (financiación pública, descuentos fiscales de las cuotas sindicales, mayor acceso a ciertos organismos públicos, etc), a aquellos sindicatos que acepten cooperar con él.

El segundo grupo de supuestos concierne al comportamiento de los líderes sindicales. Estos tienen ante sí dos opciones estratégicas: (1) cooperar con el Gobierno, conteniendo los salarios a cambio de la disminución del desempleo y el aumento del gasto social para los trabajadores (además de recibir del Gobierno esos bienes organizativos); y (2) no hacerlo, y llevar a cabo una estrategia de presión y movilización en los centros de trabajo con objeto de incrementar de forma inmediata los salarios y condiciones laborales de los trabajadores. Los líderes sindicales elegirán la estrategia que

[51] Establecer un modelo teórico tiene la desventaja de simplificar una realidad que es inmensamente compleja, pero ofrece, sobre todo, la ventaja de dejar bien claro cuáles son los principales supuestos de los que se parte y cuál es la conclusión concreta de esos supuestos.

estimen que maximiza sus objetivos "instrumentales", los cuales son de dos clases: (a) aumentar su representatividad relativa entre los trabajadores y (b) conseguir los bienes organizativos que ofrece el gobierno[52]. Ahora bien, sólo intentarán obtener los bienes organizativos si tal intento no daña la posibilidad de aumentar su representatividad relativa entre los trabajadores[53]. Como hemos dicho, los bienes organizativos se obtienen sólo si el sindicato acepta cooperar con el Gobierno. Para conseguir aumentar la representatividad relativa, en condiciones de libertad sindical[54], cada sindicato tiene que llevar a cabo una actuación sindical que la mayoría de los trabajadores estime que les satisface mejor sus objetivos que la llevada a cabo por el sindicato rival. Pero si los dos sindicatos

---

[52] Estos objetivos son "instrumentales", es decir, en la organización se proponen alcanzar ciertos bienes o una determinada situación para poder así conseguir mejor los objetivos finales. No es necesario presuponer, por tanto, que además estos objetivos hayan "desplazado" a los finales. Según la interpretación que hacen Lange y Ross (1990:294-295) de la acción sindical, "la capacidad de mediación de los sindicatos [entre trabajadores y empresarios y agentes políticos] aumenta a medida que éstos consiguen monopolizar el control de los recursos económicos y políticos que representan los trabajadores (el valor de esos recursos, especialmente en el mercado de trabajo, aumenta en la medida en que se integran en una organización colectiva) y que los empresarios y el Estado y los partidos políticos atribuyen mayor valor a esos recursos". Más tarde veremos qué pasaría, de todas formas, si para los sindicatos rivales los bienes que les ofrece el gobierno no constituyen un objetivo, o si se combina un sindicato que sí los desea con otro que no.

[53] Su orden léxico de preferencias es por tanto: 1º) aumentar su representatividad relativa entre los trabajadores y obtener los bienes organizativos, 2º) aumentar su representatividad relativa entre los trabajadores, pero perder los bienes organizativos, 3º) no variar su posición relativa y obtener los bienes organizativos, 4º) no variar su posición relativa, pero no obtener los bienes organizativos, 5º) disminuir su representatividad relativa entre los trabajadores, pero obtener los bienes organizativos, y 6º) disminuir su representatividad relativa entre los trabajadores y no obtener los bienes organizativos.

[54] Es decir, los trabajadores no están obligados por ley a afiliarse a ningún sindicato, ni sólo se pueden presentar a las elecciones a comités de empresa los candidatos de un único sindicato.

emprenden la misma estrategia, los trabajadores no cambiarán de sindicato.

Llegamos así al tercer grupo de supuestos. Los bienes que reclaman la mayoría de los trabajadores a los sindicatos a cambio de ofrecerles su apoyo (ya sea afiliándose o votando por sus candidaturas) son bienes materiales "privados" y "públicos"[55]. Si los trabajadores se conformasen exclusivamente con bienes de "identidad" o de "sociabilidad", entonces los sindicatos no estarían compitiendo realmente entre sí. No sería éste un escenario muy distinto del sindicalismo fragmentado pero no competitivo[56].

---

[55] Según Lange y Ross (1990:297) los "bienes" que pueden recibir los trabajadores de los sindicatos, o por mediación de ellos, a cambio de su consentimiento (es decir, de su voluntad de permitir que los sindicatos actúen en su nombre frente a otros agentes sociales y políticos) son de cuatro clases: materiales, funcionales, de identidad y de sociabilidad. Los primeros se refieren a seguridad del empleo, incrementos de salarios, reducción de la jornada laboral o mejores condiciones de trabajo. Dado que estos bienes se proporcionan a individuos o grupos de individuos concretos a partir de ahora me referiré a ellos como bienes "privados". Los "funcionales" se refieren a una mejora del nivel de vida de la sociedad en general: reducción del desempleo, mejora del Estado del Bienestar, etc., los llamaremos "públicos" a partir de ahora. Los de identidad se refieren a la posibilidad de identificarse y ser identificados con los principios y derechos encarnados por el sindicato en cuestión. Finalmente, los de sociabilidad, son compensaciones intangibles derivadas del hecho de asociarse y de los vínculos sociales interpersonales que tienen su origen en la conciencia de formar parte de un grupo definido y relativamente pequeño. Hay que tener presente que toda organización recurre en diversa medida a todos estos incentivos.

[56] Lange y Ross han señalado que, en la medida en que los sindicatos reciben el apoyo de los trabajadores a cambio principalmente de incentivos de identidad, no hay competencia porque "[a]bandonar el sindicato al que tradicionalmente se ha pertenecido, y más aún afiliarse al 'sindicato rival', implicaría seguramente, en el plano personal, importantes costes psíquicos, aun cuando pueda entrañar ventajas materiales". De ahí que concluyeran que "cuando los incentivos de identidad tienen un importante peso en la estrategia de los sindicatos, es probable que, aun en una situación de pluralismo sindical, el 'mercado' de posibles seguidores esté muy segmentado" (Lange y Ross 1990:310,311). Ahora bien, vimos en el primer capítulo que parece que se ha producido un cambio cultural entre los trabajadores en el

En cuanto a los bienes "privados" y "públicos", se supone que los trabajadores preferirán maximizar su bienestar, esto es, obtener ambas clases de bienes, pero al mismo tiempo también tienen en cuenta los posibles costes que entraña cada estrategia para conseguirlos. La estrategia de presión tiene la desventaja de que los trabajadores han de emprender movilizaciones y huelgas, lo cual supone un coste, como salario que se deja de percibir, o el riesgo de ser despedido. La estrategia de negociación tiene el inconveniente de que hay que esperar más y confiar en que los gobiernos cumplan lo prometido. Así, si los trabajadores consideran que las perspectivas de éxito de la estrategia de presión son reducidas, se abstendrán de emprenderla y, si se les da la oportunidad, apoyarán la negociación centralizada. Por el contrario, si consideran que la estrategia de presión tiene una alta probabilidad de conducir al éxito, apoyarán al sindicato que la proponga[57]. Los trabajadores abandonarán así al sindicato cuya estrategia les proporciona un "saldo" (beneficios menos costes) peor que el proporcionado por el sindicato rival[58].

El cuarto supuesto se refiere al contexto socioeconómico. Este es tal que si uno de los sindicatos por separado presiona, podrá proporcionar los bienes privados[59]. Es decir, si uno de los sindicatos

---

sentido de que éstos reclaman menos incentivos de identidad a las organizaciones sindicales (Pérez-Díaz 1993:347-353).

[57] Ya sea por "egoísmo" (pretenden mejorar su salario real gracias a que los otros trabajadores no lo hacen), ya por "inseguridad" (es decir, dudan de que los bienes "públicos" vayan a materializarse) o "ignorancia" (no ven relación alguna entre subidas salariales y gasto social).

[58] En pocas palabras se supone que estamos tratando con trabajadores del tipo calificado por Pérez Díaz como "autónomos", es decir, mantienen un juicio independiente, se proponen decidir por sí mismos y someten a su propio juicio los de la organización, por lo que no tienen el menor reparo en retirar su apoyo al sindicato si consideran que los resultados son decepcionantes.

[59] Aquí habría que distinguir entre movilizaciones para conseguir incrementos de los bienes materiales (salario, mejoras de condiciones de trabajo, etc) o simplemente la permanencia en el puesto de trabajo. Lange (1984:112-117) señala que un contexto económico expansivo suele ser favorable para la estrategia de presión para conseguir mejoras salariales. Los empresarios se resisten menos al sindicato no concertador pues pueden trasladar a los precios el incremento de los costes laborales, o no

decide movilizar, aunque los trabajadores del otro sindicato no participen, la estrategia de presión tendrá éxito.

Finalmente cada sindicato conoce el orden de objetivos de su rival y el contexto sociolaboral en el que se encuentra.

Escenario I

		Sindicato 2	
		C	P
Sindicato 1	C	1,1	-1,2
	P	2,-1	0,0

El resultado es que ambos sindicatos deciden no cooperar con el Gobierno, y presionan en los centros de trabajo (P,P). Desde la perspectiva del sindicato 1, lo mejor que le podría ocurrir sería que él no cooperase con el gobierno y su rival sí lo hiciera. En este caso, aunque no consiguiese los bienes organizativos del gobierno, al presionar en el mercado de trabajo y obtener así incrementos del salario real (o evitar el cierre de centros de trabajo) los trabajadores que hubieran apoyado al sindicato concertador verían como el resultado ofrecido por éste era peor que el ofrecido por el sindicato 1, y pasarían así a apoyarle abandonando al sindicato concertador. Por el contrario, si los dos cooperasen con el gobierno, aunque consiguiesen los bienes privados que les daba éste, no alcanzarían el objetivo superior de incrementar la representatividad relativa entre los trabajadores pues éstos no tendrían incentivos para cambiar de sindicato. Pero lo peor que le podría ocurrir al sindicato 1 sería que cooperase en solitario porque, aunque recibiría los bienes del

---

quieren tener huelgas que les hagan perder el buen momento, etc, al mismo tiempo que los sindicatos tienen más recursos para presionar. Ahora bien, como el caso polaco anteriormente visto evidencia, una estrategia de presión puede tener éxito en situaciones de crisis si se trata más bien de luchar contra despidos y cierre de empresas, y éstas son además grandes y/o públicas.

gobierno, perdería apoyos entre los trabajadores. Finalmente, si ninguno de los dos sindicatos cooperase, no conseguirían ninguno de los objetivos, ni incrementar su representatividad ni los bienes organizativos, pero al menos no perderían apoyos en beneficio de su rival. En definitiva, ya sea porque, si no se coopera, quizás se consiga ganar apoyos entre los trabajadores (si el otro coopera), ya sea porque, si se coopera, se arriesga a perder apoyos (si el otro no coopera), ambos sindicatos eligen no cooperar con el gobierno, lo cual sin embargo es un resultado inferior para ambos al que hubieran conseguido de cooperado. Luego de aquí se deduce que, en situaciones tales en que una estrategia de presión en el mercado de trabajo por separado tenga éxito, y nos encontremos en un contexto de competencia intersindical, los sindicatos no colaborarán con el gobierno aunque éste prometa incrementar el salario social, más empleo, y dar bienes organizativos con carácter selectivo. Esto es así porque el primer objetivo instrumental de los sindicatos es incrementar su representatividad relativa entre los trabajadores, o al menos consideran que los bienes organizativos no compensan la pérdida de apoyos entre los trabajadores.

Pero muchos investigadores probablemente señalen con razón que en el mundo real no todas las huelgas tienen éxito, que no siempre que se presiona al empresario en el mercado de trabajo éste automáticamente sube la nómina (o se evita el despido de trabajadores). Apoyar una huelga, por tanto, puede que implique que el trabajador se sacrificó -dejó de cobrar su sueldo los días que hizo huelga- para nada -pues no consiguió dicho incremento-, o para peor -fue despedido. Ahora bien, si es previsible que las huelgas vayan a fracasar, el Gobierno puede contar con la aquiescencia de los sindicatos sin tener que darles ni prometerles nada a cambio (Scharpf 1992). Supongamos, sin embargo, un escenario intermedio: las huelgas tienen éxito si ambos sindicatos se apoyan mutuamente[60].

[60] Si bien Lange (1984:113) señala que en situaciones de crisis económica es más probable que los empresarios se muestren más firmes ante las demandas de los sindicatos por lo que la estrategia de presión es más difícil que tuviese éxito, en estas circunstancias las huelgas pueden estar dirigidas contra la pérdida de empleos. Como hemos comentado antes, estas huelgas pueden ser efectivas especialmente en el caso

Igualmente, puede que no todo el mundo esté de acuerdo con la idea de que los sindicatos se fijen como objetivo, por muy instrumental que sea, conseguir esos bienes organizativos ofrecidos por los gobiernos, señalando correctamente que existen muchos casos empíricos que así lo prueban. Vamos a suponer, entonces, que los sindicatos -compuestos por miembros "radicales"- rechazan los bienes organizativos como un burdo intento de cooptación por parte del Capital, al mismo tiempo que no confían en que los gobiernos vayan a crear más empleo o incrementar el salario social. Además, consideran que las movilizaciones sindicales en los centros de trabajo sirven de preparación para la futura revolución social[61]. Mantienen, sin embargo, como objetivo ("instrumental", claro está) aumentar su representatividad relativa entre los trabajadores a costa del sindicato "traidor" o "equivocado" (esto es, ganar la lucha intersindical) por mucho que éste se considere también radical[62]. El resto de los supuestos anteriores no cambia.

Escenario II

	Sindicato 2

del sector público o de grandes compañías. No se puede deducir automáticamente, por tanto, que un contexto de crisis fuerce a colaborar a los sindicatos con los gobiernos pues depende de los motivos de las movilizaciones y de la estructura productiva del país (del peso de las empresas grandes y/o públicas en su economía).

[61] En pocas palabras, generalmente los estudios teóricos como el de Lange (1984) partían del supuesto de que los actores consideran que la cooperación de todos con el gobierno proporciona un resultado superior al obtenido cuando todos le presionan. Aquí vamos a suponer, por el contrario, que los sindicatos rivales, dada su ideología o poca confianza, *estiman* que el resultado de presionar todos es superior al obtenido cuando todos colaboran con él.

[62] Por tanto, ahora, el orden léxico de objetivos es el siguiente: (1) ganar la lucha intersindical y movilizar a los trabajadores, (2) ganar la lucha intersindical, pero no movilizar a los trabajadores, (3) mantener la misma posición relativa y movilizar a los trabajadores, (4) mantener la misma posición relativa, pero no movilizar a los trabajadores, (5) perder la lucha intersindical pero movilizar a los trabajadores, (6) perder la lucha intersindical y además no movilizar a los trabajadores.

		C	P
Sindicato 1	C	0,0	2,-1
	P	-1,2	1,1

Aquí, al contrario del primer escenario, el resultado es que ambos sindicatos optan por no presionar y, por tanto, les guste o no, cooperan con el Gobierno (C,C). Desde la perspectiva del sindicato 1, lo mejor que podría ocurrir sería que él "cooperase" con el gobierno y abandonar al rival en las movilizaciones. En este caso, como sólo uno de los sindicatos presionó, las huelgas fracasaron, y los trabajadores que las apoyaron, defraudados, se pasarán al sindicato colaborador. Sin embargo, si ambos sindicatos se movilizaran, aunque pusiesen en aprieto al gobierno, no conseguirían incrementar su representatividad relativa entre los trabajadores. Ahora bien, lo peor que le podría ocurrir al sindicato 1 es que movilizase a los trabajadores y el otro le dejase en la estacada, perdiendo así el favor de los trabajadores que se vieron conducidos a huelgas fracasadas. Por último, si ambos sindicatos se abstuviesen de movilizar a los trabajadores por miedo a que el otro no lo hiciese no obtendrían ninguno de sus objetivos, pero no se arriesgarían a perder apoyos. Esta es, sin embargo, la estrategia dominante, ya sea porque si se coopera, quizás se consiga incrementar la representatividad (si el otro no lo hace), ya sea porque, si no se coopera se arriesga a perder apoyos (si el otro coopera). Pero, como podemos ver, este resultado es peor para ellos que el que habrían obtenido si ambos hubieran presionado. En conclusión, cuando las movilizaciones y huelgas sólo tienen éxito de colaborar los sindicatos rivales, la competencia intersindical les lleva a no presionar, incluso no estando predispuestos a cooperar con el Gobierno (por no confiar en su palabra ni tentarles los bienes organizativos)[63].

En estos dos casos que acabamos de ver se ha supuesto que los sindicatos tienen el mismo orden léxico de preferencias. Veamos

[63] Sería un resultado similar al de la máxima latina de "divide et impera".

ahora lo que ocurriría si, por el contrario, éste fuese distinto, es decir, que uno de los sindicatos tuviese el orden del primer caso (llamemos a este sindicato "moderado") y el rival el orden del segundo caso (llamémosle sindicato "radical"), en los dos contextos socioeconómicos vistos. Empecemos viendo el primer contexto, donde las huelgas en solitario sí que tienen éxito.

Escenario III

		Sindicato "radical"	
		C	P
Sindicato "moderado"	C	1,0	-1,3
	P	2,-2	0,1

El resultado sigue siendo el mismo al del Escenario I, ambos sindicatos presionarán (P,P). Aquí, sin embargo, mientras que el sindicato "moderado" no obtiene ninguno de sus objetivos "instrumentales" (ni consigue incrementar su representatividad ni los bienes organizativos), el sindicato "radical" consigue al menos su segundo objetivo, poner en aprieto al gobierno[64].

Pasemos a ver ahora qué ocurriría en un escenario donde la estrategia de presión sólo tiene éxito si los dos la llevan a cabo.

Escenario IV

Sindicato "radical"

[64] El valor para el sindicato "radical" de no cooperar si el otro no lo hace ha subido a 3 (mientras que en la figura I ese valor para el segundo sindicato era de 2). La razón es muy sencilla: en este caso el sindicato radical puede obtener sus dos objetivos, alcanzar la hegemonía al mismo tiempo que elegir la estrategia que perjudica al gobierno. Igualmente para ese mismo sindicato "radical" cooperar ha bajado a -2 (mientras que en la figura I ese valor para el segundo sindicato era de -1) porque ha perdido la lucha intersindical y no ha movilizado a los trabajadores (recordemos que para el sindicato radical los bienes del gobierno no son un objetivo).

		C	P
Sindicato "moderado"	C	1,0	3,-1
	P	-2,2	0,1

El resultado vuelve a ser el mismo al del Escenario II, ambos sindicatos, "moderado" y "radical", cooperan con el Gobierno (C,C). Aquí, sin embargo, es el "radical" el que se encuentra con que no consigue ninguno de sus objetivos (ni incrementar su representatividad ni poner en aprieto al gobierno con las movilizaciones), mientras que el "moderado" consigue al menos los bienes privados que ofrece el gobierno. En pocas palabras, el hecho de que los sindicatos tengan un orden de preferencias distinto no cambia los efectos para *las relaciones con los gobiernos* (pero sí entre ellos, como veremos más tarde).

Finalmente, para terminar de agotar las combinaciones posibles, veamos lo que ocurriría si se tratase de sindicatos moderados, pero (a diferencia de la situación en el Escenario I) la estrategia de presión en solitario no tiene éxito.

Escenario V

		Sindicato 2	
		C	P
Sindicato 1	C	1,1	3,-2
	P	-2,3	0,0

Aquí el resultado, al contrario del Escenario I, es que ambos sindicatos moderados cooperan con el gobierno (C,C) y obtienen al menos su segundo objetivo (los bienes organizativos ofrecidos por el gobierno). De aquí se deduce, por tanto, que no siempre es necesario

que los sindicatos coordinen sus actuaciones para evitar caer en resultados subóptimos.

Finalmente veamos el caso de sindicatos "radicales" pero un contexto donde la estrategia de presión por solitario tiene éxito.

Escenario VI

		Sindicato 2	
		C	P
Sindicato 1	C	0,0	-2,3
	P	3,-2	1,1

Aquí el resultado es que ambos sindicatos, a diferencia de lo que ocurría en la situación del Escenario II, le intentan hacer la vida imposible al gobierno (P,P) y obtienen así lo que para ellos es su segundo objetivo (sin necesidad, de nuevo, de que se hubiesen puesto previamente de acuerdo).

2.3. Conclusiones

¿Cuáles son las conclusiones que podemos sacar de estos juegos entre sindicatos que compiten por la misma base de apoyos para sus relaciones con los gobiernos?

En primer lugar, hay que matizar la afirmación de que la coordinación de las acciones de los sindicatos en las relaciones laborales con las políticas gubernamentales -con la centralización de la negociación colectiva y la moderación de las demandas sindicales en los centros de trabajo que lleva aparejada- sea siempre difícil de lograr en el caso de un sindicalismo competitivo. Como en el caso de la fragmentación no competitiva, la dificultad se produce cuando nos encontramos en una situación tal que la estrategia de presión ejercida en solitario por uno de los sindicatos rivales consigue los resultados esperados; de no ser así, se puede contar con la colaboración, a corto

plazo, de los sindicatos, incluso si colaborando entre ellos sí que hubieran conseguido que las huelgas tuviesen éxito[65].

En segundo lugar, los sindicatos, cuando compiten entre sí por aumentar su representatividad relativa entre los trabajadores, no son inducidos a cooperar con el Gobierno por lo que les pueda ofrecer éste, ni por cuestiones de predisposición ideológica o confianza de los líderes sindicales con respecto a los pactos con el Gobierno, sino por su evaluación de la probabilidad de éxito de la estrategia de presión en los centros de trabajo en función de los contextos en que se desenvuelve la acción sindical (contexto económico, y tamaño y titularidad de las empresas). En palabras de Lange y Ross (1990:310), a mayores posibilidades de competencia entre sindicatos, mayor sensibilidad de éstos a los cambios que puedan afectar al apoyo que reciben. Todo parece indicar, pues, que dichos cambios vienen determinados por el contexto socioeconómico (y su impacto sobre las huelgas y movilizaciones), por lo que es el contexto el que determina si los sindicatos eligen una estrategia de moderación o de movilización[66].

Las conclusiones sobre los resultados de la lucha sindical no se reducen a sus efectos sobre las relaciones gobiernos-sindicatos: se refieren igualmente a las relaciones intersindicales y con los partidos políticos. Empecemos viendo los efectos en las intersindicales:

1) En primer lugar, en una situación de libre competencia, no habría forma alguna de convertirse en la única confederación sindical o en la hegemónica, pues tan pronto como un sindicato observase que la estrategia de su rival le estaba "quitando" trabajadores, practicaría la misma para evitar esa "sangría". Los sindicatos que compiten entre sí no tienen forma alguna de escaparse del dilema

---

[65] De ahí se deduce que fomentar la rivalidad entre sindicatos competitivos es un arma de doble filo. Por un lado, puede servir para que éstos no presionen en situaciones en que su presión conjunta sea insoportable; por otro, puede volverse en contra de la cooperación con el gobierno en contextos en que la presión sea más fácil de conseguir.

[66] En palabras de un líder de CCOO: "Los sindicatos no movilizan [a los trabajadores] cuando quieren, sino cuando pueden".

visto anteriormente a menos que sus partidos de referencia colaboren entre sí.

2) Los incentivos para la coordinación de las actividades (o unidad de acción)[67] de los sindicatos con los mismos objetivos parece que son de peso en determinadas circunstancias: la hegemonía es imposible, y por competir tanto los sindicatos "moderados" como los "radicales" pueden terminar en situaciones subóptimas: en el caso de los primeros, porque los dos presionan cuando, si ambos hubieran colaborado con el gobierno, habrían conseguido al menos los bienes que reparte éste (Escenario I); en el caso de los radicales, porque los dos se abstienen de presionar (luego colaboran con el gobierno) cuando, si los dos hubieran presionado, habrían al menos conseguido el objetivo de hacerle la vida imposible al gobierno (Escenario II)[68].

Una vez que los líderes sindicales sean conscientes de estos hechos tras una serie de "juegos", será cuando empiecen a valorar cuánto han estado perdiendo por no practicar la unidad de acción sindical[69] a cambio del espejismo de pensar que podían vencer a sus rivales si escogían la estrategia que más satisficiese a los trabajadores. Los líderes sindicales evaluarán, por un lado, cuánto dejan de ganar en términos de arrebatar apoyos al rival y cuánto apoyo se arriesgan a perder, si escogen la estrategia que, colectivamente, produce el mejor resultado. Por otro, evaluarán también cuánto dejan de ganar en el

---

[67] Queda claro así que por unidad de acción sindical no podemos entender sólo que los sindicatos presenten el mismo comportamiento. La unidad de acción entraña que los sindicatos coordinen sus actividades.

[68] Pero no en todas las circunstancias, como hemos visto en el Escenario V para el caso de los sindicatos "moderados". Allí ambos sindicatos conseguían al menos los bienes organizativos por colaborar con el Gobierno guiados simplemente por el objetivo de no perder apoyos entre los trabajadores gracias a que la presión en solitario fracasaba. Lo mismo ocurría en el Escenario VI, para el caso de los "radicales", donde ambos sindicatos presionaban *sin* necesidad de que se hubiesen puesto previamente de acuerdo gracias a que la presión en solitario tenía éxito.

[69] Hay que remarcar que en ambos escenarios los sindicatos rivales terminaban realizando la misma estrategia, no porque fuera un resultado deseado, sino producto del miedo a perder apoyos entre los trabajadores.

futuro porque prefirieron incrementar a corto plazo su cuota de apoyos.

3) Pero, como los escenarios III y IV muestran, los incentivos para la unidad de acción ya no lo son tanto cuando los sindicatos tienen objetivos distintos. Como se puede observar, en contextos en que la unidad de acción es imprescindible para el éxito de la estrategia de presión (escenario IV) el sindicato "radical" propondría colaborar al sindicato "moderado" para evitar caer en un resultado donde no obtenía ninguno de sus objetivos (casilla C,C). Pero en el resultado de este escenario el sindicato moderado conseguía los bienes del gobierno mientras que el que pretende conseguir el radical con su colaboración no le reporta beneficio alguno (casilla P,P). La situación se invertiría en contextos en que la estrategia de presión en solitario tuviese éxito. Ahora sería el sindicato moderado quien le ofreciese coordinar sus acciones al sindicato radical, y éste quien no tendría incentivos para aceptarla, pues la presión al gobierno era su segundo objetivo en importancia tras el incremento de su representatividad relativa entre los trabajadores (véase Escenario III). Es decir, en situaciones donde los sindicatos tengan objetivos distintos, la unidad de acción es difícil de alcanzar pues supone para cada uno de ellos pasar de una situación donde la lógica sindical le lleva a conseguir al menos uno de sus objetivos fijados a otra donde no conseguirá ninguno de ellos.

La unidad de acción sindical, por tanto, no sólo es producto de la constatación de que la hegemonía sindical es inalcanzable, requiere además que los sindicatos pasen por situaciones donde, por no haber coordinado previamente sus acciones, terminaron con resultados subóptimos y, además, hayan aproximado sus objetivos[70].

Igualmente, estos juegos tienen efectos interesantes sobre las relaciones de solidaridad entre partidos y sindicatos. Cuando ambos sindicatos tenían el mismo orden de preferencias y actuaban en determinados contextos socioeconómicos, había un fuerte incentivo

[70] Es decir, el interés de maximizar sus preferencias llevará a que los sindicatos intenten coordinar previamente sus actuaciones en el primer y segundo escenario, pero no así en el tercero y cuarto, no haciéndoles falta, finalmente, en el quinto y sexto.

para coordinar sus acciones y así poder, en el caso de los sindicatos "moderados", cooperar con el Gobierno, o, en el caso de los sindicatos "radicales", ponerle en aprieto. Dado que los sindicatos mantenían unas relaciones de solidaridad con sus respectivos partidos políticos, es muy probable que éstos a su vez tuviesen un orden de preferencias parecido. Nos estaríamos acercando así a ese modelo de los países consociacionales (Bélgica, Holanda, Suiza), donde existían relaciones partido-sindicato de solidaridad, colaboración entre los sindicatos, y entre los partidos políticos socialistas y democristianos[71].

Pero supongamos que, aunque los sindicatos tengan los mismos objetivos (vamos a centrarnos en el caso de que los dos son "moderados"), sus partidos, porque uno está en el gobierno y el otro en la oposición, compiten ferozmente y no desean ver que "sus" respectivos sindicatos coordinan sus actuaciones con el sindicato del partido rival[72]. Si se encontrasen éstos en un contexto donde las movilizaciones no tienen éxito por separado (Escenario V), ninguno de los dos sindicatos tendría incentivos para presionar pues, además de perder los bienes del Gobierno, la estrategia fracasaría y perderían apoyos entre los trabajadores[73]. En un contexto, por el contrario, donde las movilizaciones sí que tuvieran éxito por separado (Escenario I), el sindicato de la Oposición podría dejar de coordinar sus actuaciones con el sindicato del Gobierno (pasando a practicar la estrategia de movilización) como forma de hacer fracasar a este último en su gestión económica, y aumentar así la probabilidad de que su partido ganase las siguientes elecciones. Como se puede deducir, el sindicato del Gobierno tendría que hacer lo mismo con objeto de evitar una sangría de miembros. El sindicato de la

---

[71] En el caso de que ambos sindicatos fuesen "radicales" tendríamos un escenario próximo al del *programme uni de la gauche* en Francia, donde el PCF cooperaba con el PS y la CGT con la CFDT, todos en oposición al gobierno conservador.

[72] Dado que los dos sindicatos son moderados, vamos a llamar al sindicato cuyo partido está en el gobierno el sindicato del Gobierno, y al sindicato cuyo partido está en la oposición el sindicato de la Oposición. Al partido que sostiene al gobierno simplemente, Gobierno, y al partido que está en la oposición, Oposición.

[73] En esta situación hemos visto anteriormente que la lógica sindical les lleva a realizar la misma estrategia sindical sin necesidad de acuerdo previo.

Oposición estaría sacrificando así los bienes organizativos que a corto plazo le estuviese proporcionando el Gobierno a cambio de la posibilidad de que su partido ganase las siguientes elecciones y le recompensase los servicios prestados con mayores beneficios organizativos. Ahora bien, de nuevo en función del contexto, el antiguo sindicato del Gobierno podría devolver la jugada y arrastrarle a ahora a una estrategia incompatible con las preferencias de su partido, no obteniendo así esos mayores beneficios esperados[74]. En pocas palabras, la estrategia del sindicato de la Oposición de romper la coordinación con el sindicato del Gobierno con objeto de conseguir mayores beneficios a través del partido de referencia sólo tendría éxito (es decir conseguiría que su partido llegase al gobierno y le proporcionase tales beneficios) en el caso de que su rival no pudiese devolverle la jugada. Si se tratasen en cambio de sindicatos radicales muy probablemente a sus respectivos partidos les importaría menos que sus sindicatos coordinasen entre sí sus actuaciones[75], pues conseguirían así poner en aprieto al Gobierno y beneficiarse alguno ellos.

Supongamos ahora, sin embargo, que los sindicatos tienen *objetivos distintos*, el partido del sindicato "moderado" está en el Gobierno y el del "radical" en la oposición, y el contexto es tal que las huelgas en solitario tienen éxito. En primer lugar, ambos sindicatos no emprenderán la unidad de acción porque discrepan de los objetivos a alcanzar mediante la coordinación de sus actuaciones (el sindicato "moderado" querría cooperar con el Gobierno, que es además lo que le interesa a su partido, y el "radical" querría movilizar a los trabajadores, que es lo que le interesa además al suyo). Pero dado este contexto, como se puede ver en el Escenario III, el

---

[74] E incluso, al haber roto ambos sindicatos la colaboración con el Gobierno, éste no podría proporcionar los objetivos de mayor empleo y gasto social que prometía. Parece así que las relaciones de solidaridad en estos contextos de pluralismo competitivo podrían no ser adecuadas ni para que un sindicato obtuviese los bienes organizativos ni para que los trabajadores obtuviesen mayor empleo y gasto social.

[75] Vemos que esta coordinación sería necesaria en un contexto donde las movilizaciones en solitario no tienen éxito por separado (escenario II), pero ya no tanto si sí lo tuvieran (escenario VI).

sindicato "radical", al tener éxito su estrategia de movilización y atraerse hacia así a los trabajadores, arrastra al sindicato "moderado" a la estrategia de presión (para detener su pérdida de apoyos). El abandono de la estrategia de cooperación con el Gobierno por parte del sindicato "moderado" indudablemente sería resentido por su partido, pues vería como su sindicato "hermano" realiza una estrategia que le perjudica. Ahora bien, supongamos ahora todo lo mismo, pero el contexto es tal que la estrategia de presión sólo tiene éxito si los sindicatos la llevan a cabo (véase Escenario IV). De nuevo, no habría coordinación de actividades entre los sindicatos, pero ahora sería el sindicato "moderado" quien arrastraría al sindicato "radical" a la estrategia de cooperación con el Gobierno. Pero esto no convendría a su partido radical, que le pediría que siguiese manteniendo la estrategia de presión, si es que no se da cuenta que los sindicatos no movilizan cuando quieren, sino cuando pueden.

Llegamos así a dos conclusiones sobre las relaciones de solidaridad en contextos de competencia intersindical con sindicatos que tienen objetivos distintos y los contextos que favorecen la movilización o la constriñen son cambiantes. En primer lugar, tanto para sindicatos "moderados" como para sindicatos "radicales" la "lógica" sindical les podría llevar a estrategias contradictorias con las preferencias de sus partidos: en ciertas situaciones los sindicatos "moderados" se tendrían que radicalizar si no quisieran perder apoyos, y en otras son los "radicales" los que se tendrían que moderar por la misma razón, lo cual podría no coincidir con lo que interesase electoralmente a sus respectivos partidos. Las relaciones de solidaridad con partidos políticos se muestran así claramente como una "rémora" para que los sindicatos emprendan la actividad más adecuada según las circunstancias que favorecen o dificultan la movilización de los trabajadores. Es en estas situaciones cuando los sindicalistas evaluarán cuanto apoyo pierden entre los trabajadores a cambio de qué les ofrece su partido. Si pierden pocos apoyos y obtienen muchos beneficios de su partido, probablemente les compense mantener las relaciones de solidaridad. Si se arriesgan a perder muchos apoyos, probablemente les dé igual lo que les ofrezcan sus partidos, pues implicaría el suicidio de la organización.

En este caso los sindicalistas exigirán a sus partidos que se adapten a sus estrategias sindicales (y no a la inversa), y si éstos se negasen probablemente darían por terminadas dichas relaciones.

Pero, en segundo lugar, la ruptura de las relaciones de solidaridad no conduce necesariamente a que todos los sindicatos emprendan la unidad de acción sindical pues, como ya hemos dicho, esto requiere que hayan aproximado sus objetivos. Llegamos a esa tercera posibilidad, constatada empíricamente: los sindicatos ni mantienen relaciones de solidaridad con un partido político concreto, ni coordinan sus actuaciones con los sindicatos rivales. Ni el sindicato "moderado" ni el "radical" emprenderán la unidad de acción porque discrepan de los objetivos a alcanzar mediante la coordinación de sus actuaciones. Al mismo tiempo, como hemos visto, para ambos sindicatos las relaciones de solidaridad con un partido político concreto les podrían impedir emprender las estrategias en las relaciones laborales necesarias para hacer frente a su rival, por lo que se desharían de ellas.

En el apartado anterior planteábamos que el estudio de los comportamientos de los sindicatos europeos en un contexto de pluralismo competitivo y lucha interpartidaria constataba que existía un dilema sindical, pero que la respuesta no había sido unívoca. En diferentes países y épocas los sindicatos ante ese dilema han respondido de forma diferente. El estudio teórico que se ha realizado nos permite concluir que para que un sindicato, en este contexto, rompa sus relaciones de solidaridad con su respectivo partido y comience un proceso de unidad de acción tiene que haber ocurrido (a) que considere que no es cierto que las primeras sean ese canal privilegiado para acceder a la toma de decisiones y (b) que los sindicatos hayan aproximado su orden de preferencias. Pero ambos fenómenos no están necesariamente ligados. Igualmente, no es cierto que las relaciones de solidaridad entre partidos y sindicatos siempre impidan la unidad de acción entre estos últimos, pues podría darse cuando sus respectivos partidos cooperan entre sí. Pero tampoco se ha de deducir que la unidad de acción sindical vaya a formarse necesariamente cuando los partidos políticos no proporcionan a sus sindicatos los beneficios esperados.

2.4. Los límites del modelo teórico

Ahora bien, ¿quiere decir que los acuerdos globales de contrapartidas fracasan, o no se llegan a celebrar, en contextos de competencia intersindical, necesariamente por la explicación que se ha ofrecido? Obviamente la respuesta es que no. El modelo construido no deja de ser una hipótesis, una explicación plausible de unos acontecimientos, pero pueden darse muchas otras explicaciones alternativas, igualmente plausibles, utilizando o no las teorías de la elección racional, para explicar por qué no se llegan a alcanzar acuerdos globales de contrapartidas o por qué fracasan. Puede ocurrir, por ejemplo, que el primer supuesto del que se partió no se dé en la realidad, es decir, que los pactos no se llegasen a celebrar porque los gobiernos sencillamente no querían o podían. Igualmente puede ocurrir que en la realidad aparezcan otros factores que alteren los supuestos de partida. Así una cosa es señalar la estrategia más correcta para alcanzar unos determinados objetivos en función del contexto en que se actúa y otra que los actores puedan practicarla. Las organizaciones pueden tener características internas, no tenidas en cuenta en el modelo, que favorezcan ciertas estrategias y dificulten practicar otras. Además, los cambios de estrategias pueden requerir cambios en la estructura de toma de decisiones de la organización sindical. La estrategia de presión de mercado prima la descentralización por lo que serán las estructuras sindicales más cercanas a los centros de trabajo, secciones sindicales y comités de empresa, las que decidirán si es adecuado presionar o no, y cuánto. La estrategia de la coordinación económica, por el contrario, prima la centralización de toma de decisiones de negociación colectiva en las estructuras cupulares. Entre medias, la negociación en ámbitos autonómicos y sectoriales prima a las uniones y federaciones sindicales respectivamente. Cada estrategia da protagonismo, por tanto, a un determinado nivel de la organización sindical. Así, el paso de una estrategia a otra requiere pasar la toma de decisiones de un nivel sindical a otro, con la previsible resistencia del actor relegado.

En segundo lugar, las relaciones de solidaridad con partidos políticos pueden ser un elemento que dificulte el cambio de estrategia, como han señalado Lange y Ross (1990:307), por sus efectos en la organización hermana. Finalmente, se puede señalar también que las organizaciones sindicales necesitan un tiempo para recibir la información sobre el estado de la economía y el de los trabajadores (e incluso sobre la accesibilidad del gobierno), y otro para interpretar la información. No es tan fácil decidir si hay un cambio de tendencia o éste es simplemente pasajero. Y a esto se añaden las inercias provocadas por éxitos pasados de determinadas estrategias[76].

En definitiva, en los capítulos siguientes se intentará mostrar hasta qué punto estos supuestos utilizados para construir el modelo teórico se dieron en el caso español (i.e. los sindicatos luchan por incrementar su representatividad relativa o los trabajadores tiene una visión "instrumental" de los sindicatos), al mismo tiempo que se contrastarán las hipótesis que aquí se ofrecen para explicar la ruptura de la coordinación económica y la transformación de las relaciones partido-sindicato con otras alternativas que han tenido bastante éxito en la literatura (por ejemplo, que el rechazo de los acuerdos globales de contrapartidas se deba a que se incumplieron acuerdos anteriores)[77].

---

[76] Al respecto Lange y Ross (1991:308) señalaban que "a no ser que los costes que entraña la línea seguida por un sindicato o las ventajas del cambio sean bastante patentes, sus dirigentes tenderán a seguir aplicando las mismas estrategias y políticas, y a abstenerse de cualquier innovación". Estos autores explicaban esta inercia por (a) la autorreproducción ideológica y estratégica de los círculos dirigentes de las organizaciones, (b) las expectativas de la bondad de estrategias aplicadas anteriormente por el sindicato (Lange y Ross 1991:308).

[77] La verificación de los supuestos de partida con los que se construyo la hipótesis que se considera explicativa y su contraste con otras alternativas son dos de las principales recomendaciones que realizan Green y Shapiro para la utilización de la teoría de la elección racional.

CAPITULO SEPTIMO

EL FIN DEL CORPORATISMO DE OFERTA: POLITICAS DE GOBIERNO Y ENTORNOS INSTITUCIONALES

1. La UGT y el fin de la coordinación económica

En el capítulo quinto quedó claro que en la primavera de 1987 la dirección de la UGT rechazó la propuesta del Gobierno socialista de continuar con la concertación donde se coordinaban las políticas sindicales con las políticas económicas y sociales. Para explicar el comportamiento de la Unión General de Trabajadores se pueden ofrecer varias hipótesis. En primer lugar, la literatura especializada sobre la economía política ha expuesto que en los años ochenta en varios países europeos los empresarios y sindicatos descentralizaron la negociación colectiva[1]. Si la Unión General de Trabajadores hubiera tenido esta preferencia, le habría llevado a rechazar nuevos acuerdos globales de contrapartidas pues, como vimos, en ellos los sindicatos negociaban con gobiernos y empresarios de una forma centralizada. Esta hipótesis se relaciona con aquellas teorías comentadas en el primer capítulo que aducían que la fragmentación creciente de las clases trabajadoras había llevado a que los sindicatos fuesen ahora incapaces de homogeneizar los intereses de sus representados en una negociación colectiva centralizada con los empresarios. Una segunda explicación se centra más bien en señalar que a la dirección ugetista no le compensaban los pactos globales de contrapartidas dados los incumplimientos del Gobierno. Esta

[1] No existe unanimidad entre los investigadores sobre si este proceso fue promovido principalmente por los empresarios o, por el contrario, por los sindicatos (Pontusson 1992).

hipótesis se puede ligar con los constreñimientos económicos sobre los gobiernos, los cuales limitarían su capacidad para aumentar o mantener el nivel de gasto público. Finalmente, a partir del estudio teórico del capítulo anterior, se puede construir una tercera explicación basada en la combinación principalmente de dos factores: (a) los efectos de un contexto sindical pluralista-competitivo sobre las estrategias sindicales, y (b) el cambio de contexto económico a partir de 1985/86.

1.1. La UGT y la descentralización de la negociación colectiva

Comenzando por la primera hipótesis, parece que efectivamente los dirigentes ugetistas no están en los años noventa muy interesados por acuerdos interconfederales que impliquen una negociación colectiva centralizada, de ámbito nacional. Pero hay que señalar que rechazan igualmente la negociación colectiva de empresa, por lo que hay que matizar esos supuestos deseos descentralizadores[2]. En cualquier caso, al menos hasta 1990, la dirección del sindicato

[2] Así me lo expusieron Jesús Urrutia, Secretario General de FIA-UGT, y José María Zufiaur durante unas entrevistas con el autor los días 25-5-97 y 12-10-96 respectivamente. Tras las elecciones sindicales de 1986 parece que la dirección de la UGT, si bien mantenía que "los acuerdos globales o macroacuerdos celebrados al más alto nivel entre organizaciones sindicales y empresariales [seguían] siendo instrumentos esenciales para la realización de políticas de solidaridad que siempre favorec[ían] el empleo", creían que era "necesario insistir en la potenciación y enriquecimiento de la negociación colectiva en los ámbitos inferiores -sectores, provincias o empresas" (documento aprobado por la Comisión Ejecutiva el 16 de diciembre de 1986, titulado: "UGT, ante la concertación social para 1987", op. cit.). Pero esto no significa que buscasen la negociación por empresas. En una carta circular de Apolinar Rodríguez del 3 de noviembre de 1987 (pág. 15, op. cit.) se la consideraba perjudicial al considerar que amplios sectores de trabajadores quedarían desprotegidos dada la propia estructura del aparato productivo español, con un enorme predominio de las PYMES. Véase también el acuerdo de orientaciones en la negociación colectiva para 1989 alcanzado entre UGT y CCOO (sobre el cual informa el Secretario de Acción Sindical, Apolinar Rodríguez, en una carta-circular fechada el 16 de febrero de 1989, Caja: FEJP/518, FLC).

socialista siguió defendiendo la bondad de incluir la negociación colectiva dentro de acuerdos interconfederales. Sostenían que los acuerdos interprofesionales favorecían la concentración de la negociación colectiva, la uniformidad de las plataformas reivindicativas, la homogeneidad de los contenidos entre los diferentes convenios y ayudaban a reducir la conflictividad[3]. Así, para la negociación colectiva de 1988, los dirigentes de la UGT propusieron a la CEOE negociar un acuerdo interconfederal donde se insertasen convenios estatales de sector[4]. Estos planteamientos

---

[3] "El Acuerdo Interconfederal constituye uno de los frentes que conforman la estrategia de concertación presentada por UGT para 1988. La suerte que, hasta la fecha, han corrido el resto de las propuestas, de distintos contenidos y escenarios, no tiene por qué afectar a un posible Acuerdo Interconfederal" (Carta-circular de Apolinar Rodríguez del 6 de noviembre de 1987, pág. 5, op. cit.).

Véase igualmente la carta-circular de Apolinar Rodríguez del 3 de noviembre de 1987 (op. cit.) donde afirmaba que la UGT era "por lo tanto, partidaria de continuar negociando acuerdos del máximo nivel que encaucen la negociación colectiva". Véase también las "Conclusiones de las Jornadas sobre Acción Sindical para la Negociación Colectiva de 1988", celebradas los días 12 y 13 de noviembre de 1987, en el núm. 56 de *Información Sindical*, 1ª quincena de diciembre 1987.

[4] Se proponían como objetivos para un acuerdo interconfederal de ámbito estatal para 1988:

"una negociación más articulada, la negociación de los incrementos de productividad, mejorar la formación y el reciclaje profesional, adaptar las relaciones laborales a los cambios en el aparato productivo, negociar las consecuencias de la introducción de nuevas tecnologías, reordenar y reducir la jornada de trabajo, crear empleo y la protección sindical de los contratos precarios" (carta-circular de Apolinar Rodríguez del 6 de noviembre de 1987, pág. 2, op. cit.).

En febrero de 1988, Apolinar Rodríguez afirmaba que habían previsto en sus contactos con los empresarios para 1988 dos posibilidades no excluyentes: un acuerdo sobre cuestiones estructurales según el modelo del ABI o un acuerdo marco interconfederal para la negociación colectiva ("Circular de Negociación Colectiva para 1.988", adjunta a la carta del Secretario de Acción Sindical, Apolinar Rodríguez, del 1 de febrero de 1988, op. cit.). Según la propia UGT aquel acuerdo interconfederal no se llegó a firmar por desacuerdos sobre la banda salarial (vid. supra. y Memoria de Gestión al 35º Congreso de UGT, 1990, pág. 315).

volvieron a ser expuestos en su defensa de un acuerdo interconfederal para 1989[5]. En pocas palabras:

"los objetivos de vertebración social y de solidaridad que nuestra organización persigue, se hacen más factibles con un Acuerdo Interconfederal que con una negociación fragmentada"[6].

---

[5] Véanse la carta-circular del Secretario de Acción Sindical, Apolinar Rodríguez, sobre la entrevista de trabajo UGT-CC.OO. dirigida a los Secretarios de Acción Sindical de las F.F. y U.U. (fechada en Madrid a 19 de septiembre de 1988, Caja: FEJP/516, FLC); la carta del Secretario General de la UGT, Nicolás Redondo, al Presidente de la CEOE, José Mª Cuevas, (fechada en Madrid a 27 de septiembre de 1988, Caja: FEJP/517, FLC); la carta-circular del Secretario de Acción Sindical, Apolinar Rodríguez, a las F.F. y U.U. (Madrid, 17 de febrero de 1989. Caja: FEJP/518, FLC) donde informa de que tanto la Comisión Ejecutiva de la UGT (el día 14 de febrero) como las Federaciones Estatales (el día 15 de ese mismo mes) habían analizado una carta de Líder de la patronal en la cual José María Cuevas proponía negociar para ese año un Acuerdo Marco Interconfederal "que [según el Presidente de la Patronal] ayudara a la negociación de los Convenios Colectivos en una serie de temas que, por su naturaleza, requieren pautas generales con vistas a que las soluciones, que puedan establecerse en cada convenio, sean coherentes y se eviten, en lo posible, disfuncionalidades o distorsiones en las relaciones laborales". En concreto la patronal quería negociar así las cotizaciones a la Seguridad Social, la protección social complementaria a la Seguridad Social, el control de prestaciones, el funcionamiento de la participación institucional, acciones favorables a la promoción de empleo y reforma del mercado de trabajo, cuestiones referidas a formación profesional, la reorganización flexible del tiempo de trabajo, criterios para una futura legislación sobre seguridad y salud en el medio de trabajo, y cuestiones referidas a información y consulta (Carta de José María Cuevas a Nicolás Redondo, fechada en Madrid a 7 de febrero de 1989. Caja: FEJP/517, FLC). Pero de nuevo volvieron a chocar con los incrementos salariales. Tanto los empresarios públicos como la CEOE pretendieron fijar como referencia para la negociación colectiva de 1989 el objetivo de inflación del 3%, establecido por el Gobierno en los Presupuestos. En concreto la CEOE no quería incrementos salariales superiores al 5%, aunque luego tuvo que admitirlos, como en el caso de la empresa pública (Documento de la Secretaria de Acción Sindical de la caja: FEJP/517, FLC).

[6] Carta-circular de Apolinar Rodríguez del 3 de noviembre de 1987, pág. 14, op. cit.

Parece así que hay que descartar que la dirección de la UGT rompiese con los acuerdos globales de contrapartidas porque a partir de 1987 considerase que era preferible la negociación colectiva descentralizada. A partir de 1990 dado la imposibilidad de alcanzar un acuerdo interconfederal con la CEOE (fracasados los intentos de 1987, 1988 y 1989), la dirección de la UGT consideró que "no [podían sindicatos y empresarios] mantener el criterio de todo o nada en la búsqueda de un solo acuerdo"[7] por lo que la fijación de bandas en una negociación colectiva centralizada con la CEOE dejó de estar en la agenda ugetista, pero manteniendo su rechazo a la negociación colectiva de ámbito empresarial.

1.2. El Gobierno socialista como "compensador"[8]

Pasemos a ver ahora la explicación basada, principalmente, en los incumplimientos del Gobierno socialista[9]. Según esta hipótesis la

---

[7] Véase la carta-circular del Secretario de Acción Sindical, Apolinar Rodríguez, a las F.F. y U.U., fechada en Madrid a 4 de diciembre de 1.989 informando de una reunión al máximo nivel entre CEOE, CC.OO y UGT, Caja: FEJP/519, FLC. Por su parte el Presidente de la CEOE, según el resumen de aquella reunión que hacía Apolinar Rodríguez, manifestaba tener la mejor disposición para la negociación, sin ninguna posición previa y abierto a estudiar todo, para fijar "criterios para trasladar a la negociación colectiva y ordenarla, incluso con un acuerdo interconfederal". No parece, por tanto, que hubiese tampoco una preferencia intensa por la negociación de empresa por parte de la organización de empresarios.

[8] El término es de Peter Lange (1984:109).

[9] En palabras del diputado liberal Segurado García (interpelación urgente en el Parlamento, 30 de noviembre de 1988):

dirección de la UGT dejó de aceptar más pactos globales de contrapartidas porque a cambio obtenía "poco" o, al menos, no el objetivo principal de la coordinación económica: el pleno empleo[10]. Así Merkel (1995:315-317)[11] afirma que la ruptura entre el gobierno del PSOE y la dirección de la UGT se explica por la diferente voluntad y capacidad de cumplir los acuerdos de cada una de las partes (sindical, patronal, y Gobierno). Para este autor, mientras que la UGT había cumplido sus compromisos (aceptación de la flexibilidad laboral y moderación salarial), el Gobierno socialista incumplió varias de sus promesas en política de empleo y social; y los empresarios no redujeron las horas extraordinarias, ni sus inversiones consiguieron colocar la tasa de paro por debajo de los niveles de 1984 hasta tres años después, por lo que "[l]os sindicatos españoles fueron víctimas de una típica situación de asimetría que puede darse en los acuerdos neocorporativos entre Estado, empresarios y centrales sindicales". Si en momentos de pleno empleo un gobierno se convierte fácilmente en rehén de unos sindicatos en posición de fuerza, la situación se invierte cuando el paro aumenta. Merkel considera así que "[l]a disciplina salarial impuesta [a los sindicatos españoles] por el desempleo", junto a "la debilidad relativa de los sindicatos y la fuerza parlamentaria del gobierno del PSOE (...) hacía que el propio gobierno estuviera poco inclinado a pagar el precio exigido por el sindicato socialista en forma de concesiones sustanciales en la política presupuestaria" o "a ceder ante la exigencia

---

"Ustedes han generado una situación imposible con su propio sindicato, seguramente más a causa de sus incumplimientos, falsas promesas, intemperancias, desplantes y maniobras a corto plazo, que a causa de trascendentales divergencias, pero el resultado es que todo el país padece las consecuencias de ese enfrentamiento por el cual una UGT, que era un modelo de sensatez y de sentido común, se ha convertido en un sindicato que ha perdido, al parecer, el sentido de la medida entre los agravios que pueda padecer y las decisiones que ha tomado para repararlos".

[10] Según la EPA, 1990 fue el año en que la tasa de paro llegó a su nivel más bajo afectando todavía a un 16,25% de la población activa.

[11] Otros autores, tales como Roca Jusmet (1991), Hammann (1993) o Miguélez Lobo (1991) también han incidido en la explicación del rechazo por parte de la UGT a firmar más pactos globales de contrapartidas por las promesas incumplidas.

sindical de un cambio de rumbo en su política de modernización y adaptación al mercado" (Merkel 1995:316,317)[12].

Ahora bien, de la misma forma que es difícil sostener que la UGT obtuvo todo lo que quería, también lo es sostener que no obtuviera nada a cambio. Nos acercamos así a la cuestión de la botella rellena hasta la mitad de su contenido: que para algunos está medio llena y para otros medio vacía. Cuando la UGT decidió dar por terminado el período de los pactos globales de contrapartidas -que, como hemos visto, tuvo que ser entre su aceptación del último (la negociación para los presupuestos de 1987 en el verano de 1986) y su rechazo a volver a firmar más en la primavera-verano de 1987- ¿consideraba que había obtenido poco de ellos en general, y del AES en particular? ¿Cuál era su valoración global?

Existe algún indicio que sugiere que la dirección de la UGT pudo efectivamente evaluar que no se conseguían los beneficios prometidos a cambio de la congelación del salario real. Ya durante su 34º Congreso, celebrado en la primavera de 1986, la dirección ugetista mostró su insatisfacción por la cuestión de la cobertura de desempleo[13]. De hecho, "la actitud del Gobierno en cuanto a la

---

[12] La explicación de Merkel (1995:315) presenta una paradoja: si es cierto que el mercado había disciplinado a los sindicatos españoles "como consecuencia de la recesión y de la alta tasa de paro", ¿por qué dejó de hacerlo posteriormente si la tasa de paro en España no bajó nunca del 16%? Los sindicatos podían estar muy a disgusto con este hecho, pero según su lógica no les habría quedado más remedio que seguir cooperando con el Gobierno. Esta paradoja desaparece, sin embargo, si no es la tasa de paro la que disciplina a los sindicatos, sino la tasa de destrucción de empleo. Así, aunque el crecimiento español de la segunda mitad de los años ochenta no trajo el pleno empleo, sí que se creo bastante (entre 1986 y 1990 el empleo creció en España a un ritmo del 3% anual mientras que el conjunto de la CEE lo hacía al 1,3%) Otros autores (Bentolila y Dolado 1994) explican esta paradoja por la existencia en España de un mercado de trabajo dual donde los trabajadores con contratos indefinidos pueden negociar incrementos salariales a sabiendas de que los que serán despedidos a causa de tales incrementos son los trabajadores temporales.

[13] En el AES existía el compromiso del gobierno de asegurar unos niveles concretos de cobertura a los desempleados (el 43% de los parados en 1985 y el 48% en el 86). Los líderes ugetistas consideraban que no se había cumplido tal compromiso, pero que "el mero hecho de asumir un objetivo se convierte en arma

cobertura por desempleo y la de la CEOE con su empecinamiento en el tema de la facilitación del despido y su abandono de la Comisión de Seguimiento ha[bían] supuesto claras vulneraciones del AES" por lo que advertían que "una prolongada y repetida vulneración pone en peligro la propia política de concertación"[14] (G.34C.UGT.1986:120). En diciembre de aquel mismo año exponían:

"[L]a experiencia de los ajustes recientes demuestra que la recuperación de excedentes y de productividad, permitida por los sacrificios salariales, no repercuten en beneficio de la clase trabajadora ni por la vía de empleos ni por la vía de aumentos salariales, escapándose el control de los frutos de su sacrificio a los trabajadores[15]".

Un mes después volvieron a incidir en este aspecto[16]:

"[L]argos años de sacrificio salarial intenso no han producido efecto sobre el paro (o muy poco visible) y sí sobre la recuperación de empresas y sistema financiero. Ello supone la terminación de un ciclo, ya que de lo contrario se produce un desgaste psicológico que

---

de presión en nuestras manos y hace más (sic) la consecución del objetivo en el futuro. Por ello mismo el plasmar un compromiso concreto en el campo de la tasa de cobertura de desempleo nos parece un avance sustancial de este Acuerdo que ha de ser debidamente explotado por nuestro sindicato" (G.34C.UGT.1986:119).

[14] "Es claro que un desprecio demasiado evidente a los compromisos adquiridos hace perder credibilidad a la política de acuerdos y anula una de las ventajas más claras de dicha política: la estabilidad de expectativas y la reducción de incertidumbre. Por ello esta política se sostiene por el grado de cumplimiento de lo pactado, y sobre todo por la clara y manifiesta voluntad de cumplirlo, aun cuando pueda ser difícil (caso de la tasa de cobertura) el conseguirlo. Otra actitud arruinaría un delicado entramado de serenidad, solidaridad y participación social que la UGT considera indispensable para conseguir una salida progresista de la crisis" (G.34C.UGT.1986:120).

[15] "UGT ante la concertación social", documento adjunto a la carta-circular de Apolinar Rodríguez del 17 de diciembre de 1986, op. cit.

[16] "Materiales de Estudio de cara a un Acuerdo Interconfederal: Reunión secretarios de acción sindical", día 16 de enero de 1.987", Caja: FEJP/514, F.I.C.

> hace perder confianza y crispa la situación social. Las expectativas empresariales se deterioran y se multiplican los costes de la negociación. Todo ello es negativo, por lo que conviene iniciar, moderadamente, un ciclo de recuperación de demanda y poder adquisitivo, y, a través de ello, del empleo" (suyo el subrayado).

Finalmente, en la memoria de gestión de la Comisión Ejecutiva Confederal al 35º congreso de la UGT celebrado en 1990 señalaron que quizás "lo que más ha[bía] contribuido al descrédito de aquellos acuerdos tripartitos ha sido su sistemático incumplimiento" (G.35C.UGT.1990:19).

Un análisis más extenso de las valoraciones de la dirección de la UGT sobre los acuerdos alcanzados no confirma, sin embargo, que ésta fuese realmente la razón que le llevó a rechazar la continuación de la coordinación económica. Vimos en el capítulo tercero que en el 34º Congreso de la UGT, a pesar de la cuestión de la cobertura, la valoración global del AES era positiva, y de hecho meses después aceptaron negociar con el Ministro de Economía un acuerdo global de contrapartidas que implicaba "la continuidad de una política de concertación"[17]. A comienzos de la primavera de 1987 seguían sosteniendo su balance positivo del AES por sus efectos beneficiosos en el crecimiento económico[18], empleo[19], rentas salariales[20],

---

[17] "Encuentro Confederal de Acción Sindical: Presupuestos Generales del Estado", documento adjunto a la carta-circular del Secretario de Acción Sindical, Apolinar Rodríguez, del 26 de septiembre de 1.986, op. cit.

[18] Comenzaban afirmando que "en los últimos meses hemos asistido al inicio de una nueva etapa de mejora económica a la que nosotros hemos contribuido decisivamente con la política sindical que venimos practicando" (Memoria de Gestión de la Secretaria de Acción Sindical con registro de entrada por la FEJP el 30-3-87, pág. 1, op. cit.) y entrando a valorar la influencia concreta del AES:

> "Sin duda, los logros de la política económica, que han hecho posible la corrección de desequilibrios o la recuperación que refleja el cuadro I, tuvieron su apoyo fundamental en la política de concertación cuya acabada expresión ha sido el Acuerdo Económico y Social" (vid. supra., pág. 6).

[19] "[E]l aspecto más importante y espectacular ha sido el cambio de tendencia del empleo, cuya recuperación se inicia en el segundo semestre de 1985, tendencia que

inflación[21], negociación colectiva[22], por lo que no variaban valoraciones anteriores:

"En el verano pasado [de 1986] y, por tanto, antes del cierre del Acuerdo, establecíamos un balance global positivo del alcance del AES en sus aspectos estructurales e institucionales aunque pendientes de la marcha final de la negociación colectiva y de algunos otros temas puntuales"[23].

Esos temas puntuales se referían a la cobertura de desempleo[24], aspectos de seguridad e higiene[25] y asuntos de contratación[26]. En julio

---

se mantiene y refuerza durante todo 1986 y que por sí misma, podría calificar la nueva situación como una nueva etapa de creación de empleo" (vid. supra., pág. 3).

[20] "Las rentas salariales globales medidas en términos reales (deflactadas desde los costes) globales frente a su caída en 1984 se contienen en 1985 y crecen en 1986, aunque su tasa de crecimiento sea menos que la del PIB y todavía no se detenga la caída (ya, prácticamente detenida) en la participación en la Renta Nacional" (vid. supra, pág. 5).

[21] "En cuanto a la evolución de los precios, nuestra moderación salarial en principio garantizaba la consecución del objetivo de inflación fijado por el gobierno para 1986" (vid. supra, pág. 6).

[22] "[L]a negociación colectiva gracias al AES se ha extendido y homogeneizado, sin conflictividad perceptible, universalizando la presencia de UGT en los convenios; pactando leves mejoras de poder adquisitivo (...); la jornada de trabajo apenas reducida tras las fuertes contracciones de años anteriores y algunos otros temas incorporados de modo disperso constituyen los rasgos de los convenios; permaneciendo invariables (en el bienio) la articulación y estructura negocial. En conjunto, el balance [de la negociación colectiva durante la vigencia del AES] resulta positivo" (vid. supra, pág. 13).

[23] Vid. supra, pág. 13.

[24] Señalaban que, pese a que había entrado en vigor un decreto negociado con ellos que ampliaba "el cuadro de situaciones protegibles en el desempleo e increment[aba] los niveles de cobertura", no se consiguió alcanzar el objetivo del 48% de tasa de protección a 31 de diciembre de 1986. Pretendían así estudiar medidas para alcanzar dicha tasa de cobertura (vid. supra. pág. 13).

[25] "Finalización del Libro Blanco, y todo lo referente a las materias de formación y al papel de las Organizaciones firmantes" (vid. supra, pág. 14).

de 1987 seguían valorando positivamente la evolución del empleo, salvo su estacionalidad[27].

Parece que, en la UGT, la visión crítica respecto a los beneficios alcanzados mediante los pactos globales de contrapartidas apareció tras sus enfrentamientos con el Gobierno socialista en el verano de 1987[28]. A partir de entonces, los dirigentes ugetistas incidieron en que desde los Pactos de la Moncloa los acuerdos sociales habían "buscado primordialmente la legitimación política en base a la concesión de contrapartidas heterogéneas, sin contenido estratégico", "[s]u desarrollo, salvo en la referente a la negociación colectiva, ha[bía] sido en no pocas ocasiones, insuficiente y objeto de controversia", la concertación social practicada "[había] servido más para neutralizar la política económica que para potenciarla o reorientarla", "[n]o [había] sido eficaz para abordar con vigor la discusión de reformas estructurales (protección social, formación profesional, política industrial, etc.)", "[l]a negociación de los presupuestos del Estado, en todo caso muy limitada, se justifica[ba] por la carencia de derecho a la negociación de funcionarios y pensionistas, límites a la participación sindical en las Instituciones Públicas y ausencia de consultas institucionales en los planes sectoriales de inversión"[29]. Señalaban

---

[26] "Promoción institucional de las contratas de relevo y contrato-tipo para el desarrollo de actividades laborales en el extranjero" (vid. supra, pág. 14).

[27] "Aún no conocemos la encuesta de población activa del segundo trimestre del año, tan sólo los datos del paro registrado de los últimos meses que sigue descendiendo. Ello constituye un hecho positivo aunque tiene una fuerte componente de estacionalidad, por lo que no podemos considerar la situación, algo alentadora, con complacencia" (carta-circular del Secretario de Acción Sindical del 31 de julio de 1987. op. cit.).

[28] "La Unión General de Trabajadores, que defiende la política de concertación como elemento central de su estrategia, realiza tanto una valoración positiva de los pactos como un reconocimiento de sus limitaciones" (Carta-circular del Secretario de Acción Sindical del 3 de noviembre de 1987, op. cit.).

[29] Un año antes la Secretaría de Acción Sindical había afirmado por el contrario:

"En primer lugar, la UGT debe destacar como importante el hecho de que ha participado a la hora de elaborar los Presupuestos Generales del Estado, negociando el montante de partidas claves desde un punto de vista sindical. Los Presupuestos [Generales del Estado] se convierten en el eje condicionante de

igualmente que se había producido una gran transferencia de rentas a favor de los empresarios que no se traducía, suficientemente, en inversiones creadoras de puestos de trabajo; que pese a la reducción de la inflación, la disminución de los costes laborales y la precarización del trabajo, había seguido aumentando el desempleo durante todos aquellos años; y que seguía siendo una asignatura pendiente la democracia industrial. Pero, aun así, en cuestiones como el empleo seguían mostrando una valoración positiva de su evolución en septiembre[30] y noviembre de 1987[31], si bien no quedaban satisfechos por la evolución del paro en febrero[32] y marzo de 1988[33]

---

muchos aspectos de la vida social del país, y, por lo tanto, aunque la capacidad de propuesta compete plenamente al Gobierno, y la decisión exclusivamente al legislativo, es manifiesto que en épocas en que los trabajadores se ven requeridos para grandes sacrificios solidarios han de poder oír su voz, a través de sus organizaciones representativas, sobre los aspectos presupuestarios que les van a afectar más directamente. En ese sentido es justo destacar que las conversaciones mantenidas entre el Gobierno y la UGT sobre estos temas son, de por sí, un eslabón muy importante de la cadena de la participación del sindicato en la vida socio-económica española" ("Encuentro Confederal de Acción Sindical: Presupuestos Generales del Estado", documento adjunto a la carta-circular del Secretario de Acción Sindical, Apolinar Rodríguez, del 26 de septiembre de 1.986, op. cit.).

[30] Afirmaban así que se había producido un apreciable crecimiento del empleo de alrededor de 300.000 empleos, pero que aún era claramente insuficiente para aliviar el problema del desempleo ("Balance de la negociación colectiva" a 30 de septiembre de 1987, en *Información Sindical*, núm. 53, 2ª quincena de octubre de 1987).

[31] "La economía crece a un ritmo elevado, la creación de empleo se beneficia de ello, aunque se eche de menos la aparición de políticas específicas, el nivel de inflación se reduce sustancialmente... ("Jornadas sobre Negociación Colectiva" documentación adjunta a carta-circular del Secretario de Acción Sindical del 6 de noviembre de 1.987, op. cit.).

[32] "El año 1987 había sido objeto de previsiones que demostraron estar sesgadas a la baja, sobre todo en cuanto al aumento salarial compatible, (...). De hecho el año terminó con una inflación del 4,6%, un crecimiento económico del 4,5% al 5% basado en la inversión y consumo internos, una creación de empleo del 3% (muy superior a la previsión del Gobierno) que, lamentablemente, no impidió que aumentase el paro. (...) Es claro, por otra parte, que los buenos resultados de 1987 no han sido en absoluto suficientes, al fallar en el problema crucial para nosotros que es

ni, como ya comentamos en el capítulo quinto, por el aumento de la contratación temporal.

Pero es más, argumentar que la dirección ugetista rechazaba los acuerdos globales de contrapartidas por los incumplimientos del Gobierno socialista o porque no se alcanzó el pleno empleo implica sostener que, si éste hubiese aumentado más el gasto social, o se hubiera reducido drásticamente el nivel de paro, la dirección de la UGT habría continuado con la moderación salarial que quería el Gobierno socialista. Sin embargo, la propia dirección ugetista explicó insistentemente desde 1987 que su nueva política salarial se debía, además de porque los trabajadores ya no admitían la congelación del salario real y por razones de "justicia social", porque ésta *ya no era necesaria*[34]. Para el sindicato socialista la recuperación económica permitía incrementos de salarios reales sin crear inflación ni poner en peligro las inversiones, la competitividad o el empleo[35].

---

el del paro. Ello ha de incentivar cualquier posibilidad de aumentar el crecimiento y cuestionarse la política de rentas no salariales, en particular la canalización y optimización de los excedentes empresariales" ("Circular de Negociación Colectiva para 1988" adjunta a la carta-circular del 1 de febrero de 1988, op. cit.).

[33] "El gran desequilibrio de nuestra economía sigue siendo el gran volumen de desempleo. Durante 1.987, el empleo ha crecido, según las últimas estimaciones del Banco de España, alrededor de un 4%. Esta cifra es absolutamente insuficiente para paliar el desempleo, que en Diciembre superó los 3 millones de parados, pero demuestra que es perfectamente compatible un moderado incremento de los salarios reales con incrementos del empleo" ("Balance Negociación Colectiva: 1.987" adjunto a carta-circular del 14 de marzo de 1.988, op. cit.).

[34] Esto se lo expuso el propio Nicolás Redondo al Presidente del Gobierno durante una entrevista que mantuvieron a principios de 1987 cuando el primero afirmaba que la recuperación económica permitía incrementos del salario real sin crear inflación (carta-circular del Secretario General y del de Acción Sindical del 7 de enero de 1987, op. cit.).

[35] En una información aparecida en El *País* (15-12-86) se afirmaba que medios cualificados de la central socialista estaban poniendo en cuestión desde hacía tiempo la validez de los grandes acuerdos marco por entender que "si bien en el pasado parecía lógico ir a ellos por solidaridad con sectores más débiles, hoy ya no tiene sentido. Hay sectores o empresas que no tienen por qué aceptar una banda salarial baja y tienen perfecto derecho a exigir mejores condiciones".

Ya en octubre de 1987 el comité confederal de la UGT afirmaba que existía un mejor clima económico, debido en parte al sacrificio de los trabajadores y que, por tanto, había de redundar en su beneficio (*El País* 5-10-86). En diciembre de aquel mismo año Nicolás Redondo afirmaba que:

> "no podemos seguir haciendo lo que hasta ahora. La economía se ha saneado a costa de los trabajadores, del sacrificio de los trabajadores. Y eso se ha acabado ya. Los trabajadores no tienen por qué sacrificarse" (*El País* 18-12-86).

En la preparación de la negociación colectiva de 1987 la dirección de la UGT justificaba una reivindicación salarial superior a la inflación prevista porque (a) "[l]a situación económica actual lo requiere o, por lo menos, lo permite", (b) "[l]os salarios no son un peligro inflacionista, en los términos en que se plantean" y (c) "[l]a situación social y del mercado de trabajo lo requieren"[36]. Señalaban así que la inflación alcanzaba ya niveles tolerables, se había saneado la balanza de pagos, las reservas de divisas alcanzaban récords históricos, la inversión se estaba recuperando de manera espectacular, lo que les parecía que demostraba que el sacrificio por el lado de los costes había dado sus frutos y convenía consolidar la demanda (como veremos en el capítulo siguiente). Además, la caída del precio del dolar y del petróleo, o el desarme arancelario ante la CEE favorecía la lucha contra la inflación. Resumiendo:

> "Por el lado de la demanda, la actual coyuntura económica, muy distinta de la de los años 80-85 que requirió un mayor sacrificio, aconseja o permite un crecimiento de los salarios reales por encima de la inflación final y por lo menos igualar la inflación promedio".

A esto añadían que:

---

[36] Según exponía en un documento titulado: "Materiales de estudio de cara a un Acuerdo Interconfederal para 1987" para la reunión de secretarios de acción sindical, el día 16 de enero de 1987. Anejo E, "Reflexiones sobre la inflación y la subida salarial". Caja: FEJP/514. Fundación Largo Caballero.

"Por el lado de los costes, los salarios ya han aportado su gran sacrificio. Ahora conviene centrarse en otros factores de coste y contemplar los salarios como piezas clave de demanda".

En pocas palabras:

"Nuestra propuesta de Acuerdo Interconfederal [para 1987] era totalmente coherente con el compromiso de los Presupuestos, eran su traducción rigurosa a la negociación colectiva (...). Sin variar por nuestra parte un ápice el objetivo estratégico de la solidaridad, medido antes que nada en términos de empleo, *habrá que dar una respuesta sindical diferenciada en estos momentos de creación de empleo, respecto a otros de destrucción*" (mía la cursiva)[37].

Estos argumentos de que el crecimiento económico permitía incrementos del salario real y que éstos fomentarían la demanda y, por tanto, el empleo los repitieron insistentemente en los años siguientes[38]. E igualmente serían utilizados para rechazar más retoques

[37] Memoria de Gestión de la Secretaria de Acción Sindical con registro de entrada por la FEJP el 30-3-87, pág. 24, op. cit.

[38] En mayo de 1987 rechazaban claramente la contención salarial en tiempos de crecimiento económico:

"Nosotros hemos explicado por qué la nueva coyuntura induce a nuevos matices en lo que sigue y debe seguir siendo la moderación salarial. Creemos que es el tiempo de una moderada subida de salarios reales, porque defendemos la necesidad de demanda interna de consumo, económicamente hablando, y el fin de un ciclo de intensos sacrificios, socialmente hablando, no permiten una repetición mimética de estrategias salariales anteriores ni una mayor presión a la baja del poder adquisitivo individual" ("Algunos aspectos de la política de rentas y su inserción en la política económica" en *Información Sindical*, núm. 48, mayo de 1987, pág. 39).

Meses más tarde:

"[E]s preciso plantear inicialmente que el contexto económico ha cambiado de manera sustancial en relación a los años anteriores. Las autoridades económicas han expresado públicamente su convencimiento de que el período de ajuste económico ha concluido y que el entorno actual puede calificarse como de etapa de crecimiento económico animado (...). [U]na vez vistas las consecuencias económicas y sociales positivas, hay que señalar que, en principio, y a falta de otras

del mercado laboral y justificar su demanda de incremento de la cobertura[39]. Finalmente en sus Resoluciones del 35º Congreso la

---

consideraciones que hagamos más adelante, parece lógico que la política salarial deba caminar en la vía de profundizar lo conseguido durante el presente año [por 1987]. Dicho con mayor claridad, los salarios pueden y deben crecer en términos reales porque ello supone la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores, el apoyo de la actividad económica y, en sentido contrario, no es incompatible en medida alguna con el proceso de ralentización en las subidas de los precios" ("Jornadas sobre Negociación Colectiva", punto 2: aspectos salariales, documento adjunto a la carta-circular del 6 de noviembre de 1987, op. cit.).

Su conclusión era clara:

"[E]l contexto económico activo, de crecimiento relativamente elevado, hace posible que subidas salariales reales más elevadas sean compatibles con el cuadro de proyecciones macro-económicas del Gobierno" (vid. supra).

En marzo del siguiente año exponían:

"Eran perfectamente compatibles los incrementos moderados de salarios reales que reivindicamos con la consecución de los objetivos en materia de precios y, a la vez, que estos mismos aumentos de salarios reales se iban a traducir en un fuerte tirón de la demanda interna, lo que posibilitaría mayores expectativas de crecimiento económico con la consiguiente creación de empleo. Esto suponía el que la contención de los precios debería recaer en otras variables distintas a los salarios" ("Balance Negociación Colectiva: 1.987" adjunto a carta-circular del 14 de marzo de 1.988, op. cit.).

Meses más tarde afirmaban explícitamente que la pérdida o congelación del poder adquisitivo individual para así crear empleo dependía de las coyunturas económicas:

"La teoría, según la cual la pérdida o congelación del poder adquisitivo individual crea empleo ha de ser adaptada según las coyunturas y, en nuestro caso, según el contexto socio-económico al que se aplique. La prolongación de un esfuerzo que, por fuerza, ha de ser puntual y concentrado en el tiempo (y así lo entendió siempre la U.G.T.) puede convertirse en un error, al permitir sólo una recuperación de los márgenes empresariales ociosos y el engrose de otras rentas no salariales, que no repercuten en la creación de empleo" (núm. 60 de *Información Sindical*, mayo de 1988).

[39] En el núm. 59 de *Información Sindical*, abril de 1988, pág. 28, consideraban:

"La fuerte crisis económica que atravesábamos puso de manifiesto la necesidad de que los interlocutores sociales adquiriesen compromisos efectivos de cara a fomentar el empleo. Desde esa perspectiva realista y responsable, nuestro

UGT exponía que Gobierno y empresarios habían pretendido que la negociación colectiva, "*a pesar de la mejora económica*, [siguiese] siendo un instrumento de legitimación del ajuste económico, con el objetivo de seguir incrementando el excedente empresarial con el control y ajuste salarial" (R.35C.UGT.1990:138, mía la cursiva).

Y, como vimos en el capítulo cuarto, cuando a partir de 1989 el Ministro de Economía accedió por fin a satisfacer gran parte de las demandas sindicales para, entre otras cosas, conseguir que los sindicatos accedieran a concertar su política salarial con el Gobierno, la dirección de la UGT se negó en redondo a aceptar un pacto que implicase la contención salarial[40].

En pocas palabras, la dirección ugetista no rechazaba la congelación salarial porque temiese que el Gobierno del PSOE no cumpliría su palabra, o porque no se les daba el pleno empleo o mayor gasto social, sino porque ésta ya no les parecía necesaria para

---

sindicato aceptó las distintas modalidades de contratación y, por tanto una cierta flexibilidad de entrada en el mercado de trabajo, como exigencia para una mejor distribución del escaso mercado laboral y como paso intermedio obligado hacia la consecución de la estabilidad del empleo".

Pero ahora:

"La actual situación favorable de nuestra economía obliga al replanteamiento de las medidas coyunturales que en su día apoyábamos, por la simple lógica de que las condiciones que justificaron su aceptación no sólo han cambiado, sino que cualitativamente han mejorado, mientras que por parte del Gobierno jamás se ha hecho un ajuste beneficioso para los trabajadores en función de la coyuntura económica favorable".

En el núm. 62 de *Información Sindical*, julio de 1988, pág 2, dirían además que:

"tras un penoso proceso de transición, el momento económico actual es otro y se confirman logros positivos basados en saneamientos anteriores cuyo coste más duro ha recaído sobre los parados. Por eso mismo, es inexcusable que una parte sustancial de los recursos actuales se oriente a mejorar la cobertura a los desempleados de manera prioritaria".

[40] A partir de 1993, sin embargo, los sindicatos la han dado sin serles ofrecidas contraprestaciones por parte del Gobierno, lo cual sugiere que la práctica de la contención salarial en España tiene poco que ver con incrementos de gasto social o políticas económicas y bastante más con la situación de la economía.

conseguir ambos objetivos. La dirección de la UGT consideraba que el Gobierno socialista tenía la obligación de llevar a cabo una política progresista (esto es, que redujese el desempleo, las desigualdades sociales, aumentase la protección social) *independientemente de que la UGT concertase o no su política salarial con los empresarios*. En palabras de Nicolás Redondo:

> "La concertación constituye hoy un instrumento fundamental en la búsqueda del acuerdo social, pero la apuesta por el consenso no puede llevarnos a anteponer la concertación al cumplimiento de los compromisos programáticos y a la propia definición del Gobierno. Tampoco puede pretenderse a través de ella una legitimación política que es previa y distinta al propio proceso de negociación. Por lo tanto, como hemos señalado antes, para que esa concertación tripartita sea algo más que una palabra se requieren dos condiciones: primero, que el Gobierno nos indique cuáles son sus objetivos y políticas básicas a medio plazo en materia económica y social para ver si existe un horizonte de coincidencias, y, segundo, *que el Gobierno se comprometa a llevar a efecto una política de progreso aun sin concertación social para que ésta no se convierta en un factor de neutralización de cualquier alternativa progresista*"[41] [42].

---

[41] Discurso de Nicolás Redondo al Congreso del PSOE de 1988, pág. 15, op. cit., mía la cursiva.

[42] En septiembre del año anterior Nicolás Redondo ya había afirmado que, con acuerdo o sin él, el Gobierno tenía el deber de hacer una política social justa y unos presupuestos generales justos, sin exigir contrapartidas (*El País* 10-9-87). Igualmente en su congreso celebrado en 1990 exponían:

> "Pero si hemos partido de asumir lo realizado [se refieren a los acuerdos alcanzados hasta 1987), hemos señalado con igual claridad las limitaciones de tales acuerdos concebidos primordialmente como instrumentos de legitimación política a través de contrapartidas heterogéneas *(se ponía la moderación salarial como 'contrapartida', por ejemplo, del aumento en la cobertura del desempleo, cuando ésta es una obligación ineludible del poder público por la que no debe exigirse a cambio contraprestación alguna)* carentes de orientación estratégica" (G.35C.UGT.1990:13, mía la cursiva).

Se puede, por tanto, rechazar que la dirección de la UGT dejase de aceptar en la primavera de 1987 la concertación social practicada hasta entonces debido a los incumplimientos del Gobierno socialista. Por aquel entonces los dirigentes ugetistas no hacían tal evaluación. De hecho señalaban que no aceptarían más acuerdos globales de contrapartidas con independencia de que el Gobierno socialista incrementase el gasto social, como efectivamente pudo ver el Ministro de Economía y Hacienda en 1990 y 1991, porque, entre otras cosas, consideraban que la moderación salarial que se les exigía a cambio ya no era necesaria en un contexto económico expansivo. Además, tampoco parece que la rechazase a causa de la obstinación del Gobierno en mantener su política económica, pues los dirigentes ugetistas formularon su propuesta de una nueva concertación "sectorializada" cuando todavía no la descalificaban globalmente. De hecho, puesto que la razón que daba la UGT para rechazar la moderación salarial que le pedía el Gobierno del PSOE se fundamentaba, entre otras razones, en que los resultados de las políticas económicas (crecimiento económico y reducción del desempleo) la hacían ya innecesaria, no hay por qué pensar que otra estrategia económica (por ejemplo, otra basada en políticas fiscales y monetarias más expansivas) hubiera hecho cambiarle de parecer[43]. En pocas palabras, su insistencia en que el Gobierno socialista tenía la obligación de incrementar el gasto social, más la defensa de que la contención salarial no es necesaria en momentos de expansión económica, junto al hecho de que con la crisis económica de 1992 los sindicatos españoles sí que accedieran a dicha contención en 1994 (aunque no se les diese nada a cambio) lleva a concluir que la moderación salarial de los sindicatos españoles no se explica ni por la clase de política económica que se emprenda ni por la política social que se lleve a cabo.

---

[43] De hecho, tenemos que recordar que durante 1987 la dirección de la UGT no criticó la política económica que se estaba llevando a cabo, como hizo después, sino que sus resultados no se estaban repartiendo con "justicia social".

2. Las elecciones sindicales y sus efectos sobre la negociación colectiva

Podemos pasar así a ver si la tercera hipótesis es capaz de explicar el rechazo ugetista a más acuerdos globales de contrapartidas. Se deducía en el capítulo anterior cómo, en contextos de competición intersindical por la representación de los trabajadores y donde una estrategia de presión por separado tuviera éxito (como, por ejemplo, en momentos de expansión económica), aquellos sindicatos que hubieran practicado previamente una estrategia de cooperación con los Gobiernos -aceptando la congelación del salario real- pasarían a pedir incrementos salariales por encima de la inflación prevista, o perderían apoyos en beneficio de sus rivales sindicales. Si esto era así, la dirección de la UGT no habría tenido más remedio que rechazar esos acuerdos globales de contrapartidas donde ellos tenían que coordinar su política salarial con las exigencias de las políticas económicas del Gobierno. Para verificar esta hipótesis hay que abandonar el campo de las conjeturas y comprobar si hay datos que rechacen los supuestos de los que se partió en el modelo teórico.

2.1. La competencia intersindical y los contextos económicos

2.1.1. Los objetivos de las organizaciones

En primer lugar, hemos visto en los capítulos anteriores cómo el Gobierno socialista estaba interesado en mantener una concertación social a base de acuerdos globales de contrapartidas, donde los sindicatos ofrecían principalmente contención salarial con objeto de luchar contra la inflación y facilitar así la competitividad de las empresas y la creación de empleo[44], pues no parece que sea cierto

[44] En el modelo teórico se expuso además que el gobierno ofrecía ciertos bienes organizativos a los sindicatos que participasen en los acuerdos. Se pretendía mostrar así de una forma teórica que, incluso los sindicatos que estuviesen muy interesados en esta clase de bienes, rechazarían la coordinación económica si temían sufrir

que prefiriese controlar la inflación mediante una política monetaria dura en vez de conseguirlo gracias al acuerdo con los sindicatos[45]. El antiguo ministro de Educación, José María Maravall (1997:170), resume los cálculos que hacía el Gobierno: los pactos globales donde los sindicatos ofreciesen la moderación salarial a cambio de contrapartidas podría dar lugar a mejores transacciones (*trade-offs*) entre los salarios, la inversión, el empleo y las políticas sociales. Así, por un lado, sindicatos y empresas podrían mejorar su bienestar si pactasen un salario inferior al nivel que los sindicatos unilateralmente eligiesen y un empleo superior al que los empresarios decidiesen ante tal nivel salarial. Este razonamiento está en la base del intercambio que ofrecía el Gobierno a los sindicatos y empresarios de obtener un menor salario a cambio de mayor empleo. Por otro lado, puesto que las subidas salariales reducirían la inversión, los sindicatos podrían aceptar intercambiar su consumo presente por una inversión que representase empleo y consumo futuro, sobre todo si fuera posible redistribuir el consumo o aumentar el "salario social". En este caso se trataba de intercambiar un menor salario presente por más crecimiento económico y más salario social futuro.

En segundo lugar en el modelo teórico del capítulo anterior se partía del supuesto de que los sindicatos en un contexto competitivo se fijaban como objetivo ("instrumental") conseguir la hegemonía, o al menos la primacía, dentro del movimiento sindical. El sindicalismo español históricamente se ha caracterizado por ser "pluralista y competitivo"; y desde la vuelta de la democracia, se encuentra dividido en dos grandes confederaciones sindicales, CCOO y UGT, que son las únicas que tienen el derecho a calificarse de "más representativas" para el ámbito de todo el estado de acuerdo a los

---

pérdidas importantes en su base de apoyos. Pero este supuesto no es imprescindible para comprobar esta hipótesis.

[45] Aunque probablemente el Ministro de Economía hubiera preferido descentralizar la negociación colectiva creyendo que así obtendría dicha moderación sin tener que negociar la contención del gasto público. Pero, como ya se dijo Carlos Solchaga sabía que esta posibilidad estaba políticamente excluida.

resultados de las elecciones a comités de empresa[46]. Existen otras organizaciones sindicales igualmente "más representativas" en dos comunidades autónomas, País Vasco (ELA-STV), y Galicia (CIG). Tanto la UGT como CCOO se fijaron como objetivo convertirse, al menos, en el principal sindicato español.

En el 33º Congreso de la UGT, celebrado en junio de 1983, los ugetistas afirmaban que deseaban la unidad sindical[47] en torno a la UGT[48], es decir, fijaban explícitamente como uno de sus cuatro grandes objetivos de estrategia sindical (R.33C.UGT.1983:40):

"Hacer de la UGT el sindicato mayoritario y hegemónico de España".

De hecho, hacia 1983 los líderes ugetistas consideraban que estaban en vías de conseguirlo. Evaluaban que, por de pronto, ya habían conseguido dar alcance a su más directo rival, CCOO[49], gracias a que el voto sindical, así lo creían, se acercaba al voto político[50]; y que incluso podrían hacerse con parte de la militancia de

---

[46] Véanse los resultados de las elecciones sindicales proporcionados en el capítulo quinto.

[47] "Reafirmación de nuestra voluntad de unidad sindical: la UGT considera que la unidad es una aspiración irrenunciable de la clase trabajadora, que surge ante los intereses comunes que como clase ostenta ésta en su lucha permanente frente a la clase capitalista" (R.33C.UGT.1983:44).

[48] "...UGT reafirma su voluntad de unidad, el carácter unitario de su sindicalismo, su estrategia y proyecto sindical autónomo, tanto de negociación colectiva como de desarrollo de una estrategia sindical en el área política frente al Gobierno y en las Instituciones, y de reunificar y aglutinar al conjunto del movimiento obrero en torno a la UGT y su política sindical" (R.33C.UGT.1983:44).

[49] La UGT se consideraba así "una importante excepción en los países del sur de Europa, con mapas sindicales donde los sindicatos de inspiración comunista son mayoritarios" (R.33C.UGT.1983:39).

[50] "Por otra parte, estos resultados [los de las elecciones sindicales de 1982] han venido a confirmar la tendencia que se venía manifestando en los últimos años de equiparación lenta del voto político al voto sindical, observándose a su vez, un acercamiento a esquemas sindicales vigentes en el norte de Europa" (R.33C.UGT.1983:39).

aquel sindicato[51], así como con los apoyos de otros sindicatos[52] si su acción sindical era la adecuada. No es de extrañar que para los ugetistas la unidad de acción sindical quedase en un muy segundo plano[53].

En su siguiente congreso (celebrado en abril de 1986 y, por tanto, antes de las elecciones sindicales de aquel año) ya no se proponían conseguir la "hegemonía"[54] y daban mayor énfasis a la unidad de acción sindical "para aumentar la eficacia del conjunto del movimiento sindical en abordar los problemas más urgentes y hacer frente a sus consecuencias en el conjunto de los trabajadores y de sus

---

[51] "Aun cuando la situación ha cambiado evidentemente, es posible que este nuevo servicio [de CCOO] al PC suponga, una vez más, un serio quebranto del sindicato de inspiración comunista, que agotaría de ese modo el conjunto de "capital" adquirido en los últimos años de la dictadura. De proseguir en esta postura de ataques a UGT y al Gobierno socialista (...), el resultado final dependerá de la política que UGT practique, ya que si ésta es correcta *un importante sector de tendencia socialista, que aún hoy pervive en Comisiones podría optar definitivamente por la UGT, consolidando de este modo la hegemonía sindical de nuestra Organización*" (R.33C.UGT.1983:39, cursiva mía).

[52] "La muy superior fuerza negociadora de las grandes opciones sindicales y sobre todo el hecho de que progresivamente prevalezcan los esquemas de negociación de los sindicatos que defienden intereses generales pueden suponer, si estos esquemas sindicales son flexibles y generosos en la acogida de los diferentes problemas, que en un futuro próximo la mayor parte de los trabajadores que hoy se acogen a estas opciones se decidan por sindicatos que, como la UGT, solucionan más adecuadamente sus problemas" (R.33C.UGT.1983:40).

[53] "La UGT desde su identidad y práctica sindical autónoma, convergerá para llevar adelante las reivindicaciones del conjunto del movimiento obrero, con aquellas fuerzas sindicales con las que *coyuntural y puntualmente* coincida" (R.33C.UGT.1983:44, mía la cursiva).

[54] Ahora lo que buscaban era "sólo" aumentar la diferencia con respecto a los rivales:

"La Unión General de Trabajadores tiene necesariamente que configurar su estrategia electoral en el marco de la propia LOLS y redoblar los esfuerzos necesarios para continuar siendo la central sindical más representativa de nuestro país, aumentando las actuales diferencias de representatividad que existen hoy día con respecto a otras fuerzas sindicales" (R.34C.UGT.1983:39).

organizaciones" (R.34C.UGT.1983:83). Sin embargo, parece que existió dentro del sindicato socialista una división de pareceres con respecto a la posibilidad de hacerse hegemónicos. Mientras que la Secretaría General y la de Acción Sindical asumían ya que "parec[ía] inevitable que, en las actuales circunstancias, se mant[uviese] en España la pluralidad sindical" (G.34C.UGT.1986:23), la Secretaria de Organización, además de continuar con su objetivo de atraerse a las bases de otros sindicatos[55], todavía sostenía que:

> "No cabe la menor duda que el crecimiento de la UGT, sobre todo cualitativamente hablando, va a ser posible a través de un mejoramiento de los resultados en las próximas elecciones sindicales. *La pretensión una vez más será la de ir equiparando el voto sindical al voto político de izquierdas conformando paulatinamente así un mapa sindical en España cercano a los existentes en el centro y norte de Europa*" (G.34G.UGT.1986:82, mía la cursiva).

Y en sus conclusiones finales la Secretaria de Organización afirmaba explícitamente al hablar de las próximas elecciones sindicales:

> "Los resultados van a ser claves para el futuro del Movimiento Sindical y particularmente para conformar un mapa sindical tanto en las Comunidades Autónomas como en todo el país (...). En cualquier caso, el protagonismo de la UGT a medio plazo va a depender de esos resultados, que pueden y deben ser favorables tanto por el esfuerzo organizativo desplegado como por la práctica sindical responsable y también, cómo no, por la credibilidad y eficacia

[55] "Siempre hemos insistido en la importancia que tiene para nuestra Organización el mantener un esfuerzo sostenido en cuanto a la apertura de la Confederación y la integración de otros Sindicatos, Colectivos e incluso militantes de los mismos a título individual. Este capítulo, de enorme importancia para la UGT, ha sido impulsado por la Comisión Ejecutiva Confederal y desarrollado y aplicado a distintos niveles por las Federaciones de Industria y las Uniones Territoriales. Estamos convencidos que esta política es muy rentable para la Organización, al mejorar además nuestra presencia e implantación a todos los niveles" (G.34C.UGT.1986:78).

> demostrada. (...) Para finalizar, no nos cabe más que afirmar nuevamente que la consolidación de la UGT va a depender de los medios humanos, técnicos y económicos de que se dote nuestra Organización (...). Se trata en definitiva de llevar la iniciativa en la política sindical pero también organizativa. Pasar de una etapa con grandes dosis de voluntarismo, a una etapa de consolidación, expansión y profesionalización que *confirme a la UGT a medio plazo como la Confederación hegemónica en España*" (G.34C.UGT.1986:83-84, mía la cursiva).

Por su parte, CCOO, en sus congresos de los años ochenta, se proponía a corto plazo como objetivo estratégico no sólo la unidad de acción con el resto de sindicatos sino incluso, a más largo plazo, la creación de una gran central sindical unitaria mediante la fusión de las existentes[56], si bien estaba claro que no mostraban ninguna simpatía

---

[56] "Ponencias aprobadas en el II congreso de la Confederación Sindical de CC.OO: Acción Sindical". Punto IV. La Cuestión de la Unidad (1981, pág. 37):

"1. La C.S. de CC.OO tiene como objetivo estratégico la unidad sindical, la construcción de una gran Central Sindical unitaria constituida a través de un Congreso de Unificación de las organizaciones sindicales existentes. CC.OO. aspira también, a corto plazo, a la unidad de acción entre los sindicatos mayoritarios para la mejor defensa de los intereses de los trabajadores. La unidad de acción hay que desarrollarla fundamentalmente con UGT a nivel estatal, y con los sindicatos representativos de nacionalidades (ELA-STV, ING), provincias y sectores (SLMM, UCSTE, etc.). También hay que mantener relaciones con USO".

En las Resoluciones de política sindical aprobadas en su IV congreso, 1987, pp. 46, 47 exponían:

"No obstante, el Congreso Sindical Constituyente y la unidad orgánica fue y sigue siendo un objetivo de nuestra Confederación. Seguimos convencidos de que los sindicatos para desempeñar su misión organizadora y reivindicativa necesitan de masividad. La división en distintas y múltiples centrales sindicales debilitará el carácter de éstas y con ello a los trabajadores. Por eso seguiremos defendiendo la necesidad de la central única de los trabajadores, de clase, independiente, pluralista y en donde la democracia sindical garantice la libre expresión de las distintas corrientes de opinión y el funcionamiento democrático de la central (...). En definitiva, por razones de todo tipo, por las enseñanzas que se desprenden de estos diez años de libertad sindical y por el interés común de desarrollar la democracia en lo social, en el desarrollo de los derechos sindicales, en el fortalecimiento de los sindicatos, se

por que aparecieran más[57]. Así, ambos sindicatos pretendían la unidad del movimiento sindical, pero mientras que la UGT consideraba que la unidad se podría realizar en torno a sus siglas, CCOO se decantaba por la fusión de las organizaciones existentes. Ahora bien, el objetivo de este último sindicato se habría de alcanzar desde una posición de fuerza en la que ellos marcasen la pauta de la acción sindical[58], para lo cual hacían hincapié en que:

"Podemos, debemos y vamos a ganar las elecciones"[59].

---

impone avanzar en la unidad de acción. La C.S. de CC.OO. reitera su plena disposición a impulsar la máxima unidad de acción con todas las centrales sindicales de clase y especialmente con UGT".

[57] Véase *Gaceta Sindical*, núm. 19, junio de 1982, pág. 13. En ese número el secretario de Información y Publicaciones de la CONC, Alfons Labrador, afirmaba:

"En las nacionalidades, y en concreto en Cataluña, las elecciones sindicales son también una ocasión para defender nuestra concepción de sindicalismo de clase y nacional, solidario con todos los pueblos de España, pero muy enraizado en nuestra realidad nacional y atento a una problemática que tiene unas características propias. No es un problema de oportunidad para evitar que surjan sindicatos tipo ELA-STV o ING, es una convicción profunda".

[58] Ponencias aprobadas en el II congreso de la Confederación Sindical de CC.OO:

"7. Fortalecimiento de CC.OO. en la medida en que CC.OO. encarna el planteamiento sindical unitario, el fortalecimiento organizativo de CC.OO. y *su consolidación como central mayoritaria de España*, es un elemento vital para el futuro de la unidad sindical" (pág. 39, cursiva mía).

En el núm. 44 de *Gaceta Sindica*l, octubre de 1986, afirmaban en el acto de presentación de la campaña para las elecciones sindicales el 24 de septiembre de 1986:

"Ante la inseguridad en el trabajo hay que avanzar posiciones con CC.OO., que es la mejor forma de avanzar hacia la unidad de los trabajadores".

[59] Véase el editorial: "Ganar las elecciones" del núm. 19 de *Gaceta Sindical*, junio de 1982, pág. 3:

"CC.OO. va ganando las elecciones sindicales. En la reunión de la Comisión Ejecutiva y los Secretarios generales, de la que se informa en el interior de este número, Marcelino Camacho señaló que "podemos, debemos y vamos a ganar las elecciones".

Véase también "Elecciones sindicales en el País Valencià en el núm. 20 de *Gaceta Sindical*, julio/agosto de 1982, pág. 25:

A efectos prácticos está claro que tanto el uno como el otro luchaban por maximizar votos en las elecciones sindicales[60]. UGT para ser hegemónicos, CCOO para asegurarse que la futura unidad orgánica se hiciese según sus planteamientos[61]. Y, de hecho, CCOO lo siguió intentando incluso después de que la unidad de acción

---

"En el País Valenciano estamos estos días metidos de lleno en ultimar los preparativos de lo que queremos sea una campaña electoral planificada, bien organizada, en la que como dice Marcelino "todo y todos estamos para el objetivo hoy fundamental de ganar las elecciones sindicales (...). Es muy importante que todos nos llamemos a la responsabilidad para seguir ganando las elecciones, que son muy importantes para el sindicalismo de clase y para CC.OO",

En el núm. 21 de *Gaceta Sindical*, septiembre 1982, el Consejo Confederal de CCOO hacía el siguiente comunicado sobre las elecciones sindicales:

"El objetivo prioritario que se marca toda la confederación Sindical de CC.OO. desde ya, es GANAR LAS ELECCIONES SINDICALES por amplio margen" (suya la mayúscula).

Cuatro años después, la pretensión se repetía (*Gaceta Sindical*, núm. 43, julio de 1986, pp. 7, 8):

"Con toda probabilidad, a finales de 1986, vamos a afrontar un nuevo proceso de Elecciones Sindicales, proceso éste de singular importancia para el movimiento sindical en España. Por ello, el primer trabajo sindical a partir de este momento está en garantizar la victoria de la Confederación, tras el proceso de cómputo (...). [S]i desde el sindicato llevamos a la práctica la estrategia aprobada por el Consejo Confederal del 20 de mayo [de 1986], será irreversible que la C.S. de CC.OO. ocupe el lugar que le corresponde en el concierto sindical en nuestro país, que no es otro que el primero".

[60] "Tanto CC.OO. como UGT hemos formulado un objetivo electoral coincidente, pero sólo en su enunciado: ampliar el número de delegados respecto del obtenido en 1982" ("El carácter Excepcional de estas Elecciones", firmado por Antonio Gutiérrez, en *Gaceta Sindical*, núm. 46, diciembre de 1986, pág. 6).

[61] De hecho, Julián Ariza sostuvo en la entrevista con el autor del día 18-7-97 que "entonces CCOO no se lo planteaba [el objetivo de hegemonía sindical] no porque fuésemos ni mejores ni peores, [sino] porque teníamos una cierta hegemonía, porque teníamos mucha más implantación al inicio de la transición".

sindical entre ambos sindicatos hubiera ya comenzado, lo cual la hizo crujir[62].

2.1.2. Las preferencias de los trabajadores

Ahora bien, en el modelo teórico del capítulo anterior se expuso que la lucha por incrementar la representatividad de un sindicato a costa de otros dependería, en primer lugar, de *la naturaleza de los bienes* que los trabajadores pidieran a las organizaciones sindicales a cambio de apoyarlas. Si los bienes en los que la mayoría de los trabajadores estuviesen interesados fueran los de "identidad", la probabilidad de que los diferentes sindicatos compitiesen entre sí disminuiría porque los trabajadores no harían depender su apoyo a los sindicatos en función de los resultados de sus estrategias (Lange y Ross 1990:310). Por el contrario, si los bienes que solicitasen los trabajadores a los trabajadores fuesen bienes materiales "privados" o "públicos", entonces el contexto socioeconómico, es decir, las condiciones que favorecen o limitan que las huelgas y otras formas de presión tengan éxito, determinaría cuál sería la estrategia para la negociación colectiva (presión en los centros de trabajo o negociación centralizada) que conseguiría dar unos resultados que atrajesen a un mayor número de trabajadores.

Los estudios realizados al respecto parecen señalar que la mayoría los trabajadores españoles no pedían a los sindicatos "bienes" de identidad, es decir, la gratificación de identificarse y ser identificados con los principios y derechos encarnados por un sindicato en cuestión, y mantenían así una actitud "instrumental" hacia ellos (Pérez Díaz 1993; Fürher 1996)[63]. Ahora bien, ¿qué quiere decir esto? Para Pérez Díaz esta actitud consiste en intercambiar un "apoyo" limitado por "servicios" sindicales, y proporciona las siguientes

---

[62] Según me confirmaron José María Zufiaur y Julián Ariza durante una entrevistas celebradas con el primero el 12-10-96 y con el segundo el 18-7-97.

[63] Esta concepción instrumental hacia los sindicatos por parte de los trabajadores españoles fue también recogida en estudios cualitativos encargados tanto por UGT (Bouza 1990) como por CCOO (Blanco y Otaenegui 1991) a finales de los años 80.

evidencias, a partir de sus investigaciones realizadas en tres encuestas en 1978, 1980 y 1984 (Pérez Díaz 1993:292-293):

1º. Los trabajadores españoles valoraban los sindicatos más en términos de su capacidad para conseguir convenios colectivos favorables (62% en 1980; y 69% en 1984), y ofrecer servicios de asesoramiento u otros semejantes (56% en 1980; y 58% en 1984), que en términos de su capacidad para ejercer presión sobre el gobierno para un cambio de política (12% y 15% en 1984).

2º. Los trabajadores españoles valoraban ciertos mecanismos de acción colectiva, como huelgas, en términos de su utilidad para conseguir determinados resultados dentro del marco del orden existente. Así estaban a favor de la regulación legal de las huelgas (64% en 1980; y 73% en 1984), y del uso prudente de las mismas en el contexto de la negociación colectiva (77%; y 91%)

3º. Los trabajadores españoles preferían que los sindicatos fueran independientes de los partidos políticos (el 55% en 1980 y el 57% en 1984), o que, como mucho, establecieran acuerdos ocasionales con los partidos sobre temas específicos (el 33% en 1980, y en 1984).

4º. Los trabajadores españoles parecían estar dispuestos a ofrecer un amplio margen de confianza a los sindicatos para que éstos actuaran como sus representantes en las negociaciones colectivas, pero no estaban dispuestos a ofrecerles el monopolio de la representación de sus intereses. A la hora de decidir quién debería protagonizar la negociación colectiva, los trabajadores estaban divididos entre los que opinaban que debían ser los sindicatos (25% en 1980), los comités de empresa (17%), una comisión mixta de ambos (22%), o las asambleas (5%). Los trabajadores insistían en que elegían al candidato en función de cualidades personales (93% en 1980; 86% en 1984), y no en función del respaldo que le ofreciera un sindicato (5% y 13%). Más aún, querían que los candidatos se presentaran en listas abiertas (57% en 1980), y que en caso de ser elegidos, se les pudiera destituir en cualquier momento (75%), lo que reducía sustancialmente el control que los sindicatos pudieran ejercer sobre ellos.

5º Los trabajadores juzgaban críticamente la actuación de los sindicatos en sus empresas durante los últimos doce meses. Un 64%

en el caso de CCOO y un 65% en el caso de UGT calificaban su actuación como regular o muy pobre.

Según Pérez Díaz (1993:321,322) esta visión "instrumental" podría explicar así el dato aparentemente paradójico de que la afiliación a CCOO y UGT (y a los sindicatos en general) disminuyese bastante a finales de los años 70 y principios de los 80, a la vez que el apoyo en las elecciones sindicales a estos dos sindicatos aumentase también de forma importante. El no afiliarse, o dejar de pagar las cuotas, puede ser compatible con el mantenimiento de un grado importante de apoyo porque la afiliación no es un requisito para que los trabajadores españoles puedan seguir obteniendo los bienes y servicios que prestan los sindicatos, y no porque los rechacen como representantes. Si éstos fueran percibidos como meros instrumentos de negociación, cabría obtener sus servicios a cambio de un apoyo muy limitado: bastaría con votar a sus candidatos en las elecciones para los comités de empresa, y apoyarles en sus tareas de negociadores de los convenios. Por el contrario, una actitud muy diferente sería la de quien considerase a los sindicatos como portadores de un proyecto de transformación del orden social, o como expresión de un valor de solidaridad de clase, y se identificara con ellos como modo de manifestar su compromiso con tales proyectos o tales valores, en pocas palabras, quienes demandasen "incentivos de identidad". Pérez Díaz (1993:328,329) concluye así que las relaciones entre los trabajadores y los sindicatos españoles eran complejas en cuanto identificación de intereses y orientaciones; donde los primeros estaban dispuestos a valerse de los segundos e incluso a depositar en ellos un grado limitado de confianza, y donde los segundos tenían una capacidad limitada para ejercer liderazgos sobre los trabajadores, conformar sus demandas y movilizarles.

Ahora bien, ¿qué estrategia era la más adecuada para que un sindicato atrayese a la mayoría de los trabajadores españoles? ¿Se obtenía su apoyo mayoritario mediante una estrategia de presión y movilización en los centros de trabajo o, por el contrario, negociando lo más centralizadamente posible? Pérez Díaz (1993:322,323 y 358,359) y Führer (1996:258) defienden que aquella que mejor se adecuase a las actitudes y valores "moderados" de la mayor parte de

los trabajadores, los cuales no ponían en cuestión el orden institucional existente[64]. Para estos autores se explica así que la UGT avanzase terreno frente a CCOO, pues la primera cultivó a partir de 1978 una imagen de moderación realista y de adaptación al orden de cosas existentes, mientras que CCOO optó por una imagen de movilización, de encarnar proyectos de transformación del orden de cosas existente, del marco de las relaciones industriales, o de la fórmula de gobierno (Pérez Díaz 1993:322,323). En pocas palabras, las preferencias de la mayoría de los trabajadores hacía que los líderes sindicales tuviesen que llevar a cabo "una estrategia moderada eficaz" para no perder su apoyo. Los trabajadores aceptaban el objetivo del saneamiento de la economía, con moderación salarial incluida, o la "renuncia al uso frecuente e intenso del instrumento de la huelga" (Pérez Díaz 1993:359).

---

[64] Pérez Díaz (1993:296-324) llegó a esta conclusión a partir de los siguientes datos. Sólo una pequeña minoría (entre el 13 y el 19%) de trabajadores deseaba tener voz decisoria en asuntos importantes en las empresas, como la política de ventas, o de inversiones, de la empresa. El 72% pensaba que los sindicatos deberían esforzarse por conseguir el mayor nivel salarial posible, pero que también debían esforzarse por aumentar la producción de la empresa, sin formar parte de la dirección (estando sólo el 2% a favor de la participación de los sindicatos en la dirección de la empresa). La visión de la empresa como un equipo, y no como un escenario donde se desarrollara un conflicto fundamental, era compartida por el 56% de los trabajadores (el 49% en 1978; y el 57% en 1984). La actividad sindical que preferían era la encaminada hacia la negociación colectiva (62% en 1980; y 69% en 1984), y la provisión de servicios profesionales (56%, y 58% en el 84), antes que en la presión al gobierno (12%; y 9%); hacia objetivos de moderado poder sindical dentro de la empresa; y hacia la consideración de la huelga como un instrumento que debía ser regulado (64% en 1980; 73% en 1984), y considerado como un último recurso, subordinado a las negociaciones (77% en 1980, 91% en 1984). Dos de cada tres trabajadores respondieron que deseaban vivir en una sociedad semejante a aquellas en la que ya vivían, y sólo uno de cada tres aludió a una sociedad de tipo socialista. También consideraba que otras respuestas dadas por los trabajadores mostraban que hacía 1980 estaban satisfechos con el nivel de las contribuciones de los empresarios en cuanto a salarios, seguridad en el empleo, condiciones de trabajo, trato y oportunidades de voz.

Tener opiniones y preferencias ideológicas "moderadas" no excluye, sin embargo, apoyar estrategias "radicales" de presión en busca de las mayores ganancias materiales posibles si se dan las condiciones para ello. Recordemos, por ejemplo, al sindicalismo de Hoffa que vimos en el capítulo quinto. Este dirigente sindical tenía unas preferencias ideológicas y morales más bien "conservadoras", que desde luego no le impedían afirmar:

> "Everybody who writes about me seems amazed that I call (the running of a union) a business, instead of a crusade or something. Well, it is a business. We're not labor statesmen here. We're not humanitarians or longhairs. Look, what do you hire us for? Is it to throw a picnic for you? Is it to study the European situation? *Or is it to sell your labor at the top dollar*?" (Sloane 1991:146, mía la cursiva).

Independientemente de cuál sea la conclusión sobre las preferencias políticas de los trabajadores españoles, todo parece indicar que sí que querían que los sindicatos les garantizasen y mejorasen su nivel de vida de la mejor forma posible. Ahora bien, igualmente se ha mantenido que la concreción de la demanda por garantizar y mejorar el nivel de vida depende, entre otras cosas, de la situación económica en que se encuentre el país (Lange 1984; Scharpf 1992). En situaciones de crisis económica, esta demanda se traduciría en una estrategia que contribuyese a que no empeorase la situación económica y peligrase la seguridad en el empleo, lo cual sería el caso si se abusara de la huelgas o si las reivindicaciones salariales fueran excesivas, como afirman Lorite (1994:262) y Führer (1996:255). ¿Era este el caso de España a principios de los ochenta? ¿Cuáles eran las preocupaciones de la mayoría de los trabajadores españoles a finales de la década de los 70 y primera mitad de los 80? Todo parece indicar que era la estabilidad en el empleo. Preguntados sobre lo que deseaban a la hora de elegir un trabajo, el criterio más elegido fue la seguridad en el empleo, antes que el contenido más o menos interesante del trabajo, el componente educativo, la paga, el prestigio, o la posibilidad de promoción (41% de los obreros destacó la seguridad en el empleo como el factor más importante en la

elección). Otros datos refuerzan la opinión de que a principios de los años ochenta los trabajadores valoraban la estabilidad de sus empleos. Preguntados por sus preferencias entre empresas grandes y pequeñas, y entre empresas públicas y privadas, los obreros expresaron claramente sus preferencias por las grandes empresas (51%), frente a las medianas y pequeñas (26%), justamente por la mayor seguridad en el empleo ofrecido por las grandes (51%); de la misma forma expresaron su preferencia por las empresas públicas (36%) frente a las privadas (19%) y un 38% se mostró indiferente; aunque sólo el 14% trabajaba en empresas públicas, siendo de nuevo la razón principal de su preferencia por la empresa pública la estabilidad en el empleo (Pérez Díaz, 1993:299-300).

Sin embargo, las condiciones económicas cambiaron en España a mediados de 1985. El consumo privado tras años de estancamiento creció alrededor de un 2% en 1985 y un 3,6% en 1986. La inflación bajaba a un 8,3% a finales de 1986 y a menos del 5% a mediados de 1987. En el verano de 1985 España entraba en un ciclo expansivo que duraría hasta principios de 1992 y cuyo techo se alcanzó a finales de 1988, con un crecimiento anual del PIB del 5,5% en términos reales. Finalmente, el empleo total empezaría a crecer a mediados de 1985 y el desempleo inició su descenso en términos relativos en el primer semestre de 1986. ¿Afectó este cambio de la situación económica a lo que pedían los trabajadores?

Preguntados en 1988 por la concertación social, un 50% de los trabajadores consultados se declaraba partidario de ésta, un 33,2% se mostraba indeciso e indiferente y sólo un 16,8% de los trabajadores consultados no se declaraba partidario[65]. Ahora bien, la pregunta tal como se formuló en ningún momento ligaba concertación social a moderación de las demandas económicas. Es decir, el deseo pactista de los trabajadores españoles podía englobar también un deseo de

[65] Véase el estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas, 1989, pág. 25. Si bien este estudio advertía un cierto descenso en la proporción de personas que apoyaban los Pactos Sociales, pues en 1986 el número de personas que los apoyaba se había situado entre un 58% y un 60% de los encuestados, según datos del Instituto IDES correspondientes a diversos estudios realizados en 1986 (CIS 1989:25).

obtener más "bienes privados"[66]. De hecho, los trabajadores que se mostraban partidarios de la concertación pensaban que sus condiciones económicas era el principal asunto que debía plantearse y negociarse en este tipo de acuerdos sociales (un 55,9% de ellos, un 55,0% en el caso de los que tenían intención votar a UGT y un 55,9% en el caso de los que tenían intención de votar a CCOO). En segundo lugar colocaban "negociar las condiciones de trabajo" (47,6%), en tercer lugar la negociación de la jornada laboral (20,6%) y en cuarto lugar la participación de los trabajadores en la empresa (12,1%). Es importante señalar que "adoptar medidas contra el paro" sólo era el principal asunto que debía negociarse en los acuerdos sociales para un 8,1% de los trabajadores (un 8,2% en el caso de los trabajadores con intención de votar a CCOO y un 9,0% en el caso de UGT). Por último, la antigua demanda de la seguridad en el empleo estaba en séptimo lugar (con un 3,3% de apoyo entre el total de los trabajadores) (CIS 1989:40). Estaba claro, la mayoría de los trabajadores querían pactos, pero para negociar salarios, no para adoptar medidas contra el paro; y no temían ya tanto por sus puestos de trabajo[67].

Es decir, considero que justamente esa actitud instrumental de la mayoría de los trabajadores hacia los sindicatos permitía que ese

---

[66] Recordemos que por bienes "privados" se entiende incrementos de salarios, reducción de la jornada laboral y mejores condiciones de trabajo (Lange y Ross 1990).

[67] Finalmente, para confirmar que el deseo pactista no entraba en contradicción con deseos de mejoras salariales, los datos muestran que preguntados los trabajadores sobre los objetivos de los sindicatos (y no ya sobre metas de los trabajadores en general) un 42,5% ponía tanto en primer como en segundo lugar representar bien los intereses económicos de los trabajadores en los pactos económicos con el Gobierno y las organizaciones empresariales. Un 38,6% "procurar que la empresa no se hunda para no perder el puesto de trabajo", un 36,4% "ocuparse de mejorar las condiciones de trabajo", un 22,6% "ocuparse de negociar buenos convenios colectivos con la empresa", un 15,9% "esforzarse por ir aumentando la participación de los trabajadores en la gestión de la empresa", un 12,6% "mantener buenas relaciones con la empresa", un 11,5% "concienciar y organizar a los trabajadores para luchar por un tipo de sociedad distinta de la actual", etc (CIS 1989:96).

traspaso de apoyos obreros de CCOO hacia UGT fuese reversible si, por alguna razón, los trabajadores cambiasen su valoración de qué estrategia era más eficaz para maximizar su bienestar[68]. Así, cuando la economía estaba creciendo a buen ritmo, un radicalismo en las acciones que reportase a corto plazo una mejora material (salarios y condiciones de trabajo) sería entonces la estrategia que conseguiría atraer mayor número de apoyos, independientemente de que los trabajadores pudiesen no identificarse con los objetivos últimos proclamados por ese sindicato[69]. Luego la estrategia de radicalismo relativo de CCOO en demandas políticas y económicas a finales de la década de los 70 y principios de los 80 (en concreto de 1979 a 1981 y, de nuevo, desde 1983) podría no ser adecuada porque los trabajadores no querían lo primero, y no era el momento para lo

---

[68] El dirigente de CCOO Julián Ariza sostuvo durante una entrevista con el autor mantenida el 18-7-97.

"Al final tuvimos que aceptar el ANE, por razones más bien políticas, porque estaba lo del golpe de Estado y tal. Cosas que rechazamos en el AMI luego las tuvimos que aceptar en el ANE por esas razones y luego... lo único que yo creo que esta actitud [combativa], con sus inconvenientes, tuvo sus ventajas. UGT apareció como muy entregada a la política del PSOE y, claro, éste, en los primeros años de gobierno, con Boyer a la cabeza, era una política de ajuste brutal con agresiones incluso a UGT. Yo me acuerdo que no se firmó el Acuerdo Interconfederal del 84 por la cerrazón de Boyer, que rompía un poco el modelo por el que UGT había apostado. Entonces, al final, apareció como que UGT era cómplice de todo ese período de ajuste. Y entonces CCOO ahí, su papel de sindicato más combativo le dio prestigio".

[69] Un dirigente de CCOO hacía así la siguiente apreciación, indudablemente para evitar que los votantes del PSOE que preferían a CCOO en las elecciones sindicales se pasasen al sindicato socialista:

"Ante la tentación permanente de UGT de politizar las elecciones y dividir a los trabajadores mediante postulados ajenos al movimiento sindical (sindicato socialista-sindicato comunista), con la intención de trasladar al campo sindical el voto político, hemos de conseguir que las elecciones sindicales sean otra cosa. Que los trabajadores voten una línea sindical, que elijan a los hombres y mujeres *que mejor defiendan en lo concreto sus intereses*, los más representativos" (*Gaceta Sindical*, núm. 19, junio de 1982, pág. 13, mía la cursiva).

segundo[70]. Pero tan pronto como la situación económica cambiase, la estrategia de radicalismo económico de CCOO (esto es, conseguir los mayores incrementos salariales posibles) se convertiría en la táctica ganadora, incluso si los trabajadores seguían siendo políticamente moderados y, por tanto, más acordes con el ideario de la UGT.

En resumidas cuentas, la actitud instrumental de los trabajadores, sus preferencias por bienes materiales, el contexto de sindicalismo electoral y competitivo, y un contexto económico cambiante hacía que los sindicatos españoles tuviesen que estar muy pendientes de las expectativas de los trabajadores y ajustar sus tácticas a sus demandas si no querían verse electoralmente castigados[71]. En última instancia, con esta clase de trabajadores y estos contextos institucionales, es la situación socioeconómica la que decide qué estrategia sindical es la correcta para ganar el apoyo mayoritario de los trabajadores. El hecho de que la mayoría de los trabajadores pudieran ser políticamente moderados, y no pretendiesen poner en cuestión el orden sociopolítico existente, no implica que una imagen de moderación y unas prácticas sindicales moderadas sean la táctica que siempre consigue maximizar su apoyo[72].

2.1.3 El desarrollo de la lucha intersindical

---

[70] Aunque aquí habría que aclarar que sí lo era si tal estrategia se refería sobre todo a no permitir fácilmente cierre de empresas, sobre todo públicas.

[71] La encuesta del CIS, realizada en 1988, señalaba que un 45% de los trabajadores españoles consideraba que la situación económica era entonces mejor o mucho mejor que a la muerte de Franco (frente a un 33% que opinaba que estaba peor o mucho peor). Igualmente un 37,2% pensaba que su situación económica personal mejoraría, frente a un 30,9% que se mantendría más o menos igual y sólo un 13,5% que temía que empeorase (CIS 1989:53).

[72] Hay que señalar, sin embargo, que esta expansión económica probablemente no afecto a todos los sectores por igual y que, por tanto, mientras que en algunos los trabajadores sí que mantendrían su preocupación por conservar su puesto de trabajo (lo que en el sector privado y en las PYMES limita la estrategia de presión) otros estaban interesados por sus condiciones económicas. Esto lo veremos un poco más tarde.

Ahora bien, ¿hasta qué punto CCOO y UGT llevaron a la práctica su lucha por la "primacía"? A finales de los años 70, cuando España se encontraba en medio de una importante crisis económica, y después de un frágil intento de unidad de acción sindical, la UGT y CCOO desarrollaron estrategias divergentes. Babiano Mora y Soto Carmona (1994:227) sostienen que la división entre las dos principales centrales sindicales, CCOO y UGT, se halló asociada "a la competencia por captar votos en las elecciones sindicales y más en general, por disputarse base sindical y predicamento entre los trabajadores"[73].Mientras que la UGT decidió así cooperar con la organización de la patronal (CEOE) para fijar asuntos relativos a las relaciones laborales así como se pusieron de acuerdo en fijar los incrementos salariales de acuerdo a la inflación prevista y no la pasada, CCOO, por el contrario, mantuvo una estrategia más de presión con respecto a la negociación colectiva. Pero, a principios de los años 80, y en medio de la crisis económica, la mayoría de los convenios colectivos se firmaron según lo acordado en el AI firmado por la UGT y la CEOE. CCOO fracasó en su intención de superar en las empresas los topes salariales acordados por su rival sindical. Esto, junto a otras razones más de índole política como fue el intento de golpe de Estado de febrero de 1981 que ponía en evidencia la fragilidad de la recién instaurada democracia por la cual CCOO había apostado desde el inicio, llevó a este sindicato a firmar el ANE junto a la UGT, CEOE y el Gobierno de UCD[74]. Dicha actitud más

[73] Estos autores señalan que había además otros motivos para la quiebra de la unidad de acción entre CCOO y UGT, pues "la división también tuvo que ver con las diferentes concepciones de la acción sindical mantenidas por las dos grandes centrales en esos años. Se trata, por un lado y simplificado, de lo que puede denominarse *sindicalismo de gestión*, más proclive a la negociación y al pacto y llevado a cabo por la UGT. Por su parte, CC.OO, se orientó hacia un *sindicalismo de participación*, en el que la presión reivindicativa y la confrontación ocuparon un espacio mayor" (Babiano Mora y Soto Carmona, 1994: 228, las cursivas son todas del autor).

[74] Según me confirmó Julián Ariza durante una entrevista con el autor mantenida el 18-7-97.

moderada, aceptando incluso bandas que fijaban la previsión de inflación como tope superior, se mantuvo durante los primeros meses del Gobierno del PSOE (firma del AI de 1983)[75], pero para mediados de ese año estaba claro que el Gobierno y la UGT no podían contar con la moderación de CCOO.

[75] En 1983 CCOO firmó un acuerdo interconfederal con UGT y la CEOE, aceptando una banda situada entre el 9,5% y el 12,5%.

TABLA 13.Incrementos salariales pedidos, pactados en la negociación colectiva, inflación prevista e inflación media anual (1983-1991[76])

	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991
UGT	9,5-12,5	6-8	5,5-7,5	8,0	7,0[77]	6,0	7,0	9,0	9,0
CCOO	9,5-12,5	10,0	9,0	10,0	7-8	6,0	7,0	9,0	9,0
N.C.	11,4	7,8	7,9	8,2	6,5	6,4	7,8	8,3	8,0
$IPC_{p.}$	12,0	8,0	8,0	8,0	5,0	3,0	3,0	5,7	5,8
$IPC_{m.}$	12,2	11,3	8,8	8,8	5,3	4,8	6,8	6,7	5,9

N.C. Incremento salarial pactado en la negociación colectiva.

$IPC_{p.}$ Previsión de inflación.

$IPC_{m.}$ Inflación en media anual

Fuente: *El País*, varios años.

[76] Para la negociación de 1992 las ejecutivas de ambos sindicatos dieron libertad a sus organizaciones para pactar los incrementos salariales (*El País* 9-11-91).

[77] Para 1987 CCOO pidió desde un principio incrementos salariales de entre el 7 y el 8%. UGT anunció en otoño de 1986 un incremento superior del 5%, y luego ya a principios de 1987 una banda entre el 5-7%, para al final fijar su objetivo de incremento en el 7%.

En primer lugar entre 1984 y 1987, CCOO pidió sistemáticamente incrementos salariales por encima de las peticiones de la UGT (véase tabla 13). La rivalidad entre estas dos confederaciones sindicales también se trasladó a sus actuaciones y manifestaciones públicas, no coordinando ni prestándose apoyo mutuamente en sus actuaciones. Así UGT y CCOO celebraron los primeros de mayo separados (desde 1983 a 1988 inclusive). La UGT firmó convenios y acuerdos en solitario (como fue el caso del AES y de los acuerdos sobre los Presupuestos Generales para 1987) y rechazó participar en huelgas y movilizaciones convocadas por CCOO[78], incluso aunque estuviese de acuerdo en el asunto en cuestión (como su oposición a la permanencia de España en la OTAN)[79]. Ambos sindicatos llegaron al extremo de pedir investigaciones sobre las acciones del rival (como la investigación de CCOO sobre el posible favoritismo laboral en empresas públicas, 12 de mayo de 1986) o a acudir a los tribunales por diferentes acusaciones (por favoritismo en Astano, 14 de mayo de 1986; fraude electoral, 12 y 14 de noviembre de 1986; o reparto del patrimonio sindical, 25 de septiembre de 1986). Finalmente, la lucha intersindical también consistió en duras acusaciones públicas y denuncias recíprocas. Los ugetistas, por ejemplo, acusaban a CCOO de ser la correa de transmisión del PCE y de estar condicionados por los avatares de este partido político. Así explicaban que CCOO hubiera apoyado los Pactos de la Moncloa y rechazado posteriormente el AMI o se opusiera al Gobierno socialista, "mientras se [mostraba] conciliadora hasta extremos no habituales en su dinámica en el sector privado" (R.33C.UGT.1983:39)[80]. Los dirigentes de CCOO, por su

[78] El caso más llamativo fue el rechazo del sindicato socialista a secundar la huelga general convocada por CCOO en 1985 contra la reforma de las pensiones, si bien se habían manifestado juntos en su contra.

[79] Incluso celebraron por separado actos en recuerdo de sindicalistas caídos durante el franquismo (*El País* 11-3-1985).

[80] En el repertorio de descalificaciones la dirección ugetista acusaba a CCOO de romper la unidad de acción (5 de agosto de 1983), de poner en peligro las empresas públicas (17 de octubre de 1983), de estalinismo (11 de noviembre de 1983), de hacer una campaña antisocialista (6 y 12 de diciembre de 1983), de manipular a los

parte, denunciaban que la UGT no tenía la necesaria independencia frente al Gobierno socialista[81]. También les acusaban de confundir las elecciones sindicales con las políticas para acercar el voto sindical al político[82], y de tener una acción sindical "entreguista"[83] [84].

---

trabajadores (como los del personal de conducción de Renfe, 3 de enero de 1984, o los parados agrarios, 4 de febrero de 1984); de realizar ensayos de huelga general en todo el país (15 de febrero de 1984), de actuar con HB (16 de febrero de 1984), de promover elecciones en empresas inexistentes en Cataluña (12 de octubre de 1986). Todas estas fechas son del día en que apareció la noticia en el diario *El País*.

[81] La denuncia de que la UGT estaba subordinada al Gobierno del PSOE se produjo antes incluso de que este partido hubiera ganado las elecciones legislativas de 1982. CCOO lo presentó como un motivo para abstenerse de votar a la UGT. Ellos, por el contrario, eran un sindicato unitario, pluralista e independiente:

"Los Sindicatos deben apoyar a la izquierda, pero sin confundirse. Su misión es defender los intereses de los trabajadores, mañana, como hoy, ayer. Si hubiera un Gobierno con, o el del PSOE, en un país en crisis y con un Partido que se inclina cada vez más del lado de la moderación socialdemócrata; una UGT hegemónica defendería al Gobierno PSOE. Si es cierto que los trabajadores debemos apoyar a los partidos obreros y soluciones de progreso, también es cierto que los Sindicatos debemos siempre defender los intereses de los trabajadores, evitando el peligro de que los Sindicatos se confundan con los Gobiernos o los partidos en el poder o fuera de él" (Marcelino Camacho, *Gaceta Sindical*, núm. 19, junio de 1982, pág. 11).

En el núm. 20 de *Gaceta Sindical*, julio/agosto de 1983, pág. 25, afirmaban:

"[S]i no tenemos mayores grados de unidad, al menos unidad de acción, entre CC.OO y UGT, es porque UGT está jugando más desde hace tiempo a llevar al PSOE al poder, al Gobierno, que hacer una política sindical unitaria, entre los sindicatos de clase.

[82] Alfons Labrador (secretario de Información y Publicaciones de la CONC) afirmaba que la UGT intentaba "politizar las elecciones y dividir a los trabajadores mediante postulados ajenos al movimiento sindical (sindicato socialista-sindicato comunista), con la intención de trasladar al campo sindical el voto político" *Gaceta Sindical*, núm. 19, junio de 1982, pág. 13. Véase también el núm. 20 de *Gaceta Sindical*, julio/agosto de 1982, pág. 25.

[83] "[L]a política de la Federación de Hostelería de UGT viene siendo una política nada decidida a hacer frente a esta reestructuración del sector por la patronal y nada firme en dar alternativas de solución que defiendan la estabilidad en el empleo, el

Esto era la política que llevaban a cabo las cúpulas dirigentes de UGT y CCOO, pero, como han señalado Fishman y Mershon (1993), sería un error identificar necesariamente las preferencias de las cúpulas dirigentes con las de los líderes sindicales en las empresas y las de los trabajadores. Muchas veces los líderes de empresa se han opuesto, desentendido o reinterpretado libremente la política sindical oficial de sus respectivos sindicatos (Fishman y Mershon 1993:77)[85]. Creo igualmente equivocado que pueda haber una disociación total entre las actitudes e intereses de las bases, los líderes de empresa y los líderes de la cúpulas. Por un lado, cuesta pensar cómo podrían ser precisamente líderes de empresa si sus acciones se opusieran o ignorasen constantemente las expectativas de las bases, sobre todo cuando, como hemos visto, son refrendados por éstas. Por otro lado, si existiese una disociación total entre las políticas de las cúpulas sindicales y el comportamiento en las empresas, la capacidad de interlocución de la cúpulas con el gobierno y la patronal quedaría

---

mantenimiento de las plantillas y los derechos de los trabajadores" (*Gaceta Sindical*, núm. 20, julio/agosto de 1982, pág. 28).

[84] La dirección de CCOO también acusaba a la UGT de haber obtenido el favor del Gobierno en las elecciones sindicales (de 1982, 9 de marzo de 1983; de 1986, 16 de octubre de 1986) y de ser apoyada descaradamente por el Gobierno socialista (1 de diciembre 1983, 26 de abril de 1984). Pedía explicaciones por las reuniones entre la UGT y el Gobierno (2 de junio de 1984), acusaba de favoritismo en la contratación de personas cercanas a UGT (9 de febrero de 1984). Denunciaban que los acuerdos firmados por UGT suponían pérdida de derechos adquiridos (como en el acuerdo sobre la construcción, 8 de mayo de 1986, o en el de cítricos, 20 de noviembre de 1986). Presentaron protestas por la presencia del secretario general de la UGT, Nicolás Redondo, en foros internacionales (como en una reunión con empresarios y sindicatos comunitarios, 13 de noviembre de 1985). Acusaba igualmente a UGT de capitalizar en su favor los Presupuestos Generales del Estado para 1987 (19 de septiembre de 1986), de fraude en las elecciones sindicales en distintas localidades (6 de noviembre de 1986). Todas estas fechas son del día en que apareció la noticia en el diario *El País*.

[85] Sería un error también identificar las opiniones de los líderes sindicales en las empresas con la de los trabajadores. Para el caso español Fishman encontró que los líderes sindicales españoles eran políticamente más radicales que la media de los trabajadores españoles.

seriamente dañada al mostrarse inútiles (Lange y Ross 1990). Por tanto, puede haber una disociación entre estos tres niveles pero sólo hasta cierto punto, pasado el cual la "crisis de representación" pone en peligro la existencia de los dos niveles superiores provocando una readaptación de estrategias para recuperar representatividad (Regini 1984). Desafortunadamente son casi inexistentes los estudios realizados sobre la competencia intersindical en el ámbito de las empresas. Existe, sin embargo, un estudio sobre la negociación colectiva en España donde se muestran posibles efectos de esta competencia en las empresas. Abellán, Felgueroso y Lorences (1997) concluyen que la estructura salarial por categorías muestra una dispersión mucho menor en los convenios provinciales que en los interprovinciales. Su explicación consiste en que los sindicatos españoles tienen gran interés por comprimir la estructura salarial al competir por el votante mediano[86]. Esto ocurre sobre todo en la negociación provincial al encontrarse los negociadores más próximos a su base electoral (Abellán, Felgueroso y Lorences 1997:256).

Ahora bien, la estrategia de presión de CCOO a los empresarios y al Gobierno comenzada a mediados de 1983 parece que no se acaba de entender desde los supuestos del capítulo anterior, pues España no comenzó a salir de la crisis económica hasta mediados de 1985. Al respecto hay que señalar que el modelo teórico indica simplemente la estrategia que conseguiría atraerse a más trabajadores, no que los agentes sociales lo sepan y, por tanto, actúen en consecuencia. Pero si así ocurriera (que los agentes sociales se "equivocasen"), fracasarían en sus objetivos. Este argumento podrían explicar el comportamiento de CCOO durante el primer período de enfrentamiento (desde 1979 hasta la firma del ANE por parte de CCOO)[87], pero tras los ascensos de UGT en las elecciones sindicales

---

[86] Esto también explicaría, sin embargo, que las derivas salariales sean mayores en el ámbito provincial que a escala interprovincial, y sobre todo para las categorías más altas. Estos autores encontraban que las remuneraciones pactadas en convenios provinciales e interprovinciales coincide prácticamente con las percibidas para los trabajadores menos cualificados (Abellan, Felgueroso y Lorences 1997:255).

[87] Julián Ariza sostenía durante una entrevista mantenida con el autor el 18-7-97 que:

de 1980 y 1982 cuesta pensar que los miembros de CCOO no fuesen conscientes de que elegían la estrategia equivocada para un período de crisis económica.

Sin embargo, en primer lugar, la propia dirección de la UGT evaluó en documentos internos que el "radicalismo" de CCOO había sido a menudo exclusivamente verbal[88]. Su comportamiento fue más confrontacionista en el sector público, y con objeto de impedir el cierre de empresas o expedientes de regulación de empleo, no incrementos del salarial real[89]. Hay que señalar así que cuando

---

"El sindicalismo de CCOO era asambleario, muy combativo, muy interesado en una intervención sobre el poder público, sobre el poder político para regulaciones desde el punto de vista legislativo que satisficiera los intereses de los trabajadores, por eso hicimos la gran campaña en contra del Estatuto [de los Trabajadores]. No firmamos el AMI porque consideramos que eso eran pactos sociales. Es decir, teníamos un componente en aquel entonces donde yo creo que más allá de la innegable capacidad combativa... pues no medíamos bien los efectos de la crisis sobre su plasmación sociológica, es decir, sí hablábamos de un Plan Nacional de Solidaridad frente a la crisis en el 78, pero a la hora de la verdad, nuestras reivindicaciones... Yo me acuerdo que cuando se firmó el Acuerdo Marco Interconfederal dijimos que lo íbamos a superar en las fábricas. Yo creo que no medimos bien nuestras fuerzas porque no medíamos bien el efecto que la crisis estaba produciendo en los trabajadores. Pero nosotros éramos el sindicato combativo, el sindicato que buscaba soluciones y aparecía UGT, el negociador, más burocrático. Yo creo que las diferencias eran evidentes: el modelo sindical, de relación sindical. Lo que creo es que, nosotros, -y lo digo por tercera vez- sobrevaloramos nuestra capacidad de incidir. Y al final el Acuerdo Marco Interconfederal salió adelante".

[88] "La aceptación del marco de negociación fijado en el AES por UGT y la patronal y de hecho, por CC.OO., ha supuesto que el proceso negociador haya sido, salvo casos puntuales, muy tranquilo, con poco coste para los trabajadores y con muy poca conflictividad (...). La estrategia defendida por UGT ha sido la mayoritariamente aceptada por los trabajadores y podemos asegurar que, de acuerdo con los resultados finales, también ha sido aceptada por CC.OO." (Memoria de Gestión de la Secretaria de Acción Sindical con registro de entrada por la FEJP el 30-3-87, pág. 12, op. cit.).

[89] Según Babiano y Soto Carmona (1994:221-230) el "radicalismo salarial" de la segunda mitad de los 70 fue así dando paso a conflictos por expedientes de crisis y regulación de empleo. Además, la destrucción de empleo afectó a importantes

autores como Scharpf (1992:233) señalan que en épocas de crisis económicas los trabajadores tenderán a moderarse, se están refiriendo explícitamente a sus demandas salariales. La propia Secretaria General y la de Acción Sindical de la UGT se felicitaban así de que CCOO no hubiese podido poner en aprieto su estrategia de moderación[90], pues tras poner en el AES "el nivel de exigencias en un nivel político claramente obstruccionista por lo irracional de algunas peticiones y por el mismo contenido de algunos temas que querían insertar (Política de Endeudamiento Exterior, Reforma Agraria Integral, Entrada en la CEE, etc.)" más tarde tuvieron que "firmar la mayoría de los convenios en el marco del Acuerdo Económico y Social" (G.34C.UGT.1986:118-22). En segundo lugar, no hay que olvidarse de que, al fin y al cabo, la Unión General de

---

bastiones de la militancia obrera donde se pudo desarrollar esta movilización de "resistencia" gracias a que contaban con la suficiente concentración de mano de obra, de organización y tradición sindical. Por el contrario, el cierre de muchos pequeños talleres no fue contestado por los trabajadores de sus plantillas. Y aun así, no parece que la estrategia de confrontación por la que optó CCOO fuese totalmente adecuada incluso en el sector público. El estudio de Wozniak (1991) sobre el movimiento obrero y la reconversión industrial del acero y el sector naval llevada a cabo durante la primera legislatura socialista muestra que los comités de empresas más directamente afectados ni estaban satisfechos con la actitud negociadora de la dirección ugetista, la cual consideraban demasiado transigente, ni con la actitud confrontacionista de la dirección de CCOO por razones opuestas. En el caso del acero la proporción de delegados por las listas de la UGT en los comités de empresa que apoyaban a su Federación durante el proceso de reconversión pasó de un 80% a un 43% (y quienes no lo hacían aumentaron de un 20% a un 57%), en el caso de CCOO bajo de un 82% a un 32% el apoyo a su Federación (y el rechazó aumentó de un 18% a un 68%). En el sector naval la evolución fue similar, la proporción de delegados ugetistas que apoyaban a su Federación pasó de un 83% a un 33% (y quienes no lo hacían aumentaron de un 18% a un 67%), en el caso de CCOO bajó de un 87% a un 47% (y el rechazo pasó de un 13% a un 53%). En ambos sectores los comités de empresa tomaron iniciativas de presión y negociación que contravenían las directivas de las Federaciones de Industria de UGT y CCOO.

[90] Para la UGT, CCOO suscribió convenios colectivos "dentro de los criterios defendidos por la UGT, hecho del que pueden extraerse conclusiones importantes" (R.34C.UGT.1986:23).

Trabajadores volvió a ganar las elecciones sindicales de 1986 (con el 40,9% de los delegados frente a los 34,5% de CCOO) aunque perdió apoyos en grandes empresas y/o públicas (si bien globalmente la UGT ganó a CCOO en el total del sector público)[91].

Por tamaño del centro de trabajo: Según los datos del IMAC, UGT ganó a CCOO en las elecciones sindicales de 1982 en las empresas de menos de 100 trabajadores, entre 500 y 1000 trabajadores y en las de más de 5000. En 1986, según los datos del Ministerio de Trabajo, la UGT ganó a CCOO en las empresas de menos de 100 trabajadores y CCOO en todos los tramos por encima de 100. La UGT perdió la primera posición en las empresas de entre 500 y 1000 trabajadores, y más de 5000 trabajadores que tenía en 1982.

Por sectores económicos: En agricultura, ganadería, caza, extracción y transformación de minerales no energéticos e industria química gano CCOO en 1986 cuando en las anteriores elecciones lo había hecho la UGT. Sin embargo en 1986 en otras industria manufactureras y en la construcción ganó la UGT cuando en 1982 lo había hecho CCOO. En la industria transformadora de metales y mecánica de precisión ganó CCOO en 1982 y de nuevo en 1986. En energía y agua, y en el sector servicios, en general, la UGT mantuvo su primera posición de 1982.

En tercer lugar, el estudio teórico visto señala que la UGT no se equivocó de estrategia en el sector privado al aceptar la contención salarial de 1979 a 1986, pero que sí lo haría si continuaba con ella, sobre todo entre aquellos trabajadores que podían mejorar su posición con una estrategia de presión. A partir de esa fecha lo conveniente para no perder apoyos entre los trabajadores era una estrategia de presión frente a los empresarios y el gobierno que combinase peticiones de incrementos salariales para aquellos sectores en expansión con resistencia a expedientes reguladores de empleo en aquellas medianas y grandes empresas, sobre todo públicas, que continuasen en crisis.

---

[91] Véanse los resultados de las elecciones sindicales del capítulo quinto.

Hemos visto que en la segunda mitad de los años ochenta la mayoría de los trabajadores ya no temía como antes por sus puestos de trabajo, por lo que éste no sería el motivo principal de las movilizaciones, y que deseaban que los sindicatos les defendiesen bien sus intereses económicos así como que negociasen sus condiciones económicas[92]. Un sindicato en favor de la negociación centralizada tendría que convencer a los trabajadores de que aceptasen renuncias a corto plazo a cambio de mayor gasto social y empleo. Pero igualmente tendría que convencerles de que ambas variables estaban ligadas (es decir, que no era posible que todos los trabajadores consigan mayores salarios reales, mayor gasto social y

[92] Babiano y Soto Carmona (1994:221-230) constatan que al modificarse la situación económica a partir de 1986 se produjo un cambio en los motivos de los conflictos así como en sus protagonistas. A partir de entonces se trataba de mejorar la calidad del empleo, la reducción o eliminación de las horas extraordinarias, la reducción de jornada, el adelantamiento de la edad de jubilación, la ampliación del poder adquisitivo, bienes todos ellos "privados". Por otro lado, si antes eran los trabajadores de la industria los principales protagonistas de los conflictos laborales, a partir de mediados de la década son los trabajadores de los servicios públicos. Igualmente, los resultados de la Encuesta de Relaciones Laborales de Cataluña desarrollada durante 1990 (realizada a 144 empresas de los sectores de químicas, metal, textil y alimentación) señalaban que el mayor nivel de conflictividad se daba entre las empresas de entre 250 y 500 trabajadores, y entre las empresas en que aumentaba la plantilla. La conflictividad aparecía en mayor medida en aquellas empresas consideradas por los trabajadores como económicamente (en cuanto a salarios, primas, etc.) muy incentivadoras. Los motivos más citados para los conflictos eran aquellos relacionados con diversos aspectos salariales (el 48,2%, seguido de ocupación/contratación con un 27,8%). Parece que la situación de recesión o de dificultades económicas (caída de la producción y de las ventas, expediente de regulación de empleo, etc.) parecía constituir un freno para la conflictividad, particularmente en la modalidad de huelga (únicamente en el 5% de los centros de trabajo que se hallaban en situación de recesión productiva se había recurrido a la huelga, ahora bien, estos establecimientos recurrían a "otras formas de lucha" en un 40%). Igualmente se señala que la existencia de un convenio de empresa o de centro de trabajo aparece como factor condicionante de conflictividad, pues el 41,4% de los centros de trabajo con convenio de sector frente al 54% de centros con convenio de empresa recurrió a diversas formas de lucha (Crespán y Falguera 1991).

empleo a la vez), y de que además el resto de trabajadores también aceptaría este intercambio (pues de lo contrario el intercambio se vendría abajo)[93]. Y todo ello con un sindicato rival que intentaba convencer a los trabajadores precisamente de lo contrario, de que el sindicato concertador era además una marioneta del Gobierno y de que éste último defendía a los empresarios antes que a los trabajadores[94]. Todo parece, por tanto, indicar que la estrategia de presión (aquella que consigue bienes en los centros de trabajo) para conseguir incrementos del salario real sería apoyada por un mayor número de trabajadores que una estrategia de negociación centralizada donde esos incrementos serían intercambiados por incrementos del salario social.

Esto sería especialmente cierto, en primer lugar, entre los trabajadores del sector público. Si bien se ha señalado anteriormente que una mayoría de trabajadores (42,5%) consideraba que los sindicatos debían representar bien los intereses económicos de los trabajadores, esta proporción era mayor entre los trabajadores del sector público (47,8%) que en el sector privado (un 40,7%)[95]. En

---

[93] E incluso de que no intenten maximizar su bienestar consiguiendo mejoras individuales y colectivas esperando que el resto de los trabajadores no hagan ellos.

[94] La encuesta del CIS (1989) señalaba que a la pregunta de "a quien procura favorecer más el actual Gobierno socialista" un 54,6% de los trabajadores consultados respondieron que a los empresarios, un 11,6% afirmó que a los trabajadores, un 11,2% que a ambos por igual, un 6,4% a sí mismos. A la pregunta de a quién creían que debería beneficiar más el Gobierno, un 62,8% respondía que a los trabajadores y un 32,7% a empresarios y trabajadores por igual. Nicolás Redondo afirmaba así durante una entrevista con el Presidente del Gobierno en junio de 1988:

"El fenómeno de irrupción generalizada de demandas, incluso impaciencias tiene un claro fundamento social. Imagen o realidad, parece que [el Gobierno] favorece especialmente a los empresarios, basculando en ellos la política" (carta-circular del Secretario de Acción Sindical del 10 de junio de 1988, op. cit.).

[95]

	Privado	Sector público
-Representar bien los intereses económicos...	47,8%	40,7%
-Mejorar las condiciones de trabajo...	42,7%	34,4%
-Procurar que la empresa no se hunda...	29,6%	41,7%

Fuente: CIS 1989:108.

segundo lugar, también en general los trabajadores del sector servicios, donde se creaba más empleo[96], tenderían a apoyar más una estrategia de presión, pues eran éstos a los que la contención salarial le hubiera supuesto un mayor coste de oportunidad[97]. Los datos de incrementos salariales parecen confirmar esta opiniones de los trabajadores (véase tabla 14). Los aumentos salariales pactados según convenios fueron entre 1981 y 1992 (salvo en 1986 y 1989) inferiores en el sector industrial que en el sector servicios. De hecho, los convenios en Industria fueron entre 1981 y 1993 inferiores a la media de los convenios salvo entre 1984 y 1986. El sector servicios tuvo incrementos superiores a la media de convenios entre 1981 y 1985, en 1987 y de 1990 a 1992. Así, de los años de expansión económica (de 1986 a 1992) los trabajadores que menos se pudieron aprovechar fueron los del sector industrial y los que más fueron los de la Construcción, seguido del Agrícola y Servicios[98].

TABLA 14.Aumento salarial pactado según sector de actividad en el total de convenios

Año	Total	Agrario	Indus.	Const.	Serv.

[96] Entre 1985 y 1990 la industria creo empleo neto a una tasa anual del 0,6%, la construcción alrededor del 2,1% y los servicios un 4,25%. En 1990 el 11,2% de la población ocupada se dedicaba a la agricultura, el 9,5% a la construcción, el 21,6% a la industria y el 50,5% al sector servicios, un 7,2% era "no clasificable" (*Anuario Estadístico de España, Año 1995*, Madrid:INE, 1996).

[97] Así, con respecto a la evolución de la situación económica personal de los encuestados para los siguientes tres o cuatro años, quienes más tendían a considerar que mejoraría eran los trabajadores de la Construcción (43,5%), seguidos de Servicios (38,2%), Industria (35,1%) y Agricultura (31,0%). Quienes más tendían a pensar que su situación personal iría a peor eran Construcción (14,3%), Agricultura (21,1%), Industria (9,8%) y por último Servicios (8,8%) (CIS 1989:54).

[98] Sin embargo, Raymond Bara (1992:48) encontró que entre 1970 y 1991 existió una evolución similar de los salarios monetarios por persona ocupada en Industria y en los Servicios. En el conjunto de los 21 años contemplados, el salario real en Industria creció a una media anual del 2,8%, y en los servicios esta tasa se situó en el 2,3%.

1982[1]	12,02	10,80	12,01	12,60	12,27
1983	11,44	10,02	11,38	11,30	11,81
1984	7,81	7,38	7,85	7,72	7,89
1985	7,90	7,74	7,95	6,98	8,03
1986	8,23	7,80	8,41	8,28	8,15
1987	6,51	6,60	6,32	6,39	6,70
1988	6,38	6,44	6,34	6,56	6,35
1989	7,77	8,06	7,68	8,51	7,60
1990	8,33	8,82	8,11	8,77	8,34
1991	7,96	8,28	7,61	8,47	8,07
1992	7,27	7,46	7,12	7,70	7,24
1993	5,48	5,68	5,42	6,28	5,31
1994	3,62	4,63	3,66	3,43	3,43
86-92[2]	8,74	8,91	8,59	9,11	8,74

Fuente: Boletín de Estadísticas Laborales, núm 127, noviembre 1995.

1 Sin datos de convenios de Cataluña, de ámbito provincial y de ámbito inferior.

2 Media de aumentos salariales en los años de "expansión económica", de 1986 a 1992.

La propia dirección de la UGT recogió que no todas sus federaciones estatales de industria tuvieron el mismo crecimiento salarial entre 1986 y 1991[99]. Las federaciones con incrementos salariales por encima del promedio de todas las demás fueron: FETE[100] (9,3%), FSP (9,2%), Alimentación (8,1%), FTT (8%), Transportes (7,9%), Hostelería (7,8%). Es decir federaciones que en su mayoría son del sector servicios. Las federaciones que estuvieron por debajo del promedio fueron: FEMCA[101] (7,7%), Comercio

[99] Véanse el "Informe Final de la Negociación Colectiva de 1986", adjunto a la carta-circular del Secretario de Acción Sindical, Apolinar Rodríguez, a las F.F. y U.U., fechada en Madrid a 4 de marzo de 1987, Caja: FEJP/ 515, FLC; el "Balance de la Negociación Colectiva de 1987", adjunto a la carta-circular del Secretario de Acción Sindical, Apolinar Rodríguez, fechada en Madrid a 14 de marzo de 1988, Caja: FEJP/516, FLC; el "Balance de la Negociación Colectiva de 1989", Secretaría de Acción Sindical, 13 de octubre de 1989, Caja: FEJP/517, FLC; y los nos 86 y 96 de *Información Sindical*.

[100] Educación.

[101] Construcción y madera.

[FETESE] (7,6%), CEOV[102] [FES] (7,5%), Textil [FIA] (7,4%), Minería [FIA] (7,3%), FEBASO[103] [FES] (7,2%), FETIQUE[104] [FIA] (7,1%), METAL (7,1%). Es decir, las federaciones del sindicalismo clásico (metal, construcción, textil, químicas, minería) están todas por debajo del promedio de crecimiento nominal del salario entre 1986 y 1991.

Hay que señalar además que UGT y CCOO tenían más competencia por parte de otros sindicatos y listas de trabajadores en Servicios que en Industria. El porcentaje mayor de representantes de los "no afiliados" y de otros sindicatos se encontraba en educación, instituciones financieras y seguros, y servicios prestados a las empresas. En general los sindicatos CCOO y UGT obtuvieron mayor número de delegados en las elecciones sindicales de 1986 en la Construcción (87% del total), seguido de Industria (81%) y finalmente en los Servicios (76%)[105]. En las elecciones sindicales de 1990 el escenario se repitió: CCOO y UGT obtuvieron mayor número de delegados en la Construcción (con el 92%), Industria (87%) y finalmente Servicios con el (81%)[106].

Desagregando por sindicatos la realidad parece que variaba ligeramente. La UGT era "más fuerte" en el sector servicios que en el industrial (aunque en ambos era el sindicato más votado), mientras que CCOO era más fuerte claramente en el sector industrial. Sin embargo, en el sector servicios UGT y CCOO competían con otros sindicatos (USO, nacionalistas, independientes etc).

TABLA 15.Resultados de las elecciones sindicales por ramas productivas, tanto por ciento sobre el total de delegados

	1986	1990

[102] Artes gráficas.

[103] Banca y otros servicios.

[104] Química, energía y afines

[105] Véanse *Elecciones Sindicales, 1986*, vol. 1, pp. 133, 134. Madrid: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

[106] Véanse *Elecciones Sindicales, 1990*, vol 1, pp. 211, 212. Madrid: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

	UGT	CCOO	OTROS	UGT	CCOO	OTROS
Agrario	42,3%	42,6%	15,0%	49,7%	39,9%	10,3%
Indust.	41,0%	40,2%	18,8%	43,8%	42,8%	13,2%
Const.	48,4%	38,4%	13,2%	48,3%	43,8%	7,9%
Servicio	44,3%	31,9%	23,6%	45,4%	35,9%	18,5%

Fuente: *Elecciones sindicales 1986*, vol. 1, Madrid: Ministerio de Trabajo; y *Elecciones sindicales 1990*, vol. 1, Ministerio de Trabajo.

Parece así que, sin embargo, la contención salarial no hubiera tenido tales costes en términos de apoyos entre los trabajadores de la Industria, o al menos hubieran sido menores, pues aquí la preocupación de los trabajadores tendía más a ser todavía asegurar su puesto de trabajo, ni la situación económica del sector, con mayor competición internacional, favorecía que los empresarios pudieran trasladar los incrementos salariales a los precios[107]. Según el Informe del CIS, comparando anteriores encuestas con la de 1988 se percibía que "algunos de los sectores tradicionalmente más activos del sindicalismo (como los empleados en la Industria y la Construcción) parece que son los que ofrecen una evolución más conservadora hacia posiciones 'realistas' o 'temerosas', según la interpretación que se haga de estos datos" (CIS 1989:104). Pero aquí la estrategia de confrontación continuó consistiendo principalmente en el rechazo a expedientes reguladores de empleo y cierre de centros de trabajo.

2.2. Los resultados electorales y el cambio de estrategia para la negociación colectiva en la UGT

Ahora bien, ¿podemos estar seguros de que la dirección ugetista decidió cambiar su política salarial a raíz de los resultados de las

[107] En la industria ya se empezó a perder empleo neto a partir de 1991 (*Anuario Estadístico de España, Año 1995*, Madrid:INE, 1996).

elecciones sindicales[108]? ¿No sería porque eran conscientes de que España había salido de la crisis económica y deseaban que los trabajadores se aprovechasen de la nueva situación?[109] ¿Hasta qué punto en la cúpula ugetista se dieron estas reflexiones? Al fin y al cabo, los dirigentes de la UGT justificaron su nueva política salarial porque, como hemos visto, la moderación salarial que les pedía el gobierno ya no era necesaria. En segundo lugar, consideraban, como veremos con más detenimiento en el siguiente capítulo, que además serviría para fomentar la demanda y así crear empleo. Finalmente,

---

[108] Son varios los autores que han señalado los efectos que tuvieron las elecciones sindicales en el comportamiento de la UGT como Zaragoza y Varela (1988:70), Roca Jusmet (1991:368-375), Paramio (1992:534), Babiano Mora y Soto Carmona (1994:228) etc. La propia CCOO se explicaba así el cambio de actitud de la UGT (*Gaceta Sindical*, núm. 85, junio de 1990, pág. 6):

"Conviene recordar, ahora que es un hecho de nuestra cotidianeidad, que la actual unidad de acción se explica en buena parte por el desenlace de las EE.SS. [elecciones sindicales] del 86. Aunque UGT obtuviera mayor número de delegados, por los resultados que CC.OO. logró en la mediana y gran empresa, donde resultó neta vencedora, fueron muchos los que estimaron que UGT había perdido un apoyo considerable en las empresas de implantación tradicional del sindicalismo, a causa de su acrítica postura frente a la política del Gobierno (...). Entonces, UGT inició una reflexión que posibilitó más tarde que nuestros esfuerzos históricos por consumar una política de unidad de acción se vieran coronados por el éxito. Más aún, cuando las EE.SS. del 87 en la función pública confirmaron la tendencia al elegirse un mayor número de delegados de CC.OO. que de UGT".

[109] "[E]sta organización, la UGT, lleva desde 1980 a 1986 aplicando una política de moderación salarial. ¿Para qué? Para hacer las empresas mucho más competitivas. Luego desde 1980 a 1986, hemos llevado una política de moderación salarial, para lo cual hemos sacrificado los intereses de los trabajadores en activo a cambio de incrementos de los empresarios, mejora de alguna manera limitada, de una tasa de parados, etcétera. Lo que ocurre es que se ha llegado a una situación en la cual hay un crecimiento económico, hay una profunda rentabilidad de las empresas, y parece, según se dice, que las empresas españolas son las que más ganan en el conjunto de la OCDE, en función de su propia dimensión" (Intervención de Secretario General de UGT, Nicolás Redondo, en la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados, 26 de marzo de 1990).

porque se compensaría a los trabajadores de los sacrificios pasados durante la recesión económica.

Sin embargo, en sus demandas a favor de mejorar el nivel de vida de los trabajadores existe un claro sesgo a favor de que se produjese especialmente mediante el incremento de los salarios y de las transferencias del Estado (como pensiones o subsidios), es decir, de rentas *individuales*[110]. Este sesgo encaja bien con la necesidad de ofrecer a sus votantes los mismos incrementos individuales que los que ofrecerían los otros sindicatos rivales.

Un segundo elemento que parece confirmar que los resultados de las elecciones sindicales de 1986 influyeron en el cambio de política salarial es la propia interpretación que hicieron los ugetistas de ellos. Antón Saracíbar[111] y Pedro Gil (1987:36-45)[112] se congratulaban de que la UGT hubiera incrementado en más de un 28% su número de delegados con relación a 1982 y de que hubiesen

---

[110] Esto quedó bien claro en "Jornadas sobre Negociación Colectiva" (documento adjunto a la carta-circular del Secretario de Acción Sindical del 6 de noviembre de 1987, op. cit.). Allí la UGT se planteaba que era necesario un crecimiento del consumo para el crecimiento de la economía y la creación de puestos de trabajo, ahora bien:

"[un] crecimiento nulo del consumo de los trabajadores (y de su ahorro) podría verse compensado por una mejora en el poder adquisitivo de las rentas no salariales; sin embargo, esto no parece lo más oportuno desde el punto de vista social en este momento, en el entorno económico actual y teniendo en cuenta los sacrificios anteriores de los trabajadores en materia de contención salarial. Es, en cualquier caso, inaceptable desde la óptica de nuestra Organización" (pág. 7).

Rechazaban igualmente que se pudiese limitar aumentos salariales a cambio de reducción impositiva (véase el documento "No a la sustitución del aumento salarial por la reducción impositiva", adjunto a la carta-circular del Secretario de Acción Sindical del 6 de noviembre de 1987, op. cit.). Lo mismo manifestaban en "El Recalentamiento de la Economía: una visión alternativa" (Madrid, a 8 de septiembre de 1989, pág. 6, Caja: FEJP/518, FLC) donde reafirman que era "positivo que las rentas salariales participen, al menos en una parte, en los beneficios del crecimiento económico, mejorando su poder adquisitivo".

[111] Antón Saracíbar era secretario de Organización de la UGT.

[112] El mismo análisis se puede ver en la Memoria de Gestión al 35º Congreso Confederal de la UGT, 1990, pp. 89-73.

conseguido la mayor concentración obtenida hasta la fecha por un sindicato español. Pero puntualizaban que su sindicato había cometido errores "tanto políticos como organizativos" en su acción sindical para hacer frente a la competencia de otros sindicatos[113]. Sostenían que se habían producido carencias en el trabajo sectorial, en las comarcas y en las empresas (particularmente en las medianas) así como una descapitalización de cuadros sindicales en las empresas públicas "al pasar éstos a ocupar cargos de responsabilidad en dichas empresas". En cuanto a la acción sindical, según estos autores, la UGT no había dejado bien claro que no había sido corresponsable de las decisiones que los gestores empresariales tomaban, e incluso creían que se podía haber producido una identificación entre la política sindical defendida por UGT y los planteamientos empresariales. Finalmente, en el caso concreto de sus relaciones con el Gobierno socialista, consideraban:

> "[L]a errónea apreciación de que la UGT haya sido corresponsable de ciertas decisiones o manifestaciones contradictorias del Gobierno, ha podido ser causa de reticencias o recelos a la hora de votar nuestras candidaturas" (Saracíbar y Gil 1987:47)[114].

Su valoración de que determinadas actuaciones del Gobierno les habían perjudicado electoralmente ya lo habían expuesto al final del

---

[113] Valoración que es recogida en la Memoria de Gestión al 35º Congreso, 1990, pp. 105-106.

[114] En una Memoria de Gestión de la Secretaría de Acción Sindical (con registro de entrada por la FEJP el 30 de marzo de 1987, pág. 17, op. cit.), se reafirmaban en su creencia de que ciertas declaraciones del Ministro de Economía y su apoyo a una ofensiva de la CEOE sobre la flexibilidad laboral habían tenido "efectos electorales perniciosos". Lo mismo sostendrían en su 35º Congreso:

> "Todas estas circunstancias [se refieren al incumplimiento de la tasa de cobertura por desempleo, el cuestionamiento de la tasa real de desempleo o la necesidad de flexibilidad del mercado de trabajo] marcaron negativamente la finalización del AES, incluso perjudicaron a U.G.T. en las elecciones sindicales" (G.35C.UGT.1990:314).

proceso electoral[115]. A la misma conclusión llegaron con respecto a las elecciones sindicales en la función pública celebradas en 1987[116]. Al mismo tiempo Antón Saracíbar y Pedro Gil reconocían que la UGT no había sabido "capitalizar" electoralmente las políticas de solidaridad globales defendida por ellos frente a las "políticas corporativistas que han sido defendidas por otros sindicatos, con indudable éxito electoral" (Saracíbar y Gil 1987:47). Parece así que en España las elecciones a comités de empresa de 1986 tuvieron sobre la UGT efectos similares a los producidos por las elecciones a la Seguridad Social de 1983 sobre la CFDT en Francia. Ambos sindicatos concluyeron que su identificación con el Gobierno, en vez de beneficiarles, les había perjudicado electoralmente y que, por tanto, hacerse corresponsables de las políticas del gobierno implicaba asumir unos costes que no les correspondían a ellos sino a los partidos políticos. En ambos casos los líderes sindicales concluyeron que había que cambiar de estrategia sindical[117].

---

[115] "Cada vez que un ministro habla en la APD [Asociación para el Progreso de la Dirección] perdemos votos; cada vez que se habla de las 27 medidas liberalizadoras, perdemos votos; cuando Cuevas se entrevista con el presidente del Gobierno, perdemos votos... Hay un problema de identificación. Nos identifican con las acciones del Gobierno o con las decisiones de los gestores públicos. Y nada más lejos de la realidad" (declaraciones del Secretario General de la UGT, Nicolás Redondo, recogidas por *El País* 18-12-86).

[116] Según Antón Saracíbar, secretario de Organización de UGT, "estas elecciones han sido más políticas que sindicales, porque CSIF ha recogido el voto corporativista y de derechas y CCOO el del descontento con la política del Gobierno". Añadió que el sindicato socialista no había logrado sus expectativas -entre un 30% y un 40% de delegados, según reconocían otros dirigentes- porque "los eslóganes de CCOO y CSIF coincidían en identificar a UGT con el Gobierno, con el patrón, y no hemos sabido responder ni diferenciarnos, aunque el Gobierno tiene que responsabilizarse y reflexionar, pues ha incumplido muchos acuerdos firmados con nosotros" (*El País* 9-1-88).

[117] Esta coincidencia parece que no se debió exclusivamente a condiciones institucionales similares, sino que la dirección de la UGT ya estaba de sobre aviso. José Luis Corcuera recordaba durante una entrevista con el autor mantenida el 10-10-96 que entre algunos dirigentes de la UGT hubo lo que él llama un síndrome "Edmond Maire" (líder de la CFDT) pues:

El resultado de estas elecciones sindicales servía a la dirección de la UGT para interpretar lo que querían los trabajadores y, por tanto, la acción sindical que habrían de realizar en adelante. Así, con respecto a lo primero, entendían que, por un lado:

"Parece un hecho que los asalariados españoles confirman una acción sindical basada en la reivindicación, la eficacia y en la tenaz exigencia en el logro de mejores condiciones de vida y de trabajo, tal como se ha señalado anteriormente y que se deben corresponder con la responsabilidad en las acciones y el rigor en las propuestas y planteamientos" (Saracíbar y Gil 1987:48).

E igualmente:

"[P]arece claro que los trabajadores se pronuncian nuevamente por un sindicalismo cotidiano, es decir, una acción sindical próxima y cercana al trabajador en concreto, que reivindique y satisfaga de manera *inmediata* las necesidades y resuelva las carencias que se detecten" (Saracíbar y Gil 1987:48, cursiva mía).

Por otro:

"[E]l movimiento sindical deberá plantearse el ofrecer una atención suficiente a las expectativas particulares que transciendan incluso los aspectos más directamente ligados al trabajo. Se abre así un vasto ámbito de acción sindical en la prestación de servicios que debería ser objeto de un análisis más detenido" (Saracíbar y Gil 1987:48)[118].

"Algunos [ugetistas] repetían miméticamente el libro de Edmond Maire que hizo en Francia, donde venía a decir que el Partido socialista francés podía seguir ganando elecciones para gobernar mientras la CFDT iba retrocediendo frente a otros sindicatos en Francia. Y aquí había una gran preocupación de que el costo de la política del Gobierno lo pagara, no el partido, sino el sindicato".

[118] Consideraban que había que estudiar así la oferta de servicios en gestión de las prestaciones de desempleo, la intervención directa en la formación profesional, los fondos complementarios de pensiones, el impulso a las actividades relacionadas con el ocio y el tiempo libre, los seguros individuales a través de la cuota de afiliado y las

Había que reforzar el trabajo en las empresas, en los sindicatos comarcales y en las Federaciones de Industria a través de los delegados y miembros de comités de empresa, y no exclusivamente en las instituciones[119].

Pero parece que también dedujeron que su política salarial tenía que adaptarse a las nuevas demandas de los trabajadores al hacerse conscientes éstos de la nueva situación de expansión económica. Esta valoración se lo comunicó el propio Nicolás Redondo al Presidente del Gobierno en el transcurso de una entrevista celebrada a principios de 1987[120]. Durante los años siguientes los dirigentes de la UGT se mantuvieron en esta convicción. En marzo de 1988 líderes ugetistas afirmaban:

> "La favorable coyuntura económica ha hecho nacer *un creciente sentimiento de que los peores momentos ya han pasado*, y, por ello, deberían aliviarse, al menos en parte, los sacrificios realizados por los trabajadores que son quienes han corrido con la parte más dura del proceso de ajuste. *Este sentir social* no ha sido entendido

---

posibles entidades financieras como aportación alternativa al ahorro del trabajador (Saracíbar y Gil 1987:49)

[119] "Los órganos de dirección de la UGT, sobre todo los de las Federaciones de Industria, deben desarrollar un sindicalismo más pegado a la fábrica que a las instituciones. Las visitas periódicas a las empresas son insustituibles, lo mismo que el fortalecimiento de la militancia a niveles inferiores. (...) Un sindicalismo dedicado exclusivamente a estar presente en las instituciones, bien relacionado con los gestores de las grandes empresas, sean éstas públicas o privadas, está condenado al fracaso" (Saracíbar y Gil 1987:49).

[120] "Se asiste a un cambio en la situación. La recuperación económica ha calado en el tejido social, incluso desde declaraciones empresariales se plantean incrementos reales de salarios. *Hay una cierta impaciencia social, un rechazo a la aceptación de más sacrificios*. Desde nuestra propia práctica, desde la política emanada de nuestro XXXIV Congreso, resulta necesaria la mejora del poder adquisitivo aún sin abandonar la moderación salarial, aumentando el peso de las rentas salariales en la renta nacional" (carta-circular del Secretario General y del de Acción Sindical del 7 de enero de 1987 informando de una reunión entre Nicolás Redondo y Felipe González, op. cit., mía la cursiva).

> por una parte de los agentes sociales. Por un lado, el Gobierno ha insistido en su política de ajuste basada exclusivamente en la contención de los costes laborales, y particularmente los salariales. La patronal inmediatamente se alineó con la postura gubernamental que le era mucho más cómoda y favorable. Puestas así las cosas, el acuerdo marco [para 1987] se demostró imposible de conseguir, por ello se ha pasado a un proceso de negociación convenio a convenio, que supone un mayor coste para los trabajadores" (mías la cursiva).

E igualmente:

> "*Recogiendo el evidente sentimiento social como consecuencia de una ya más desahogada situación económica*, la UGT elaboró su estrategia negociadora, solicitando, dentro del objetivo de moderación salarial, unos incrementos salariales que supusieran aumento de los salarios reales, para que los trabajadores fueran poco a poco recuperando parte de los sacrificios salariales realizados. Para esto, era necesario que los aumentos salariales fuesen superiores a la previsión de inflación y, naturalmente, debía incluirse la cláusula de revisión salarial, como único método para salvaguardar de la evolución de los precios las ganancias de poder adquisitivo pactadas (Mía la cursiva)"[121].

De nuevo, en otra entrevista del Secretario General de la UGT con el Presidente del Gobierno a finales de la primavera de 1988, el dirigente ugetista afirmaba[122]:

> "El fenómeno de irrupción generalizada de demandas, incluso impaciencias, tiene un claro fundamento social. Imagen o realidad, parece que se favorece especialmente a los empresarios, basculando en ellos la política".

---

[121] Ambas citas en el "Balance de la Negociación Colectiva: 1987", adjunto a la carta-circular del Secretario de Acción Sindical del 14 de marzo de 1988, pp. 5, 6, op. cit. Véase también *El País* 26-5-87 y 6-6-87.

[122] Circular "Entrevista UGT-Presidente del Gobierno", enviada por el Secretario de Acción Sindical el 10 de junio de 1988, op. cit.

Lo mismo sostendrían en 1989[123]:

"La negociación colectiva en 1989 se sitúa inmediatamente después de un período de intensa movilización social, que culmina en el paro general del 14 de diciembre. En este contexto, *era evidente que los trabajadores esperaban un avance significativo de sus condiciones de trabajo a través de la negociación colectiva*, al tiempo que nuestro compromiso implicaba una actitud decidida en solidaridad con los parados, trabajadores contratados en precario y trabajadores más desfavorables en convenio" (mía la cursiva).

Finalmente, con objeto de controlar el efecto de las elecciones sindicales, y por tanto del comportamiento electoral de los trabajadores españoles[124], en la política salarial de la UGT podemos intentar comparar su política antes y después de las elecciones de otoño de 1986. Aquí nos encontramos con el problema de que la dirección de la UGT siempre defendió que practicaba la moderación salarial (esta cuestión la trataremos en el siguiente capítulo), por lo que hay que intentar aclarar en qué se concretaba dicha moderación. De cara a la negociación colectiva para 1986 la C.E.C. de la UGT decidió a principios de aquel año "respetar las pautas de referencia que allí [es decir, en el título II del AES] se establecen"[125], por lo que la UGT tendría en cuenta la previsión de inflación realizada por el Gobierno (establecida para finales de 1986 en el 8%) y se propugnaría una banda comprendida entre el 7,2% y el 8,56%. En las resoluciones de su 34º Congreso confederal, celebrado en abril de 1986, se mostraron bastante ambiguos con respecto a la cuestión de los incrementos salariales pues afirmaban que querían un aumento moderado del poder adquisitivo global "o, en su caso, el

---

[123] "Negociación Colectiva 1.989. Informe Semestral" documento adjunto a la carta-circular del Secretario de Acción Sindical del 31 de julio de 1989, op. cit.

[124] Por comportamiento electoral de los trabajadores españoles nos estamos refiriendo a su comportamiento en las elecciones a delegados de personal y comités de empresa.

[125] Carta-circular del Secretario de Acción Sindical, J.A. Saracíbar, a las F.F y U.U, fechada en Madrid a 8 de enero de 1986, Caja: FEJP/514, FLC.

mantenimiento del poder adquisitivo global de los trabajadores y de los pasivos y una mejora de las prestaciones y los servicios sociales asumidos por el Estado como mecanismo de redistribución de la riqueza y de sostenimiento de la actividad económica" (R.34C.UGT.1986:78)[126]. En septiembre, como vimos, influyeron en los Presupuestos para 1987 sin tener que llegar a un acuerdo salarial con los empresarios, aunque sí que se comprometieron a aceptar el cuadro macroeconómico del Gobierno como marco de referencia a la hora de fijar sus objetivos salariales[127]. A principios de octubre de

[126] En el capítulo quinto vimos cómo esta ambigüedad sobre si lo que se proponían eran mejoras del salario real o el mantenimiento del poder adquisitivo quedó igualmente reflejada en "La Propuesta Programática de U.G.T. ante las Elecciones Generales del 22 de Junio de 1.986" (op. cit.) y en el "Programa electoral del PSOE para las Elecciones Generales de 1986".

[127] Véase la Memoria de Gestión de la Secretaría de Acción Sindical con registro de entrada por la FEJP el 30 de marzo de 1987, pág. 17, op. cit. Sobre lo que acordaron el Ministro de Economía y el Secretario General de la UGT hay distintas versiones. El antiguo Ministro de Economía afirma así (Solchaga 1997:143):

"Después de algunas reuniones con Nicolás Redondo (UGT) y José Mª Cuevas (CEOE), en la que participó junto a mí el ministro de Trabajo (Manuel Chaves), se alcanzó un acuerdo informal como guía para la negociación en los salarios en 1987: éstos crecerían en el entorno del 5 por ciento, que era la previsión de aumento del IPC en diciembre de aquel año"

Matilde Fernández, a la sazón Secretaria General de la Federación de Químicas, declaraba en 1988 (entrevista de *El País* 13-3-88):

"Si no entendí mal a Nicolás, éste dijo que aceptó ese 5% en conversaciones privadas o que lo asumió, pero nunca en una conversación formal, y que luego las circunstancias le llevaron a rectificar. Esa es la respuesta que dio Nicolás Redondo al Comité Federal (sic)".

Pero, desde la UGT se afirmaba igualmente que en dichas negociaciones:

"no figuraba ninguna previsión ni sobre subidas salariales ni sobre evolución de la productividad (...). Si el Gobierno quería amarrar estrictamente la subida salarial lo hubiese tenido que exponer. Ello hubiese entrañado una negociación más intensa en septiembre pasado, en la que habrían entrado otras muchas variables como empleo o fiscalidad" (*El País* 8-4-87).

Por su parte, el documento que se les proporcionó a los secretarios de Acción Sindical de la UGT en una reunión celebrada el ocho de octubre de 1987 afirmaba que creían haber:

1986 la dirección de la UGT exponía que pretendía defender subidas por encima de la inflación prevista sin concretar la cifra (*El País* 5-10-86). Al mes siguiente, el Secretario General de la UGT anunciaba que su sindicato establecería como parte baja de la banda salarial para 1987 un incremento del 5% -la previsión de inflación para ese año- (*El País* 19-11-86). En diciembre de ese mismo año exponían que "el poder adquisitivo de los trabajadores no [podía] ser sometido a reducción" y pretendían un incremento salarial en el posible AI de 1987 superior al IPC con cláusula de revisión[128]. A comienzos de 1987, el Secretario General de la UGT, Nicolás Redondo, le exponía al Presidente del Gobierno, Felipe González, que resultaba "necesaria la mejora del poder adquisitivo aún sin abandonar la moderación salarial, aumentando el peso de las rentas salariales en la renta nacional"[129] y ya en febrero de aquel años afirmaban claramente que:

> "La política salarial de nuestra Organización para este año persigue un objetivo claro: obtener ganancias en el poder adquisitivo de los salarios"[130].

"logrado -mediante acuerdo con el Gobierno aunque éste no se instrumente formalmente por escrito- mejorar el contenido presupuestario del A.E.S. sin perjuicio de abordar la negociación colectiva en negociaciones posteriores con los empresarios".

Finalmente, Antonio Gutiérrez, dirigente de CCOO, afirmaba (en *Gaceta Sindical*, núm. 46, diciembre de 1986, pág. 7):

"[P]arece existir un preacuerdo desvelado por el propio presidente de CEOE, entre esta patronal y UGT. Consistiría en sujetar los salarios en torno al 5 por 100 en el 87 y al 3 por 100 en el 88".

[128] Véase "UGT, ante la Concertación Social para 1987", documento adjunto a la carta-circular del Secretario General y del de Acción Sindical del 17 de diciembre de 1986, pág. 8, op. cit.

[129] Carta-circular del Secretario General y del de Acción Sindical del 7 de enero de 1987, op. cit.

[130] Carta-circular del Secretario de Acción Sindical, Apolinar Rodríguez, a los Secretarios de Acción Sindical de las F.F. y U.U., fechada en Madrid a 10 de febrero de 1987, caja: FEJP/514, FLC.

El objetivo de subida salarial propuesta para 1987 sería así del 7%[131]. Es decir, parece que la concreción de ese incremento del salario real para la negociación colectiva se realizó transcurridas las elecciones sindicales. Sería difícil, por tanto, controlar su peso en la decisión de la dirección ugetista de terminar con la contención salarial frente a otros factores como la constatación de la consolidación del crecimiento económico.

Hay ciertos datos, sin embargo, que sugieren que antes de las elecciones sindicales de 1986 la dirección de la UGT no estaba tan interesada en conseguir dicho incremento de dos puntos del poder adquisitivo para los trabajadores. Así, la dirección de la UGT no había pedido para los colectivos que dependían de los PGE, cuyos incrementos se fijaron antes de las elecciones sindicales de 1986, el aumento que luego reclamó para los trabajadores con convenios colectivos, cuya negociación comenzó tras celebrarse dichas elecciones. Mientras que aceptó una subida media de las pensiones del 5% -y del 5,6% para los funcionarios- para el resto de asalariados pidieron, si había acuerdo con la patronal, una banda del 5 al 7% y, si no lo había, del 7%, por lo que si la UGT hubiera pedido en la negociación colectiva con los empresarios el incremento que había aceptado para pensionistas y funcionarios, éste habría sido similar al que reclamaba el Ministro de Economía.

Es importante recalcar que esta diferencia entre lo que se pide para pensionistas y funcionarios y lo que se pide para los trabajadores sujetos a convenio sólo aparece en esta ocasión[132]. La dirección de la UGT para 1983 negoció una banda salarial para los trabajadores que iba del 9,5 al 12,5%, para los pensionistas le pareció bien una subida entre el 13% y el 16,02% y para los funcionarios del 12,5% (*El País*, 1-

[131] Vid. supra.

[132] La UGT había intentado que su práctica sindical siguiese el principio igualitario de pedir más para todos con un cierto sesgo hacia los que consideraba más débiles, pero en principio sus demandas de incrementos salariales no variaban si se trataban de trabajadores del sector privado o público, funcionarios o pensionistas (otra cuestión es que luego su pretensión se pudiese conseguir en la práctica, pues dependía tanto de la fuerza de presión de los sindicatos como de la resistencia del empleador público o privado).

2-83). Para 1984, parece que los dirigentes ugetistas aceptaron pedir menores aumentos salariales para los funcionarios, pues la banda acordada por la UGT iba del 4,5% al 8,5%, mientras que en la negociación colectiva con los empresarios pidieron finalmente una del 6 al 8%[133]. La subida media de las pensiones aceptada con UGT para ese año fue del 9% (*El País*, 11-11-83). Para 1985, volvieron a pedir lo mismo para todos, banda para la negociación colectiva del 5,5 al 7,5%, incremento salarial para los funcionarios en el centro de la banda del 6,5% (más un 0,25%, *El País*, 29-9-84) y aumento medio de las pensiones del 7% (*El País*, 6-10-84). Para 1986, no hubo acuerdo entre el Gobierno y la UGT en cuanto a la subida de funcionarios y pensiones. Para 1988 pidieron un 6% en la negociación colectiva con los empresarios y para los funcionarios y pensionistas (si bien luego en las negociaciones con el Gobierno aceptaron bajar a un 5,5%). Para 1989, 7% para la negociación colectiva, 7,63% de subida media para los pensionistas, 6,6% para los funcionarios. Para 1990, 9% para la negociación colectiva, 8-9% para los funcionarios y pensionistas. Para 1991, pidieron un 9% en la negociación colectiva, lo mismo que para el resto[134].

Parece que esta preocupación de la dirección de la UGT a la hora de fijar su política sindical por las preferencias que expresasen los trabajadores en las elecciones sindicales se mantuvo posteriormente, incluso habiendo comenzado ya la unidad de acción con CCOO:

---

[133] Si bien José Luis Corcuera, Secretario de Acción Sindical de la UGT por aquel entonces, había admitido que eran aceptables subidas reales inferiores al IPC previsto si esa pérdida era compensada con incrementos en la contrapartidas sociales, por lo que consideraba que las mejoras alcanzadas en la mesa del empleo permitían a la UGT aceptar incrementos en línea con las recomendaciones del Gobierno socialista: 6,5% (*El País* 26-11-83). Parece, pues, que la dirección de la UGT cambió de opinión con respecto a los incrementos salariales en la negociación colectiva una vez que los sueldos de los funcionarios ya habían sido negociados.

[134] "Negociar una subida salarial para 1991 [de los empleados públicos] que suponga una mejora del poder adquisitivo equivalente a la del resto de los trabajadores" (carta-circular del Secretario de Acción Sindical, Apolinar Rodríguez, a las F.F. y U.U., fechada en Madrid a 22 de octubre de 1990, caja: FEJP/520, FLC).

"Entre la 1ª fase de negociación con el Gobierno y una posible 2ª fase, la negociación colectiva destaca prácticamente como la única tarea básica de la acción sindical en las próximas semanas. A pesar del proceso precongresual, las federaciones tienen que centrar su actividad en los convenios. Es más, en los foros de debate de los congresos extraordinarios y otros encuentros resultaría muy útil informar y orientar sobre el alcance de la negociación colectiva. Los convenios de 1.990 constituye (sic) la gestión viva para las elecciones sindicales próximas" (suyo el subrayado)[135].

Los riesgos que representaba para la UGT la moderación salarial que le pedía el Gobierno socialista, sobre todo entre unas determinadas clases de trabajadores, fue la razón que llevó a rechazar cualquier clase de acuerdo (tripartito o bilateral, formal o discreto) que limitase su autonomía en las relaciones laborales[136], por mucho

---

[135] Carta-circular del Secretario de Acción Sindical, Apolinar Rodríguez, a las F.F y U.U., fechada en Madrid a 16 de marzo de 1.990, caja: FEJP/520. FLC.

[136] En julio de aquel año afirmaban:

"El encaje macroeconómico, sus cifras, son aspiraciones sometidas a coyunturas y aleatoriedades que deben estar al servicio de otros objetivos más importantes. Los cuadros macroeconómicos son puntos de referencia, pero en ningún caso pueden constituirse en el marco esencial que configure un modelo social. (...). No vamos a caer (...) en la fatuidad de pretender que nuestro sistema de casar las cifras macroeconómicas era el técnicamente único y verdadero. Pero, al menos, *este primer semestre 87 nos permite decir sin ambages que nunca un conjunto de cifras macroeconómicas pueden constituir un marco único y verdadero que condicione la dinámica social*. (...) Esta importante convergencia de voluntades, para que finalmente todos los interlocutores sociales compartan un modelo de concertación ambicioso y viable como el que hemos propuesto, no puede empañarse con intento de *constreñir la concertación a un cuadro macroeconómico* orientativo que fundamentalmente debe servir al gobierno en su necesidad de programación económica" (Carta-circular del Secretario de Acción Sindical del 31 de julio de 1987, pág. 8, op. cit., mías las cursivas).

Igualmente en octubre de aquel mismo años explicaban:

"[H]ubo acuerdos para los años 1980, 1981, 1982, 1983, 1985 y 1986. En cambio, no fueron posibles en 1984 y 1987 *por el empeño gubernamental y empresarial en mantener una política salarial restrictiva*" (Documento titulado "La

que el Presidente del Gobierno le ofreciese negociar "las cuentas del Reino". De ahí que hiciesen tanto hincapié en que "el contexto en que en la actualidad ha de producirse la concertación es sustancialmente diferente", por lo que "[l]as circunstancias descritas [consolidación del sistema democrático y recuperación económica] han llevado al sindicato a proponer un modelo de negociación distinto y cualitativamente más profundo basado en acuerdos bipartitos entre el gobierno y los sindicatos" y "acuerdos sindicatos-empresarios"[137], así como que la concertación social tuviese contenidos en parte diferentes[138]. Como afirmaba un dirigente ugetista:

"Los sindicatos hoy por hoy están en situación de aguantar. Han demostrado que pueden conseguir sus objetivos sin acuerdo o con él" (*El País* 16-7-87).

Ahora bien, hay que hacer hincapié en que la dirección de la UGT se informaba del estado de opinión de los trabajadores con respecto a las diferentes estrategias de los sindicatos en función de los resultados electorales más que por otras fuentes, de tal forma que, aunque la economía había estado creciendo alrededor del 3% a partir del tercer trimestre de 1985, hasta que no se dieron los resultados de las elecciones sindicales, no cambiaron su política salarial.

---

negociación colectiva en España desde el punto de vista de la Unión General de Trabajadores", fechado en Madrid a día 20 de octubre de 1987. Caja: FEJP/515. FLC, mía la cursiva).

[137] Vid. supra., pp. 6-11. Igualmente, en la Memoria de Gestión al 35º Congreso explícitamente ligaron el cambio de contenidos de la concertación en función del contexto. Según ellos la concertación social se quebró (a) tanto por la cerrazón del gobierno en mantener una posición sobre salarios, inflación, empleo, etc, irreal y regresiva en muchos puntos como (b) *un cambio de la situación que exigía plantear la concertación sobre otras bases* (G.35C.UGT.1990:12).

[138] *Información Sindical*, núm. 64, octubre de 1988.

3. Conclusiones: los contextos sindicales, la coyuntura económica y la colaboración solidaria

Hay que rechazar que fueran cuestiones referidas a las ventajas de una negociación colectiva descentralizada o a los incumplimientos de acuerdos anteriores por parte del Gobierno socialista lo que llevó a la dirección ugetista a no aceptar la reanudación de la concertación social practicada hasta entonces. Ni tampoco fueron las políticas económicas comprendidas en ellos, pues las había aceptado en el último acuerdo global de septiembre de 1986 y posteriormente insistirían en que el Gobierno socialista tenía la obligación de llevar a cabo una política "progresista" independientemente de que ellos llegasen a acuerdos con los empresarios. La aceptación o no de la contención salarial, y por tanto de la coordinación económica, por parte de la UGT no se explica ni por la política económica ni por la política social que el Gobierno lleve a cabo. Se contesta así una de las preguntas que suscitaba el caso español con respecto al abandono de esta clase de coordinación. Habíamos planteado en el primer capítulo que su quiebra en el sur de Europa podría explicarse porque los sindicatos careciesen de las condiciones necesarias para llevarla a cabo, o bien porque los gobiernos socialistas no hubiesen correspondido con las clásicas políticas económicas de los socialdemócratas del norte de Europa. La experiencia española parece sugerir, sin embargo, que el cambio de estrategia económica (y por tanto los factores que la explican) no afectó al destino de la coordinación económica en España (el otro sindicato, CCOO, sólo la había aceptado intermitentemente). Es decir, incluso si el Gobierno socialista hubiera aplicado desde 1982 una decidida política expansiva del tipo keynesiano para salir de la crisis y ésta hubiera tenido éxito en términos de crecimiento económico y creación de empleo, tan pronto cómo se hubieran obtenido estos dos resultados, la dirección de la UGT habría abandonado igualmente la contención salarial con el argumento de que tal contención era ya innecesaria y de que era hora de que produjese una redistribución de la renta nacional vía salarios. Como se discutió en el primer capítulo, las renuncias a

incrementos del salario individual incluso cuando se salía de la crisis económica y aumentaban los beneficios empresariales se buscaban tanto en una estrategia keynesiana como en las de oferta. Igualmente, dado que la dirección de la UGT hizo hincapié en que el Gobierno socialista estaba obligado en momentos de expansión económica a incrementar el gasto social independientemente de que ellos pactasen con los empresarios, no hay bases para afirmar que una política que hubiera llevado la tasa de gasto social en España a la media europea habría servido para garantizar la contención salarial a modo de intercambio. Todo parece indicar, pues, que los factores que explicaban la aceptación por parte de la UGT de la contención salarial estaban en otra parte.

En España fue la conjunción de una coyuntura económica expansiva con un entorno de competición intersindical lo que condujo a que la dirección ugetista valorase que su posición entre los trabajadores requería de una acción sindical basada en la reivindicación y en la obtención de mejoras inmediatas en las condiciones de los trabajadores como proponían sus rivales. Hay que señalar que ninguno de estos dos factores por separado es suficiente para explicar el cambio de estrategia que realizó la UGT. Así, la existencia de distintos sindicatos que compiten por la representación de los trabajadores no conlleva necesariamente que rechacen los pactos de contrapartidas, pues la UGT los aceptó con la oposición de CCOO de 1979 a 1982, y de nuevo en 1984 y 1986[139]. Por otro lado, la UGT continuó practicando la contención salarial en 1986 cuando la economía estaba ya repuntando, e incluso todavía en el verano de aquel año sus dirigentes aceptaron ajustar su política salarial a los objetivos macroeconómicos del Gobierno.

Pero a partir del cambio del contexto económico, apoyar la contención salarial suponía incurrir en dos clases de costes para un buen número de trabajadores. En primer lugar existía un coste de oportunidad, el aumento del salario no obtenido, sobre todo si los demás trabajadores sí aceptasen dicha congelación y la tasa de inflación no aumentase. En segundo lugar, se añadía el peligro de que

[139] En 1982 y 1983 CCOO también se comprometió en la contención salarial, y para 1984 no hubo acuerdo con los empresarios.

los demás trabajadores no contuviesen sus salarios, hubiese un repunte de la inflación y quienes hubieran aceptado la contención perdiesen incluso poder adquisitivo. La dirección de la UGT valoró así que los trabajadores españoles les castigarían electoralmente si no proporcionaban, al menos, los mismos beneficios que ofrecía CCOO. De ahí su cambio de política salarial así como su insistencia en que los "réditos" de los sacrificios realizados durante la crisis económica fuesen, al menos, mediante el incremento de las rentas *individuales*. Ahora bien, su nueva política salarial ponía en cuestión cualquier clase de acuerdo (tripartito o bilateral, formal o discreto) que les limitase su autonomía en las relaciones laborales por lo que hicieron hincapié en que el ciclo de concertación realizado durante la crisis había terminado y se tenía que abrir otro sectorial sin exigirles contrapartidas.

¿Cuáles fueron, por tanto, los factores que condujeron al establecimiento de la coordinación económica en España? La experiencia española pone de relieve que nos tenemos que fijar en los cálculos de costes y beneficios que realizan sus participantes en función de sus objetivos, características y contextos en los que tienen que actuar, y no sobre supuestas necesidades sistémicas de un capitalismo español posfordista que requiere de la negociación colectiva descentralizada o de recortes presupuestarios. Para que esta clase de concertación se celebrase tenía que *interesar* tanto al Gobierno socialista como a los agentes sociales.

En el caso del PSOE, no parece ser cierto que hacia 1987 les hubiera dejado de interesar la coordinación económica ni que esto explique, por tanto, el fin de esta clase de concertación social. Los autores que defienden esta interpretación explican la supuesta falta de interés de los socialistas por la mayoría absoluta de que gozaban en las Cortes y porque la concertación no era necesaria para la política económica emprendida desde 1982, o, por lo menos, no en momentos de expansión económica. Pero, como discutíamos en el primer capítulo, no es cierto que el abandono de las políticas keynesianas y la aplicación de una política económica preocupada por mejorar las condiciones de oferta de la economía conlleven necesariamente una pérdida de interés en los acuerdos globales de

contrapartidas. Por el contrario, como Scharpf ha planteado, dichos acuerdos lo serían incluso más todavía. En el modelo anterior de políticas expansivas *cum* moderación salarial, esta última era necesaria para controlar la inflación, mientras que el esfuerzo para crear empleo recaía en el impulso fiscal. Por el contrario, en el modelo de oferta *cum* moderación salarial, ésta serviría no sólo para luchar contra la inflación sino también para aumentar los beneficios empresariales y promover así la creación de empleo. La relevancia de la moderación salarial, por tanto, se mantiene o intensifica. La cuestión estribaba en cómo conseguirla. Es cierto que existían otras alternativas como endurecer las políticas fiscales y monetarias, pero esta opción al Gobierno socialista le parecía peor en términos de empleo y competitividad, como vimos en el capítulo cuarto. Aunque se atraerían capitales del exterior, tipos de interés más altos dificultarían que las empresas pidieran préstamos, harían más rentables otras formas de inversión especulativa, y se perdería competitividad en el exterior al revalorizarse la divisa nacional por esas mismas entradas de capitales.

Por otro lado, como la evidencia empírica muestra en España, los gobiernos tendrían mayor interés en conseguir alguna clase de acuerdo salarial con los sindicatos precisamente en momentos de expansión económica, sobre todo si de lo que se trataba era de moderar los salarios, pues es entonces cuando, en general, los sindicatos tienen mayor fuerza para presionar en los centros de trabajo. Por el contrario, en épocas de crisis económicas, "la moderación salarial deseable desde el punto de vista del Estado viene a coincidir con el comportamiento básico de los afiliados al sindicato [en nuestro caso de los votantes]" (Scharpf 1992:233)[140]. Se entiende así que Carlos Solchaga estuviese más incentivado a impulsar los

[140] Observamos así que mientras que en 1991 UGT y CCOO rechazaron la moderación que les pedía el ministro de Economía en el Pacto Social de Progreso (el salario medio negociado en los convenios subió un 8,0% mientras que la inflación de aquel año fue del 5,9%), en 1994 sí que la practicaron sin ser necesario ofrecerles contrapartidas (el salario medio subió un 3,5% mientras que la inflación fue del 4,7%). El PIB había crecido un 3,7% el año anterior a la propuesta del Pacto Social de Progreso, pero decreció un 1,2% en 1993.

pactos globales que su antecesor socialista en el cargo, Miguel Boyer[141]. Al contrario de lo que cierta literatura suele afirmar, no parece así que la lógica económica llevase al PSOE a dar por finalizada la concertación global de contrapartidas. Hemos visto igualmente que tampoco parece que este partido tuviese ninguna necesidad de enfrentarse con los sindicatos, y en concreto con su sindicato hermano, por motivos electorales[142]. Cierto es también que éstas son razones para buscar un acuerdo global, no para acuerdos sectoriales e independientes unos de otros, que es lo que quería la UGT, junto a CCOO, a partir de 1987. En conclusión, el PSOE intentó llevar a la práctica esa versión de la coordinación económica con políticas de oferta.

En el caso de la UGT su dirección evaluaba que las ventajas derivadas de la concertación serían mayores que los costes cuando existía un contexto económico de crisis. La dirección de la UGT pensaba obtener así, como reconocía, bienes para la organización (poder e influencia política) así como para los trabajadores (promesas de mayor gasto social y reducción del desempleo) e incluso para la sociedad en general (menor número de huelgas, reducción de la conflictividad en general, especialmente deseable en una democracia recién instaurada). Pero, independientemente de lo que consiguiesen alcanzar en sus negociaciones con el Gobierno, la negociación centralizada (aceptando la contención salarial) parecía ser la estrategia más adecuada para las relaciones laborales en situaciones de crisis económica porque entonces era más difícil el presionar a los empresarios o podría poner en peligro los puestos de trabajo. Es decir, los propios trabajadores serían en su mayor parte favorables a ésta estrategia (y votarían por el sindicato que la llevase a cabo) lo cual

---

[141] Si bien es probable que ésta no fuese la vía preferida de Carlos Solchaga, sí le parecía más factible que prohibir, por ejemplo, la negociación colectiva supraempresarial.

[142] Más tarde veremos como, de hecho, sólo se atrevieron a dar por definitivamente rota la relación de solidaridad con la UGT *una vez* que las elecciones europeas y legislativas de 1989 mostraron que se podían ganar incluso con su oposición. Pero aquello tampoco les llevó a concluir que había que buscar el enfrentamiento con los sindicatos como muestran los acuerdos alcanzados en 1990.

hacía que lejos de provocar tensiones entre la cúpula y los asalariados, era una estrategia que ayudaba al crecimiento de la organización[143]. La situación de crisis económica, como reconocieron algunos líderes de CCOO posteriormente, limitaba la posibilidad que tuviesen los trabajadores desafectos con estos acuerdos[144] de mostrar su descontento llevando a cabo una actividad en las empresas que los echase por tierra. La moderación de las demandas sindicales para la mayor parte de los trabajadores la tenían que llevar a cabo les gustase o no (como pudo ver CCOO en 1979 y 1980, y los dos sindicatos juntos durante 1984). Pero cuando los trabajadores consideraban que tenían posibilidades de incrementar sus salarios en términos reales, la UGT dejó de aceptar la contención salarial.

Todo parece indicar, por tanto, que la posibilidad de perder apoyos entre los trabajadores (esto es, sufrir una "crisis de representación") es la variable que explica que un sindicato español "pueda" o no practicar la coordinación económica. Es decir, el coste de sufrir una "crisis de representación" no compensa los posibles beneficios que se pueda obtener a cambio (por muy altos e importantes que fuesen éstos). Esta tesis se ha defendido para otros casos europeos (Regini 1984:130), pero es importante señalar que en el caso español, en un contexto de sindicalismo competitivo, no se evitaban las tensiones o la huida de las bases por la existencia de mecanismos de control, sino que la estrategia negociadora recogía el sentir mayoritario de los trabajadores de que era la mejor estrategia para preservar sus puestos de trabajo en una situación de crisis económica. Esto conduce a señalar que, si bien los costes de aceptar los acuerdos globales tenían que ser inferiores a sus beneficios para que el actor se decidiese a aceptar dichos acuerdos, esos costes *no*

---

[143] Mayores dudas, sin embargo, plantea la cuestión de la reconversión industrial, pues si por un lado se podría pensar que si la UGT hubiese unido sus fuerzas con CCOO, como hicieron algunos de sus delegados en los comités de empresa, al Gobierno socialista le hubiera resultado más difícil llevarla a cabo, por otro los datos tampoco parecen sugerir que una estrategia muy confrontacionista fuese bien recibida, por intransigente, entre los comités de empresa afectados.

[144] Ya fuese porque ideológicamente les repugnase, ya porque intentasen maximizar su bienestar individual.

eran constantes. Es decir, en la literatura española se ha dado mucho énfasis a cómo variaban los beneficios que recibían los sindicatos, deduciéndose así que si los sindicatos dejaban de aceptar la concertación, cuando lo habían hecho antes, era porque recibían menos a cambio. Pero hay que señalar que sus costes organizativos también variaban y, de hecho, aumentaban en momentos de expansión económica, que era precisamente cuando el Gobierno podría darles más a cambio. En otras palabras, el "saldo" (beneficios menos costes) pasaba a ser negativo a partir de 1987, no porque se redujesen los "beneficios", sino porque aumentaban los "costes" de la coordinación económica.

Los datos parecen mostrar, por tanto, que en España y durante los años ochenta, dada la facilidad que tenían los trabajadores españoles para mostrar su descontento con la contención salarial y apoyar a sindicatos que no la practicasen (con lo que, en cualquier caso, se volvería fútil alcanzar acuerdos a nivel centralizado), era el contexto económico lo que llevaba principalmente a que los actores emprendiesen la coordinación económica. Pero, porque dependía del contexto económico, esta coordinación no se podría mantener a largo plazo, sino sólo mientras durase la crisis económica. No parece así que en España se diesen las condiciones para mantener la contención salarial de una forma permanente, si es que se daban en algún sitio. Hay que señalar, como ya hizo Regini para el caso italiano, que la unidad de acción sindical entre la UGT y CCOO puede reducir, aunque no eliminar totalmente, los efectos de la competencia intersindical en momentos de bonanza económica. La propia eliminación de un período de cómputo de las elecciones sindicales desconcentra las campañas electorales para los comités de empresa. Ahora bien, éstas son condiciones que reducen los "costes" de negociaciones centralizadas para los sindicatos, pero para que éstos firmen tienen que ver igualmente "beneficios", lo cual depende de la voluntad y capacidad de las otras partes (empresarios y gobiernos) para ofrecérselos.

Hay que retener, sin embargo, que la coordinación económica podía celebrarse de formas diversas: quedar reflejados en pactos formales tripartitos, o entre los agentes sociales sin la presencia

explícita del Gobierno, etc. La preferencia de la UGT por una determinada forma concreta no puede ser explicada, sin embargo, por las razones anteriormente citadas. En concreto, su deseo o rechazo a los acuerdos globales formalmente tripartitos no pueden ser explicado por las elecciones sindicales de 1986. Recordemos que tras las elecciones legislativas de junio de 1986, pero antes de las elecciones sindicales de otoño de aquel año, la dirección de la UGT aceptó un acuerdo global de contrapartidas, pero que no fue tripartito. Tras las elecciones sindicales, ni tripartito ni global. La Unión General de Trabajadores elegía en este aspecto según la clase de relaciones que tuviese con el partido del Gobierno. Si mantenía relaciones de solidaridad con éste entonces prefería negociar con éste y con los empresarios por separado, mientras que si éste no era el caso, preferiría la negociación tripartita[145]. En conclusión, para la UGT eran principalmente los contextos económicos y de debilidad sindical los que decidían si negociar centralizadamente o no, mientras que el color político del Gobierno decidiría si se materializaba en un único pacto global tripartito o a dos bandas. Si el Gobierno fue quien eligió la política económica que iría en el acuerdo global, la UGT eligió, en un primer momento, la variedad de acuerdo global de contrapartidas (a dos o tres bandas). Pero, en cualquier caso, para la dirección de la UGT siempre estuvo claro que la coordinación económica, no era, desde luego, la vía principal para intervenir en política[146].

Finalmente, en la hipótesis desarrollada en el capítulo sexto sobre el comportamiento de los agentes sociales, los líderes sindicales anteponen el "bienestar" de su propia organización (en este caso mantener el apoyo de los trabajadores) a cualquier otra consideración. Pero, pareciendo ser ésta una preocupación siempre

---

[145] Sin embargo, si no era probable que el Gobierno se dejase influir fácilmente y el contexto económico era expansivo no preferiría la concertación global tripartita porque, sencillamente, ya no estaba interesada en más acuerdos globales de contrapartidas.

[146] Aunque, en determinadas circunstancias, como por ejemplo cuando el PSOE estaba en la oposición, sí que podría servir para intentar limitar el alcance de las políticas del Gobierno de UCD.

presente y condición *sine qua non* para aceptar acuerdos, de ahí no se deduce que sea además la única. En el caso concreto de la UGT parece que sus líderes, al igual que los de CCOO, tenían otras motivaciones además de la maximización de apoyos a sus organizaciones. De lo contrario, nos encontramos con las paradojas que ya vimos cuando tratamos la hipótesis de la protección de los afiliados. En primer lugar, no se entiende bien por qué la dirección de la UGT, además de rechazar negociar las "cuentas del Reino", a partir de un determinado momento descalificó globalmente las políticas sociales y económicas del Gobierno socialista. Tampoco se entiende la razón de ese sesgo en las demandas de la UGT al Gobierno hacia la protección de rentas más bajas en las pensiones o dar cobertura a colectivos que ni se suelen afiliar ni votan en las elecciones sindicales. Ni, en tercer lugar, por qué la UGT y CCOO -una vez que emprendieron la unidad de acción sindical y la situación económica empezó a empeorar- siguieron rechazando la moderación salarial pedida por el Gobierno en 1990 y, sobre todo, en 1991 con el Pacto Social de Progreso. Parece ser necesario introducir otros factores que expliquen *no sólo la continuación* del objetivo de conseguir incrementos del salario real, sino también por qué rechazaron globalmente las políticas económicas y sociales del Gobierno socialista y por qué lo hicieron a partir de un determinado momento, el cual, como vimos en el capítulo quinto, es posterior a su rechazo de la coordinación económica.

CAPITULO OCTAVO

LOS ENFRENTAMIENTOS POR LAS POLITICAS ECONOMICAS Y SOCIALES ENTRE EL PSOE Y LA UGT

1. Los enfrentamientos por el gasto social: el ritmo de ejecución de las demandas sociales

En la literatura sobre economía política se suele asumir implícitamente que en las organizaciones sindicales se ha producido un *desplazamiento de objetivos*, en el sentido de que la búsqueda de la conservación de la organización y del bienestar de sus miembros anula en la práctica a cualquier otro "externo"[1] que pudieran proclamar en sus estatutos y resoluciones de congresos (como, por ejemplo, la defensa de todos los trabajadores). Así, sólo en aquellas organizaciones "amplias", donde su militancia coincide con el colectivo que dice proteger, la defensa de los intereses colectivos de los trabajadores será un objetivo efectivo porque coincide, de hecho, con la preservación de la organización. De no ser así, los sindicatos suelen "olvidarse" de otros trabajadores que no sean sus miembros, sobre todo si el bienestar de sus afiliados mejora (o se mantiene) a costa de los que no lo son.

Este supuesto de partida no explica por qué la dirección de la UGT dejó de aceptar a partir de la 2ª legislatura del Gobierno socialista (1986-1989) su política social y le exigió una rápida corrección de los "desequilibrios sociales", lo cual se traducía en mejores pensiones, un S.M.I. más elevado, la extensión del subsidio

[1] Es decir, las pretensiones de transformar en algún sentido el "ambiente" en el que se desarrolla la organización (Mohr 1973:475).

por desempleo y el incremento del gasto en servicios sociales. Si el comportamiento de la dirección ugetista viniese determinado exclusivamente por cuestiones electorales, ¿por qué a partir de 1987 se enfrentó con el Gobierno del PSOE por subir y extender las rentas y subsidios de colectivos sociales que no votan, o raramente lo hacen, en las elecciones sindicales? o ¿por qué pedir mayores incrementos para las pensiones más bajas? Se podría pensar entonces que estas demandas confirman claramente que los dirigentes ugetistas actuaban guiados por sus objetivos sociales fijados en sus congresos (en concreto, la mejora de las condiciones de los trabajadores, del Estado de Bienestar y la equiparación del nivel de gasto social entre España y la CEE[2]), así como por su valoración de las posibilidades económicas de alcanzarlos[3]. Cuando lo peor de la crisis ya había pasado, consideraron así que no había excusas para que el Gobierno socialista no incrementase el gasto social.

Sin embargo, el comportamiento de la Unión General de Trabajadores pone igualmente de manifiesto que las organizaciones no parecen guiarse exclusivamente por la posibilidad de alcanzar sus objetivos ideológicos. Los dirigentes ugetistas ya habían criticado la política social del Gobierno socialista en su congreso de abril de 1986 al término de la primera legislatura socialista (1982-1986), pero hemos visto igualmente como cinco meses después volvieron a dar el

---

[2] Recordemos que en 1986 la prestación social por habitante representaba en España sólo un 55,6% de la media comunitaria (en 1982, un 54,3%) y los gastos corrientes de protección social (% sobre el PIB) representaban un 19,5% (en 1982, 19,4%) cuando la media comunitaria era de un 24,5% (en 1982, 24,9%). Datos recogidos de "El gasto en protección social en los países de la Unión Europea durante el período 1980-1991", por Marta Fernández Moreno, *Revista de Economía y Sociología del Trabajo*, núm. 21-22, septiembre-diciembre de 1993.

[3] Ya vimos en el capítulo quinto que en su 33º congreso, celebrado en medio de la crisis económica, de lo que se trataba era de dar una salida solidaria a la crisis económica y dar mayor protección a los desempleados y sectores más desprotegidos. En su 34º Congreso pedían la mejora de los sistemas de protección social y se proponían luchar contra el incremento de las desigualdades sociales y exigir políticas redistributivas. En el 35º Congreso exigían que la mejora económica tenía que traducirse en una mejora social (más empleo y mejor protección social).

visto bueno a su ritmo de crecimiento previsto en la negociación de los Presupuestos de 1987. ¿Por qué aceptaron el incremento del gasto social en los acuerdos de septiembre de ese año cuando la economía ya crecía a un buen ritmo? ¿Por qué un año después, como se preguntaba el Ministro de Economía, les parecían las mismas o mayores subidas como inaceptables? En pocas palabras, ¿de qué dependía el *ritmo* que deseaba la cúpula de la UGT para la materialización de sus objetivos sociales? El caso de la Unión General de Trabajadores pone de manifiesto que para explicar su comportamiento hay que tener en cuenta tanto el objetivo de preservar la organización como otros más externos e ideológicos.

Con objeto de no perder el apoyo mayoritario de los trabajadores, la dirección de la UGT dejó de aceptar la contención salarial y, por tanto, dio por terminado con los acuerdos globales de contrapartidas. Ahora bien, como vimos, la dirección de este sindicato había defendido tales acuerdos porque evitaban la disgregación social y representaban un ejemplo de su compromiso con políticas solidarias al conseguirse incrementos salariales en los sectores con menor capacidad de presión (como parados, jubilados o perceptores del SMI)[4]. La negociación libre en empresas y provincias, por el contrario, traería mejoras de las condiciones salariales y de trabajo a aquellos asalariados que tuviesen, por la razón que fuese, mayor fuerza para presionar en el mercado de trabajo. ¿Estaba entonces la UGT abandonando en la práctica su objetivo de "mejoras para todos"? ¿No pasaba este sindicato a preocuparse exclusivamente de los trabajadores con más fuerza en el mercado, abandonando a su suerte a los trabajadores con peores condiciones laborales o sin

[4] "La crisis [económica] está planteando al Sindicato una mayor demanda de interlocución política, dado que no únicamente debemos defender y tratar de resolver los problemas de los afiliados, y más aún de los que trabajan, sino también, dada nuestra condición de sindicato de clase, debemos extender y hacer llegar nuestra acción sindical al conjunto de los trabajadores" ("Primera Jornadas confederales de Acción Social: Conclusiones", en *Información Sindical*, núm. 37, 1ª quincena de marzo de 1986).

empleo?[5]. Así, por ejemplo, hay cierta evidencia de que los trabajadores con contratos temporales percibían menor remuneración que los trabajadores fijos así como que no se beneficiaban de las derivas salariales (Bentolila y Dolado 1994:18).

La dirección del Sindicato socialista se encontraba así ante un dilema de no fácil solución. La contención salarial en una situación de expansión económica implicaba, por un lado, que los trabajadores con mayor fuerza de mercado y/o sectores en expansión se alejasen

---

[5] Las cartas-circulares del Secretario de Acción Sindical de la UGT y diversos documentos internos recogieron constantemente esta preocupación. Así, por ejemplo, en las "Jornadas sobre Negociación Colectiva" (documento adjunto a la carta-circular de Apolinar Rodríguez del 6 de noviembre de 1987, op. cit.) o la "Circular de Negociación Colectiva para 1988" (fechada en Madrid a 1 de febrero de 1988, op. cit.) manifestaban que la mejora del poder adquisitivo conseguida para los trabajadores con mayor fuerza de mercado debía llegar igualmente a los colectivos que no se hubiesen beneficiado con la misma intensidad. Un año más tarde admitían este efecto no querido de la negociación libre:

"La favorable evolución de la coyuntura económica hace que aquellas categorías mejor cualificadas, o bien los trabajadores en empresas en mejor disposición, consigan incrementos salariales sensiblemente superiores a la media de negociación. El mantenimiento de esta circunstancia a lo largo del tiempo nos abocaría a una mayor fragmentación del mercado de trabajo dentro de cada empresa, cada sector o entre sectores. Además, la continuada práctica de incrementos porcentuales sobre tablas, sobre todo en los convenios de sector, hace que se agranden paulatinamente dichas diferencias" ("Encuentro de Secretarios de Acción Sindical sobre Política Salarial para 1989", documento adjunto a la carta-circular del Secretario de Acción Sindical, Apolinar Rodríguez, a las F.F. y U.U., fechada en Madrid a 13 de enero de 1989, caja: FEJP/517, FLC).

Finalmente, en las Resoluciones de su 35º Congreso (1990) se exponía que se había producido una dualización de los incrementos salariales entre "aquellas rentas que dependen directa o indirectamente del Estado y las de los trabajadores sujetos a negociación colectiva" porque si los sindicatos habían conseguido "aumentos moderados de los salarios reales" en la negociación colectiva, por el contrario:

"las pensiones, los salarios de los empleados públicos, el subsidio de desempleo y el Salario Mínimo Interprofesional, no han visto compensadas sus pérdidas anteriores, y en el período de crecimiento, han continuado disminuyendo su poder de compra, debido a una política de rentas socialmente inadmisible, que ha generado una deuda social con estos colectivos" (R.35C.UGT.1990:106).

de la UGT si no contribuía a la mejora de su bienestar individual, sobre todo, si observaban que otros individuos lo estaban consiguiendo. Estos trabajadores probablemente darían su apoyo a CCOO, a la miríada de pequeños sindicatos de todo tipo que existen en las empresas españolas o incluso formarían sus propios "comités autónomos" para conseguir mejoras salariales. Pero, por otro lado, si la acción sindical de la UGT se reducía a lo que se pudiese conseguir en los convenios colectivos, estaría dejando de lado uno de sus objetivos sindicales fundamentales que hemos visto en capítulos anteriores y se distinguiría poco de los sindicatos "corporativos", a los que denunciaba y trataba de retirarles sus apoyos[6]. Este abandono de "señas de identidad" sería probablemente resentido por los trabajadores que más valorasen esta clase de incentivos para apoyar una acción sindical determinada. La dirección de la UGT no tendría así más remedio que elegir entre sus objetivos de crecimiento y fortalecimiento de la organización o sus objetivos más ideológicos sobre los cuales basaba su identificación como sindicato socialista. ¿Qué hacer para proteger a los individuos con menor fuerza de mercado sin perder el apoyo de los que sí la tenían?

Los dirigentes ugetistas consideraron, sin embargo, que se podría actuar en favor de los grupos de trabajadores con menor fuerza de presión desde la misma negociación colectiva fijando una banda salarial que estuviese alejada del objetivo de inflación[7], negociando convenios sectoriales de ámbito estatal, potenciando los salarios mínimos sectoriales y presionando por que aquellos trabajadores con

---

[6] "Para la UGT, el incremento del bienestar y la protección social es una de las tareas prioritarias del movimiento sindical" (R.34C.UGT.1986:58).

[7] "La experiencia de nuestra Organización muestra que, si bien las subidas pactadas no tienen un grado de dispersión excesivo, debido a la importante disciplina en la negociación, sin embargo un objetivo demasiado pegado al 4% [inflación media prevista para 1988] dejaría fuera de la mejora del poder adquisitivo a los colectivos con una correlación de fuerzas más débil sindicalmente, aun a pesar de que con incrementos de salarios tan mesurados el efecto 'arrope' de toda la Organización hacia esos colectivos es mucho mayor" ("Jornadas sobre Negociación Colectiva", documento adjunto a la carta-circular de Apolinar Rodríguez del 6 de noviembre de 1987, op. cit.).

menores ingresos tuvieran mayores subidas[8]. Pero, sobre todo, la protección les debía venir por parte del Estado, y reducir así la diferencia en gasto social que existía todavía entre España y la Europa comunitaria[9]. Así, mientras que, por un lado, los órganos de la UGT en el ámbito de las empresas, territorios o sectores económicos intentaron conseguir en la medida de sus posibilidades incrementos del salario real de alrededor de dos puntos, por otro lado, la cúpula dirigente y las federaciones más directamente implicadas presionaron al Gobierno socialista para que proporcionase el *mismo* incremento de renta para aquellos individuos cuyos ingresos dependían de los Presupuestos Generales del Estado. Los dirigentes ugetistas esperaban así que el aumento de la participación de las rentas salariales en la renta nacional, el incremento de la cobertura del desempleo (además de la reducción del paro) y de las pensiones, el establecimiento de un ingreso mínimo garantizado y el incremento de los gastos en servicios sociales redujesen las desigualdades sociales existentes (R.35C.UGT.1990:112,113).

En conclusión, la presión que ejerció la dirección de la UGT al Gobierno socialista para que a partir de un determinado momento acelerase el ritmo de gasto social, sobre todo en transferencias sociales, parece ser fruto de la combinación de (a) la competencia intersindical (favorecida por la actitud instrumental de los trabajadores y el marco español de representación de intereses laborales) en un

---

[8] Véanse las "Jornadas sobre Negociación Colectiva", documento adjunto a la carta-circular de Apolinar Rodríguez del 6 de noviembre de 1987, op. cit.; "Circular de Negociación Colectiva para 1988", fechada en Madrid a 1 de febrero de 1988, op. cit.; o el documento titulado "Encuentro de Secretarios de Acción Sindical sobre Política Salarial para 1989" (documento adjunto a la carta-circular del Secretario de Acción Sindical del 13 de enero de 1989, op. cit.).

[9] Véanse las Resoluciones de su 33º Congreso, pág. 37; "Sindicalismo y Acción Social" en *Información Sindical*, núm. 34, enero 1986; las Resoluciones de su 34º Congreso, pág. 58; las "Reflexiones de la Unión General de Trabajadores sobre la flexibilidad en el mercado de trabajo" (documento adjunto a la carta-circular del Secretario de Acción Sindical, Apolinar Rodríguez, a las F.F. y U.U., fechada en Madrid a 19 de noviembre de 1986, caja: FEJP/514, FLC); el núm. 67/68 de *Información Sindical*, enero-febrero de 1989.

contexto económico expansivo con (b) sus objetivos igualitaristas. O, en otras palabras, la combinación de estos factores determinó el ritmo que deseaba la dirección de la UGT para la materialización de sus objetivos sociales así como para el acercamiento de España a los niveles de protección social del Norte de Europa. Como hemos podido ver en los anteriores capítulos, la clase de trabajadores existente en España, su sindicalismo electoral y competitivo, y los objetivos igualitaristas de la UGT ya estaban presentes desde la llegada del PSOE al poder. Pero entonces los dirigentes ugetistas no tenían que ofrecer incrementos del salario real para mantener o ganar apoyos entre los trabajadores, por lo que asegurar meramente el poder adquisitivo de las pensiones y subsidios sociales era la traslación a la práctica de su objetivo de proteger a todos los trabajadores por igual. Pero cuando la dirección ugetista consideró necesario incrementar los salarios reales en la negociación colectiva, su objetivo igualitarista le forzó a trasladar ese mismo incremento a las transferencias sociales y sueldos de funcionarios. Vemos, por tanto, como los objetivos igualitaristas y más ideológicos de la UGT se articulan con su objetivo de asegurar la posición de la organización entre los asalariados. Mientras que este último determina el nivel de mejora individual para los trabajadores, el primero su extensión a otros colectivos que no votan en las elecciones sindicales.

El caso de la Unión General de Trabajadores pone de manifiesto, por tanto, que la relación entre el objetivo de preservar la organización y otros ideológicos es más compleja de lo que se suele asumir en la literatura sobre economía política. Como ya se ha formulado en los estudios sobre organizaciones formales (Mohr 1973), no se trata de que el primer objetivo desplace a los segundos, sino más bien de hasta qué punto se pueden alcanzar los objetivos ideológicos teniendo en cuenta que la conservación de la organización es una condición *sine qua non*. Este enfoque sobre un ordenamiento léxico de los objetivos de las organizaciones sociopolíticas ha sido ya utilizado para explicar el comportamiento de los partidos políticos en tareas de gobierno, donde éstos ya no aparecen ni como exclusivos realizadores de sus objetivos ideológicos ni como meros maximizadores de votos. Se considera, por el

contrario, que los partidos en el gobierno intentarán llevar a cabo sus preferencias ideológicas siempre y cuando tal comportamiento no perjudique sus posibilidades de volver a ganar las elecciones (Alvarez, Garret y Lange 1991; Pierson 1994). En el caso de la Unión General de Trabajadores parece claro que a la hora de decidir el ritmo de incremento del gasto social que exigirían al Gobierno tenían en cuenta su objetivo de garantizar la conservación de la organización con su objetivo igualitarista de que los incrementos de las rentas individuales llegasen a sectores menos favorecidos.

Ahora bien, como vimos en el capítulo quinto, el incremento en transferencias sociales que le exigía la dirección de la UGT fue rechazado por el Presidente del Gobierno. El Gobierno socialista consideraba que el antiguo sindicato hermano tendía a defender las subidas de los salarios y las transferencias, pero mucho menos la provisión de bienes sociales, pues serias restricciones económicas limitaban el alcance deseable de las políticas sociales (Maravall 1997:178)[10]. En el planteamiento del Gobierno socialista había que elegir entre las mejoras salariales y el incremento del gasto social y el empleo. La Unión General de Trabajadores consideraba, sin embargo, que se podía conseguir aumentar los salarios, las transferencias y la provisión de bienes sociales a la vez gracias al crecimiento económico que se estaba produciendo. Así, aunque pudiese parecer que entre ambos existían diferencias en cuanto a los medios (transferencias o servicios públicos) para atender los derechos sociales, la diferencia de fondo se encontraba más bien en su distinta percepción en cuanto a las posibilidades económicas para acelerar el

---

[10] El Presidente del Gobierno lo expuso así, por ejemplo, en su comparecencia ante el Congreso de los Diputados del 21 de diciembre de 1988:

"[H]emos ido a las elecciones con un programa económico-social que creemos estar cumpliendo razonablemente y que estamos intentando e interesados en llevar adelante como un proyecto de modernización económica y de justicia social para España, *en el marco de las posibilidades reales* (...). [H]e invitado a los empresarios y a los sindicatos a dialogar y negociar tras este debate parlamentario sin condiciones previas de ningún tipo, para analizar, eso sí, los motivos expuestos en la convocatoria de la huelga y para *analizar sus posibles respuestas en el marco de nuestra realidad económica"* (mía la cursiva).

"ritmo" de reducción de la diferencia en gasto social de España con respecto a CEE[11].

2. Los enfrentamientos por las políticas económicas: el valor de la confianza

Los enfrentamientos con el Gobierno socialista con respecto a la política económica, los cuales se producen a finales de su segunda legislatura y durante la tercera, ponen igualmente de relieve que el comportamiento de la Unión General de Trabajadores no puede ser explicado exclusivamente por su miedo a perder las elecciones sindicales. El propio rechazo de la UGT y CCOO a la contención salarial en 1990 y 1991 presenta problemas siguiendo el modelo teórico del capítulo sexto, pues para aquel entonces sus cúpulas dirigentes ya habían constatado que la lucha por la hegemonía dentro del movimiento sindical era estéril y mantenían una unidad de acción. Pero, sobre todo, el rechazo a la contención salarial no conlleva necesariamente que la UGT tuviese que descalificar, además, el conjunto de la política económica del Gobierno socialista, como hicieron hincapié los propios dirigentes del este sindicato durante su primer año de enfrentamiento.

Se podría pensar entonces que la respuesta radica en las diferentes concepciones en materia económica que existían entre el Gobierno socialista y la dirección de la UGT. Como hemos visto, unos y otros diferían sobre la capacidad del Estado para regular la actividad económica, pues este sindicato nunca había aceptado que las reglas del juego de la economía mundial hubieran cambiado por completo. Pero nos encontramos así con aquella pregunta que nos formulábamos en el capítulo quinto. Si la aceptación o rechazo de las políticas económicas depende exclusivamente de las preferencias e ideas en materia económica de los ugetistas, ¿por qué no es hasta 1988 y, sobre todo, 1989 que vuelven a poner progresivamente sobre la mesa otra política económica? ¿Por qué aceptaron "congelar" las

[11] Como afirmaba el Secretario General de la UGT, Nicolás Redondo, al principio del enfrentamiento (*El País* 10-9-87).

demandas económicas que habían formulado en su congreso de abril de 1986 al apoyar en septiembre de ese mismo año, en un momento de recuperación económica, la política que practicaba Carlos Solchaga? ¿De qué dependía, entonces, que la dirección de la UGT exigiese llevar a la práctica sus planteamientos tradicionales en política económica?

El enfrentamiento entre el Gobierno del PSOE y la dirección del sindicato socialista pone de manifiesto la importancia de la confianza y el consenso para que los agentes sociales apoyen globalmente las políticas de los gobiernos, o por el contrario se opongan a ellas. En la literatura sobre las condiciones organizativas que favorecen la coordinación económica ambos factores quedan oscurecidos, pues tales condiciones suelen aparecer como suficientes para explicar el apoyo o el rechazo de los agentes sociales, quedando así excluido, como ha recordado Bresser (1995:84), que éstos últimos rechacen las políticas de los gobiernos porque *estimen* que están mal diseñadas. Sin embargo, es cada vez más frecuente señalar la importancia del consenso y la confianza entre los agentes sociales y políticos para explicar su apoyo mutuo por cuanto parece bastante claro que éstos sólo aceptarán pasar por períodos de reformas económicas que entrañen costes transitorios si creen o confían en que esas reformas conducirán a una situación mejor a la inicial (Przeworski 1995).

Esta confianza en la bondad de las políticas de los gobiernos parece ser especialmente necesaria cuando las políticas económicas tradicionales, basadas en la gestión de la demanda agregada, ya no parecen servir, pero las nuevas políticas económicas más centradas en las condiciones de oferta de la economía tienen que probar todavía su valía, y entrañan además un reaprendizaje tanto sobre el origen de los problemas económicos como sobre las soluciones más adecuadas. Así, si tras emprenderse las nuevas políticas los resultados obtenidos no fueran los prometidos, la competencia de los gobiernos quedaría en entredicho y a veces incluso su buena fe, lo cual minaría la confianza en ellos (Przeworski 1995:292). Esta parece haber sido la experiencia europea desde la segunda mitad de los años 80, donde las políticas económicas más centradas en las condiciones de oferta de la economía han obtenido un éxito "a medias", es decir, el

crecimiento económico obtenido no ha venido acompañado de una reducción significativa de los altos niveles de paro, pero sí se ha conseguido una importante reducción de la inflación.

Pero, además de la destrucción de la confianza, los éxitos a medias impedirían construir un consenso sobre políticas económicas al aparecer dos opciones para solucionar sus fracasos parciales. Los resultados no queridos podían haber surgido porque no se había respetado totalmente la coherencia de la nueva política económica o no se había esperado lo necesario, por lo que habría que continuar o incluso acentuarla. Pero también porque la política económica estaba mal diseñada desde un inicio, por lo que habría que abandonarla y quizás reintentar otras políticas económicas anteriores. Si los gobiernos se decantasen por la primera opción, pero los agentes sociales por la segunda, probablemente éstos rechazarían apoyarle incluso si los costes de las políticas por alguna razón disminuyesen.

En el caso de la UGT, los datos sugieren que, mientras su dirección confió en que las políticas económicas tendrían éxito, no las puso globalmente en cuestión, simplemente se limitó a cuestionar aquellos aspectos que estimaba que perjudicaban la conservación de la organización o que le impedían alcanzar tal y como ellos entendían sus objetivos ideológicos.

2.1. Los desacuerdos dentro del consenso tácito sobre políticas económicas

Las discrepancias sobre cuestiones económicas comenzaron en la segunda legislatura por los incrementos salariales que pidió la UGT a principios de 1987. Carlos Solchaga entendía que la pretensión de la UGT de conseguir incrementos salariales de unos dos puntos reales a partir de 1987, además de suponer la ruptura del acuerdo alcanzado en septiembre del año anterior, era desmesurada y tendría efectos perniciosos en la lucha contra la inflación, la mejora de la competitividad de la industria española y, finalmente, en la creación de puestos de trabajo. La dirección de la UGT defendía, por el contrario, que sus demandas seguían siendo "moderadas", pues los

incrementos del salario real no agotarían los incrementos de productividad[12]. Surgía así un primer motivo de enfrentamiento entre el Gobierno y el sindicato socialista sobre si por moderación salarial había que entender moderados incrementos del salario nominal, que significasen la práctica congelación del salario real (la interpretación que hacía el Gobierno socialista), o moderados incrementos del

[12] "A la hora de formular los planteamientos de U.G.T. para la negociación colectiva de los próximos años constatamos que *algunas de las características principales de los acuerdos interprofesionales siguen teniendo vigencia*. Tales son: La negociación salarial en función de la previsión de inflación. *La moderación salarial entendida como crecimiento real de los salarios sin la plena recuperación del incremento de la productividad*. La consecución de acuerdos-marco de referencia para la negociación colectiva" ("La Negociación Colectiva en España desde el Punto de Vista de la Unión General de Trabajadores", memorándum adjunto a la carta-circular del Secretario de Acción Sindical del 3 de noviembre de 1987, op. cit., mías las cursivas).

Dos años después seguían manteniendo que:

"[H]emos sabido mantener el compromiso solidario a favor del empleo, en su doble vertiente de cantidad y calidad, como el objetivo central de la negociación. En este sentido, las grandes líneas de actuación que orientaban nuestro enfoque para 1989 significaban: mantener nuestra política de moderación salarial, que hiciera posible el necesario incremento de los salarios reales sin agotar la productividad del factor trabajo, dirigir la negociación de la productividad al servicio de la creación de empleo, impulsar la reducción de jornada para el reparto del trabajo, negociar compromisos reales de aumento de empleo y reforzar la participación sindical en el buen uso de las contrataciones para consolidar el empleo" ("Negociación Colectiva 1989: Informe Semestral", documento adjunto a la carta-circular del Secretario de Acción Sindical del 31 de julio de 1989, op. cit.).

La dirección de la UGT lo único que reconocía era que su propuesta de moderación salarial sería menos intensa:

"Aun así, conviene recordar que solicitar un crecimiento igual a la inflación promedio vista, o ello más una recuperación de la productividad, sigue siendo moderación salarial, sólo que menos intensa que en años anteriores con situación económica distinta" ("Materiales de Estudio de cara a un Acuerdo Interconfederal para 1987", 16 de enero de 1987, op. cit.).

salario real sin recoger todo el incremento de productividad (la interpretación de la UGT)[13].

En cualquier caso, los resultados económicos de 1987 se ajustaron a lo expuesto por el sindicato socialista. El incremento medio del total de los convenios fue del 6,5%, cerca de sus exigencias, pero la inflación bajó 3,5 puntos porcentuales hasta el 4,6% a finales de aquel año. Parece que estos resultados requemaron sus relaciones con el Gobierno socialista. La dirección de la UGT exponía que la quiebra del diálogo social se había producido por la intransigencia de la CEOE a sus demandas salariales, "sin olvidar la beligerancia del área económica del gobierno" al considerar que sus demandas crearían inflación y se retraería el crecimiento económico. "Por el contrario, en UGT pens[aban] que la subida moderada de los salarios reales, además de atender a insoslayables demandas sociales, aseguraría un nivel suficiente de la demanda interna y del crecimiento en un momento en que la balanza comercial no era favorable"[14]. La discrepancia de criterios llevó a los ugetistas a realizar durante ese año frecuentes estudios de los resultados macroeconómicos[15], a partir de

---

[13] Este desacuerdo "técnico" sobre qué se ha de entender por moderación salarial se manifestó durante la entrevista que mantuvieron Nicolás Redondo y Felipe González a principios de 1987 (carta-circular del Secretario General y del de Acción Sindical del 7 de enero de 1987, op. cit.). Si Nicolás Redondo manifestaba:

"En esta etapa, manteniendo la misma política de negociación en base a inflación prevista y con moderación, los salarios han de crecer en términos reales, impulsando el consumo, el crecimiento económico y el empleo sin facilitar el rebrote inflacionista. La banda salarial tendría que construirse a partir del 5% como mínimo".

Felipe González consideraba muy necesario:

"Continuidad en la moderación salarial, negociándose en términos de inflación prevista, aprovechando las posibilidades favorables de la situación económica, incluso con ganancias del poder adquisitivo, pero manteniendo el control de la inflación. En este sentido, es muy importante luchar por el objetivo del 5% a finales de 1.987, y del 3% en 1.988".

[14] Véase la carta-circular del Secretario de Acción Sindical del 31 de julio de 1987, op. cit.

[15] Véanse "Algunos aspectos de la política de rentas y su inserción en la política económica" (en *Información Sindical*, núm. 48, 1ª quincena de mayo 1987); la carta-circular del Secretario de Acción Sindical del 31 de julio de 1987 (op. cit.); el

los cuales concluyeron que "la realidad (...) nos ha dado la razón a los ugetistas que defendíamos salarios en torno al 7%, sin menoscabo de otros logros que compartíamos: reducción de la inflación (...) y mayor crecimiento de la economía"[16]. Por lo que:

> "[U]na vez vistas las consecuencias económicas y sociales positivas, hay que señalar que, en principio, y a falta de otras consideraciones que hagamos más adelante, *parece lógico que la política salarial deba caminar en la vía de profundizar lo conseguido durante el presente año [1987]. Dicho con mayor claridad, los salarios pueden y deben crecer en términos reales porque ello supone la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores, el apoyo de la actividad económica* y, en sentido contrario, no es incompatible en medida alguna con el proceso de ralentización en las subidas de los precios. Pero, además, ese crecimiento real de salarios puede ser moderadamente más ambicioso que el conseguido durante este año [por 1987]" (mía la cursiva)[17].

"Balance de la negociación colectiva a 30 de septiembre de 1987 en *Información Sindical*, núm. 53, 2ª quincena de octubre de 1987.

[16] Véase la carta-circular del Secretario de Acción Sindical del 31 de julio de 1987, op. cit.

[17] Véanse las "Jornadas sobre Negociación Colectiva", documento adjunto a la carta-circular de Apolinar Rodríguez del 6 de noviembre de 1987, pág. 2, op. cit. Véase igualmente el "Balance de la negociación colectiva a 30 de septiembre de 1987" (en *Información Sindical*, núm. 53, 2ª quincena de octubre de 1987) donde exponían que el PIB había aumentado "como consecuencia de la favorable evolución de la demanda interna, ya que el sector exterior ha sido claramente negativo" y "[d]esde el punto de vista de la creación de empleo, ha habido un apreciable crecimiento, alrededor de 300.000 empleos se han creado este año, que aún es claramente insuficiente para aliviar el problema del desempleo, pero que sin embargo, ha demostrado la compatibilidad de incrementos salariales con creación de empleo". La confirmación de la valoración positiva de los resultados de su política sindical se dio finalmente a principios de 1988. En la circular de Negociación Colectiva para 1.988 (fechada en Madrid a 1 de febrero de 1988, op. cit.) su conclusión era clara:

> "En el momento presente, se debe conceder a la UGT, a la vista de los resultados, el acierto en la política de renta salarial practicada. Recordemos que su razonamiento (...) se apoyaba en una valoración global de la coyuntura y del ciclo económico distintos entre inflación y salarios, perjudiciales, además, para los

En pocas palabras, la valoración positiva de sus actuaciones que hicieron durante todo 1987 contribuyó a que la UGT se reafirmase en sus demandas salariales y que "[q]uienes auguraban una desestabilización económica por nuestras peticiones salariales [tenían] ahora un buen motivo de reflexión, incluso de rectificación"[18]. Parece así que los buenos resultados económicos obtenidos a finales de 1987 llevaron a la dirección de la UGT a hacer caso omiso de las advertencias del Ministerio de Economía sobre los efectos que los incrementos salariales tenían sobre la inflación. Sin embargo, la cuestión es un poco más compleja porque, cuando se produjo su repunte, la UGT no asumió que sus incrementos salariales tuvieran efectos inflacionistas ni que fuesen perjudiciales para otras variables económicas[19], como veremos más tarde. Tampoco parece que el

---

trabajadores. Esta misma visión impregnará nuestra estrategia de cara a 1988 (...). Si el año pasado se obtuvo una ganancia convenio de 1,5 puntos sobre la inflación media, este año vamos a perseguir una ganancia de 2 puntos en la línea, ya expuesta, de optimizar nuestra política de rentas salariales".

Volvieron a reincidir en ello en el "Balance Negociación Colectiva: 1987" adjunto a la carta-circular del Secretario de Acción Sindical del 14 de marzo de 1988, pág. 8, op. cit.:

"La evolución de las variables macroeconómicas demuestra la coherencia de las posiciones de UGT durante el proceso de negociación colectiva, ya que no sólo han respetado los supuestos establecidos en el cuadro macroeconómico, sino que han ayudado notablemente a conseguir mejores resultados que los previstos oficialmente".

[18] Véase la carta-circular del Secretario de Acción Sindical del 31 de julio de 1.987, op. cit.

[19] El diputado del PNV Sr Márquet Artola preguntó al Secretario General de la UGT durante su comparecencia en una sesión de la Comisión de Presupuestos el 26 de marzo de 1990:

"Se consideran ustedes de alguna forma, en el todo o en parte, culpables de la pérdida de competitividad producida por el incremento de la inflación de 1989, en la previsión del tres por ciento hasta el 6,9 por ciento?"

A lo que respondió Nicolás Redondo:

"No me siento culpable sobre lo que es un proceso de inflación; en absoluto me siento culpable de los salarios, ya que se hacen previsiones

Ministro de Economía asumiese que se hubiera equivocado, y además continuó considerando factible el objetivo de inflación del 3% para finales de 1988, según Alvaro Espina (1991:347) estimulado por la casi perfecta coincidencia entre la meta prevista por el Gobierno y el resultado final[20].

Pero si la nueva política salarial de la UGT a partir de principios de 1987 supuso un enfrentamiento con el Gobierno sobre los efectos de un determinado nivel de incremento del salario real, a partir de mediados de ese año su pretensión de conseguir esas mismas subidas reales para los colectivos cuyas rentas dependían de los Presupuestos Generales del Estado, condujo a este sindicato a cuestionar claramente un objetivo estratégico del Gobierno socialista: una rápida reducción del déficit público (éste, que rondaba en 1986 el 6% del PIB, se redujo hasta el 2,8% en 1989)[21].

---

internacionales -me parece a mí- erróneas, que no tienen como referencia un significado de orden económico, que son referencias estrictamente por imperativo de tipo político".

[20] Véase también el discurso de Solchaga en el Congreso de los Diputados el día 26 de octubre de 1987. Preguntado por este autor sobre el hecho de que la tasa de inflación hubiera bajado del 5% a finales de 1987 cuando los sindicatos habían negociado aumentos salariales mayores, Carlos Solchaga respondió que tal descenso fue posible por los desfases temporales en que tarda una variable en ajustarse a nuevas condiciones. Cree, por tanto, que la inercia de desinflación, que venía de 1986, se mantuvo durante todo 1987 pues, entre otras cosas, el mercado en expansión durante ese año permitía que los empresarios no repercutieran inmediatamente la presión de los costes a los precios. Los efectos, por tanto, de las subidas salariales no se empezaron a notar hasta 1988, cuando los empresarios ya las transmitieron para mantener su nivel de beneficios. Zabalza (1989:32), sin embargo, sostenía que "es difícil atribuir el repunte [de la inflación] a la presión de los costes, porque, en términos reales, los costes laborales unitarios bajaron un 0,9 por 100 en 1987 y un 1,4 por 100 en 1988".

[21] "Por lo que se refiere al presupuesto de gastos, el objetivo que mantiene el Gobierno es continuar adelante con el proceso de saneamiento de la Hacienda Pública y, por tanto, dados unos ingresos, *establecer unos gastos que permitan seguir reduciendo el déficit fiscal* por caja y en términos de contabilidad nacional que el Estado tiene" (Solchaga, presentación en el Congreso de los Diputados del Proyecto

Como acabamos de ver, el Gobierno socialista estaba convencido de que serias restricciones económicas limitaban el alcance deseable de las políticas sociales, lo cual generaba una cierta contradicción entre políticas económicas eficientes y políticas sociales igualitarias (Maravall 1997:178). Sin embargo, el equilibrio entre eficacia y equidad que proponía el Gobierno socialista no dejaba satisfecha a los dirigentes del sindicato hermano[22], los cuales defendían, además, que el incremento de la protección social ayudaba al crecimiento económico[23]. Así, como vimos en el capítulo quinto, el intento de acuerdo entre la dirección de la UGT y la del PSOE en el otoño de 1987, que hubiera puesto fin al enfrentamiento por las rentas de los pensionistas (y sueldos de funcionarios), tropezó con el reflejo presupuestario de lo pactado. Lo mismo volvió a ocurrir al año siguiente, añadiéndose además la cuestión de la

---

de Ley de los Presupuestos Generales del Estado para 1988 en la sesión del 26 de octubre de 1987, mía la cursiva).

[22] En opinión del Secretario General de la UGT:

"En cualquier caso, el tiempo, como en otras cuestiones lo ha hecho, nos señalará si las políticas realizadas han sido las más adecuadas, si se ha seguido el ritmo y la orientación correctas y quiénes han sido los sectores sociales más beneficiados y más perjudicados por tales políticas. Aunque pueda parecer una simplificación, este partido tendrá que reflexionar si la política seguida hasta ahora ha beneficiado a los pobres o a los ricos" (Discurso de Nicolás Redondo al 31º Congreso de los socialistas, enero de 1988, pág. 11, op. cit.).

En opinión del Secretario General del PSOE:

"Porque desde el principio también me gustaría dejar claro que a este Gobierno, e imagino que a cualquier otro, le gustaría poder responder asumiendo, como se pide en las cartas, muchas de estas reivindicaciones [de mayor gasto social] y tal vez otras muchas. Pero el Gobierno está obligado, por una responsabilidad ineludible, a lo que es compatible con un proyecto razonable de desarrollo económico y de justicia social, incluyendo también los errores de apreciación en esa posición" (Felipe González, Congreso Diputados, 21-12-88).

[23] "El 'desarme' social es por ello, según la UGT, una amenaza para el crecimiento económico y para la expansión de la demanda que está en la base de la creación de empleo" (R.34C.UGT.1986:58).

cobertura por desempleo[24]. Con respecto a la reaparición de esta cuestión, el Gobierno y los sindicatos no se pusieron de acuerdo ni a cuántos individuos había que dar un subsidio ni su precio, además de otras diferencias referidas a la idoneidad de los subsidios para fomentar la búsqueda de empleo. La UGT pedía cubrir a 587.000 personas con un coste que cifraban en 258.000 millones de pesetas (CCOO a 600.000 parados), pero el Gobierno socialista estimaba que sus peticiones realmente cubrirían a 800.000 (y las de CCOO a 900.000) con un coste de medio billón (y la petición de CCOO un poco más de esa cifra)[25], cuando ellos sólo estaban dispuestos a aumentar la cobertura entre 200.000 y 250.000 parados más (*El País* 23-7-88, 24-7-88). En cuanto a las pensiones, la Administración evaluó entre 7.000 y 8.000 millones de pesetas lo que había impedido que UGT y CCOO suscribiesen el acuerdo firmado con la Unión Democrática de Pensionistas (*El País* 18-9-88).

¿No había realmente posibilidades para incrementar el gasto social como querían en la UGT? Este sindicato sencillamente no se creía que "en el contexto económico actual, no [hubiese] margen para financiar las reivindicaciones de los sindicatos"[26], pues la recaudación del Estado aumentaba considerablemente gracias a un crecimiento económico superior al previsto[27]. Pero esto suponía alejarse del

---

[24] Como vimos en el capítulo quinto, éstos no eran los únicos motivos de desacuerdo entre el Gobierno del PSOE y la UGT. Los dirigentes ugetistas se sentían también decepcionados por los obstáculos encontrados en las negociaciones sobre la reforma del INEM, derechos sindicales de los funcionarios, no se habían producido consultas en las inversiones públicas, ni se había llegado a abrir la mesa encargada de analizar los fondos de inversión y la empresa pública.

[25] Días más tarde el Ministerio de Economía subió la valoración del coste de la cobertura pedida por UGT y CCOO a 800.000 millones de pesetas al calcular no sólo su coste inmediato, como había hecho el Ministerio de Trabajo, sino también a medio plazo (*El País* 29-7-88).

[26] Véase el "Informe de la negociación gobierno-sindicatos" en *Información Sindical*, núm. 67-68, enero-febrero de 1989.

[27] De hecho, la dirección de la UGT sostenía que el Gobierno socialista elaboraba "unas previsiones macroeconómicas (crecimiento y precios) a la baja" a partir de las cuales se calculaban los presupuestos de ingresos y gastos, de tal forma que "mientras los gastos presupuestados no deb[ían] superar el crédito aprobado, los ingresos, sin

objetivo del PSOE de reducir el déficit público, que también figuraba en su programa electoral de 1986 y que, por tanto, la dirección de la UGT había aceptado[28]. Para los ugetistas, el Gobierno socialista debía abandonar la rápida reducción del déficit si impedía el incremento de los gastos sociales:

"Las fuertes reducciones del déficit público de años anteriores han sido consecuencia fundamentalmente de la actitud de la Administración que ha contenido los gastos sociales agravando así el diferencial que nos separa de Europa en la que, desgraciadamente, somos líderes en desempleo y desprotección" (...). Esta mejor situación relativa de nuestra economía frente a la de los países de nuestro entorno, en términos de déficit público y financiación, contrasta negativamente con los elevados diferenciales en materia de desempleo y protección social, por lo que parece lógico y racional establecer políticas de protección

---

embargo, evolucion[aban] de acuerdo con la economía real, muy por encima de lo inicialmente presupuestado" ("Comentarios a la Presentación de los Presupuestos Generales del Estado para 1990", fechado en Madrid a 28 de marzo de 1990, pág. 5, op. cit.).

[28] Véase el Programa Electoral del PSOE de 1986. Dado que la dirección de la UGT había mostrado, sin embargo, cierta disconformidad con la política de destinar ahorro público a la reducción del déficit en "La Propuesta Programática de la UGT ante las Elecciones Generales del 22 de junio de 1986" (op. cit.):

"En un corto plazo, la UGT estima que el ahorro de compras exteriores propiciado por la caída del dólar y del precio del petróleo ha de ser destinado al servicio de las grandes necesidades económico-sociales actuales. En ese sentido no sería lo más favorable repercutirlo íntegramente en la reducción del déficit público ni, por el contrario, en el descenso de los precios finales de algunos bienes. La UGT propone que, aunque una parte se dedique a sanear parcialmente el déficit público, *más de la mitad del ahorro engendrado se oriente hacia acciones directas del Gobierno que mejoren las prestaciones sociales (desempleo, pensiones, etc...) y otras que reimpulsen la inversión pública en infraestructura básica desde un punto de vista social y económico (transportes, vivienda, comunicaciones, sanidad, etc ...)*" (mía la cursiva).

Todo hace pensar que ésta fue otra de las exigencias "congeladas" por la dirección de la UGT en el verano de 1986.

> adecuadas en estos terrenos como una prioridad mayor que la rápida reducción del déficit público" [29].

Según la UGT, España a comienzos de 1989 se colocaba en una situación de ventaja frente a los países comunitarios, que tenían una media de déficit del 3,8% del PIB mientras que el de España era del 2,9%. Además, mientras que la deuda viva era en España de un 37% sobre el PIB, la media europea se situaba en el 61%. En su opinión, las reticencias del Gobierno socialista mostraban que carecía de voluntad política para aceptar sus reivindicaciones[30].

Resumiendo, el rechazo de la UGT a reducir el déficit público al ritmo que quería el Ministro de Economía y Hacienda no surgió por un deseo de relanzar la economía fomentando la demanda a través del déficit público[31], sino que estaba motivado por su objetivo igualitarista de que el incremento de poder adquisitivo conseguido para los trabajadores cubiertos por la negociación colectiva llegase también a funcionarios, pensionistas y parados. Pero la discusión terminó convirtiéndose en un enfrentamiento sobre estrategias económicas al plantearse si la expansión de la demanda interna, vía incremento del gasto social y de los salarios, era una estrategia adecuada para sostener el crecimiento económico y del empleo o, por el contrario, era preferible continuar intentando mejorar los equilibrios básicos de la economía[32].

---

[29] Véase el "Informe de la Negociación Gobierno-sindicatos" en el núm. 67/68 de *Información Sindical*, enero-febrero de 1989, pág. 7. Véanse igualmente las Resoluciones de su 35º Congreso, 1990, pág. 113.

[30] Vid. supra.

[31] No hubiera tenido mucho sentido cuando la economía crecía en el otoño de 1987 a un ritmo del 6%.

[32] El sindicato socialista ya había manifestado que:

> "las medidas que atacan las injusticias en la distribución de los ingresos y de la riqueza contribuyen al crecimiento [...]. El 'desarme social' es por ello una amenaza para el crecimiento económico y para la expansión de la demanda que está en la base de la creación de empleo. Por ello, para la UGT una política de crecimiento y empleo debe ser al tiempo una política de avanzada seguridad social y bienestar" (R.34C.UGT.1986:58).

Ahora bien, aun siendo importantes estos enfrentamientos por incrementos salariales y gasto social durante 1987 -pues para el Ministro de Economía eran claves para que la integración en la entonces Comunidad Económica Europa tuviese efectos beneficiosos- el Secretario General de la UGT todavía puntualizaba en enero de 1988 que el enfrentamiento de su sindicato con el Gobierno socialista no obedecía a un rechazo total del sindicato a la política económica del Gabinete (*El País* 19-1-88)[33]. El rechazo a seguir practicando la contención salarial o su pretensión de que se incrementase más aún el gasto social no parece, por tanto, explicar por qué en un determinado momento la dirección ugetista exigió llevar a la práctica sus planteamientos en política económica.

2.2. El fin del consenso

En los primeros meses de 1987 la dirección de la UGT había hecho hincapié en que su nueva política salarial no ponía en cuestión los objetivos económicos del Gobierno socialista. Durante la segunda mitad de ese mismo año, incidieron en que los resultados de las políticas económicas eran bastante mejores que los de la política social por lo que, consideraban, el Gobierno se había preocupado más de la primera que de la segunda. En la primavera de 1988, sin embargo, comenzaron a mostrar ya su escepticismo sobre el "modelo de crecimiento" que entrañaba esa misma política económica. A partir de 1989 la dirección ugetista denunció que la política económica del Gobierno socialista ni era socialdemócrata ni era eficaz para luchar contra el desempleo, la inflación o la competitividad de la economía.

---

[33] A principios de 1988, Nicolás Redondo mostraba su satisfacción con respecto a los resultados económicos de la política del Gobierno socialista:

"Naturalmente no ponemos en duda que se hayan alcanzado logros económicos en la gestión socialista que se ha traducido en descenso de la inflación, mejoramiento de la balanza de pagos, reducción del déficit público y aumento de la población ocupada. Consideramos que la política coherente y responsable de la UGT ha sido fundamental para obtener esos logros..." (Discurso de Nicolás Redondo al 31º Congreso de los socialistas, enero de 1988, op. cit.).

Todo sugiere que se tuvieron que añadir nuevos factores para que los dirigentes ugetistas pasaran a rechazar en su conjunto la política económica de Solchaga. Así, a principios de 1988 se empezó a poner de manifiesto que el fuerte crecimiento del PIB y del empleo[34] (véase tabla 16) no reducía significativamente la tasa de paro (véase tabla 17) al mismo tiempo que aumentaba fuertemente la proporción de trabajadores con contratos temporales (véase tabla 18).

Además, según los estudios de la OCDE (1991), desde 1988 España estaba padeciendo los problemas económicos propios de un exceso de demanda severo[35]. La tasa de inflación anual, tras haber bajado al 4,6% en diciembre de 1987 y al 4,4% en el segundo trimestre de 1988, saltó al 5,7% en el tercero de aquel mismo año y llegaría hasta un 6,9% en diciembre de 1989. Este incremento de la inflación fue acompañado de un empeoramiento en la balanza por cuenta corriente.

---

[34] El crecimiento del empleo en España era en 1989 casi tres veces más alto que la media de los países europeos de la OCDE, y en concreto "[e]l crecimiento del empleo dependiente (6.2%) era particularmente impresionante" (OCDE 1991:16).

[35] El PIB estaba creciendo a tasas anuales de alrededor del 5%. La demanda interna estaba expandiéndose a tasas del 7 u 8%. La balanza de pagos corrientes tenía un déficit de más de un 3% del PIB (OCDE, 1991). El informe de la OCDE valoraba que "mientras que durante los tres primeros años de recuperación de la economía (1986-1988) el rápido crecimiento de la producción y del empleo era compatible con el equilibrio externo y la desinflación, ya no era así en los años más recientes" (OCDE 1991:26).

Al comenzar la década de los noventa el crecimiento del PIB se redujo a un 2,4% por ciento en 1991, la tasa más baja desde 1985. Las presiones inflacionistas y el déficit por cuenta corriente se aminoraron, si bien el diferencial de inflación de España con los otros países de SME bajó solamente de 1,75 punto porcentual en 1988-89 a 1,5 en 1991. Pero disminuyó también la creación de empleo, pues en 1991 creció sólo alrededor de un 0,2% cuando en los 5 años precedentes lo había estado haciendo a un 3% (OCDE 1992:9-17). Igualmente, la fase de crecimiento de la producción

TABLA 16.Evolución del empleo (cambio porcentual anual de la población ocupada)

	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991
España	-1,3%	1,4%	4,5%	3,4%	3,5%	2,8%	0,2%
CEE-12	0,5%	0,7%	1,2%	1,6%	1,6%	1,6%	0,2%

Fuente: Annual Economic Report for 1993, European Economy, Commission of the European Communities Directorate-General for Economic and Financial Affairs.

TABLA 17.Evolución del desempleo (EPA)

	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991
España	21,6%	21,2%	20,5%	19,5%	17,3%	16,2%	16,3%
CEE-12	10,8%	10,7%	10,3%	9,8%	8,9%	8,3%	8,8%

España, fuente: Anuario Estadístico 1995 (INE 1996).
Media de los 12 países comunitarios, fuente: Annual Economic Report for 1993, European Economy, Commission of the European Communities Directorate-General for Economic and Financial Affairs.

TABLA 18.Indice de temporalidad en España

1987	1988	1989	1990
15,6%	22,4%	26,6%	29,8%

Fuente: J. Segura, F. Duran, L. Toharia y S. Bentolila (1991:236).

TABLA 19.Evolución de la balanza por cuenta corriente y del PIB en España

	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991
Balanza	1,4%	1,6%	0,1%	-1,1%	-3,2%	-3,7%	-3,5%
PIB	2,3%	3,2%	5,6%	5,2%	4,8%	3,6%	2,4%

Fuente: Annual Economic Report for 1993, European Economy, Commission of the European Communities Directorate-General for Economic and Financial Affairs.

y del empleo industrial iniciada en 1985 llegó a su fin[36]. En 1990 se desaceleró el ritmo de crecimiento de la producción e inversión industrial[37]. En el sector de bienes de equipo, la producción descendió un 4,2% aquel año y un 10,3% en 1991. La producción de bienes intermedios descendió un 0,8% en 1990 y un 1,1% al siguiente. Sólo la producción de bienes de consumo mantuvo un apreciable vigor en ambos años (creció un 2,6% en 1990 y un 1,8% en 1991). Esta desaceleración de la actividad industrial afectó negativamente a la evolución del empleo industrial. En 1989 había crecido 3,4%; en 1990, 2,8%; en 1991, -3%; en 1992, de nuevo -3%; y en 1993, -9,3%.

El mantenimiento de ciertos problemas (alto nivel de desempleo), el resurgir de otros (inflación, déficit comercial) o la aparición de otros nuevos (incremento de la población ocupada con contratos temporales) produjo el enfrentamiento final entre la UGT y el Gobierno del PSOE. La desavenencia ya no estaba solamente originada porque ciertos objetivos estratégicos de la política económica del Gobierno socialista entrasen en contradicción con objetivos de la UGT (como era mantener su posición entre los asalariados o conseguir mejoras individuales para otros colectivos no cubiertos por la negociación colectiva) sino, además, porque se estaban produciendo unos resultados económicos no queridos ni por el sindicato socialista[38] ni por el PSOE[39]. El Gobierno socialista y la

---

[36] Datos tomados de Segura y González (1992:152,153).

[37] Mientras que en 1989 las tasas de variación anual de la producción industrial y de manufacturas eran, respectivamente, de 4,5% y 4,7%, en 1990 estas producciones se estancan, creciendo únicamente la industria manufacturera un 0,4%. En 1991, el índice de producción industrial registró un crecimiento negativo del 1,1% en relación año anterior.

[38] "Es claro, por otra parte, que los buenos resultados de 1987 [crecimiento económico entre el 4,5% y el 5%] no han sido en absoluto suficientes, al fallar el problema crucial para nosotros que es el del paro. Ello ha de incentivar cualquier posibilidad de aumentar el crecimiento y cuestionarse la política de rentas no salariales, en particular la canalización y optimización de los excedentes empresariales" ("Circular de Negociación Colectiva para 1.988", Madrid a 1 de febrero de 1.988, pág. 5, op. cit.).

dirección de la UGT no se pondrían de acuerdo ni en cuáles eran los problemas más prioritarios, ni en cuáles eran las causas que los originaban ni, finalmente, en cómo se podrían resolver.

2.2.1. El disenso sobre los problemas más graves

De todos estos problemas de índole económico, el Ministro de Economía consideraba prioritario reducir la inflación al menos a los niveles de los otros países con los que España tenía los mayores intercambios comerciales, pues de su solución dependía resolver los restantes[40]. Por el contrario, a la dirección ugetista este desequilibrio económico no le parecía tan grave en comparación con otros. A partir de 1988 incidieron en que no había que "anteponer [la previsión de inflación] a la creación de empleos en las prioridades de la política económica"[41]. Con respecto al repunte de la inflación, sostenían que no era demasiado preocupante en sí, "ya que no se

---

[39] Véase el documento del PSOE "Medidas para la Inserción Laboral y el Empleo de los Jóvenes" (mayo 1.988) y la intervención del Ministro de Economía en el Congreso de los Diputados en defensa del Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado para 1989 en la sesión del día 25 de octubre de 1988. Zabalza (1989:30) afirmaba al respecto:

"Estamos, pues, en una situación que, aunque no de alarmante, sí podría calificarse de delicada: todavía no hemos acabado de solucionar los problemas crónicos del paro y de la falta de infraestructuras, cuando comienzan ya a aparecer nuevas y significativas dificultades en lo referente a la inflación y al sector exterior".

[40] Intervención del Ministro de Economía en el Congreso de los Diputados en defensa del Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado para 1989 en la sesión del día 25 de octubre de 1988.

[41] "170 propuestas de UGT para aumentar y mejorar el empleo" (documento fechado en Madrid a 3 de marzo de 1988, op. cit.). Véase igualmente el documento titulado "Un incremento que agrava la dualidad salarial" en la carta-circular del Secretario de Acción Sindical del 13 de enero de 1989, op. cit.; "Por un compromiso de empleo: propuestas de UGT" en *Información Sindical*, núm. 69/70, marzo-abril de 1989.

ha[bía] agravado en exceso el diferencial con la CEE"[42]. Igualmente, tras constatarse que "[d]urante los tres últimos años la inflación [había] tenido una senda ascendente, 4,6% en 1987, 5,8% en 1988 y 6,9% en 1989", los dirigentes ugetistas consideraban que el mero cambio de tendencia, "esto es, contener la inflación e iniciar una pequeña reducción, aunque [fuese] en unas décimas, [era] de por sí un objetivo tan ambicioso como realista para 1990"[43]. Para 1991 y siguientes, cabían "reducciones más significativas siempre que se apoy[asen] en medidas estructurales que abord[asen] los problemas de fondo de la inflación en España"[44]. El Ministro de Economía, sin embargo, estimaba que a los sindicatos les daba igual el nivel de inflación que existiese[45]. Más importante le parecía a la dirección de la UGT el rápido crecimiento de la población asalariada con contratos temporales. Pero para el PSOE la reforma laboral de 1984 había sido adecuada para fomentar la creación de empleo por lo que debía seguir adelante, centrándose ahora en el desempleo juvenil[46]. Por su

---

[42] "El recalentamiento de la economía. Una visión alternativa", documento adjunto a la carta-circular del Secretario de Acción Sindical del 8 de septiembre de 1989, op. cit.

[43] Carta-circular del Secretario de Acción Sindical, Apolinar Rodríguez, a los Secretarios de Acción Sindical de las F.F. y U.U., fechada en Madrid a 16 de enero de 1990, caja: FEJP/519, FLC.

[44] Vid. supra.

[45] Según manifestó Alvaro Espina durante una entrevista con el autor celebrada el 2-10-96 y el propio Carlos Solchaga en la entrevista del 19-7-96. Véase igualmente la intervención del Ministro de Economía en el Congreso de los Diputados en la sesión del 25 de octubre de 1988:

"[E]s evidente que una de las razones de tensión social en nuestro país es la diferencia que existe en la apreciación entre los interlocutores económicos y sociales y, a veces, la interpretación también de las diversas fuerzas políticas de la importancia que tiene en sí misma la inflación y la relación que esto tiene con la evolución de los salarios".

[46] Así, por ejemplo, en el documento del PSOE "Medidas para la Inserción Laboral y el Empleo de los Jóvenes" (mayo 1988, pág 2) exponían que "[c]uando se analiza[ba] el mercado de trabajo en España tres hechos se pon[ían] de relieve como significativos: La existencia de una alta tasa de paro. La permanencia de una baja tasa de actividad. La dispar incidencia que el paro tiene en los distintos grupos sociales. Es

parte, la dirección de este sindicato consideraba que era necesario solucionar el desempleo en todos los colectivos, y no preparar un plan exclusivamente para uno de ellos[47].

Pero para la UGT el problema económico realmente grave era el estancamiento de la industria y su pérdida de peso en el conjunto de la economía (expresada en términos de empleo y de aportación al PIB)[48]. Consideraban que las políticas de reconversión no se habían preocupado de mejorar el tejido productivo con el resultado de que la estructura industrial española era débil, excesivamente dependiente de la inversión extranjera, incapaz de atender los aumentos de demanda interna e insuficiente en calidad para competir con la producción extranjera (lo que dificultaba las exportaciones y le hacía perder cuota de mercado interna). Por el contrario, el Gobierno socialista siempre rechazó que se estuviese produciendo un proceso de desindustrialización (Solchaga 1997:74-95). Así la pérdida de peso relativo de la producción industrial en el conjunto del PIB no era un fenómeno exclusivamente español, sino universal (entre los países avanzados), y no estaba producido por la apertura económica española o por el tipo de cambio.

2.2.2. El disenso sobre el origen de los problemas: el fin de la confianza mutua

---

un hecho que el paro castiga más a las mujeres que a los hombres, a los jóvenes que a los adultos". No mencionaban, sin embargo, el incremento de la contratación temporal.

[47] "Comentarios Sucintos a la Medida (sic) para la Inserción Laboral y el Empleo de los Jóvenes Propuesta por el PSOE", documento adjunto a la carta-circular del Secretario de Acción Sindical, Apolinar Rodríguez, a los Secretarios de Acción Sindical de las F.F. y U.U., fechada en Madrid a 31 de mayo de 1.988, caja: FEJP/516, FLC.

[48] Véase la "Iniciativa Sindical de Progreso", en *Información Sindical*, núm. 101/102, octubre-noviembre de 1991, pp. 15, 16.

Pero sus discrepancias se centraron, sobre todo, en el análisis del origen de estos problemas económicos. Ciertamente el PSOE consideraba que lo peor de la crisis ya había pasado y que "[l]a fase expansiva iniciada en 1985 se [mostraba] particularmente vigorosa, acelerándose de forma notable en los ejercicios 1986, 1987 y 1988" gracias a "los logros conseguidos por las políticas de ajuste seguidas durante los años anteriores y [al] efecto de arrastre de la expansión de las economías americana y japonesa" (Zabalza 1989:29). Pero los dirigentes socialistas reconocían que el desempleo en España, a pesar de esa recuperación del empleo, seguía siendo muy elevado, por lo que continuaba constituyendo el principal problema[49]. Los socialistas se explicaban su mantenimiento por un fortísimo crecimiento de la población activa, los incrementos salariales, la presencia de "fórmulas rígidas de contratación laboral"[50], y la inexistencia del suficiente *stock* de capital para emplear a toda la mano de obra disponible (Zabalza 1989:35). Pero, dado que este problema afectaba más a los jóvenes que a los adultos[51], cuyas causas se encontraban en la existencia de un auténtico círculo vicioso consistente en que el mismo hecho de

---

[49] Véanse las "Medidas para la Inserción Laboral y el Empleo de los Jóvenes", mayo de 1988. El Presidente del Gobierno, Felipe González, en su comparecencia ante el Congreso de los Diputados del día 21 de diciembre de 1988 para informar sobre el desarrollo de la jornada del día 14 de diciembre de aquel año declaraba igualmente que España se encontraba "en una situación económica un poco más favorable, con una creación de empleo estimable aunque, desde luego, insuficiente".

[50] "Medidas para la inserción laboral y el empleo de los jóvenes", mayo de 1988.

[51] Según las estimaciones que manejaban los dirigentes del PSOE, hacia finales de 1987 prácticamente 1.370.000 jóvenes no disponían de trabajo remunerado, lo que constituía cerca de la mitad del total de nuestro desempleo. Además, el paro juvenil incidía especialmente entre los que nunca habían trabajado, con niveles de estudios medios o inferiores y venía acompañado de un período de búsqueda de empleo muy largo ("Medidas para la Inserción Laboral y el Empleo de los Jóvenes", mayo 1.988). Igualmente Felipe González declaraba:

"Pues bien, el primero de los temas expuestos por los sindicatos es, a nuestro juicio, como venimos insistiendo, el más importante, seguramente el más importante para todos: el problema del desempleo. A nuestro juicio, como Gobierno, el problema del empleo juvenil es el más importante para la sociedad española" (Felipe González, Congreso de los Diputados, 21-12-88).

carecer de trabajo dificultaba conseguir la cualificación necesaria para obtener un empleo, el aparato del partido propuso al Gobierno que actuase especialmente "en favor de la política de empleo juvenil"[52].

La dirección ugetista consideraba, por su parte, que sus demandas salariales no perjudicaban la creación de puestos de trabajo, sino todo lo contrario[53]. Esta convicción no era nueva en la UGT, pues ya en 1984 había rechazado aquellas medidas antiinflacionistas "que no se basa[ban] esencialmente más que en la reducción del poder adquisitivo [y en] la disminución de la protección social" por dañar la creación y mantenimiento del empleo[54]. Tampoco admitían que el mercado español fuese rígido y que, por tanto, ésta fuese otra de las causas de que los empresarios no contratasen más. La UGT siempre había sido muy escéptica con respecto a este género de análisis[55], pues veía tras él una campaña

---

[52] "Medidas para la Inserción Laboral y el Empleo de los Jóvenes", mayo de 1988.

[53] Véase el núm. 48 de *Información Sindical*, 1ª quincena de mayo de 1987, pág. 5:

"[L]a realización de la política de rentas es parte importante de la política sindical y que esta política de rentas tiene vinculaciones importantes con otros objetivos como son la creación de empleo o la redistribución de la riqueza. Hemos defendido que era necesario mantener un nivel sostenido de crecimiento económico que hiciera posible un *crecimiento mayor del empleo a través de una mejora del poder adquisitivo de los trabajadores*" (mía la cursiva).

En octubre de 1988 se reafirmaban en su creencia de que "no existe el más mínimo efecto de sustitución [empleos, salarios] y se desacelera conjuntamente la mejora del poder adquisitivo y del empleo". Para ellos, "[l]as renuncias salariales lejos de traducirse en una mayor creación de empleo se ponen al servicio de un menor crecimiento económico y también de una menor creación de empleo (carta-circular del Secretario de Acción Sindical del 3 de octubre de 1988, op. cit.).

[54] Véase "La alternativa sindical: un empleo para todos", en *Información Sindical*, núm. 10, 2ª quincena de abril de 1984.

[55] El rechazo de la UGT a la "flexibilidad laboral" como instrumento para crear empleo tenía también larga historia dentro del sindicato socialista. Véase "Los cambios estructurales en el mercado de trabajo desde el punto de vista sindical" (en *Información Sindical*, núm. 32, 2ª quincena de noviembre de 1985) o el documento aprobado por la Comisión Ejecutiva Confederal el 16 de diciembre de 1986, titulado: "UGT, ante la concertación social para 1987" (op. cit.).

empresarial para reducir las conquistas sociales de los trabajadores, introducir la arbitrariedad empresarial en las relaciones laborales, disminuir los salarios y precarizar el empleo en un mercado de trabajo ya de por sí "altamente favorable para los empresarios y claramente regresivo para los trabajadores"[56]. En cualquier caso, ellos creían que ya habían contribuido suficientemente a su flexibilización, por lo que el mercado laboral ya presentaba las bases suficientes para impulsar una política económica de crecimiento no inflacionario[57].

En su concepción, si en España, pese a ese crecimiento de la demanda interna y de la producción, no se creaba más empleo -o, el que se creaba, era de carácter temporal- se debía al comportamiento de los empresarios así como a las políticas emprendidas por el Gobierno socialista. Los empresarios, en opinión de la UGT, no creaban más empleo porque destinaban los beneficios hacia la especulación financiera o a la inversión en nuevas tecnologías ahorradoras de empleo[58]. Rechazaban así que fuese cierta la formula

---

[56] Véanse las "Reflexiones de la UGT sobre la flexibilidad en el mercado de trabajo", pp. 26, 27 (adjunto a la carta-circular del Secretario de Acción Sindical del 19 de noviembre de 1986, op. cit.), "La Negociación Colectiva en España desde el Punto de Vista de la Unión General de Trabajadores (memorándum adjunto a la carta-circular del Secretario de Acción Sindical del 3 de noviembre de 1987, op. cit.), las "Reflexiones de UGT para un compromiso de progreso por el empleo" (en *Información Sindical*, núm. 59, abril de 1988), el "Comunicado de la C.E.C. sobre medidas para la inserción laboral y empleo de los jóvenes" (documento remitido por el Secretario de Acción Sindical a las F.F y U.U. el 31 de mayo de 1988, caja: FEJP/516, FLC) y el núm. 69/70 de *Información Sindical*, marzo/abril de 1989.

[57] Véanse la carta-circular del Secretario de Acción Sindical del 19 de noviembre de 1986 (op. cit.), el documento aprobado por la Comisión Ejecutiva el 16 de diciembre de 1986, titulado: "UGT, ante la concertación social para 1987" (op. cit.) y las "Reflexiones de UGT para un compromiso de progreso por el empleo" (en *Información Sindical*, núm. 59, abril de 1988).

[58] Esta crítica ya la habían formulado en la "Propuesta Programática de U.G.T. ante las Elecciones Generales del 22 de Junio de 1.986" (op. cit.). Véase igualmente "La Negociación Colectiva en España desde el Punto de Vista de la Unión General de Trabajadores (memorándum adjunto a la carta del Secretario de Acción Sindical del 3 de noviembre de 1987, op. cit.), la "Circular de Negociación Colectiva para 1.988" (fechada en Madrid a 1 de febrero de 1988, op. cit.) las "Reflexiones de la

según la cual los beneficios empresariales de hoy son las inversiones de mañana y los empleos de pasadomañana[59]. Pero el Gobierno socialista era el responsable último del comportamiento empresarial por no haber establecido los mecanismos necesarios para que los excedentes empresariales se destinasen a la inversión productiva:

"[L]a Unión General de Trabajadores siempre ha considerado que es conveniente que las empresas obtengan beneficios, (...) pero el problema es que no se conocen el volumen de estos beneficios y su destino queda en su totalidad al arbitrio de los empresarios, sin que esta política se haya ocupado, cuando se da una situación de paro como la actual, de establecer los mecanismos necesarios para hacer que se destinen a la inversión productiva y la creación de empleo"[60].

Todo lo contrario, se había limitado a ejecutar políticas favorecedoras del excedente empresarial privado, "esperando que la lógica económica del mercado haría el resto"[61], abandonando toda actuación activa del sector público e intentando disminuir el coste del factor trabajo así como las garantías legales existentes. El resultado no había sido la creación de más empleo, sino substituir un tipo de contrato por otro. En resumidas cuentas:

"La política de empleo seguida ha sido la traslación de ingentes recursos a la empresa privada, renunciando a cualesquiera otras políticas activas, inhibiendo la actuación de otros agentes sociales y olvidando todo control y seguimiento para que el impulso inicial dado a las empresas privadas se transformase al final en la creación masiva de empleos"[62].

UGT para un compromiso de progreso por el empleo (2)" (en *Información Sindical*, núm. 60, mayo de 1988) y las Resoluciones de su 35º Congreso, 1990, pág. 110.

[59] Véanse las "Reflexiones de la UGT para un compromiso de progreso por el empleo (2)" en *Información Sindical*, núm. 60, mayo de 1988.

[60] Véase el núm. 69/70 de *Información Sindical*, marzo-abril de 1989.

[61] Véanse las "Reflexiones de la UGT para un compromiso de progreso por el empleo (2)" en *Información Sindical*, núm. 60, mayo de 1988.

[62] Véase el núm. 69/70 de *Información Sindical*, marzo-abril de 1989.

De hecho, la dirección de la UGT llegó a valorar que la insuficiente creación de empleo había sido el resultado de un "modelo de crecimiento" cuyos "objetivos ha[bían] sido otros distintos de la reducción del paro" (reducción de la inflación y del déficit público), cuando no se había intentado conseguir "a costa de aumentar considerablemente el paro"[63].

Pero no se había terminado de solucionar el problema del desempleo y ya se estaba produciendo un "recalentamiento" de la economía española[64]. En cuanto al empeoramiento del déficit comercial, el Gobierno socialista consideraba que venía sobre todo provocado, dada la apertura de la economía española a la de otros países, por un incremento del consumo interno que la oferta de la economía española no había sido capaz de satisfacer[65]. Respecto a la inflación, en el Gobierno se dieron dos interpretaciones no excluyentes y que, en ambos casos, chocaban con las peticiones de incrementos del salario real formuladas por la UGT. Por un lado, el Ministro de Economía estaba firmemente convencido de que los salarios estaban presionando por el lado de los costes laborales[66]. Por

---

[63] Véanse las "Reflexiones de la UGT para un compromiso de progreso por el empleo (2)" en *Información Sindical*, núm. 60, mayo de 1988.

[64] "Como ya se ha descrito anteriormente, el balance de nuestra integración en la CE puede considerarse francamente positivo, aunque es verdad que en los dos últimos años [1989, 1990], el fuerte crecimiento de la demanda doméstica ha generado la reaparición de tensiones inflacionistas y el agravamiento de nuestro déficit por cuenta corriente" ("Pacto Social de Progreso", pág. 18, op. cit.).

[65] Véanse la intervención del Ministro de Economía en el Congreso de los Diputados en defensa del Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado para 1990 en la sesión del día 27 de marzo de 1990, y el documento del Pacto Social de Progreso, pág. 18, op. cit.

[66] Véase la intervención del Ministro de Economía en el Congreso de los Diputados en defensa del Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado para 1989 en la sesión del 25 de octubre de 1988:

"En la medida en la cual los costes del factor trabajo evolucionan muy rápidamente, antes o después son traspasados a los precios de oferta al público y acaban produciendo inflación"

otro, creían que se estaba produciendo un fuerte tirón de la demanda interna frente a una capacidad de oferta relativamente limitada. Esta mayor demanda había sido producto de la estrategia del Gobierno de "crecer (...) más que los países de nuestro entorno" con objeto de solucionar el alto nivel de desempleo y las graves deficiencias de capital físico y humano (Zabalza 1989:30)[67] . El resultado era que España se encontraba así ante un "dilema de cómo crecer lo suficientemente deprisa para eliminar el desempleo y mejorar nuestras dotaciones sociales y, a la vez, lo suficientemente despacio para no generar en el camino tensiones en los precios y en el sector exterior" (Zabalza 1989:36). Pero, en cualquier caso, el Gobierno socialista atribuía la aceleración de la inflación a la política salarial de los sindicatos, ya fuese porque, por el lado de la oferta, había provocado mayores costes laborales, ya, por el lado de la demanda, al

---

En el documento del Pacto Social de Progreso (op. cit.) se explicaba que la ausencia de disciplina monetaria, fiscal o cambiaria, junto a unas reivindicaciones salariales "en claro conflicto con la situación real" entre 1974 y 1977, había conducido a (pág. 6):

"que en los diez años siguientes, la sociedad española tuviera que afrontar la destrucción de casi dos millones de puestos de trabajo, la aparición de una tasa de desempleo superior al 20%, una elevada y persistente tasa de inflación, el progresivo deterioro de la situación financiera del Sector Público y la acumulación de cuantiosos déficits externos que hicieron crecer el endeudamiento externo hasta triplicar el nivel de nuestras reservas de divisas".

Por el contrario (pág. 13):

"Buena parte de los resultados cosechados desde 1986 habrían sido muy difíciles de alcanzar si la economía española no se hubiera dotado de dos instrumentos de disciplina: la moderación del salario nominal y la nueva política de manejo del tipo de cambio. Estas dos anclas nominales del sistema contribuyeron decisivamente a configurar unas expectativas claramente desinflacionistas que, al cumplirse, alimentaron el proceso de inversión, generación de empleo y crecimiento iniciado en la segunda parte de 1985".

[67] Véanse la intervención del Ministro de Economía en el Congreso de los Diputados en defensa del Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado para 1990 en la sesión del 27 de marzo de 1990.

fomentarla. Finalmente, esta presión salarial dificultaba además la reducción del paro y provocaba pérdida de competitividad[68].

La dirección de la UGT, convencida de que los datos macroeconómicos de 1987 le habían dado la razón, consideró, por el contrario, que sus demandas salariales seguían siendo "moderadas" a la vez que se explicaba la insistencia del Gobierno socialista en considerar perjudiciales los incrementos salariales para los precios, la competitividad, la inversión y el empleo por su traición a los principios socialdemócratas. Rechazaron así que los salarios hubieran sido responsables de la inflación al no haberse traducido en aumentos de los costes laborales unitarios reales[69], ni que fueran un freno a la competitividad[70]. De hecho, consideraban que año tras año los costes

---

[68] Véase la intervención del Ministro de Economía en el Congreso de los Diputados del día 25 de octubre de 1988. En el Gobierno se explicaron, además, la diferente tasa de inflación entre la Industria y el sector Servicios porque mientras que en el sector industrial no había podido transmitir a los precios el aumento de los costes laborales dado que tenía que competir en un mercado europeo abierto, el sector Servicios sí podía hacerlo. La Industria lo que había hecho para controlar sus costes laborales unitarios era desprenderse de trabajadores (Espina 1993).

[69] Véase "El Recalentamiento de la Economía. Una visión Alternativa" (documento adjunto a la carta-circular del Secretario de Acción Sindical del 8 de septiembre de 1989, op. cit.) y el núm. 93 de *Información Sindical*, febrero de 1991. Ya en mayo de 1987 se quejaban de que se achacase a los salarios todos los males inflacionarios y se convirtiesen en la única variable a controlar mediante una política económica restrictiva ("Algunos aspectos de la política de rentas y su inserción en la política económica", en *Información Sindical*, núm. 58, 1ª quincena de mayo de 1987). En noviembre de aquel año exponían ("Jornadas sobre Negociación Colectiva", documento adjunto a la carta-circular del Secretario de Acción Sindical del 13 de noviembre de 1987, op. cit.):

"En cuanto a los efectos de las subidas salariales sobre el control de precios y el carácter desorbitado de las mismas, hay que negar con la rotundidad de las cifras que ni en este año [por 1987], ni en anteriores, las subidas de salarios hayan sido un componente inflacionista".

[70] Ya en noviembre de 1986 afirmaban que desde 1982 España era el país con respecto a los Doce donde más habían caído los costes salariales, por lo que les parecía "que el trabajo en España [era] tanto o más competitivo que en el resto de Europa y que su coste [era] relativamente reducido" (en "Reflexiones de la Unión

laborales habían "venido reduciéndose (...), manteniendo además su variación por debajo de la media comunitaria" por lo que "los salarios [eran] el principal, si no el único factor de competitividad de las empresas españolas"[71]. Para ellos, las causas de la inflación se encontraban, por el contrario, en factores "estructurales que hac[ían] que el proceso de formación de precios se [viese] continuamente alterado por la existencia de una descontrolada política de márgenes comerciales y por deficiencias en nuestra dotación de infraestructuras"[72]. Hacerles así responsables de la inflación no era sino producto de "una teoría claramente neoliberal, según la cual los salarios [eran] los principales responsables de los incrementos de precios"[73] cuando de lo que se trataba era de que los salarios fuesen un "instrumento de redistribución y de sostenimiento de la demanda interna"[74] [75].

General de Trabajadores sobre la Flexibilidad en el mercado de trabajo" adjunto a una carta-circular del Secretario de Acción Sindical del 19 de noviembre de 1986, op. cit.). Esta argumentación será una constante en los documentos de la UGT, véase así los "Materiales de estudio de cara a un Acuerdo Interconfederal para 1987" para la reunión de secretarios de acción sindical, el día 16 de enero de 1987 (op. cit.), la documentación para las "Jornadas de Negociación Colectiva" (adjunta a la carta-circular del Secretario de Acción Sindical del 6 de noviembre de 1987, pág. 13, op. cit), el núm. 93 de *Información Sindical*, febrero 1991, pp. 13, 14.

[71] *Véase el núm. 82 de Información Sindical*, mayo de 1990, pág. 1.

[72] *Vid. supra.* pág. 1. Esta opinión ya la habían defendido en "Algunos aspectos de la política de rentas y su inserción en la política económica" (op. cit.) donde se exponía que España se acercaba a niveles próximos al suelo estructural de la tasa de inflación. Véase igualmente el documento titulado "Encuentro de Secretarios de Acción Sindical sobre Política Salarial para 1.989" (adjunto a la carta-circular del Secretario de Acción Sindical del 13 de enero de 1.989, op. cit.), el documento titulado "Definición de Política Salarial" (adjunto a la carta del Secretario de Acción Sindical, Apolinar Rodríguez, a las F.F. y U.U., fechada en Madrid a 22 de enero de 1990, caja: FEJP/519, FLC) y el núm. 93 de *Información Sindical*, febrero 1991.

[73] Véase el núm. 82 de *Información Sindical*, mayo de 1990.

[74] Véase la "Circular de Negociación Colectiva para 1.988", fechada en Madrid a 1 de febrero de 1988, op. cit.

[75] Además, cuando en el segundo semestre de 1988 el Gobierno socialista subió la previsión de inflación para finales de 1988 del 3% al 5% (al final alcanzó el 5,8%), la

Con respecto a la falta de competitividad de la Industria española, argumentaban que estaba producida por los altos márgenes de beneficios, los costes financieros, el tipo de cambio, los costes extrasalariales y los ocasionados por la mala gestión, o la falta de calidad de los productos[76]. Insistir así en los salarios no significaba, para la cúpula de la UGT, sino que el Gobierno socialista cifraba la competitividad de la economía española en "una característica de las producciones tercermundistas"[77].

Estas valoraciones traducían así su convicción de que los salarios no tenían que asumir un papel protagonista en el control de la

---

dirección ugetista consideró que la nueva previsión de inflación era una exageración, pues estimaban que la inflación en diciembre rondaría el 4,5%. Creían así que el Gobierno fijaba al principio del año una previsión de inflación muy baja, con objeto de "escamotear una revisión de rentas equilibrada", para luego subir tal previsión y conseguir así una "victoria pírrica sobre un nuevo dígito suficientemente abultado que permit[ía] salvarlo sin grandes esfuerzos" (carta-circular del Secretario de Acción Sindical del 3 de octubre de 1.988, op. cit.).

[76] "Son tanto los factores que afectan a la competitividad y es tan largo el camino por recorrer en ellos, para las empresas españolas, que la insistencia sobre el aspecto salarial, además de una muestra de incapacidad empresarial, es grotesca. La diversificación, comercialización, versatilidad del producto ofrecido, servicios post-venta, especificaciones técnicas, etcétera, son factores por medio de los cuales se compite mucho más, dentro de unos márgenes admisibles, que por los precios" ("Jornadas de acción sindical", documentación adjunta a la carta-circular del Secretario de Acción Sindical del 6 de noviembre de 1987, op. cit.).

Véase igualmente el núm. 82 de *Información Sindical*, mayo de 1990.

[77] Véanse las "Prioridades del espacio social europeo" en *Información Sindical*, núm. 67-68; enero-febrero 1989, pág. 8:

"Lo anterior [la política económica que deseaban] conlleva, indudablemente, el rechazo de cualquier tentación de buscar la competitividad de la economía española en la profundización de las diferencias salariales, el deterioro de las condiciones de trabajo o el aumento del déficit que en protección y garantías sociales tenemos respecto a Europa, lo que no sólo sería socialmente intolerable, sino suicida a largo plazo para nuestro país".

Véase también la "Jornadas de acción sindical" (documentación adjunta a la carta-circular del Secretario de Acción Sindical del 6 de noviembre de 1987, op. cit.) y el núm. 82, de *Información Sindical*, mayo de 1990.

inflación[78], por lo que no modificaron el objetivo que se habían fijado de incremento del salario real cuando la tasa de inflación descendía[79].

---

[78] Véase "El Recalentamiento de la Economía. Una visión Alternativa" (documento adjunto a la carta-circular del Secretario de Acción Sindical del 8 de septiembre de 1989, op. cit.).

[79] Véanse las "Jornadas de Acción Sindical (Segunda Parte)" en *Información Sindical*, núm. 65, noviembre de 1988, pág. 12, 13:

"Durante 1.989 debemos plantearnos una reivindicación salarial inserta dentro de nuestra tradicional práctica de moderación salarial. Como en los últimos años, moderación salarial debe entenderse como incrementos salariales superiores a la inflación, para mantener la tendencia de los mesurados incrementos de los salarios reales. En una época de clara recuperación económica, como es la actual coyuntura, es imprescindible, de alguna manera, hacer partícipes a los trabajadores de los excedentes generados principalmente por la práctica de moderación salarial del último decenio"

Ahora bien, en aquellas jornadas previeron dos escenarios. En el caso de que hubiese negociación sobre excedentes con los empresarios, pedirían "alrededor de dos puntos por encima de las previsiones de inflación". Por el contrario, si no se llegaba a acuerdos, "no quedar[ía] otro remedio que reivindicar incrementos salariales que [hiciese] revertir a los trabajadores la totalidad de los incrementos de productividad". Así, a principios de 1989, tras rechazar la previsión de inflación formulada por el Gobierno para finales de año del 3%, consideraron alcanzable una tasa de inflación del 4,5% por lo que, dado que el "incremento de los salarios reales sólo se consigue negociando incrementos salariales superiores a la inflación media" (calculaban un 5% para 1989), su objetivo salarial se situaba en el 7%. Confiaban, en cualquier caso que ("Encuentro de Secretarios de Acción Sindical sobre Política Salarial para 1.989", documento adjunto a la carta-circular del Secretario de Acción Sindical del 13 de enero de 1.989, op. cit.):

"Esta propuesta de incremento salarial permite compaginar incrementos de empleo sin perjudicar por ello a los precios, ya que no se llegaría a agotar el incremento de productividad y, por tanto, no supone presiones al alza de los costes laborales unitarios reales. De este modo, el objetivo de incremento salarial tendrá un comportamiento neutral respecto a la evolución de los precios".

Al final de 1989 la inflación acumulada había alcanzado el 6,9%. La UGT consideró entonces que "[l]as divergencias entre predicción y realidad [abrían] una brecha de poder adquisitivo de los trabajadores y colectivos sujetos a presupuestos que [era] necesario reparar", quedando claro que "[n]ada de ello [ponía] en cuestión la continuidad en la política de mejoras de poder adquisitivo, que [habían]

La *continuación* de su política salarial iniciada en 1987, por tanto, no se explica exclusivamente por la lucha intersindical y su miedo a perder votos. Hay que añadir sus análisis de cuáles eran las causas de la inflación, así como sus valoraciones de las intenciones del Gobierno socialista. La dirección ugetista consideraba que la moderación salarial que le pedía el Gobierno no era ni conveniente, si se quería mantener sus apoyos entre los trabajadores, ni, además, económicamente necesaria.

En conclusión, el fracaso "a medias" en la lucha contra el desempleo y el recalentamiento de la economía condujo a que la

---

conseguido, en la negociación colectiva" (carta del Secretario de Acción Sindical del 16 de enero de 1990, op. cit.). La UGT buscaría los mismos incrementos del salario real aún con una inflación ascendente:

"Tras valorar las tendencias demostradas por los precios en los últimos años y considerando posible y deseable un cambio de tendencia de la inflación, nos propusimos la obtención de incremento de salarios reales del mismo orden que las conseguidas en los tres años precedentes, y que para 1990 habría de ser de dos puntos, con lo que los salarios monetarios debían crecer al 9%" ("Negociación Colectiva 1990. Curso Actual" en *Información Sindical*, núm. 86, 2ª quincena de julio de 1990, pág. 13).

De hecho consideraban (en "Política Salarial para 1991: Propuestas a Debate y Desarrollo de Criterios", documento adjunto a la carta del Secretario de Acción Sindical, Apolinar Rodríguez, a los Secretarios de Acción Sindical de las F.F. y U.U., fechada en Madrid a 10 de octubre de 1.990, caja: FEJP/520, FLC):

"UGT siempre ha acertado en política salarial, fruto de la comprensión de las diferentes etapas y la adecuación de las exigencias a la realidad con la máxima ambición. En 1980 abrimos una etapa de defensa del poder adquisitivo ante la crisis. En 1987 inauguramos la generalización de incrementos reales de salarios en la recuperación económica. En 1991, deberíamos avanzar y profundizar en la atención específica dentro de la mejora del poder adquisitivo".

Hay que señalar, sin embargo, que a diferencia de su objetivo de política salarial para 1990, para 1991 consideraban que éste podía "estar sujeto a un principio de doble flexibilidad en la negociación". Así, por un lado, "ante una negociación concreta que [supusiese] un compromiso efectivo de creación adicional de empleo", aceptaban "una mejora (...) menor del poder adquisitivo". Por el contrario, "[a]nte singulares beneficios de empresa o sector, [podía] elevarse las peticiones salariales en función de las disponibilidades económicas posibles".

UGT valorase que la política económica no era ni tan siquiera eficaz, y la considerase ya sin paliativos como de la "más pura lógica neoliberal" (véanse capítulos cuarto y quinto). Para la dirección ugetista, la alta tasa que seguía existiendo de paro, el incremento de la contratación temporal, el recalentamiento de la economía mostraban que la estrategia económica del Gobierno socialista, además de implicar importantes costes si se aceptaba (poner en peligro su posición frente a CCOO o renunciar a sus objetivos igualitaristas), terminaba finalmente fracasando porque erraban en el diagnóstico del origen de los problemas. La confianza en la política económica del Gobierno socialista se había acabado. Pero es más, el éxito relativamente mayor en la lucha contra la inflación que en la disminución del desempleo se parecían mucho a los resultados de una política conservadora según la literatura especializada sobre las políticas económicas. Además el uso que hacía el Gobierno socialista de la política monetaria se parecía al atribuido a los conservadores cuando querían doblegar las demandas de los sindicatos. En pocas palabras, la dirección de la UGT se sentía "engañada". Habiendo creído apoyar una política económica que conduciría a resultados "de progreso social", evaluaban ahora que habían apoyado a una claramente conservadora[80].

2.2.3. El disenso sobre las soluciones: las dos propuestas de estrategia económica

No poniéndose de acuerdo sobre cuál era el auténtico origen de los problemas, menos lo hicieron sobre las soluciones que había que dar. Mientras que para el Gobierno socialista lo que había que hacer era continuar por el mismo camino de control de los equilibrios

[80] "Durante todo el período [que ya era de expansión desde 1985] se ha mantenido un mensaje en clave de ajuste para los trabajadores. Sus salarios y sus condiciones de trabajo continuaban siendo considerados la variable esencial de ajuste de la economía, responsabilizándose de que no se cree más empleo, del incremento de precios y de la falta de competitividad" (R.35C.UGT.1990:107).

macroeconómicos[81], para la dirección de la UGT había que cambiar de política económica[82]. Es así que este sindicato "descongeló" sus preferencias en materia económica.

Con respecto al desempleo, la respuesta en el PSOE fue la de profundizar precisamente en la clase de medidas que la dirección de la UGT rechazaba. Como hemos visto, en el Partido socialista se entendía que lo más preocupante era el desempleo juvenil, por lo que se preparó un plan de empleo para los jóvenes consistente básicamente en proporcionarles un trabajo de "naturaleza temporal" (de 6 a 12 meses y prorrogable sólo por una vez) y cobrando el SMI, gracias a que se reducirían las aportaciones de los empresarios a la Seguridad Social y se darían subvenciones por cada trabajador

---

[81] "En cuestiones de economía no hay recetas mágicas y, por tanto, probablemente lo que se impone es continuar con la política seguida hasta el momento, a fin de seguir obteniendo mejoras en los dos primeros desajustes (alto nivel de desempleo y graves deficiencias de capital social [esto es, capital físico y humano]), pero administrando con mayor cautela el ritmo de expansión de la demanda para no agravar los otros dos desequilibrios (nuevas tensiones inflacionistas y un deterioro de nuestro saldo comercial)" (Zabalza 1989:30).

En la propuesta del Pacto Social de Progreso se afirmaba igualmente (pág. 18, op. cit.):

"Estos desequilibrios macroeconómicos [reaparición de tensiones inflacionistas y el agravamiento del déficit por cuenta corriente] han constituido tradicionalmente los dos estrangulamientos básicos de nuestros procesos de expansión económica y, secularmente, han hecho inevitable la adopción de las medidas estabilizadoras drásticas que jalonan nuestra historia económica".

[82] "Frente a la política seguida hasta el momento, la Unión General de Trabajadores propugna una alternativa completamente diferente que está, por una parte, en plena sintonía con la 'estrategia de cooperación para el crecimiento y el empleo' defendida por el sindicalismo europeo y que, partiendo del rechazo frontal a los planteamientos neoliberales, se basa en aspectos tales como la necesidad de gestionar la oferta y la demanda, desarrollar políticas industriales que transciendan las políticas nacionales, rechazar la idea de ofrecer subvenciones sin finalidad que fomentan la 'economía de casino' y, en cambio, defender la canalización de los beneficios hacia la creación de empleo, así como en desarrollar mucho más las políticas de investigación y tecnología" ("Por un Compromiso de Empleo.- Propuestas de UGT" en *Información Sindical*, núm. 69/70, marzo-abril de 1989).

contratado[83]. El PSOE esperaba así que los jóvenes adquiriesen alguna experiencia laboral, se rompiese el círculo vicioso comentado anteriormente y se incentivara su contratación "por encima de los niveles de empleo que genera la economía española [dado] un grado de crecimiento determinado, con un grado de inversiones determinada"[84]. Además, de forma general, el PSOE consideraba que "[l]os sindicatos deberían pedir a sus afiliados -y al resto de los trabajadores- que renunciaran a una parte de sus hipotéticas mejoras. A la vez que deberían colaborar en la revisión de los impedimentos que ocasionados por fórmulas rígidas de contratación laboral pudieran dañar a los trabajadores actualmente en paro"[85]. Quedaba así descartada la solución del problema del desempleo incentivando la demanda interna a base de mayores salarios porque:

"[L]a ruta alternativa de crecimientos del salario real de las personas ya ocupadas por encima de las ganancias de productividad del

---

[83] Véanse las "Medidas para la inserción laboral y el empleo de los jóvenes", mayo de 1988. Con respecto al plan de empleo juvenil el antiguo ministro de Economía, Carlos Solchaga, ha declarado en una entrevista realizada por Burns Marañón (1996:158):

"Yo personalmente como ministro no creía en ese programa. Me sonaba a intervencionista y hasta le veía viejos residuos franquistas. En cambio yo sí he pensado siempre en la necesidad de restaurar el contrato de aprendizaje. Y también he creído siempre que merece la pena estudiar una reducción fuerte de las cotizaciones de los trabajadores menos cualificados con el fin de aumentar el empleo de éstos, que son los que más sufren la tasa de paro. Sin embargo, nunca he creído que un sistema de encuadramiento de estos trabajadores a través de un plan de empleo juvenil fuera a funcionar. El plan estaba promovido por el Partido y el Gobierno lo apoyaba, aunque por mi parte con cierta frialdad".

[84] Intervención de Felipe González en el Congreso de los Diputados el día 21-12-88.

[85] A los empresarios se les pedía que asumiesen incrementos de plantilla ("Medidas para la Inserción Laboral y el Empleo de los Jóvenes", mayo de 1988, pág. 12, op. cit.). Estas insinuaciones de que los sindicatos sólo defendían a sus afiliados sentaron muy mal en la cúpula de la UGT (véase "Comentarios sucintos a la medida para la inserción laboral y el empleo de los jóvenes propuesta por el PSOE", documento remitido por el Secretario de Acción Sindical el 31 de mayo de 1988, op. cit.).

> sistema es una estrategia que, aunque inicialmente puede crear el espejismo de una ganancia de poder de compra, acaba por revelarse como estéril, puesto que, tal y como ocurrió en la segunda parte de los años 70, conduce a la caída de la rentabilidad real de la inversión, y, por consiguiente, a la disminución del stock de capital productivo, a la desaceleración del crecimiento económico y a la expulsión de un número cada vez más creciente de asalariados del mercado de trabajo"[86].

El Gobierno socialista rechazó igualmente legislar la creación de fondos de inversión en cuya gestión participasen los sindicatos, pues suponía poner al Gobierno de un lado en la relación entre capital y trabajo, iba contra la libertad económica al constreñir la libre disposición de la riqueza y de los medios de producción, y, finalmente, se temía que se despilfarrasen las inversiones[87].

Con respecto al desequilibrio económico que les preocupaba más hacia finales de los años ochenta, el repunte de la inflación, el Gobierno socialista se propuso enfriar la demanda interna, que estaba "por encima de nuestras posibilidades" y controlar el crecimiento de los costes laborales unitarios[88]. Puesto que estos costes sólo se

---

[86] Documento del Pacto Social de Progreso, pág. 14, op. cit.

[87] Estas fueron las valoraciones del Gobierno según describió Carlos Solchaga durante una entrevista con el autor celebrada el 19-7-96. En palabras suyas:

"Yo creía que [los fondos de inversión con participación sindical] estaban en contra de lo que era la filosofía económica del gobierno y también la visión de lo que es un país moderno".

[88] Véase la intervención del Ministro de Economía en el Congreso de los Diputados en la sesión del 27 de marzo de 1990:

"Nada hay que asegure que mantener un límite al crecimiento de la financiación global o conocer una estructura determinadas de ingresos y gastos públicos pueda necesariamente implicar un crecimiento exacto de la producción y el empleo y, por otro lado, también un crecimiento exacto de precios y salarios. Eso, en un país de economía libre como el nuestro, no depende exclusivamente de este marco macroeconómico al que acabo de hacer referencia, sino que depende de los acuerdos que alcancen en materia de precios y rentas quienes negocian salarios, quienes imponen beneficios o quienes negocian otras rentas. Por consiguiente, es evidente que la consecución de los resultados que se propone el Gobierno tan sólo

contendrían si no aumentaban los salarios nominales o si se reducía el nivel de empleo, la obtención de más empleo y menos inflación exigía reducir el crecimiento de los salarios nominales[89]. Pero, considerando que quienes originaban las tensiones inflacionistas no tenían voluntad o capacidad de frenarlo, el Gobierno socialista endureció a partir de 1988 su política monetaria[90]. El Ministro de Economía esperaba así que la demanda creciese "a lo que es nuestra capacidad potencial de producir oferta" y se redujese en consecuencia tanto el "diferencial entre importaciones y exportaciones" como la "inflación de nuestro país"[91], sin que la inversión disminuyese en la

---

parcialmente depende de él. La libertad de las partes puede condicionarlos, y el Gobierno da por bienvenida dicha libertad de las partes (...). Pero del mismo modo que el Gobierno da por bienvenida dicha libertad, el Gobierno entiende también que es su obligación apelar a la responsabilidad de las partes para conseguir la mejor mezcla, la mejor resultante posible de crecimiento de empleo, por un lado, y de salarios, por otro".

[89] Véanse el documento del Pacto Social de Progreso (pp. 22-24, op. cit.) y Espina (1993).

[90] El Ministro de Economía advertía así (intervención en el Congreso de los Diputados del 25 de octubre de 1988):

"[N]os veremos necesariamente obligados, por la vía de la utilización de la política monetaria más restrictiva, por la vía del tipo de cambio, a través de una revaluación de la peseta, o por la reducción drástica de los gastos públicos (...) a limitar esas tendencias inflacionistas, provocando naturalmente, al mismo tiempo, un menor crecimiento del empleo o incluso una disminución del mismo -que a eso se podría llegar- o, en todo caso, una situación socialmente poco favorable".

Al año siguiente volvía a manifestar (intervención de Carlos Solchaga en el Congreso de los Diputados del 27 de marzo de 1990):

"Y si lo que pasa en la realidad hace difícil obtener algunos de esos objetivos, el Gobierno, en 1990 -(...)- tendrá que hacer lo que hizo en 1989 y lo que ningún gobierno puede dejar de hacer, que es introducir, por la vía de la política monetaria y por la vía de la política fiscal, aquellas dosis de restricción que la falta de autodisciplina haya dado lugar en el proceso de negociación salarial".

[91] Por otro lado, en cuanto a la demanda fomentada por los gastos del Estado, Carlos Solchaga sólo se proponía a aumentase "el gasto público más de lo que creciera el producto interior bruto, evitando por tanto que desde el sector público se contribuyera a echar leña al fuego de la demanda que ya tenía suficiente intensidad

misma proporción[92]. Ahora bien, el Gobierno socialista era consciente de que el endurecimiento de la política monetaria no "estaba exenta de problemas", pues se produciría, en concreto, una menor creación de empleo[93]. Lo que estaba claro, en cualquier caso, era que los rasgos principales de la política económica llevada a cabo no se cambiaban:

> "Nuestra experiencia histórica prueba que la puesta en práctica de una política económica ortodoxa y la realización de reformas estructurales que fomenten la competencia y la flexibilización de la economía siempre han permitido la aparición de un diferencial de crecimiento positivo respecto a la CEE que, consecuentemente, ha reducido la brecha de bienestar que nos separaba de la media comunitaria. Buena prueba de ello es el favorable balance económico de nuestra integración en las Comunidades"[94].

Las autoridades públicas subieron así los tipos de intervención a primeros de septiembre de 1988, y los tipos nominales de interés a corto plazo saltaron tres puntos hasta el 14% a finales de aquel año. A primeros de febrero de 1989 se adoptaron además varias medidas para recortar el crédito privado y la entrada de capital extranjero. Sin embargo, estas medidas resultaron insuficientes[95], pues el desarrollo del sistema financiero español había hecho perder eficacia al mecanismo de controlar la cantidad de dinero para gestionar la política monetaria[96]. Al mismo tiempo, la creciente movilidad de

---

en nuestro país" (Solchaga, intervención en el Congreso de los Diputados del 27 de marzo de 1990).

[92] Vid. supra.

[93] Vid. supra. Se entiende así, como ya se vio en el capítulo cuarto, que el Gobierno socialista intentase conseguir de nuevo la moderación salarial mediante la colaboración de los sindicatos formalizado en algún tipo de acuerdo social.

[94] "Pacto Social de Progreso", Madrid, 1991, pág. 3, op. cit.

[95] Así lo reconoció el propio Ministro de Economía y Hacienda en su intervención en el Congreso de los Diputados en la sesión del 27 de marzo de 1990.

[96] "La creación de nuevos activos financieros por fuera del balance de los intermediarios, la existencia de recesión de créditos, el aumento de las cuentas financieras, el desarrollo de otros activos, como las pólizas de prima única, todo ello

capital dentro de la CE combinada con una política monetaria orientada a reducir la inflación provocaba una apreciación de la moneda española que perjudicaba las exportaciones españolas. Para solucionar estos problemas el gobierno decidió integrar la peseta en el SME en junio de 1989 en un intento de "importar credibilidad" (OCDE 1991:31), y fue acompañado de un conjunto de medidas fiscales y controles temporales del crédito[97]. Como resultado de estas medidas, los agregados monetarios crecieron más lentamente durante los cinco últimos meses de 1989. En particular, el crédito bancario al sector privado, principalmente a las familias, disminuyó del 22% al 12% en siete meses (OCDE 1991:27). La demanda interna pasó de crecer en términos reales del 7,7% en 1989 al 5,1% en 1990. Incluso después de un acusado descenso de la actividad económica, los tipos de interés se mantuvieron extremadamente altos hasta 1993[98]. Pero para el Gobierno socialista no había más opción dado que los sindicatos no aceptaban, como hemos visto, la contención salarial que se les pedía. Pero, como ya se expuso, la política monetaria más restrictiva se quedó sola en el sustento de la estrategia deflacionista del gobierno socialista.

Por su parte, la dirección de la UGT no renovó su confianza en las políticas económicas del Gobierno socialista al considerar que éstas eran claramente conservadoras e ineficaces, pues, por un lado, impedían la mejora del poder adquisitivo de trabajadores, pensionistas y parados, y, por otro, no reducían significativamente el

---

hizo que, frente a un crecimiento razonable de lo que eran los activos líquidos en manos del público, controlados por el Banco de España, sin embargo otros activos considerados con muy buena razón como cuasi dinero permitieran su difusión y el crecimiento a lo largo de estos primeros meses de 1989" (vid. supra).

[97] El Banco de España elevó los coeficientes de caja, subió su tipo de intervención en un punto y estableció controles crediticios (Jimeno, Andrés y Taguas 1994:118).

[98] Los tipos nominales a corto plazo llegaron al 16% a finales de 1989, para bajar al 15% durante 1990 y al 12,5% en 1991. Pero en 1992, ante las fuertes presiones a las que se vio sometida la peseta, se introdujeron nuevamente controles temporales de los tipos de cambio de divisas y se elevó el tipo de intervención. A finales de aquel año, los tipos nominales de interés a corto plazo se situaron por encima del 15 por ciento, casi el 10 por ciento en términos reales (Boix 1996:228).

paro al tiempo que aumentaba la contratación temporal. Como hemos visto, en el planteamiento del Gobierno socialista había que elegir entre las mejoras salariales o el incremento del gasto social y del empleo, lo que implicaba que la dirección de la UGT tenía que optar entre mantener el apoyo de los trabajadores con mayor fuerza de presión, proporcionándoles mayores salarios, y sus objetivos de conseguir mejoras para los sectores sociales más débiles y desprotegidos. Sin embargo, los dirigentes ugetistas estaban convencidos de que este dilema era falso, pues se podían conseguir a la vez mejores salarios, mayor gasto social y empleo si el Gobierno aplicaba la política económica que los ugetistas habían venido exponiendo en las resoluciones de sus congresos[99]. Sencillamente la dirección ugetista no estaba dispuesta a continuar por un período de renuncias con la esperanza de ser compensados por los resultados finales porque ya no confiaba en que tales resultados prometidos se fuesen a dar, ni tampoco consideraba que los sacrificios fuesen necesarios si se aplicaba otra política económica.

Así, en primer lugar, los dirigentes del sindicato socialista consideraron que el crecimiento de los salarios reales y de otras rentas daría más impulso a la demanda interna y de esta manera incentivaría la producción y la creación de empleo[100]. Esta especie de "revival" keynesiano quedó confirmado cuando el crecimiento

---

[99] Esto implicaba cambiar de ministro de Economía, lo cual lejos de ser un "coste", era un aliciente más para exigir el cambio de política económica.

[100] "Algunos aspectos de la política de rentas y su inserción en la política económica" (en el núm. 58 de *Información Sindical*, 1ª quincena de mayo de 1987, pág. 5):

"[E]ra necesario mantener un nivel sostenido de crecimiento económico que hiciera posible un *crecimiento mayor del empleo a través de una mejora del poder adquisitivo de los trabajadores*" (mía la cursiva).

Véanse igualmente la documentación para las jornadas de acción sindical (adjunta a la carta del Secretario de Acción Sindical del 6 de noviembre de 1987, op. cit.), la "Circular de Negociación Colectiva para 1.988" (fechada en Madrid a 1 de febrero de 1988, op. cit.) o el núm. 60 de *Información Sindical*, mayo de 1988.

económico empezó a declinar al igual que la creación de empleo[101]. Los incrementos salariales se complementarían, además, con la legislación de esos fondos de inversión con objeto de asegurar que los beneficios empresariales se destinarían a la creación de empleo[102], y otras medidas tales como el reparto del trabajo existente, la creación de más empleo público y el fomento de la formación profesional[103].

Ahora bien, para controlar las tensiones inflacionistas que pudieran aparecer, la dirección ugetista propugnaba realizar reformas

---

[101] "[E]l diseño de las políticas para crear empleo debía asignar un cierto protagonismo a las políticas de demanda, mientras que las políticas de oferta, las únicas que hasta hoy ha realizado [el Gobierno], debían ser esencialmente de acompañamiento" ("Por un compromiso de empleo: propuestas de UGT", Madrid, 31 de marzo de 1989 en *Información Sindical*, núm. 69/70, marzo-abril de 1989).

O, dicho de una forma más clara:

"Los Presupuestos tendrían que sostener y favorecer el crecimiento frente al carácter contractivo con que se proyectan para 1991, fijándose un objetivo ambicioso de creación de empleo" ("Los criterios de la Alternativa Socialdemócrata para una revisión del actual modelo de crecimiento", carta del Secretario de Acción Sindical, Apolinar Rodríguez, informando de una reunión entre la UGT y el Gobierno socialista a los Secretarios de Acción Sindical de las F.F. y U.U., fechada en Madrid a 22 de octubre de 1990. Caja: FEJP/520. Fundación Largo Caballero).

[102] Véanse las Resoluciones de su 34º Congreso de 1986, pág. 64, la documentación para las jornadas de acción sindical (adjunta a la carta del Secretario de Acción Sindical del 6 de noviembre de 1.987, op. cit.), la "Circular de Negociación Colectiva para 1.988" (fechada en Madrid a 1 de febrero de 1988, op. cit.), las "170 propuestas de UGT para aumentar y mejorar el empleo" (Madrid a 3 de marzo de 1988, op. cit.), los nos 60 (mayo de 1988), 65 (noviembre de 1988), 69/70, (marzo-abril 1989) de *Información Sindical*, y la carta del Secretario de Acción Sindical informando sobre la posición de la UGT para la negociación colectiva de 1989, fechada en Madrid a 30 de enero de 1989 (Caja: FEJP/517. FLC).

[103] Con objeto de conseguir además que los nuevos empleos creados fueran indefinidos, y dado que consideraba que la expansión de la contratación temporal se debía al mal uso y fraude que hacían los empresarios de los diferentes tipos de contratación, propugnaban entre otras medidas el control sindical del buen uso de las contrataciones y limitar el uso de las formas de empleo temporal. Véanse las "170 propuestas de UGT para aumentar y mejorar el empleo" (documento fechado el 3 de marzo de 1988, op. cit.), la "Propuesta Sindical Prioritaria" (op. cit.) y "Circular de Negociación Colectiva 1990", fechada en Madrid a 23 de enero de 1990 (op. cit.).

en la distribución, el transporte y la comercialización, así como controles de precios y la reducción de los tipos de interés[104]. Igualmente consideraba una política de modernización de la estructura productiva española para poder competir en calidad, y no sólo en precios[105].

Pero, sobre todo, "descongelaron" su exigencia de una mayor planificación de la economía, y volvieron a pedir la creación de marcos cuatrienales compuestos de planes sectoriales donde el sector empresarial del Estado fuese uno de los motores principales de la economía y de la creación de empleo[106]. Esta confianza en la capacidad directora de la economía por parte del Estado se puso especialmente de manifiesto al producirse ese recalentamiento de la economía. Consideraban así que para combatirlo el Estado debía realizar una actuación selectiva "detrayendo, por medio del ingreso, rentas y recursos de aquellas zonas de la economía que est[aban] calientes y dirigiéndolos, a través del gasto, a aquellas otras que est[aban] frías"[107]. Esto se conseguiría con medidas impositivas, que gravasen más a las rentas más altas, y destinando los gastos "a la protección social, las infraestructuras, los equipamientos sociales, los

---

[104] Según exponía el Anejo E, "Reflexiones sobre la inflación y la subida salarial" de un documento titulado "Materiales de estudio de cara a un Acuerdo Interconfederal para 1987" (fechado en Madrid a 16 de enero de 1987, op. cit.). Véanse también la documentación para las jornadas de acción sindical (adjunta a la carta del Secretario de Acción Sindical del 6 de noviembre de 1.987, op. cit.) y la "Circular de Negociación Colectiva para 1.988" (fechada en Madrid a 1 de febrero de 1988, op. cit.).

[105] Véanse la documentación para las jornadas de acción sindical (adjunta a la carta del Secretario de Acción Sindical del 6 de noviembre de 1987, op. cit.), "Salario y Competitividad" (en *Información Sindical*, núm. 82, mayo de 1990) y la "Evolución salarial 1986-1990" en *Información Sindical*, núm. 93, febrero de 1991.

[106] Véanse las "170 propuestas de UGT para aumentar y mejorar el empleo" (op. cit.); el núm. 60 de *Información Sindical*, mayo de 1988; "Por un compromiso de empleo: propuestas de UGT" en *Información Sindical*, núm. 69/70, marzo-abril de 1989, pág 28.

[107] Véase "El Recalentamiento de la Economía. Una visión Alternativa" (documento adjunto a la carta-circular del Secretario de Acción Sindical del 8 de septiembre de 1989, op. cit.).

servicios públicos, las viviendas sociales". Se complementarían estas medidas con controles de precios de determinados servicios, la fijación de límites al crédito familiar para el consumo y la reducción de los tipos de interés y de cambio. En pocas palabras:

> "Con la cadena propuesta de estudiar los grandes temas de nuestro crecimiento, diseñar las orientaciones de éste y poner tres instrumentos básicos a su servicio [inversiones, empresa pública y planificación tecnológica y formación], se llega a la definición de un marco sólido y preestablecido para la senda de la economía española a medio plazo. Un marco que condicione las políticas de ayuda, de incentivos, de formación, de educación, de apoyo y cuantas haya de menor rango es, sin duda el mayor medio de optimizar el crecimiento, con unas empresas reforzadas en sus expectativas y en su planteamiento empresarial. Evidentemente ello trae la consecuencia de más y, sobre todo, mejores empleos, con mejor formación, mayor valor añadido, mayor estabilidad y mucha mejor productividad" (suyo el subrayado)[108].

Pero, en cualquier caso, a la cúpula ugetista le parecía inadmisible que, dado que la inflación no era lo más preocupante y el déficit estaba controlado y "resulta[ba] evidente que ha[bía] que cambiar las prioridades económicas, el Gobierno prefier[iese] continuar con la estrategia de la etapa anterior", así como que "las prioridades continua[sen] centrándose en ambiciosos, y en ocasiones irreales, objetivos de contención de los precios y reducción del déficit público, y [que] cuando éstos se desvía[ban], no se duda[se] en aplicar medidas monetarias cuyos efectos sobre el crecimiento económico y el empleo [podían] ser muy negativos"[109].

3. Conclusiones: el valor de los costes organizativos y de la confianza

[108] "Reflexiones de la UGT para un compromiso de progreso por el empleo (2)" en *Información Sindical*, núm. 60, mayo de 1988.

[109] Vid. supra.

Durante la etapa de expansión económica, el Gobierno socialista pretendió continuar tanto con la concertación social como con la política económica practicadas hasta entonces, lo cual suponía, dado el contexto de competencia intersindical, someter a la UGT a una serie de amargos dilemas. Así, en la concertación que ofrecía el Gobierno, si este sindicato quería mayor nivel de empleo y más salario social futuro tenía que aceptar un menor incremento salarial[110]. La contención de los salarios era, además, la solución principal que ofrecía el Gobierno socialista para hacer frente a los problemas económicos que reaparecían (incremento de la tasa de inflación y deterioro de la balanza comercial). Pero, como hemos visto, la contención salarial suponía ahora un coste organizativo que la dirección de la UGT no estaba dispuesta a asumir. Ahora bien, como hemos planteado en el primer apartado de este capítulo referido a las discrepancias sobre gasto social, las exigencias que formuló la dirección de la UGT al Gobierno socialista no se pueden explicar exclusivamente por su miedo a perder las elecciones sindicales.

Para entender por qué la dirección de la UGT pasó a rechazar sin paliativos no sólo los acuerdos globales de contrapartidas sino la política económica del Gobierno socialista en su conjunto, se ha de tener en cuenta el papel que las estrategias económicas tenían para los líderes ugetistas. Para ellos lo importante no era tanto la estrategia económica en sí como sus resultados en términos de mejora del bienestar social a medio plazo (entendido principalmente como mejora de rentas, empleo y democracia industrial). Así, al comienzo de la primera legislatura del Gobierno socialista (1982-1986), la dirección de la UGT aceptó pasar por un período de reformas económicas, aceptando el abandono de anteriores estrategias atribuidas a los socialdemócratas, porque confiaba en que esas medidas proporcionarían a medio plazo una situación socioeconómica mejor a la que se encontraban entonces y los costes

[110] Aunque durante los períodos de crisis económica este sacrificio parece no ser tal, pues a la mayoría de los trabajadores no les queda más remedio que moderar sus incrementos salariales como pudieron ver en 1984 y, de nuevo, en 1994 y 1995.

"organizativos" eran asumibles[111]. Bien es cierto que, cuando la UGT tuvo que hacer frente a esos costes, su confianza se resintió e intentó que éstos fuesen los menos (como en el caso del destino de los trabajadores afectados por la reconversión industrial). Pero mientras la dirección ugetista creyó que la política económica reportaría los beneficios esperados, le siguió dando el visto bueno (según se desprende de su apoyo al programa electoral del PSOE en junio de 1986, de la negociación con el Ministro de Economía de septiembre de aquel mismo año y de las justificaciones de su nueva política salarial en la primera mitad de 1987).

Como acabamos de exponer, a partir de la conjunción de un contexto económico expansivo y el marco de representación de intereses laborales en España, el modo y ritmo de ejecución de ciertos objetivos estratégicos de la política económica del Gobierno socialista (la lucha contra la inflación o la reducción del déficit público) impedían o dificultaban que la UGT pudiese mantener su posición frente a sus rivales sindicales (como era mejorar el poder adquisitivo de sus votantes) o alcanzar objetivos ideológicos que garantizasen su propia identificación como sindicato socialista (como conseguir para pensionistas y desempleados la mejora de rentas que habían obtenido los asalariados). Pero todavía no denunciaba la estrategia económica del Gobierno socialista, pues ésta mostraba un notable éxito en crecimiento económico, reducción de la inflación y creación de empleo.

Hacia 1988, sin embargo, se empezó a constatar que la reducción del paro no era la deseada, se disparaba la población asalariada con contratos temporales y comenzaba el recalentamiento de la economía española. Estos resultados no queridos condujeron al

---

[111] Tenemos que recordar que uno de los ingredientes de esta estrategia, la contención salarial, ya la había practicado la UGT, incluso sin apoyo de CCOO, con los gobiernos de UCD desde 1979. Esta estrategia no había tenido ningún coste en términos de apoyos electorales. Quizás se pueda sugerir, aunque esto requeriría mayores estudios, que los líderes ugetistas sí que estuvieron dispuestos a aceptar pérdidas de apoyos a corto plazo esperando recuperarlos a la salida de la crisis. De ahí que el Gobierno socialista cambiase el período de cómputo de las elecciones sindicales de 2 a 4 años.

escepticismo de la UGT con respecto a la competencia económica del Gobierno, mientras que se confirmaba para éste último los peligros que estaba provocando la nueva política salarial del sindicato y, por tanto, la necesidad de conseguir la contención salarial. Es importante señalar que estos resultados macroeconómicos confirmaron a cada actor en sus planteamientos a la vez que en el descrédito de las argumentaciones de su contrario. La dirección de la UGT y el Gobierno socialista se enrocaron en sus análisis y soluciones de los problemas.

El PSOE reaccionó ante los éxitos a medias intentando profundizar en las reformas del mercado laboral (mediante el plan de empleo juvenil), lo cual chocaba justamente con otros objetivos de la UGT (como era el de una legislación laboral que primase la estabilidad contractual), así como manteniendo la política económica donde el control de los costes laborales tenía un papel fundamental. Pero en esta ocasión, y a diferencia de cuando llegó por primera vez el Partido socialista al gobierno seis años antes, los costes organizativos y en términos de renuncia a objetivos sociolaborales que entrañaba la estrategia económica del Gobierno socialista habían aumentado para la UGT y los resultados de dicha estrategia no eran además los esperados. Los dirigentes ugetistas, previendo los resultados futuros de la política del Gobierno socialista en función de los resultados presentes, dejaron de confiar en su estrategia económica (es decir, ya no creían que a medio plazo sus políticas fuesen a dar mayor empleo y redistribución), se negaron así a seguir apoyándola y reclamaron la vuelta a políticas más tradicionales combinadas con experimentos nuevos, pero en la línea tradicional del socialismo como superación del capitalismo. Esta política económica alternativa tenía, al menos, la virtualidad para la UGT de reducir sus costes en términos de renuncias a incrementos salariales y expansión del gasto social.

Ahora bien, dado que apoyar en solitario la estrategia económica del Gobierno socialista en una situación de crecimiento económico, aun cuando este fuese acompañado de una considerable creación de empleo y reducción de la inflación (la situación existente durante 1987), entrañaba importantes costes para la *organización* ugetista en

términos de pérdida de apoyos entre los trabajadores, ¿hasta qué punto las propuestas económicas de la UGT para salir del dilema que exponía el Gobierno entre mayores incrementos salariales o más empleo no eran meras cortinas de humo, peticiones irrealizables cuya única misión era la de hacer creer a la opinión pública que la política económica criticada no sólo implicaba la quiebra del sindicato socialista, sino la de toda la sociedad? En este sentido, no sería el grado de confianza de los agentes sociales en sus gobiernos lo que explicaría el nivel de apoyo de los primeros a las estrategias económicas de los segundos, sino los costes organizativos reales que les entrañasen a los agentes sociales tales estrategias. No parece, sin embargo, que este argumento pueda explicar el comportamiento de los dirigentes sindicales españoles. El hecho de que los dirigentes de UGT y CCOO rechazasen el Pacto Social de Progreso cuando los costes organizativos hubieran sido menores (en las dos organizaciones se sabía ya que la lucha intersindical no conducía a la hegemonía de una de ellas sobre el resto) sugiere que estaban convencidos de la necesidad de emprender otra política económica porque la realizada estaba mal planteada. El grado de confianza de los agentes sociales en sus gobernantes parece ser así un factor tan importante como los costes organizativos que entrañen las políticas económicas para explicar la reacción de los primeros a tales políticas.

Resumiendo, la dirección de la UGT exigió llevar a la práctica su estrategia económica preferida, rompiéndose así el consenso tácito que había existido con el PSOE desde 1983, cuando la política económica que sostenía este partido (i) le impidió alcanzar objetivos suyos (el nivel de apoyo de los trabajadores y sus principios igualitaristas) y, además, (ii) pareció que no proporcionaba otros (pleno empleo) o daba unos resultados negativos (expansión del empleo temporal, inflación, déficit comercial). Probablemente si esto segundo no se hubiera producido, la dirección de la UGT hubiera mantenido su postura de que sus demandas salariales no ponían en cuestión la estrategia económica del Gobierno socialista.

CAPITULO NOVENO

POSIBILIDADES Y RESTRICCIONES ESTRATEGICAS DE LAS RELACIONES DE SOLIDARIDAD ENTRE LOS PARTIDOS Y LOS SINDICATOS SOCIALDEMOCRATAS

En el primer capítulo vimos como las tesis tradicionales sobre la relevancia de las relaciones entre los partidos y sindicatos socialdemócratas defendían que estas organizaciones alcanzarían sus principales objetivos sociopolíticos, empezando por los más instrumentales, si colaboraban *solidariamente*. Sus relaciones se convertían así en uno de los rasgos distintivos de la socialdemocracia al igual que en uno de sus principales recursos de poder. De hecho, una intensa cooperación entre el partido y el sindicato se llegó a considerar un indicador de la fortaleza del movimiento obrero de ideología socialdemócrata. Pero vimos igualmente que, aunque esta creencia en la bondad y necesidad de mantener unas relaciones solidarias se desprendía en última instancia de la consideración de que partidos y sindicatos socialdemócratas compartían los mismos idearios, estas relaciones no dejaron de ser nunca un diseño estratégico basado en el reparto de ámbitos más propios de actuación, en la colaboración mutua (prestándose recíprocamente una serie de bienes y servicios) y en la coordinación de sus actividades.

Este diseño estratégico tenía así una serie de implicaciones restrictivas sobre las actuaciones que podían desarrollar los sindicatos y los partidos. En primer lugar, el reparto de ámbitos entrañaba que ambas organizaciones se comprometían a actuar preferentemente en unos determinados y acceder a otros por mediación de la organización hermana. En segundo lugar, la coordinación de actividades suponía además unas estrategias concretas en sus ámbitos

respectivos. En otras palabras, el sindicato actuaría en política principalmente por mediación de su partido de referencia, pero igualmente, y sobre todo cuando su partido hermano accedía a las tareas de gobierno, coordinaría también sus actuaciones en la negociación colectiva con las políticas económicas del Gobierno. Por su parte, el partido actuaría en el ámbito social a través del sindicato y coordinaría sus políticas gubernamentales, cuando accediese al poder, con las actuaciones sindicales en la negociación colectiva. Se engarzaba así la actuación política del sindicato con la actuación social del partido así como la acción sindical en la negociación colectiva con las políticas públicas. En el primer engarce o intercambio, que denominábamos político-electoral, el sindicato esperaba que el partido le proporcionase una acción política que satisficiese sus objetivos de empleo, gasto social, redistribución y democracia industrial, mientras que el partido obtendría un anclaje de votos que le permitiese ganar las elecciones. En el segundo engarce, que denominábamos coordinación económica, se conseguiría que las políticas económicas y sociales que convenían tanto a los partidos socialdemócratas como a los sindicatos tuvieran éxito. En última instancia, toda esta serie de intercambios se podía resumir en uno más general donde el sindicato alcanzaría sus variados objetivos no sólo apoyando al partido a ganar las elecciones, sino ayudando desde la negociación colectiva en las tareas de gobierno; y el partido ganaría las elecciones al tener éxito las políticas que satisfarían a los sindicatos.

Pero, en cualquier caso, las organizaciones partidistas y sindicales esperaban obtener a cambio de estas restricciones en su abanico de opciones estratégicas disponibles unos determinados bienes y servicios gracias a la colaboración de su socio. Las direcciones de las organizaciones estarían interesadas en seguir este complejo diseño mientras evaluasen que los beneficios obtenidos compensaban las restricciones estratégicas que acabamos de ver, pues éstas podrían suponerle a la organización un mayor o menor coste. A determinados sindicatos les era más difícil que a otros coordinar su actuaciones en la negociación colectiva con las políticas económicas de los gobiernos (o les era más difícil en unas coyunturas que en otras), y a unos partidos les era más fácil proporcionar esas políticas

progresistas que a otros (o, igualmente, más en unos contextos que en otros). ¿Le compensaba así al sindicato los beneficios que obtenía del partido hermano a cambio de la estrategia sindical que tenía que practicar en las relaciones laborales y de abstenerse de participar directamente en política? ¿Le compensaba al partido socialdemócrata la contribución que hacía el sindicato a sus éxitos electorales a cambio de la actividad política que tenía que realizar en su favor, y en el caso de que estuviese en el gobierno, pactar con él sus políticas gubernamentales? La respuesta que diese cada organización sobre la cuestión de mantener o no las relaciones de solidaridad dependería en ultimo término de la contestación que diese a estas preguntas.

La tesis defendida por Howell y Daley plantea, como vimos en el primer capítulo, que profundas transformaciones estructurales de índole económico y social impiden o dificultan que las organizaciones obtengan los bienes esperados y, por tanto, provocan el abandono de este diseño estratégico. En el intercambio político-electoral, tales transformaciones llevan a que ni el sindicato obtenga pleno empleo, más gasto social, redistribución, ni su apoyo le represente al partido un activo electoral (o le resulta incluso perjudicial). En la coordinación económica, la negociación colectiva centralizada pasa a ser percibida como inapropiada para defender los intereses de las bases sindicales, y además innecesaria o incluso perjudicial para el éxito de las políticas económicas. En pocas palabras, cada organización constata que su antiguo socio ha dejado de proporcionar los anteriores bienes y servicios, o éstos ya no resultan un beneficio. Planteados en estos términos, se entiende que las tradicionales relaciones partido-sindicato de la socialdemocracia se disuelvan, pues ni el partido ni el sindicato alcanzarán sus objetivos (consolidación de la organización, votos, políticas sociales, contención salarial, etc) mediante su colaboración mutua, y por tanto, dejarán de evaluar que les merece la pena mantenerlas.

Pero, ¿es necesario que se dejen de obtener los bienes y servicios esperados para que las organizaciones ya no evalúen que les compensa las restricciones estratégicas que entrañan sus relaciones solidarias? Esta pregunta se haría especialmente interesante si, como vimos, no estuviese tan claro que los comentados cambios

estructurales se hubieran dado con tal intensidad o no en todos los países por igual; o, de producirse, que hubiesen provocado dichos efectos negativos sobre los intercambios de bienes y servicios entre los partidos y los sindicatos como se creía, o no en todos los países por igual. Por ejemplo, en el intercambio político-electoral, no está tan claro que todas las transformaciones sociales en los electorados europeos hagan perder el interés de los partidos socialdemócratas en contar con los apoyos de los sindicatos, incluso aunque el peso electoral de los sectores movilizados políticamente por éstos haya disminuido. Tampoco resulta tan evidente que los resultados sociales de las políticas socialdemócratas tengan que dejar de atraer a los sindicatos, sobre todo, si las políticas conservadoras son incluso más restrictivas. Pero, además, podrían aparecer otros factores que hiciesen que la colaboración entre los partidos y los sindicatos fuese interesante para seguir obteniendo sus variados objetivos. En contra de lo que se suele afirmar, la coordinación económica podría ser incluso más necesaria con políticas de oferta, pues la contención salarial permitiría luchar contra la inflación y el desempleo sin tener que endurecer tanto la política monetaria (Scharpf 1992). En otras palabras, los sindicatos podrían seguir contribuyendo al éxito de las políticas de los gobiernos socialdemócratas y, por tanto, a sus victorias electorales. Los sindicatos estarían incentivados a entrar en esta coordinación "de oferta", pues los partidos socialdemócratas podrían llevar a cabo políticas que diesen mejores resultados en términos de empleo *y* gasto social que la visión liberal-conservadora, donde la disminución del gasto público suele aparecer como condición para un crecimiento económico sostenido y la disminución del desempleo. Pero, por otro lado, quizás podrían existir otros factores que *complicasen* las relaciones partido-sindicato de solidaridad, como vimos en el capítulo sexto, sin ser necesario que se produjesen intensos cambios estructurales de orden económico o social. Al fin y al cabo, la transformación de las relaciones entre los sindicatos y partidos italianos y holandeses se produjo a finales de los años sesenta y principios de los setenta, si bien es verdad que las relaciones de solidaridad en la familia comunista no eran exactamente iguales a las socialistas.

En breve, ¿no podría ocurrir que partidos y sindicatos socialdemócratas sigan teniendo buenos motivos para mantener sus relaciones tradicionales dado, por ejemplo, que la coordinación económica podría seguir siendo muy conveniente? ¿No resulta, sin embargo, esta coordinación muy frágil en contextos de competencia intersindical? ¿Qué fue, por tanto, lo que llevó realmente a que los dirigentes tanto de la Unión General de Trabajadores como del Partido Socialista evaluasen que aquella colaboración estratégica que habían diseñado a base de repartir ámbitos de actuación preferente, de intercambios de bienes y de coordinación de actividades no era el mejor modo para alcanzar los objetivos que se fijaban en sus congresos? ¿Las estrategias económicas llevadas a cabo por el Gobierno socialista? ¿El aumento del peso electoral de las clases medias? Estos cálculos vinieron determinados por unas concretas estructuras de oportunidades y dilemas en los que se encontraba tanto la Unión General de Trabajadores como el Partido socialista, y no tanto por cambios macroestructurales de la economía o de la sociedad española. El caso español de cambio de relaciones en la familia socialista relativiza, por tanto, la importancia de supuestos cambios macroestructurales y destaca, por el contrario, la relevancia de los entornos institucionales combinados con acontecimientos específicos.

1. Las restricciones y los beneficios de las relaciones solidarias en contextos de pluralismo sindical y antagonismo interpartidario

Para entender porqué la dirección de la UGT dio por terminadas sus relaciones de solidaridad con el PSOE hay que analizar, por tanto, cuáles fueron sus cálculos referentes tanto a la coordinación económica como al intercambio político-electoral, es decir, si le compensaba coordinar sus actuaciones en la negociación colectiva con las políticas económicas del Gobierno socialista y abstenerse de intervenir directamente en el ámbito político a cambio de las políticas que obtenía del PSOE. En el capítulo anterior hemos visto que a finales de los años ochenta se hacía evidente que se

mantenía un alto nivel de desempleo al mismo tiempo que reaparecían ciertos problemas económicos tales como una aceleración de la inflación y un empeoramiento del déficit comercial, todo lo cual llevó a que la dirección de la UGT dejase de confiar en la estrategia económica del Gobierno socialista. Partido y sindicato disentían así sobre los orígenes de los problemas y sobre las estrategias económicas para resolverlos. Pero estas disensiones no fueron, como vimos en el capítulo séptimo, lo que llevó a la dirección ugetista a dar por terminada la coordinación económica (si acaso, explicaría su rechazo a recomponerla en los años noventa). Por el contrario, la descoordinación de la actividad sindical en la negociación colectiva con las políticas del Gobierno socialista se produjo cuando los ugetistas evaluaban que existía "una nueva etapa de creación de empleo", que el ritmo de crecimiento del gasto social era el adecuado, y que los pactos sociales habían sido globalmente positivos. En otras palabras, no parece que la dirección ugetista rompiese con uno de los intercambios principales que entrañaban las relaciones solidarias porque evaluase que el partido hermano hubiese dejado de dar los bienes que le pedía. Pero es más, vamos a ver que la dirección de la UGT llegó a la conclusión de que las relaciones solidarias con el PSOE no eran esa vía para conseguir sus objetivos en el ámbito político antes de que hubiese empezado realmente su enfrentamiento por cuáles eran las estrategias económicas adecuadas para reducir más el desempleo, luchar contra la inflación y mantener la competitividad de la economía española. Así, frente a las tesis más extendidas sobre las razones del abandono de las relaciones tradicionales entre los partidos y sindicatos socialdemócratas que acabamos de exponer, en el caso español parece claro que las nuevas políticas económicas de oferta, y, por tanto, los factores que llevaron al gobierno socialista a adoptarlas, no explican por qué la dirección ugetista rompió con el modelo solidario, es decir, por qué la UGT evaluó que no era conveniente para alcanzar sus objetivos ni coordinar sus actividades en el ámbito laboral con las políticas

económicas ni proceder a la división tradicional de ámbitos de actuación[1].

1.1. La coordinación económica: de recurso a lastre

Como se expuso en el capítulo sexto, el diseño estratégico solidario, cuando se daba en un contexto de pluralismo sindical y los partidos mantenían entre sí un grado considerable de antagonismo (como era el caso del PSOE y el PCE para la política nacional), conducía a que los sindicatos no coordinasen entre sí sus actuaciones ni para influir en el ámbito político ni para relacionarse con los empresarios. Los líderes sindicales tenían que evaluar entonces si las relaciones solidarias con un partido político determinado o la unidad de acción sindical (o incluso alguna otra alternativa estratégica que se le pudiera presentar) era más eficaz para conseguir sus variados objetivos. Por un lado, las relaciones de solidaridad con un partido que hubiese llegado al poder parecían ofrecer grandes posibilidades para que el sindicato alcanzase sus objetivos sociopolíticos e incluso organizativos largamente buscados. Pero el apoyo que tendría que prestar a su Gobierno en ese contexto de antagonismo interpartidario y competencia intersindical representaba grandes desafíos para la supervivencia de la organización (véase capítulo sexto). Finalmente, la presencia de otros sindicatos ofrecía, además, la posibilidad de emprender otras estrategias alternativas que, en última instancia, podrían entrañar menores riesgos así como mayores posibilidades de alcanzar sus objetivos sindicales en el ámbito laboral y en el político.

Pues bien, los dirigentes ugetistas eran plenamente conscientes de este dilema estratégico, y de sus posibles consecuencias, para cuando el PSOE ganó las elecciones legislativas de 1982[2]. Así, en su 33º Congreso Confederal exponían claramente que:

---

[1] Tampoco fueron por razones ligadas a la necesidad de descentralizar la negociación colectiva, como vimos en el capítulo séptimo.

[2] No parece, sin embargo, que la mayoría de los dirigentes del PSOE fuesen tan conscientes de los dilemas a los que se vería sometido su sindicato hermano una vez que ellos se alzasen con el poder. En las resoluciones del congreso del PSOE

"Para la UGT el acceso del PSOE al Gobierno supone una situación históricamente nueva que introduce una gran complejidad tanto en la redefinición de las relaciones sindicato-partido, como en la estrategia sindical a seguir" (R.33C.UGT.1983:44).

Por un lado, vimos en el capítulo segundo que los ugetistas tenían grandes expectativas sobre los beneficios que supondría la llegada del Partido socialista al gobierno, para la consecución tanto de sus objetivos más finales como de los más inmediatos e instrumentales. Al mismo tiempo, creían que el propio hecho de la competencia intersindical podría ser incluso beneficioso si la UGT conseguía superar a su rival sindical y convertirse de esta manera en el sindicato hegemónico español. Pero, por otro, eran plenamente conscientes de que las relaciones solidarias con el partido del Gobierno entrañaban riesgos importantes para la organización. Exponían así que esa "complejidad" se hacía más intensa en España que en otros países europeos "cuando partidos de corte socialista ha[bían] accedido al poder", porque en este país existía un "*esquema de pluralidad sindical* que cuando menos [podía] permitir que las potenciales contradicciones se agudi[zasen] por la interferencia de las restantes fuerzas en juego y por el grado de evolución político-sindical de la sociedad española" (R.33C.UGT.1983:44, mía la cursiva). Recelaban, en concreto, de que el Gobierno socialista se viese obligado "en las actuales circunstancias a practicar políticas, que si bien a largo plazo [podían] sanear la situación del conjunto del país, a corto y medio plazo y de forma inmediata podrían no ser asumibles por los trabajadores asalariados" (R.33C.UGT.1983:44). En otras

---

anterior a su victoria electoral se limitaban a recordar las características e implicaciones básicas de las relaciones de solidaridad para cuando aquel momento llegase, es decir, se reafirmaba el principio de la autonomía del Sindicato (pues era "evidente que la llegada al poder de los socialistas no puede suponer, en ningún caso, la subordinación de la política sindical a los intereses del gobierno"), el acceso de la UGT a las decisiones que tomase el futuro gobierno socialista así como que éste contaría con su apoyo, y los beneficios que obtendrían ambas organizaciones de su colaboración (R.29C.PSOE.1981:192).

palabras, se temían que la aplicación de determinadas políticas por parte del Gobierno socialista combinado con la actuación de otras fuerzas pusiese en juego no sólo la viabilidad del modelo de relaciones con el PSOE, sino también la propia posición de la UGT con respecto a sus rivales sindicales[3].

Estos riesgos y posibilidades de hegemonía llevaron a la UGT, ya al principio de sus relaciones con el Gobierno socialista, a hacer hincapié en el principio de autonomía sindical (R.33C.UGT.1983:44), por lo que no descartaba, "ni el apoyo firme de posturas progubernamentales cuando autónomamente [creyese] que ese [era] el interés de los trabajadores, ni mucho menos el de posturas de enfrentamiento, tan enérgico como [fuese] necesario cuando autónomamente el Sindicato [creyese] lo contrario". Si bien, en principio, "su posición, ante el Gobierno Socialista, estar[ía] tan lejana de la confrontación como del sometimiento y ser[ía] el comportamiento de éste quien consecuentemente [encontrase] en nuestra Central Sindical, como respuesta, una política de reivindicación, de proposición o de sostenimiento en cada circunstancia" (R.33C.UGT.1983:45)[4]. Pero, sobre todo, una vez que en la dirección de la UGT se hicieron conscientes de que se iba a mantener en España la pluralidad sindical no tenían más remedio que dar una respuesta al dilema entre relaciones de solidaridad y unidad de acción, es decir, los dirigentes sindicales tenían que evaluar las ventajas e inconvenientes que entrañaban cada una de las opciones,

---

[3] "En estas circunstancias [se refieren a la pluralidad sindical, la crisis económica, una estructura social estamental y corporativa], el problema planteado es ¿Qué hacer? Del grado de acierto posiblemente dependa el que UGT pase a ser la fuerza hegemónica del sindicalismo español" (R.33C.UGT.1983:44).

[4] Parece que la búsqueda de esta libertad de acción llevó a que la Comisión Ejecutiva Confederal de la UGT tomara la decisión de que ninguno de sus miembros formase parte del Gobierno (según declaró José Luis Corcuera durante la entrevista con el autor del día 10-10-96). Nicolás Redondo ha afirmado igualmente en la entrevista que le hizo Burns Marañón (1996:209) que decidieron que, si algún miembro de la Ejecutiva ugetista era propuesto para el cargo de ministro, aceptarían la invitación salvo en el caso de que fuese para el Ministerio de Trabajo.

sopesándolas tanto en el ámbito de las relaciones laborales como en el ámbito político.

En el primero de los ámbitos, la dirección de la UGT tenía que coordinar sus actuaciones con el Gobierno socialista mediante aquellos acuerdos globales de contrapartidas donde los sindicatos ofrecían, entre otras cosas, la contención salarial. Pero, como vimos teóricamente en el capítulo sexto, el objetivo de no perder apoyos entre los trabajadores podría forzar a los sindicatos a moderar o radicalizar sus actuaciones en las relaciones laborales en función de si el contexto favorecía que un sindicato pudiese movilizar en solitario a los trabajadores. Para cuando llegó el PSOE al poder, la estrategia de negociación centralizada parecía ser la más adecuada para asegurar los puestos de trabajo y obtener así el apoyo de los trabajadores. A partir de la recuperación económica, sin embargo, la estrategia movilizadora sería la que contaría con el apoyo de los trabajadores, pues conseguiría beneficios individuales para ellos y no les haría esperar (y confiar) a que los sociales se materializasen (además de que un grupo concreto de trabajadores podría maximizar su bienestar obteniendo ambas clases de bienes si el resto de trabajadores no lo intentaba también). En cualquier caso, los ejemplos de la CFDT en Francia, Solidaridad en Polonia y la UGT en España muestran que, cuando las organizaciones evalúan que el apoyo a las políticas de gobiernos "amigos" implica (o implicará) sufrir una importante "crisis de representación" entre los asalariados, dejarán de prestar tal apoyo[5]. En otras palabras, la conservación de la organización es una condición *sine qua non* para que un sindicato apoye en las relaciones laborales cualquier clase de política económica, aunque no suficiente como se expuso en el capítulo anterior. El máximo dirigente de la UGT lo expuso así claramente en el congreso del PSOE de 1988:

"Pese a la existencia de diferencias profundas [entre la UGT y el PSOE] hay, sin embargo, principios esenciales en los que

[5] Si bien, como hemos visto en el capítulo anterior, el deseo de evitar tales crisis de representación sólo les conduciría a rechazar en principio aquellas medidas que considerasen más lesivas para la organización, no a todo el conjunto de la política económica.

> pudieran basarse unas buenas relaciones. En primer lugar, está el pleno reconocimiento del papel del propio sindicato en una sociedad democrática, *cuya función primordial es la defensa de las reivindicaciones de los trabajadores, prioridad que no puede estar condicionada por la orientación política de quien alternativamente gestiona el Gobierno* [6]".

Ahora bien, la preservación de la organización llevaría a que los dirigentes sindicales exigiesen sólo la autonomía necesaria para emprender la estrategia que considerasen más conveniente para el contexto en que se desarrollaran las relaciones laborales, rompiendo la coordinación económica si fuese preciso. Pero todavía tendrían que evaluar los ventajas e inconvenientes de aquella división de ámbitos de actuación, es decir si seguirían considerando que el mejor modo de influir en el ámbito político sería a través de un partido político concreto (apoyándole para ello en las elecciones legislativas) o, por el contrario, sería más conveniente colaborar con varios partidos, así como dar por terminada la división de ámbitos de actuación preferentes entre partidos y sindicatos y acercarse a su antiguo rival sindical para realizar juntos una presión al gobierno que fuese más efectiva.

1.2. La vía partidista solidaria y la unidad de acción sindical

El hecho es que en el verano de 1987 la dirección ugetista todavía no se había decidido por esta última opción. Rechazaba, como vimos, la propuesta de un nuevo acuerdo global de contrapartidas y prefería otros sectoriales. Pero al mismo tiempo dejaba claro que esta preferencia no significaba que limitase su influencia en el Gobierno a lo alcanzado en esos acuerdos. Para la UGT "la coherencia global de la acción de gobierno se establec[ía] en su programa electoral. En ese sentido, el gobierno socialista [tenía] toda la legitimidad para desarrollar el proyecto de progreso que la

---

[6] Discurso de Nicolás Redondo al 31º Congreso del PSOE de 1988, pág. 8, op. cit., mía la cursiva.

mayoría social respalda[ba]"[7]. Y remarcaban que "[e]l compromiso programático del gobierno *y su apoyo básico en el bloque social de progreso* constitu[ían] piezas irrenunciables" (mía la cursiva), recordándole que "el gobierno, en la plena aplicación del programa electoral de progreso, cuya responsabilidad enteramente le compet[ía], siempre tendr[ía] el apoyo de UGT". En pocas palabras, en el verano de 1987, los dirigentes ugetistas todavía no pretendían influir en las políticas del Gobierno socialista ni buscando el apoyo parlamentario de otros partidos políticos ni a través de la vía "neocorporativista"[8], sino por mediación de "su" partido político, pues para ello el sindicato socialista era parte integrante del "bloque social de progreso" que sostenía al PSOE[9], habían negociado con este partido su programa electoral[10] y le habían apoyado abiertamente en

---

[7] Véase la carta-circular del Secretario de Acción Sindical del 31 de julio de 1.987. Op. cit.

[8] Es decir, como se comentó en el primer capítulo, el conjunto de arreglos que permitían una incorporación directa de los grupos de intereses al diseño y ejecución de las políticas gubernamentales sin tener que pasar por la intermediación de los partidos políticos.

[9] "Las posiciones presentadas [por los empresarios] no pueden machaconamente exigirse a un gobierno sustentado por un partido socialista que ha ganado las elecciones con un programa electoral progresista, que entre otras cosas fue fruto de un compromiso con la Unión General de Trabajadores. Nosotros le dimos nuestro apoyo electoral, fortaleciendo un proyecto de progreso que la mayoría de la sociedad respalda. Se gobierna para todos, pero la acción de gobierno no es un hecho neutral en democracia y no puede olvidarse que el Presidente del Gobierno es Secretario General del Partido Socialista Obrero Español y que la totalidad de los miembros del Gabinete son socialistas con un compromiso político que choca con las exigencias regresivas de intereses minoritarios de la derecha económica" ("UGT, ante la concertación social para 1987" documento adjunto a la carta-circular del Secretario General y del de Acción Sindical de la UGT del 17 de diciembre de 1986, op. cit.).

[10] En las elecciones legislativas de junio de 1986, la dirección de la UGT había pedido abiertamente el voto por el PSOE, tanto por razones "solidarias" y ser "una constante histórica", como porque este partido, afirmaban, había aceptado introducir en su programa electoral sus "exigencias" (Véase el artículo de Nicolás Redondo aparecido en el diario *El País* el día 19 de junio de 1986).

las elecciones legislativas[11]. De la misma manera, tampoco pretendían intervenir en política mediante la unidad de acción con CCOO. Así, frente a la frecuente afirmación de que esta coordinación entre ambos sindicatos españoles comenzó aquel año, es importante remarcar que durante 1987 la dirección ugetista no se había decantado por ella ni tan siquiera para actuar en el ámbito de las relaciones laborales (mucho menos, como vía alternativa a la partidista para influir en el ámbito político).

En el capítulo sexto se hizo hincapié en que había que diferenciar una mera coincidencia de comportamientos entre los sindicatos de la coordinación voluntaria de sus actuaciones. En el primer caso, la "lógica sindical" les conducía a no diferenciar sus estrategias para no perder apoyos frente a su rival, mientras que en el segundo los sindicatos coordinaban sus actuaciones para alcanzar un resultado del cual ambos saliesen ganando sin correr el riesgo de que uno de ellos dejase al otro en la estacada con objeto de hacerse con parte de sus apoyos. Pues bien, la dirección de la UGT hacía hincapié que entre los dos sindicatos más representativos simplemente ocurría que:

> "Las plataformas de CCOO en el ámbito estricto de la negociación colectiva presentan una suficiente proximidad a nuestras posiciones, (...) que permite la conjunción de posiciones en las mesas de negociación de los convenios a celebrar"[12].

De hecho, para los líderes ugetistas:

> "El resto de los sindicatos, principalmente CCOO, fijaron sus estrategias en unas posiciones similares a las mantenidas por UGT, lo que en la práctica, y a pesar de no haber ningún acuerdo global, llevó a una negociación conjunta de la gran

---

[11] Véase *El País*, 2-9-87 y las declaraciones de Antón Saracíbar realizadas a *El País* 6-9-87.

[12] Memoria de Gestión de la Secretaria de Acción Sindical con registro de entrada por la FEJP el día 30-3-87, pág. 12, op. cit.

> mayoría de los convenios, aunque a la hora de la firma hubo ciertas discrepancias"[13].

Claro estaba, aquello no significaba la pérdida de identidad de la UGT[14], pero señalaban que se había de dar ya por finalizados los tiempos de enfrentamiento con CCOO[15]. No será, por tanto, hasta más tarde cuando UGT y CCOO pasaron a coordinar sus actuaciones. Este rechazo a emprender una unidad de acción sindical para el ámbito político queda reflejado, simbólicamente, en la negativa de la Ejecutiva ugetista a celebrar el 1º de mayo junto a CCOO tanto en 1987 como en 1988.

Ahora bien, si las relaciones con el PSOE no supusiesen para el Sindicato obtener las políticas que deseaba -y hacia principios de 1988 a su Secretario General le parecían claramente insatisfactorias[16]-

---

[13] "Balance de la Negociación Colectiva: 1987", documento adjunto a la carta-circular del Secretario de Acción Sindical del 14 de marzo de 1988, pág. 6, op. cit.

[14] "Durante todos estos años, UGT ha marcado la pauta de la negociación colectiva en nuestro país y pretendemos seguir haciéndolo, máxime con nuestra legitimidad acrecentada por los resultados electorales. Ello supone el mantenimiento de una política sindical propia, de una estrategia de identidad que resulta incompatible con la unidad de acción entendida en términos políticos y con pérdida de nuestro propio proyecto sindical" (Memoria de Gestión de la Secretaria de Acción Sindical con registro de entrada por la FEJP el día 30-3-87, pág. 30, op. cit.).

[15] "Pero tampoco puede significar una estrategia de diferenciación, directamente buscada y transformada en un fin en sí misma, pues muy al contrario y a pesar del reflejo objetivo de las diferencias constatables, debemos hacer un esfuerzo de limarlas en la medida de lo posible" (vid. supra, pág. 30).

[16] "En los últimos diez años los socialistas hemos perseguido el objetivo de conseguir una salida progresista de la crisis económica. Desde esta perspectiva se justificaban los sacrificios de los trabajadores, la adopción de políticas tendentes a la recuperación de los excedentes empresariales, y las mayores facilidades para la contratación laboral. Sin embargo, siendo evidente el mejoramiento económico y habiéndose realizado el sacrificio de los trabajadores, cabe preguntarse: ¿estamos ante esa salida progresista de la crisis? Y, lo que es más importante: ¿se ha elaborado una alternativa para alcanzar esa salida progresista? En definitiva, ¿está clara la existencia de un proyecto socialista? La respuesta no parece positiva a ninguna de estas

las relaciones de solidaridad, en vez de ser la mejor estrategia para influir en el ámbito político, se convertían en un obstáculo para conseguir alcanzar sus objetivos en aquel ámbito por otras vías. En otras palabras, en función de la actuación del PSOE el sindicato socialista elegiría una u otra opción, y así se lo fueron haciendo saber a la dirección del partido hermano[17].

Como ya se dijo, en las elecciones generales de junio de 1986, la dirección de la UGT había pedido abiertamente el voto por el PSOE. En las siguientes elecciones, para municipios, autonomías y Parlamento Europeo, ocurridas en junio del año siguiente tras los duros enfrentamientos por la cuestión de las subidas salariales, el apoyo ya fue mucho más matizado. Así, por un lado, el máximo dirigente de la UGT precisaba que no había que mezclar sus discrepancias con determinadas políticas del PSOE de la gestión realizada por ese partido en ayuntamientos y comunidades autónomas y que sus candidaturas representaban las políticas que los ugetistas defendían, por lo que recomendaba el apoyo a las candidaturas del PSOE para las elecciones del 10 de junio de 1987. Pero, por otro lado, se hacía igualmente hincapié en que no había candidaturas de la Unión General de Trabajadores y que, por tanto, se tomaba la decisión de permitir "la libre decisión de cada afiliado a la Unión General de Trabajadores para ejercer su derecho al voto" (*El País* 19-5-87). Esta vez serían las uniones territoriales de la UGT las que se encargarían de dar su apoyo a las federaciones territoriales

---

preguntas" (Discurso de Nicolás Redondo al 31º Congreso del PSOE de 1988, op. cit.).

[17] El máximo líder de UGT, Nicolás Redondo, ya había de hecho señalado durante el 34º Congreso de la UGT, celebrado en 1986, que las relaciones entre el PSOE y la UGT habrían de ir cambiando a medida que el sindicato fuese abriéndose a "otros trabajadores que puedan tener opciones políticas distintas de las socialistas" (*El País* 4-4-86), sin concretar en qué consistiría ese cambio. Puntualizaba además que, al convertirse UGT en una organización de masas, sería muy problemático intentar mantener una acción sindical circunscrita al contorno de un partido (*El País* 4-4-86). Pero ya vimos que las resoluciones de aquel congreso confirmaron el modelo histórico de relaciones.

del PSOE[18]. A raíz de los resultados electorales que obtuvo este partido[19], la dirección de la UGT subrayó que su pérdida de votos demostraba que "las políticas reiteradas de ajuste, sin poner al mismo tiempo el acento en el Estado de Bienestar (...) produ[cían] una disgregación del bloque social mayoritario de nuestro país" (*El País* 13-6-87). Las advertencias continuaron meses después con motivo de la negociación de los incrementos salariales de funcionarios y pensionistas que vimos en el capítulo quinto. La dirección de la UGT hizo saber al PSOE que, o bien los diputados socialistas con cargos en la UGT no darían su aprobación a los presupuestos generales para el año siguiente[20], o bien renunciarían a sus escaños (*El País* 10-9-87)[21]. En palabras de Nicolás Redondo:

"Los diputados del PSOE que tienen cargo en UGT se tendrán que enfrentar a un duro dilema"[22].

A finales de septiembre de aquel año, la Comisión Ejecutiva Confederal del sindicato socialista pidió que los parlamentarios socialistas "que desempeña[sen] cargos de relevancia en UGT" analizasen las diferentes alternativas y actuaran con "coherencia

---

[18] El propio Secretario General de la UGT apoyó a los candidatos del PSOE en Madrid y en el País Vasco. Pero destacados militantes del sindicato rechazaron formar parte de candidaturas socialistas como José María Zufiaur y José Luis Daza (*El País*, 19-5-87).

[19] El PSOE obtuvo el 39,4% de los votos en las elecciones al Parlamento Europeo cuando en las elecciones al Congreso de los Diputados, celebradas el año anterior, había obtenido el 44,4% de los votos.

[20] Véase *El País* 29-9-87. Dentro del grupo parlamentario socialista había aproximadamente una docena con cargos de alta responsabilidad sindical, pero el número de diputados y senadores vinculados estrechamente a la organización podía subir a 40 (*El País* 30-9-87).

[21] Ya durante una reunión del Comité Confederal de la UGT celebrada en abril de aquel año, varios de sus participantes habían propuesto que de continuar las divergencias con el Gobierno socialista se debía considerar la posibilidad de hacer incompatible desempeñar determinados cargos en el sindicato y en el PSOE (*El País* 12-4-87).

[22] Afirmación de Nicolás Redondo recogida por *El País*, 27-9-87.

sindical" respecto a los Presupuestos Generales del Estado para 1988 (*El País* 1-10-87)[23]. Pero al final sólo Nicolás Redondo y Antón Saracíbar dejaron sus escaños, antes de que se votasen los Presupuestos Generales del Estado[24].

Finalmente, el Secretario General de la UGT, con ocasión del 31º congreso del PSOE celebrado en enero de 1988, dejó bien claro que el modelo solidario de relaciones entre ambas organizaciones dejaría de interesar a los ugetistas si valoraban que aquellas relaciones no constituían la mejor estrategia para influir en el ámbito político[25]:

---

[23] El Secretario de la federación de Banca, Justo Fernández, señalaba que "ahora se ver[ría] si los compañeros del sindicato [tenían] en más valor su vinculación sindical que el acta y el sueldo de diputado" (*El País*, 2-10-87). El Secretario de la federación de la Construcción, Manuel Garnacho, declaraba igualmente que "sería honesto, honrado y justo que cargos de UGT con acta de diputado, en caso de que se [aprobasen] esos presupuestos, deberían dimitir o someterse, pero no [podían] seguir en dos sitios manteniendo posturas diferentes" (*El País*, 3-10-87). La dirección ugetista en Cataluña exigía igualmente "el máximo de coherencia a todos los cuadros sindicales de la organización, así como a los distintos organismos que la integra[ban]" (*El País* 22-10-87). Desde el gobierno y partido socialista también se realizaron presiones sobre los diputados socialistas con objeto de que ni votaran en contra de su gobierno ni dejasen sus escaños. El Ministro de Economía, Carlos Solchaga, se reunió con el grupo parlamentario socialista del Congreso y al termino de la reunión afirmaba que "si los diputados de UGT votan en contra [de los Presupuestos], ello tendrá que desembocar en una profunda reflexión de todos los militantes socialistas" (*El País* 14-10-87). Días más tarde José María Benegas, Francisco Fernández Marugán y José Luis Corcuera convocaron a los diputados y senadores del PSOE con cargos de responsabilidad en UGT para pedirles que no renunciasen a sus escaños (*El País* 29-10-87).

[24] Otros líderes ugetistas también se dieron de baja, o bien de sus cargos institucionales (el Secretario General de la UGT de Andalucía abandonó su escaño en el parlamento autonómico) o de su militancia en el Partido socialista, como el Secretario de la federación minera (*El País* 10-11-87). Pero se mantuvieron como diputados o senadores el Secretario de Relaciones Institucionales de la UGT, el cual no tardaría en salir de la Ejecutiva ugetista, y varios secretarios de uniones y federaciones provinciales de la UGT.

[25] Ya durante el año anterior se habían lanzado insinuaciones desde la UGT de que las relaciones debían cambiar. En marzo de 1987 Antón Saracíbar, durante una intervención ante el pleno del grupo parlamentario del PSOE, tras repasar las

"La verdad es que, si todo lo que esperamos del Gobierno socialista los trabajadores tenemos que pactarlo con los empresarios, es mejor quedarnos con las manos libres"[26].

Es decir, o las relaciones de solidaridad con el PSOE eran efectivamente el mejor modo de influir en las decisiones gubernamentales, o la dirección de la UGT lo intentaría por otras vías. De producirse lo primero, no habría razón alguna para romper con el partido:

"Pero, siendo insuficiente la acción sindical por sí sola para avanzar en un proyecto de transformación de la sociedad, resulta fundamental la convergencia con una acción política para aunar voluntades y esfuerzos en torno a una política de cambio, pero de cambio real. Una política de progreso, pero de progreso cierto. Un proyecto socialista nítido y claro"[27].

Y, de hecho, las relaciones se fortalecerían:

"El entendimiento que alentamos, y que ha inspirado nuestra intervención, parte de un esfuerzo conjunto que permita fortalecer y estrechar nuestras relaciones y tiene bases objetivas, las de una acción orientada hacia el progreso social que impulsemos todos con igual entusiasmo desde la responsabilidad que a cada uno nos corresponde"[28].

En resumen, hacia 1987 la dirección de la UGT rechazaba ya la coordinación de sus actividades sindicales en las relaciones laborales con las políticas económicas del Gobierno socialista, pero todavía

---

discrepancias existentes hasta entonces, planteaba que "por encima de problemas coyunturales, lo que ha[bía] que hacer e[ra] clarificar criterios de cómo ha[bían] de ser las relaciones entre un sindicato y un partido hermanos, y más cuando ese partido est[aba] en el poder" (*El País* 26-3-87).

[26] Discurso de Nicolás Redondo al Congreso del PSOE de 1988, pág. 16, op. cit.

[27] Vid. supra., pág. 8.

[28] Vid. supra., pág. 18.

consideraba que sus relaciones con el PSOE podrían constituir la mejor vía para influir en el ámbito político. En otras palabras, los dirigentes ugetistas habían concluido que tenían que desprenderse solamente de los "costes" que las relaciones solidarias entrañaban en el ámbito de las relaciones laborales, pero no habían dejado ya de aspirar a sus beneficios en el ámbito político[29]. Sin embargo, al final [Nicolás Redondo, entrevista de Burns Marañón (1996:210)]:

"Nos dimos cuenta de que por tener a nuestra gente en el partido no teníamos *más* influencia, como tampoco la teníamos en el grupo parlamentario, del cual tuve que dimitir" (mía la cursiva)[30].

[29] Ahora bien, queda por aclarar si la dirección de la UGT estaba dispuesta al extremo de poner al PSOE en una situación tal que perdiese las siguientes elecciones legislativas, o precisamente estaba dispuesta a emprender cualquier vía con tal de que el Gobierno diera satisfacción a sus peticiones porque contaba con que el Partido socialista seguiría en el poder. Esta última opción parece que era la sostenida por el Secretario General de la UGT, o al menos es lo que exponía públicamente:

"Somos conscientes que las diferencias existentes entre Gobierno y UGT producen inquietud entre los socialistas. Preocupación que se manifiesta por diversas razones: algunos compañeros piensan que esto puede afectar negativamente las posibilidades electorales; otros temen la repercusión sobre posiciones trabajosamente logradas, aunque la preocupación de la inmensa mayoría proviene de pensar que un deterioro de nuestras relaciones puede llegar a cuestionar una trayectoria histórica y hasta la propia visión del proyecto socialista. Sinceramente, no creemos que esto pueda suceder" (Discurso de Nicolás Redondo al 31º Congreso de 1988, op. cit.).

[30] Muy probablemente la dirección de la UGT tomó la decisión de que ya no habría vuelta atrás en la modalidad de relaciones con el PSOE dentro de un período que fue desde el segundo semestre de 1988, cuando se habían decidido a ir junto con CCOO en una huelga general, hasta el verano de 1989, cuando decidieron no dar su apoyo al PSOE en las elecciones europeas de ese año.

Para la dirección de la UGT:

> "la prédica neoliberal (aquella de "más mercado menos Estado, más empresa menos sindicato", de defensa de la desregulación de las condiciones de trabajo y de la masiva aportación de dinero público a las empresas privada) no ha tenido la respuesta que cabía esperar desde la izquierda. En esto no han estado más atrasados los sindicatos que los partidos: por el contrario, *frente al desconcierto y la fascinación que sobre algunos partidos políticos progresistas ha ejercido el discurso de la derecha*, ha habido una clara contestación desde el movimiento sindical"[31].

Podemos concluir, por tanto, que el caso español de pluralidad sindical en contextos de antagonismo interpartidario pone de manifiesto que dicha combinación, en primer lugar, dificulta que el sindicato socialdemócrata acceda a coordinar sus actuaciones en las relaciones laborales con las políticas económicas de su gobierno (uno de los elementos constitutivos del modelo solidario de relaciones partido-sindicato), pues el sindicato querrá tener la mayor autonomía posible en la negociación colectiva (para no sufrir pérdidas de apoyos en beneficio de sus rivales). En segundo lugar, "eleva" lo que un partido tiene que dar a su sindicato mediante su actuación política para que éste siga ofreciéndole apoyo electoral (es decir, para que el sindicato siga accediendo al reparto de ámbitos de actuación), pues al sindicato se le abre la posibilidad de intentar influir en esas políticas mediante la cooperación con el sindicato que precisamente le forzó a abandonar la coordinación económica[32]. Además, paradójicamente,

---

[31] Discurso de Nicolás Redondo al 31º Congreso del PSOE de 1988, pp. 16, 17, op. cit.

[32] Lange y Vannicelli (1990) describen unos resultados en el sindicalismo italiano hacia finales de los años sesenta que ofrecen cierta semejanza con los acontecimientos ocurridos en España unos veinte años después. Durante los años cincuenta, la CGIL y la CSIL mantuvieron diferentes estrategias sindicales, una alta rivalidad entre ellos y cooperación con partidos políticos concretos. Así, mientras que la CGIL confió en mejorar la situación de los trabajadores italianos gracias a una victoria del PCI, la CSIL, cuyas preferencias políticas caían del lado de la Democracia Cristiana, se centraba más bien en conseguir mejoras en los centros de trabajo. Hacia

los cálculos tenderán a resultar más negativos para el mantenimiento de las relaciones de solidaridad justamente cuando parecería que dichas relaciones podrían resultar más ventajosas para ambas organizaciones, es decir, cuando el partido hermano llegaba al poder y, además, mejoraba la situación económica. Pero la paradoja se reduce si recordamos, como vimos en el capítulo séptimo, que los costes que entrañan a las organizaciones sindicales un determinado conjunto de políticas económicas y sociales no dependen exclusivamente de la mayor o menor dureza objetiva de éstas (medidas en términos de empleo, poder adquisitivo y servicios sociales), sino también de las posibilidades que tengan las bases de esos sindicatos para castigar el apoyo de las direcciones sindicales a esas políticas[33]. Así, en última instancia, se pone de manifiesto que lo que llevó a que la UGT empezase a evaluar que el saldo de las relaciones de solidaridad con el PSOE no era positivo no fue que su

---

finales de aquella década, los éxitos del sindicato democristiano en la negociación colectiva y las repetidas derrotas del PCI llevaron a que el sindicato comunista reconsiderase su anterior estrategia y pasase a dar mayor énfasis a la acción en las empresas. Ambos sindicatos comenzaron así a practicar desde principios de los años sesenta la misma estrategia sin coordinarse, la cual, con una economía más boyante consiguió importantes alzas salariales. El gobierno italiano, formado por democristianos y socialistas desde 1963, les ofreció entonces coordinar la acción sindical en los centros de trabajo con una cierta planificación económica y reformas sociales. Ambos sindicatos rechazaron tal propuesta por lo que el gobierno italiano respondió a los desequilibrios macroeconómicos mediante una política monetaria estricta y restricciones crediticias, como habían hecho los anteriores gobiernos de posguerra. Parecía así que ni el PCI, ni la Democracia Cristiana servían para satisfacer a sus respectivos sindicatos. Finalmente, hacia finales de la década la CGIL y la CSIL, más un tercer sindicato menor, la UIL, comenzaron a plantearse la coordinación de sus actividades e, incluso, la unidad orgánica, para actuar tanto en los centros de trabajo como en el ámbito político, pero sin "delegar esta función en los partidos políticos como habían hecho en el pasado" (Lange y Vannicelli 1990:183). Las tradicionales relaciones entre los sindicatos y partidos italianos se disolvieron, y los primeros coordinaron sus actuaciones tanto para la negociación colectiva como para acceder directamente al gobierno.

[33] Es decir, abandonar al sindicato ya sea desafiliándose o, en el caso español, votar por otras candidaturas en las elecciones sindicales.

partido dejase de proporcionar bienes (empleo o gasto social) como que éstos no compensaban la pérdida de una necesaria libertad de acción en las relaciones laborales, pues consideraba la cúpula del sindicato socialista que se jugaba la integridad de la organización. Esta reflexión nacía de un contexto institucional específico combinado con los ciclos económicos, razones que tienen poco que ver con cambios estructurales de índole económico o social. Pero el sindicato socialista todavía tenía que evaluar si el reparto tradicional de tareas con su partido hermano era o no el mejor modo de conseguir sus objetivos en el ámbito político para dar por definitivamente acabadas sus relaciones tradicionales con el PSOE.

2. De la rivalidad intersindical a la unidad de acción

La valoración final de la dirección de la UGT fue que el reparto tradicional de tareas con la consiguiente intervención indirecta en política, no constituía un recurso para conseguir sus objetivos en el ámbito político[34]. La táctica de advertir sobre las consecuencias que tendría para el PSOE su rechazo a acceder a las demandas de la UGT, ya fuera en el sentido de la ruptura de la disciplina del voto dentro del grupo parlamentario socialista, ya fuera en el de la dimisión de los dirigentes ugetistas de sus actas de diputados socialistas, no sirvió para que la dirección del PSOE desautorizase al Ministro de Economía. Tampoco sirvieron de mucho todas las reuniones privadas entre miembros de la Ejecutiva del PSOE, del Gobierno y de la Ejecutiva de la UGT, en las que algunos dirigentes socialistas intentaron realizar una tarea de intermediación -como

[34] Esta opinión no sólo la mantiene la dirección de la UGT. Así, al preguntar al dirigente de CCOO Julián Ariza durante una entrevista celebrada el día 18-7-97 sobre si la ruptura con los partidos políticos no implicaba una pérdida de influencia en las políticas del Gobierno declaró:

"No, yo creo que eso es bastante relativo porque la influencia en las políticas del Gobierno cuando las cosas eran de otra manera es también discutible; y si no, que se lo pregunten a UGT. En el caso nuestro [de CCOO], nosotros no hemos tenido esa oportunidad".

vimos- entre la dirección de la UGT y el área económica del Gobierno. Sobre todo, la dirección ugetista constataba que llegar a preacuerdos con prominentes dirigentes socialistas no servía para que el Presidente del Gobierno accediese a sus demandas[35]. Algunos líderes sindicales, como fue el caso de Justo Fernández (Secretario General de Banca de UGT), consideraban que lo que había que hacer era "dar la batalla para que desde dentro de la familia socialista obliguemos a Felipe González a cambiar su actual programa económico por el que defendimos en 1982" (*El País* 17-8-87). Pero la dirección de su sindicato debió de calcular que esa posibilidad estaba cerrada dada la posición de González dentro del partido[36]. Rechazó,

---

[35] Así, según una información aparecida en el diario *El País* (11-11-87), los dirigentes de la UGT querían negociar directamente con el Gobierno y no con el Grupo Parlamentario Socialista.

[36] Ya durante el 34º Congreso de la UGT (abril de 1986) el máximo líder ugetista, Nicolás Redondo, rechazó que la UGT fuera o hubiera de convertirse en un partido dentro del partido. En agosto del año siguiente, 1987, desde la UGT se filtraba que su Secretario General asistiría al próximo congreso del PSOE en su calidad de dirigente del sindicato "hermano", pero no como miembro de la delegación vizcaína (*El País* 16-8-87). Meses después, el Secretario General de la UGT hizo pública su decisión de no asistir como delegado al 31º Congreso del PSOE, si bien aclaraba que eso no suponía un consigna a todo el sindicato. Para Redondo "ir al Congreso del partido o no ir e[ra] una decisión personal de cada afiliado, como miembro del PSOE y en función de que [fuese] elegido para ello". Hacía igualmente hincapié en que:

"Como no somos parte del partido, ni tampoco una fracción del mismo, cada militante acudirá o no en una opción personal como miembro del PSOE" (*El País* 12-11-87).

A finales de noviembre de 1987 el máximo líder de la UGT mandaba una circular a los cuadros del sindicato en la que se pedía que se avanzase en el trabajo sindical porque no eran "un partido bis, ni la oposición al Gobierno, ni una tendencia en el seno del PSOE". El objetivo, en cambio, tenía que ser el de consolidar organizaciones obreras fuertes, salir de un estado de marginación en el que consideraban que se encontraban desde la implantación de la democracia y aprovechar "la corriente de simpatía y solidaridad con las posiciones de UGT para acrecentar la afiliación, llegar a más centros de trabajo y reforzar la conexión con los trabajadores" (*El País* 25-11-87). Por vez primera las relaciones Partido-Sindicato

en cualquier caso, los intentos de recomponer las relaciones solidarias con el PSOE (no otra clase de relaciones como hemos visto) cuando desde el Partido se propuso crear un comité de enlace para recomponer las relaciones; así como apoyarle en las elecciones europeas de 1989[37], y de nuevo en las legislativas de noviembre de ese año. Ahora bien, la dirección del sindicato socialista se encontraba con la siguiente alternativa: (1) actuar en solitario -lo que podríamos denominar "vía francesa"-, o (2) emprender una unidad de acción con CCOO - "vía italiana".

La dirección de la Unión General de Trabajadores no rompió sus relaciones históricas con el PSOE porque éstas le impidiesen emprender la unidad de acción del movimiento sindical, una vez que hubo constatado que no podía conseguir la unidad orgánica aniquilando a CCOO. Los dirigentes ugetistas escogieron la unidad de acción con CCOO como forma de intervenir en política tras constatar definitivamente que las relaciones solidarias con el PSOE no eran ese recurso que habían esperado. Hasta que no se convencieron de ello, no buscaron coordinar sus actuaciones con la dirección de CCOO, y dieron así por definitivamente acabado el reparto tradicional de funciones entre las organizaciones socialistas. Pero hubieran dejado de apoyar electoralmente al PSOE, con o sin unidad de acción con CCOO.

---

aparecían, indirectamente, para los dirigentes ugetistas como un hándicap para sus logros organizativos, señalándose, por el contrario, las ventajas que podría acarrear el cambio de modelo de relaciones. Estos motivos aparecieron posteriormente en el informe de Gestión de la CEC al congreso de 1990 como la razón del cambio de relaciones. El hecho fue que la presencia de dirigentes de UGT fue en aquel congreso socialista más escasa que en otras ocasiones (*El País* 14-1-88) y Nicolás Redondo intervino en su calidad de máximo dirigente de la UGT y no como delegado socialista.

[37] Según declaró Nicolás Redondo en la entrevista de Burns Marañón (1996:208), "la ruptura formal con el PSOE no [tuvo] lugar hasta las elecciones europeas de 1989".

2.1. Unidad de acción en la negociación colectiva y unidad de acción política

Como se afirmó en el capítulo sexto, la unidad de acción no se reduce a que las organizaciones sindicales tengan un comportamiento similar, por el contrario:

> "Lo que caracteriza la unidad de acción es que para las grandes iniciativas sindicales, para casi todas, hay un previo acuerdo entre las organizaciones: primero, para establecer de manera común cuál va a ser la posición que se va a mantener de cara a la negociación con terceros; segundo, para seguir en común ese proceso de negociación, y tercero para que en el supuesto de que haya acuerdo, como en el que no lo haya, actuar en común. Es tan simple como eso"[38].

Es decir, la unidad de acción sindical implica que las organizaciones se *coordinen* para emprender la misma estrategia[39], la cual se puede dar tanto en el ámbito laboral como en el político:

> "La unidad de acción que llamamos es simplemente un mecanismo institucionalizado, aunque no tiene una materialización a través de un ente, sino que es un acuerdo entre ambas organizaciones para que todo aquello que sea de interés común de los trabajadores, hacerlo en común. Y eso vale para la reunión que tuvimos antes de ayer para hacer una presentación pública de un documento en defensa del sector público, para la convocatoria de una manifestación en el 1º de mayo, o eso vale para la convocatoria de huelgas".

---

[38] Explicación de la unidad de acción sindical realizada por Julián Ariza durante una entrevista con el autor celebrada el 18-7-97.

[39] En el capítulo sexto vimos que pueden existir ciertas condiciones que conduzcan a los sindicatos a emprender la misma estrategia sin necesidad de coordinación previa alguna. Esta posibilidad teórica de convergencia espontánea parece que se dio efectivamente en 1987 entre UGT y CCOO, como vimos en el primer apartado de este capítulo.

Además la experiencia sindical española durante la primera mitad de 1988 muestra que no necesariamente ambas tienen por qué ir unidas.

Empecemos estudiando la formación de la unidad de acción sindical entre UGT y CCOO de cara a la negociación colectiva con los empresarios. Hemos visto al principio del capítulo como en 1987 la estrategia de UGT en las relaciones laborales no se acordó con CCOO, sino que hubo una simple coincidencia (producto de un período económico expansivo en un contexto sindical competitivo). Para el año siguiente, sin embargo, los dirigentes ugetistas decidieron mantener contactos con los dirigentes de CCOO[40]. En aquellas negociaciones se alcanzaron acuerdos sobre negociación colectiva con los empresarios (por ejemplo sobre el incremento salarial que pedirían ambos sindicatos), y sobre cuestiones que exigían tratar con el Gobierno (tales como la tasa de cobertura del subsidio por desempleo, la reforma del INEM, y la negociación del reglamento de la ley de fondos de pensiones)[41].

Pero parece que los dirigentes ugetistas no pretendían por aquel entonces que la unidad de acción fuese a más, pues si bien el recién elegido Secretario General de CCOO, Antonio Gutiérrez, consideraba que aquella reunión había servido para avanzar en "la unidad de acción, no coyuntural, y con una sólida base" (*El País* 16-2-88), su homólogo ugetista matizaba que se iban a defender "plataformas coincidentes pero no conjuntas"[42]. Aquella aproximación entre las dos confederaciones sindicales en las relaciones laborales no

---

[40] Véanse la carta-circular del Secretario de Acción Sindical, Apolinar Rodríguez, a los Secretarios de Acción Sindical de las F.F. y U.U., fechada en Madrid a 15 de febrero de 1988, caja: FEJP/516, FLC; y *El País* 14-2-88. Aquella fue la primera reunión que mantenían UGT y CCOO con la presencia de sus máximos dirigentes en los dos últimos años (*El País* 16-2-88).

[41] Carta-circular del Secretario de Acción Sindical del 15 de febrero de 1988, op. cit.

[42] De hecho, Nicolás Redondo explicaba el grado de coincidencia alcanzado con CCOO como algo "lógico" y "no significaba que UGT se haya radicalizado, ni que CCOO se haya moderado. Eso forma parte de una campaña que, como todo el mundo sabe, alguien ha lanzado contra UGT" (*El País* 16-2-88).

acababa de trasladarse al ámbito político[43]. La dirección de la UGT todavía estaba probando si mantener sus relaciones solidarias con el PSOE era o no el mejor recurso para influir en este ámbito, y rechazó así alcanzar un acuerdo con la dirección de CCOO para establecer una posición común de cara a las negociaciones con el Gobierno socialista que empezarían en el verano de 1988[44].

En resumidas cuentas, la celebración por separado del 1º de mayo y el hecho de que la UGT no coordinase previamente con CCOO la negociación que tendrían ambas con el Gobierno socialista

---

[43] Como acto simbólico, pero que prueba hasta donde llegaba el acercamiento UGT-CCOO, el 1º de mayo de aquel año se volvió a celebrar separadamente. El primer 1º de mayo celebrado conjuntamente desde 1982 fue el celebrado en 1989.

[44] La dirección de CCOO había hecho explícito en junio de aquel año su deseo de establecer una plataforma conjunta con el sindicato socialista ante las próximas negociaciones con el Gobierno (*El País* 15-6-88), al tiempo que se temía que el Gobierno intentase romper el grado de unidad de acción alcanzada (*El País* 3-7-88). A principios de julio, llegaron incluso a mantener una reunión Apolinar Rodríguez y Emilio Castro, por parte de UGT, con Agustín Moreno y Salce Elvira, por parte de CCOO, con objeto de aunar posturas sobre el contenido de las dos primeras mesas que se iban a abrir: reforma del INEM y aumento de la cobertura a los parados (*El País* 6-7-88). Pero, aunque encontraron puntos de coincidencias en los grandes objetivos, no elaboraron plataformas comunes. Cuando comenzaron así las negociaciones con el Gobierno, las mayores discrepancias entre la UGT y CCOO se dieron en la mesa para la negociación de las rentas de los funcionarios y en la negociación de las pensiones (*El País* 23-7-1988 y 16-9-88). En pensiones la UGT pedía una subida media del 5,75% y CCOO del 6%. Ambos sindicatos coincidían en su rechazo a que dentro de la negociación de subidas de las pensiones se incluyese la partida de 160.000 millones de pesetas destinadas a los nuevos pensionistas, pero la UGT pedía 200.000 millones de pesetas para subir las pensiones y CCOO 220.000 millones. La UGT pedía además que la edad de percepción de las pensiones asistenciales se estableciese en 1989 en los 66 años, y en 1990 en los 65, y CCOO pedía ya para 1989 que se estableciese en los 65 años (*El País* 16-9-88, 17-9-88). Finalmente UGT y CCOO mantenían posturas diferentes con respecto a la constitución del Consejo Económico y Social (*El País* 21-6-88). Donde los dos sindicatos sí que coincidieron desde un inicio fue en su oposición a la eliminación de la obligatoriedad del registro de parados e igualmente ambos sindicatos respondieron con dureza al Plan de Empleo Juvenil del Gobierno (*El País* 19-7-88 y 7-9-88).

en el verano de 1988 sugieren que los dirigentes ugetistas todavía estaban comprobando lo que se podía esperar del Partido socialista. Parece así que queda descartado que la dirección de la Unión General de Trabajadores rompiese sus relaciones históricas con el PSOE porque, una vez que hubiese constatado que no podía aniquilar a CCOO y conseguir la unidad del movimiento sindical por esta vía, esas relaciones con el Partido socialista impidiesen alcanzar al menos la unidad de acción entre los sindicatos. En otras palabras, la experiencia española parece confirmar la afirmación realizada en el capítulo sexto de que los sindicatos que actúan en un contexto competitivo no están "forzados" a evaluar que la unidad de acción es siempre preferible a la opción partidista para hacer avanzar sus objetivos (una vez que constaten que no se puede destruir al rival sindical) porque la unión de fuerzas sindicales les permita tener mayor fuerza de presión de cara a empresarios y gobiernos. La dirección de la UGT escogió la unidad de acción con CCOO como forma de intervenir en política una vez que constató que efectivamente las relaciones solidarias con el PSOE no eran el recurso que había esperado. Hasta que no se convencieron de ello, no buscaron coordinar sus actuaciones con la dirección de CCOO[45]. Si el partido socialista, por alguna razón, hubiera proporcionado los beneficios que deseaba la cúpula ugetista, este sindicato habría combinado la unidad de acción con CCOO en la negociación colectiva, y sólo en este ámbito, con las relaciones de solidaridad con el PSOE para intervenir en política[46]. Desde luego, ésta sería la opción más deseable para los dirigentes ugetistas, pues tendrían los beneficios de esta modalidad de relaciones partido-sindicato sin sus costes. Pero, si el PSOE fallaba, las condiciones que habían permitido la unidad de acción laboral permitían la unidad de acción política (al contrario del caso francés).

---

[45] La experiencia francesa además muestra que existen sindicatos que pueden llegar a evaluar que no les interesa ni la unidad de acción con sus antiguos rivales ni mantener relaciones solidarias con los partidos políticos.

[46] No hay que descartar que incluso ese primer acuerdo alcanzado con CCOO sobre negociación colectiva con los empresarios sirviese también de advertencia a la dirección del PSOE de hasta donde estaba dispuesta a llegar la cúpula de la UGT.

Así, una vez que quedó constatado que las relaciones de solidaridad con el Partido socialista no servían para que este sindicato influyese en el ámbito político como quería, buscó conseguirlo por otros medios, entre los cuales, pero no exclusivamente, estaba la unión de fuerzas con su antiguo sindicato rival con el que ya había iniciado una aproximación en las relaciones con los empresarios[47]. En la segunda mitad de septiembre de 1.988, tras el fracaso de las negociaciones con el Gobierno, delegaciones de las comisiones ejecutivas de UGT y CCOO llegaron a una "básica coincidencia en las consideraciones que se derivan de la concertación emprendida" con el Gobierno[48], aparte de pensar en coordinar posiciones de cara a la futura negociación con los empresarios para el año siguiente[49]. La coordinación de exigencias comunes al Gobierno socialista, la cual terminaría desembocando en la huelga general del 14 de diciembre de aquel año, mostraba ya el camino que el sindicato socialista había emprendido para conseguir sus objetivos que requerían de la intervención del Gobierno. Al año siguiente, la unidad de acción sindical se mantuvo en las relaciones con los empresarios, al llegar a un nuevo acuerdo con CCOO para la negociación colectiva[50], y continuó avanzando en el ámbito político. La UGT puso así en común con CCOO sus propuestas para la mesa de empleo[51], pero

---

[47] Julián Ariza destacó en la entrevista con el autor del día 18-7-97 que en la formación de la unidad de acción sindical en España fue importante la "superación de opciones partidistas" tanto por parte de la UGT como de CCOO que se ejemplificaba en el hecho de pactar con la CEOE gobernando el PP.

[48] Carta-circular del Secretario de Acción Sindical, Apolinar Rodríguez, a las F.F. y U.U. informando de una entrevista de trabajo UGT-CCOO, fechada en Madrid a 19 de septiembre de 1988, caja: FEJP/516, FLC.

[49] "Existe coincidencia, tanto en el propósito de acompasar iniciativas de cara a una concertación bipartita como a la hora de conjuntar esfuerzos para enriquecer la negociación colectiva en 1988" (vid. supra.).

[50] A juicio de Apolinar con aquel acuerdo se facilitó la elaboración de plataformas de empresa y sector y se estableció un marco de referencia para la unidad sindical en la negociación (Documento de Acción Sindical de la caja FEJP/517, op. cit.).

[51] Carta-circular del Secretario de Acción Sindical, Apolinar Rodríguez, a las F.F. y U.U., fechada en Madrid a 31 de marzo de 1989, caja: FEJP/518, FLC.

sobre todo su gran acuerdo fue la Propuesta Sindical Prioritaria, exponente de que la unidad de acción sindical servía ya para negociar en todos los ámbitos[52].

[52] La idea de coordinar con CCOO sus peticiones al Gobierno socialista en lo que sería la Propuesta Sindical Prioritaria surgió en el 6º Comité Confederal de la UGT, al tiempo que rechazaban la propuesta de la ejecutiva del PSOE de crear un comisión bipartita para restablecer las relaciones. Así durante el verano se celebraron reuniones con ELA-STV y CCOO. Con este último sindicato se alcanzó un preacuerdo sobre las cuestiones que analizarían y pondrían en común. La dirección de la UGT aceptó así excluir la negociación del Consejo Económico y Social dadas las discrepancias que existían con CCOO, y este sindicato aceptó incluir la búsqueda de un acuerdo sobre la autocomposición de conflictos, que había venido formulando la dirección de la UGT desde el AES, sin que antes CCOO la hubiera apoyado. Así cada sindicato, manteniendo reuniones con sus federaciones, elaboró un borrador de la PSP que se negociaría con el otro sindicato, y donde se podía constatar todavía sus diferencias de pareceres. Por ejemplo, a juicio de los ugetistas, CCOO confiaba demasiado en la regulación estatal, dejando poco juego al desarrollo convencial y a la propia acción sindical, sobre todo en el capítulo del empleo. Finalmente, a principios de octubre de 1989, UGT y CCOO acordaron un documento definitivo que constituía la Propuesta Sindical Prioritaria (Documento de Acción Sindical de la caja FEJP/517, op. cit.).

2.2. Las condiciones para la unidad de acción

Pero ¿cómo fue posible esta unidad de acción en general? En el capítulo sexto vimos de una forma teórica que ésta no es tan fácil de alcanzar, como el caso francés y los de otros países del Este de Europa así lo ponen de manifiesto. En concreto habría que explicar por qué los dirigentes sindicales evaluaron que les convenía más coordinar sus acciones en vez de intentar hacerse con los apoyos de los sindicatos rivales, qué ganaban coordinando sus actuaciones y cómo se produjo la convergencia de objetivos entre la UGT y CCOO. En el modelo teórico vimos que la sola constatación de que la hegemonía de uno de los sindicatos sobre los restantes era inalcanzable no bastaba para que se produjese la unidad de acción entre ellos, pues era necesario que los sindicatos apreciasen que la descoordinación de sus acciones les impedía que éstas tuvieran éxito. De una forma teórica, se dedujo que no siempre es necesario que los sindicatos coordinen sus actuaciones para llevar a cabo una estrategia que tenga éxito, pero que, en determinados contextos, la no cooperación intersindical les conduciría a resultados subóptimos. La experiencia sindical española parece mostrar que la reflexión sobre la imposibilidad de alcanzar la hegemonía y la necesidad de unir fuerzas vinieron muy unidas. Los líderes sindicales se dieron cuenta de que, por competir entre ellos, no sólo no habían conseguido la hegemonía, sino que además salían perdiendo en sus relaciones con los empresarios. A esta doble conclusión habían llegado las cúpulas de UGT y CCOO en 1987, si bien no todos sus dirigentes al mismo tiempo[53]. Así, durante el 34º Congreso de la UGT (celebrado en abril de 1986 y, por tanto, antes de que se convocasen las cuartas elecciones sindicales de la democracia en otoño de aquel año), la

[53] Hay que señalar así, por ejemplo, que José María Zufiaur consideraba ya por el verano de 1983 que "no existe una relación entre voto sindical y voto político. Creo que es suficientemente clarificador el hecho de que el 59 por 100 de la clase trabajadora vota al PSOE, el 11 por 100 al PCE y, sin embargo, en las últimas elecciones sindicales, el 34 por 100 vota UGT y el 31 por 100 vota CC.OO" (Zufiaur 1983:48). Las resoluciones del 33º Congreso de la UGT celebrado aquel año afirmaban lo contrario.

Secretaría General saliente concluía ya que "parec[ía] inevitable que, en las actuales circunstancias, se mant[uviese] en España la pluralidad sindical" (G.34C.UGT.1984:23). De ese modo consideraba, junto a la Secretaria de Acción Sindical, que de cara al futuro había que ir limando diferencias con CCOO[54], pues "conviene no olvidar que la coyuntura económica e histórica plantean graves desafíos al sindicalismo que éste sólo podrá afrontar si mantiene una coincidencia básica en todos los planteamientos que puedan ser comunes" (R.34C.UGT.1986:23)[55]. La Secretaría de Acción Sindical incidía igualmente en lo perjudicial y lamentable que había sido la confrontación intersindical (y, por supuesto, responsabilidad de CCOO[56]). Así, en sus resoluciones de su 34º Congreso sobre

---

[54] "La Comisión Ejecutiva en su conjunto, y el Secretario General en las oportunidades en las que ha tenido que pronunciarse, ha puesto énfasis en la necesidad de que no se ahonden las diferencias de criterios que pudieran existir, conscientes de que no se hace un buen servicio a la clase trabajadora ofreciéndole un clima de enfrentamientos *entre quienes defienden, en última instancia, los mismos intereses*" (R.34C.UGT.1986:23, cursiva mía).

[55] "La dureza de esas relaciones [con CC.OO] y lo que suponen de división de los trabajadores son elementos que no vemos con agrado y que no ayudan a asegurar una salida progresista a la crisis. Por ello deseamos que dichas relaciones se estabilicen en el entendimiento y habrán de ser estudiadas y valoradas siempre por nuestra Organización" (Secretaría de Acción Sindical, G.34C.UGT.1986:129).

[56] La Secretaría de Acción Sindical ya había expuesto:

"CCOO, que ya había optado por una política mucho más radical y maximalista que en épocas anteriores por motivos que más tarde analizamos, debilitó la posibilidad de alcanzar un acuerdo al restar credibilidad y unidad a las reivindicaciones sociales (...). [S]e ha observado un espinoso y lamentable distanciamiento sin duda alguna promovido por la radicalización extrema y los bandazos demagógicos de un sindicato dividido como es CCOO. No se explicaría de otra manera que este sindicato haya venido estando en una actitud mucho más destructiva y obstruccionista que la que mantuvo con gobiernos de la derecha. Cambios como el acudir a una media porcentual para adoptar un IPC de referencia en la negociación, o el operado en Sagunto, exigencias como la de insertar la política de endeudamiento exterior del Gobierno y la entrada en la CEE como puntos de negociación del AES, etc..., demuestran la poca voluntad real de concertación que

"relaciones intersindicales" los ugetistas juzgaban de modo negativo la situación de confrontación intersindical "ya que imposibilita el afrontar de modo eficaz todos los problemas derivados de la crisis, la necesaria consolidación e implantación sindical con un mayor protagonismo de los sindicatos en el conjunto de la sociedad, la relación de fuerza con la patronal, la lucha por la defensa de mayor bienestar social y dificulta la necesaria vertebración del movimiento obrero" y propugnaban la unidad de acción "*para aumentar la eficacia del conjunto del movimiento sindical* en abordar los problemas más urgentes y hacer frente a sus consecuencias en el conjunto de los trabajadores y de sus organizaciones" (R.34C.UGT.1986:83, mía la cursiva)[57]. Es decir la UGT se fijaba como objetivo acercar posturas con CCOO para evitar la lucha fratricida en el ámbito laboral y terminar en situaciones subóptimas para ambos sindicatos[58]. La

---

manifestaba CC.OO. Sus motivaciones y objetivos estaban y están, claramente, en el terreno de la política coyuntural" (G.34C.UGT.1986:117, 129).

[57] Aunque vimos que distinta postura mantuvo la Secretaría de Organización así como que en las resoluciones del 34º Congreso preservaron el objetivo de aumentar "las actuales diferencias de representatividad que existen hoy día con respecto a otras fuerzas sindicales" (R.34C.UGT.1986:39).

[58] Tanto Julián Ariza como José María Zufiaur sostuvieron durante unas entrevistas que mantuvieron con el autor que, de hecho, la reflexión de que la lucha por la hegemonía sindical era estéril es posterior a aquellas elecciones:

"Pero en un momento determinado ellos [los ugetistas] -sobre todo a partir ya del 77 con las elecciones de junio, donde se ve la relación de fuerzas en el terreno político, y cuando todavía seguía existiendo una campaña anticomunista en toda Europa- hay un esfuerzo de la socialdemocracia hacia aquí para intentar imponer un modelo, por eso UGT nos veta para entrar en la CES, porque ella intenta en definitiva marcar la hegemonía a la sombra del PSOE. Allí un intento por hacer un marco de relaciones industriales tipo centroeuropeo donde hay una hegemonía de la socialdemocracia en el terreno político y en el terreno sindical, y los comunistas pues residuales o absorbidos. Y eso claro, pues no sale. Y eso se constata en las elecciones del 86. Claro, UGT piensa que en las elecciones [sindicales] del 86 es el momento del salto en donde tu dejas de ser una fuerza pequeña, y claro, no sólo no pasa eso, sino que en grandes empresas retrocede porque su identificación con la política del Gobierno se vuelve en su contra porque se hace durante todo un período de ajuste, que eso es lo que motiva a su vez la ruptura de la UGT con la dirección del PSOE

creencia de que cada sindicato por separado no obtendría mucho de cara a sus relaciones con los otros agentes (empresarios o Gobierno) y que, de hecho, les perjudicaba era igualmente compartida por CCOO[59]. Jesús Urrutia, Julián Ariza y José María Zufiaur hacen hincapié en que la necesidad de converger fuerzas para presionar al Gobierno socialista hizo posible la unidad de acción entre sus sindicatos[60].

Finalmente, en el capítulo sexto planteamos que, con todo, para que se celebrase la unidad de acción era necesario que los sindicatos

---

porque le responsabiliza de que ellos no han dado el salto que pensaban. *Y a partir de ese momento esa lucha de la hegemonía sindical que se ha dado del 79 al 86 acaba en tablas*" (Julián Ariza, entrevista del autor del día 18-7-97, mías las cursivas).

A juicio de Apolinar Rodríguez el acuerdo firmado por UGT y CCOO sobre negociación colectiva clarificaba los objetivos que más fácilmente podían perseguir en la negociación, potenciaba el esfuerzo sindical, disipaba dificultades inaceptables de la patronal en la negociación e incluso multiplicaba "la ilusión colectiva de los trabajadores" (carta-circular del Secretario de Acción Sindical, Apolinar Rodríguez, a las F.F. y U.U., Madrid a 16 de febrero de 1989, caja: FEJP/518, FLC).

[59] Agustín Moreno consideraba así en julio de 1988 que era muy importante aunar con UGT al menos criterios para defender en las negociaciones, si no una plataforma conjunta, pues "lo contrario [era] un suicidio y dar todas las ventajas a la CEOE" (*El País* 3-7-88). Julián Ariza manifestaba durante la entrevista con el autor del día 18-7-97 que el período de enfrentamiento redundó en una mayor debilidad del movimiento sindical español, especialmente entre 1979 y 1986.

[60] "Cuando realmente hay una opción, que yo he definido siempre más como una política de alianzas pensando sobre todo con UGT, consecuencia o derivación de su ruptura con la dirección del PSOE, es en el 87. Lo que pasa es que ese es un proceso que se inicia tratando de entenderse para hacer una oposición más eficaz al gobierno, que era lo que impregnaba fundamentalmente la llamada unidad de acción, era una unidad de acción para hacer más efectiva la oposición a la dirección del PSOE. Tenía un componente político, eso es obvio, y en ese proceso se da un salto muy brusco porque en las elecciones del 86 nos habíamos perjudicado los unos a los otros, entonces todavía deriva a que en mayo del 87 hubiese todavía esas reticencias, pero el proceso, la opción se toma en el 88, eso es evidente y eso lo consagra el 14-D en el 88. Luego eso se desarrolla con altibajos, luego hubo problemas con las elecciones sindicales del 90, pero eso ha seguido ininterrumpidamente" (Entrevista del autor con Julián Ariza del día 18-7-97).

se pusiesen de acuerdo en sus objetivos (y no sólo en la estrategia para conseguirlos)[61]. Al respecto nos podemos plantear tres hipótesis para la coincidencia de objetivos entre los sindicatos. En primer lugar, podría ocurrir que un sindicato renunciase a sus objetivos y adquiriese los de su rival. Pero esta posibilidad es muy dudosa que explique la unidad de acción entre UGT y CCOO por cuanto eso, en palabras del propio Ariza, es "entreguismo". En segundo lugar podría ocurrir que los objetivos de la UGT y CCOO no hubieran sido realmente tan distintos e incompatibles entre sí, sino que ambos

[61] A la pregunta de si influyó en la consecución de la unidad de acción sindical la salida de Marcelino Camacho de la Secretaría General de CCOO, Julián Ariza respondía (entrevista con el autor del día 18-7-97):

"Fue decisiva. Con Camacho no hubiera sido posible."

Y, en concreto, lo explicaba:

"Porque Camacho tiene una concepción de la unidad de acción que consiste en que yo digo lo que hay que hacer y el otro tiene que sumarse. Esa es su concepción, lo conozco bien. Eso es entreguismo. El [Marcelino Camacho] defiende la unidad en terreno abstracto, ideológico, pero luego en los contenidos que tiene que ser una mutua concesión... eso no lo entiende porque lo considera concesiones. El entendía la unidad de acción con UGT contra el PSOE. Camacho siempre se mueve por parámetros estrictamente partidarios. Aparte de las personalidades de Camacho y Nicolás Redondo, es su concepción de la unidad de acción. Camacho considera: 'es muy necesaria la unidad de acción, para hacer lo que yo digo".

Ya durante la primera legislatura del Gobierno socialista se habían producido iniciativas, sin mucho éxito, para limitar el enfrentamiento mutuo (*El País* 9-11-84, 2-7-85, 3 y 4-10-85). Pero, frente a las interpretaciones que explican el origen de la unidad de acción entre UGT y CCOO exclusivamente por ser la mejor manera de hacer cambiar las políticas del gobierno socialista, hay que señalar, sin embargo, que las propuestas de acercamiento entre CCOO y UGT realizadas tras las elecciones sindicales de 1986, ya en la segunda legislatura socialista, también fracasaron. Así, el Secretario General de CCOO, Marcelino Camacho, volvió a hacer un llamamiento a la unidad de todos los sindicatos a finales de octubre de aquel año; y el de UGT, mes y medio después, le pidió en una carta olvidar las diferencias. CCOO pareció aceptar la propuesta de acercamiento efectuada por la UGT (*El País* 12-12-86), pero días más tarde arreció en sus críticas contra este sindicato (*El País* 23-12-86), por lo que Nicolás Redondo retiró su propuesta (*El País* 27-12-86). Como hemos visto, en 1987 no hubo unidad de acción, sólo coincidencia no coordinada de estrategias para la negociación colectiva.

sindicatos no se ponían de acuerdo sobre la estrategia más adecuada para alcanzarlos. En este caso la "lógica sindical" terminaría imponiendo la estrategia que fuese más adecuada. Los sindicatos llegarían a esta conclusión mediante un proceso de prueba y error en el que el sindicato que viese que la estrategia de su rival tuviese más éxito terminaría copiándola. Pero esta respuesta realmente no explica cómo se aproximan objetivos, sencillamente expone que éstos nunca fueron muy distintos. Así, Apolinar Rodríguez afirmaba, tras una reunión mantenida con la dirección de CCOO en febrero de 1988[62]:

> "Resulta fácil descubrir la concordancia entre los criterios de nuestra delegación y las coincidencias constatadas en los acuerdos, garantizando desde nuestras posiciones la orientación adecuada de este tipo de contactos".

Igualmente, Julián Ariza parece sugerir que las diferencias entre CCOO y UGT no eran tantas y, de hecho, se buscaban. Considera que esto vino, por un lado, por una estrategia de diferenciación de la UGT (objetivo de supervivencia/hegemonía sindical)[63] y la influencia externa de los partidos políticos.

Pero también hay elementos para pensar que las diferencias entre la UGT y CCOO no se habían reducido a una mera discrepancia por los medios para alcanzar unos objetivos en los que todos estaban de acuerdo. Llegamos así a un tercera posibilidad donde, dado que no existe un único objetivo sino que éstos son múltiples, los sindicatos diferirían en algunos, pero no así en otros. Así podría ocurrir que la unidad de acción sindical sólo se celebrase para alcanzar precisamente esos objetivos *que fuesen comunes*, mientras que (1) aquellos sobre los que todavía se discrepase serían dejados de lado para que no dificultasen precisamente la acción conjunta, o bien (2) los objetivos diferentes concernían a cuestiones

---

[62] Carta-circular del Secretario de Acción Sindical del 15 de febrero de 1988, op. cit.

[63] "Pero, en definitiva, la razón de fondo de la falta de unidad de acción es una opción de UGT por la hegemonía sindical nítida en el 79" (Julián Ariza, entrevista con el autor del día 18-7-97).

que fueron desaparecieron con el tiempo. De hecho, parece que la unidad de acción comenzó por aquellos asuntos en los que sus objetivos eran más similares, mientras que aquellos en los que todavía no se habían puesto de acuerdo ambos sindicatos los dejaron aparte para que no interfirieran en la coordinación sindical[64]. Puede, además, que anteriores discrepancias sobre ciertos objetivos desapareciesen bien porque ya se había legislado sobre la cuestión (por ejemplo las características de los comités y secciones sindicales en la empresa), bien porque algunos de estos objetivos eran "instrumentales" y, al mostrarse ineficaces para alcanzar otros más importantes, se dejaron de lado[65]. Con todo, no parece que podamos llevar muy lejos el argumento de que la unidad de acción se realizó sólo sobre aquellas cuestiones donde no discrepaban, pues el líder de CCOO, Julián Ariza, hace hincapié en que "el proceso de unidad de acción no es puntual. No obedece a que ante un hecho determinado vamos a ponernos de acuerdo. Eso forma parte de una acuerdo común, más general. Es decir, hay que ponerse de acuerdo ante cada hecho"[66]. Por esta misma razón este dirigente sindical consideraba que los acuerdos comunes en 1981 (ANE) o en el 1983 (AI) no era unidad de acción, sino coincidencias puntuales. No hay que excluir, por último, que cada sindicato renunciase incluso a ciertos objetivos -que considerasen poco importantes- con tal de alcanzar otro mayor.

---

[64] Así, por ejemplo, parece que en la reunión que mantuvieron las delegaciones de UGT y CCOO en febrero de 1988 se evitó abordar temas en los que las diferencias eran grandes, como la cuestión de la configuración del Consejo Económico y Social (*El País* 16-2-88). De hecho, esta cuestión fue excluida, como vimos, de la negociación con CCOO sobre la Propuesta Sindical Prioritaria dado que continuaban las discrepancias existentes al respecto (Documento sin fecha de la Caja FEJP/517. Fundación Largo Caballero, op. cit.).

[65] Zufiaur comentó en la entrevista con el autor del día 12-10-96 que el agotamiento de la estrategia de concertación de UGT hizo que esta cuestión ya no fuese un factor de división con CCOO.

[66] Declaración realizada durante la entrevista con el autor del día 18-7-97.

Se puede pensar así que conseguir doblar el brazo al Gobierno hacía que pudieran renunciar a otros menos importantes[67].

Podemos plantearnos entonces qué hubiera pasado si, por ejemplo, Camacho hubiera seguido siendo secretario general de CCOO ¿Hubiera implicado la imposibilidad de alcanzar la unidad de acción con este sindicato que la UGT hubiese mantenido las relaciones solidarias con el PSOE? Todo parece indicar que, desde luego, esto no hubiera impedido que la dirección de la UGT hubiese roto con la coordinación económica, pues entre otras cosas este abandono se produjo cuando Camacho era todavía el máximo dirigente efectivo de CCOO. Igualmente, como vimos, el objetivo ugetista de conseguir para los colectivos que dependían de los Presupuestos Generales del Estado los mismos incrementos de rentas conseguidos en la negociación colectiva empujó hacia arriba sus demandas sobre incrementos de transferencias sociales, las cuales fueron rechazadas por el Presidente del Gobierno. Es cierto que entonces, si Camacho hubiera continuado en su cargo, la UGT habría tenido más difícil conseguir los incrementos sociales que quería del Gobierno socialista mediante la presión en la calle, pero al sindicato socialista todavía le habría quedado la baza de retirar el apoyo electoral al PSOE para presionarle[68]. Y como no hay razones para pensar que este partido hubiera sufrido entonces una mayor pérdida de votos de la que efectivamente sufrió, al constatar los dirigentes socialistas que se podían ganar las elecciones sin tener que negociar las políticas sociales (y desde 1989 también la estrategia económica) con su antiguo sindicato hermano, habrían dado igualmente por terminadas las relaciones históricas. En pocas

---

[67] Los secretarios generales de UGT y CCOO tenían una valoración bastante negativa de los resultados de las políticas económicas y sociales del Gobierno socialista, por lo que ambos deseaban que el Gobierno socialista diese un "giro social" para conseguir mayor justicia social (*El País* 16-2-88). Dicho objetivo podría hacer que valiese la pena que otros objetivos en los que no se ponían de acuerdo (por ejemplo la constitución del Consejo Económico y Social) no entorpeciesen su colaboración.

[68] Esto es lo que se insinúa en la actitud de la UGT ante las elecciones municipales y europeas celebradas en 1987.

palabras, creo que los factores que favorecieron la formación de la unidad de acción sindical en España explican por qué el escenario sindical español se asemeja más al italiano que al francés, pero no son tan relevantes para explicar la ruptura del modelo histórico de relaciones entre la UGT y el PSOE. Por tanto, si por alguna razón la unidad de acción entre UGT y CCOO se viniera abajo, no necesariamente se recompondrían las antiguas relaciones del sindicato socialista con este partido.

Pero, en cualquier caso, si el sindicato evaluó además que la intermediación del PSOE no le servía para influir como quería en las políticas sociales del Gobierno socialista (y no tanto en la estrategia económica) se debió al comportamiento de dicho partido. ¿Por qué el Gobierno socialista no proporcionó los beneficios que esperaba la UGT, es decir el incremento del gasto en transferencias sociales que deseaba? ¿Qué factores son los que en última instancia llevan a un partido a no querer mantener la colaboración de un sindicato?

3. Los dilemas electorales de las relaciones solidarias con liderazgos políticos fuertes

La dirección de la UGT hacía depender el mantenimiento de las relaciones de solidaridad del comportamiento que tuviese el Partido socialista, en concreto, con respecto al incremento del gasto en transferencias sociales, el cual al final no se produjo en el grado que hubiera deseado la dirección ugetista. Para entender la respuesta del PSOE hay que recordar igualmente qué esperaba un partido socialista de sus relaciones solidarias con un sindicato. Como vimos, en el caso del partido, el diseño estratégico que entrañan estas relaciones (división de tareas, intercambio de bienes, coordinación de actividades) tenía una serie de implicaciones para la arena electoral y para sus políticas gubernamentales. En primer lugar, se esperaba que el apoyo de los sindicatos sirviese para ganar las elecciones. En segundo lugar, la coordinación de las políticas económicas con la negociación colectiva serviría para que éstas tuvieran éxito (en términos de desinflación, empleo y crecimiento económico), lo cual a

su vez reforzaría las posibilidades electorales del partido. Tales beneficios compensarían sobradamente las restricciones estratégicas que entrañaban las relaciones de solidaridad (abstenerse tanto de actuar en los centros de trabajo como de llevar a cabo una política *decretista*)[69]. Ahora bien, como vimos en el capítulo séptimo, tras las elecciones sindicales de 1986 la UGT dio por terminada la coordinación económica, y por tanto, a ojos de los socialistas, su colaboración en el éxito de sus políticas económicas. Además, la nueva política salarial del sindicato socialista junto a su pretensión de mejorar con la misma intensidad las rentas de pensionistas y desempleados suponía trastocar la estrategia económica del Gobierno socialista, donde la contención salarial y la reducción del déficit público eran piezas claves para luchar contra la inflación y potenciar la creación de empleo. Parecería así que, al menos desde la perspectiva del partido socialista, las relaciones solidarias dejaban de interesar porque la organización dejaba de obtener los bienes que se esperaban. Sin embargo, vamos a ver que no fueron estas reflexiones de índole económica lo que llevó a que los dirigentes socialistas no cediesen ante las exigencias que planteaba la cúpula ugetista en política social ni a que abandonasen el diseño estratégico de las relaciones solidarias. En otras palabras, la dirección del PSOE las hubiera mantenido, aunque el sindicato se hubiera negado a seguir practicando la coordinación económica, de no haberse tenido en cuenta en el Partido socialista unas reflexiones electorales que, sin embargo, tampoco parecen estar muy relacionadas con cambios estructurales del electorado español.

Dados los planteamientos económicos de Carlos Solchaga, el haber aceptado las exigencias de mayores salarios y de abstenerse de reducir el déficit público es indudable que hubiera supuesto cesar al Ministro de Economía. Pero Solchaga contaba con el apoyo del Presidente del Gobierno y Secretario General del PSOE. Por un

[69] Es decir, llevar a cabo políticas concebidas a espaldas de los grupos de interés y ejecutarlas sin esperar a su aprobación ni apoyo con objeto de no deformar su coherencia interna.

lado, para Felipe González[70] no se trataba solamente de defender unos objetivos macroeconómicos, sino que estaba plenamente persuadido de que existía muy poco margen de maniobra en la gestión macroeconómica y de que la eficiencia económica, aunque fuese sólo un instrumento para alcanzar otros fines, era una condición *sine qua non* para crecer, reducir el desempleo y asentar el Estado del Bienestar sobre bases sólidas[71]. Estaba igualmente convencido de que a los sindicatos no les preocupaba mucho el impacto de sus peticiones sobre la inflación o sobre el déficit público, por lo que acceder a sus demandas suponía poner en peligro el crecimiento, la inversión, la solvencia del Estado y la competitividad de la economía[72]. Pero siempre existía la posibilidad de "errores de

---

[70] Para las opiniones de Felipe González con respecto a la UGT véase los trabajos de Maravall (1991:20; 1993:110-120, 1997:176, 1996:18).

[71] Véase el resumen de Actas de reuniones y mesas del Comité Federal del PSOE (Memoria de Gestión del Comité Federal al 31º Congreso del PSOE, 22-24 de enero 1988, pág. 144). Igualmente Felipe González defendía en el 32º Congreso del PSOE que (*El País*, 10-10-90):

"Los socialistas debemos utilizar el mercado para obtener recursos que permitan una política social. Hay que hacer eficiente el funcionamiento de la economía para que genere recursos".

[72] El Secretario General del PSOE exponía así en una reunión del Comité Federal del partido, celebrada el 2 de octubre de 1987 (Sánchez y Santos 1990: 505,506; esta intervención de Felipe González me fue confirmada por dirigentes socialistas durante mis entrevistas):

"El anecdotario más terrible es pensar que la diferencia que tenemos ahora es de 60.000 ó 75.000 millones de pesetas (...). Para no entrar en esa guerra de cifras y entre los socialistas, como lo sabemos, digámonos la verdad ya que hemos perdido la capacidad de decírsela a la gente de la calle. Digámonos la verdad, al menos entre nosotros. Si a mí hace doce años me dicen que la prioridad socialista en una situación como la que estamos viviendo hoy, en este momento, es la prioridad de discutir el sueldo de los funcionarios, no me lo creo, no me lo hubiera creído. Terminaré el anecdotario diciendo algo. ¿Qué es lo que conseguimos con los 60.000 millones, amigo Saracíbar? ¿Que los diputados socialistas voten con el Grupo Socialista? No lo acepto en manera alguna, yo no estoy comprando votos del Grupo Socialista (...). Si doce billones de pesetas de presupuesto se juzgan por 60.000 millones, y son malos los presupuestos y lo que comportan de política económica en función de que no se

apreciación" en la elección del margen que daba la realidad económica para atender las demandas sociales[73]. En última instancia, por tanto, si Felipe González apoyó a Solchaga fue porque tenía gran confianza en sus planteamientos económicos y porque consideraba que un presidente de gobierno debía apoyar a su ministro de economía en un 98% de las ocasiones (Maravall 1993:123; 1996:18). Este apoyo a Solchaga basado en cuestiones de confianza se evidencia en que, cuando la economía empezó a mostrar signos de recalentamiento y se hizo patente que el paro no se reducía todo lo deseable[74], González creyó que era responsabilidad de la acción de los sindicatos -en concreto de sus demandas salariales- y no porque su ministro se hubiera equivocado en la gestión económica. Esta confianza se vuelve a poner de manifiesto cuando el Presidente del Gobierno aceptó, como vimos, parte de las exigencias sindicales en 1989 y 1990, una vez que ya no se oponía a ellas Carlos Solchaga.

Pero además de convicciones de índole económica y confianza personal, parece que existieron otros factores para explicar por qué el Presidente de Gobierno no cedió en su momento a las exigencias ugetistas planteadas en términos de que, si no se accedían a ellas, la

---

acepten los 60.000 millones, o son buenos en función de que se den los regalitos o, como dices, la bisutería, yo no lo acepto. No sé si está claro. Los presupuestos no son buenos ni ahora ni hace cinco años porque no son suficientemente solidarios, por muchas razones de arrastre del pasado, queridos compañeros, que no hemos sido capaces de torcer, por razones que están entre nosotros mismos porque nosotros no somos capaces de decir ésta es la verdad. Porque perdemos cada año 40.000 ó 50.000 millones de pesetas en Hunosa y no nos tiembla un párpado, ni somos capaces de decir tenemos un plan serio para Hunosa, ese es el problema. Porque tenemos excedentes en El Ferrol y no somos capaces de trasladarlos a Puentedeume, a 15 kilómetros, y esos excedentes hace nueve años que cobran el seguro de desempleo pagados por los Presupuestos del Estado. Ese es el problema..."

[73] Como reconocía el propio Felipe González durante una intervención suya en el Congreso de los diputados celebrada el 21-12-88.

[74] Felipe González reconoció a Nicolás Redondo, durante una reunión que mantuvieron en junio de 1988, que la creación de empleo, aunque consideraba González que no había ido mal, podía ir mejor ("Circular "Entrevista UGT-Presidente del Gobierno" enviada por el Secretario de Acción Sindical el 10 de junio de 1988, op. cit.).

UGT preferiría tener "las manos libres". Felipe González estaba además convencido de que los sindicalistas siempre pedirían más por un motivo u otro, y que, en el fondo, ceder porque, si no, la UGT rompía el modelo de relaciones con el PSOE suponía ceder en el interés general a las exigencias de un grupo de presión[75]. Es muy probable, finalmente, que sopesase también los efectos electorales que tendría la ruptura con el antiguo sindicato hermano y sufrir la oposición de la UGT, que por entonces iban juntas. Pero para González la dirección de su partido no tenía que valorar lo que a corto plazo costaría en términos de votos esa ruptura[76], sino más bien que ceder a las demandas de UGT para evitarla supondría a la larga la derrota electoral del proyecto socialista[77].

---

[75] "El gobierno estimó entonces (...) que la modificación sustancial de una política que estaba teniendo resultados muy positivos, con el único propósito de mantener el apoyo de una organización afín al partido socialista, hubiera sido tanto como subordinar la gobernación del país a un grupo de defensa de intereses, por muy relevantes que éstos fueran -y los intereses representados por los sindicatos indudablemente lo son-. De ahí al gobierno privado no quedaría más que un paso" (Espina 1991a:224).

[76] En este sentido conviene recordar que no era la primera vez que el PSOE tomaba una decisión que a corto plazo le podía suponer un fuerte coste electoral. Ya lo habían hecho al apostar por la permanencia de España en la OTAN cuando en noviembre de 1985 las encuestas mostraban que el 46% de los españoles estaba en contra de la pertenencia y sólo un 19% estaba a favor; y un mes antes de la celebración del referéndum, entre un 36 y un 39% estaba en contra y sólo entre un 21 y un 26% a favor (Maravall 1996:15).

[77] "El problema de fondo, compañeros, es bastante más serio. El problema es que aquí a este partido no le va a ganar la derecha. Si el Partido pierde es porque se lo va a ganar a pulso, dicho sea de paso para tranquilizar a Joan Lerma. Desde luego en los sondeos de opinión no se reflejan ni la estimación de intención de voto ni desde luego una situación de voto como la de hace un año. Pero en fin, eso no quita importancia a lo que sí me gustaría fuera el centro de la respuesta, y quizás de la clarificación del Comité Federal. Y el centro de la respuesta es que hay polillas en las vigas, en las vigas de esto que estamos tratando de hacer. Y que las polillas las estamos metiendo nosotros. No las está metiendo la derecha, nosotros somos los que estamos apolillando nuestras vigas, y no es el primer país de Europa en el que ha

Otros importantes dirigentes socialistas, incluyendo al propio Vicesecretario General del Partido (que era a su vez vicepresidente del gobierno) no estaban, sin embargo, tan convencidos de la necesidad de que la estrategia económica emprendida desde 1982 no fuese alterada. De hecho, parece que hubiesen estado dispuestos a modificarla con tal de haber evitado el enfrentamiento con el sindicato hermano. Es más, la estrategia económica de Solchaga no dejaba de causar remordimientos dentro del Partido, así como tampoco era muy apreciado el Ministro de Economía, cuyo poder era una delegación del Secretario General del Partido (Maravall 1996:18)[78]. Bien es cierto que en el PSOE tampoco se articuló

---

pasado..." (intervención de Felipe González en el Comité Federal del PSOE, 2 de octubre de 1987, recogido por Sánchez y Santos 1990:507).

[78] Joaquín Almunia manifestó durante una entrevista con el autor celebrada el día 29-7-86:

"La primera vez que en una campaña electoral nosotros somos capaces de explicar, medianamente bien, -y de que el electorado nos escuche y vea cuáles ha sido los resultados de nuestra política- han sido en la campaña del 93. En la campaña del 93, que nosotros habíamos hecho un balance de diez años al final del 92, y que además tenemos que apretar mucho el acelerador porque vienen a por nosotros, porque nos van a ganar, y hacemos una valoración de los diez años de gobierno, de cuáles han sido los logros, y salimos a defender los resultados de nuestra política. Y por primera vez nos sentimos tranquilos de decir: "pues mira, hemos hecho una política que da los resultados que queríamos que diese". Pero durante una serie de años, buena parte del Partido ha vivido en pecado, en conciencia de pecado. Hemos vivido años con la sensación, salvo unas pocas gentes convencidos de que sí lo estábamos haciendo bien.... pero en general, el Partido como organización, la dirección que entonces realmente existía en el Partido vivía sumida en la conciencia de pecado, de decir: "no es esto, no es esto. Estamos haciendo lo contrario de lo que deberíamos hacer, no tenemos por qué hacer determinadas cosas que hacemos, estamos renunciando a muchas cosas". Pero en cambio a finales del 92, y en la campaña del 93, se empieza a reconciliar el Partido con su tarea. Y aparece el otro lío, el de la corrupción. Pero lo que son los resultados de la política en los aspectos socioeconómicos, esa primera reconciliación se produce en el 93".

El propio Solchaga reconoce en una entrevista con Burns Marañón que hasta que fue nombrado Narcis Serra como vicepresidente de gobierno la mayoría del Partido le tenía como "objeto de sus ataques" (Burns Marañón 1996:169).

ninguna alternativa de política económica global que hubiera podido dar cobertura ideológica a las demandas de la dirección ugetista (ni tan siquiera por los que luego se considerarían el ala izquierda del partido y que recibieron el nombre de "guerristas")[79]. Dentro del sector de Izquierda Socialista -aunque en el 32º Congreso del PSOE siguieron defendiendo la confluencia estratégica del partido con UGT[80]- García Santesmases consideraba que la huelga del 14 de diciembre de 1988 era un conflicto de distribución y, por tanto, ligado a un "viejo paradigma" (García Santesmases 1993:239). Fue un conflicto, en su opinión, protagonizado por un sindicato "negociador, burocrático, moderado" que no pretendía acabar con los fundamentos de la sociedad burguesa "sino discutir el margen económico existente para realizar el giro social. El sindicalismo de los años treinta era revolucionario y postulaba el cambio del modo de producción; el sindicalismo de los ochenta lucha por la distribución sin poner en cuestión ni la lógica del beneficio ni el modelo de crecimiento económico. Es un sindicalismo donde se van difuminando los referentes ideológicos para lograr una presencia 'cómoda' de los trabajadores, independiente de su adscripción político-partidaria" (García Santesmases 1993:240). En cualquier caso, las razones por las cuales el resto de dirigentes del partido, miembros del Gobierno incluidos, apoyaron en última instancia la posición de Solchaga en vez de a la dirección de la UGT no pueden reducirse, por tanto, a cuestiones de "eficacia económica". Hay que explicar por qué, cuando los líderes del PSOE se percataron de que o accedían a la demandas de la UGT (lo que entrañaba la salida de Solchaga del

[79] Joaquín Almunia ha rechazado así que el factor ideológico sea realmente clave para distinguir a "guerristas" de "renovadores". En concreto, según su opinión, ni en el 32º Congreso (1990) ni en el 33º (1994) hubo un debate serio sobre pensiones, educación o política económica, sino que se debatieron "espacios de poder, lealtades personales, castigos a los desleales y premios a los leales" (entrevista de Burns Marañón 1996:332).

[80] Véase *El País*, 10-10-90.

Gobierno), o no lo hacían (y se daban por rotas las relaciones históricas) se decantaron por lo segundo[81].

Ciertos investigadores han planteado que este dilema apenas era tal porque los dirigentes del PSOE, si bien no buscaron la ruptura con la UGT, ni la temían ni la lamentaban. Aducen para ello distintos motivos, que van desde estilos de vida y origen social de los líderes del PSOE, lo que les llevaba a menospreciar a sus antiguos compañeros sindicalistas, hasta la fortaleza relativa de su organización en comparación con la UGT. Uno de los factores más citados han sido así los éxitos electorales del PSOE ante la falta de oposición que existía por aquel entonces tanto a su izquierda como a su derecha[82]. Los dirigentes del PSOE se sentían así seguros en su enfrentamiento con la dirección de la UGT gracias a la renovación de su mayoría absoluta en las elecciones legislativas de junio de 1986. Sin embargo, parece que en realidad dentro de este partido no estaban tan seguros de que la ruptura con la UGT no les podría suponer un importante coste electoral[83]. Como planteó en su día Ricardo García

---

[81] Nos preguntamos así por qué Solchaga no corrió la misma suerte que su homólogo griego Kostas Similis el cual dimitió cuando Papandreu se negó a que el plan de estabilización puesto en marcha en 1985 continuase en vigor una vez que se había salido de lo peor de la crisis (Maravall 1993:99).

[82] De hecho, en la literatura especializada se suele señalar que los gobiernos mayoritarios suelen estar más dispuestos a iniciar reformas, pues tienen la capacidad, además del derecho, de llevar a cabo sus intenciones políticas. Así sólo los partidos que tienen todos los poderes del gobierno pueden adoptar medidas a corto plazo impopulares con la esperanza, se supone, de que tengan éxito en el medio plazo y sean recompensados por electores agradecidos.

[83] Esta valoración dentro del PSOE me la expuso Joaquín Almunia durante una entrevista con el autor (celebrada el 29-7-96):

"P: ¿Pero, en cualquier caso, no asustaba mucho la ruptura con la UGT desde un punto de vista electoral?

R: Sí, sí asustaba... probablemente porque no se había mantenido un análisis sociológico demasiado profundo. Había preocupación. Es lógico que existiese esa preocupación. Había preocupación en la medida en que el movimiento sindical y el movimiento obrero formaba parte no sólo de nuestra historia, sino de la esencia de un proyecto socialista, y no era posible concebir un partido socialista que no tuviese unas raíces, una interlocución y una presencia y unos apoyos entre los trabajadores y

Damborenea[84], la ruptura y oposición de la UGT podían tener a corto plazo un coste electoral fuerte, cuyo resultado final estaba por ver, pero que parecía insinuarse en los resultados electorales de las elecciones municipales, autonómicas y europeas de 1987[85]. Justo Zambrana[86] apostaba igualmente a principios de 1989 por mantener entre la UGT y el PSOE un clima de entendimiento e interacción, y rechazaba el desentendimiento de una organización respecto de la otra porque temía que ambas organizaciones saldrían perdiendo con su separación. En el caso concreto del partido, el antiguo secretario ugetista consideraba que los efectos se habrían de sentir a medio y

---

entre los que representaban a los trabajadores. Se tuvo miedo de que [Nicolás Redondo] pegase un tajo mayor del que dio. Se creía que iba a producir una bajada de votos mucho más fuerte de lo que realmente se ha producido".

[84] Ricardo García Damborenea, secretario general del PSOE en Vizcaya, afirmaba así (*El País* 24-10-87):

"Lo lamentable es que haya miembros en el Gobierno que sostienen los socialistas que consideren más importante mantener dogmáticamente algunas cifras macroeconómicas, que siempre son discutibles y que podrían crear problemas teóricos, que una ruptura con UGT, que no es un mal teórico sino cierto, seguro".

[85] Javier Solana, a la sazón ministro de cultura y portavoz del Gobierno, declaraba a *El País* (13-6-87) que la conflictividad social de los últimos meses y la tensión en las relaciones entre el Gobierno y la UGT habían incidido en la pérdida de votos de las candidaturas municipales y autonómicas socialistas. En junio de 1987 se celebró una reunión extraordinaria del Comité Federal donde Alfonso Guerra, en nombre de la Comisión Ejecutiva Federal, analizó los resultados de estas elecciones y señaló que, entre otras cuestiones, el desarrollo de las relaciones con la U.G.T había incidido en el resultado electoral. Por su parte, en dicha reunión el Secretario General del PSOE valoró que, en el cómputo general de los resultados, el partido había descendido cinco puntos, pero que -pese a llevar cinco años en el Gobierno- se mantenían, que había habido malos resultados donde la gestión había sido mala, y que la respuesta estratégica a la pérdida de cinco puntos debía ir por el camino del diálogo y de la concertación (Resumen de Actas de reuniones y mesas del Comité Federal del PSOE, Memoria de Gestión del Comité Federal al 31º Congreso del PSOE, 22-24 de enero 1988, pág. 144).

[86] Justo Zambrana fue Secretario Confederal de Acción Institucional de la UGT de 1986 a 1987.

largo plazo[87]. De hecho durante 1987 y 1988 en el PSOE se resistían a dar por terminadas las relaciones de solidaridad con la UGT[88].

También se ha planteado que el Ministro de Economía pudo oponerse a las exigencias ugetistas gracias a la naturaleza organizativa del PSOE. Se suele señalar así que su estructura centralizada y oligarquizada[89] ayuda a explicar que su dirección apoyase a un ministro impopular dentro del propio partido y aborrecido en el sindicato hermano. Así, para el congreso socialista de 1988, sólo Vizcaya y Madrid apoyaron a la dirección ugetista. El líder del PSOE en Vizcaya, Ricardo García Damborenea, fue el dirigente socialista que más abiertamente se puso del lado de la dirección ugetista, y el más crítico con sus compañeros por no cuestionar una actuación del Gobierno que conducía a la ruptura con la UGT (*El País* 24-10-87)[90]. La Federación Socialista Madrileña también apoyó, más tímidamente, a la dirección ugetista, y Joaquín Leguina, Presidente de la

---

[87] "La convergencia PSOE-UGT y el papel absolutamente clave de ambos en la vida española de los últimos años suponían desde el punto de vista sociopolítico la viga maestra sobre la que este país ha salido de la crisis y anda lanzado hacia el progreso. Que todo el contrapeso de los problemas y desvertebraciones de nuestra sociedad recaiga sobre el Gobierno sin retaguardia sindical no es un dato para el optimismo" (Zambrana 1989:75,76).

[88] Según Alvaro Espina la transformación de relaciones la comenzó la UGT, y no el partido como en otros países, pues suponía "una prueba a la que seguramente el gobierno socialista no se hubiera arriesgado por su propia iniciativa, dada la relación tradicional con la UGT y su sensibilidad ante la debilidad de los sindicatos" (Espina 1991a:225). Esta afirmación de que la dirección del Partido socialista estimó que era conveniente un cambio en la modalidad de relaciones después de que lo hubiera hecho la UGT me fue confirmada igualmente por José María Zufiaur durante una entrevista celebrada el día 12-10-96.

[89] Para la organización interna del PSOE, véanse los trabajos de J. Mª Maravall (1991; 1996) y Pilar Gangas (1995).

[90] La ponencia de su provincia para aquel congreso enmendaba el documento marco de la Ejecutiva Federal, pues cuestionaba la política social del Gobierno, criticaba las tendencias de carácter neoliberal que desdibujaban su oferta ideológica, proponía una profunda renovación de la cultura y de los postulados socialistas, y planteaba como una necesidad imperiosa la existencia de una estrategia común entre el PSOE y la UGT (*El País* 29-11-87).

Comunidad de Madrid, achacaba a la "gubernamentalización" del PSOE la crisis con el sindicato hermano (*El País* 13-11-87)[91]. Ahora bien, el problema con esta clase de interpretaciones "basistas" que contraponen las preferencias de las bases de las organizaciones a las de sus dirigentes radica en que no explican por qué justamente la ejecutiva del PSOE apoyó a Carlos Solchaga cuando, como hemos visto, creía que le podía costar votos (y además el Ministro de Economía no suscitaba precisamente devoción). La razón por la cual los dirigentes del PSOE, cuando tuvieron que optar, apoyaron a Solchaga no puede ser explicada, así pues, por la centralización del Partido socialista.

Parece así que la opción de dar por terminadas las relaciones históricas y enfrentarse con la UGT no era tan deseable, pero, como vamos a ver ahora, ceder a las peticiones del sindicato hermano también tenía sus posibles desventajas. En primer lugar, dado el grado de confianza del Secretario General del PSOE y Presidente del Gobierno en su Ministro de Economía, el haber modificado la política económica probablemente hubiera supuesto que el resto de dirigentes socialistas habrían tenido que desplazar a Felipe González de sus cargos en el Partido y en el Gobierno. Ya desde antes había quedado claro que el máximo dirigente socialista no estaba dispuesto a llevar a cabo programas en los que no creía, por lo que la imposición de un cambio de políticas por parte de su partido hubiera

---

[91] En la ponencia de la FSM no aparecían así las valoraciones que se hacían en el documento marco de la Ejecutiva sobre los sindicatos y defendía el papel de la UGT en la interlocución social (*El País* 13-11-87). El congreso de la FSM, destinado a redactar las propuestas de los socialistas madrileños ante el 31º Congreso federal del PSOE, exhortaba al partido a convertirse en mediador de las confrontaciones entre el Gobierno y la UGT, y aprobó una enmienda a la ponencia donde se afirmaba (*El País* 29-11-87):

"El proyecto socialista queda cojo e irreconocible si no cuenta con una organización social que lo comparta dentro de la clase trabajadora. Los conflictos normales entre Gobierno y sindicato podrían ser amortiguados si el partido cumple con su tarea de servir de intermediario entre ambos. Los socialistas en el partido y en el sindicato hemos de llegar a un entendimiento en la conciencia de que tenemos objetivos comunes, pero tareas específicas".

supuesto su inmediata renuncia[92]. Así, los ministros del área económica podían estar tranquilos mientras contasen con la confianza de Felipe González y éste permaneciese en el cargo de secretario general del PSOE. Dicho en palabras del por entonces ministro de Industria, Claudio Aranzadi (el cual no estaba afiliado al PSOE):

"No cabe conflicto entre el partido y el Gobierno cuando el presidente del Ejecutivo y el secretario general del PSOE es la misma persona" (*El País* 9-11-90).

Llevado al extremo, o Felipe González era persuadido para que cediese, o los miembros de la ejecutiva socialista se encontraban ante el dilema de elegir entre su Secretario General o la dirección de la UGT. No es así de extrañar que algunos dirigentes del Partido socialista como Alfonso Guerra o Joaquín Leguina (Presidente de la Comunidad de Madrid) intentaran a lo largo del proceso de enfrentamiento conciliar posturas, y convencer a unos y a otros de que acercasen posiciones (*El País* 29-10-87)[93]. Pero, cuando se demostró imposible tal acercamiento, los intermediadores se decantaron por la organización donde trabajaban[94]. Parece además que la reflexión electoral que se hacía Felipe González caló en la dirección del PSOE, y se convencieron de que la derrota del

---

[92] En palabras más claras de Felipe González (intervención en una reunión del Comité Federal del PSOE el 3 de octubre de 1987, citada por Sánchez y Santos 1990:505):

"Cuando el Grupo Socialista decida que estos presupuestos [los de 1988] son malos y esta política económica es mala, que no la voten y que cambien a los responsables..."

[93] Los intentos de intermediación de Joaquín Leguina fueron confirmados por José María Zufiaur durante una entrevista con el autor celebrada el 12-10-96.

[94] "Yo creí sinceramente que después del 14-D se podía llegar a un acuerdo, quizás me equivoqué. Es cierto que hablé con gente de UGT y me manifestaron su voluntad de arreglar las cosas. Me pasaron un papel, sin firma ni nada, sobre cómo evaluaban ellos sus peticiones y cómo podían encajar. Yo me limité a trasladarlo. Después me llevé una gran decepción con el sindicato al saber que no habían sido capaces de firmar el acuerdo, a pesar de que la oferta era buena" (entrevista a Leguina por Sánchez y Santos 1990:133).

Gobierno laborista británico en 1979 era lo que ocurría cuando un gobierno estaba dominado por los sindicatos (Maravall 1993:119). Así, si no había más remedio que elegir, la opción estaba clara para la mayoría de los dirigentes socialistas[95]. No se trataba sólo de romper para muchos militantes socialistas con la devoción y lealtad que existía para con su líder (Maravall 1996:14)[96], sino que además su Secretario General era un recurso electoral del Partido de primer orden[97]. En segundo lugar, aceptar las demandas de la UGT bajo la advertencia de que si no dejarían de apoyarles, implicaba a ojos de los dirigentes socialistas un enfrentamiento por parcelas de poder (Maravall 1997:177)[98], por quién tomaría al final las decisiones y quién

---

[95] Ricardo García Damborenea comentaba al respecto:

"Si Nicolás Redondo debe continuar defendiendo los postulados de UGT en un marco en el que no encuentran eco, como es el partido socialista, no tiene más remedio que abandonar el grupo parlamentario" (*El País* 24-10-87).

[96] Se puede plantear así que, dada la popularidad de Felipe González dentro del PSOE, incluso aunque este partido hubiese tenido una estructura menos centralizada y oligárquica realmente la dirección de la UGT habría continuado teniendo difícil conseguir sus objetivos en política social mientras Solchaga contase con el apoyo y confianza de González.

[97] Según los datos que da Maravall (1996:18), González había sido la principal razón para apoyar al Gobierno para el 22% del electorado socialista en 1986; el 14% en 1989, y el 23% en 1993. El estudio de Gunther y Montero (1994:534) señala que de las elecciones de 1979 a las de 1993 entre la mitad y las dos terceras partes de la varianza en el apoyo electoral al PSOE, AP/PP y PCE/IU podía ser "explicado" solamente por las actitudes hacia su líder. En el caso del PSOE, las valoraciones positivas hacia Felipe González contribuyeron sustancialmente a la suerte electoral de este partido en las elecciones de 1979 y 1993, menos en las de 1982.

[98] Carlos Solchaga comentaba durante una entrevista con este autor (celebrada el día 19-7-96) que el enfrentamiento del sector del partido más fiel a Guerra con el sindicato socialista se produjo cuando los dirigentes de la UGT, desilusionados porque el preacuerdo alcanzado en el otoño de 1987 con el Vicepresidente del Gobierno había sido rechazado por él, "empezaron a meterse con Guerra, y de la peor forma que podía hacerse con una persona como Alfonso Guerra, que era atacando su vanidad, diciendo: 'bueno, este Guerra no manda nada, y aquí quién pincha y corta es Solchaga'. Eso llevó a un nuevo enfrentamiento y, entonces, ya sí se

nombraría a los ministros. Cuestiones éstas a las que no estaban dispuestos a ceder los dirigentes socialistas.

En pocas palabras, el Presidente del Gobierno y Secretario General del PSOE, Felipe González, no accedió a las peticiones de la UGT con la aquiescencia de la mayoría de los dirigentes del Partido[99]. Desplazar a Felipe González para poder así dar satisfacción a las peticiones de la dirección ugetista tendría mayores costes electorales y suponía compartir las decisiones finales en materia de gobierno con la dirección ugetista. La opción que escogieron los dirigentes del PSOE fue cerrar filas alrededor de su máximo líder, e -indirectamente- alrededor de Carlos Solchaga, pero al mismo tiempo intentaron que el coste de esta opción fuese el menor posible. Había que conservar a la UGT sin ceder a las peticiones de su Ejecutiva.

Los dirigentes del PSOE, ante las advertencias de Nicolás Redondo de que la UGT podría romper con el modelo histórico de relaciones, le hicieron ver lo que podría suponer esto, es decir, que si el sindicato dejaba de practicar la colaboración solidaria, lo mismo haría el Partido socialista, empezando por la pérdida del trato preferente que tenía. De ahí que iniciaran en los primeros meses de 1988 una aproximación hacia la dirección de CCOO -sindicato que acababa de cambiar de Secretario General, pero que no quiso

---

metió el núcleo duro del Partido contra la Unión General de Trabajadores, porque ellos se habían metido con Guerra menospreciándolo".

[99] Félix Tezanos (1994:20) ha afirmado que el desencuentro entre los sindicatos y el Partido socialista se produjo sobre todo por parte del Presidente del Gobierno "y del núcleo tecnocrático más duro de sus ministros". Por el contrario, Narcis Serra, en una entrevista con Burns Marañón (1996:185) afirma que "en la huelga del ochenta y ocho la cohesión [de Felipe González] con Alfonso Guerra es total". José María Zufiaur durante una entrevista con el autor confirma que "en aquella época los más duros descalificadores de la UGT eran los guerristas". Todo parece indicar, por tanto, que el acercamiento entre el sector del PSOE afín a Alfonso Guerra y los sindicatos, no sólo a la UGT, que comenta Tezanos es posterior al cambio del modelo histórico.

seguirles el juego[100]- y no dudaron en el verano de aquel año en firmar dos acuerdos con organizaciones rivales de la UGT, el sindicato de funcionarios (CSIF) y la Unión Democrática de Pensionistas. Igualmente, los dirigentes socialistas intentaron utilizar el peso histórico de la colaboración entre las dos organizaciones para evitar la oposición ugetista a sus medidas. Así al Secretario General de la UGT le resultaba intolerable que cada vez que el sindicato se oponía a determinadas medidas del Gobierno se hiciese hincapié en que existía una profunda división en la familia socialista o que aquello supusiese un deterioro electoral del Partido (*El País* 27-10-87). Parece incluso que aquellas advertencias de la dirección del PSOE hicieron mella en algunos dirigentes del sindicato[101]. Finalmente, cuando la dirección de la UGT mostró que estaba dispuesta hasta a llegar a la convocatoria de una huelga general junto a su antiguo rival, CCOO, para conseguir que el Gobierno socialista accediese a sus peticiones, desde el aparato del Partido se intentó convencer a dirigentes ugetistas de que no secundasen la iniciativa de su dirección. La Comisión Federal de Conflictos del Partido socialista intentó incluso a principios de diciembre de 1988 hacer dar marcha atrás a Nicolás Redondo en la convocatoria de la huelga general de 24 horas (Monteira 1997:432; entrevista a Nicolás Redondo por *El País*[102]). Pero tampoco sirvió de mucho, según comentaba José María Zufiaur[103], pues estas pretensiones producían el efecto contrario en la Unión General de Trabajadores.

No hay que excluir además la hipótesis de que en la dirección del PSOE cometiesen un error de cálculo sobre las posibilidades que

---

[100] Así, por ejemplo, el dirigente de CCOO, Julián Ariza, afirmaba que la entrevista mantenida recientemente por el Presidente del Gobierno y el Secretario General de su sindicato había sido "un chantaje hacia Nicolás Redondo" (*El País* 26-3-88).

[101] Así, el dirigente de la Federación de Jubilados y Pensionistas de la UGT declaró que su federación había aceptado al principio de las negociaciones con el PSOE una rectificación a la baja de sus reivindicaciones en aras de evitar desavenencias en la familia socialista (*El País* 18-11-87).

[102] En *Memoria de la Transición*, pág. 435, 1997.

[103] Declaración realizada durante una entrevista con el autor celebrada el día 12-10-96.

tenía la dirección de la UGT de conseguir sus objetivos en la esfera política por otra vía que no fuese por mediación del Partido socialista, así como sobre el coste que tendría la ruptura para el sindicato. Joaquín Almunia, por ejemplo, comentaba durante la entrevista con el autor del día 29-7-96 que el éxito de la huelga general del 14 de diciembre de 1988 cogió a la dirección del PSOE absolutamente por sorpresa. Igualmente Justo Zambrana estaba convencido de que la UGT saldría perdiendo de la ruptura, en concreto, perdería "espacio sindical como sin duda demostrar[ían] próximas elecciones sindicales" (Zambrana 1989:75). El hecho fue que la UGT volvió a ganar las elecciones sindicales en 1990, y alcanzó su mayor tasa de representatividad entre los trabajadores españoles.

Se podría plantear que realmente todos estos factores explican por qué la dirección del PSOE no quería ver a la UGT de oposición, pero que la cuestión del modelo de relaciones partido-sindicato les era superflua. Sin embargo, hay que señalar que la convocatoria por la UGT junto con CCOO de un paro general de 24 horas para el día 14 de diciembre de 1988 supuso que los dirigentes socialistas tuviesen que entrar de lleno en la reflexión sobre qué tipo de relaciones podrían mantener con el "movimiento obrero organizado", y no parece que se decantasen todavía por terminar con el modelo histórico de relaciones. Las resoluciones de su primera reunión del Comité Federal en 1989 (celebrado los días 13 y 14 de enero de ese año) se limitaban a exponer que la actitud de la UGT, esto es, "el abandono de la práctica sindical de negociación por parte de su dirección, la ruptura de los instrumentos de comunicación con el PSOE y las represalias contra aquellos que defienden en el sindicato la política socialista", había puesto en cuestión "el modelo centenario de organización de los socialistas y la naturaleza de la relación entre ambas organizaciones"[104]. Su conclusión era que el Partido socialista tenía que "iniciar una profunda reflexión sobre estos problemas", pero mantenían todavía que, en cualquier caso, "[l]a presencia directa del Partido Socialista en los centros de trabajo y en la actividad sindical

[104] Resolución del Comité Federal del PSOE, reunido los días 13 y 14 de enero de 1989 (recogida en la Memoria de Gestión del Comité Federal del PSOE al 32º Congreso del PSOE, 1990, pp. 143, 144).

e[ra] un instrumento irrenunciable de [su] actividad política", sobre todo para garantizar que "los ciudadanos en general y los trabajadores en particular [tuviesen] la oportunidad de conocer los criterios de los socialistas sobre todas las cuestiones que les afecta[asen]". Bien es cierto que:

> "[E]l Comité Federal del PSOE considera necesario que la UGT se pronuncie sobre la conveniencia o no de mantener la tradicional presencia de los sindicalistas socialistas en ella"[105].

Meses después la dirección socialista todavía dudaba sobre si decantarse por establecer un nuevo modelo de relaciones o no. En la resolución aprobada por su Comité Federal (reunido el día 7 de abril de 1989) afirmaban que seguían defendiendo "una acción sindical con referentes políticos. La indiferencia política en los sindicatos no garantiza[ba] una mejor defensa de los trabajadores: por el contrario, abr[ía] las puertas al corporativismo y la burocratización"[106]. Seguían exponiendo los beneficios que los sindicatos ofrecían al proyecto de gobierno socialista[107] y hacían un breve balance de los servicios prestados a la UGT desde que el PSOE se ocupaba del gobierno del país. Se consideraban además con derecho a debatir la estrategia sindical, pues al fin y al cabo mantenían la condición de "miembros del Partido Socialista y de afiliados a la UGT", pero negociando con este sindicato -mediante la constitución de una comisión de trabajo- "las vías de recuperación del diálogo entre el sindicato y el partido"[108]. Aquellas reflexiones iban dirigidas a la UGT, no a CCOO.

Parece que la dirección del PSOE todavía tenía presentes los posibles efectos que la ruptura del modelo histórico tendría en su

---

[105] Vid. supra.

[106] Resolución del Comité Federal del PSOE, reunido el día 7 de abril de 1.989 (recogida en la Memoria de Gestión del Comité Federal del PSOE al 32º Congreso del PSOE, 1990, pp. 145-149).

[107] "No cabe duda de que un futuro de progreso requiere de la participación de sindicatos fuertes y representativos" (vid. supra., pág. 148).

[108] Vid. supra., pág. 147.

militancia y votantes[109]. Sin embargo, una vez que las victorias electorales de 1989 probaron que el PSOE podía ganar unas elecciones -y retener el apoyo mayoritario de los trabajadores- sin el apoyo electoral de la UGT, la modalidad solidaria de relaciones partido-sindicato tenía sus días contados en dicho partido (Espina 1991a:225)[110]. La experiencia había, por tanto, mostrado a los dirigentes socialistas que no era cierto que la colaboración solidaria fuese la mejor estrategia para alcanzar sus objetivos, pues (a) en el ámbito de las políticas gubernamentales la UGT se negaba a seguir practicando la coordinación económica, y (b) se podían ganar las elecciones incluso con su indiferencia (cuando no abierta oposición)[111]. Las relaciones solidarias con el antiguo sindicato

---

[109] En una reunión del Comité Federal del PSOE del 20 de septiembre de 1989, el Vicesecretario General del Partido comentaba las condiciones en las que se iban a encarar pocos meses después las siguientes elecciones generales, entre las cuales se encontraba un "cierto respiro en nuestra militancia que vive de forma más desdramatizada la crisis con UGT" (Reunión del Comité Federal el 20 de septiembre de 1.989, recogida en la Memoria de Gestión del Comité Federal del PSOE al 32º Congreso del PSOE, 1990, pp. 138).

[110] Algunos dirigentes, sin embargo, estaban ya decididos a dar el paso sin esperar a ver los resultados electorales. Así Justo Zambrana (militante socialista que había sido hasta 1987 Secretario de Acción Institucional de la UGT) comentaba a principios de 1989 que "en el gobierno socialista también se oyen voces, en privado por ahora, que hablan del sindicato como una cosa del pasado y que creen en la conveniencia de gobernar cara a la sociedad sin ningún tipo de avance sindical" (Zambrana 1989:75). Así, Carlos Solchaga declaraba durante el 32º Congreso del PSOE que una vez que la UGT había optado por actuar con autonomía al convocar la huelga del 14-D, el Partido socialista debía asumir el mismo talante autónomo sin ninguna mala conciencia (*El País* 11-11-90).

[111] "Como los lazos entre sindicato y partido socialista eran en España mucho más estrechos que en otros sitios, la prueba del nuevo modelo político iba a serlo también para el esquema de relaciones político-sindicales y para la teoría del bloque de clase que lo sustentaba. La superación de la prueba supone por ello que el razonamiento tradicional de la izquierda -que residenciaba el soporte político del socialismo en las organizaciones de defensa de intereses de clase- resulta extremadamente mecanicista. Y éste es un elemento profundamente renovador en la izquierda europea. Ya durante los setenta se habían producido retiradas de apoyo de los sindicatos a los

hermano no proporcionaban los beneficios esperados o no eran necesarias para alcanzarlos, pero mantenerlas suponía importantes costes. Satisfacer las peticiones de la dirección de la UGT implicaba que los dirigentes ugetistas tuviesen la capacidad de decidir sobre cuáles eran las prioridades y las estrategias en las tareas de gobierno en caso de desacuerdo, algo a lo que la dirección del PSOE no estuvo nunca dispuesta (Espina 1991a:224; Maravall 1997:177)[112]:

"Nuestra posición es clara: diálogo social y compromiso social sí, diálogo político y compromiso político también. Pero hipotecas sobre la concepción y el desarrollo de nuestro proyecto, no (...) El ejercicio del poder político representativo... nos obliga a un ejercicio autónomo, un ejercicio no hipotecado por presiones de

---

partidos socialdemócratas, pero cuando esto ocurrió los partidos perdieron apoyo electoral de manera apreciable, hasta el punto de tener que abandonar el poder. En los ochenta, las cosas han cambiado. Mitterrand, primero; Craxi, después, y, finalmente, González han soportado la retirada de apoyo sindical sin graves ni definitivas mermas electorales" (Espina 1991a:223).

Según declaró Joaquín Almunia durante la entrevista con el autor del día 29-7-96, la victoria electoral del PSOE en las elecciones europeas del verano de 1989 les sorprendió. El PSOE obtuvo mejores resultados en las elecciones al Parlamento Europeo de 1989 (40,1%) que en las de 1987 (39,4%). Véase igualmente el resumen de la reunión del Comité Federal del PSOE del día 14 de julio de 1989 (recogido en la Memoria de Gestión del Comité Federal al 32º Congreso del PSOE, 1990, pp. 135, 136).

[112] Joaquín Almunia afirmaba al respecto durante la entrevista con autor del día 29-7-96:

"Desde el Ministerio de Trabajo se ve muy bien. Se ve que es imposible seguir con un modelo de relación preferencial porque ni el sindicato puede atarse de pies y manos, ni el Gobierno puede decir que sí a todo lo que se le pida. Eso se ve muy claro. Pero en general en el Partido se pensaba que todos los problemas surgían, o de la escasísima sensibilidad sindical de Miguel Boyer, o de la torpeza negociadora de los que teníamos que estar con los sindicatos cada día. Yo creo que la gente tendía a pensar que habría siempre fórmulas para encontrar terrenos de acuerdo, que todo era superable y que no había ninguna dificultad objetiva; y de que no hacía falta ningún cambio de estrategia ni en uno ni en otro lado, y yo creo que a partir del 14-D ya eso hace aguas".

> ningún grupo, ni por pactos que no puedan permitirnos un desarrollo de nuestros compromisos con los ciudadanos"[113].

En el Partido socialista, una vez que les quedó bien claro que la dirección de la UGT no estaba dispuesta a volver al modelo anterior de relaciones y que era posible ganar las elecciones con la indiferencia u oposición de las organizaciones sindicales, tenían ahora la siguiente alternativa: o bien intentaban realizar directamente las tareas de movilización entre los trabajadores que hasta entonces había sido el papel del sindicato; o bien borraban los últimos vestigios de *obrerismo* que quedaban en las resoluciones de sus congresos[114]. Ya desde la Transición en el PSOE habían ido analizando el cambio de la sociedad española, haciendo especial hincapié en el peso de la clase obrera tradicional, la pérdida de una conciencia de clase "dura" y el ascenso de nuevas clases medias y nuevos colectivos, pero resistiéndose (como se exponía en el congreso de enero de 1988) a la pérdida de la centralidad de la clase trabajadora en su proyecto de transformación social. Así, por ejemplo, en los documentos del Programa 2000[115] aparecidos durante aquel mismo año, dentro de una considerable ambigüedad sobre las relaciones partido-sindicato o el papel de las clases trabajadoras, aparecía como un modelo de

---

[113] Felipe González, "El PSOE, un proyecto renovado en una nueva sociedad", epílogo del Manifiesto del Programa 2000, Madrid, Editorial Sistema, 1991, pp. 226 y 127.

[114] En el 32º Congreso del PSOE (1990) las federaciones de Orense, Badajoz, Granada y Toledo pedían que se recomendase a quienes quisieran trabajar en el ámbito sindical que se afiliaran a la UGT. Por el contrario la propuesta de Ramón Vargas Machuca propugnaba dejar plena libertad. Solamente la federación de Vizcaya, encabezada por Nicolás Redondo Terreros era partidaria de dejar las cosas como estaban.

[115] A partir de 1985, Alfonso Guerra había organizado jornadas anuales en Jávea donde se reunían políticos e intelectuales socialistas. De aquellas reuniones salió una propuesta para iniciar un proceso de renovación del PSOE que fue autorizada por la Ejecutiva del Partido en octubre de 1986. Se redactaron así las bases del Programa 2000 en diciembre de 1987. Las propuestas fueron tomadas en cuenta en el manifiesto del Programa 2000, que fue hecho público en enero de 1990 y aprobado unánimemente en el 32º Congreso del PSOE (Burns Marañón 1996:391).

relaciones partido-sindicato, "probablemente el más tradicional y que es el que se ha correspondido en su mayor parte con el socialismo democrático", uno que "entiende el movimiento obrero operando a través de los dos cauces: el partido político y el sindicato"[116]. Pero, una vez que se produjo la ruptura del modelo histórico de relaciones con la UGT, en vez de pretender realizar directamente el papel que tenía asignado el sindicato en el intercambio político-electoral (como parecieron sugerir, sin embargo, en la resolución aprobada por el Comité Federal reunido tras la huelga general de 1988), decidieron dar por terminados los últimos vestigios de "obrerismo". Así, aunque Narcis Serra ha afirmado que desde 1991, momento en que llegó al cargo de Vicepresidente de Gobierno (en marzo), se esforzó en transmitir al Partido que se olvidase de la clase trabajadora y que pensase en la defensa de los intereses populares (Burns Marañón 1996:184), parece que esta decisión ya se tomó con anterioridad, y con la aprobación de los que se calificaban de "guerristas", pues, como vimos, la clase trabajadora perdió su centralidad para el PSOE en el congreso de 1990[117].

Vemos, por tanto, que la Ejecutiva del Partido socialista consideró que aquel diseño estratégico de las relaciones de solidaridad basado en el reparto de ámbitos, apoyos recíprocos y coordinación de actividades no compensaba los bienes y servicios que reclamaba el sindicato hermano (que entrañaban una estimable pérdida de autonomía en la elaboración de políticas) cuando constató que el apoyo sindical no proporcionaba beneficios, y, al menos en el intercambio político-electoral, la ausencia de tal apoyo no implicaba los perjuicios electorales que había temido. Parecería, por tanto, que desde la perspectiva del partido político, las relaciones de solidaridad con el sindicato se abandonaron porque no se obtenían los bienes esperados, como exponían la teoría de Howell y Daley para otros casos europeos. Sin embargo, hay que hacer la observación de que la

---

[116] *La Sociedad Española en Transformación: Escenarios para el Año 2000*, 2ª Edición, Madrid: Siglo XXI, pág. 89.

[117] El sector "guerrista" -que posteriormente intentó algún acercamiento a los sindicatos como por ejemplo con motivo de la nonata ley de huelga- dio su consentimiento en el congreso de 1990.

negativa de la UGT a continuar practicando la coordinación económica no fue lo que llevó a que los dirigentes socialistas rechazasen sus exigencias en política social, lo que a su vez llevaría a la UGT a romper con el intercambio político-electoral. Luego no parece que el fracaso de la coordinación económica llevase ni que el Partido socialista ni la UGT diesen ya por terminadas sus relaciones solidarias. Quedaban por ver todavía los beneficios de la división tradicional de ámbitos. El hecho mismo de que la dirección del PSOE sólo se atreviese a romper definitivamente con el modelo solidario de relaciones con la UGT cuando hubo comprobado que la falta de apoyo de su sindicato no suponía tan grave coste en las elecciones legislativas pone de relieve el peso de los objetivos electorales en las decisiones estratégicas del Partido socialista. En segundo lugar, si en última instancia el PSOE no satisfizo a la UGT no fue tampoco porque los dirigentes socialistas hubieran evaluado que su apoyo explícito era fútil o perjudicial para ganar las elecciones, sino porque lo que le pedía la dirección ugetista les resultaba un coste inasumible: deshacerse del gran activo electoral que era Felipe González. De no haber tenido la marcha de este dirigente tales implicaciones electorales, el PSOE probablemente hubiera cedido a las demandas de la UGT. El caso del Partido socialista español confirma así la afirmación de la literatura sobre partidos políticos de que no en todos ellos se evalúa el "bienestar" de la organización en términos de votos, pero que en aquellos con pretensiones de gobernar contando con el electorado existente (y no con el que desearían que existiese) el mantenimiento de las posibilidades de ganar las siguientes elecciones es una condición *sine qua non* para que apoyen cualquier clase de políticas (Lange, Garret y Alvarez 1991).

En resumen, en la UGT y en el PSOE empezaron a evaluar que no les compensaba mantener las relaciones de solidaridad con su antigua organización hermana, no tanto porque hubieran *estimado* que habían dejado de obtener los bienes esperados de sus relaciones (incremento del empleo, gasto social o votos) a causa de cambios macroestructurales, sino porque tales relaciones entrañaban un coste organizativo inasumible dadas las estructuras de oportunidades y los

dilemas en los que se encontraban. Esto llevó a su vez a que el Partido socialista no proporcionase los bienes que le requería su sindicato, por lo que éste buscó otros medios de conseguirlo, y no le apoyó en las siguientes elecciones celebradas en España, poniéndose así en evidencia que este último hecho no era tan grave. El resultado final fue que, ahora sí, las direcciones de ambas organizaciones (primero la ugetista, después la del PSOE) evaluaron que obtenían poco de unas relaciones que entrañaban importantes restricciones estratégicas. Pero no se inició el proceso de descomposición de sus relaciones porque la dirección de la UGT estuviese insatisfecha con la estrategia económica o la política social del Gobierno socialista (a las que había dado su visto bueno meses antes de que diese por acabada la coordinación económica) ni porque los dirigentes socialistas considerasen que, ante la estructura social del electorado español, era conveniente alejarse de la UGT (lo cual hubieran preferido evitar).

CAPITULO DECIMO

LA UTILIDAD DE LAS RELACIONES ENTRE LOS PARTIDOS SOCIALDEMOCRATAS Y LOS SINDICATOS

1. El "modelo nórdico" en el sur de Europa: de la solidaridad a la conveniencia

La ruptura de las relaciones *solidarias* entre el PSOE y la UGT llama la atención porque siempre se pensó que éstas constituían una condición necesaria, o al menos muy conveniente, para que los partidos socialdemócratas y los sindicatos alcanzasen sus objetivos, desde los más instrumentales (como ganar las elecciones o llevar a cabo su acción sindical) hasta los más finales. Su colaboración tradicional constituía así un recurso de poder crucial para ambas clases de organizaciones. El partido político y la confederación sindical, dados sus idearios compartidos y actuando cada uno de ellos en su esfera de acción más propia, conseguirían gracias a su colaboración, influencia mutua y coordinación de actividades, alcanzar la hegemonía política y sindical, y acercarse así a sus objetivos finales de justicia social. Estas relaciones constituían así un diseño estratégico donde se engarzaba la actuación política del sindicato con la actuación social del partido así como la acción sindical en la negociación colectiva con las políticas públicas. En el primer engarce o intercambio, que denominábamos político-electoral, el sindicato esperaba que el partido le proporcionase una acción política que satisficiese sus objetivos de empleo, gasto social, redistribución y democracia industrial, mientras que el partido obtendría un anclaje de votos que le permitiese ganar las elecciones. En el segundo engarce, que denominábamos coordinación económica, se conseguiría que las

políticas económicas y sociales que convenían tanto a los partidos socialdemócratas como a los sindicatos tuvieran éxito (en términos de estabilidad de precios, empleo y crecimiento económico). En última instancia, toda esta serie de intercambios se podía resumir en uno más general donde el sindicato alcanzaría sus variados objetivos no sólo apoyando al partido a ganar las elecciones, sino ayudando desde la negociación colectiva en las tareas de gobierno; y el partido ganaría las elecciones al tener éxito las políticas que satisfarían a los sindicatos.

Es cierto que este diseño se desarrolló y tuvo más éxito entre los socialdemócratas del norte de Europa, mientras que en general estuvo ausente en el sur, especialmente en Francia e Italia, pero para cuando el PSOE ganó las elecciones de 1982, de entre todos los países del sur de Europa, la familia socialista española (compuesta por el Partido socialista y la Unión General de Trabajadores) parecía estar la mejor preparada para seguir ese "modelo nórdico". Aquí, a diferencia de la situación de otros países meridionales, en ambas organizaciones se contaba al menos con la memoria histórica de haber tenido una modalidad solidaria de relaciones reforzada por los años del exilio y clandestinidad, y sancionada en sus congresos de los años setenta y ochenta. No había, pues, que vencer viejos recelos para entablar dicha colaboración, ni los socialistas estaban dispersos en varias organizaciones sindicales. Tampoco contaban dentro de su sindicato con importantes minorías ideológicas reacias a una colaboración intensa con el partido socialista. Existía así entre los liderazgos de ambas organizaciones un alto grado de consenso sobre solapamiento de fines, ámbitos en los que había que actuar, reparto de papeles y coordinación de sus actividades. Bien es cierto que existía cierta ambigüedad en el Partido sobre que los dos ámbitos fuesen igual de relevantes, y en el sindicato sobre el reparto de éstos. Pero, en cualquier caso, tanto en el PSOE como en la UGT se sostenía que la colaboración mutua era uno de los recursos necesarios para alcanzar sus objetivos, como habían hecho otras familias socialistas en el norte de Europa. Desde principios de siglo, entre el PSOE y la UGT había existido por tanto un modelo solidario o "nórdico" de relaciones en un contexto "meridional" de división de la izquierda y del movimiento sindical.

Además, el PSOE accedía a las tareas de gobierno con mayoría absoluta en Las Cortes, con el apoyo expreso de la UGT, y este sindicato, con el apoyo igualmente del primero, se convertía en la primera fuerza sindical por número de delegados en las elecciones sindicales celebradas aquel mismo año. La llegada al poder del Partido socialista posibilitaba, así pues, que sus relaciones *solidarias* con la UGT mostrasen realmente toda su valía para la obtención de sus objetivos comunes y propios más importantes. El Sindicato tendría a un gobierno amigo que le facilitaría su influencia en las políticas gubernamentales. El Partido contaría con un poderoso aliado para llevar adelante con éxito esas políticas. El Sindicato podría así presentarse como el valedor de *todos* los trabajadores, y no sólo de los que tenían mayor fuerza en el mercado de trabajo. El Partido sería premiado con la permanencia en el poder. Todo parecía, pues, preparado para seguir la senda que había recorrido la socialdemocracia en el norte de Europa para hacerse hegemónica, y los socialistas españoles así lo ambicionaban.

Durante la primera legislatura del PSOE en el gobierno (1982-1986) ambas organizaciones pretendieron desarrollar sus relaciones siguiendo este modelo solidario. Es cierto que el Gobierno socialista no emprendió políticas fiscales y monetarias expansivas para fomentar el crecimiento económico, reducir el desempleo y expandir el Estado del Bienestar. Tomando nota de experiencias nacionales anteriores e internacionales, y teniendo además en cuenta que los abultados déficits público y comercial no daban mucho margen para una política expansiva, los socialistas españoles emprendieron a su llegada medidas de estabilización y ajuste estructural al contrario de lo que habían hecho los socialistas franceses o griegos cuando llegaron al poder por las mismas fechas. Pero esta estrategia económica que se centraba en conseguir el equilibrio macroeconómico y en mejorar las condiciones de oferta de la economía no implicaba que las organizaciones sindicales hubieran dejado de ser útiles para su éxito, ni la UGT se opuso a su puesta en vigor, aunque sus preferencias en materia económica iban más bien encaminadas por la senda practicada durante los años sesenta y setenta por la mayoría de los gobiernos occidentales donde el Estado tenía una responsabilidad

directa en asegurar la actividad económica. La dirección de la Unión General de Trabajadores confió, sin embargo, en que la propuesta del Gobierno socialista para salir de la crisis económica proporcionaría más empleo, gasto social y redistribución, por lo que aceptó la reconversión industrial, la moderación salarial y la pacificación de las relaciones laborales. En otras palabras, la UGT confiaba en que los beneficios finales compensasen los costes transitorios que tales políticas entrañaban, si bien cuando éstos aparecieron intentó que fueran los menos. Las políticas económicas y sociales del Gobierno socialista contaron así, en general, con el apoyo de este sindicato, el cual se contuvo en su crítica *pública* hacia el Gobierno Socialista, aunque -según se supo después- no en la privada. El otro sindicato representativo de ámbito estatal, Comisiones Obreras, por el contrario, las rechazó y las descalificó duramente, oponiéndose a ellas en la medida de sus posibilidades.

La Unión General de Trabajadores estuvo incluso dispuesta a firmar en solitario pactos globales de contrapartidas con el Gobierno, por lo que las dos organizaciones socialistas practicaron así la coordinación económica cuando las políticas de fomento de la demanda agregada ya no eran eficaces, lo que se ha dado en llamar el "corporatismo de oferta". Ahora bien, estos acuerdos no constituían el procedimiento principal por el cual los sindicatos pretendían influir en la toma de decisiones gubernamentales, ni los partidos socialdemócratas movilizar a las clases trabajadoras en su provecho. Por el contrario, era un estilo de elaboración de políticas públicas donde los problemas se resolverían de una forma agregada y consensuada gracias al intercambio de compromisos entre los gobiernos y los grupos de interés. Sin embargo, el éxito de estos acuerdos reforzaba las relaciones de solidaridad entre los sindicatos y los partidos socialdemócratas, pues mostraba que efectivamente su colaboración era la mejor estrategia que unos y otros podían desarrollar para alcanzar sus principales objetivos en vez de practicar un estilo decretista de gobernar, en el caso del partido, o, en el caso del sindicato, presionar en los centros de trabajo. A su vez, las relaciones solidarias reforzaban este estilo de formación de políticas, pues proporcionaban una confianza e influencia mutua que eran

convenientes para llevarlo a cabo. El Gobierno tenía unas relaciones privilegiadas con un actor necesario para el éxito de sus políticas y el sindicato contaba con un Gobierno cuyas políticas satisfarían los intereses de todos los trabajadores, o, al menos, eso era lo que se esperaba.

Al mismo tiempo, la UGT exigía al PSOE una relación "preferencial" frente a su rival en el campo sindical, CCOO, y la patronal, CEOE. El sindicato socialista tuvo así un mayor acceso al Gobierno socialista en general que los otros interlocutores sociales gracias a esa doble militancia de ugetistas y miembros del Gobierno. Esto le permitió reducir, a corto plazo, los costes sociales de las políticas del Gobierno, como ocurrió en el caso de la reconversión industrial, y logró, sobre todo al principio, que la concertación social se materializase de la forma que prefería, es decir, separando las negociaciones con los empresarios de sus acuerdos con el Gobierno socialista. Los dirigentes ugetistas siempre tuvieron claro que mediante la concertación social la CEOE no podía pretender renegociar los acuerdos alcanzados entre la UGT y el PSOE por los cuales este sindicato apoyaba al partido. Así, si el Gobierno socialista estaba preocupado por la estrategia económica comprendida en los acuerdos globales, la UGT lo estaba por la variedad de acuerdo global de contrapartidas (a dos o tres bandas). Bien es cierto que la influencia ugetista sobre el Gobierno no llegó a ser del grado que hubiera deseado, ni los canales de comunicación entre ambos fueron siempre muy eficaces. Pero, en general, durante la primera legislatura socialista (1982-1986) entre el Gobierno del PSOE y la Unión General de Trabajadores existió así (a) un grado alta de confianza y (b) una interlocución preferente, que muestran hasta qué punto su modelo de relaciones solidarias, fijado en sus congresos, se hacía realidad.

Sin embargo, hacia comienzos de los años noventa, de nuevo en ambas organizaciones, sus dirigentes habían cambiado este modelo entre la indiferencia o la resignación de los militantes de base. Como hemos visto aquello no significó que ya no pretendiesen mantener relaciones de ningún tipo, pues éstas podrían ser todavía convenientes, pero aquel grado de consenso sobre solapamiento de

fines, ámbitos en los que había que actuar, reparto de papeles y estrategias que componían el diseño estratégico de las relaciones de solidaridad se había desvanecido. Para las ejecutivas de ambas organizaciones, sus antiguos aliados habían dejado de ser ese canal privilegiado para intervenir en ámbitos en los que ellos no lo hacían directamente. A partir de entonces su colaboración dejaría de ser vista como la condición necesaria para el éxito de sus actuaciones, y quedaría relegada al rango de lo útil, pero no imprescindible.

Así, en la tercera legislatura (1989-1993), a pesar de que el Gobierno socialista incrementó el gasto social y la inversión pública en infraestructuras, el sindicato socialista -en unidad de acción con su antiguo rival, CCOO- rechazó entrar en ninguna clase de acuerdos cuyos beneficios no fuesen inmediatos, o le implicasen una aceptación global de las políticas del Gobierno. La UGT ya no volvería a firmar en solitario ningún acuerdo social. Los dirigentes ugetistas no confiaban en absoluto en la política económica del Gobierno socialista, y se negaron en rotundo a llevar a cabo la moderación salarial que les pedían. Al mismo tiempo, el trato preferencial del PSOE hacia la UGT fue abandonado, y este partido negoció con los dos sindicatos sus propuestas. Esto no significó, por tanto, que entre la dirección de la UGT y el aparato del Partido no hubiese relaciones, o que no se llegasen a acuerdos con el Gobierno; pero estas relaciones no eran sino un procedimiento más para conseguir que el Gobierno accediese a sus reclamaciones, y no excluía que la UGT se relacionase con otros partidos políticos o, sobre todo, realizase movilizaciones junto a su antiguo rival sindical para presionar al PSOE. No se trataba solamente de que ambas organizaciones estuviesen enfrentadas y sus direcciones se descalificasen mutuamente, sino que pretendían reconstruir las relaciones a partir de bases nuevas en las que el sindicato no reconocía al ámbito político como exclusivo de los partidos, y el Partido socialista equilibraba sus relaciones dentro del movimiento obrero, pues si se alejaba de la UGT, se acercaba a CCOO, si bien en general ya no los consideraba unos aliados estratégicos imprescindibles.

Estas características que presentan las relaciones entre el Gobierno del PSOE y la UGT de confianza y relación preferente, primero, y su ausencia, después, parecen indicarnos que los modelos oficiales de relaciones que aparecen en las resoluciones de sus congresos no han sido simple retórica. Por el contrario, reflejan la pretensión de las direcciones de las organizaciones partidistas y sindicales de encauzar sus relaciones de una u otra forma. En el modelo solidario, su colaboración mutua era la estrategia necesaria y principal para alcanzar sus objetivos, para lo cual las organizaciones se dividían los ámbitos de actuación, se intercambiaban bienes y coordinaban sus actividades. En el modelo de intereses concretos, su colaboración no es sino un recurso más que no excluye por tanto otras estrategias.

En resumidas cuentas, la transformación de relaciones entre el Partido socialista y la Unión General de Trabajadores ha significado que se ha dado por finalizado no sólo su modelo centenario de relaciones, sino además uno de los intentos más elaborados que hayan realizado nunca unas organizaciones socialistas en el sur de Europa por consolidarse y hacerse hegemónicas cómo lo habían hecho sus homólogas septentrionales, es decir, mediante una colaboración intensa entre el sindicato y el partido socialista. En España no se trata de explicar la ausencia de un modelo solidario de relaciones del partido socialista con aquel sindicato que se identificase como socialista, como en el caso francés o italiano. Tampoco parece que consista en un proceso por el cual el sindicato se hizo autónomo con respecto a su anterior partido hermano. Con respecto a esta última cuestión, parece que, si acaso, en la dirección de la UGT se temía que su propia gente minusvalorase la negociación colectiva confiando en conseguir los objetivos del sindicato principalmente gracias a la acción del gobierno en manos del Partido socialista. Pero esta confianza en lo que representaría para la UGT la victoria electoral del PSOE no prueba que se debiese a una imposición de los dirigentes de este partido, ni tan siquiera que éstos deseasen para sí semejante tarea. Nos tenemos que preguntar entonces por qué si estas relaciones eran concebidas como un recurso crucial para

alcanzar los objetivos principales de los partidos socialistas y de los sindicatos, dejaron éstos de colaborar como lo hacían antes.

2. Los apoyos electorales, las nuevas políticas de los socialdemócratas y la acción sindical

Tenemos que empezar recordando que el diseño estratégico de las relaciones partido-sindicato de solidaridad tenía una serie de implicaciones estratégicas para ambas organizaciones consistente en abstenerse de actuar directamente en determinados ámbitos, servir de canal para la organización hermana y coordinar finalmente las actuaciones que realizasen cada una en sus ámbitos más propios. La variada literatura que trataba de estas cuestiones solía exponer, sin embargo, que los cuantiosos beneficios que su colaboración solidaria reportaría a los partidos y a los sindicatos compensarían tales implicaciones.

Sin embargo, la constatación de que las relaciones solidarias entrañan cada vez más demasiadas tensiones entre sus participantes al tiempo que no producen los beneficios esperados ha llevado a pensar que se han producido ciertos cambios macroestructurales que han alterado las condiciones que las hacían factibles o provechosas. La explicación del alejamiento entre los partidos y sindicatos socialdemócratas parece así sencilla dadas las supuestas políticas "neoliberales" que practicarían los gobiernos socialdemócratas (aunque, como vimos, a aquellos grupos de interés que sí las reclaman no les parezcan tales) y dados los cambios socioestructurales que habrían afectado a los electorados así como a las organizaciones sindicales. En el intercambio político-electoral, tales transformaciones llevarían a que ni el sindicato obtuviese pleno empleo, más gasto social, redistribución, ni su apoyo le representase al partido un activo electoral (o le resultase incluso perjudicial). En la coordinación económica, la negociación colectiva centralizada pasaría a ser percibida como inadecuada para defender los intereses de las bases sindicales, y además innecesaria para el éxito de las políticas económicas. En pocas palabras, cada organización constataría que su

antiguo socio habría dejado de proporcionar los anteriores bienes y servicios, o éstos ya no les garantizarían alcanzar objetivos suyos (ganar las elecciones, contar con el apoyo de los trabajadores, consolidar el Estado del Bienestar, etc). Planteados en estos términos, se entiende que las tradicionales relaciones partido-sindicato de la socialdemocracia se disuelvan, pues ni al partido ni al sindicato la colaboración solidaria les compensan las restricciones que hemos visto que conlleva. Estas teorías llevarían así a concluir que los enfrentamientos entre el PSOE y la UGT no son sino el resultado lógico de haber intentado una colaboración solidaria cuando los nuevos contextos sociales y económicos en que se encuentra España lo impedían.

Ahora bien, no está tan claro que los comentados cambios estructurales se hayan dado en todos los países con la misma intensidad; o, de producirse, que hayan provocado en todos ellos semejantes efectos negativos sobre los intercambios de bienes y servicios entre los partidos y los sindicatos. Y, de hecho, algunos de esos cambios macroestructurales podrían haber reforzado las relaciones entre los partidos y sindicatos socialdemócratas. Según diversas interpretaciones, incluso aunque el peso electoral de los sectores movilizados políticamente por los sindicatos haya disminuido, los partidos socialdemócratas todavía podrían seguir estando interesados en contar con un apoyo explícito de sus antiguos socios. En el caso del PSOE, hasta el momento final del proceso de ruptura sus dirigentes estimaron que, aunque con la ayuda exclusiva de la UGT no ganarían las elecciones, sí que era un apoyo clave al cual sumar el de otros colectivos. Es importante recalcar así que la dirección de este partido no dio por finalizadas las relaciones solidarias con la Unión General de Trabajadores cuando los dirigentes ugetistas rompieron con la coordinación económica, en la primavera de 1987, ni tras la huelga general que convocó la dirección de la UGT junto a la de CCOO un año más tarde. Con el rechazo de la coordinación económica, la dirección de la UGT, en primer lugar, daba por terminada una de las características que habían tomado las relaciones de solidaridad entre los partidos y los sindicatos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Igualmente su pretensión de

conseguir incrementos del salario real para los asalariados y mejorar las rentas de pensionistas y jubilados, cuando el Gobierno socialista elevaba los gastos en servicios sociales, suponía trastocar la estrategia económica practicada desde su llegada al poder, donde la contención salarial y la reducción del déficit público eran piezas claves para luchar contra la inflación y crear empleo. Pero mientras los líderes del PSOE creyeron que el apoyo ugetista era importante desde un punto de vista electoral, no desearon la ruptura definitiva. Tampoco resulta tan evidente que los resultados sociales de las políticas socialdemócratas tengan que dejar de atraer a los sindicatos, sobre todo, si las políticas conservadoras son incluso más restrictivas.

Pero, además, pueden seguir existiendo motivos para que la colaboración entre los partidos y los sindicatos les resulte interesante. En contra de lo que se suele afirmar, la coordinación económica puede ser incluso más necesaria con políticas de oferta, pues la contención salarial permitiría luchar contra la inflación y el desempleo sin tener que endurecer tanto las políticas monetarias. En otras palabras, los sindicatos pueden seguir contribuyendo al éxito de las políticas de los gobiernos socialdemócratas y, por tanto, a sus victorias electorales. Los sindicatos estarían incentivados a entrar en esta coordinación "de oferta" si los partidos socialdemócratas pudiesen llevar a cabo políticas que diesen mejores resultados en términos de empleo *y* gasto social que la alternativa liberal-conservadora. Para esta última la disminución del gasto público suele presentarse como condición para mantener un crecimiento económico sostenido y con un nivel bajo y constante de desempleo. Así, frente a lo que algunas veces se ha afirmado, no es cierto que el Gobierno socialista español hubiera dejado de estar interesado en la coordinación económica porque no confiase ya en la gestión de políticas de demanda expansiva para solucionar la crisis económica o reducir el paro, pues estimaba que las otras opciones factibles para conseguir la moderación salarial habrían de ser peores en términos de empleo y competitividad que la contención voluntaria[1]. Propuso

[1] Aunque se atraerían capitales del exterior, tipos de interés más altos dificultarían que las empresas pidieran préstamos, harían más rentables otras formas de inversión

así combinar las políticas de rentas con políticas de oferta en lo que ha sido una de las experiencias más claras en el sur de Europa de un "corporatismo de oferta". No fue, por tanto, el Gobierno socialista quien dio por terminada la concertación social al año de comenzar la segunda legislatura socialista, sino la dirección de la UGT (tras haber aceptado su renovación después de las elecciones de 1986 en las que el PSOE presentó un programa electoral donde se explicaba claramente la política económica que se pensaba practicar). Claro está, el nivel del gasto social en España ha sido siempre inferior a la media comunitaria, y el de desempleo bastante superior durante todos los años del Gobierno socialista, por lo que parecería así que España es uno de los ejemplos claros de la reacción sindical ante el debilitamiento del Estado del Bienestar y la ausencia de políticas de pleno empleo. Pero, cuando la UGT *comenzó* a dejar de colaborar como había venido haciendo hasta entonces, sus dirigentes sí que apreciaban estimable la creación de empleo y consideraban que los pactos anteriores habían sido globalmente positivos así como que habían dado su visto bueno al incremento del gasto social para 1987. De hecho, cuando la UGT se negó a practicar la contención salarial exponía igualmente que el Gobierno socialista tenía la obligación de mejorar el Estado del Bienestar independientemente de que ellos llegasen a acuerdos globales con los empresarios. En pocas palabras, la política social del Gobierno socialista no explica la ruptura de la coordinación económica por parte de la dirección ugetista[2].

Es cierto que si posteriormente la UGT estimó que el PSOE no era ese canal para tener más influencia en política, fue porque dicho partido no proporcionó el incremento en transferencias sociales que le demandaba, rechazando así su política social. Pero todo parece indicar que el sindicato socialista *cambió* el ritmo que consideraba aceptable para el desarrollo del Estado del Bienestar, y que además tal cambio es *endógeno* al propio proceso de desvinculación con el

---

especulativa, y se perdería competitividad en el exterior al revalorizarse la divisa nacional por esas mismas entradas de capitales.

[2] Tampoco rechazó la dirección ugetista la coordinación económica porque prefiriese descentralizar la negociación colectiva, pues desde luego este sindicato no apoya la negociación colectiva de empresa.

PSOE. En otras palabras, que de no haberse iniciado el proceso por el cual terminaría evaluando que no les compensaba las restricciones estratégicas que implicaban sus relaciones con este partido, la UGT no habría pedido que se acelerase el gasto social como lo hizo. Como vimos, la dirección ugetista consideró que el Gobierno tenía que aumentar las rentas de los colectivos que dependían de él en la misma proporción que los empresarios subían los salarios de los trabajadores. Tal pretensión nacía de sus objetivos igualitaristas que le identificaba ante sus propios militantes como sindicato socialista. Pero el resultado era que el incremento de las transferencias sociales se ligaba así al de los salarios reales en la negociación colectiva. De tal forma que, en última instancia, lo que empujó a la UGT a no aceptar la contención salarial fue lo que hizo que exigiese mayores transferencias sociales. En otras palabras, los efectos de la competencia intersindical (favorecida por la actitud instrumental de los trabajadores y el marco español de representación de intereses laborales), al combinarse con un contexto económico claramente expansivo, provocó que la dirección ugetista considerase que la contención salarial que le exigía el Gobierno socialista era inaceptable, y, al combinarse con los objetivos igualitaristas del sindicato, aumentase sus exigencias sociales al Gobierno socialista para seguir ofreciéndole su apoyo electoral.

Otra de las cuestiones que la literatura suele citar como explicación de las tensiones en los años ochenta y noventa entre los partidos y sindicatos socialdemócratas son las nuevas estrategias económicas de los primeros. Acabamos de exponer que hay fundadas razones para pensar que los gobiernos socialdemócratas podrían seguir interesados en coordinar sus políticas económicas con la actuación de los sindicatos en la negociación colectiva. Pero indudablemente se produjo un cambio de estrategia económica para promover el crecimiento económico y el empleo, el cual reflejaba la ruptura del consenso de los años sesenta y setenta sobre política económica. Los sindicatos europeos tienen que confiar así en que las nuevas estrategias de los socialdemócratas, más centradas en mejorar las condiciones de oferta de sus economías, producirán los anteriores resultados (crecimiento, empleo y gasto social), los cuales

compensarán los esfuerzos y costes transitorios que les exijan sus gobiernos. Pero la experiencia europea desde la segunda mitad de los años ochenta ha sido el de un éxito a medias, es decir, el crecimiento económico obtenido no ha venido acompañado de una reducción significativa de los altos niveles de paro, aunque sí de la inflación, lo cual provoca en los sindicatos una desconfianza sobre la buena fe de los gobiernos socialdemócratas[3]. En este caso, los primeros podrían negarse a así apoyar a los segundos no tanto por los costes que entrañasen las nuevas políticas, sino porque desconfiasen en que los gobiernos socialdemócratas estuviesen llevando a cabo la estrategia económica adecuada para reducir el desempleo. Probablemente el resultado final de estos resultados queridos a medias será la aparición de dos posturas para resolver los problemas económicos que permanezcan o reaparezcan. Por un lado, se podría pensar que el Gobierno socialdemócrata no ha profundizado lo suficiente en las reformas o que, llevado por unas supuestas insuficiencias del mercado, no ha respetado la coherencia de la nueva política de oferta. Pero, por otro, podría ocurrir que su política económica estuviese mal planteada al exagerar la importancia de las condiciones de oferta y descuidar, por el contrario, el lado de la demanda. Finalmente, no hay que descartar tampoco que sean los propios sindicatos quienes, al negarse a aceptar determinados componentes de la política económica que les resulte especialmente insoportables (como la contención salarial o una rápida reducción del déficit público) aun sin ponerla globalmente en cuestión, contribuyan a que dicha política termine dando unos resultados no queridos ni por ellos ni por los gobiernos.

En el caso español es cierto que hacia finales de los años ochenta y principios de los noventa la dirección de la UGT y el Gobierno del PSOE chocaron por cómo solucionar los problemas socioeconómicos que se resistían a desaparecer (especialmente un alto nivel de desempleo) o resurgían. El área económica del Gobierno socialista y la UGT diferían sobre si era conveniente continuar con la estrategia económica mantenida hasta entonces

[3] Entre los sindicatos europeos se extendió la creencia de que los gobiernos habían cambiado sus prioridades entre pleno empleo y estabilidad de precios.

donde se primaba al mercado, se cuidaban los equilibrios macroeconómicos y se procuraba mejorar los factores productivos de las economías o, por el contrario, se probaba una especie de "revival" keynesiano. Y, desde luego, los pactos globales de contrapartidas que ofrecía el gobierno socialista implicaban que la UGT aceptase una estrategia económica que no era la que reclamaban en sus congresos. Pero hay que remarcar que no hizo falta esperar a estos desacuerdos sobre estrategia económica para que la dirección ugetista rechazase continuar con el modelo solidario de relaciones partido-sindicato. Evaluaron así que ni podían hacer frente a las peticiones del PSOE de continuar con la contención salarial, ni éste partido era el mejor canal para influir en las políticas gubernamentales antes de que se produjese tal enfrentamiento. Las tensiones de 1987 y 1988 (incluida la huelga general del 14 de diciembre) no estuvieron motivadas por razones de estrategia económica, sino de redistribución del crecimiento económico. Por aquel entonces la UGT todavía no ponía en cuestión la estrategia económica del Gobierno socialista, si bien ya consideraba inaceptable su política social y empezaba a exigirle el llamado "giro social" y la corrección de "desequilibrios sociales".

Parece así que, aunque los líderes ugetistas tenían sus ideas y creencias en materia económica, su apoyo a la estrategia económica del Gobierno no dependía del hecho de que sus ideas económicas fuesen llevadas a la práctica sino de los costes transitorios que les supusiese la estrategia del Gobierno así como de su confianza en los resultados finales. En otras palabras, mientras los líderes sindicales consideren que tales costes transitorios son asumibles y que serán recompensados por ellos gracias al éxito de una estrategia económica que no es su preferida, la estrategia económica en sí no provoca que los dirigentes sindicales se cuestionen si les compensan las relaciones de solidaridad con un partido político que esté en el gobierno. Por tanto, si aun así, la dirección de la UGT se cuestionó sus relaciones con el PSOE, tuvo que existir algún otro factor o factores que provocasen tal evaluación.

En otras palabras, la ruptura de las relaciones solidarias entre el PSOE y la UGT matiza mucho la opinión generalizada de que las relaciones tradicionales entre los partidos y sindicatos tengan en todas

partes sus días contados porque los nuevos escenarios económicos y sociales de los años 80 conllevan necesariamente que los sindicatos no obtengan la suficiente creación de empleo o incrementos en el gasto social, y los partido socialdemócratas no estén interesados en su apoyo electoral o en la contención salarial voluntaria. Para cuando comenzó la ruptura definitiva del modelo solidario la dirección del PSOE buscaba el apoyo electoral de la UGT, al igual que a sus políticas, y la dirección de este sindicato acababa de dar su visto bueno a las políticas económicas y sociales del Gobierno socialista. El enfrentamiento entre las direcciones del PSOE y de la UGT pone así en cuestión la generalización de los argumentos de orden macroestructural, dados en el norte de Europa para explicar el fin de la eficacia y viabilidad de las tradicionales relaciones partido-sindicato, a otros contextos sociopolíticos.

Pero, entonces, se podría pensar que la transformación de las relaciones entre el PSOE y la UGT se produjo no tanto por cambios estructurales, sino porque sencillamente no se daban las condiciones necesarias para que el complejo diseño estratégico que entrañaban estas relaciones tuviera éxito (como les había ocurrido a los sindicatos y partidos socialistas de Francia, Italia o Grecia en los años cincuenta o sesenta). Hasta los años noventa, las interpretaciones procedentes fundamentalmente de autores noreuropeos establecían que, en aquellos países donde era factible la colaboración solidaria gracias a la existencia de un movimiento sindical amplio y centralizado, los partidos y sindicatos socialdemócratas tendrían un considerable éxito político y económico, pero que en aquellos otros donde no se daban esas condiciones las organizaciones socialdemócratas y sindicales estaban condenadas al fracaso. En los años ochenta y noventa, por el contrario, los profundos cambios de orden socioeconómico comentados provocarían que esas condiciones de unidad y amplitud del movimiento sindical y de producción fordista de la economía no se diesen en ninguna parte. Los partidos y sindicatos socialdemócratas del norte de Europa se unirían así al "club Mediterráneo".

El problema con esta interpretación radica en el hecho de que la situación sindical y política en los países del sur de Europa cambió

igualmente, y además en un sentido que contradice las interpretaciones anteriores. Así una serie de fenómenos llaman la atención. En primer lugar, los sindicatos en España e Italia (y en menor medida en Francia y Portugal) han superado antiguas divisiones ideológicas, precisamente cuando los del norte tenían que hacer frente a crecientes divisiones internas. Esta mayor unidad ha sido posible, aunque no exclusivamente, gracias a una transformación de las relaciones entre los movimientos sindicales de preferencia comunista (al menos entre sus líderes) y los partidos comunistas, la cual cuesta ser explicada por los mismos factores que se dan para explicar las tensiones en la socialdemocracia nórdica[4]. En segundo lugar, los partidos socialistas del sur de Europa han alcanzado unas victorias electorales como no lo habían hecho durante la "edad dorada de la socialdemocracia", y así las victorias del PASOK, el PSP y el PS en los años noventa muestran que no ha sido un ascenso pasajero. En ambos casos el escenario sureuropeo en los años ochenta y noventa ha cambiado considerablemente con respecto a la situación en los años cincuenta y sesenta (luchas intersindicales y partidos socialistas electoralmente débiles)[5]. Pero difícilmente se puede atribuir sus victorias electorales a esa mayor unidad de acción sindical, pues se han producido sin ella (como es el caso del PSOE en 1982 y 1986), además de que precisamente la unidad de acción entre UGT y CCOO tuvo en sus inicios un componente político claramente antiPSOE, y aun así este partido ganó las elecciones de 1989 y 1993. Tampoco es cierto que la coordinación de las acciones de los sindicatos en las relaciones laborales con las políticas gubernamentales -con la centralización de la negociación colectiva y la

[4] Difícilmente pueden explicarse los enfrentamientos y disensiones entre los antiguos hermanos comunistas en Italia y España por la imposibilidad de los gobiernos de reducir el desempleo, o exigir la moderación salarial a los sindicatos.

[5] Existen, con todo, diferencias apreciables dentro del Sur de Europa. Así, hacia mediados de los años noventa esa mayor unidad de acción sindical estaba más consolidada en Italia y España que en Francia o Portugal (en Grecia se superó la fractura de la confederación unitaria GSEE). Igualmente, en los años ochenta y noventa las victorias electorales de los socialistas han sido mayores en España, Francia y Grecia que en Italia o Portugal.

moderación de las demandas sindicales en los centros de trabajo que lleva aparejada- sea siempre difícil de lograr en el caso de un sindicalismo organizativamente dividido y que compite por los apoyos de los trabajadores (como los casos español entre 1979 y 1986 y portugués a partir de 1988 ponen de manifiesto). Y, desde luego, no se puede defender que la UGT dejase de aceptar la coordinación económica debido a sus bajos niveles de afiliación, pues la representación del sindicalismo español entre los trabajadores no se mide por la tasa de afiliación, sino por los resultados de las elecciones sindicales. El comportamiento de los sindicatos españoles es más sensible así a cambios en los resultados en dichas elecciones que a movimientos de afiliación y desafiliación, aunque esto no excluye que la dirección de la UGT tuviese igualmente presente mejorar las condiciones materiales de colectivos que ni tienden a afiliarse ni a votar en las elecciones sindicales.

En todo caso, la experiencia sureuropea revela que parecen existir procesos comunes a casi toda Europa occidental (como un replanteamiento de las relaciones partido-sindicato). Sin embargo, no todas sus supuestas consecuencias aparecen en todos los países europeos (como, por ejemplo, que los partidos socialdemócratas tengan más difícil ganar las elecciones) e importantes acontecimientos en el sur de Europa han sido poco estudiados o valorados con la intensidad que se merecen (como la formación de la unidad de acción entre antiguos sindicatos rivales).

3. El diseño estratégico de las relaciones solidarias y sus cálculos: restricciones y oportunidades

En esta tesis se ha intentado mostrar bajo qué condiciones específicas los líderes de la UGT y del PSOE concluyeron que las ventajas que se derivaban de las relaciones solidarias eran inferiores a los costes que igualmente entrañaban. En otras palabras, qué factores llevaron a la dirección de la UGT a concluir que los beneficios que obtenía del partido hermano no compensaban la estrategia sindical que tenía que practicar en las relaciones laborales ni el abstenerse de

participar directamente en política. Y, en el caso de la dirección del PSOE, le condujeron a evaluar que la contribución que hacía el sindicato a sus éxitos electorales y al de sus políticas no compensaba la actividad política que tenía que realizar en su favor, y pactar con él sus políticas gubernamentales. Tales evaluaciones se produjeron cuando el PSOE se encontraba en el poder y además la economía crecía, es decir, precisamente cuando parecería que las relaciones partido-sindicato podrían dar su mayor provecho.

El fin de su modelo compartido de relaciones solidarias se desencadenó, no tanto porque en cada organización se evaluase que no recibirían nada (o que hubieran dejado de hacerlo) a cambio de las restricciones estratégicas que acabamos de exponer, sino porque los costes de esas restricciones se hicieron a partir de un determinado momento inaceptables por entender que pondrían en peligro el statu quo alcanzado por la organización. En otras palabras, el saldo de tales relaciones (la diferencia entre beneficios y costes) se hizo negativo no porque su socio hubiera dejado de proporcionar bienes, sino porque sus peticiones entrañaban unos costes que, en determinadas circunstancias, podrían mostrarse como inasumibles. Estas peticiones inasumibles eran, en el caso de la UGT, la contención salarial que le exigía el Gobierno socialista; y en el caso del PSOE, desplazar al Ministro de Economía y con él al Secretario General del PSOE como consecuencia de las demandas ugetistas de mayor gasto en transferencias sociales. Como la literatura sobre organizaciones formales ha expuesto de manera sobrada, el respeto a la integridad de la organización es una condición *sine qua non* para que los líderes de las organizaciones quieran implicarse en cualquier clase de relación.

Es cierto que, al final del proceso de desenganche, los dirigentes de ambas organizaciones evaluaron que mantener el diseño estratégico solidario entrañaba además lo que podríamos denominar un auténtico *coste de oportunidad*. Es decir, el hecho de que el socio no diera satisfacción a sus peticiones implicaba quedarse sin unos bienes que, sin embargo, podrían alcanzar por otras vías. En el caso de la UGT, estas vías consistían en cooperar con el sindicato rival y buscar el apoyo de otros partidos políticos para obtener el incremento del gasto social que reclamaba. En el caso del PSOE, en

optar por una estrategia más decretista para continuar con unas políticas que estimaban que daban buenos resultados. Es entonces cuando los dirigentes de ambas organizaciones evaluaron que sus relaciones solidarias pasaban de ser un recurso para alcanzar sus objetivos a convertirse en un obstáculo. Reflexiones estas que también han aparecido en otras organizaciones socialdemócratas en el norte de Europa. Pero todo parece indicar que el origen de dichos costes de oportunidad que representaban las relaciones solidarias para ambas organizaciones fue endógeno al propio proceso de enfrentamiento, y no por cambios exógenos macroestructurales o coyunturales (como hubiera sido el caso de una inesperada crisis económica). Así pues, en última instancia, los factores que provocaron que a cada organización le resultase imposible atender a los requerimientos de su organización hermana por representar un coste inasumible son los que terminaron por conducir a que las organizaciones no recibieran los bienes esperados, lo que representaba un coste de oportunidad.

No debemos concluir de lo dicho, sin embargo, que los objetivos organizativos (como mantener sus apoyos electorales) son los únicos que interesan a estas organizaciones. No se trata de que tales objetivos desplacen a los demás, sino más bien de hasta qué punto se pueden alcanzar objetivos ideológicos teniendo en cuenta que la conservación de la organización es una condición *sine qua non*. En otras palabras, los partidos y sindicatos que tengan pretensiones de gobernar y de defender a los trabajadores intentarán llevar a cabo sus preferencias ideológicas siempre y cuando tal comportamiento no perjudique sus posibilidades de volver a ganar las elecciones o su nivel de apoyos entre los asalariados[6], única forma de aproximarse a sus objetivos finales[7].

---

[6] Que en el caso español también se mide, como vimos, mediante elecciones.

[7] Mohr (1973:476) en su estudio sobre los objetivos de las organizaciones defendía así que ni los objetivos de defensa del bienestar de la organización ni los objetivos de transformación del contexto en el que se desarrolla tienen primacía, pues si "la supervivencia es necesaria para la operatividad", "ésta última lo es para la supervivencia".

La cuestión radica en saber entonces por qué aparecieron esos costes inasumibles cuando no lo habían hecho antes, y además cuando las relaciones parecían dar su mayor provecho. Para explicarlo hay que distinguir los cálculos que realizó la dirección ugetista de los realizados por la dirección del Partido socialista para plantearse posteriormente por qué coincidieron en un mismo sentido negativo para el mantenimiento de su colaboración solidaria.

En el caso de los sindicatos, el diseño estratégico de las relaciones solidarias implica que éstos actuarán en política principalmente por mediación de su partido de referencia y que coordinarán sus actuaciones en la negociación colectiva con las políticas económicas del partido hermano cuando acceda éste a las tareas de gobierno. Es decir, llevarán a cabo una estrategia de negociación centralizada donde se intercambie contención salarial a cambio de más gasto social y empleo. Pero, además, en contextos de competencia intersindical y cuando los partidos mantienen entre sí un grado considerable de antagonismo, las relaciones de solidaridad conducen a que los sindicatos no coordinen entre sí sus actuaciones ni para influir en el ámbito político ni para relacionarse con los empresarios. Los líderes sindicales tienen que evaluar entonces si las relaciones solidarias con un partido político determinado o, por el contrario, la unidad de acción sindical es la opción estratégica más eficaz (sopesando los costes de cada opción y sus posibles beneficios) para conseguir sus variados objetivos[8].

[8] Sobre todo cuando se hacen conscientes de que no es posible aniquilar al rival sindical proporcionando mejor que éste los bienes que reclaman los trabajadores. En una situación de libre competencia, no hay forma alguna de convertirse en la única confederación sindical o en la hegemónica, pues tan pronto un sindicato observe que la estrategia de su rival le está quitando trabajadores, practicará la misma para evitar esa sangría. En otras palabras, los sindicatos que compiten entre sí no tienen forma alguna de escaparse del dilema entre relaciones de solidaridad y unidad de acción. Los resultados de las elecciones sindicales de 1986 provocaron así que la dirección de la Unión General de Trabajadores evaluase, ya definitivamente, que no se podía salir del dilema entre relaciones de solidaridad y unidad del movimiento sindical intentando conseguir una posición de hegemonía dentro del movimiento sindical español. Para bien o para mal, tenían que resignarse a convivir con CCOO.

Por un lado, las relaciones de solidaridad, sobre todo cuando el partido hermano llega al poder, parecen ofrecer grandes posibilidades para que el sindicato alcance sus objetivos sociopolíticos y organizativos largamente buscados. Pero, por otro, tanto los líderes sindicales como los partidarios tienen que tener presente que el sindicato con el cual el Gobierno no mantiene relaciones de solidaridad no coordinará sus actuaciones ni con el Gobierno ni con el sindicato que le apoya. Este doble hecho, que el sindicato del Gobierno tenga que coordinar sus actuaciones en el ámbito laboral con las políticas gubernamentales de su partido hermano mientras que el sindicato rival se abstiene de hacerlo, representa un desafío potencial para que la organización sindical pueda mantener su nivel de apoyos entre los trabajadores. La literatura sobre el neocorporativismo ha señalado así frecuentemente que la posibilidad de perderlos explica en buena medida que un sindicato acceda o no a practicar la coordinación económica. En este sentido, el coste de sufrir de sufrir una "crisis de representación" no compensa los posibles beneficios que se pueda obtener a cambio ni para los líderes ni para las bases.

Ahora bien, que las relaciones de solidaridad con un partido que apoya al Gobierno entrañen semejante peligro está muy relacionado con el contexto socioeconómico en el que se desenvuelve la organización sindical. El objetivo de no perder apoyos entre los trabajadores fuerza a los sindicatos a moderar o radicalizar sus actuaciones en las relaciones laborales en función de si el contexto favorece que las movilizaciones en solitario tengan éxito. Si el contexto es tal que éstas para tener éxito han de contar con el apoyo de todos los sindicatos, un sindicato concertador puede estar razonablemente tranquilo, pues tendrá la seguridad de que sus bases no serán tentadas de irse al sindicato movilizador en busca de mejoras inmediatas. Los gobiernos pueden contar así con la colaboración, a corto plazo, de los sindicatos (incluso aunque éstos colaborando entre sí hubieran conseguido que las huelgas tuvieran éxito). Pero es importante señalar que los sindicatos son inducidos a cooperar, no tanto por lo que les pueda ofrecer el Gobierno a cambio (sea mayor gasto social para los trabajadores o bienes para las organizaciones),

sino por la probabilidad de éxito de una estrategia de presión en los centros de trabajo. Así, si por el contrario el contexto socioeconómico favorece que las movilizaciones por separado tengan éxito, el sindicato rival podrá hacerse con las bases del sindicato concertador.

Entre los factores que conducen a que las movilizaciones en solitario puedan tener éxito se encuentra, además del tamaño del centro de trabajo y de su titularidad pública o privada, la coyuntura económica. En situaciones de crisis económica suele ser más difícil presionar a los empresarios por incrementos salariales y los puestos de trabajo corren más peligro. Los propios trabajadores serán en su mayor parte favorables a una estrategia de negociación (y apoyarán al sindicato que la llevase a cabo). La posibilidad de que los trabajadores desafectos con estos acuerdos la echen por tierra a través de un activismo será reducida. En esta coyuntura la negociación de acuerdos globales de contrapartidas, lejos de provocar las temidas "crisis de representación", es una estrategia que ayudará al crecimiento de la organización sindical[9]. Así, durante los años de recesión económica, la dirección de la UGT pensaba obtener de los acuerdos globales bienes para la organización (poder e influencia política) así como para los trabajadores (mayor gasto social y reducción del desempleo). Pero, independientemente de lo que consiguiesen alcanzar los ugetistas en sus negociaciones con el Gobierno, siempre insistieron que la negociación centralizada (aceptando la contención salarial) era la estrategia más adecuada para las situaciones de crisis económica, lo cual fue reconocido posteriormente por líderes prominentes de CCOO. La moderación de las demandas salariales para la mayor parte de los trabajadores la tenían que aceptar les gustase o no (como pudo ver CCOO de 1979 a 1981, y ambos sindicatos en 1984 y de nuevo en 1994)

[9] Mayores dudas plantea, sin embargo, la cuestión de la reconversión industrial. Por un lado, se podría pensar que si la UGT hubiese unido sus fuerzas con CCOO, como hicieron algunos de sus delegados en los comités de empresa, al Gobierno socialista le hubiera resultado más difícil llevarla a cabo. Pero, por otro, los datos parecen sugerir que una estrategia muy confrontacionista no hubiera sido bien recibida, por intransigente, entre los comités de empresa afectados.

Por el contrario, en una situación económica claramente expansiva, apoyar al sindicato movilizador es la elección más racional a corto plazo para la mayoría de los trabajadores. Estas maximizarán su bienestar material al obtener los bienes públicos que los pactos gobierno-sindicatos ayuden a conseguir (tales como el crecimiento económico, la reducción de la inflación, la mejora del Estado del Bienestar) *más* los bienes privados que consiga arrancar el sindicato no concertador presionando a los empresarios (por ejemplo un incremento del salario individual). De ahí que la situación económica determine en gran parte qué estrategia sindical de movilización o negociación recibirá el apoyo de los trabajadores. Así, cuando la situación económica mejoró y la dirección ugetista interpretó a resultas de las elecciones sindicales de 1986 que la mayoría de los trabajadores deseaba mejoras individuales, cambió la política salarial que había mantenido hasta los acuerdos de septiembre de 1986[10]. La UGT pretendía proporcionar a corto plazo los mismos beneficios selectivos que ofrecía CCOO y otros sindicatos menores para proteger y/o aumentar su porción de mercado electoral. Pero esto implicaba el fin, no ya de los acuerdos globales tripartitos (rechazados antes de las elecciones sindicales como hemos visto), sino de cualquier clase de acuerdo (tripartito o bilateral, formal o discreto) que le limitase su autonomía en las relaciones laborales. En otras palabras, la dirección ugetista rechazó la propuesta del Gobierno socialista de continuar la clase de concertación practicada hasta entonces, donde se coordinaban las políticas sindicales con las políticas económicas y sociales del Gobierno. La experiencia del "corporatismo de oferta" había llegado a su fin en España.

En resumidas cuentas, dada la influencia de los cambios de contexto económico sobre las estrategias sindicales en el ámbito laboral, todo parece sugerir, en primer lugar, que el coste de la

---

[10] Recordemos que en septiembre de 1986 (antes de las cuartas elecciones sindicales de la democracia, pero tras la renovación de la mayoría absoluta por parte del PSOE en junio de aquel año) la dirección de la UGT aceptó continuar con los acuerdos globales de contrapartidas separando, eso sí, las negociaciones con el Gobierno y empresarios (lo cual era su preferencia cuando gobernaba un partido "amigo").

coordinación económica para un sindicato *no es constante*; y que de hecho aumenta en momentos de expansión económica, que es precisamente cuando el Gobierno podría darles más a cambio. En otras palabras, el "saldo" de la coordinación económica pasa a ser negativo, no porque se reduzcan los "bienes" que da el Gobierno (esto es, porque se incremente el desempleo o se reduzca la protección social), sino porque aumentan los "costes" que esa coordinación entraña para la organización. Este aumento de los "costes" en momentos de expansión económica deja de ser paradójico si incluimos entre los objetivos de las organizaciones su propia supervivencia, y que ésta depende de que los trabajadores la sigan considerando como la organización que mejor les maximiza su bienestar en comparación con otros medios alternativos. En España la conjunción de un cambio del contexto económico a partir de 1985/86 en un contexto sindical pluralista competitivo forzó así a que la dirección ugetista valorase que su posición entre los trabajadores requería una acción sindical basada en la reivindicación y en la obtención de mejoras inmediatas en las condiciones de los trabajadores. Esta fue la conclusión a la que llegó la dirección de la UGT, y así se lo hizo saber a los dirigentes del PSOE. La coordinación de sus actividades en la negociación colectiva con las políticas del Gobierno socialista (la coordinación económica) suponía poner en peligro el grado de apoyo de los trabajadores a la UGT ante sus rivales sindicales, empezando por CCOO. No parece así que la clase de relaciones que mantenga un sindicato con el partido del gobierno explique realmente la valoración que hará un sindicato, en un contexto de competencia intersindical, de la conveniencia o no de la coordinación económica. En el caso de la UGT, la modalidad de relaciones que tuviese con el partido del gobierno influía en si preferiría un único pacto global tripartito o una negociación a dos bandas. En segundo lugar, y de forma más general, parece que el objetivo organizativo de no perder apoyos entre los trabajadores lleva a que los sindicatos en contextos de competencia algunas veces tengan que radicalizarse y otras a moderarse en función de la situación económica, lo cual puede que no coincida con lo que interese electoralmente a sus respectivos partidos. Las relaciones de

solidaridad con partidos políticos en estos contextos aparecen así como un verdadero obstáculo para que los sindicatos emprendan la estrategia más adecuada para promover sus apoyos entre los trabajadores[11].

Ahora bien, la presencia de sindicatos rivales no sólo entraña este riesgo para el sindicato que pretenda concertar con el Gobierno. Implica además la posibilidad de que este sindicato se decante por cooperar con los rivales para conseguir sus objetivos tanto en el ámbito laboral como en el político[12]. Esta opción estratégica para intervenir en política raramente es tenida en cuenta por cierta literatura que considera que los sindicatos están obligados a apoyar a los partidos laboristas o socialdemócratas porque siempre serán una opción menos mala que una conservadora. Esta obligación se disuelve, sin embargo, si los líderes sindicales estiman que uniendo sus fuerzas serán capaces de doblegar a los gobiernos conservadores y/o éstos muestran ser mucho más accesibles a las demandas sindicales de lo que la literatura suele presumir. Pero que un sindicato llegue a tal conclusión, es decir, que el intercambio político-electoral, no es la mejor estrategia para conseguir sus objetivos en el ámbito político depende en última instancia del comportamiento de su partido político hermano. El rechazo del PSOE a incrementar el ritmo del gasto en transferencias sociales explica así por qué las relaciones de solidaridad entrañaron para la UGT, además, un coste de oportunidad en el ámbito político. Es decir, se mostró que esas relaciones especiales con el partido del Gobierno no significaban que la UGT tuviera mayor influencia en las políticas gubernamentales,

---

[11] Si, además, los sindicatos mantienen sus diferencias en cuanto a los objetivos a conseguir, surge esa tercera posibilidad -representada en la práctica por los sindicatos franceses FO y CFDT- de no mantener relaciones de solidaridad con partido político alguno ni unidad de acción entre ellos.

[12] Ahora bien, como hemos visto de una forma teórica y empírica, la unidad de acción de los sindicatos exige una aproximación de sus objetivos. Esta clase de cooperación no es sólo producto de la constatación de que la hegemonía sindical es inalcanzable. Requiere además que los sindicatos pasen por situaciones donde, por no haber coordinado previamente sus acciones, terminaron con resultados subóptimos y, además, hayan aproximado sus objetivos.

por lo que para conseguirla lo intentaron por otras vías. De hecho, se observa que allí donde se ha dado la transformación de relaciones partido-sindicato con contextos de pluralismo sindical, fueron los sindicatos quienes dieron el primer paso. Por el contrario, en los países del norte de Europa este proceso parece más bien liderado por los partidos políticos. Pero tiene que quedar claro que la dirección de la Unión General de Trabajadores no rompió sus relaciones históricas con el PSOE porque éstas le impidiesen emprender la unidad de acción del movimiento sindical una vez que hubiesen constatado que no podían conseguir la hegemonía aniquilando a CCOO. Los dirigentes ugetistas escogieron la unidad de acción con este sindicato como forma alternativa de intervenir en política una vez que hubieron constatado definitivamente que sus relaciones solidarias con el PSOE no eran ese recurso que habían esperado. Hasta que no se convencieron de ello, no buscaron coordinar sus actuaciones con la dirección de CCOO.

En cuanto a los partidos socialdemócratas, sus relaciones de solidaridad con los sindicatos también tienen una serie de implicaciones: estos movilizarán a los trabajadores a su favor a través de los sindicatos y, en el momento en que accedan al poder, coordinarán además con ellos sus políticas gubernamentales con las estrategias sindicales en la negociación colectiva. Esperaban así acceder al poder y llevar a cabo sus preferencias ideológicas gracias a la colaboración de la organización sindical. Pero, como hemos visto, todo parece indicar que la petición de la UGT de que aumentase el ritmo de incremento del gasto social le suponía al Partido socialista en la arena electoral un coste organizativo igualmente inasumible. Hemos visto que el Ministro de Economía se oponía a las peticiones de la UGT porque rompía su estrategia económica, pero Solchaga no era especialmente estimado dentro del PSOE ni su política económica suscitaba entusiasmos inquebrantables. Ahora bien, contaba con la confianza del Presidente del Gobierno y Secretario General del partido con lo que los dirigentes socialistas tenían que elegir entre mantener a Felipe González como máximo líder o dar satisfacción a la UGT. Planteada la cuestión en estos términos, la respuesta estaba clara: la ruptura con el socio podría tener

repercusiones electorales, pero Felipe González era un recurso electoral de primer orden para el Partido socialista. Pero a pesar del fin del apoyo ugetista, el Partido socialista pudo volver a ganar las elecciones; por añadidura, preservó su autonomía (evitando que fueran los líderes de la UGT los que impusieran el ritmo de gasto social y los que decidiesen cuándo las condiciones económicas lo permitían). Por todo ello, los dirigentes socialistas dieron por acabadas sus relaciones solidarias.

Vemos, por tanto, que las características contextuales de pluralismo sindical y antagonismo partidario conllevan que, cuando la colaboración solidaria podría dar mayor provecho a partidos y sindicatos socialdemócratas (es decir, cuando el partido está en el Gobierno y la economía mejora), al sindicato se le haga más difícil apoyar a su partido, generando a su vez unas peticiones sindicales inasumibles para el partido político. Las relaciones partido-sindicato dejarían de dar sus esperados resultados cuando se dan en estos contextos, pero no por el hecho de que el keynesianismo y el Estado del Bienestar hubieran entrado en crisis, o porque la clase obrera hubiese menguado numéricamente, fragmentado y perdido su conciencia de clase como a veces se señala. Por el contrario, dada la importancia de los resultados electorales para entender las decisiones que tomaron ambas organizaciones socialistas, un contexto de pluralismo sindical y antagonismo partidario conduce al abandono del diseño solidario justamente cuando el partido está en el poder y la economía mejora. Cuando se produce tal combinación de contextos, los individuos que son electores en el ámbito laboral y político pueden intentar maximizar su bienestar eligiendo al mismo tiempo en cada uno de estos ámbitos a un sindicato que les proporcione bienes privados (mayor remuneración y mejores condiciones de trabajo) así como a un partido político que les suministre bienes públicos (sanidad, educación, baja inflación, etc). En este sentido, los enfrentamientos entre partidos y sindicatos no se darían porque las organizaciones hayan pasado cada vez más a representar colectivos distintos, sino porque la existencia de dos lógicas electorales y una economía en crecimiento ofrece la posibilidad al trabajador de apoyar al mismo tiempo posturas contrapuestas (y recordemos que tanto el

PSOE como la UGT ganaron sus respectivas elecciones celebradas tras el enfrentamiento, en 1989 y 1990).

El caso español ilustra así que los cambios estructurales de índole económico y social que afectan a Europa no necesariamente fuerzan a los sindicatos a oponerse a las nuevas políticas de los partidos socialdemócratas -rompiendo con ellos- incluso si éstas entrañan costes transitorios para los trabajadores y los sindicatos no renuncian a sus objetivos solidarios. Pero para que éstos las apoyen, deben (1º) confiar en que los trabajadores se verán beneficiados en el medio y largo plazo; y (2º) la supervivencia y otros objetivos organizativos de los sindicatos no tienen que verse amenazados, como resultado de su apoyo a los partidos socialdemócratas. Así, mientras que una proximidad ideológica entre los sindicatos y los partidos puede explicar esa confianza necesaria, los diversos entornos institucionales y organizativos explican por qué y cuando el apoyo a algunas políticas económicas y sociales amenaza la misma supervivencia organizativa.

4. La colaboración entre partidos y sindicatos como lastre y como recurso de poder

No está claro, por tanto, que el modelo solidario de relaciones entre un partido y un sindicato se vea abocado a su abandono. He discutido que los cambios estructurales de orden económico y social hayan invalidado los tradicionales intercambios de bienes y coordinación de actividades entre los partidos y sindicatos socialdemócratas, y nada excluye que sigan existiendo motivos para mantener su colaboración *solidaria*. La coordinación económica podría ser incluso más necesaria con políticas de oferta y a los sindicatos les podría interesar para mantener un nivel de desempleo razonablemente bajo sin por ello tener que recortar el Estado del Bienestar o segmentar el mercado laboral. Así, los sindicatos podrían seguir apoyando a los partidos socialdemócratas tanto electoralmente como en sus políticas. Incluso en aquellos casos donde estas relaciones solidarias se desenvuelven en un contexto de competencia

intersindical y antagonismo interpartidario, su ruptura no es una respuesta inevitable. Para que se diese este resultado, el partido hermano tendría que acceder al poder y darse además una situación de crecimiento económico que alimente reivindicaciones simultáneas respecto de salarios, empleo, y transferencias y servicios sociales. De esta manera, en ciertos contextos institucionales combinados con coyunturas políticas y económicas concretas, la colaboración solidaria entre los partidos y sindicatos socialdemócratas dejaría de ser un "recurso" para convertirse en lo que la literatura anglosajona algunas veces ha denominado como el "beso envenenado".

Se podría pensar entonces que ciertos partidos y sindicatos están condenados al fracaso por el entorno institucional en el que actúan. En tales contextos, las relaciones de solidaridad llevan en su seno las causas de su propia derrota, pues justamente cuando ambas organizaciones podrían empezar a recoger los frutos de sus esfuerzos, se desencadenaría un proceso que les llevaría a su enfrentamiento y ruptura. Sin embargo, esta quiebra de un diseño estratégico altamente complejo no tiene por qué representar costes dramáticos para ambas organizaciones. La experiencia meridional, de hecho, parece mostrar que estas organizaciones pueden alcanzar considerables éxitos políticos, económicos y sindicales sin ser necesario semejante colaboración solidaria. Se podría argumentar así que los cambios macroestructurales que han afectado igualmente al sur de Europa no explican tanto el fin del tradicional modelo de relacionarse como que tal abandono no conlleva graves costes para las organizaciones socialistas y sindicales sureuropeas. De hecho, cuando el sindicato de ideología socialista rompió sus relaciones de solidaridad con el partido socialdemócrata y emprendió la unidad de acción sindical con sus antiguos rivales fue cuando estuvo en mejores condiciones para cooperar con el Gobierno. Así, como sucedió también en el caso italiano, la unidad de acción sindical entre la UGT y CCOO puede reducir, aunque quizás no eliminar totalmente, los efectos de la competencia intersindical en momentos de bonanza económica y, por tanto, colocar a los sindicatos españoles en mejores condiciones de emprender una relaciones que sean, ésta vez sí, provechosas para

ellos y para un partido que no tenga prejuicios ideológicos antisindicales.

BIBLIOGRAFIA

Abellán, Consuelo; Felgueroso, Florentino y Lorences, Joaquín. 1997. "La negociación colectiva en España: una reforma pendiente" en *Papeles de Economía Española,* núm. 72.

Aguilar, Salvador y Roca, Jordi. 1991. *Epíleg: La Vaga General del 14-D.* Barcelona: Fundació Jaume Bofill.

Albarracín, Jesús. 1991. "La política de los sindicatos y la dinámica del movimiento obrero" en Miren Etxezarreta (coord.), *La Reestructuración del Capitalismo en España 1970-1990,* Barcelona: Icaria.

Alvarez, Michael R.; Garrett, Geoffrey y Lange, Peter. 1991. "Government partisanship, labor organization, and macroeconomic performance", en *American Political Science Review,* vol. 85 num. 2, junio.

Alvarez Junco, José. 1993. "Social movements and political opposition in Spain: From the pre-Civil War model up through post-Francoist NSM" (Fotocopia).

Armingeon, Klaus. 1994. "¿Ante el final de la socialdemocracia? Los partidos socialdemócratas en el poder: evolución desde una perspectiva comparada, 1945-1990" en W. Merkel (ed.), *Entre la modernidad y el postmaterialismo. La socialdemocracia europea a finales del siglo XX,* Madrid: Alianza Universidad.

- 1997. "Trade Unionists and Politics: A comparative analysis", *Transfer,* vol. 3, num. 3, noviembre.

Aróstegui, Julio. 1993. "El sindicalismo socialista en los años treinta", *Leviatán,* n°53/54.

Babiano Mora, José y Soto Carmona, Alvaro. 1994. "Conflictividad laboral y negociación colectiva durante la transición y la etapa democrática: Madrid, 1977-1991" en Alvaro Soto Carmona (dir.), *Clase Obrera, conflicto laboral*

y representación sindical: Evolución socio-laboral de Madrid 1939-1991. Madrid: Ediciones GPS Madrid. Barreto, José. 1992. "Portugal: Industrial Relations Under Democracy", en Anthony Ferner y Richard Hyman (eds) *Industrial Relations in the New Europe,* Oxford: Blackwell Publishers. Bartolini, Stefano. 1983. "The membership of Mass Parties: The Social Democratic Experience, 1989-1978" en H. Daalder y P. Mair (eds) *Western European Party System: Continuity and Change,* Beverly Hills: Sage.

- 1993. "Metodología de la investigación política" en Gianfranco Pasquino, Stefano Bartolini, Maurizio Cotia, Leonardo Moruno, Angelo Panebianco (eds) *Manual de Ciencia Política,* Madrid: Alianza Universidad Textos. Beer, Samuel H. 1969. *Modern British Politics. Parties and presure groups in the collectivist age,* Nueva York: W. W. Norton & Company. Bermeo, Nancy. 1994. "Sacrifice, Sequence, and Strength in Successful Dual Transitions: Lessons from Spain", *The Journal of Politics,* vol. 56, n° 3. Bernstein, Eduard. 1990 [1922]. "¿Qué es el Socialismo? en E. Bernstein *Socialismo Democrático,* Madrid: Tecnos.

Bentolila, Samuel y Dolado, Juan. 1994. "Labour flexibility and wages: lessons from Spain", en *Economic Policy,* num. 18, abril. Blanco, Juan y Otaegui, Amaia. 1990/91. "Los trabajadores de las PYMES y la acción sindical" en *Sociología del Trabajo,* nueva época, núm. 11, invierno. Blondel, Jean. 1991(a). "Governments and Supporting Parties: Definitions and Classifications", EUI Working Paper SPS No. 91/12.

- 1991(b). "A model for the Analysis of Governement-Party Relationships". EUI Working Paper SPS No. 91/13.
- 1991(c). "The Political Factors Accounting for the Relationship between Governments and the Parties Which Support Them" EUI Working Paper SPS No. 91/13.

Boix, Carles. 1996. *Partidos Políticos, Crecimiento e Igualdad: Estrategias económicas conservadoras y socialdemócratas en la economía mundial,* Madrid: Alianza Editorial.

Bonoma, T. 1976. "Conflict, Cooperation and Trust in Three Power Systems", en *Behavioral Science,* vol. 21.

Bouza, Fermín (et alt.). 1989. *Perfil, Actitudes y Demandas del delegado y Afiliado a UGT: Síntesis.* Madrid: Fundación Largo Caballero.

Braun, M. 1996. "The Confederated Trade Unions and the Dini Government: the grand return to neocorporatism?, en Mario Caciagli y David I. Kertzer *Italian Politics: The Stalled Transition,* Boulder: Westview Press.

Brierley, William. 1987. "Italian trade unions: from unity to disunity", en Brierley (ed) *Trade Unions and the Economic Crisis of the 1980s.* Aldershot: Gower Publishing Company Limited.

Bresser, Luiz Carlos. 1995. "Reformas Económicas y Crecimiento Económico: Eficiencia y política en América Latina", en Luiz Carlos Bresser, José María Maravall y Adam Przeworski *Las Reformas Económicas en las Nuevas Democracias: Un enfoque socialdemócrata,* Madrid: Alianza Editorial.

Burns Marañen, Tom. 1996. *Conversaciones sobre el Socialismo,* Barcelona: Plaza y Janes.

Calmfors, Lars y Driffill, John. 1988. "Centralization of wage bargaining" en *Economic Policy,* num. 6.

Cameron, David. 1984. "Social Democracy, Corporatism, Labor Quiescence and the Representation of Economic Interest in Advanced Capitalist Society" en John Golthorpe, *Order and Conflict in Contemporary Capitalism.* Oxford: Claredon Press.

CC.OO. 1992. *Documentos Aprobados en el V Congreso Confederal. Confederación Sindical de Comisiones Obreras,* Madrid: CS de CC.OO.

Centro de Investigaciones Sociológicas. 1989. *Estudio Sociológico sobre las Orientaciones, Actitudes y Demandas Sindicales de*

los Trabajadores Españoles, Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas. Círculo de Empresarios.
1993. "La Economía Española a Comienzos de 1993", *Documentos Círculo,* marzo 30.
Contreras, Manuel. 1980. *El PSOE en la II República: organización e ideología,* Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas. Cook, K.S. y Whitrneyer, J.M. 1992. "Two Approaches to Social Structure: Exchange theory and network analysis" en *Annual Review of Sociology,* num. 18. Cox, Terry y Vass, László.
1994. "Civil Society and Interest Representation in Hungarian Political Development" en *The Journal of Communist Studies and Transition Politics,* vol. 10, num. 3, septiembre. Crespán, Javier y Falguera, Miquel Angel. 1991. "Huelga, empresa y servicios esenciales, hoy. Reflexiones sobre la situación en España" en *Ayer,* núm. 4. Cruz Roche, Ignacio. 1994. "La Dinámica y Estructura de la Universalización de las Pensiones" en Miguel Juárez (dir.) *V Informe Sociológico sobre la Situación Social en España: Sociedad para todos en el año 2000,* Madrid: Fundación FOESSA. Daalder, Hans. 1987. "The Dutch Party System: From segmentation to polarization -and then? en Hans Daalder *Party Systems in Denmark, Austria, Switzerland, The Netherlands, and Belgium,* Londres: Frances Pinter. Daley, Anthony. 1992-93. "Remembrance of Things Past. The Union-Party Linkage in France" *International Journal of Political Economy,* vol. 22, num. 4, invierno. Davis, Joe C.
1995. "The Splintering of the Hungarian Labor Movement", en *East European Quaterly, vol.* 29, *num. 3. septiembre.* Deppe, Rainer (et alt.). 1978. "The Relationship between trade Union Action and Political Parties" en C. Crouch and A. Pizzorno *The Resurgence of Class Conflict in Western Europe since 1968,* Vol 2. Nueva York: Holmes & Meier Publishers.

Deppe, Rainer y Tatur, Melanie. 1994. "Trade Unions in the Transformation Process: Comparative Observations on the role of trade-union representation in Poland, Hungary, Russia, and in the territory of the former GDR", en *International Journal of Political Economy,* vol. 24, num. 2, verano.

De Winter, L. 1992. "Socialist parties in Belgium and the catch-all thesis", en Wolfang Merkel y Satrútegui (et alt.) *Socialist Parties in Europe* II: of class, populars, catch-all? Barcelona: Institut de Ciències Politiques i Socials.

Domínguez, Justo. 1988. "Diez años de relaciones industriales en España (1977-1987)", *Pactos Sociales, Sindicatos y Patronal en España.* Madrid: Siglo XXI.

Drucker, H. 1992. "El Partido Socialdemócrataen Gran Bretaña", en W. E. Paterson y A. H. Thomas (comp), *El Futuro de la Socialdemocracia.* Valencia: Edicions Alfons el Magnànim.

Ebbinghaus, Bernhard. 1995. "The Siamese Twins: Citizenship Rights, Cleavage Formation, and Party-Union Relations in Western Europe" en *International Review of Social History,* num. 40.

Epstein, Leon. 1993. *Political Parties in Western Democracies.* New Brunswick (E.U.A): Transaction Publishers.

Escobar, Modesto. 1993. "Works or Union Councils? The representative system in medium and large sized Spanish firms" en *Estudios/Working Papers* 1993/43, Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones.

Espina, Alvaro. 1991a. "Los Sindicatos y la Democracia Española: La huelga general de diciembre de 1988 y sus implicaciones políticas" en Alvaro Espina (comp.) *Concertación Social, Neocorporativismo y Democracia.* Madrid: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

- 1991b. "Política de Rentas en España" en Faustino Miguélez y Carlos Prieto *Las Relaciones Laborales en España,* Madrid: Siglo XXI.

- 1993. *Diez Años de Política Industrial,* Madrid: MICYT.

-1994. "Una evaluación de la dinámica de la negociación salarial en España (1976-1994): del intercambio político a la cooperación", *Economía y Sociología del Trabajo,* n° 25/26.
- 1997. "El Sistema de Relaciones Industriales y la Concertación Neocorporatista en España: 1977-1997, Madrid 30 de junio de 1997. Sin publicar. Esping-Andersen, Gosta y Van Kersbergen, K. 1992. "Contemporary research on social democracy" *Annu. Rev. Sociol.* 18: 187-208. Esping-Andersen, Gosta. 1985. *Politics against Markets. The Social Democratic Road to Power,* Princeton: Princeton University Press. Estefanía, Joaquín y Serrano, Rodolfo. 1988. "Diez años de relaciones industriales en España", *Pactos Sociales, Sindicatos y Patronal en España.* Madrid: Siglo XXI. Esteve Mora, Fernando y Fernández Méndez de Andes, Fernando (dirs) 1993. *Sindicatos, Economía y Sociedad: Un futuro para el sindicalismo español,* Madrid: Ministerio de Economía y Hacienda.
EUROSTAT. 1995. *Visión Estadística sobre Europa 1983-1993.*
Feltrin, P. 1991. Partiti e sindacati: simbiosi o dominio? en Leonardo Moruno (eds) *Costruire la Democracia.* Bologna: Il Mulino. Fernández Castro, Joaquín. 1993 (a). "The creation of a new industrial relations system and political change: the case of Spain", MIT, Unpublished.
- 1993 (b). "A theoretical model of the interaction of organized interests with the political system", MIT, sin publicar.
Fernández Moreno, Marta. 1993. "El Gasto en Protección Social en los Países de la Unión Europea durante el Período 1980-1991", en *Revista de Economía y Sociología del Trabajo,* núm. 21-22, septiembre-diciembre. Perrera, Maurizio. 1996. "The 'Southern Model' of Welfare in Social Europe" en *Journal of European Social Policy,* vol 6, num. 1.

Fichter, Michael. 1991. "From Transmission Belt to Social Partnership? The Case of Organized Labor in Eastern Germany" *German Politics and Society,* vol 23. Fishman, Robert. 1984. "El movimiento obrero en la transición: objetivos políticos y organizativos" *REIS,* vol 26. -1990. *Working-Class Organization and the Return to Democracy in Spain.* Nueva York: Cornell University Press. Fishman, Robert y Mershon, Carol. 1993. "Workplace leaders and labour organization: limits on the mobilisation and representation of workers" en *International Contributions to Labour Studies,* num. 3. Fuhrer, Dse Marie. 1996. *Los Sindicatos en España: De la lucha de clases a estrategias de cooperación,* Madrid: Consejo Económico y Social. G.28C.PSOE. 1979. *Memoria de Gestión de la Comisión Ejecutiva Federal y del Comité Federal al 28 Congreso Federal,* Madrid: PSOE. G.29C.PSOE. 1981. *Memoria de Gestión de la Comisión Ejecutiva Federal y del Comité Federal al 29 Congreso Federal,* Madrid: PSOE. G.30C.PSOE. 1984. *Memoria de Gestión de la Comisión Ejecutiva Federal y del Comité Federal al 30 Congreso Federal,* Madrid: PSOE. G.31C.PSOE. 1988. *Memoria de Gestión de la Comisión Ejecutiva Federal y del Comité Federal al 31 Congreso Federal,* Madrid: PSOE. G.32C.PSOE. 1990. *Memoria de Gestión de la Comisión Ejecutiva Federal y del Comité Federal al 32 Congreso Federal,* Madrid: PSOE. G.33C.PSOE. 1990. *Memoria de Gestión de la Comisión Ejecutiva Federal y del Comité Federal al 33 Congreso Federal,* Madrid: PSOE. G.34C.UGT.1986. *Gestión de la Comisión Ejecutiva Confederal al XXXIV Congreso Confederal,* Madrid: UGT. G.35C.UGT.1990. *Gestión de la Comisión Ejecutiva Confederal al XXXV Congreso Confederal,* Madrid: UGT.

G.36C.UGT.1994. *Gestión de la Comisión Ejecutiva Confederal al XXXVI Congreso Confederal,* Madrid: UGT.
Galaskiewicz, Joseph. 1985. "Interorganizational Relations" en *Annual Review of Sociology, num.* 11. Gangas, Pilar. 1995. *El Desarrollo Organizativo de los Partidos Políticos Españoles de Implantación Nacional,* Madrid: Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones. García Pineiro, Ramón. 1991. "Minería y Huelga General: Una década de huelgas generales en la minería del carbón (1982-1992)" en *Ayer,* núm. 4. García Santesmases, Antonio. 1993. *Repensar la Izquierda: Evolución ideológica del socialismo en la España actual,* Barcelona: Anthropos. Gidlund, Gullan. 1992. "From popular movement to political party: Development of the social democratic labor party organization" en K. Misgeld, K. Molin y K. Amark (eds), *Creating Social Democracy. A century of the social democratic labor party in Sweeden,* Pennsylvania: The Pennsylvania University Press. Gillespie, Richard. 1989. *The Spanish Socialist Party. A history of factionalism.* Oxford: Oxford University Press. - 1990. "The Break-up of the 'Socialist Family': Party-Union Relations in Spain, 1982-89" *West European Politics,* vol 13, num. 1. Golden, Miriam. 1992. "Conclusion: Current Trends in Trade Union Politics" en Miriam Golden y Jonas Pontusson *Bargaining for Change: Union Politics in North America and Europe,* Ithaca: Cornell University Press. Graham, Bruce D. 1993. *Representation and party politics. AEUI Working Paper SPS No. 91/13. comparative perspective,* Cambridge: Blackwell Publishers. Green, Donald P. y Shapiro, Ian. 1994. *Pathologies of Rational Choice Theory: a critique of applications in political science,* New Haven: Yale University Press.

Guindal, Mariano y Serrano, Rodolfo. 1986. *La Otra Transición. Nicolás Redondo: El sindicalismo socialista,* Madrid: Unión Editorial.

Gujarati, Damodar N. 1992. *Econometria,* México: McGraw-Hill.

Gunther, Richard; Sani, Giacomo y Shabad, Goldie. 1986. *El Sistema de Partidos Políticos en España: Génesis y evolución,* Madrid: Siglo XXI. Gunther, Richard y Montero, José Ramón. 1994. "Los Anclajes del Partidismo: Un análisis comparado del comportamiento electoral en cuatro democracias del Sur de Europa" en Pilar del Castillo (ed.) *Comportamiento Político y Electoral,* Madrid: CIS. Gutiérrez, Antonio. 1988. "Concertación social y coyuntura política en España", *Pactos Sociales, Sindicatos y Patronal en España.* Madrid: Siglo XXI. Hamann, Kerstein. 1993. "Afiliación, movilización y aliados políticos: las incógnitas del poder sindical español, (1970-1988)" en *Cuadernos de Relaciones Laborales,* n° 3. Madrid: Edit. Complutense. Hayward, Jack. 1980. "Trade Union Movements and their Politico-Economic Environments: A Preleminary Framework" *West European Politics,* vol 3. n.l Heath, Anthoney (et alt.). 1991. Understanding Political Change: the governments and the Parties which support them" EUI Working Paper British voter 1964-1987. Oxford: Pergamon Press.SPS No. 91/14. Hiñe, David. 1994. "Los líderes y sus seguidores: Democracia y capacidad de dirección en los partidos socialdemócratas en Europa Occidental", en W. Merkel (ed.), *Entre la modernidad y el postmaterialismo. La socialdemocracia europea afinóles del siglo XX,* Madrid: Alianza Universidad.

Howell, Chris y Daley, A. 1992-93. "The Transformation of Political Exchange" *International Journal of Political Economy,* vol. 22, num. 4. Howell, Chris. 1992-93. "Family or Just Good Friends? The Changing Labour Party-Trade Union Relationship in Britain

since 1979", *International Journal of Political Economy,* vol. 22, num. 4. Iglesias, Rodrigo. 1988. "La concertación social desde la perspectiva de las organizaciones empresariales", *Pactos Sociales, Sindicatos y Patronal en España.* Madrid: Siglo XXI. Inglehart, Ronald. 1990. "From class-based to value-based politics" en P. Mair (ed.), *The West European Party System.* Oxford: Oxford University Press. Instituto Sindical de Estudios. 1989. *Evolución Social en España 1.988,* Madrid: Instituto Sindical de Estudios. Isaksson Pérez, Birgitta. 1990. "Los sindicatos y el sistema político. Los partidos políticos", *Sistema,* vol 94-95. limeño, Juan; Andrés, Javier y Taguas, David. 1994. "La orientación de la política fiscal y monetaria: España 1976-93" en Olivier Blanchard y Juan F. Jimeno (coords) *El Paro en España: ¿Tiene solución?,* Grupo CEPR sobre el paro español. Madrid: Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España. Jordana, Jacint. 1989. "Del 14-D al sindicalismo de los años noventa. Una aproximación a la política de los sindicatos en España", en *Sociología del Trabajo,* invierno 89/90, núm. 8.

- 1992. "Influence of political parties on the shaping of a competitive trade union arena in Spain (1970-1985)", Workshop on "Trade Unions as Political Actors in Mediterranean Europe", *European Consortium for Political Science,* Limerick, 30 de marzo- 4 de abril. -1994. "Los Sindicatos y Política en España: La influencia de las condiciones organizativas en las estrategias sindicales", *Revista Internacional de Sociología,* núm. 8/9.

- 1996. "Reconsidering union membership in Spain, 1977-1994: halting decline in a context of democratic consolidation" en *Industrial Relations Journal,* vol. 27, num. 3. Juarez, Miguel y Renes Ayala, Victor. 1994. "Población, Estructura y Desigualdad Social", en Miguel Juárez (dir.) *V Informe Sociológico sobre la Situación Social en España:*

Sociedad para todos en el año 2000, Madrid: Fundación FOESSA. Julia, Santos. 1982. "La UGT de Madrid en los años treinta: Un sindicalismo de gestión" en *REIS,* núm. 20, Octubre-Diciembre. -1990. "Sindicatos y Poder político en España" *Sistema* núm. 97.

- 1997. *Los Socialistas en la Política Española, 1879-1982,* Madrid: Taurus. Katz, Richard y Mair, Peter. 1990. "Three Faces of Party Organization. Adaptation and Change", XII World Congress of Sociology. Katzenstein, Peter J. 1985. *Small States in World Markets: Industrial Policy in Europe,* Ithaca: Cornell University Press. Keer, Henry H. 1987. "The Swiss Party System: Steadfast and Changing" en Hans Daalder *Party Systems in Denmark, Austria, Switzerland, The Netherlands, and Belgium,* Londres: Frances Pinter. Kirchheimer, Otto. 1966. "The Transformation of the Western European Party Systems", en J. LaPalombara y M. Weiner: *Political Parties and Political Development.* Princeton: Princeton University Press. Kitschelt, Herbert. 1989. *The logics of Party Formation. Ecological politics in Belgium and West Germany,* Nueva York: Cornell University Press.

- 1993. *The Transformation of European Socialdemocracy,* Cambridge: Cambridge University Press. -1994. "Los partidos socialistas en Europa Occidental y el reto de la izquierda libertaria", en W. Merkel (ed.), *Entre la modernidad y el postmaterialismo. La socialdemocracia europea a finales del siglo XX,* Madrid: Alianza Universidad. Kloc, Kazimierz. 1993. "Trade Unions and Economic Transformation in Poland", en *The Journal of Communist Studies,* vol. 9, num. 4, diciembre. Koelble, T. A. 1987. "Trade Unionists, Party Activists, and Politicians: The Struggle for Power over Party Rules in the

British Labour Party and the West German Social Democratic Party", *Comparative Politics,* vol 19, n.3.

Kõhler, Holm-Betler. 1995. *El Movimiento Sindical en España: Transición democrática, regionalismo y modernización económica,* Madrid: Editorial Fundamentos.

Koole, R. 1992. "The Dutch Labour Party: Towards a modern cadre party", en Wolfang Merkel y Satrútegui (et alt.) *Socialist Parties in Europe* II: of class, populars, catch-all? Barcelona: Institut de Ciències Politiques i Socials.

Kritsantonis, Nicos. 1992. "Greece: From State Authoritarianism to Modernization" en Anthony Ferner y Richard Hyman (eds) *Industrial Relations in the New Europe,* Oxford: Blackwell Publishers.

Lawson, Kay. 1980. "Political Parties and Linkage", en, *Political Parties and Linkage. A comparative perspective,* New Haven (E.U.A): Yale University Press.

Lange, Peter. 1984. "Unions, Workers, and Wage Regulation: the Rational Bases of Consent", en John H. Goldthorpe, *Order and Conflict in Contemporary Capitalism: Studies in the political economy of Western European nations,* Oxford: Clarendon Press.

Lange, Peter y Vannicelli, Maurizio. 1990. "Estrategia en un clima de tensión: el movimiento sindical italiano y la crisis italiana desde una perspectiva de desarrollo" en Peter Lange, George Ross y Maurizio Vannicelli, *Sindicatos, Cambio y Crisis: La estrategia sindical en Francia y en Italia y la economía política de 1945 a 1980.* Madrid: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Lange, P. y Ross, G. 1990. "Evolución de los sindicatos franceses e italianos en el marco de una perspectiva comparada" en Peter Lange, George Ross y Maurizio Vannicelli, *Sindicatos, Cambio y Crisis: La estrategia sindical en Francia y en Italia y la economía política de 1945 a 1980.* Madrid: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Lehmbruch, Gerhard. 1979. "Liberal corporatism and party government", en Philippe Schmitter y Gerhard Lehmbruch

(eds), *Trends toward corporatist intermediation,* London: SAGE Publications.

1982. "Introduction: Neo-corporatism in comparative perspective", en P. C. Schmitter y G. Lehmbruch (eds), *Patterns of corporatist policy-making,* London: SAGE Publications. -1984. "Concertation and the Structure of Corporatist Networks",

en J. H. Goldthorpe, *Order and Conflict in Contemporary Capitalism: Studies in the political economy of -western European nations,* Oxford: Clarendon Press. Lijphart, Arend. 1975. *The Politics of Accomodation: Pluralism and democracy in the Netherlands.* Berkeley: University of California Press, ltd. Lilja, K. 1992. "Finland: No longer the Nordic Exception", en

Anthony Ferner y Richard Hyraan (eds) *Industrial Relations in the New Europe,* Oxford: Blackwell Publishers. Locke, Richard y Thelen, Kathleen. 1993. "The Shifting Boundaries of Labor Politics: New Directions for Comparative Research Theory" *Working Paper Series* num. 44, The Minda de Gunzburg Center for European Studies Harvard Faculty of Arts. López Hernández, Jaume. 1994. "Estado del sindicalismo o

sindicalismo de Estado". *Claves,* enero-febrero, n. 39. Lorenzo, Anselmo [1923]. 1974. *El Proletariado Militante,* Madrid: Alianza Editorial. Lorite Fernández, Ana. 1994. "La Representatividad de los

Sindicatos en Madrid: Elecciones Sindicales (1978-1990). Una comparación con el ámbito nacional" en Alvaro Soto Carmona (dir.) *Clase Obrera, Conflicto Laboral y Representación Sindical: Evolución socio-laboral de Madrid 1939-1991),* Madrid: Ediciones GPS. Mann, Michael. 1991. *Las fuentes del poder social, I ,* Madrid:

Alianza Universidad Maravall, José María. 1985. *La Política de la Transición.* Madrid:

Taurus.

- 1991. "From opposition to government: the politics and policies of the PSOE" en J.M. Maravall (et alt.) *Socialist Parties in Europe,* Barcelona: Instituí de Ciències Politiques i Socials.
- 1993. "Politics and Policy: economic Reforms in new Democracies", en Pereira, Maravall and Przeworski, *Economic Reforms in New Democracies: a social-democratic approach,* Cambridge: Cambridge University Press.
- 1996. "Accountability and manipulation" *Estudios/Working Papers,* Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones, num. 92, septiembre.
- 1997. *Regimes, Politics, and Markets: Democratization and Economic Change in Southern and Eastern Europe,* Oxford: Oxford University Press.

Marks, Gary. 1989. "Variations in Union Political Activity in the United States, Britain, and Germany from the Nineteenth Century" *Comparative Politics,* vol 22, num. 1.

Markovits, Andrei. 1986. *The Politics of the West German Trade Unions:* Strategies of class and interest representation in growth and crisis, Cambridge: Cambridge University Press.

Marsch, M. A. 1980. "European Social Democratic Party Leaders and the Working Class: Some Linkage Implications of Trends in Recruitment" *Political Pañíes and Linkage. A comparative perspective,* New Haven (E.U.A): Yale University Press.

Martin, Ross M. 1989. *Trade Unionism: purposes and forms,* Oxford: Clarendon Press.

Matia Prim, J. 1994. "Las Elecciones en la Empresa", en Fernando Valdes Dai-Re y Mª Emilia Casas Baamonde (coords.) *La Reforma del Estatuto de los Trabajadores,* Madrid: La Ley.

Mayntz, Renate. 1987. *Sociología de la Organización,* Madrid: Alianza Universidad.

Mcguire, James W. 1992. "Union Political Tactics and Democratic Consolidation in Alfonsin's Argentina, 1983-1989" en *Latin American Research Review,* vol 27, num. 1.

Merkel, Wolfgang. 1992. "Between class and Catch-all: is there an electoral dilemma for social democratic parties in Western

Europe?" en *Socialist Parties in Europe: of class, populars, catch-all?* Barcelona: Institui de Ciències Polítiques i Socials.

- 1995. *¿Final de la Socialdemocracia? Recursos de poder y política de gobierno de los partidos socialdemócratas en Europa Occidental,* Valencia: Edicions Alfons el Magnanim.

Merkl, Peter H. 1980. "The sociology of european parties: Members, voters, and social groups" en P.H. Merkl, *Western European Party Systems. Trends and prospects,* Nueva York: Free Press. Miguélez Lobo, Faustino. 1991. "Las Organizaciones Sindicales" en Faustino Miguélez y Carlos Prieto *Las Relaciones Laborales en España,* Madrid: Siglo XXI. Mjoset, Lars. 1996. "Nordic economic policies in the 1980s and 1990s", Paper presented to the Tenth International Conference of Europeanists, Chicago, March 14-16, 1996. Mohr, L. B. 1973. "The Concept of Organizational Goal", en *The American Political Science Review,* vol. LXVII, num. 2, junio. Monteira, Félix. 1997. "La Huelga General" en *Memoria de la Transición,* Madrid: El País. Mouriaux, Rene. 1985. *Syndicalisme et Politique,* Paris: Les Editions Ouvrières. Nelson, Joan M. 1984. "The Politics of Stabilization", en R. E. Feinberg y V. Kallab (comps), *Adjustment Crisis in the Third World,* New Brunswick, Nueva Jersey: Transaction Books.

Noblecourt, Michel. 1990. *Les syndicats en questions,* Paris: Les editions ouvrières. OCDE, 1991. *OECD Economic Survey. Spain.* Paris: OECD.

- 1992. *OECD Economic Survey. Spain.* Paris: OECD.

Olson, Mancur. 1982. *The Rise and Decline of Nations: Economic growth, stagflation, and social rigidities,* New Haven: Yale University Press.

- 1992. "La lógica de la acción colectiva" en *Diez textos básicos de Ciencia política.* Barcelona: Ariel.

Otero Hidalgo, Carlos. 1996. *Partidos Políticos y Sindicatos en la Sociedad Contemporánea,* Madrid: Estudios Institucionales, S.L. Padgett, Stephen y Paterson, William. 1991. *A History of Social Democracy in Postwar Europe,* Essex: Longman.

Palomeque, Manuel Carlos. 1992. "Concertación Social y Plan de Convergencia con la Comunidad Europea: el agotamiento del segundo ciclo de Diálogo Social", en *Círculo de Empresarios,* Boletín 55, primer semestre. Panebianco, Angelo. 1990. *Modelos de Partido,* Madrid: Alianza Universidad. Panitch, Lee. 1980. "Recent theorizations of corporatism: reflections on a growth industry" en *British Journal of Sociology,* vol. 31, num. 2, junio. Paramio, Ludolfo. 1986. "Las Relaciones entre Partido y Sindicato: El amor y la conveniencia", *Claridad,* núm. 12.

- 1988. "El socialismo y los sindicatos: ¿Hacia el divorcio?" en *Sistema,* núm. 82.
- 1990. "Los sindicatos y el sistema político en la España democrática: de la clandestinidad a la huelga general" *Sistema,* núm. 94-95, 73-83.
- 1992. "Los sindicatos y la política en España, 1982-1992", en A. Guerra y J.F. Tezanos (eds.), *La década del cambio: Diez años de gobierno socialista 1982-1992,* Madrid: Sistema.

Pasture, Patrick. 1994. *Christian Trade Unionism in Europe since 1968: Tensions between identity and practice,* Avebury: Ashgate Publishing Limited. Pérez Díaz, Victor. 1987. *El Retorno de la Sociedad Civil.* Madrid: Instituto de Estudios Económicos.

- 1993. *La Primacía de la Sociedad Civil.* Madrid: Alianza Editorial.

Pérez Ledesma, Manuel. 1987. *El Obrero Consciente.* Madrid. Alianza Editorial.

- 1992. "Un Siglo de Relaciones entre el Partido y el Sindicato", en Eduardo Donaire, Santiago Castillo (et alt.) *UGT. Un Siglo de Historia (1888-1988),* Oviedo: Fundación Asturias.

Perrow, Charles. 1961. "Goals in Complex Organizations" en *American Sociological Review,* vol. 26, num. 6, diciembre.
Piore, Michael y Sabei, Charles. 1984. *The Second Industrial Divide,* Nueva York: Basic Books. Pierson, Paul. 1994. *Dismantling the Welfare State?: Reagan, Thatcher, and the politics of retrenchment,* Cambridge: Cambridge University Press. Pontusson, Jonas. 1992. "Introduction: Organizational and Political-Economic Perspectives on Union Politics" en Miriam Golden y Jonas Pontusson *Bargaining for Change: Union Politics in North America and Europe,* Ithaca: Cornell University Press. Price, Richard. 1989. "What's in a Name? Workplace History and Rank and Filism", *International Review of Social History,* XXXIV. PROGRAMA 2000. 1988a. *La Sociedad Española en Transformación: Escenarios para el año 2000.* 2ª Edición. Madrid: Siglo XXI.
- 1988b. *La Economía Española a Debate. 2ª Edición. Madrid: Siglo XXI.*
- 1988c. *Evolución y Crisis de la Ideología de Izquierdas,* 2ª Edición. Madrid: Siglo XXI. Przworski, Adam y Sprague, John. 1986. *Papers Stones: A History of Electoral Socialism,* Chicago: The university of Chicago Press. Przeworski, Adam. 1995. *Democracia y Mercado: Reformas políticas y económicas en la Europa del Este y America Latina.* Cambridge: Cambridge University Press. Puhle, Hans Jurgen. 1986. "El PSOE: un partido predominante y heterogéneo", en J.J. Linz y J.R. Montero (eds.), *Crisis y Cambio: electores y partidos en la España de los ochenta.* Madrid: Centro de Estudios Constitucionales. R.29C.PSOE. 1981. *Resoluciones del 29 Congreso Federal,* Madrid: PSOE. R.30C.PSOE. 1984. *Resoluciones del 30 Congreso Federal,* Madrid: PSOE.

R.31C.PSOE.1988. *Resoluciones del 31 Congreso Federal,* Madrid: PSOE. R.32C.PSOE.1990. *Resoluciones del 32 Congreso Federal,* Madrid: PSOE. R.33C.UGT. 1983. *Resoluciones del XXXIII Congreso Confederal,* Madrid: UGT. R.34C.UGT.1986. *Resoluciones del XXXIV Congreso Confederal,* Madrid: UGT. R.35C.UGT.1990. *Resoluciones del XXXV Congreso Confederal,* Madrid: UGT. Ragin, Charles. 1987. *The Comparative Method,* Berkeley: University of California Press. Rand Smith, W. 1995. "Industrial Crisis and the Left: Adjustment Strategies in Socialist France and Spain", *Comparative Politics,* vol. 28, num. 1, octubre. Raymond Bara, José Luis. 1992. "La Inflación Dual en España: comportamiento de los precios en los sectores industrial y de servicios" en *Papeles de Economía Española,* núm. 52/53. Redero San Román, Manuel. 1992. *Estudios de Historia de la UGT.* Madrid: Fundación Largo Caballero. Redero San Román, Manuel y Pérez Delgado, Tomás 1994. "Sindicalismo y Transición Política en España" *en Ayer,* núm. 15. Regini, Marino. 1984. "The conditions for political exchange: how concertation emerged and collapsed in Italy and Great Britain", en John H. Goldthorpe, *Order and Conflict in Contemporary Capitalism: Studies in the political economy of wostern European nations,* Oxford: Clarendon Press. - 1990. "El declinar del intercambio político centralizado y la emergencia de nuevas formas de concertación" en Antonio Ojeda Aviles (coords) *La Concertación Social Tras la Crisis,* Barcelona: Ariel. Richardson, Jeremy. 1982. *Policy Styles in Western Europe,* London: George Allen & Unwin.

Roca Jusmet, Jordi. 1991. "La Concertación Social" en Faustino Miguélez y Carlos Prieto *Las Relaciones Laborales en España,* Madrid: Siglo XXI. Rodríguez Cabrero, Gregorio. 1994. "La Política Social en España: 1980-92" en Miguel Juárez (dir.) *V Informe Sociológico sobre la Situación Social en España: Sociedad para todos en el año 2000,* Madrid: Fundación FOESSA.

Rogers, J. y Streeck, W. 1994. "Workplace Representation Overseas: The Works Councils Story", en Richard Freeman (edit), *Working under different rules,* New York: Sage.

Saborit, Andrés. 1967. *Julián Besteiro.* Buenos Aires: Editorial Losada, S.A. Saez Lara, Carmen. 1992. *Representación y Acción Sindical en la Empresa,* Madrid: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Sánchez, José Antonio y Santos, Roberto. 1990. *La Conjura del Zar,* Madrid: Ediciones Temas De Hoy. Salvador, Aguilar. 1991. *Sindicalisme i canvi social a Espanya, 1976-1988. Epileg: la vaga general del 14-D,* Barcelona: Fundació Jaume Bofill. Sanfeliciano, Maria. 1990. *UGT de Vizcaya (1931-1936), Bilbao: Unión General de Trabajadores de Euskadi.* Saracíbar, Antón y GIL, Pedro. 1987. "Elecciones Sindicales 1986: Consolidación y Progreso de la UGT como primera fuerza sindical" en *Claridad,* núm. 17, enero-febrero.

Satrústegui, M. 1992. "PSOE: A new catch-all party en Socialist Parties in Europe: of class, populars, catch-all?" Barcelona: Institut de Ciències Polítiques i Socials. Sawicki, Frederic. 1997. *Les Réseaux du Parti socialiste: Sociologie d'un milieu partisan.* Paris: Editions BELIN.

Scharfp, Fritz W. 1988. "The joint-decision trap: Lessons from German Federalism and European integration", *Public Administration,* vol. 66 Autumn. - 1992. *Socialdemocracia y Crisis Económica en Europa,* Valencia: Edicions Alfons el Magnànim. Scott, Richard W. 1987. *Organizations: Rational, natural, and open systems,* Nueva Jersey: Prentice-Hall, Inc.

Scott, Alan. 1990. *Ideology and the New Social Movements.* London: Unwin Hyman. Segura, Julio y González, Arturo. 1992. "La Industria Española: Evolución y Perspectivas" en *Papeles de Economía,* núm. 50, 1992, pp 152,153. Setien, Julio. 1982. *El Movimiento Obrero y el Sindicalismo de Clase en España (1939-1981).* Madrid: Ediciones de la torre. Share, Donald. 1989. *Dilemmas of social democracy,* Westport, Connecticut: Greenwood Press. Silvia, Stephen J. 1992-93. "The Forward Retreat. Labor and Social Democracy in Germany, 1982-1992", *International Journal of Political Economy,* vol. 22, num. 4, invierno. Sloane, A. 1991. *Hoffa,* London: The MIT Press Schmitter, Phillip. 1979. "Still the Century of Corporatism" en Philippe Schmitter y Gerhard Lehmbruch (eds) *Trends Toward Corporatist Intermediation,* London: SAGE Publications. Solans Latre, Miguel A. 1995. *Concertación Social y Otras Formas de Neocorporatismo en España y en la Comunidad Europea,* Madrid: Tecnos. Solchaga, Carlos. 1997. *El Final de la Edad Dorada,* Madrid: Taurus. Soto Carmona, Alvaro. 1993. "Comisiones Obreras en la Transición y Consolidación Democrática. De la Asamblea de Barcelona a la Huelga General del 14-D (1976-1988)" en David Ruiz (dirección) *Historia de Comisiones Obreras (1958-1988),* Madrid: Siglo XXI. Stoleroff, Alan D. 1992. "Between Corporatism and Class Struggle: the Portuguese Labour Movement and the Cavaco Silva Governments" *West European Politics,* vol 15, No 4, pp. 118-150. Streeck, Wolfgang. 1984. "Neo-Corporatist Industrial Relations and the Economic Crisis in West Germany" en John Golthorpe *Order and Conflict in Contemporary Capitalism.* Oxford: Claredon Press.

Sully, M. A. 1992. "La socialdemocracia austriaca" en W. E. Paterson y A. H. Thomas (comp), *El Futuro de la Socialdemocracia.* Valencia: Editions Alfons el Magnanim.
Tallman, Irving y Gray, Louis N. 1990. "Choices, Decisions, and Problem-solving", *va. Annual Review of Sociology,* vol. 16.
Taylor, Andrew J. 1989. *Trade Unions and Politics,* London: Macmillan.
- 1993. "Trade Unions and the Politics of Social Democratic Renewal" en *West European Politics,* num. 16. Tezanos, José Félix. 1981. "La crisis de la conciencia obrera en la España actual" *Sistema* 41, pp. 105-141.
- 1994. "Socialismo y clases medias" en *Sistema, vol. 123, noviembre.*
- 1995. "Populismo, corporatismo y neo-bonapartismo" en *Sistema,* vol. 129, noviembre. Tezanos, José Feliz y Paz, María Luz. 1986. "Sociología del sindicalismo español: los delegados al 34 Congreso de la UGT", en *Claridad,* núm. 13, mayo-junio de 1986. Thirkell, John; Atanasov, Boyko y Gradev, Grigor. 1993. "Trade Unions, Political Parties and Governments in Bulgaria, 1982-92", en *The Journal of Communist Studies,* vol. 9, num. 4, diciembre. Thomas, Alastair H. 1992. "La socialdemocracia en Escandinavia: ¿podría recuperarse el poder?" en W. E. Paterson y A. H. Thomas (comp), *El Futuro de la Socialdemocracia.* Valencia: Edicions Alfons el Magnanim. Traxler, Franz. 1992. "Austria: Still the Country of Corporatism" en Anthony Ferner y Richard Hyman (eds) *Industrial Relations in the New Europe,* Oxford: Blackwell Publishers.
Truman, T. 1980. "The Australian Labor Party and the Trade Unions: Linkage as Penetration and Reaction" *Political Parties and Linkage. A comparative perspective,* New Haven (E.U.A): Yale University Press. Tsebelis, George. 1990. *Nested Games: Rational Choice in Comparative Politics,* Berkeley: University of California Press.

Turner, Lowell. 1991. *Democracy at Work: Changing world markets and the future of labor unions,* Ithaca: Cornell University Press. UGT. 1977. *Sindicato Socialista: UGT, un sindicato para todos,* Madrid: Cuadernos para el Diálogo. Valenzuela, J. Samuel. 1983. "Movimientos obreros y sistemas políticos: Un análisis conceptual y tipológico", *Desarrollo Económico,* vol. 23, num. 91. Van der Meer, Marc. 1997. *Trade Union Development in Spain: Past Legacies and Current Trends,* Arbeitspapiere Arbeitsbereich I, vol. 18, Mannheim: Mannheimer Zentrum fur Europàische Sozialforschung (MZES). Vilroks Jacques, y Van Leemput Jim. 1992. "Belgium: A New Stability in Industrial Relations?" en Anthony Ferner y Richard Hyman (eds) *Industrial Relations in the New Europe,* Oxford: Blackwell Publishers. Visser, Jelle. 1991/92. "La representación de los trabajadores en los centros de trabajo en Europa Occidental: Estructura, escala, alcance y estrategia" en *Sociología del Trabajo,* nueva época, num. 14, invierno. Von Beyme, Klaus. 1986. *Los partidos políticos en las democracias occidentales,* Madrid: CEIS. Wozniak, Lynne. 1991. *Industrial Restructuring and Political Protest in Socialist Spain,* Ann Arbor: University Microfilm International. Tesis doctoral, Universidad de Cornell. - 1992-93. "The Dissolution of Party-Union Relations in Spain", *International Journal of Political Economy,* vol 22, num. 4. invierno. Zabalza, Antonio. 1989. "Crecimiento, empleo y política fiscal en la CEE y en España", *Papeles de Economía Española,* núm. 41. Zambrana, Justo. 1989: "Democracia industrial y sindicalismo en España" *Sistema,* núm. 88, enero. Zaragoza, Ángel y Várela, José. 1988. "Pactos sociales y corporatismo en España", *Pactos Sociales, Sindicatos y Patronal en España.* Madrid: Siglo XXL

Zaragoza, Angel (comp.). 1988. *Pactos sociales, sindicatos y patronal en España.* Madrid: Siglo XXI.

- 1989. *Partits politics, sindicais i patronal,* Barcelona: PPU.

Zeitlin, Jonathan. 1987. "From Labour History to the history of industrial relations" *Economic History Review,* 2nd ser. XL, 2, pp. 159-184.

- 1989. "Rank and Filism in British Labour History: A critique" *International Review of Social History,* XXXIV. Zufiaur, José María. 1983. "Los Sindicatos, Elecciones Sindicales y Acción Institucional" en *Cambio Social y Acción Sindical en España (1975-1983),* Seminario Celebrado en la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo, Madrid: Fundación Francisco Largo Caballero.

- 1985. "El Sindicalismo español en la transición y la crisis", *Papeles de Economía Española,* núm. 22.

- 1989. "Jornadas de Reflexión sobre el Giro Social: Presentación", *Claridad,* núm. 29/30, enero-abril.

- 1996. "Espacios políticos, autonomía sindical y unidad entre los sindicatos" en *Revista Crítica de Teoría y Práctica. Relaciones Laborales,* núm. 1/2. enero.